



UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO”  
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS



**TESIS:**

**“El abuso de la autonomía del Ministerio Público y la  
garantía del debido proceso a través del control  
constitucional”**

**PRESENTADO POR:**

**ORTIZ DEZA, Gissella Margoth**

**PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADA**

**ASESOR:**

**Dr. Freddy Hernández Rengifo**

**LAMBAYEQUE, 2018**

.....  
**Gissella Margoth Ortiz Deza**  
**BACHILLER**

.....  
**Dr. Freddy Hernández Rengifo**  
**ASESOR**

**APROBADO POR:**

.....  
**Dr. Oscar Ramón Vélchez Vélez**  
**PRESIDENTE**

.....  
**Dr. Humberto Falla Lamadrid**  
**SECRETARIO**

.....  
**Abog. César Vargas Rodríguez**  
**VOCAL**



## **DEDICATORIA**

*Quiero dedicar este trabajo de investigación  
a mis padres, quienes me han brindado su apoyo incondicional  
para forjarme un futuro profesional.*

## **AGRADECIMIENTO**

*A Dios, por estar presente en cada objetivo que me trazo, por fortalecerme espiritualmente, por protegerme del peligro y bendecirme con la familia y amigos que tengo.*

*A mis padres, por el esfuerzo incalculable para educarme, por formarme en valores, de no ser por ellos, quizás no hubiese llegado hasta aquí.*

## INDICE

<b>DEDICATORIA .....</b>	<b>3</b>
<b>AGRADECIMIENTO .....</b>	<b>4</b>
<b>INDICE .....</b>	<b>5</b>
<b>RESUMEN .....</b>	<b>9</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>10</b>
<b>INTRODUCCIÓN.....</b>	<b>11</b>
<b>CAPÍTULO I: .....</b>	<b>14</b>
<b>ASPECTOS METODOLÓGICOS.....</b>	<b>14</b>
<b>1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA.....</b>	<b>14</b>
1.1.1. Planteamiento del problema.....	14
1.1.2. Formulación del problema. ....	17
<b>1.2. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO.....</b>	<b>17</b>
1.2.1. Justificación del estudio.....	17
1.2.2. Importancia del estudio.....	19
<b>1.3. OBJETIVOS.....</b>	<b>19</b>
1.3.1. Objetivo General.....	19
1.3.2. Objetivos Específicos. ....	19
<b>1.4. HIPÓTESIS. ....</b>	<b>20</b>
<b>1.5. VARIABLES.....</b>	<b>20</b>
1.5.1. Variable independiente.....	20
1.5.2. Variable dependiente.....	20
<b>1.6. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. ....</b>	<b>20</b>
1.6.1. Métodos.....	20
1.6.2. Técnicas.....	21
1.6.3. Instrumentos. ....	21
<b>CAPÍTULO II:.....</b>	<b>22</b>
<b>EL DEBIDO PROCESO COMO GARANTÍA CONSTITUCIONAL .....</b>	<b>22</b>
<b>2.1. EL DEBIDO PROCESO. ....</b>	<b>22</b>
2.1.1. Evolución histórica. ....	22
2.1.2. Definición.....	24
2.1.3. Estructura.....	29
2.1.4. Elementos.....	32
2.1.4.1. Derecho a la motivación. ....	36
2.1.4.2. Derecho a la instancia plural.....	38
2.1.4.3. El derecho al plazo razonable. ....	39

<b>2.2. LA GARANTÍA CONSTITUCIONAL.</b>	<b>42</b>
2.2.1. Antecedentes.	42
2.2.2. Concepto.	44
2.2.3. Clasificación.	46
2.2.4. Acción de amparo.	47
2.2.4.1. Antecedentes.	47
2.2.4.2. Definición.	48
2.2.4.3. Derechos respecto a los cuales procede.	49
2.2.4.4. Naturaleza jurídica.	50
2.2.4.5. Procedencia.	50
2.2.4.6. Características.	51
2.2.5. El Hábeas corpus.	52
2.2.5.1. Antecedentes.	52
2.2.5.2. Concepto.	53
2.2.5.3. Ámbito de protección.	54
2.2.5.4. Finalidad.	55
2.2.5.5. Características.	55
<b>CAPÍTULO III: EL CONTROL CONSTITUCIONAL COMO FACULTAD DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL</b>	<b>57</b>
<b>3.1. EL CONTROL CONSTITUCIONAL.</b>	<b>57</b>
3.1.1. El principio de la supremacía constitucional.	57
3.1.2. El principio de jerarquía normativa.	59
3.1.3. El principio de unidad de la Constitución.	60
3.1.4. Antecedentes históricos del control constitucional.	60
3.1.5. Concepto.	62
3.1.6. Presupuestos jurídicos del control de constitucionalidad.	65
3.1.7. Sistemas de control constitucional.	66
3.1.7.1. Sistema de control jurisdiccional difuso o modelo americano.	67
3.1.7.2. Sistema de control jurisdiccional concentrado o modelo europeo.	69
<b>3.2. EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.</b>	<b>71</b>
3.2.1. Antecedentes históricos del Tribunal Constitucional.	71
3.2.2. Concepto.	73
3.2.3. Autonomía procesal del Tribunal Constitucional.	74
3.2.3.1. El Tribunal Constitucional peruano como controlador de la constitucionalidad de las leyes, último garante de los derechos y un Tribunal para la solución de conflictos.	75
<b>CAPÍTULO IV: LA AUTONOMÍA DEL MINISTERIO PÚBLICO Y LAS FACULTADES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PARA REVISAR SUS DECISIONES</b>	<b>77</b>
<b>4.1. EL MINISTERIO PÚBLICO.</b>	<b>78</b>
4.1.1. Etimología.	78

4.1.2.	Antecedentes históricos. ....	79
4.1.3.	Concepto de Ministerio Público. ....	81
4.1.4.	Definición de autonomía del Ministerio Público. ....	83
4.1.5.	La autonomía del Ministerio Público en su Ley Orgánica. ....	85
4.1.6.	Naturaleza jurídica del Ministerio Público. ....	86
4.1.7.	Ubicación constitucional del Ministerio Público. ....	87
4.1.8.	Estructura. ....	90
4.1.9.	Funciones. ....	90
4.1.10.	Principios que rigen la actuación del Ministerio Público. ....	91
4.1.10.1.	El principio de legalidad. ....	91
4.1.10.2.	El principio de objetividad. ....	92
4.1.10.3.	El principio de imparcialidad e independencia. ....	92
4.1.11.	El Ministerio Público como titular de la acción penal. ....	93
4.1.12.	Contenido de la denuncia. ....	94
4.1.13.	Actos iniciales de la investigación. ....	96
4.1.14.	Las diligencias preliminares. ....	96
4.1.14.1.	Disposición de archivo. ....	98
4.1.14.2.	El plazo para la investigación preliminar. ....	98
4.1.14.3.	El control de plazos de las diligencias preliminares. ....	101
4.1.14.4.	Identificación del presunto autor o partícipe. ....	101
4.1.14.5.	Reserva de la investigación. ....	101
4.1.14.6.	Decisiones del fiscal superior. ....	102
<b>CAPÍTULO V: EL ABUSO DE LA AUTONOMÍA DEL MINISTERIO PÚBLICO Y EL DEBIDO PROCESO</b> .....		<b>103</b>
5.1.	ABUSO DEL DERECHO. ....	103
5.1.1.	Antecedentes. ....	103
5.1.2.	Definición. ....	104
5.2.	El abuso del derecho como principio constitucional. ....	105
5.3.	El Principio de interdicción de la arbitrariedad. ....	106
5.4.	El control constitucional de los actos del Ministerio Público. ....	107
<b>CAPÍTULO VI: ANÁLISIS Y RESULTADOS</b> .....		<b>110</b>
6.1.	Análisis de los resultados. ....	111
6.1.1.	Resultados del análisis estadístico. ....	111
6.1.2.	Resultados de recursos humanos y bienes de uso. ....	121
6.1.3.	Resultados de la opinión de la comunidad jurídica. ....	121
6.1.4.	Resultado de la opinión de los fiscales ....	128
6.1.5.	Jurisprudenciales. ....	138
6.1.6.	Resultado del análisis jurisdiccional. ....	155
6.1.6.1.	Carpeta Nro. 140-2016. ....	155

6.1.6.1.1.	De los actuados en sede policial. ....	155
6.1.6.1.2.	De los actuados en sede de la fiscalía. ....	156
6.1.6.1.2.1.	De la Disposición Nro. 01-2016-FPMYT. ....	156
6.1.6.1.2.2.	De la Disposición Nro. 02-2016-FPMYT. ....	156
6.1.6.1.2.2.1.	Fundamentos que lo sustentan. ....	156
6.1.6.1.2.3.	Del recurso de elevación de actuados y pedido de exclusión del fiscal. ....	157
6.1.6.1.2.4.	De la Disposición Nro. 272-2016-MP-SFSP-C de la fiscalía superior penal. ....	159
6.1.6.1.2.4.1.	De los fundamentos que la sustentan. ....	159
6.1.6.1.2.4.2.	De la exclusión del fiscal. ....	160
6.1.6.1.2.5.	De la Disposición Nro. 04-2017-MP-FPMYT. ....	161
6.1.6.1.2.6.	De la Disposición Nro. 05-2017-MP-FPMYT: Disposición de no ha lugar a formalizar y continuar con la investigación preparatoria. ....	162
6.1.6.1.2.6.1.	De los fundamentos que lo sustentan: ....	162
6.1.6.1.2.7.	Del recurso de elevación de actuados. ....	164
6.1.6.1.2.8.	De la Disposición Nro. 110-2017-MP-SFSP-C. ....	164
6.1.6.1.2.8.1.	De los fundamentos que lo sustentan. ....	164
6.1.6.1.3.	Del control constitucional en el Poder Judicial. ....	165
6.1.6.1.3.1.	De la demanda de acción de amparo. ....	165
6.1.6.1.3.2.	De la resolución que declara su improcedencia. ....	165
6.1.6.1.4.	Del control realizado por la Oficina Desconcentrada de Control Interno. ....	165
6.1.6.2.	Carpeta Nro. 4676-2018. ....	169
6.1.6.2.1.	De la Disposición Nro. 01: Disposición de inicio de diligencias Preliminares. ....	169
<b>CAPÍTULO VII: CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS</b> .....		<b>171</b>
7.1.	<b>DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS.</b> .....	<b>171</b>
7.1.1.	Discusión del objetivo específico: Analizar si el abuso de la autonomía del Ministerio Público afecta el debido proceso. ....	171
7.1.2.	Discusión del objetivo específico: Desarrollar el debido proceso como garantía constitucional. ....	177
7.1.3.	Discusión del objetivo específico: Describir el control constitucional como facultad del Tribunal Constitucional para revisar las decisiones fiscales. ....	179
7.2.	<b>RESULTADO DE VALIDACIÓN DE VARIABLES.</b> .....	<b>183</b>
7.3.	<b>Contrastación de hipótesis.</b> .....	<b>184</b>
<b>CONCLUSIONES:</b> .....		<b>186</b>
<b>RECOMENDACIONES:</b> .....		<b>188</b>
<b>BIBLIOGRAFÍA</b> .....		<b>190</b>
<b>ANEXOS</b> .....		<b>193</b>

## **RESUMEN**

Motiva la presente investigación, el hecho de haber vivido de cerca la arbitrariedad que cometen los Fiscales, quienes escudándose en su autonomía, con disposiciones arbitrarias lo cual podría caer en el supuesto de abuso de derecho al vulnerar el debido proceso produciendo impunidad, teniendo como resultado lógico un efecto social como es la desconfianza en el sistema de justicia penal, que al parecer tendría una orientación en defensa del imputado.

Para verificar la posible vulneración del debido proceso que sirve de eje al derecho procesal penal, se estudian los actos en la investigación preliminar; tomando como referencia la autonomía del Ministerio Público y sus límites sometidos al control difuso que ejercen los jueces del Poder Judicial y el control concentrado del Tribunal Constitucional.

Sobre el particular, en nuestra Constitución Política no existe una regulación expresa que se refiera en concreto a si las disposiciones fiscales pueden ser objeto de control constitucional; pero el Ministerio Público es un órgano constitucional constituido; por ende, no puede ejercer sus funciones al margen de los principios y valores constitucionales y sin respeto a los derechos fundamentales; en tal sentido, el control constitucional de los actos del Ministerio Público tiene su sustento en el debido proceso, lo que significa que el Tribunal Constitucional tiene la potestad jurisdiccional de establecer criterios de razonabilidad y proporcionalidad que guíen la acción del control difuso para garantizar el respeto de los derechos fundamentales de las partes en la investigación y persecución del delito a cargo de los representantes del Ministerio Público.

## **ABSTRACT**

Motivates the present investigation, the fact of having lived closely the arbitrariness that prosecutors commit, who hiding in their autonomy, with arbitrary dispositions which could fall in the case of abuse of right to violate the due process producing impunity, resulting in logical a social effect as is the distrust in the criminal justice system, which apparently would have an orientation in defense of the accused.

In order to verify the possible violation of the due process that serves as an axis to the criminal procedural law, the acts in the preliminary investigation are studied; taking as reference the autonomy of the Public Prosecutor's Office and its limits submitted to the diffuse control exercised by the judges of the Judicial Power and the concentrated control of the Constitutional Court.

In this regard, in our Political Constitution there is no express regulation that refers specifically to whether the fiscal provisions can be subject to constitutional control, but the Public Prosecutor's Office is a constituted body; therefore, it can not exercise its functions outside of constitutional principles and values and without respect for fundamental rights; in this sense, the constitutional control of the acts of the Public Prosecutor's Office has its basis in due process, which means that the Constitutional Court has the jurisdictional authority to establish criteria of reasonableness and proportionality that guide the action of diffuse control to guarantee respect of the fundamental rights of the parties in the investigation and prosecution of the crime by the representatives of the Public Ministry.



## INTRODUCCIÓN

Nuestro país, como Estado Democrático Constitucional de Derecho que es, encuentra su principal sustento en la vigente Constitución Política del año 1993, cuerpo legal que garantiza los derechos fundamentales de las personas. En ese sentido, para efectos de nuestra investigación, se realizará el análisis del debido proceso en forma general, el mismo que es una garantía que sirve de eje al derecho procesal penal; luego, dentro de éste último se realizará el estudio de la investigación preliminar, prestando especial atención a la autonomía del Ministerio Público, y lo concerniente al control constitucional que deben ejercer los jueces del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional sobre las decisiones que toma el representante del Ministerio Público cuando asume una investigación.

Si bien es verdad, en nuestra Constitución Política no existe una regulación expresa que se refiera en concreto a si las disposiciones fiscales pueden ser objeto de control constitucional; sin embargo, en virtud que el Ministerio Público es un órgano constitucional constituido, y por ende sometido a la Constitución Política del Estado, no puede ejercer sus funciones, al margen de los principios y valores constitucionales, tampoco del respeto de los derechos fundamentales, razón por la cual el control constitucional de los actos del Ministerio Público tiene su sustento en el debido proceso, el mismo que despliega su eficacia jurídica no solo en la etapa jurisdiccional de los procesos penales, sino también en la etapa pre jurisdiccional (etapa preliminar), lo que significa que tales actividades estarán sometidas al control difuso, requiriéndose por ello que el Tribunal Constitucional establezca criterios de razonabilidad y proporcionalidad que permita el ejercicio de tal control, buscando garantizar no solo el respeto de los derechos fundamentales de los investigados en el marco de la facultad de investigación y persecución del delito a cargo del Ministerio Público, sino además, que tal criterio también resulte aplicable a la parte agraviada; por ello nos preocupa investigar si existe la necesidad de regular legislativamente este tipo de efecto jurídico respecto de las decisiones en estudio, o quizá de existir alguna regla, verificar su efectividad a fin de proponer una posible corrección que solucione el problema encontrado, y una vez hecho

esto, poder formular la interrogante general que describa la intención de nuestro trabajo, lo que servirá para la búsqueda de los ejes temáticos que nos guiarán a una propuesta efectiva para la solución adecuada.

Tal formulación está constituida por una interrogante que a la letra dice: ¿Cómo se garantiza el debido proceso a través del control constitucional frente al abuso de la autonomía del Ministerio Público?, la cual servirá de eje al desarrollo de la investigación, generándose así la estructura que se describe a continuación.

La presente investigación, se inicia con el primer capítulo referido a los aspectos metodológicos, en el cual se detallan tanto la formulación antes descrita como el esquema lógico que seguirá la tesis para alcanzar la verificación de la viabilidad de la propuesta.

Ya en un segundo capítulo se da comienzo al desarrollo teórico, siendo el contenido principal de éste la teoría del debido proceso como garantía constitucional, para sentar las bases que permitan establecer si la actividad del Ministerio Público se condice con esta regla de optimización.

Seguidamente, se desarrolla el capítulo tercero en el cual se busca reconocer las facultades del Tribunal Constitucional del control constitucional, precisamente para poder establecer si le corresponde a esta entidad, el establecimiento de los criterios o parámetros que conlleven a señalar la ruta del control difuso como primer paso de la garantía del cumplimiento del debido proceso en las actuaciones del Ministerio Público.

En los capítulos cuarto y quinto se ha tomado la prerrogativa de analizar la facultad de autonomía procesal del Ministerio Público con el fin de observar los límites para su ejercicio, desarrollado en el primero desde la perspectiva del control constitucional guiado por la intervención del Tribunal Constitucional en ejercicio de su autonomía procesal, de igual modo en el quinto se hace una revisión de la exigencia constitucional del respeto al debido proceso por parte del Ministerio Público, buscando un resultado

orientado a la verificación de la posible existencia de abuso de derecho por parte de dicha institución.

Con el cúmulo de la información otorgada por el Ministerio Público, la jurisprudencia encontrada del Tribunal Constitucional, observación jurisdiccional, y la opinión de la comunidad jurídica recogida mediante la aplicación de una encuesta, se logró realizar el análisis de dichos resultados lo cual se puede apreciar en el contenido del capítulo sexto.

En este nivel se pudo arribar al desarrollo de la contrastación de la hipótesis en el capítulo sétimo, iniciando con la discusión sobre cada uno de los objetivos específicos tomando como base la información recogida de la doctrina, análisis jurisprudencial, resultados estadísticos y de opinión, llegando a obtener una posición respecto a cada uno de dichos puntos; resultado que permitió validar las variables que componen la hipótesis inicial, llevándonos a la creación de la hipótesis conclusiva; construcciones éstas que al compararlas permitieron verificar una contrastación positiva.

Finalmente, con todos los resultados descritos se pudo construir las conclusiones en relación a cada uno de los objetivos específicos planteados, así como, en función de ellos se generaron las recomendaciones del caso incluyendo la propuesta de elaboración de un proyecto de Ley en el que se sugiere la modificación del artículo 334° inciso 2 del Código Procesal Penal.

*La Autora.*

## **CAPÍTULO I:**

### **ASPECTOS METODOLÓGICOS**

#### **1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA.**

##### **1.1.1. Planteamiento del problema.**

En un inicio no tenía pensado realizar un trabajo de investigación basado en un tema como el propuesto, sino uno totalmente distinto, esto es de derecho de familia o civil, sin embargo hace más de 02 años, un familiar muy cercano fue víctima de un accidente de tránsito, quedando al borde de la muerte; luego de las actuaciones en sede policial, el caso fue derivado a la fiscalía, donde el fiscal entonces a cargo, dispuso abrir investigación preliminar por el término de 60 días por el delito de lesiones culposas, programando algunas diligencias; sin embargo, en dicha sede el caso estuvo paralizado sin que se realizara diligencia alguna por un lapso de más de 04 meses, lo cual motivo una queja ante la Oficina Desconcentrada de Control Interno, donde se le abrió proceso disciplinario al fiscal, - se le impuso la sanción disciplinaria de amonestación-, y es ahí donde recién el fiscal sin realizar acto investigatorio alguno, simplemente archivó el caso, opinión que en una reunión, verbalmente ya nos había hecho conocer.

Posteriormente, ante la interposición el recurso de elevación de actuados y la solicitud de exclusión del fiscal, el fiscal superior resuelve declarar fundado el recurso, y consecuentemente la exclusión del fiscal al quedar acreditado que el archivo dispuesto por éste no se encontraba justificado.

El fiscal superior ordenó se devuelvan los actuados a la fiscalía de origen, disponiendo la realización de otras diligencias para el esclarecimiento de los hechos, nombrando a una nueva fiscal en el caso, quien si bien realizó diligencias, sin embargo también asume el criterio del fiscal excluido, archivando nuevamente la denuncia, la cual en mi posición resulta arbitraria porque el caso no se investigó debidamente, además al tiempo que ella asume la investigación, las diligencias que se propuso realizar como: Una nueva inspección técnico policial, hasta resultaba muy extemporánea; es decir, los elementos que han podido esclarecer aún más la ilicitud de las lesiones culposas ya no

se pudieron recabar porque había pasado demasiado tiempo, para ser exactos 07 meses y 03 días sin actuación de diligencia alguna.

Entonces, fue ésta mi real motivación, el hecho de haber vivido muy de cerca la arbitrariedad e injusticia que se comete por los fiscales con disposiciones que dejan mucho que desear y que producen impunidad en muchos delitos, casos que en ocasiones sin realizar acto investigatorio alguno adelantan opinión, asegurando un archivo, sin siquiera lograr un esclarecimiento de los hechos.

En función a lo descrito, con el fin de estructurar el cuerpo de nuestra labor académica, corresponde cuestionarnos: ¿Cuál es el efecto social verificable en nuestro entorno?, desde luego, tal efecto ha de estar circunscrito a la realidad hasta ahora planteada y la desarrollamos como sigue:

El efecto social es simplemente impactante, en los medios de comunicación casi a diario podemos observar personas agraviadas que no consiguen acceder a la justicia, pese a existir suficientes elementos de prueba que para cualquier ciudadano de a pie significa al menos la comisión de delito, pero que los operadores de justicia, en este caso la fiscalía, quien es el persecutor del delito, no realiza una correcta investigación y simplemente archiva, generando con ello el descontento de la ciudadanía, pues el sentir es para qué luchar tanto si de quienes precisamente esperan amparo, les cierran las puertas de acceso a la justicia y por ser entes autónomos, cuya facultad discrecional ha sido reconocida por la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica, muchas veces se escudan en esta categoría para no investigar y las denuncias quedan en el olvido.

Ya enfocados en el aspecto social, corresponderá ubicar un fundamento teórico que cimiente nuestra propuesta, es decir escoger dentro del cúmulo del conocimiento jurídico la doctrina adecuada, así nos preguntaremos: ¿Qué parte de la doctrina necesitamos verificar?.

Sería en parte revisar lo concerniente a la garantía del debido proceso que sirve de eje al derecho procesal penal, específicamente la que rige a la investigación preliminar; además tomaremos como referencia a la doctrina que fundamenta la autonomía del Ministerio Público, y de otra parte revisar lo concerniente al control difuso que ejercerán los jueces del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional.

Finalmente, debemos recurrir a la consecuencia lógica que se obtiene después de un razonamiento jurídico, cuál es, la verificación del aspecto positivo del derecho; es decir, nos toca verificar si existe un problema en la regla, así cuestionaremos: ¿Qué repercusión tiene el problema en la legislación?, desde luego daremos una respuesta como una aproximación, dado que la certeza la encontraremos con el desarrollo de la investigación.

Así, si bien es cierto, para el caso de la parte agraviada, una disposición fiscal de archivo de una investigación emitida por un fiscal provincial, de conformidad con el artículo 334° inciso 5) del Código Procesal Penal puede ser impugnada vía elevación de actuados dentro del término de 05 días para que el fiscal superior se pronuncie al respecto, incluso formular una queja o denuncia contra el fiscal a cargo ante la Oficina Desconcentrada de Control Interno, así como pedir su exclusión ante el superior jerárquico, es decir existe dentro del Ministerio Público algún tipo de control de sus actuaciones; sin embargo, qué sentido tendría ello, si por ejemplo no se actúa diligencia alguna durante la investigación, se prorroga el plazo injustificadamente o se adoptan decisiones despóticas y caprichosas, y esto termina afectando el curso de la investigación, debido a que las evidencias que no se acopiaron oportunamente, se perdieron por el paso del tiempo, cuando se supone que las actuaciones que se propone el fiscal son de urgente realización; es decir, son actos inmediatos.

Sobre el particular, en nuestra Constitución Política no existe una regulación expresa que se refiera en concreto a si las disposiciones fiscales pueden ser objeto de control constitucional; sin embargo, en virtud que el Ministerio Público “es un órgano constitucional constituido, y por ende sometido a la Constitución Política del Estado, no

puede ejercer sus funciones irrazonablemente, con desconocimiento de los principios y valores constitucionales, tampoco al margen del respeto de los derechos fundamentales” (Exp. 5228-2006-HC/TC Caso Gleiser Katz), razón por la cual “el control constitucional de los actos del Ministerio Público tiene su sustento en el debido proceso” (Exp. 5228-2006-HC/TC Caso Gleiser Katz), el mismo que “ (...) despliega su eficacia jurídica no solo en la etapa jurisdiccional de los procesos penales” (Exp. 5228-2006-HC/TC Caso Gleiser Katz), sino también en la etapa pre jurisdiccional (etapa preliminar), lo que significa que “el Tribunal Constitucional tiene la potestad jurisdiccional de establecer criterios de razonabilidad y proporcionalidad que garantice no solo el respeto de los derechos fundamentales de los investigados en el marco de la facultad de investigación y persecución del delito a cargo del Ministerio Público” (Exp. 5228-2006-HC/TC Caso Gleiser Katz), sino que tal criterio también resulta aplicable a la parte agraviada; por ello nos preocupa investigar si existe la necesidad de regular legislativamente este tipo de efecto jurídico respecto de las decisiones en estudio, o quizás de existir alguna regla, verificar su efectividad a fin de proponer una posible corrección que solucione el problema encontrado.

Desarrollado esto, es que estamos en posición de poder formular la interrogante general que describe en su totalidad la intención de nuestro trabajo, lo que servirá para la búsqueda de los ejes temáticos que nos darán la ruta para alcanzar la luz de una propuesta efectiva para la solución más adecuada.

### **1.1.2. Formulación del problema.**

¿Cómo se garantiza el debido proceso a través del control constitucional frente al abuso de la autonomía del Ministerio Público?

## **1.2. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO.**

### **1.2.1. Justificación del estudio.**

El presente trabajo de investigación se encuentra debidamente justificado en tres aspectos primordiales que a nuestro parecer hemos ubicado dentro de la realidad, siendo los siguientes:

La justificación a nivel social la ubicamos en la verificación del nivel de aceptación que tiene la labor de los operadores de justicia en nuestro país, la actividad del Poder Judicial y el Ministerio Público carece del nivel de efectividad que se supone han de tener para garantizar el cumplimiento del derecho en pos de la justicia.

Ello se ve reflejado en las encuestas realizadas a la población por parte del CPI en el año 2015 en las que se obtienen como resultado un margen de desaprobación de 86.2% de la población nacional (CPI, 2015), lo que deja muy mal parada a la institución; esto justifica una observación interna en el sistema que maneja el Poder Judicial y el Ministerio Público, siendo este último el que nos ocuparemos de analizar.

Si el problema lo que busca es plasmar una realidad en función a la eficacia del Ministerio Público, debemos revisar si el problema radica en aspectos que contemplan solamente la actividad procesal o tal vez se trata de un problema que se desencadena desde la concepción doctrinaria que define determinadas instituciones jurídicas que importan en el desarrollo de las actividades encaminadas a impartir justicia.

Con ello nace para nosotros la justificación doctrinaria, puesto que debemos analizar doctrinariamente las instituciones o categorías jurídicas que definen por ejemplo la autonomía del Ministerio Público o los alcances que definen el debido proceso penal durante la investigación preliminar, lo que nos permitirá determinar si su aplicación permite un efectivo alcance de la justicia en nuestro sistema penal.

Definitivamente, será prudente desarrollar un estudio de la situación legislativa que circunda a la aplicación de la justicia por parte del Ministerio Público en lo que se refiere a los límites que la ley impone a la categoría de autonomía que se le otorga; revisaremos también los parámetros que la ley establece para el estricto cumplimiento del derecho al debido proceso durante la investigación preliminar; es de esto que resulta la justificación legislativa de nuestra proyección investigativa.



### **1.2.2. Importancia del estudio.**

Ya conocedores de las justificaciones de nuestra proyección, debemos definir la importancia del presente estudio, siendo precisamente derivada de los efectos que se espera alcanzar con su desarrollo; es decir, en cada uno de los aspectos en los que se describe la justificación del proyecto encontramos una importancia.

Así, socialmente lo que se espera alcanzar con nuestra propuesta es una mejora del servicio que haga cambiar la imagen de la institución y el nivel de aceptación de la población.

Siendo así, en lo que respecta al aspecto doctrinario, la ubicación de la teoría adecuada que permita definir las categorías jurídicas a estudiar dará pie a una mejor elucubración de los contenidos y en función a ello proponer una mejora o cambio.

Ya en el aspecto legislativo resulta harto importante nuestra investigación puesto que el resultado del análisis legislativo podrá permitirnos establecer la ruta de solución tanto de la concepción de la autonomía del Ministerio Público cuanto de la realidad de la aplicación del derecho al debido proceso en nuestro actual sistema procesal penal, específicamente durante la investigación preliminar.

## **1.3. OBJETIVOS.**

### **1.3.1. Objetivo General.**

Determinar cómo se garantiza el debido proceso a través del control constitucional frente al abuso de la autonomía del Ministerio Público.

### **1.3.2. Objetivos Específicos.**

- ✓ Desarrollar el debido proceso como garantía constitucional.
- ✓ Describir el control constitucional como facultad del Tribunal Constitucional para revisar las decisiones fiscales.
- ✓ Analizar si el abuso de la autonomía del Ministerio Público afecta el debido proceso.

#### **1.4. HIPÓTESIS.**

Sí, a través del control constitucional se verifica que la autonomía del Ministerio Público se aplica inadecuadamente; entonces, se estará vulnerando la garantía del debido proceso penal.

#### **1.5. VARIABLES.**

##### **1.5.1. Variable independiente.**

Abuso de la autonomía del Ministerio Público.

##### **1.5.2. Variable dependiente.**

La garantía del debido proceso a través del control constitucional.

#### **1.6. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS.**

##### **1.6.1. Métodos.**

En nuestra investigación haremos uso de los siguientes métodos, que nos permitirán desarrollar la observación de una forma adecuada y sistemática, así tenemos:

- ✓ **Método exegético jurídico.-** Este método será aplicado para interpretar el sentido de las normas recopiladas respecto a la autonomía del Ministerio Público y la garantía del debido proceso; detalle que se confrontara con la realidad nacional y regional, permitiendo obtener cifras como resultados, en base a las cuales podrá contrastarse la hipótesis planteada.
- ✓ **Método sistemático jurídico.-** Este método podrá ser empleado para realizar un análisis conjunto e interrelacionado de nuestro ordenamiento jurídico procesal penal y constitucional, lo cual nos permitirá arribar a la mejor conclusión del informe de investigación.
- ✓ **Método hipotético deductivo.-** Al emplear el método hipotético deductivo podremos verificar su apoyo metodológico al momento de elaborar la hipótesis de trabajo, y en el transcurso de la investigación para realizar un correcto estudio del tema abordado desde comprender su naturaleza hasta llegar a sus manifestaciones específicas para casos concretos.
- ✓ **Método inductivo.-** La aplicación de este método nos permitirá analizar el

material de estudio, el mismo que ha de servir de base para demostrar la hipótesis de trabajo, así como para la elaboración de las conclusiones y recomendaciones finales.

### **1.6.2. Técnicas.**

En el desarrollo de nuestro tema, haremos uso de las técnicas de recolección de la información que nos permita establecer los parámetros con los que se definirá nuestra propuesta, permitiéndonos plantear al final las propuestas en función a los resultados.

- ✓ **Análisis Documental.-** Se utilizarán fichas bibliográficas, fichas de investigación documental, etc., con lo cual se van a obtener datos de los archivos de fuentes documentales, de textos que se hayan publicado en materia de derecho procesal penal y derecho constitucional, específicamente respecto al control constitucional de las decisiones que adopta el Ministerio Público, durante la etapa preliminar.
- ✓ **Entrevista.-** Se empleará la guía de entrevista; la cual será aplicada a personas que conocen el tema materia de observación, integrando a operadores jurídicos como son fiscales, jueces así como abogados, quienes verterán sus opiniones respecto de la problemática planteada.

### **1.6.3. Instrumentos.**

Los instrumentos son los medios auxiliares para recoger y registrar los datos obtenidos a través de las técnicas.

- ✓ **La Ficha.-** Es un instrumento que se utiliza en la técnica del fichaje, y servirá para localizar las fuentes y también para almacenar la información que se va obteniendo durante la investigación.
- ✓ **La Guía de entrevista.-** Es un instrumento que se utiliza en la técnica de la entrevista, y consistirá en un conjunto de preguntas que se elaborarán para que sirvan de orientación en el diálogo que se debe tener con los entrevistados que son los conocedores del tema.

## **CAPÍTULO II:**

### **EL DEBIDO PROCESO COMO GARANTÍA CONSTITUCIONAL**

#### **2.1. EL DEBIDO PROCESO.**

Teniendo en cuenta que el planteamiento del problema en esta investigación se ha desarrollado en función al estudio de dos ejes temáticos como son el debido proceso y la autonomía del Ministerio Público, con la intención de verificar si es que se puede controlar el posible ejercicio abusivo de tal facultad, mediante la intervención del Tribunal Constitucional a efectos de evitar la vulneración del debido proceso, resulta prudente desarrollar en forma previa la teoría del debido proceso como una garantía constitucional.

##### **2.1.1. Evolución histórica.**

Con la intención de establecer una línea de tiempo en lo que se refiere al surgimiento del debido proceso en la estructura del derecho, debemos tomar inicialmente lo recogido por el Dr. Jorge Isaac Torres Manrique (2010), quien en su artículo jurídico denominado: *Breves consideraciones acerca del Debido Proceso Civil. A propósito del exiguo desarrollo y reconocimiento del Debido Proceso, en sus diversas variantes de Debidos Procesos Específicos*, describe su desarrollo evolutivo de la siguiente manera:

El proceso debido legal o general (o simplemente, debido proceso), estatuido genéricamente como garantía, salió a la luz del mundo del derecho, en primer lugar: en el common law inglés, en la Carta Magna de Inglaterra del 15/06/1215 (Concesión Real o cédula del rey Juan Sin Tierra inglés, por la cual se comprometió con los nobles ingleses, a respetar sus fueros e inmunidades y a no disponer su muerte, prisión y confiscación de sus bienes, mientras dichos nobles no fuesen juzgados por sus iguales); y en segundo lugar: aparece expresamente en la Quinta Enmienda de la Constitución Política de EE. UU. de 1787- Carta de Derechos- (la misma que prohíbe los juicios repetidos por el mismo delito y los delitos sin el debido proceso legal, así como también, el que una persona acusada no esté obligada a atestiguar contra si misma) (pág. 4).

Como vemos, el derecho al debido proceso tiene su origen en el derecho anglosajón y que según la investigación del Dr. Landa, es el “*due process of law* anglosajón”, la misma que traducida al castellano significa “*debido proceso legal*”. El término debido

proceso fue mencionado por primera vez en la Carta Magna del año 1215 (Concesión Real o Cédula del Rey Juan Sin Tierra inglés), cláusula 48, cuando el Rey Juan I de Inglaterra, conocido como Juan Sin Tierra, bajo la presión de los barones ingleses, otorga a estos entre otras garantías la del “*due process of law*”. Así, en dicho documento se disponía sobre la prohibición de arrestar, detener, desposeer de la propiedad o de molestar a ningún hombre libre, salvo en virtud de enjuiciamiento legal de sus pares y por la Ley de la Tierra. Es decir, esta Carta Magna significó la conquista de los demás derechos fundamentales, pues el Estado monárquico inglés asumió el deber y el compromiso de respetar las garantías previstas en dicho instrumento de regulación y limitación del poder arbitrario del Estado (Landa Arroyo, 2012, pág. 3).

Posteriormente, también se indica que el debido proceso, en países como Estados Unidos de América fue, según el trabajo de investigación del Dr. Tello Gonzales, incorporado en la Constitución Federal de 1787 a través de sus enmiendas V (1971) y XIV (1868). En la V, efectuada en el año 1971, se estableció que: “ninguna persona será privada de su vida, libertad o propiedad, sin el debido proceso legal” imponiendo de esta manera una limitación a los poderes del gobierno federal. En la XIV, realizada en el año 1868, se dispuso que: “ningún Estado privará a persona alguna de la vida, libertad o propiedad, sin el debido procedimiento legal, ni negará, dentro de su jurisdicción a persona alguna la igual protección de las leyes”, estableciendo así la misma restricción, pero esta vez al poder del Estado. (Tello Gonzales, 2016, pág. 17).

En consecuencia, de acuerdo a lo recogido, el debido proceso legal es pues la primera de las garantías constitucionales de la administración de justicia, que dio origen a los textos constitucionales, garantía ésta que ha ido adquiriendo mayor repercusión en todos los ordenamientos constitucionales de América Latina, tan es así que en nuestro país, el debido proceso es uno de los principios y derechos de la función jurisdiccional previsto en el artículo 139° inciso 3) de la actual Constitución Política, el mismo que no solo es de aplicación en la instancia judicial, sino que, para efectos de nuestra investigación, también lo es en sede del Ministerio Público, al ser éste un órgano constitucional constituido sometido a la Constitución.

### **2.1.2. Definición.**

Habiendo verificado el origen del debido proceso a través de la historia, ahora con el fin de entender su significado, tomaremos inicialmente como referencia a la definición que hace el jurista peruano Dr. César Landa Arroyo (2012), quien en su libro denominado: *El Derecho al Debido Proceso en la Jurisprudencia. Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, Tribunal Constitucional del Perú, Corte Interamericana de Derechos Humanos*, se refiere al debido proceso de la siguiente manera:

El debido proceso es un derecho humano abierto de naturaleza procesal y alcances generales, que busca resolver de forma justa las controversias que se presentan ante las autoridades judiciales. Se considera un derecho “continente” pues comprende una serie de garantías formales y materiales. Como tal, carece de un ámbito constitucionalmente protegido de manera autónoma, de modo que su lesión se produce cuando se afecta cualquiera de los derechos que consagra, y no uno de manera específica. (pág. 16)

De la definición del Dr. Landa, podemos notar que lo entiende como un derecho que es exclusivo del ser humano que contiene numerosas garantías importantes para el normal desarrollo de un proceso determinado, tanto en su dimensión judicial como en otras dimensiones; especialmente en lo que corresponde al derecho procesal penal tiene una vital importancia su irrestricto respeto, buscar el equilibrio de los derechos que corresponden a cada una de las partes, ya que en esencia lo que asegura el debido proceso es la emisión de una decisión procedimentalmente correcta en cuanto a las etapas y plazos, y más que todo, que se haga justicia.

Se puede encontrar otro aspecto importante sobre el comentario de Landa, en el sentido estructural del debido proceso, pues lo denomina un derecho continente, de lo que se puede comprender que está compuesto o integrado por ciertas garantías relacionadas al proceso, desde el punto de vista formal incluyendo los procedimientos y las reglas para su correcto desempeño; así también se ubica otra parte material, que tendrá que ver con el fondo de una situación ventilada.

Por otro lado, también encontramos la definición dada por el investigador José Ávila Herrera (2004), quien en su tesis para optar el Grado Académico de Magister en

Derecho con mención en ciencias Penales, denominada: *El Derecho al Debido Proceso Penal en un Estado de Derecho*, señala que:

(...) La garantía del debido proceso es reconocido como un derecho fundamental, consagrado en un instrumento de derecho público, y cuya titularidad no se limita ya a los miembros de un estamento (...), sino que se presenta como un derecho de todos los ciudadanos de un Estado o de todos los hombres por el hecho de serlo. (pág. 128).

De la mencionada definición, podemos entender que el debido proceso es un derecho fundamental incluido en un dispositivo legal y que es un derecho de todos los ciudadanos reconocidos por los Estados en sus cartas políticas; pero además, podemos decir que este derecho, también lo encontramos en el contexto de tratados y convenios en materia de derecho internacional de derechos humanos y derecho internacional humanitario, los que han sido integrados a las constituciones por medio del bloque de constitucionalidad.

En ese sentido, existe la necesidad de contar con un marco referencial, como lo es un verdadero Estado Democrático Constitucional de Derecho, que tenga como base fundamental la ley y el respeto irrestricto de los derechos humanos, donde se desarrolle la paz, la igualdad y la justicia, pues sin esto no podríamos garantizar un debido proceso como parte de la administración de justicia y sobre todo de su acceso, por lo que ello implica que los operadores jurídicos como parte del sistema lo fortalezcan, respetando las garantías mínimas que debe haber en todo procedimiento regular, y cuando hablamos de operadores jurídicos, también debemos incluir a los magistrados del Ministerio Público, quienes en el desarrollo de su actividad investigatoria deben garantizar el cumplimiento del debido proceso.

En nuestro país, el artículo 43° de la Constitución Política establece que: “La República del Perú es democrática, social, independiente y soberana (...)”. En tal sentido, nuestro Estado tiene elementos esenciales propios de un Estado de Derecho, los mismos que según Ticona Póstigo (2007), son: “a) a la justicia y seguridad jurídica, b) la Constitución como norma suprema, c) la división de poderes, d) la protección de los derechos fundamentales, e) la vinculación de los poderes públicos al derecho, a la ley”;

asimismo, indica el autor que son elementos esenciales del postulado del Estado de Derecho también: “f) la tutela judicial y vertiente procedimental de los derechos fundamentales”, a los cuales también agrega “el control jurisdiccional de los actos de la administración, el control de la constitucionalidad de las leyes, entre otros” (pág. 31). Es decir que de acuerdo al citado autor, un Estado Social y Democrático de Derecho se sustenta en los principios de libertad, seguridad, propiedad privada, soberanía popular, separación de funciones supremas del Estado y reconocimiento de los derechos fundamentales para justamente garantizar el respeto irrestricto de las garantías mínimas que debe existir en todo procedimiento regular sea en instancia judicial o fiscal, como lo es el tema de investigación.

Por otro lado, el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Exp. 0426-2003-AA-TC, Fundamento 3, en reiterada jurisprudencia ha establecido que el debido proceso puede definirse de la siguiente manera:

El inciso 3) del artículo 139° de la Constitución establece como principio de la función jurisdiccional la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. El debido proceso está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deban aplicarse a todos los casos y procedimientos existentes en el Derecho (Caso Henry Eduardo Castro Paniagua contra la Corte Superior de Justicia de Junín, 2003).

Como vemos el debido proceso exige el cumplimiento de los requisitos, garantías mínimas y normas de orden público que deben estar presentes en procedimientos no solo de índole judicial, sino en todos los procedimientos, a efectos de que las personas puedan hacer uso de la defensa adecuada de sus derechos ante cualquier actuación u omisión por parte de los órganos del Estado y con ello, asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso del que son parte.

También, el Tribunal Constitucional, según lo recogido por el Dr. Marcial Rubio Correa (2008) en su Libro: *La Interpretación de la Constitución según el Tribunal Constitucional*, ha precisado que:

El debido proceso, incluye todas las normas constitucionales de forma y de fondo aplicables, así como las principales disposiciones de la



legislación de jerarquía inferior que contribuyen a garantizar la aplicación de los derechos constitucionales. No es un concepto restrictivo sino extensivo. (Exp. 1042-2002-AA-TC). (págs. 213-214)

El Tribunal Constitucional, sobre el debido proceso indica que ha sido asumido por nuestra Constitución Política y demás normas sujetas a la norma constitucional para garantizar los derechos fundamentales contenidos en la misma, de quienes buscan la tutela o protección jurídica de dichos derechos. Además, nos indica que no se trata de un concepto restrictivo sino extensivo; en efecto, el debido proceso es un derecho subjetivo y público que está compuesto por otros derechos, esto es, garantías mínimas: principios procesales y derechos procesales indispensables para la existencia de éste, los cuales más adelante se trataran a mayor detalle.

Asimismo, el Tribunal Constitucional refiere que el debido proceso forma parte del derecho a la tutela jurisdiccional junto, cuando menos, al derecho de acceso a la justicia y al de la efectividad de las resoluciones judiciales. Según éste: (...) El derecho a la tutela jurisdiccional no solo implica el derecho de acceso a la justicia y el derecho al debido proceso, sino también el derecho a la “efectividad” de las resoluciones judiciales (Exp. 1042-2002-AA-TC).

Como podemos advertir de lo expresado por el Tribunal Constitucional, el debido proceso ha sido entendido por éste como un derecho que forma parte del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, siendo que el debido proceso está concebido como el cumplimiento irrestricto de todas las garantías y normas de orden público, que le permite a las personas ejercer la defensa debida de sus derechos ante el abuso por parte del poder del Estado.

Así pues, el derecho al debido proceso entonces es un derecho que resulta implícito en el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, el cual importa el reconocimiento de un derecho prestacional que recibe del Estado la protección jurídica debida, en el igual ejercicio de los derechos, como es el derecho de acceso a los tribunales, el derecho a una resolución fundada en derecho, y el derecho a la efectividad de las resoluciones

judiciales. Por lo que, no resulta suficiente garantizar que las pretensiones de los justiciables sean atendidas por un órgano jurisdiccional, sino que también es necesario que se realice a través de un proceso dotado de las garantías mínimas.

Al respecto, el artículo 139° inciso 3) de la Constitución Política del Estado, ha consagrado como principios y derechos de la función jurisdiccional “la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva”. En consecuencia, si bien es cierto el derecho de acceso a la justicia garantiza que cualquier persona pueda de manera directa o por medio de un representante acudir a un órgano jurisdiccional para sustentar cualquier pretensión, también lo es que se debe dar con el respeto de las garantías mínimas.

Por su parte el Dr. Oré Guardia, Arsenio (2011), en su libro: *Manual de Derecho Procesal Penal*, ha recogido lo siguiente:

(...) Por lo que, el derecho al debido, es su faz procesal, debe ser comprendido como un derecho fundamental de carácter instrumental conformado – a su vez- por un conjunto de derechos esenciales que impiden que la libertad y los derechos de los individuos sucumban ante la ausencia o insuficiencia de un proceso (pág. 27).

De la precitada definición, se hace referencia al debido proceso desde un punto de vista procesal, el mismo que se constituye como un derecho de carácter instrumental, continente de innumerables garantías de las personas que deben estar presentes en un proceso que deberá sujetarse a los lineamientos mínimos establecidos en las normas jurídicas que los rigen, con la finalidad de asegurar una recta administración de justicia.

Ahora bien, de las definiciones dadas por los autores que anteceden, la asumida por el Tribunal Constitucional es la que más se acerca a la posición de la autora, dado que, en efecto el debido proceso constituye un derecho fundamental de los justiciables que implica el respeto de las garantías mínimas que deben ser observadas en todo los procedimientos de los que una persona es parte frente a la posición que el Estado tiene como autoridad, lo cual garantiza un Estado de Derecho, pues lo contrario conllevaría a cometer arbitrariedad por quienes ejercen el poder a través de mandatos no solo

antijurídicos, sino también ilegítimos; debiendo precisar que se trata de una garantía que tampoco debe ser ajena a la labor que desempeñan los fiscales en su rol de investigadores y persecutores del delito.

### **2.1.3. Estructura.**

Con el fin de conocer el contenido que conforma la estructura del debido proceso debemos tomar como referencia lo esgrimido por ciertos juristas, así tenemos:

Landa Arroyo (2012):

Respecto al contenido del debido proceso, éste puede descomponerse en: Debido proceso formal o adjetivo, el cual alude al trámite y procedimiento utilizado para dictar una sentencia; y en debido proceso sustantivo o material, el cual cuestiona directamente el fondo de la decisión, cualquiera sea la materia que en su seno se pueda dirimir (pág. 17)

Según lo anterior, advertimos una división del derecho al debido proceso en dos aspectos: Uno formal y el otro material, para poder identificar cada uno de ellos recurriremos al mismo autor, a fin de obtener una explicación sobre el particular, así tenemos que al desarrollar el debido proceso, lo descompone en dos dimensiones: formal y material, siendo que en cuanto a la primera indica que: “está referido a las garantías procesales que dan eficacia a los derechos fundamentales de los litigantes”; es decir, procura primero la garantía de los derechos fundamentales y, en cuanto a la segunda dimensión, señala que: “la justicia procura que no existan zonas intangibles a la arbitrariedad”; esto es, es el límite para la arbitrariedad del Estado (Landa Arroyo, 2012, pág. 17).

Queda clara, entonces la posición que nos da el autor al desarrollar cada uno de los aspectos que componen el debido proceso.

Ahora bien, autores como Luis R. Saenz Dávalos (2003), en la sección del Libro: *Derechos Procesal Constitucional, Procesos constitucionales frente a resoluciones arbitrarias*, habla de dos dimensiones, siendo estas:

a) Debido proceso formal

Dentro de la dimensión procesal o adjetiva, que es la que ahora nos interesa, el debido proceso alude a toda aquella estructura de principios y derechos que corresponden a las partes durante la secuela de todo tipo de proceso, sea éste jurisdiccional, sea administrativo, o sea corporativo particular”.

b) El debido proceso sustantivo.

La segunda dimensión que la doctrina suele reconocer respecto del debido proceso, es la de tipo sustantivo o material.

Con esta dimensión, lo que se quiere indicar es un derecho a que todo pronunciamiento del Estado, sea jurisdiccional, legislativo o administrativo, resulte compatible con los estándares de justicia o razonabilidad. Por consiguiente se trata de un auténtico juicio o valoración directamente aplicado sobre la misma decisión o pronunciamiento con el que se pone término a un proceso, incidiendo en el fondo de las cosas y no limitándose tan solo a la forma, como ocurre normalmente, con la dimensión procesal o adjetiva (...). (págs. 147, 155-157).

Al respecto, advertimos que de acuerdo a la posición asumida por el citado autor, también nos habla de una doble dimensión del debido proceso, esto es, una procesal o adjetiva que hace alusión a los derechos que deben respetarse durante el procedimiento en sí, esto es como garante de un desarrollo procesal debido y, una segunda dimensión conocida como sustantiva o material, que alude a la garantía que recae sobre el fondo de una decisión judicial, cuyo sustento está en la razonabilidad y proporcionalidad.

En similar sentido, se ha concebido al debido proceso desde dos puntos de vista, esto es, debido proceso adjetivo o formal y el debido proceso sustantivo o material, así tenemos que:

Ávila Herrera (2004)

(...) El debido proceso adjetivo o formal, el cual en su fase procesal, constituye un conjunto de reglas y procedimientos tradicionales que el legislador y el ejecutor de la ley deben observar cuando en cumplimiento de las normas que condicionan la actividad de esos órganos (constitución, leyes, reglamentos), regulan jurídicamente la conducta de los individuos y restringen la libertad civil de los mismos (libertad física, de palabra, de locomoción, propiedad, etc.) (...) (pág. 137).

Como podemos advertir, el primer punto de vista asumido por este investigador es el debido proceso adjetivo o formal, el cual acoge un conjunto de reglas y procedimientos

que no solo debe ser previsto por el legislador, sino también por el ejecutor de la ley, esto es el juzgador, debiendo observar el cumplimiento de este derecho. En esencia lo que este derecho implica es la posibilidad de que todo procedimiento seguido contra cualquier ciudadano, sea este judicial, procedimiento administrativo o procedimiento entre particulares, se respeten ciertas garantías mínimas, a través de los cuales se asegura alcanzar el valor justicia, o dicho de otro modo, constituye la oportunidad que todo ciudadano tiene de que sus pretensiones serán oídas por una autoridad competente e imparcial, la cual deberá resolver sin dilaciones indebidas.

Por otro lado, el citado autor considera que en cuanto al debido proceso sustantivo o material “implica la determinación judicial de la compatibilidad del contenido de una ley o acción gubernamental con la constitución”, esto es que la decisión judicial emitida debe estar basada en criterios de razonabilidad y proporcionalidad, garantizándose con ello una sentencia justa. (Ávila Herrera, 2004, pág. 137)

Por último, el Tribunal Constitucional, también ha precisado que el debido proceso puede descomponerse en debido proceso formal o adjetivo, el cual alude al trámite y procedimiento utilizado para dictar una sentencia; y en debido proceso sustantivo o material, el cual cuestiona directamente el fondo de la decisión, cualquiera sea la materia que en su seno se pueda dirimir. Así, en el Exp. Nro. 3421-2005-HC/TC, Fj. 5, ha indicado que:

(...) el derecho fundamental al debido proceso no puede ser entendido desde una perspectiva formal únicamente; es decir, su tutela no puede ser reducida al mero cumplimiento de las garantías procesales formales. Precisamente, esta perspectiva desnaturaliza la vigencia y eficacia de los derechos fundamentales, y los vacía de contenido. Y es que el debido proceso no sólo se manifiesta en una dimensión adjetiva-, sino también en una dimensión sustantiva- que protege los derechos fundamentales frente a las leyes y actos arbitrarios provenientes de cualquier autoridad o persona particular-. En consecuencia, la observancia del derecho fundamental al debido proceso no se satisface únicamente cuando se respetan las garantías procesales, sino también cuando los actos mismos de cualquier autoridad, funcionario o personas no devienen en arbitrario. (Nicke Nelson Dominguez Baylon vs Corte Superior de Justicia de Huanuco, 2004).

Como podemos observar, todos los autores citados han asumido el criterio de que el debido proceso poseería al menos dos dimensiones, componentes o elementos, los cuales serían: El uno adjetivo o formal y el otro material o sustantivo. En la de carácter formal, los principios y las reglas que lo integran tienen que ver con las formalidades estatuidas, tales como las que establecen el juez natural, el procedimiento preestablecido, el derecho de defensa, la motivación, esto es, se configura por el conjunto de garantías que atañen al desenvolvimiento del proceso, desde su inicio hasta la ejecución de lo decidido, correspondiendo a esta dimensión todas las concreciones que anteriormente desde el artículo 139° se han concluido como garantías del debido proceso y, en su faz sustantiva, se relaciona con los estándares de justicia como son la razonabilidad y proporcionalidad que toda decisión debe suponer.

Consecuentemente, para nuestro tema de investigación, tales dimensiones o formas del debido proceso también deben ser aplicables a los actos que disponga la institución autónoma del Ministerio Público al calificar una denuncia o durante las investigaciones preliminares de un caso en concreto, dado que desde un punto de vista formal, haría referencia a los derechos estrictamente procedimentales en la etapa pre jurisdiccional tanto de la parte investigada como del agraviado, y desde el punto de vista material o sustantivo, implicaría también que las decisiones que vayan adoptar en sus disposiciones fiscales estén dotadas de exigencias de razonabilidad y proporcionalidad, limitando así que el poder del Estado representada por sus autoridades, en este caso los fiscales, vaya en desmedro de los derechos de las partes, precisamente porque el proceso se presenta como un instrumento a través del cual se ha de conseguir la finalidad que es la decisión justa.

#### **2.1.4. Elementos.**

El conocimiento del debido proceso desde un aspecto formal y material respecto de su contenido o estructura, nos obliga a buscar los medios que producirán la cristalización del objetivo de protección de esta categoría jurídica, para ello tomaremos como referencia lo desarrollado por el jurista Dr. Reynaldo Bustamante Alarcón (2000), en su artículo jurídico: *Derechos Fundamentales y Proceso Justo, llamado también Debido*

*Proceso*, sobre algunos elementos del debido proceso considerándolos de una manera no taxativa, sino enunciativa y que serían:

1. El derecho a contradicción o de defensa.
2. El derecho a la publicidad del proceso.
3. El derecho a que las resoluciones se encuentren adecuadamente motivadas (es decir conforme a la lógica, al derecho y a las circunstancias fácticas de la causa).
4. El derecho a ser asistido y defendido por un abogado técnicamente capacitado.
5. El derecho a ser informado sin demora, en forma detallada y en un idioma que comprenda la persona, de la naturaleza y causa de la acusación formulada contra ella.
6. El derecho a impugnar.
7. El derecho a probar o a producir prueba.
8. El derecho a que se asegure la eficacia o ejecución de las decisiones que se emitan o que hayan sido emitidas, y a que se dicten las medidas necesarias para que éstas se cumplan.
9. El derecho a que las decisiones se emitan en un plazo razonable y a que el proceso se desarrolle sin dilaciones indebidas.
10. El derecho a que las decisiones que se emitan sean objetiva y materialmente justas, (...). (pág. 82)

Tenemos pues, un catálogo de derechos que están incluidos en la categoría jurídica del debido proceso, entendemos que en función a ellos es que se asegura su protección y estricto cumplimiento, dentro de las cuales ubicamos ciertos derechos que se relacionan directamente con el planteamiento del problema de investigación, tales como: El derecho a una debida motivación de las resoluciones, así como el derecho a que las decisiones se emitan en un plazo razonable y a que el proceso se desarrolle sin dilaciones indebidas, siendo estos aspectos los que nos encasillan en la idea del respeto irrestricto de las garantías que corresponde al ser humano per se, alejándolo de todo tipo de abuso, el mismo que nosotros lo desarrollamos en función a la perspectiva de nuestro planteamiento que se enfoca en la crítica al abuso del derecho, constituido por medio de la ejecución de la facultad de autonomía del Ministerito Público, facultad discrecional que nuestra Constitución Política le ha reconocido a esta institución.

Por su parte, sobre los elementos que conforman el debido proceso, el Tribunal Constitucional ha elaborado largamente los elementos que integran, considera el debido proceso, constitucionalmente entendido y que algunos de dichos elementos

corresponden a lo establecido en la Constitución de manera expresa, pero que otros son incorporaciones que, bajo diversas modalidades, según el Dr. Marcial Rubio Correa (2008) en su libro: *“La Interpretación de la Constitución según el Tribunal Constitucional”*, son:

- La presunción de inocencia contenida en el artículo 2º, inciso 24, literal e) de la Constitución.
  - El derecho de defensa establecido en el artículo 139º, inciso 14) de la Constitución (...).
  - El derecho al Juez natural o a la jurisdicción predeterminada.
  - El derecho a la pluralidad de instancias, a los medios de prueba y a un proceso sin dilaciones.
  - La garantía de no autoincriminación (...).
  - El control difuso (...).
  - El principio de non bis in ídem, no expreso en la Constitución forma parte del debido proceso.  
(...)
  - A otorgar el informe oral ante la Sala Plena de la Corte Suprema (...).
- (págs. 214-222).

Como vemos, el Tribunal Constitucional ha nombrado ciertos derechos que forman parte del debido proceso, de los cuales algunos de ellos serán desarrollados en la presente investigación, ya que guardan una relación directa con los derechos protegidos tanto por el Derecho Procesal Penal como por el Derecho Constitucional, los mismos que están presentes en una investigación realizada por el órgano oficialmente encargado de ello, como lo es el Ministerio Público.

Finalmente, el jurista, Dr. Samuel Abad Yupanqui mencionado por los investigadores Aldo Nervo Atarama Lonzoy y Raúl Quevedo Guevara (2015), en su tesis denominada *Factores legales y funcionales asociados al debido proceso en la investigación penal, en liquidación, en el distrito judicial de Loreto*, para optar por el Grado Académico de Magister en Derecho con mención en Ciencias Penales, considera que los elementos mínimos que integran el debido proceso son:

- a) El debido emplazamiento o noticia al demandado, b) el otorgamiento a las partes de una razonable oportunidad para comparecer, ser oídas y exponer sus derechos, c) que las partes cuenten con una razonable oportunidad de ofrecer y actuar medios de prueba para acreditar sus afirmaciones, d) que la causa sea resuelta por órgano jurisdiccional



permanente del Estado, legítimamente constituido e imparcial, y e) que la causa sea resuelta dentro de un plazo razonable de manera revocable. (pág. 108)

Del criterio tomado por los citados investigadores, podemos advertir que el autor que ellos mencionan considera que el debido proceso está integrado por elementos mínimos, como los que menciona, esto es son elementos que garantizan el cumplimiento del debido proceso de las partes en todo proceso legalmente establecido y que se desarrolle sin dilaciones injustificadas, teniendo los justiciables por ejemplo, la oportunidad razonable de ser oídas por el Tribunal competente, predeterminado por la ley, independiente e imparcial, de ofrecer pruebas, de hacer uso de su derecho contradicción, de hacer uso de los recursos impugnativos previstos en la norma contra resoluciones judiciales no motivadas y no conformes a derecho, etc., con la finalidad de que los justiciables puedan defender de modo efectivo sus derechos ante cualquier acto abusivo por parte del poder estatal, en el tema materia de investigación, los fiscales.

En ese sentido, de acuerdo a la formulación de nuestro problema, si por parte del Ministerio Público, los fiscales hacen uso abusivo de su facultad de autónomos, como por ejemplo inobservando plazos, no realizando las diligencias para el esclarecimiento de los hechos, no motivando sus disposiciones, entonces sí estarían afectando las garantías mínimas que deben existir en una correcta investigación, más aun si el debido proceso como lo ha señalado el Tribunal Constitucional es de aplicación a todo tipo de procedimientos y de conformidad con la Corte IDH en su Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de Octubre de 1987, párrafo 27, el debido proceso supone “el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales” (Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH, 1987), no siendo ajeno entonces a las actuaciones del Ministerio Público, dado que si bien la Constitución Política ha asignado a esta institución una serie de funciones constitucionales, entre ellas la facultad de ejercitar la acción penal, sea esta de oficio o a pedido de parte, conforme así lo dispone el artículo 159°, inciso 5) de la Carta Magna, gozando entonces de autonomía en sus funciones, es decir el Ministerio Público tiene dicha facultad discrecional reconocida por el Constituyente; sin embargo, no puede ser ejercida de modo irrazonable, y peor aún con

desconocimiento de los principios y valores constitucionales, como tampoco lo puede realizar al margen del respeto de los derechos fundamentales, como ya lo ha señalado el Tribunal Constitucional peruano en reiterada jurisprudencia.

Ahora bien, se ha llegado a entender que el debido proceso es un derecho fundamental que es inherente a toda persona parte de un proceso o procedimiento regular. En ese sentido, el derecho al debido proceso comprende un haz de derechos que forman parte de su estándar mínimo que se hacen presentes en cada una de las etapas del proceso, los mismos que se traducen en derechos que enunciativamente a continuación vamos a mencionar y que adquieren especial relevancia para el desarrollo de nuestra investigación.

#### **2.1.4.1. Derecho a la motivación.**

Sobre este importante derecho, el artículo 139° inciso 5) de nuestra Constitución Política, establece que: “Son principios y derechos de la función jurisdiccional: la motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto de los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan”. De acuerdo a este dispositivo constitucional, dicho derecho implica entonces que una decisión debe ampararse en los fundamentos de hecho y de derecho, donde se explique cuál es el razonamiento que justifica la misma, más aun si de conformidad con el Tribunal Constitucional en la STC expedida en el Expediente Nro. 0728-2008-HC/TC, éste ha precisado que la motivación de las resoluciones judiciales “resulta fundamental para apreciar la justicia y razonabilidad de la decisión judicial en el Estado democrático, porque obliga al juez a ser exhaustivo en la fundamentación de su decisión y no dejarse persuadir por la simple lógica formal”. Es más, este derecho según la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso *López Mendoza Vs. Venezuela*, Sentencia del 1 de Setiembre de 2011, párr.144, ha establecido que el deber de motivar las resoluciones “es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el derecho suministra, otorgando credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática”, indicando además la

referida Corte que: “las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar los derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues, lo contrario serían decisiones arbitrarias”. Es decir pues que, los argumentos que sustentan una decisión deben explicar cuáles fueron los hechos, motivos y normas que conllevaron a la autoridad a asumir tal posición, descartando así cualquier indicio de arbitrariedad, considerando también debidamente los alegatos de las partes y el análisis de las pruebas que estas hayan presentado.

Por otro lado si nos preguntáramos ¿cuál sería el contenido constitucionalmente protegido de este derecho?, de conformidad con la STC Exp. 03244-2010-PHC/TC, f.j.6 se exige: “a) Fundamentación jurídica, que no solo implica la sola mención de las normas a aplicar al caso, sino la explicación y justificación de por qué tal caso se encuentra o no dentro de los supuestos que contemplan tales normas”, así también se exige que exista: “b) Congruencia entre lo pedido y lo resuelto, que implica la manifestación de los argumentos que expresaran la conformidad entre los pronunciamientos del fallo y las pretensiones formuladas por las partes”; por último: “c) Que por sí misma exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si esta es breve o concisa, o se presenta el supuesto de motivación por remisión”. En tal sentido, el contenido constitucionalmente garantizado de dicho derecho queda delimitado, de conformidad con la STC Exp. Nro. 00728-2008-PHC/TC, f.j.7., por: “a) La inexistencia de motivación o motivación aparente, b) falta de motivación interna del razonamiento, c) deficiencias en la motivación externa, justificación de las premisas, d) la motivación insuficiente, e) la motivación sustancialmente incongruente y f) las motivaciones cualificadas”, por cuanto constituyen actos que contravienen este importante principio que estamos desarrollando.

En lo que corresponde a nuestra investigación, el derecho a la motivación debe ser debidamente aplicado también por el Ministerio Público al emitir sus disposiciones, ya que también constituye una garantía tanto del agraviado como del imputado en una investigación para hacer frente a la arbitrariedad que puedan cometer los fiscales en dichas disposiciones y garantiza que éstas no se hallen justificadas en decisiones

caprichosas y despóticas de los magistrados, sino atendiendo a las circunstancias de hecho y de derecho imprescindibles para adoptar una decisión, máxime que en nuestro sistema procesal penal acusatorio-garantista, la debida motivación de las resoluciones constituye uno de los pilares fundamentales para medir la racionalidad de la actuación punitiva del Estado, a fin de garantizar el debido proceso así como el derecho de defensa. En este sentido, en materia procesal penal, este deber de motivar sus decisiones o resoluciones, pues no solo es deber del juez penal, sino también del Ministerio Público en su condición de órgano encargado de la persecución penal, pues de conformidad con la STC Exp. Nro. 03090-2012-PA/TC, f.j.2, “las facultades constitucionales de los actos del Ministerio Público, no se legitiman desde la perspectiva constitucional en sí mismos, sino a partir del respeto pleno del conjunto de valores, principios constitucionales y de los derechos fundamentales de la persona humana”, señalándose que ello es de conformidad con el artículo 1° de nuestra Constitución, ya que según la referida Sentencia “las resoluciones judiciales no se encuentran justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se deriven del caso”, estableciendo dicha Sentencia que “estos criterios mutatis mutandis también, son aplicables a las decisiones y pronunciamientos emitidos por los representantes del Ministerio Público”. Es decir, que las mismas reglas en cuanto a la motivación de las resoluciones, también le son aplicables a los actos o disposiciones que expida el Ministerio Público en su calidad de ente investigador y persecutor del delito.

#### **2.1.4.2. Derecho a la instancia plural.**

Al respecto, Rubio Correa (1993), precisa que: “la pluralidad de instancia es un principio según el cual, siempre que hay una primera decisión jurisdiccional en un proceso, las partes deben tener el derecho a pedir que otra instancia, distinta y superior a la primera, revise el fallo” (pág. 81).

Como se puede apreciar, este derecho tiene como finalidad, que los justiciables puedan recurrir razonablemente las resoluciones judiciales que han sido emitidas por un órgano jurisdiccional, ante instancias superiores, donde puedan ser revisadas; para lo cual se ha consagrado la pluralidad de instancias en el artículo 139° inciso 6) de la Constitución y,

que si bien es cierto este artículo no precisa la cantidad de instancias a las que se puede recurrir, sin embargo, el contenido constitucional protegido de este derecho exige que, por lo menos, exista una doble instancia; así, por ejemplo, el Tribunal Constitucional es la instancia de fallo final de las resoluciones denegatorias de las garantías constitucionales, según el artículo 202° inciso 2) de la Constitución Política.

Así, de acuerdo a nuestro planteamiento de problema, tal garantía no solo es aplicable en la vía judicial, sino también en otras dimensiones, como es el Ministerio Público, donde por ejemplo el agraviado en una investigación preliminar que no esté conforme con una decisión de archivo, de conformidad con el Título III, Investigación Preparatoria artículo 334°. 5 del Código Procesal Penal del año 2004, “el denunciante que no estuviese conforme con la Disposición de archivar las actuaciones o de reservar provisionalmente la investigación, requerirá al Fiscal, en el plazo de 5 días, eleve las actuaciones al Fiscal superior”. Es decir, las normas aplicables al Ministerio Público, también garantizan este derecho a la parte agraviada que pudiere verse perjudicada en sus derechos con una disposición que ellos consideren arbitraria.

#### **2.1.4.3. El derecho al plazo razonable.**

Al respecto, también resulta importante entender el concepto de razonabilidad, el mismo que en opinión del Dr. Walter Gutiérrez Camacho (1995), en su artículo: *La Razonabilidad de la Leyes y otros Actos de Poder*, precisa que:

(...) descansa en la premisa de que el Derecho es un sistema, una estructura y como tal, todas sus partes deben estar en sintonía en una relación de auto dependencia. (...), Respetar el principio de razonabilidad sugiere que no se transgreda ese sentido, esa lógica, ni en lo formal ni en lo sustancial. Se transgrede en lo formal cuando no se respeta el principio de supremacía constitucional o cuando no se sigue el procedimiento preestablecido para la producción de normas. Se altera en lo sustancial cuando el contenido material de los actos de poder se encuentran divorciados con el repertorio mínimo de valores que consagra la Constitución, deviene entonces, ese acto en injusto. (págs. 41-53)

La razonabilidad, como refiere Figueroa Gutarra (2012), “apela a la prudencia del intérprete constitucional (...)” (pág. 188)., lo que equivale al respeto irrestricto del

sentido lógico formal, esto es el respeto del principio de la supremacía de la Constitución y el sentido lógico material o sustancial como lo es garantizar los derechos fundamentales previstos en la norma constitucional, máxime que el principio de la dignidad de la persona humana debe estar presente en todo juicio constitucional

Entonces, el plazo razonable en el proceso, ha de ser entendido como, el proceso como conjunto máximo de la actividad procesal, debe y solo puede ser realizado en un tiempo fijado como razonable, el cual en opinión de Neyra Flores (2010) un plazo será razonable siempre y cuando “cumpla el lapso de tiempo establecido por la ley. El plazo razonable no se mide en días, semanas, meses o años, sino que se trata de un concepto jurídico indeterminado que debe ser evaluado por los jueces, caso por caso” (pág. 149); es decir, que el tiempo razonable para la duración de un proceso debe ser asumido por el juzgado a su criterio en cada caso en particular, teniendo en cuenta factores como la complejidad del caso, la conducta del inculpado y la diligencia de las autoridades competentes para la conducción del proceso.

Por otro lado, si bien es verdad que no siempre es posible que las autoridades sean estas judiciales o fiscales (en el caso de nuestra investigación) cumplan con los plazos legalmente establecidos, toda vez que según ellos, algunos retrasos resultan justificados y hasta válidos para el mejor resolver de una controversia o en el caso de la fiscalía una correcta investigación; sin embargo ello, a criterio de la investigadora, solo sería una absurda justificación para de algún modo cubrir su ineficiencia con la que desempeñan sus funciones, toda vez que solo se tratarían de actos dilatorios indebidos y hasta arbitrarios por parte de las autoridades, lo que acarrea la vulneración de este derecho no solo para la parte imputada sino más que todo de los agraviados, quienes resultan ser los más perjudicados, pues en su afán de conseguir justicia concurren al Ministerio Público a denunciar la vulneración de sus derechos y a solicitar se investigue un presunto delito, esperanzados en que oportunamente conseguirán justicia; no obstante ello, lo que obtienen son una de programación de diligencias que nunca se realizan o que si se realizan, se hacen tardíamente, con lo cual se podrían perder pruebas y peor aún, las disposiciones se expiden sin respetar el plazo dispuesto para la investigación.

Así, queda claro pues que el derecho al plazo razonable es un derecho implícito en el debido proceso, que determina la razonabilidad de los tiempos que debe utilizar un proceso o procedimiento.

En cuanto al derecho al plazo razonable como derecho fundamental, el Dr. Figueroa Gutarra (2012), ha señalado que el debido proceso, “en su calidad de derecho continente, comprende el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, bajo un esquema de inclusión implícita”, esto es, el goce del derecho al plazo razonable solo puede entenderse y gozarse si se materializa el ejercicio sustantivo del derecho al debido proceso” (pág. 194). En efecto, tal como ya lo habíamos señalado precedentemente, el derecho al debido proceso comprende un haz de derechos y justamente, el derecho al plazo razonable es uno de ellos.

Sobre este mismo derecho, el autor citado ha señalado que “(...) que no podemos fijar una perspectiva de plazo razonable si no entendemos su aplicación desde la conjunción de tres requisitos procedimentales: actividad procesal del interesado; conducta de las autoridades judiciales y la complejidad del asunto” (pág. 195). Se trata entonces de administrar justicia oportunamente dentro de un plazo razonable, así lo razonable será establecido por el juez en base a la ley, considerando el tipo de proceso en curso. En consecuencia, constituye un derecho de gran relevancia durante el desarrollo de todo proceso, la inobservancia de éste conlleva a atentar contra la garantía del debido proceso.

Por otro lado, cabe precisar que este derecho se encuentra reconocido por el artículo 8.1º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), el cual señala que “toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías dentro de un plazo razonable”. Aunado a ello, nuestro Código Procesal Penal – Decreto Legislativo N° 957- establece en el artículo I de su Título Preliminar que “la justicia penal (...) se imparte (...) en un plazo razonable” que justifique en el caso del Ministerio Público, sus decisiones.

Así, estos dispositivos reflejan la indiscutible importancia del respeto y protección de este derecho como garantía del debido proceso, dado que la indefensión no solo se puede producir por la denegación de justicia, sino además por el retraso en resolver las peticiones de los administrados, transformándose así en una injusticia, en un despropósito social y jurídico, si por supuesto el acusado o la víctima no tuvo intervención ni culpa en el retraso, convirtiéndose en un problema gravísimo.

Como se puede advertir, el derecho al plazo razonable es un derecho que integra el debido proceso, y que debe estar presente en cualquier tipo de proceso o procedimiento administrativo y, que en la actividad investigatoria del Ministerio Público también se debe respetar esta garantía.

## **2.2. LA GARANTÍA CONSTITUCIONAL.**

Ahora bien, dado que la garantía constitucional también conforma uno de los ejes temáticos de nuestra investigación, procederemos a desarrollarla, para lo cual resulta pertinente trasladarnos a sus antecedentes más remotos a través de la historia, a efectos de conocer su origen; asimismo recurriremos a la opinión de diversos juristas conocedores del tema, buscando conceptos diversos para ser recogidos en el presente trabajo, y finalmente poder asumir una posición más exacta sobre su estudio.

### **2.2.1. Antecedentes.**

Con la finalidad de encontrar los orígenes de esta importante categoría jurídica, nos trasladamos al estudio de su evolución a través de la historia, lo cual conllevará a tener una noción más clara respecto de sus inicios, para finalmente ser reconocida como tal en el marco constitucional actual.

Habiendo conocido de manera breve, cómo surgieron las garantías constitucionales en el mundo, ahora toca conocer su desarrollo histórico en nuestro país. Según García Belaunde (1989): “Por herencia secular francesa, en el Perú se habló siempre de garantías constitucionales en un sentido distinto al que hoy empleamos. Primero fueron



las garantías individuales, luego las nacionales y ya entrando al siglo XX, las llamadas sociales” (...); sin embargo refiere que en la actualidad hay un consenso en la doctrina en considerar que (...) “lo que antes se denominaba garantías como derechos de las personas, derechos fundamentales, o simplemente derechos humanos” (pág. 13).

Es decir que antes se consideraban garantías, sin embargo hoy en día son conocidas como derechos, esto es, los derechos de las personas previstas en la Constitución Política del Estado.

Teniendo en consideración lo anotado en el párrafo precedente, es hora de saber a mayor detalle, el reconocimiento de las garantías constitucionales a través de los diferentes instrumentos normativos que han formado parte de nuestra historia. Al respecto el Dr. Figueroa Gutarra (2012), refiere que: “La Carta de 1920 hace referencia a garantías nacionales, individuales, sociales y electorales. Para el Constituyente de 1920 todos los derechos equivalían a garantías” (pág. 183). Para el Dr. Hakansson (2001) “La Constitución peruana de 1933 estableció dos tipos de garantías constitucionales, el habeas corpus y la acción popular” (págs. 273-274). Siendo que para el Dr. Figueroa Gutarra (2012): “La Constitución de 1933 refiere garantías constitucionales: nacionales, sociales e individuales, en noción similar a la Carta anterior” (pág. 183). Sin embargo, ambos autores coinciden en señalar que es a partir de nuestra Constitución del año 1979, donde recién se percibe un cambio de enfoque, a decir del mismo autor “pues esta describe como garantías constitucionales lo que hoy ya conocemos como procesos constitucionales, aunque de un modo ciertamente liminar, ya que comprende solamente a los procesos de hábeas corpus, amparo y acción popular” (pág. 183), pues según Hakansson (2001) “La Constitución de 1979 dedicó el título quinto para las garantías constitucionales” (págs. 273-274). En efecto, en ésta se estableció que “la acción u omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza la libertad individual, da lugar a la acción de habeas corpus. La acción de amparo tiene el mismo trámite que la acción de habeas corpus en lo que es aplicable”, para este mismo investigador: “La Carta de 1979 conservó la

acción popular y estableció la acción de inconstitucionalidad como una nueva garantía” (págs. 273-274).

Ya con la actual Constitución Política del año 1993, se abarca una concepción mucho más amplia de las garantías constitucionales, el Título V está dedicado exclusivamente a éstas, pues como señala el Dr. Figueroa Gutarra (2012) se “distingue los procesos constitucionales de hábeas corpus, amparo, hábeas data y cumplimiento, los cuales podemos categorizar como procesos constitucionales de la libertad”; y refiere que se “consigna los procesos de inconstitucionalidad y acción popular, procesos de control normativo, sin incluir el proceso competencial, situación que luego es subsanada por el Código Procesal Constitucional de 2004, norma adjetiva que incluso uniforma la designación de “procesos” en lugar de “acciones””. (pág. 184). Como vemos nuestra Carta Magna mediante las garantías constitucionales previstas en el artículo 200°, como instrumentos procesales que son, brinda especial protección a los derechos fundamentales que fuesen objeto de vulneración o se encuentren amenazados.

### **2.2.2. Concepto.**

Corresponde plantear un concepto de garantías constitucionales, para lo cual empezaremos por indicar que de conformidad con Castillo Córdova (2005) “garantizar implica y supone asegurar algo que lleva implícito el riesgo de incumplimiento de alguna obligación” (pág. 47). En ese sentido, podemos llegar a un concepto más acertado de las garantías constitucionales, para lo cual tomamos la opinión de Kelsen (1969) para quien las garantías son: “los procedimientos o los medios para asegurar el imperio de la Ley Fundamental frente a las normas jurídicas secundarias ” (pág. 637); es decir, que lo que se busca según el mismo autor es “garantizar el que una norma inferior se ajuste a la norma superior que determina su creación o contenido ” (pág. 637) . Por tanto, este procedimiento está dirigido a asegurar el cumplimiento efectivo de la Constitución, toda vez que a través de las garantías constitucionales podemos garantizar el irrestricto respeto de los derechos consagrados en la Constitución Política frente al abuso por parte del Estado así como de los particulares. Pues cuando un derecho es conculcado, el titular de ese derecho o la persona que lo represente, puede acudir al

órgano jurisdiccional, a fin de pedir protección judicial para restablecer dicho derecho violado.

En ese sentido, para nuestra investigación, con las garantías constitucionales como mecanismos de control constitucional que son, podríamos lograr a través de ellas, restablecer un derecho vulnerado por el Estado, en este caso representado por el Ministerio Público, como ente investigador y persecutor del delito.

Ahora bien, si lo que buscamos son conceptos mucho más extensos, recurriremos al Dr. Edwin Figueroa Gutarra (2012), quien en su libro *Derecho Constitucional II*, ha señalado: “Las garantías constituyen mecanismos de defensa de los derechos fundamentales y su objeto es resarcir la afectación de los derechos, siempre que la vulneración sea manifiesta, ostentible y grave”. (págs. 182-183)

En cuanto a la definición esbozada, la garantía constitucional ha sido entendida como un mecanismo en la defensa de los derechos fundamentales y que tiene como finalidad el resarcimiento de la afectación de esos derechos, cuando la vulneración sea evidente. Se trata de un mecanismo jurídico de naturaleza procesal que está orientado al cumplimiento efectivo del orden constitucional cuando éste ha sido desconocido o violado por los órganos del poder estatal, que para el tema en estudio, estaría representado por los fiscales en su condición de autoridades.

Sobre el particular, el Dr. Juan José Solozábal Echevarría (2009), en su libro: *Constitución y Ordenamiento Jurídico*, citando a Galleoti, señala:

La expresión “garantía constitucional” puede entenderse en dos sentidos: De un lado supondría la protección que determinado instituto, valor o relación recibe al encontrarse incluido en la Constitución, situación en la que la Constitución opera como sujeto de la acción de garantizar, lo que implica una cierta visión ideal taumatúrgica de la Constitución, cuyo solo cobijo bastaría para dotar de estabilidad y certeza a lo que en ella se incluye; u otra visión de acuerdo con la cual la garantía se referiría al instrumento jurídico o institución por medio de la cual se busca la protección de la propia Constitución frente a posibles ataques o

violaciones: en esta concepción la Constitución es comprendida no como el sujeto, sino como el objeto de la propia acción garantista y subyace en la misma una visión crítica o menesterosa de ella. La Constitución se encuentra también expuesta al peligro de violaciones y de inobservancias, de ahí la exigencia de “disposiciones de seguridad, garantías jurídicas de las normas constitucionales, específicas y apropiadas a la naturaleza de éstas”. En este segundo sentido, es en el que consideramos el concepto de la garantía constitucional y es, partiendo de él, como prestamos atención a sus dos manifestaciones típicas: el control jurisdiccional de la constitucionalidad de las leyes y la reforma de la constitución. (pág. 161)

De la referida definición, el autor entiende al concepto de garantía constitucional desde el punto de vista de la protección del contenido de la norma, a lo cual nosotros podemos entender esto como el ejercicio de la intangibilidad que es una característica que forma parte del esquema de toda constitución, es decir estando presente en forma expresa o tácita, surte el efecto de límite al poder incluso del mismo Estado para evitar la modificación, eliminación o cualquier alteración del texto normativo que ampare los derechos fundamentales. En ese sentido, son los mecanismos que permiten proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho.

Para efectos de nuestra investigación, las garantías constitucionales son mecanismos de gran importancia, toda vez que a través de ellos se logrará el llevar un Control Constitucional de las decisiones que asuman los Fiscales en el desarrollo de sus investigaciones, ya que estos en el ejercicio de sus funciones podrían tomar decisiones arbitrarias e ilegales que vulneran o amenazan con limitar derechos fundamentales de las partes, toda vez que las garantías constitucionales constituyen los medios o instrumentos que nuestra Constitución pone a disposición de las personas para garantizar sus derechos frente a las autoridades (en este caso serían los fiscales), individuos o grupos sociales.

### **2.2.3. Clasificación.**

Habiendo recogido las diferentes posiciones asumidas por los juristas respecto a lo que son las garantías constitucionales, ahora corresponde realizar una clasificación de las

mismas. En ese sentido, las garantías que reconoce la Constitución son seis, sin embargo el Código Procesal Constitucional agrega uno más, que en total suman siete procesos constitucionales, las mismas que según el Dr. Velásquez se pueden organizar de la siguiente manera:

El primer grupo de procesos defiende los derechos constitucionales y tienen como finalidad esencial reponer el derecho violatorio al estado anterior de las cosas, o de eliminar la amenaza de violación de un derecho de esta naturaleza.

Estas garantías son tres:

- 1) El habeas corpus,
- 2) El amparo, y
- 3) El habeas data.

El segundo grupo de procesos persigue como finalidad defender la jerarquía normativa del orden jurídico y resolver los conflictos de competencia entre órganos públicos. Estas garantías son cuatro:

- 1) El proceso de inconstitucionalidad,
- 2) El proceso de acción popular,
- 3) El proceso de cumplimiento, y
- 4) El proceso competencial. (Velásquez Ramírez, 2013, págs. 88-89)

No obstante, la clasificación realizada precedentemente, para el desarrollo de nuestra investigación, solo trataremos de manera breve dos de ellas, toda vez que a través de las mismas se podría lograr restituir derechos tanto del investigado como del agraviado evidentemente conculcados por parte del Ministerio Público al realizar una actividad investigatoria, garantías que a continuación desarrollamos:

#### **2.2.4. Acción de amparo.**

##### **2.2.4.1. Antecedentes.**

Antes que todo, debemos saber cómo surgió esta garantía constitucional y como es que hoy en día está presente en nuestro marco constitucional.

Este proceso de garantía constitucional, según el Dr. Abad Yupanqui (2004), es: “una institución procesal de origen Mexicano, se introduce en el ordenamiento jurídico

peruano en la Constitución de 1979 (art. 295) y se mantiene en la Carta vigente de 1993 (art. 200° inciso 2)”. (pág. 673) . En síntesis refiere Abad Yupanqui (1996) en un extracto publicado por el Poder Judicial que, el amparo “nace en México en la Constitución del Estado de Yucatán-vigente desde el 16 de Mayo de 1841, a través de la intervención de Manuel Crescencio Rejón” (pág. 10) ; a nivel federal se introduce, según el mismo autor en “el acta de reformas del año 1847, que se nutrió de las ideas de Mario Otero, y se mantiene en la Constitución de 1857 y en la vigente de 1917, que cuenta con varias reformas” (pág. 10) Siendo que la primera ley de amparo data de 1861 y desarrolló los artículos 101° y 102° de la Constitución de 1857.

Es decir que, esta garantía constitucional surge en el año 1857 en la ciudad de México, cuando los mexicanos advierten que no solamente se debe proteger la libertad individual, sino también otros derechos fundamentales.

Situados en nuestro país, el amparo aparece por primera vez en nuestra Constitución Política del año 1979, siendo reglamentada por ley especial en el año 1982 al dictarse la Ley Nro. 23506 “Ley del Hábeas Corpus y amparo”.

#### **2.2.4.2. Definición.**

Conocido el origen histórico de dicha garantía constitucional, procedemos a recoger definiciones adoptadas por los diferentes autores.

La acción de amparo, según el Dr. Carrasco (2006) es: “el mecanismo constitucional que tiene por finalidad asegurar a los habitantes el goce de sus derechos constitucionales, protegiéndolos de toda restricción o amenaza ilegal o arbitraria por órganos estatales o de otros particulares” (pág. 156), sin embargo precisa que es “con excepción de las libertades amparadas por el Hábeas Corpus y el Hábeas Data”. (pág. 156). Así pues, este proceso, conforme lo señala Abad Yupanqui (2004), ha sido concebido como “una garantía constitucional destinada a proteger los derechos constitucionales distintos a la libertad individual, vulnerados o amenazados por cualquier autoridad, funcionario o persona”. (pág. 673). En consecuencia, de acuerdo al mencionado jurista, la acción de amparo al contrario del hábeas corpus, es una acción

judicial sumaria que procede contra el hecho u omisión de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza derechos diferentes a la libertad individual y a los derechos protegidos por el hábeas data. En tal sentido, lo que se pretende con la acción de amparo es la inaplicación de la norma o acto que se considere inconstitucional.

Para nuestra investigación, su estudio resulta de suma importancia, por cuanto a través de ella, se puede ejercer el control constitucional de los actos del Ministerio Público, cuando estos han sido expedidos arbitrariamente, sin el respeto de las garantías mínimas que debe existir en todo procedimiento de los que una persona forma parte.

#### **2.2.4.3. Derechos respecto a los cuales procede.**

En el primer párrafo del artículo 200° numeral 2) de la Constitución Política del Estado se ha reconocido como garantía constitucional a la acción de amparo, en defensa de los demás derechos reconocidos por la Constitución, con excepción de los señalados en el inciso siguiente. Es decir, nuestra norma constitucional ha sido precisa en disponer que el amparo protege los derechos que ésta reconoce, esto es los derechos constitucionales, distintos a la libertad individual y a los tutelados por el hábeas data. Como vemos esta disposición constitucional está defendiendo el ámbito de defensa del proceso de amparo.

Entonces, el amparo procede para la defensa de todos los derechos fundamentales con excepción del derecho a la libertad personal y de los derechos a ella conexos. Así, los derechos protegidos según el artículo 37° del Código Procesal Constitucional son:

- 1) De igualdad y de no ser discriminado por razón de origen, sexo, raza, orientación sexual, religión, opinión, condición económica, social, idioma, o de cualquier otra índole;
- 2) Del ejercicio público de cualquier confesión religiosa;
- 3) De información, opinión y expresión;
- 4) A la libre contratación;
- 5) A la creación artística, intelectual y científica;

- 6) De la inviolabilidad y secreto de los documentos privados y de las comunicaciones;
- 7) De reunión;
- 8) Del honor, intimidad, voz, imagen y rectificación de informaciones inexactas o agraviantes;
- 9) De asociación;
- 10) Al trabajo;
- 11) De sindicación, negociación colectiva y huelga;
- 12) De propiedad y herencia;
- 13) De petición ante la autoridad competente;
- 14) De participación individual o colectiva en la vida política del país;
- 15) A la nacionalidad;
- 16) De tutela procesal efectiva;
- 17) A la educación, así como el derecho de los padres de escoger el centro de educación y participar en el proceso educativo de sus hijos;
- 18) De impartir educación dentro de los principios constitucionales;
- 19) A la seguridad social;
- 20) De la remuneración y pensión;
- 21) De la libertad de cátedra;
- 22) De acceso a los medios de comunicación social en los términos del artículo 35 de la Constitución;
- 23) De gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida;
- 24) A la salud; y
- 25) Los demás que la Constitución reconoce.

#### **2.2.4.4. Naturaleza jurídica.**

Es la de un proceso constitucional excepcional, pues opera en defecto o ausencia de las vías ordinarias regulares. Su naturaleza residual ha sido reafirmada en el Código Procesal Constitucional.

#### **2.2.4.5. Procedencia.**

La acción de amparo según nuestro ordenamiento procesal constitucional procede:



- 1) Cuando se vulneren derechos constitucionales por acción u omisión.
- 2) Cuando se amenacen derechos constitucionales por acción u omisión.

Para efectos de nuestra investigación, el artículo 200° inciso 2) de la Constitución Política del Estado señala que: Son garantías constitucionales “La Acción de Amparo, que procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza los demás derechos reconocidos por la Constitución, con excepción de los señalados en el inciso siguiente. No procede contra normas legales ni contra resoluciones judiciales emanadas de procedimiento regular”. Como vemos, de manera expresa no se hace alusión a si las disposiciones expedidas por los fiscales pueden ser objeto de un proceso de amparo, sin embargo en la disposición constitucional prevé el supuesto de que el amparo procede “contra el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad (...), que vulnera o amenaza los demás derechos reconocidos por la constitución”, por lo que siendo los fiscales una autoridad al igual que los jueces, sí resulta posible interponer una acción de amparo contra una disposición fiscal emanadas de un procedimiento irregular, esto es cuando se afecte el derecho al debido proceso o los derechos que lo integran, sin respeto a las garantías mínimas que debe existir en todo procedimiento, incluido la labor del fiscal en la investigación y persecución del delito, máxime que el Ministerio Público, aun siendo un ente autónomo también se encuentra sometido a la Constitución.

#### **2.2.4.6. Características.**

Según el Jurista Ortecho (2004), las características del proceso de amparo son las siguientes:

- Es una acción de garantía constitucional.
- Tiene una naturaleza jurídica procesal.
- Tiene un procedimiento sumario.
- Defiende los derechos constitucionales a excepción de la libertad personal y la libertad de información. (pág. 133).

En cuanto a la 1era característica hace referencia a que es una acción de garantía constitucional porque se trata de un mecanismo procesal que implica una demanda y el desenvolvimiento de estadios con una determinada secuencia.

En relación a la 2da característica, esto es que es de naturaleza jurídica procesal, ya que al igual que la acción de hábeas corpus, no constituye un derecho, sino un mecanismo procesal que se tramita para proteger los derechos constitucionales; por lo tanto, su naturaleza es de procedimiento y por ende, de medio idóneo para la defensa de los indicados derechos.

En penúltimo lugar, se encuentra la característica de procedimiento sumario, es decir que se trata de un procedimiento breve que busca restablecer el derecho vulnerado o amenazado, en forma rápida, por lo que sus términos son cortos, no se admiten articulaciones y los jueces están obligados a darles trato preferente.

Finalmente, en cuanto a la última característica, esto es que defiende los derechos constitucionales a excepción de la libertad personal y la libertad de información, como es obvio a partir de la Constitución de 1979, tienen campos de aplicación diferentes, siendo que al hábeas corpus le corresponde la protección y defensa de la libertad y seguridad personales, dejándole a la acción de amparo la defensa y protección de los demás derechos constitucionales. Y en cuanto al hábeas data, la cual se da a partir de la Constitución de 1993, la misma que se preocupa por la protección de los derechos informáticos.

### **2.2.5. El Hábeas corpus.**

#### **2.2.5.1. Antecedentes.**

Sobre esta garantía constitucional, también resulta de vital importancia conocer su origen para poder ubicarnos en su desarrollo histórico a través de diversos documentos.

El hábeas corpus tiene origen anglosajón, y en nuestro país según Valle, Carruitero y Ángeles (2007): “el hábeas corpus fue incorporado (...) por Ley del 21 de Octubre de 1897, después de observaciones del Poder Ejecutivo. El 26 de Octubre de 1916 se promulgó la Ley 2253 perfeccionando la primera”. Refieren que, antes “se había dictado la Ley 2223 o de liquidación de privaciones preventivas para defender los derechos individuales ungidos en la Constitución de 1860”, pero señalan además que

apenas en la “Carta de 1920 se constitucionalizó en el artículo 24° el hábeas corpus limitándolo al ámbito de la libertad personal. Ha sido la constitución de 1979 la que distingue esta acción de garantía del amparo para proteger el *ius movendi et ambulandi*”. Incluso, continúan diciendo los mismos autores que: “el instrumento de 1993, no obstante su bastardía, tiene un concepto enriquecedor: procede en procesos regulares e irregulares en inclusive en el estado de excepción; en que los jueces de pronuncian sobre la razonabilidad de una detención” (págs. 26-27). Como vemos este importante mecanismo de protección de los derechos fundamentales se incorporó en nuestro ordenamiento jurídico nacional el 21 de Octubre de 1987, cuyo fin era la defensa de la libertad física, siendo que recién su constitucionalización se logró con la Carta de 1920, para posteriormente estar presente en la Constitución de 1993 en el artículo 200° inciso 1), pero es a partir del 1 de Diciembre del año 2004 que se encuentra desarrollado por el Código Procesal Constitucional, Ley Nro. 28237.

Y es que es tipo de garantía constitucional, según García Belaunde (1989) “es el que con más persistencia ha sido ejercitado ante los tribunales, y probablemente el más importante por sus alcances, aun cuando por sus resultados quizá el argumento se revierta” (pág. 15), toda vez que se trata de un mecanismo procesal de tutela urgente, orientado a proteger la libertad individual, pues es un derecho que tiene toda persona de recurrir ante un tribunal competente a efectos de reclamar la protección de su libertad individual, esto es la libertad física, de locomoción o ambulatoria, por cuanto puede verse afectada producto de la aplicación inconstitucional de una ley que establezca restricciones contra esta.

#### **2.2.5.2. Concepto.**

Nuestra Constitución Política de 1993 en su artículo 200° numeral 1) ha consagrado el proceso del hábeas corpus como una garantía constitucional que procede contra el hecho u omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnere o amenace la libertad individual o los derechos constitucionales conexos.

Al respecto, según Oré Guardia (2016) refiere: “El hábeas corpus puede ser entendido como derecho fundamental y como proceso”, siendo que en su primera acepción hace referencia “al derecho que tienen las personas de recurrir a un juez o tribunal competente para que sin demora se pronuncie sobre la legalidad de su detención y ordene su libertad si esta fuera considerada efectivamente ilegal”. Y en su segunda acepción refiere que “el hábeas corpus desde su concepción inicial ha sido considerado un instrumento de protección de uno de los atributos más valiosos de la persona como es la libertad frente a cualquier acto de privación arbitraria de la misma”. (Ore Guardia, 2016, pág. 9). En consecuencia, el hábeas corpus es una acción de garantía constitucional destinada a la protección de la libertad individual de las personas, limitando los excesos provenientes de actos u omisiones de una autoridad, funcionario o particular, a efectos de que cese esa vulneración y se restituya la libertad que ha sido vulnerada o amenazada.

Como vemos, a través de este tipo de garantía constitucional, podríamos frenar el abuso de los que una persona es objeto por parte de una acción u omisión que pudiere efectuar el Ministerio Público en su afán de investigar.

#### **2.2.5.3. Ámbito de protección.**

Sobre el ámbito de protección de este importante mecanismo de control constitucional, respecto a lo cual el jurista Oré Guardia (2016), en su libro titulado: *El Hábeas Corpus. Un enfoque casuístico*, señala que “la concepción amplia del hábeas corpus acogida por nuestra jurisdicción constitucional ha configurado un proceso que no solo tutela al derecho a la libertad individual entendida como libertad física, sino también extiende esta protección a los derechos constitucionales conexos” (pág. 11); es decir, el reconocimiento dentro de nuestro sistema normativo de un conjunto de derechos que, no afectando de modo directo a la libertad individual, sí lo hacen de modo colateral, es decir la afectación de este otro derecho constituye un grado de injerencia tal en la esfera de la libertad, que resulta siendo objeto de protección a través de este proceso constitucional; incluso señala que este proceso ha llegado a “ anclar en el derecho a la vida, la integridad física, la verdad en materia de desapariciones forzadas o la protección contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, e

incluso la salud de las personas” (pág. 11) y que como señala Landa Arroyo (2003) en su artículo jurídico titulado: *Los procesos constitucionales en la Constitución de 1993*, donde indica que: “esta ampliación de la tutela de los derechos de la libertad, a través del proceso constitucional del hábeas corpus, supone la existencia de un núcleo duro de derechos fundamentales en torno a la libertad individual” (pág. 19). En tal sentido, este derecho tiene como ámbito de protección la libertad individual de la persona y demás derechos constitucionales conexos a este derecho.

#### **2.2.5.4. Finalidad.**

En cuanto a la finalidad que persigue esta acción de garantía constitucional, Oré Guardia (2016) señala que “si bien inicialmente el hábeas corpus era concebido como el mecanismo de tutela idóneo para resguardar la libertad individual” (pág. 11); pero que “hoy cabe afirmar que dicho proceso constitucional puede ser promovido con la finalidad de tutelar otros derechos fundamentales, tales como el derecho a la libertad de tránsito, a la integridad personal y otros derechos conexos”. (pág. 12) . Es decir que el hábeas corpus busca restablecer la libertad personal vulnerada o amenazada.

Por su parte, el Tribunal Constitucional ha señalado que el proceso de hábeas corpus (Exp. 6253- 2006-PHC/TC (FJ.11: Caso José Luis Cáceres Velásquez) “se promueve con el objeto de solicitar del órgano jurisdiccional la salvaguarda de la libertad corpórea, seguridad personal, integridad física, psíquica y moral, así como de los demás derechos conexos”. Pero que “también protege a la persona contra cualquier autoridad que, ejerciendo funciones jurisdiccionales, emite resoluciones violando la tutela procesal efectiva y, consecuentemente la libertad individual” restableciendo su libertad y con ello regresar a la situación anterior en que la persona gozaba de su libertad.

#### **2.2.5.5. Características.**

Sobre el particular el Tribunal constitucional en la STC expedida en el Exp. 6253-2006-PHC/TC en su fundamento FJ.11, ha precisado que “el proceso de hábeas corpus responde a dos características esenciales: brevedad y eficacia. En ese sentido lo que se pretende con este remedio procesal es que se restituya el derecho y cese la amenaza o

violación a la libertad individual”, es decir que su tramitación es sumamente breve, toda vez que lo se busca es restablecer la libertad individual, frente a una detención arbitraria, continua señalando que: “por ello, el proceso de hábeas corpus no puede ser considerado ni mucho menos utilizado como un recurso más para modificar la decisión emitida por un órgano jurisdiccional que puso fin al proceso y que fue expedida a la luz del debido proceso” (Caso José Luis Cáceres Velásquez, 2006), pues de lo que se trata es de un mecanismo para conseguir la protección de la libertad personal.

## **CAPÍTULO III: EL CONTROL CONSTITUCIONAL COMO FACULTAD DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL**

### **3.1. EL CONTROL CONSTITUCIONAL.**

Prosiguiendo con el desarrollo temático de la investigación, corresponde referirnos a esta importante categoría jurídica, toda vez que a través de ella, podremos determinar si factible ejercer un control sobre las disposiciones que emiten los fiscales en el desempeño de sus actividades indagatorias en la etapa preliminar respecto del debido proceso; sin embargo previamente a tratar el tema en sí, es pertinente referirnos a los principios que rigen el ordenamiento constitucional para posteriormente conocer el origen de esta institución, su concepto, cuáles son los tipos de control que existen y conocer quiénes son los encargados de ejercer el control constitucional, principalmente nos centraremos en el control que ejerce nuestro Tribunal Constitucional para que en base a su autonomía procesal genere los parámetros necesarios que guíen el ejercicio del control difuso sobre las acciones del Ministerio Público en la etapa preliminar.

#### **3.1.1. El principio de la supremacía constitucional.**

Como ya lo indicáramos precedentemente, resulta harto importante conocer los principios que rigen nuestro ordenamiento jurídico constitucional, y uno de ellos y quizás el más importante es el principio de la supremacía constitucional.

El Dr. José Rivera Santibáñez (2003), en el Libro: *Derecho Procesal Constitucional; sección Supremacía Constitucional y Sistema de Control de Constitucionalidad*, ha señalado que:

El principio de la supremacía constitucional significa que el orden jurídico y político del Estado está estructurado sobre la base del imperio de la Constitución que obliga por igual a todos, gobernantes y gobernados. Dentro del orden jurídico la constitución ocupa el primer lugar, constituyéndose en la fuente y fundamento de toda otra norma jurídica, por lo que toda ley, decreto o resolución debe subordinarse a ella y no puede contrariarla. (págs. 49-51).

En ese orden de ideas, la Constitución, al determinar el modo y la forma en que debe ser organizado el Estado y ejercido el poder político, se constituye en la Ley Fundamental del ordenamiento jurídico. Como ha definido el Tribunal Constitucional de España en su Sentencia Nro. STC-9/1981 “La constitución es una norma; pero una norma cualitativamente distinta de las demás, por cuanto incorpora el sistema de valores esenciales que ha de constituir el orden de convivencia política y de informar todo el ordenamiento jurídico” (Caso Coto Minero Merladet, S. A contra la Sala de lo Contencioso- Administrativo de la Audiencia Territorial de Valladolid, 1981).

En tal sentido, podemos entender que la Constitución es la norma fundamental de todo el orden jurídico, por lo que las disposiciones legales ordinarias, al derivarse de ella, no pueden contradecirla ni desconocer los valores, principios, derechos y garantías que ella consagra. De manera que, cualquier norma de menor jerarquía que sea contraria a la Constitución es nula y debe ser retirada del ordenamiento jurídico.

El principio de supremacía de la Constitución constituye una garantía de equilibrio en el ejercicio del poder político y de los derechos fundamentales de la persona, por cuanto obliga a todos-gobernantes y gobernados- a encuadrar sus actos, decisiones o resoluciones a las disposiciones de la Constitución.

La supremacía de la Constitución, que nace de su carácter fundamental, conlleva una serie de límites de muy diversa naturaleza para los poderes públicos, así ha establecido el Tribunal Constitucional de España en su sentencia Nro. STC-76/1983, cuando señala que “la voluntad y racionalidad del poder constituyente objetivadas en la Constitución no solo fundan en su origen, sino que fundamentan permanentemente el orden jurídico y estatal y suponen un límite a la potestad del legislador”, lo que significa que la potestad legislativa no puede considerarse como absoluta, sino que tiene sus límites derivados de la Constitución.

Así, para los efectos de nuestra investigación, dado que uno de los principales fundamentos que sustenta el control constitucional, es el principio de la supremacía de



la Norma Constitucional, el Ministerio Público al ser un organismo del estado, se encuentra sometido a la Constitución y al principio de legalidad, siendo que el control constitucional es el mecanismo que permite la concretización de este principio que permita asegurar la Constitución como norma suprema, máxime que nuestro sistema constitucional ha recogido el principio de supremacía constitucional en el artículo 51°, que a su vez contiene el principio de jerarquía normativa. De modo tal que, la Norma fundamental prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente.

Teniendo en consideración que la Constitución es la primera ley del ordenamiento jurídico, es necesario se articulen mecanismos de control para su defensa, entre ellos, el control de constitucionalidad que llevan a cabo los órganos jurisdiccionales. Así pues, hablaremos de control concentrado, si un solo órgano lleva a cabo la tarea de considerar si la norma de menor rango contraviene o no los postulados de la Constitución, y de control difuso, si la tarea ha sido otorgada a varios órganos; siendo que ambos tipos de control, entonces, tienen como fundamento la supremacía de la Constitución, principio del cual deriva su fuerza normativa.

### **3.1.2. El principio de jerarquía normativa.**

Ahora, otro principio igual de importante que el anterior es el principio de jerarquía normativa, el cual, como reitero, antes de pasar a conocer lo que significa el control constitucional debe ser objeto de estudio.

El principio de la supremacía de la Constitución supone de acuerdo a Rivera Santibáñez (2003): “La concurrencia del principio de la jerarquía normativa”, pues señala citando a Bidart Campos, en su obra Derecho Constitucional, 1968, pág. 77, “la supremacía constitucional, supone gradación jerárquica del orden jurídico derivado, que se escalona en planos descendentes. Los más altos subordinan a los inferiores, y todo el conjunto se debe subordinar a la Constitución”, lo que significa el sometimiento de todas las demás normas inferiores a la Constitución, toda vez que según Rivera “consiste en que la estructura jurídica del Estado se basa en criterios de niveles jerárquicos que se establece

en función de sus órganos emisores, su importancia y el sentido funcional. (Rivera Santiváñez, 2003, pág. 22)”, de modo que este principio garantizado por la Constitución, supone la estructuración de las normas de un ordenamiento jurídico, así pues las normas inferiores se encuentran subordinadas a una norma de mayor rango.

En ese sentido, la labor de los fiscales como tal, se encuentra sometida a este principio, en razón de que las normas de rango superior que vayan a aplicar al expedir una disposición debe prevalecer frente a una de rango inferior, esto al existir un conflicto entre dos normas.

### **3.1.3. El principio de unidad de la Constitución.**

De acuerdo a este principio, según Carruitero & Gutiérrez (2006) “la interpretación de la Constitución debe estar orientada a considerarla como un “todo” armónico y sistemático, a partir de la cual se organiza el sistema jurídico en su conjunto”. (pág. 14) y es que según Valle, Carruitero & Ángeles (2007) ha señalado que:

La Carta Fundamental es cuerpo normativo unitario del Estado, que no puede analizarse en cada una de sus cláusulas en forma aislada y que debe entenderse en función de un todo orgánico que no admite separaciones artificiales, pues existe una evidente conexión entre ellas” y que este principio plantea que la constitución como un todo organico no admite contradicciones, lo que revela la pretensión de perfección del documento constitucional que debe ser asumido por el intérprete como aspecto fundamental de su ejercicio. (pág. 109).

Se advierte de lo citado que más allá de un asunto de unidad constitucional, el análisis debe enfocarse hacia la conexidad de los contenidos de las normas que debieran interpretarse, punto básico para el correcto ejercicio de control constitucional ejercido en nuestro caso por el Tribunal Constitucional en sentido amplio o concentrado y aquel de carácter difuso como el que le corresponde a los jueces del Poder Judicial.

### **3.1.4. Antecedentes históricos del control constitucional.**

Ahora bien, en torno a su historia, encontramos a Gutiérrez (2009), quien refiere que el modelo de control de la Constitución “tiene su mayor soporte en el desarrollo de la judicial review americano, es decir, en el sistema jurisdiccional por medio del cual la

sucesión de los precedentes emitidos por los jueces de dicho país constituyen el derecho” (pág. 20), señala también que “ basta recordar el famoso fallo Marbury versus Madison dictado chief justice Jhon Marshall que, luego de dos siglos, se mantiene incólume y que resulta ser el punto de concreción del modelo de supremacía normativa de la Constitución”. (pág. 20)

Tenemos un recuento desarrollado por el investigador Oscar Eizaguirre (2012), quien en su página Web: blog Causas y Azares, ubica su artículo jurídico titulado: *Historia del Control Constitucional en el Perú (1920 - 1993)*, señala:

El primer antecedente del control de constitucionalidad en América son las Cortes de Cádiz de 1812, pero en ella no existía ningún mecanismo específico de control frente al Legislativo ni se creaba institución expresa para este fin, solamente se mencionaba un procedimiento contra infracciones a la Constitución, ya que preponderaba la idea de la Constitución como norma suprema. En el Perú no se menciona nada en las primeras constituciones, pero sí hubo por parte de congreso intentos de tener el control de la Constitución, sin ningún procedimiento específico de control, recién en la Carta de 1856, en el artículo 10° señalaba que toda ley era nula si era contraria a la Constitución y esta norma fue también incluida por una comisión ad hoc de la Convención Nacional de 1855-1856, pero sin debate, era sólo un principio inconcluso que no significaba la institución de ningún control constitucional, pero esa Carta fue derogada y dejada sin efecto por la Constitución de 1920 (Eizaguirre, 2012)

La Escuela de Graduandos Águila y Calderón EGACAL (2001) en el ABC del Derecho Constitucional y Procesal Constitucional refiere que

Los estudios iniciales sobre la materia corresponden a la primera mitad del presente siglo. Así tenemos, la obra del ilustre constitucionalista alemán Carl Schmitt, titulada “La defensa de la Constitución” y la obra del eminente jurista austriaco, tan familiar para los hombres del derecho, Hans Kelsen “La Justicia Constitucional” publicada por primera vez en Paris, el año de 1928 (pág. 37).

El control constitucional de las leyes es una invención americana, que surgió a partir de una sentencia (Marbury Vs. Madison) del juez americano John Marshall en 1803. En aquella ocasión dicho juez, invocando la lógica jurídica, sostuvo el siguiente razonamiento: “¿No sería ilógico afirmar la supremacía de la Constitución y al mismo tiempo no poder sancionar dicha supremacía? Para el juez Marshall era claro que de dos una: o la ley

contraria a la Constitución no es válida y debe necesariamente anularse, o bien la ley contraria a la Constitución permanece válida, pero para entonces la Constitución perdería ya su carácter de norma fundamental, lo que sería un absurdo. (pág. 42).

Como vemos, el control constitucional nace, como lo reconoce hoy de modo unánime la pacífica doctrina, en la Corte Suprema Federal de los Estados Unidos en 1803 como consecuencia de la expedición de la ahora ya célebre sentencia del caso Marbury vs. Madison en un Writ of Mandamus ( una suerte de “ Acción de Cumplimiento”) bajo la presidencia del Chief of Justice John C. Marshall, en el cual sentó el precedente vinculante (stare decisis) de que una ley contraria a la Constitución debía ser considerada proveniente de “ legislatura repugnante” y por lo tanto, como teoría fundamental, nula e ineficaz ya que esto se deduce de la naturaleza de la Constitución escrita y, por ello mismo, la Suprema Corte Federal la habrá de considerar como uno de los principios de la sociedad democrática de Derecho.

### **3.1.5. Concepto.**

El control Constitucional ha sido entendido por los investigadores Luis Arana Vásquez y Jesús Julio Flores Castillo (2016), en su Tesis para optar por el Título de Abogado, denominada: *Límites al ejercicio del Control Constitucional y su impacto en el desarrollo de la Jurisdicción Constitucional en el Perú*, como:

(...) Es menester la implementación de un mecanismo que en la práctica tenga como finalidad proteger a la Constitución, y así mantener vigente los derechos fundamentales que se encuentran en ella, así como fiscalizar o verificar si es que la Constitución ha sido ultrajada y sobre todo adoptar una decisión que puede ser afirmativa o negativa. Esto último implica que a través de este mecanismo se pueda llegar a inaplicar una norma que resulte ser inconstitucional, o no siendo esta norma inconstitucional, por medio de la interpretación armonizarla y compatibilizándola con la Constitución. Este mecanismo al que hacemos referencia y que protector a la Constitución es denominado Control Constitucional (pág. 17).

De la definición anterior, el control constitucional ha sido entendido como como un mecanismo estatal que protege a la Constitución y mantiene vigente los derechos fundamentales que están contenidos en ésta.

Por otro, lado también recogemos la definición por el Dr. César Edmundo Manrique Zegarra (2004), en su artículo denominado: *El Control Constitucional, La Historia y la Política Judicial*, donde señala:

El concepto de Control Constitucional es bastante extenso. En una comprensión amplia y general comprende el conjunto de mecanismos sociales, políticos, institucionales, comunitarios, individuales y colectivos que se ponen en movimiento para asegurar el respeto de los derechos fundamentales de las personas y la vigencia del orden jurídico político en sus diversos niveles y expresiones. Podemos llamarle control constitucional social. En una comprensión menos lata, el concepto de Control Constitucional estaría referido a la actividad de las instituciones del Sistema Jurídico Político realizada con el mismo objeto. Será entonces control constitucional político o institucional. Una más estrecha comprensión indicará que el Control Constitucional es ejercido por las Instituciones Judiciales. Lo llamamos control constitucional judicial, y en otra, más restringida aún que la anterior, el Control Constitucional es ejercido por los Órganos Jurisdiccionales dentro de los cánones de un proceso judicial. Se trata en ese supuesto del control constitucional jurisdiccional. El control jurisdiccional es una de las clases de control judicial; el control judicial es una clase de control político o institucional; y este último es una clase de control social (pág. 9).

De la definición antes citada, podemos advertir que el autor enfoca el control de constitucionalidad desde cuatro aspectos; la primera como amplia y general, a la cual llama control constitucional social; la segunda más lata, a la que llama control constitucional político o institucional; la tercera que es la comprensión más estrecha y que es ejercida por las instituciones judiciales, al cual llama control constitucional judicial, y por último, la más restringida que es ejercido por los órganos jurisdiccionales dentro de los cánones de un proceso judicial, al cual llama control constitucional jurisdiccional.

Para el Dr. José A. Rivera Santibáñez (2003), en el apartado Supremacía Constitucional y Sistemas de Control del libro: *Derecho Procesal Constitucional*, señala al respecto.

El control de constitucionalidad es la acción política o jurisdiccional que tiene la finalidad de garantizar la primacía de la Constitución, la que debe ser acatada y cumplida por todos los órganos del Poder Público, los gobernantes y gobernados, así como aplicada con preferencia a las leyes, decretos o resoluciones (pág. 23).

De acuerdo a la posición de este autor, el control de constitucional tiene una naturaleza política, por cuanto importa una revisión de los actos o decisiones asumidas por las autoridades políticas.

Por otro lado, el Dr. Manuel Alarcón citado por la Escuela de Graduandos Águila y Calderón EGACAL (2001) en *El ABC del Derecho Constitucional y Procesal Constitucional*, define al Control Constitucional como:

El vínculo a través del cual se hacen efectivas las limitaciones del poder. El control del poder se manifiesta en el Estado Constitucional a través de diversas formas con distintas características, pero existe siempre una íntima relación con la Constitución.

Son los procedimientos tanto políticos como jurisdiccionales destinados a defender la constitucionalidad (plena vigencia de la constitución y el respecto a las normas constitucionales), como la forma más adecuada de defender un Estado Constitucional de Derecho. (pág. 37).

Por su parte, el Dr. Raúl Chanamé Orbe (2003), en su libro: *Derecho Constitucional General*, sobre el Control Constitucional, señala:

Denominación que se emplea para los mecanismos de control de la legalidad y la constitucional, así como para defender y garantizar el orden constitucional. El Estado de Derecho se dotó de un sistema para controlar la constitucionalidad de las normas de inferior jerarquía a la Constitución. Aquí se expresa, además, el principio de Supremacía Constitucional, por lo cual todas las normas inferiores se ponen en correspondencia con el mandato constitucional y ninguna puede cuestionarla ni en la forma ni en el fondo. (pág. 125)

En ese sentido, para el caso de nuestra investigación, dado que en nuestro país, resalta el sistema procesal penal acusatorio garantista, donde el Ministerio Público ejerce el rol de ente acusador, sin embargo debe operar de forma imparcial, en pos siempre de los intereses de la sociedad y teniendo como base el principio de legalidad, por lo que cabe la posibilidad del control de sus actividades por parte de los jueces y más aún del propio Tribunal Constitucional. Es decir pues que el papel que desempeña el Ministerio Público en un proceso penal y más aún durante la investigación preliminar, no puede concebirse desligado del modelo constitucional de Estado, pese a gozar de la facultad discrecional que por mandato de la Constitución le corresponde para tomar decisiones,

no solo en bien de los imputados sino también de los agraviados, por lo que entonces es conveniente una labor y control exterior a la actividad y disposiciones del Ministerio Público, con lo cual se pondría límites ineludibles a la actividad de persecución penal, para el caso del imputado, para quien se exige el respeto de sus derechos, los mismos que solo será restringidos por causas legales y razonables. Razón por la cual el Ministerio Público no tiene entonces en el proceso facultades para efectuar diligencias o ejecutar medidas que afecten los derechos de las personas sin autorización judicial. En consecuencia, el juez de garantías estará en medio de la labor del Ministerio Público y la defensa, debatiéndose entre las necesidades de la persecución penal y el respeto a los derechos de los imputados.

#### **3.1.6. Presupuestos jurídicos del control de constitucionalidad.**

Para el Dr. Rivera (2003) citando al Dr. Néstor Pedro Sagués (1989: T1-29) para la existencia del control de constitucionalidad y para que el mismo sea efectivo en el cumplimiento de sus finalidades, deben concurrir los siguientes presupuestos jurídicos: “Constitución rígida total o parcialmente; órgano de control independiente; órganos con facultades decisorias; derecho de los particulares a solicitar el control y; sometimiento al control de toda actividad estatal” (pág. 53)

En cuanto al primer presupuesto, esto es, Constitución rígida total o parcialmente, quiere decir la Constitución esté ubicada en la cima de la jerarquía normativa y pueda ser reformada a través de un procedimiento y una votación especial, diferentes a los que se emplean para reformar una ley ordinaria.

Ahora bien, en cuanto al presupuesto órgano de control independiente; es decir, que el órgano encargado de ejercer control tenga independencia respecto de los demás órganos, cuyos actos o resoluciones controla.

En cuanto a las facultades decisorias del órgano de control, el autor citado, entiende que órgano encargado de ejercer control tenga facultad y potestad de decisión definitiva sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma legal ordinaria.

Por otro lado, respecto al presupuesto: derecho de los particulares para solicitar el control, se refiere éste a la legitimación activa reconocida a los ciudadanos como un derecho de acceso al control.

Finalmente en cuanto al presupuesto de sometimiento de toda la actividad estatal al control, precisa que constituye un requisito importante para el funcionamiento del control de la constitucionalidad, ya que justamente el principio de la supremacía de la Constitución implica que toda norma legal ordinaria debe estar sometida a sus disposiciones, de modo tal que el control de constitucionalidad debe abarcar al conjunto de normas infra constitucionales, así como a toda resolución, acto u omisión de autoridad pública.

### **3.1.7. Sistemas de control constitucional.**

Sobre el particular, el Dr. Carlos Hakansson Nieto (2001), en su obra: *La Forma de Gobierno de la Constitución peruana*, señala que:

(...) Los antecedentes formales del control constitucional no son remotos y la Constitución peruana de 1993 cuenta formalmente con los dos sistemas: La judicial Review norteamericana y por un Tribunal Constitucional de inspiración europea, circunstancia que ha llevado a la doctrina decir que se trata de un sistema o dual. (pág. 227).

Podemos señalar, entonces, la existencia de dos grandes sistemas de control constitucional, como: el europeo o de justicia constitucional concentrada, mediante el cual un órgano autónomo especializado y constitucionalmente designado para ello, tiene la potestad de revisar la constitucionalidad de las normas legales y los actos de poder, y el sistema americano o de control difuso, el cual permite que sea el mismo órgano jurisdiccional ordinario el que desarrolle la función de control de la constitucionalidad inaplicando una norma que contraviene la Constitución para el caso en concreto, manteniendo la norma en cuestión.

No obstante ello, el ordenamiento jurídico peruano, nos ofrece un sistema dual o mixto, dado que ambas formas de control constitucional han sido recogidas. Así, el Tribunal



Constitucional en el único órgano encargado de aplicar el control concentrado, analizando la inconstitucionalidad de las diversas normas legales y el control difuso es ejercido ya sea por órganos judiciales o entes administrativos.

#### **3.1.7.1. Sistema de control jurisdiccional difuso o modelo americano.**

Al respecto, autores como Francisco Carruitero Lecca y Mario Raúl Gutiérrez Canales (2006) en su libro: *Estudio Doctrinario y Jurisprudencial al Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, Ley Nro. 28237*, realizando un comentario al artículo VI.- Control Difuso e interpretación constitucional, señalan:

Cuando exista incompatibilidad entre una norma constitucional y otra de inferior jerarquía, el Juez debe preferir la primera, siempre que ello sea relevante para resolver la controversia y no sea posible obtener una interpretación conforme a la Constitución. Los Jueces no pueden dejar de aplicar una norma cuya constitucionalidad haya sido confirmada en un proceso de inconstitucionalidad o en un proceso de acción popular. Los Jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional”. (pág. 586)

Así pues, el **Control difuso**, llamado también americano o según Castillo (2005), “judicial review” (pág. 194), por haber surgido en Estados Unidos otorga la facultad de control a los tribunales ordinarios del Estado para inaplicar, en un caso concreto, la totalidad o parte de una ley, independientemente de la instancia en que se encuentre desempeñando el ejercicio de la función jurisdiccional, de modo que son varios los órganos jurisdiccionales que ejercen la defensa de la Constitución, siendo que para Rivera (2003), implica que “todos los jueces tienen la potestad y obligación legal de aplicar la Constitución con preferencia a las leyes y éstas con preferencia a los decretos o resoluciones” (pág. 60). Así pues, este procedimiento parte de la idea de que cada vez que en un proceso- ya sea civil, penal, comercial, fiscal o administrativo- una de las partes impugna o de oficio se advierte la inconstitucionalidad de una ley, el juez ordinario encargado del asunto, debe resolver el problema; es decir, pues todos los jueces están facultados para inaplicar aquellas leyes que contravengan la Constitución, al caso que resuelvan.

En nuestro país, en el artículo 138° de la Constitución Política del Estado desarrollado por el artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional y artículo 3° de dicho texto, se reconoce esta forma de control constitucional, estableciéndose expresamente que: “En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera. Igualmente, prefieren la norma legal sobre toda otra norma de rango inferior”, y el artículo 51°, prescribe, que “la Constitución prevalece sobre toda norma legal; la Ley sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente”.

El primer párrafo, tiene una redacción clara propia de una norma de desarrollo constitucional, pues observa que para que opere el control difuso, necesariamente no debe ser posible obtener una interpretación conforme a la Constitución, reconoce que la Constitución es la norma que no puede ser contrariada por las normas sub constitucionales o actos que ocurren bajo su ámbito de competencia.

Por otro lado, el artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional; recoge el principio de control de la supremacía constitucional y de los efectos del control difuso en relación a la interpretación conforme a la Constitución, teniendo como base los artículos 51° y 138° segundo párrafo de la Constitución de 1993 antes mencionados.

En concordancia con ello, aparece el control difuso de modo uniforme entre nosotros en los artículos 8° de la LOPJ de 1963, 236° de la Constitución de 1979, 138°, 2da parte, de la Constitución de 1993 en vigencia, y 14° vigente TUO de la LOPJ, que a la letra dice: “Artículo 14.- Supremacía de la norma constitucional y control difuso de la Constitución. De conformidad con el Art. 236 de la Constitución, cuando los Magistrados al momento de fallar el fondo de la cuestión de su competencia, en cualquier clase de proceso o especialidad, encuentren que hay incompatibilidad en su interpretación, de una disposición constitucional y una con rango de ley, resuelven la causa con arreglo a la primera. Las sentencias así expedidas son elevadas en consulta a

la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema, si no fueran impugnadas. Lo son igualmente las sentencias en segunda instancia en las que se aplique este mismo precepto, aun cuando contra éstas no quepa recurso de casación. En todos estos casos, los magistrados se limitan a declarar la inaplicación de la norma legal por incompatibilidad constitucional, para el caso concreto, sin afectar su vigencia, la que es controlada en la forma y modo que la Constitución establece. Cuando se trata de normas de inferior jerarquía, rige el mismo principio, no requiriéndose la elevación en consulta, sin perjuicio del proceso por acción popular”.

#### **3.1.7.2. Sistema de control jurisdiccional concentrado o modelo europeo.**

La Constitución peruana no solo ha recogido el mencionado control difuso, sino que prevé también el llamado modelo europeo o control concentrado de la constitucionalidad de las leyes.

Al respecto, García Toma (2016), ha señalado:

En este modelo la salvaguarda de la Constitución se encuentra a cargo de un órgano jurisdiccional especial (se le denomina ad hoc o de contralor concentrado), a quien se le ha confiado el control de la constitucionalidad a un ente particular y autónomo del resto de los órganos del poder estatal (págs. 21-22)

Este sistema, cuyo origen se encuentra en la obra de Hans Kelsen, entonces, implica que la labor del control de constitucionalidad está encomendada a un organismo jurisdiccional especializado, en nuestro caso, este organismo especializado es el Tribunal Constitucional, en quien recae el monopolio de las competencias para conocer la constitucionalidad de las leyes, así como de otras referidas a la protección jurisdiccional de los derechos fundamentales.

Nuestra Constitución establece en su artículo 201° que el Tribunal Constitucional es el órgano de control de la Constitución, siendo considerado -en la práctica- como el máximo intérprete de la misma debido a la intensa labor que viene desarrollando en la actualidad dirimiendo controversias en las cuales estén en juego derechos fundamentales o pronunciándose sobre la constitucionalidad de normas legales de

inferior rango como leyes ordinarias, decretos legislativos, decretos, reglamentos, entre otros.

Es así que su labor se ve precisada en el artículo siguiente donde se contempla que resuelve en instancia única la acción de inconstitucionalidad. Debido a que la acción de inconstitucionalidad implica cuestionar seriamente la constitucionalidad de una norma legal y su consecuente retiro del ordenamiento jurídico, la facultad para iniciar la mencionada acción está limitada por la propia Constitución, es decir, sólo podrán hacerlo los facultados por la Carta misma. El Tribunal no actúa de oficio a manera de vigilante de la constitucionalidad, sólo actúa cuando los órganos y sujetos expresamente indicados en el artículo 203° de la Constitución inician un proceso ante este órgano colegiado.

El Tribunal Constitucional emite una sentencia, la cual no tiene efectos retroactivos, lo cual supone que los efectos generados por la norma son válidos en el período de tiempo que estuvo vigente, desde su publicación hasta la sentencia que declara su inconstitucionalidad. Dicha sentencia es publicada en el Diario Oficial de la nación (en este caso el diario El Peruano), haciendo que la norma quede sin efecto al día siguiente de la publicación. La excepción a la irretroactividad de las sentencias del Tribunal Constitucional es lo referido a la materia tributaria. Según lo dispuesto por el artículo 74° de la Carta fundamental, no surten efectos las normas tributarias dictadas en violación de lo que establece dicho artículo. De esta manera, de acuerdo al artículo 81° del Código Procesal Constitucional: “cuando se declare la inconstitucionalidad de normas tributarias por violación del Artículo 74° de la Constitución, el Tribunal debe determinar de manera expresa en la sentencia los efectos de su decisión en el tiempo. Asimismo, resuelve lo pertinente respecto de las situaciones jurídicas producidas mientras estuvo en vigencia”. Es así que en materia tributaria, de declararse la inconstitucionalidad de una norma, la retroactividad surge como una posibilidad.

De acuerdo a lo expresado, podemos concluir que el control concentrado está reconocido y regulado por la misma Constitución Política del Perú. Adicionalmente, en el año 2004 se dictó una ley que significó una codificación a las normas destinadas a iniciar procesos ante el Tribunal Constitucional. La Ley 28237 o Código Procesal

Constitucional contiene todo lo referente al aspecto procesal (competencia, legitimidad, prescripción, etc.) de la justicia constitucional concentrada en materia de garantías constitucionales, tanto las referidas a la defensa de los derechos fundamentales como a la defensa del principio de supremacía constitucional.

### **3.2. EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.**

#### **3.2.1. Antecedentes históricos del Tribunal Constitucional.**

Según Abad (2004), “la propuesta kelseniana de crear un Tribunal Constitucional surge en Europa en 1920- Austria y Checoslovaquia y luego, en 1931, en España-pero progresivamente se va extendiendo a los restantes países del mundo a partir de la segunda guerra mundial” (pág. 62).

Por su parte, según Carrasco (2006), “ El Tribunal Constitucional nació del llamado modelo Kelseniano, plasmado en un proyecto de 1918, sancionado por el Parlamento austriaco en 1919, y hecho realidad en la primera Constitución austriaca que fuera promulgada el 01 de Octubre de 1920” (pág. 35). En la actualidad, de acuerdo con Hakansson (2001), “la aparición de los tribunales constitucionales es el ejemplo más palpable de esta tendencia modernizante. Tanto es así, que hoy resultaría extraño no encontrar normas relativas al control de la constitucionalidad” (pág. 124), así pues, casi todos los países cuentan con una corte o tribunal encargado de revisar la constitucionalidad de las normas, pese a que su desarrollo ha sido desigual.

Así pues añade Hakansson, que “La Constitución argentina conserva un Tribunal Supremo de estilo norteamericano pero adopta los presupuestos de una Constitución kelseniana”. Empero dice el mismo autor “la nueva Constitución colombiana prefirió crear un Tribunal- al que llaman Corte Constitucional-, pese a contar con un Tribunal Supremo encargado de pronunciarse sobre la constitucionalidad de las normas”. Un caso similar a los anteriores replica “es el mexicano con la reciente aparición de la acción de inconstitucionalidad ante su Tribunal Supremo” (Hakansson Nieto, 2001, pág. 125).

Para el caso de Chile y en Perú, señala Hakansson (2001) que “el control de la constitucionalidad comenzó fuera de la judicatura, con la incorporación de tribunales constitucionales en 1979 (pág. 125).” En el Perú en el siglo XIX, según Carrasco (2006), “no tuvo un sistema de control constitucional, aun cuando hubo intentos sobre todo doctrinarios, para implantarlo. (...) En la década de 1930, es que se incorpora el llamado “modelo americano” en forma expresa. (pág. 35).

En nuestro país, señala el Dr. Hakansson (2001) que, “la Constitución de 1979 instituyó por primera vez un Tribunal Constitucional independiente de la judicatura” (pág. 125). En el Perú fue creado para superar el descontento que existía en torno al Poder Judicial sobre todo durante el gobierno revolucionario de la Fuerza Armada. En el Perú nació con la Constitución de 1979 bajo el nombre de Tribunal de Garantías Constitucionales (extrapolado de la Constitución Española de 1931).

En este Texto Fundamental, el TGC es definido como “el órgano de control de la Constitución y su Ley Orgánica, también establecía que esté integrado por nueve miembros, provenientes en terceras partes de los tres poderes del Estado. La elección debía recaer entre personas que reúnan los mismos requisitos que exigían para ser Vocal de la Corte Suprema y exhiban probados antecedentes democráticos y de defensa de los Derechos Humanos.

El Tribunal de Garantías Constitucionales gozaba de dos funciones básicas:

- Conocer en Casación de las resoluciones denegatorias del Hábeas Corpus y Amparo.
- Declarar, a petición de parte, la inconstitucionalidad total o parcial de las leyes, otras normas jurídicas con valor de ley.

Fue precisamente la pobreza de esta competencia que, aunado a otros factores como la politización en el reclutamiento de sus miembros, el reducido número de legítimos para iniciar las acciones y el elevado número de votos para la adopción de sus acuerdos, lo que imposibilitó su funcionamiento eficaz y posterior fracaso.

La Constitución de 1993 dio la denominación moderna de Tribunal Constitucional (Constitución Española de 1978) y optó por regular de una mejor manera la competencia del órgano encargado del control concentrado de la constitucionalidad.

### **3.2.2. Concepto.**

Por su parte Luis Alberto Carrasco García (2006), en su obra titulada: *Derecho Procesal Constitucional*, señala que: “Es el órgano encargado del control de la constitucionalidad, para lo cual está revestido de independencia en relación con los otros órganos constitucionales y se encuentra sometido únicamente a la Constitución y a su Ley Orgánica Nro. 28301” (pág. 35).

Así pues, el Tribunal Constitucional es el encargado del control constitucional y la protección de los derechos fundamentales de la persona. Es el órgano de control de la vigencia plena de la constitución.

El Dr. Samuel B. Abad Yupanqui (2004), en su libro: *Derecho Procesal Constitucional- Antecedentes, Desarrollo y Desafíos en el Perú*, citando a Favoreu Louis, refiere: “El Tribunal Constitucional es una jurisdicción creada para conocer especial y exclusivamente en materia de lo contencioso constitucional, situada fuera del aparato jurisdiccional ordinario e independiente tanto de este como de los poderes públicos”. (pág. 83)

El Tribunal Constitucional del Perú, de acuerdo a la STC expedida en el Expediente Nro. 00158-2007-PA/TC, f.j.6 “ es el Supremo Intérprete de la Constitución, lo que supone que sus resoluciones, en cuanto a su alcance y validez, adquieren una presunción de constitucionalidad absoluta que no puede ser negado,”, prosigue “sin que ello debilite o desnaturalice la propia lógica del sistema, más aún si tales resoluciones tienen el rango de precedente vinculante, es decir, reglas de observancia obligatoria-*erga omnes*- para cualquier entidad, funcionario o particular”; es decir pues, es el órgano de control de la constitucionalidad, conoce en última instancia las resoluciones

denegatorias de Hábeas Corpus, Amparo, Hábeas Data, Acción de Cumplimiento; en instancia única la Acción de Inconstitucionalidad y conoce de conflictos de competencia, o de atribuciones asignadas por la Constitución. Es autónomo e independiente de los demás órganos constitucionales. Se encuentra sometido solo a la Constitución y a su Ley Orgánica.

### **3.2.3. Autonomía procesal del Tribunal Constitucional.**

Al respecto, Landa Arroyo (2009) ha indicado que:

Entonces, la autonomía es tanto un atributo de un poder u organismo independiente como la capacidad de actuación de dicho organismo constitucional- Como el Tribunal Constitucional – para cumplir sus fines de control constitucional con las limitaciones y responsabilidades que la propia Constitución y leyes establecen.

(...) la labor del Tribunal Constitucional trasciende la labor jurisdiccional del juez ordinario, a quien revisa, en última y definitiva instancia, sus fallos. Por este motivo requiere de un mayor nivel de autonomía procesal que le permita flexibilizar las formalidades de los procedimientos con el objeto de alcanzar los fines constitucionales, a través de un derecho constitucional y procesal dúctil.

(...)

Dicha autonomía – que no es autarquía – le confiere al Tribunal Constitucional un importante grado de libertad y responsabilidad al momento de definir, subsidiariamente a la ley, su derecho procesal, y le permite desarrollar principios con pretensión de generalidad a través de la doctrina jurisprudencial y los precedentes vinculantes, de modo que puedan ser aplicados a casos similares posteriores” (págs. 287-288).

En tal sentido, tal facultad le es reservada exclusivamente al Tribunal Constitucional, en tanto se erige como el máximo supremo intérprete de la Constitución, sin embargo tal autonomía se encuentra limitada por la Constitución y las leyes, ello a fin de garantizar la primacía de la Constitución y la vigencia efectivas de los derechos constitucionales.

Rodríguez Patrón, Patricia (2003), citada por el mismo autor ha señalado que:

“(...) Podríamos calificar la “autonomía procesal” como el perfeccionamiento jurisdiccional que de su regulación procesal realiza el TC, más allá de los métodos convencionales de interpretación e integración del derecho (cuando estos se revelan insuficientes dada la especialidad del proceso constitucional). A través de ella, el TC, en el seno de procesos concretos, crea reglas y principios procesales generales más o menos estables, de acuerdo con consideraciones de oportunidad” (pág. 141)



Revisado el concepto de la autonomía procesal del Tribunal Constitucional, se puede establecer en función a la facultad otorgada por el Estado para flexibilizar el procedimiento en afán de conseguir la interpretación más cercana al contenido de la Constitución, que en tanto se produjera la necesidad de realizar un análisis de la actividad del Ministerio Público, tal cual el caso estudiado, tendrá la posibilidad de acondicionar las reglas procesales constitucionales a fin de llevar a cabo tal examen.

Desde luego, entiéndase esto como el último escaño del control que como ya se dirá más adelante, tendrá su origen en el ya conocido control difuso ejercido por los magistrados del Poder Judicial, el cual se propondrá con una cierta variación del proceso penal.

### **3.2.3.1. El Tribunal Constitucional peruano como controlador de la constitucionalidad de las leyes, último garante de los derechos y un Tribunal para la solución de conflictos.**

Las competencias del Tribunal Constitucional actual son:

- a) El órgano de control constitucional. La Constitución peruana precisa que el Tribunal Constitucional constituye el órgano de control de la Constitución.

El Tribunal controla que las leyes atenten contra de la Constitución, pues nada de lo establecido en la Carta Magna debería ser objetable, esto es ejerce el control de la constitucionalidad.

- b) El Tribunal Constitucional como garante de derechos.- De conformidad con el artículo 202° de la Constitución, el Tribunal Constitucional se encuentra facultado para conocer en última instancia las resoluciones denegatorias de habeas corpus, amparo, habeas data y acción de cumplimiento procedentes de la Corte Suprema. No obstante la Cuarta Disposición Transitoria de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional establece que las acciones de garantía se interpondrán ante el Juzgado Civil o penal que corresponda, y que la Corte Superior respectiva las

concederá en segunda instancia. En caso de que se a denegada, se acudirá al Tribunal Constitucional evitando así el paso por la Corte Suprema. La excepción a esta regla general se presenta cuando el acto que lesiona los derechos fundamentales es una resolución judicial, en este caso la conocerá primero la Corte Superior y, en segunda instancia, al Corte Suprema.

En sentido material, de acuerdo con el número de sentencias expedidas hasta el momento, la función de último garante de los derechos y libertades es la atribución que más ejerce el Tribunal Constitucional

- c) El Tribunal Constitucional como Tribunal para la solución de conflictos.- La doctrina peruana y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional no señalan cuáles son los órganos que pueden acudir a dicho Tribunal como árbitro. En la práctica, los conflictos que podrían suscitarse en un Estado unitario, como el peruano, son aquellos entre el gobierno central y los gobiernos locales o regionales. Y, en segundo lugar, los conflictos de competencias que puedan presentarse entre los órganos constitucionales como el Legislativo, el Ejecutivo, la Judicatura y el Consejo Nacional de la Magistratura. (Hakansson Nieto, 2001, págs. 239 -244).

#### **CAPÍTULO IV: LA AUTONOMÍA DEL MINISTERIO PÚBLICO Y LAS FACULTADES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PARA REVISAR SUS DECISIONES**

A fin de tener una noción más clara de lo que significa la presencia del Ministerio Público dentro del sistema de justicia penal del país, y de su condición de ente estatal autónomo, materia de discusión de nuestra investigación, resulta pertinente traer a estudio algunos aspectos que se refieren a éste, no sin antes dejar de mencionar que nuestra actual Constitución Política al igual que la Constitución del año 1979 asigna al Ministerio Público funciones muy importantes en el desarrollo de la justicia penal, siendo una de estas, ejercitar la acción penal de oficio o a petición de parte. Y es que en materia penal, su intervención resulta justificada, por cuanto la naturaleza pública de los intereses como: la persecución y represión de los delitos y la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como la libertad y la vida está en juego, y su tutela le corresponde exclusivamente a este órgano autónomo; es decir que, su actuar no es en interés propio, sino que lo hace en representación de los intereses de la sociedad y sobre todo en defensa de la legalidad.

Así pues, el rol del Ministerio Público en la investigación preliminar viene precedida de las facultades conferidas por la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica del Ministerio Público, Decreto Legislativo Nro. 052 del 19 de Marzo de 1981, así como las demás leyes complementarias y directivas específicas. Por lo que, resulta de suma importancia saber cómo viene actuando este organismo en la dirección de una investigación preliminar a su cargo, analizando sus deberes y obligaciones dentro de ésta, así como las facultades de las que goza al amparo de su autonomía, máxime que de conformidad con el inciso 1) del artículo IV del Título Preliminar Código Procesal Penal, se establece: “El Ministerio Público es el titular del ejercicio público de la acción penal en los delitos y tiene el deber de la carga de la prueba. Asume la conducción de la investigación desde su inicio”; es decir, que dicha atribución corresponde exclusivamente a la figura del fiscal.

## **4.1. EL MINISTERIO PÚBLICO.**

### **4.1.1. Etimología.**

Ahora bien, a fin de conocer el origen etimológico de este importante organismo autónomo del Estado, recurriremos al investigador Yann Verheye Asalde (2011), quien en su artículo jurídico: *El Ministerio Público a la largo de la Historia Constitucional Peruana: Pasado, presente y propuestas para su futuro institucional*, ha precisado que:

El Ministerio Público, como institución, tiene una data muy antigua originada en la cultura romana en la que se le otorgaba al Fiscal (Fiscus) la atribución de recoger el tesoro del príncipe para que, más tarde, en el medioevo, se le cambie la nomenclatura por la de Fisco o Cámara del Rey (España), al tesoro de la Casa Real y el erario estatal. Respecto de la actual denominación, “Ministerio Público” (...) la palabra “Ministerio” alude a todo aquello que es necesario para la ejecución de la ley; mientras que, lo” Público”, implica una relación de pertenencia con todo el pueblo refiriéndose a la aplicación jurisdiccional. En la actualidad, priman tres denominaciones, la de Ministerio Fiscal (de origen español), la de Ministerio Público (francés) y la de Público Ministerio (italiano) de las cuales, nuestro país, ha adoptado la segunda: Ministerio Público. Sin embargo, a diferencia del nuestro, Argentina ha preferido la denominación de Ministerio Fiscal o Ministerio Público Fiscal. (pág. 1).

De lo recogido, advertimos que con el devenir del tiempo, el Ministerio Público ha tenido varias denominaciones, de las cuales resalta el origen etimológico de la palabra Fiscal, la misma que proviene del latín *fiscus*, que se utilizaba para denominar a quien servía para recoger el tesoro del príncipe, hasta llegar a lo que hoy conocemos como el Ministerio Público, denominación adoptada por nuestro país.

Cabe precisar que el investigador Pedro Angulo Arana (2007), ha señalado que en Latinoamérica, la institución materia de estudio adoptó principalmente dos denominaciones: “Una que proviene del derecho español, Ministerio Fiscal y otra que proviene del derecho francés e italiano, Ministerio Público. Como podemos observar nuestro país optó por el segundo término, Ministerio Público” (pág. 59), el mismo que ha ido adquiriendo mayor reconocimiento con el transcurrir del tiempo, tanto así que al día de hoy ocupa en lugar importante dentro de nuestro sistema penal de justicia, toda vez que es éste quien detenta la persecución penal pública, por lo que, para efectos de

nuestra investigación es pertinente llegar a determinar si las funciones encomendadas las viene cumpliendo cabalmente.

#### **4.1.2. Antecedentes históricos.**

La evolución del Ministerio Público como institución, nos servirá para establecer la forma en que junto con ella se ha incorporado el carácter de autónomo, por ello hacemos un recuento de toda la información encontrada a lo largo de nuestra investigación.

Según lo señalado por el Jurista Peña Cabrera (2016), la “aparición de la figura del Fiscal se remonta al siglo XIII como el procurador. Este Sujeto se presenta como representante del señor ante la persecución de un delito, de esta forma el poder político se apodera de los procedimientos judiciales” (pág. 239). Es decir, de acuerdo al citado el autor, la figura del fiscal remontado a aquella época, donde era un procurador, se asemeja a lo que hoy es un fiscal propiamente dicho.

Ya situados en nuestro país, tenemos que, según Augusto Navarro Vega (2010) señala como el antecesor más remoto del Ministerio Público, al “funcionario que defendía la jurisdicción y los intereses de la hacienda real en los Tribunales del Consejo de Indias, cuya función fue establecida en 1542 al instalarse la Real Audiencia de Lima y después la del Cuzco”. (págs. 26-28). Así pues, una vez instalada la Real Audiencia, aparece la figura del fiscal, quien era el encargado de controlar y defender el interés hacendario, encontrándose sus funciones en el libro II Título XVIII de las Leyes de Indias. Pero, además de intervenir en las causas en las que la hacienda real era parte, cuidaban del interés público, y a la vez del soberano. También se le encomendó la defensa de los indígenas cuando no había defensores de naturales.

Más adelante, encontramos que los miembros del Ministerio Público estuvieron asimilados al aparato judicial, lo cual se mantuvo durante la época republicana, al instalarse la Alta Cámara de Justicia y la creación de la Corte Suprema de la República junto con los vocales se nombra al fiscal, pues según lo señalado por el Dr. en derecho

Hurtado Pozo (1983), el M. P. estaba, en nuestro país, “integrado en la estructura del Poder Judicial. En el Código de Procedimientos Penales y en la L. O. P. J., se encontraban las disposiciones referentes a su organización y relaciones con los órganos jurisdiccionales”. (pág. 15). No obstante que los reglamentos de organización de los tribunales no los mencionaban, sus contornos aparecen en el Reglamento de Tribunales de 1854 y con más precisión en la Ley Orgánica de 1912, su nombre era Ministerio Fiscal convertido en la actualidad en Ministerio Público, el mismo que en opinión del citado autor, “es un ente autónomo del Poder Judicial y de los demás Poderes del Estado”. (pág. 15), característica que ha sido reconocida también por nuestra actual Constitución Política.

Según el Dr. Peña Cabrera (2009) fue “con la dación del Código de Procedimiento Criminal de 1808 y el Ordenamiento judicial de 1810 de Francia que se gestó la estructuración del denominado proceso “mixto””; es decir un proceso delimitado en dos etapas, siendo la primera “la fase de instrucción encargada al juez instructor” y una segunda “ la etapa de juzgamiento, dirigida por un Tribunal colegiado o corporativo (Sala penal superior), tal como lo prevé el vetusto Código de Procedimientos Penales de 1940” (Peña Cabrera Freyre A. R., 2009, págs. 57-58)

Sin embargo, no fue sino con la entrada en vigencia de su Ley Orgánica (Decreto Legislativo Nro.052) y con la sanción de la Constitución Política de 1979, que el Ministerio Público adquiere, según Peña Cabrera (2016): “autonomía funcional, administrativa y política, deja de ser entonces un órgano estatal adscrito al Poder Judicial, no una magistratura judicante como el Poder Judicial, sino una magistratura requirente que asume nuevas responsabilidades y abarca nuevas áreas de poder discrecional (...)”. (pág. 239), convirtiéndose de esa manera nuestro país, en el primero donde surgió por primera vez un Ministerio Público como órgano independiente de los demás órganos del Estado con la promulgación de la Constitución de 1979, que reguló esta institución como un ente estatal autónomo, puesto que con la dación de la citada Constitución que el Ministerio Público logró adquirir autonomía orgánica a nivel constitucional, toda vez que anteriormente formaba parte del Poder Judicial y fue en

dicha Constitución de 1979 que se dictó la Ley Orgánica del Ministerio Público (Decreto Legislativo N° 052), la misma que lo rige en la actualidad y que no sólo reafirma una vez más la autonomía constitucionalmente otorgada a ésta, sino que, también, lo instituye como una institución jerárquicamente organizada.

Y es que con la Constitución del año 1979, el Ministerio Público adquirió independencia institucional y organizacional, dejando de este modo de estar adscrito al Poder Judicial, convirtiéndose en una institución que se inserta en el sistema de justicia penal del Perú, atribución ésta que fue reafirmada por la actual Constitución de año 1993.

Como vemos, esta institución se ha ido formando paulatinamente, logrando desligarse del Poder Judicial para pasar a ocupar un lugar dentro del sistema penal con carácter de órgano autónomo, si bien no sometido a poder alguno, sin embargo sí a la Constitución Política y al respeto de los derechos fundamentales, por ende su actuar debe ser con claro respeto a ello, aspecto que nos interesa estudiar ya que podremos determinar si existe una extralimitación de su autonomía en el ejercicio de esas atribuciones que nuestra Constitución les confiere a los fiscales como integrantes del Ministerio Público.

#### **4.1.3. Concepto de Ministerio Público.**

Para el Dr. Cristian Salas Beteta (2010), en su libro: *Investigación Preparatoria y etapa intermedia-Problemas de aplicación del Código de Procesal Penal de 2004*, ha señalado:

El Fiscal es el titular del ejercicio de la acción penal pública y a quien se encomienda también la carga de la prueba; quien mejor que él para plantear la estrategia de investigación y desarrollarla conjuntamente con la policía, formulando sus hipótesis y conclusiones al conocimiento de una noticia criminal. El rol fundamental del Ministerio Público es la dirección de la investigación del delito, liderará en tal sentido el trabajo en equipo con sus fiscales adjuntos y la policía diseñando las estrategias a ser aplicadas para la formación del caso y, cuando corresponda, someterlo a la autoridad jurisdiccional. Esta nueva actitud evita la repetición de las diligencias ya instauradas en el proceso. El nuevo despacho fiscal toma elementos del modelo corporativo de trabajo, el mismo que permite la gestión e interacción de sus actores, incluyendo

criterios importantes para el control y seguimiento de sus servicios. (pág. 12).

Como podemos advertir de la definición citada, al fiscal se le ha asignado titularidad en el ejercicio de la acción penal, encomendándole la carga de la prueba. Así pues, el fiscal tiene como tarea principal la recolección del material probatorio durante investigación preliminar. El Ministerio Público tiene atribuida la función de defender a la sociedad a través de la aplicación de la ley, dado que el Ministerio Público no fue concebido únicamente para cumplir una función unilateral de persecución, sino para ser custodio de la ley, de perseguir a los transgresores de las leyes, de proteger a las personas agraviadas y de prestar auxilio a todos aquellos a quienes el Estado consagra su protección. Es decir que, su tarea consiste en no actuar en desmedro de los derechos de la partes, sea esta víctima o imputado, más aun si en cuanto a este último, el fiscal se encuentra en una posición que lo obliga por un lado a la protección del acusado y por otro a actuar contra él. La investigación que promueva se realizará en virtud del principio de legalidad, máxime que éste adopta una posición de requirente y no de juzgador.

En ese orden de ideas recogemos la posición del Dr. Julio Enrique Morales Saldaña (2012), quien en su libro: *El Nuevo Código Procesal Penal: Rol del Ministerio Público y las Atribuciones de la Policía Nacional*, ha señalado que:

El Ministerio Público es un organismo público al que se le atribuye dentro de un Estado democrático, la representación de los intereses de la sociedad mediante el ejercicio de facultades de dirección de la investigación de los hechos que revisten los caracteres del delito, de protección a las víctimas y testigos, y de titularidad y sustento de la acción penal pública.

Asimismo, está encargado de contribuir al establecimiento de los criterios de la política criminal o persecución penal dentro del estado, a la luz de los principios orientadores del Derecho Penal moderno, como el de mínima intervención y de selectividad (pág. 24).

Como vemos, de acuerdo a la concepción adoptada por el citado autor, el Ministerio Público en un Estado democrático como el nuestro tiene como tarea asignada la de representar los intereses de la sociedad, y ello se logra cuando ejerce sus facultades de



director de una investigación en la persecución de un delito, añadiendo además que tiene como finalidad la protección de las víctimas y testigos y con ello, se le asigna la función de que los fiscales son los titulares de la acción penal, la misma que tiene a su cargo sustentarlo en oposición al imputado, por tanto se exige pues que sus atribuciones sean desempeñados con la máxima probidad posible. Que el desempeño de sus funciones obedece al respeto de principios que orientan el derecho penal. Además, se indica que el Ministerio Público es el ente encargado de contribuir al establecimiento de criterios en política criminal.

Así pues, el Ministerio Público es un órgano constitucionalmente autónomo, titular de la acción penal pública, encargado de investigar el delito desde el inicio (investigación preliminar), así como garantizar que sus actuaciones se enmarquen dentro del principio de legalidad. Con el desarrollo de nuestra investigación podremos determinar si las atribuciones conferidas al Ministerio Público son cumplidas con observancia de los derechos fundamentales previsto en la norma suprema como lo es la Constitución Política.

#### **4.1.4. Definición de autonomía del Ministerio Público.**

En la búsqueda de una conceptualización de la autonomía del Ministerio Público, ubicamos al jurista peruano Dr. Freddy Mory Principe (2011), quien en su libro denominado: *La Investigación del Delito: El Policía, el Fiscal y el Juez; Derechos Fundamentales del Imputado*, describe la autonomía en base a la positivización de ésta, y lo indica de la siguiente manera:

La autonomía del Ministerio Público ha sido graficada por el artículo 158° de la Constitución Política, y sus atribuciones a través del artículo 159°. Esta institución a partir de la promulgación del Código Procesal Penal de 2004 asume una obligación jurídica trascendental: Dirigir la investigación preliminar y preparatoria para, en su momento, acusar al investigado ante la autoridad judicial, solicitar la sanción penal que corresponda al hecho punible demostrado y tipificado en el Código Penal, o solicitar el sobreseimiento del proceso penal, si fuera el caso. Los fiscales en el desempeño de sus funciones y en el desarrollo de sus atribuciones proceden con independencia de criterio, alejados de cualquier tipo de injerencia. (págs. 22-23).

Los lineamientos de acción sobre los cuales se aplica la autonomía del Ministerio Público nos llevan al razonamiento de que están configurados con la intención de asegurar su discrecionalidad en el ejercicio de sus funciones, siendo esto útil para la investigación, dado que nos ocuparemos de investigar si su aplicación en la realidad es lo suficientemente efectiva sin alterar los elementos que componen el debido proceso, ello nos permitirá establecer si realmente existe tal vulneración de tales derechos.

Así pues, el Ministerio Público constituye un órgano estatal autónomo que tiene la misión de la defensa de la legalidad y la promoción del interés público y social, ejerciendo para ello diversas funciones procesales y supra procesales, bajo la orientación del interés en la consecución de una justicia efectiva y por medio de las potestades que para ello le otorga su Ley Orgánica. Al hablar de autonomía, nos referimos concretamente a la posición de los magistrados que integran el Ministerio Público tienen en el ejercicio de su función, la relación que éste debe establecer con el derecho, con el sistema normativo que debe interpretar y aplicar. Así, la autonomía se relaciona con el principio de legalidad, de la supremacía de la constitución y la ley, respetando, por supuesto, el principio de igualdad y los derechos fundamentales de los ciudadanos, especialmente en relación con la previsión constitucional de la presunción de inocencia. Es decir por el principio de autonomía, el Ministerio Público no puede no gozar de una posición de autonomía, sobre todo si se tiene en cuenta que su tarea no es sostener la acusación, sino decidir a la luz de las normas y la valoración de los hechos, si inicia las investigaciones, si promueve la acusación contra parte investigada, o bien si archiva. Todas esas valoraciones, el fiscal los debe realizar con absoluta libertad de elección. Son autónomos en la interpretación de las normas a aplicar y en la calificación de los hechos investigados.

Como vemos, según nuestra norma constitucional dota de independencia y autonomía a este órgano de cualquier otro poder del Estado. La Constitución también asegura a los magistrados del Ministerio Público independencia interna, característica que se relaciona con su estructura interna, el mismo que representa un poder no jerárquico de tipo piramidal, sino difuso. Es decir que los miembros del Ministerio Público tienen

independencia tanto institucional, como funcional, siendo éstas necesarias para el desarrollo de la acción penal por parte de estos. No obstante ello, si bien la independencia externa que experimenta el Ministerio Público con otros poderes del estado es plena; sin embargo, cuando hablamos de la independencia interna experimenta una atenuación, esto es, relativa con los demás magistrados que forman parte de este órgano. La independencia hace referencia pues a la posición institucional del magistrado en el interior del Ministerio Público y también en las relaciones que tiene con los otros poderes del Estado, no obstante ello debe sujetarse a lo dispuesto en la Constitución Política, a la cual se encuentra sometida y su actuar no debe ser en desmedro de los derechos fundamentales, situación que determinaremos más adelante, puesto que el Tribunal Constitucional ha establecido en reiterada jurisprudencia cuáles son límites a la autonomía procesal del Ministerio Público en el ejercicio de sus funciones en la investigación de un delito.

#### **4.1.5. La autonomía del Ministerio Público en su Ley Orgánica.**

La Ley Orgánica del Ministerio Público aprobada por Decreto Legislativo Nro. 052, en su artículo 1° establece:

El Ministerio Público es el organismo autónomo del Estado que tiene como funciones principales la defensa de la legalidad, los derechos ciudadanos y los intereses públicos, la representación de la sociedad en juicio, para los efectos de defender a la familia, a los menores e incapaces y el interés social, así como para velar por la moral pública; la persecución del delito y la reparación civil. También velará por la prevención del delito dentro de las limitaciones que resultan de la presente ley y por la independencia de los órganos judiciales y la recta administración de justicia y las demás que le señalan la Constitución Política del Perú y el ordenamiento jurídico de la Nación

Asimismo, en su artículo 5°, sobre la autonomía funcional prescribe:

Los Fiscales actúan independientemente en el ejercicio de sus atribuciones, las que desempeñarán según su propio criterio y en la forma que estimen más arreglada a los fines de su institución. Siendo un cuerpo jerárquicamente organizado deben sujetarse a las instrucciones que pudieren impartirles sus superiores.

Si bien el Ministerio Público fue creado por la Constitución Política en 1979, sin embargo recién se constituyó y estructuró a partir del 19 de Marzo del año 1981, fecha

en que se promulgó su Ley Orgánica, Decreto legislativo Nro. 052, y se nombró a su primer Fiscal de la Nación. Así pues, ésta recién creada institución de naturaleza constitucional se separaba del Poder Judicial, se le declaraba como una institución autónoma y se le daba la atribución de ser la persecutora del delito, y defensora de la Legalidad. La ley Orgánica del Ministerio Público se estructuró como una réplica a la Ley Orgánica del Poder Judicial, así cada instancia jerárquica del Ministerio Público corresponde a la estructura del Poder Judicial.

Como podemos advertir de lo mencionado en dicho cuerpo legal, el Ministerio Público ha sido instituido como una entidad autónoma; es decir que los fiscales en el desempeño de sus funciones y en el desarrollo de sus atribuciones actúan con independencia de criterio, dado que es un mandato constitucional. El papel del Ministerio Público en el proceso penal constituye su esencia, ya que en ella establece sus atribuciones esenciales, pues se le ha asignado el papel de representar a la sociedad en juicio, de ser el titular de la acción procesal penal, así como ser el responsable de la investigación y por ende, el titular de la carga de la prueba, esto es que debe sustentar su persecución en la prueba.

Así, queda claro entonces que el Ministerio Público, es una institución constitucionalmente autónoma e independiente en el aspecto orgánico, administrativo y funcional, razón por la cual se encuentra al margen de cualquier injerencia política, que mantiene dentro del modelo procesal penal un actuar con imparcialidad y objetividad.

Para efectos de nuestra investigación, resulta importante determinar si el Ministerio Público respeta los límites que se le impone a su autonomía.

#### **4.1.6. Naturaleza jurídica del Ministerio Público.**

El investigador Edwin Augusto Navarro Vega (2010), en su libro denominado: *La Transgresión Del Derecho De Presunción De Inocencia Por El Ministerio Publico De Trujillo*, ha precisado que:

La naturaleza jurídica del Ministerio Público se determina a partir de las funciones que cumple como un ente autónomo; autonomía que le ha sido otorgada por la Constitución Política de 1979 y ratificada por la

Constitución de 1993 en su artículo 158°, constituyéndose de esta manera en un organismo constitucional autónomo, dado que no forma parte ni del Poder Judicial, ni del Poder Ejecutivo, ni Poder Legislativo, pues tiene el carácter constitucional de Institución Autónoma y jerárquicamente organizada. (págs. 31-32).

De lo recogido podemos observar que al Ministerio Público como tal, su autonomía le ha sido reconocida a través de la Constitución del año 1979 y ratificada mediante la de 1993 y su propia Ley Orgánica, por ende no forma parte de ninguno de los poderes del Estado, actuando con independencia respecto a éstas y sometido solo a la Constitución; es decir que, su condición de ente autónomo le otorga independencia en el ejercicio de sus funciones.

Asimismo, refiere dicho investigador que: “Hoy por hoy, es un ente autónomo, jerárquicamente organizado y presidido por el Fiscal de la Nación, (...)”. También indica que “la autonomía de función de los fiscales resulta decisiva, en especial cuando hay de por medio delitos cometidos por funcionarios o personal del poder político”. Que, “como institución el Ministerio Público peruano se sustenta en la división de funciones entre los órganos jurisdiccionales (Poder Judicial) y los órganos requirentes de la denominada acción penal que antes actuaban como un todo al interior del Poder Judicial”. (Navarro Vega, 2010, pág. 32)

En ese sentido, cuando hablamos de ente jerárquicamente organizado, debemos precisar que tal principio no conlleva a anular su autonomía de un fiscal de menor jerarquía en el desarrollo de sus funciones en relación a otro de mayor jerarquía.

#### **4.1.7. Ubicación constitucional del Ministerio Público.**

Como vemos, la Constitución Política del Estado del año 1993 continúa manteniendo en lo fundamental el mismo esquema que la Constitución anterior de 1979, sin embargo precisa que, una de las atribuciones constitucionales del Ministerio Público, es la de conducir la investigación del delito, lo que se deberá interpretar como una facultad superior de la autoridad del Ministerio Público en relación a la que ejerce la Policía Nacional.

Al respecto el Dr. Freddy Mori Principe (2011) en su libro: *La investigación del Delito: El Policía, el Fiscal y el Juez; Derechos Fundamentales del Imputado*, señala:

La Constitución Política nos enseña que la República del Perú es democrática, social, independiente y soberana; que el Estado es uno e indivisible; que su gobierno es unitario, representativo y descentralizado, y se organiza según el principio de la separación de poderes (artículo 43). (...) En esa división de funciones del aparato estatal encontraremos la función judicial, la función legislativa, la función coercitiva a través de la Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Ministerio Público, y, otras funciones más.

Conocen los operadores del derecho que los fiscales hasta antes de la promulgación de la Constitución Política de 1979 formaban parte del Poder Judicial. La citada Carta Política le dio otra envergadura jurídica y política al Ministerio Público, y, a partir de entonces constituye una función autónoma del poder estatal dentro de la administración de justicia. Los que participan en la administración de justicia penal deben estar enterados que: "... en sus orígenes históricos modernos (...) el Ministerio Público se desarrolló como una institución con fuerte afinidad al sistema judicial, lo que llevó incluso a afirmaciones tales como que los fiscales surgían de la "costilla de los jueces". Esta afinidad hizo que el Ministerio Público se constituya como un organismo "cuasijudicial" o a medio camino entre una institución con identidad corporativa propia, y una adoptada de los órganos judiciales (pág. 239).

Así pues, la labor del Ministerio Público, como integrante del sistema de administración de justicia, tiene sus propias funciones, y por ende, debe cumplir con el mandato constitucional de ser el titular de la acción procesal penal, de ser el responsable de la investigación y ser el responsable de la carga de la prueba, dado que si bien su función no es la de administrar justicia, sí lo es la protección de intereses públicos y sociales, con el único fin de lograr la correcta satisfacción de éstos. Es decir, se trata de una labor postulante, lo que implica solicitar se realice esa actividad jurisdiccional. Cabe precisar que la función del Ministerio Público se rige por la presencia de importantes principios, tales como el de Imparcialidad, Legalidad, Independencia, la Razonabilidad, es decir que su actuar debe ajustarse a lo que es razonable, dejando de lado el abuso y la arbitrariedad.

Ahora bien, en cuanto a sus funciones, la Constitución Política de 1993, ha establecido en el artículo 159° que al Ministerio Público le corresponde las funciones siguientes:

- 1) Promover de oficio, o a petición de parte, la acción judicial en la defensa de la legalidad y de los intereses públicos y tutelados por el Derecho.
- 2) Velar por la independencia de los órganos jurisdiccionales y por la recta administración de justicia.
- 3) Representar en los procesos judiciales a la sociedad.
- 4) Conducir desde el inicio la investigación del delito. Con tal propósito, la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función.
- 5) Ejercitar la acción penal de oficio o a petición de parte.
- 6) Emitir dictamen previo a las resoluciones judiciales en los casos que la ley contempla.
- 7) Ejercer iniciativa en la formación de las leyes; y dar cuenta al Congreso, o al presidente de la República, de los vacíos o defectos de la legislación.

El Ministerio Público debe participar desde un primer momento en las investigaciones, a efectos de reconocer su punibilidad, individualizar al autor y analizar si no ha prescrito la acción penal, máxime que es responsable de la carga de la prueba, esto es de reunir los medios probatorios que acrediten la responsabilidad de los imputados, ya que su Ley Orgánica en el artículo 14° le da dicha atribución.

El Ministerio Público, a través de sus fiscales, ante la existencia de la “notitia criminis”, tendrá que decidir si resulta necesario iniciar una investigación preliminar o no, antes de tomar decisión de formalizar una denuncia ante el Poder Judicial, o en todo caso, formalizar la investigación preparatoria. La investigación se puede realizar a nivel de la Policía Nacional o solicitando el apoyo de otros organismos públicos o privados, para dilucidar sobre los hechos, así mismo podría reunir un equipo interdisciplinario de investigación; o si se ha reunido los requisitos básicos, puede formalizar la denuncia directamente, formulando acusación.

Es en función a esta labor que ejercen los fiscales que, nuestra investigación tratará de verificar si las actuaciones del Ministerio Público en la investigación del delito en su fase preliminar, la cual es la base fundamental de un procedimiento penal, puesto que en ésta se acopia todo el material probatorio a su carga y cuyo destino es probar un delito así como atribuir tal responsabilidad al imputado, se realizan adecuadamente.

#### **4.1.8. Estructura.**

Tal como se ha indicado precedentemente, el Ministerio Público es un organismo jerárquicamente organizado, que se encuentra conformado por:

- ✍ El Fiscal de la Nación.
- ✍ Los fiscales supremos.
- ✍ Los fiscales superiores.
- ✍ Los fiscales provinciales.
- ✍ Los fiscales adjuntos.

Esta estructura del Ministerio Público está contemplada en el artículo 36° de la Ley Orgánica del Ministerio Público, Decreto Legislativo Nro. 052 de fecha 18 de Marzo de 1981.

#### **4.1.9. Funciones.**

En cuanto a las funciones del Ministerio Público, éstas están previstas en el artículo 60° del actual Código Procesal Penal del año 2004, las cuales son:

- a) El Ministerio Público es titular del ejercicio de la acción penal. Actúa de oficio, a instancia de la víctima, por acción popular o por noticia policial.



- b) El fiscal, conduce desde su inicio la investigación del delito. Con tal propósito la Policía Nacional está obligado de cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función.

En ese sentido, la investigación del delito en la fase preliminar, constituye la base fundamental de todo el procedimiento penal, puesto que, al suscitarse la comisión de un hecho delictivo, el fiscal está en la posibilidad de recoger y acopiar todo el material probatorio, a fin de probar el injusto penal y la responsabilidad penal del imputado. En esta etapa se busca reunir los elementos de convicción, sean estos de cargo o descargo, que permitan de modo alguno decidir si formula o no acusación; es decir, como señala Peña Cabrera (2016) de lo que se trata es de “determinar si la conducta incriminada es delictuosa; las circunstancias o móviles de su perpetración; la identidad del autor, o partícipe, así como la existencia del daño causado”. (Peña Cabrera Freyre A. R., 2016, pág. 81)

#### **4.1.10. Principios que rigen la actuación del Ministerio Público.**

Los principios que rigen la actuación del Ministerio Público en el actual Código Procesal Penal son los siguientes:

##### **4.1.10.1. El principio de legalidad.**

Este principio según Morales Saldaña (2012), involucra que “toda conducta delictiva debe ser objeto de investigación, persecución penal y sanción” (Morales Saldaña, 2012, pág. 24). Es decir que procesalmente, todo hecho con características de delito debe ser investigado y sancionado, cuya persecución está a cargo del Ministerio Público, bajo el principio de investigación oficial, pues el Estado a partir de la Constitución le ha delegado dicha tarea.

Dicho principio como tal, está presente en todas las etapas del proceso penal y se puede afirmar que se mantiene en tanto el Ministerio Público ejercita la acción penal; es decir que, solo culminará cuando se dicta sentencia condenatoria, se decide el archivo del proceso o existiendo sentencia absolutoria, no se impugna, o, cuando, aplica criterios de

simplificación en el proceso penal tendientes al sobreesimiento.

#### **4.1.10.2. El principio de objetividad.**

Este principio previsto en el Art. IV apartado 2 del Código Procesal Penal, establece que el fiscal “está obligado a actuar con objetividad, indagando los hechos constitutivos de delito, los que determinen y acrediten la responsabilidad o inocencia del imputado”, el mismo que resulta concordante con el artículo 61º del mismo cuerpo legal que establece que el fiscal “adecua sus actos a un criterio objetivo”. Como vemos este principio resulta de fundamental trascendencia en la actuación del ente estatal en estudio, toda vez que la objetividad debe estar presente en el ejercicio de sus atribuciones para decidir si se inicia o no una investigación preliminar o si se formaliza o no una investigación preparatoria, así como está presente cuando el fiscal decide la realización de las diligencias necesarias o recopilación de elementos probatorios para alcanzar los fines del proceso y, principalmente, para formular el requerimiento acusatorio. El actuar bajo este criterio objetivo le permitirá al fiscal formular hipótesis de trabajo, de modo que las diligencias o actuaciones fiscales inmediatas se encuentren orientadas a alcanzar ese mínimo probatorio necesario que dé configuración a un hecho punible para iniciar formalmente una investigación preparatoria, por cuanto no se trata de lo que diga el texto de la denuncia de parte, sino de lo que se evidencia de su contenido o de lo que aparezca de las primeras diligencias de investigación.

#### **4.1.10.3. El principio de imparcialidad e independencia.**

Nuestro Código Procesal Penal en su artículo 61º numeral 1) establece que “el fiscal actúa en el proceso penal con independencia de criterio (...) rigiéndose únicamente por la Constitución y la Ley; sin perjuicio de las directivas o instrucciones de carácter general que emita la Fiscalía de la Nación”; es decir que, en las funciones desarrolladas el fiscal tiene como únicos límites la Constitución y a su Ley Orgánica, es dentro de este marco actúa que con independencia de criterio, lo cual implica que, en el ejercicio de sus funciones, no debe admitir interferencias de ninguna clase, provengan estas del interior de la institución o del propio poder político.

En ese sentido, este principio exige que el fiscal en tanto órgano judicial que dirige la investigación preliminar y preparatoria actúe de forma neutral, asegurando a las partes su libre acceso a la causa, posibilitando en ellos la misma oportunidad de recursos y ofrecimiento de pruebas, las notificaciones así como su intervención en las diligencias que le son propias tanto a la víctima como al imputado.

La imparcialidad exige que el fiscal no se incline a favor de alguna de las partes, de lo contrario, cabe que se le pida o que se inhiba o se excuse de seguir conociendo del caso. Conforme a la nueva ley procesal, sólo los jueces pueden ser recusados (Art. 53°), sin embargo, el Fiscal Superior, previa indagación, puede disponer el reemplazo del Fiscal cuando incurra en causal de recusación establecida para los jueces (Art. 62°.1).

#### **4.1.11. El Ministerio Público como titular de la acción penal.**

El Ministerio Público como organismo constitucional autónomo, es el titular de la acción penal, puesto que según Peña Cabrera (2016) “asume la conducción directriz de la investigación criminal desde sus inicios, consagrándose de esta manera el principio acusatorio en el sistema procesal penal” (pág. 82). En ese sentido, es quien tiene la titularidad del ejercicio de acción penal pública. Puesto que es el único organismo facultado legalmente para formular o formalizar la acusación ante el Juez unipersonal en lo penal.

Así pues, la importancia de la investigación preliminar en el actual Código Procesal Penal resulta de suma trascendencia para el futuro de todo proceso penal y que, según Morales Saldaña (2012):

Si bien es cierto en el Nuevo Código Procesal Penal taxativamente no se considera como una etapa procesal; ésta constituye una fase “sui generis” puesto que si la misma es eficiente, oportuna, dinámica y eficaz toda vez que si logramos la confirmación judicial por parte del Juez de la Investigación Preparatoria de estas diligencias, la investigación preliminar tendrá una fortaleza para que el órgano jurisdiccional sin alternativa alguna emita sentencia condenatoria. (págs. 29-30)

Así, según el citado autor, la etapa de la investigación preliminar es de vital importancia, toda vez que una eficiente, oportuna, dinámica y eficaz investigación conlleva a la obtención de resultados exitosos en el desarrollo de un proceso penal. En ésta etapa es cuando el fiscal reúne los elementos de convicción suficientes, idóneos, a fin de decidir la formulación o no de una acusación. En ese sentido, el fiscal es el director de la investigación, durante dicha etapa, según el mismo autor “ el Ministerio Público representado por el fiscal, cuenta para ello con el apoyo de la Policía Nacional, pero este tiene que ser sincero, real e íntegro para que la investigación sea totalmente contundente”, puesto que “si no es así, la investigación preliminar se distorsiona y podríamos llamarla de cualquier manera menos investigación preliminar seria y eficiente” (pág. 30). En consecuencia, el Ministerio Público como director de la investigación preliminar es el encargado de formular una estrategia de investigación, y para tal fin se sirve de la propia Policía Nacional del Perú.

#### **4.1.12. Contenido de la denuncia.**

En cuanto a la denuncia, ésta según el Dr. Víctor Jimmy Arbulú Martínez (2014), en su libro: *La Investigación Preparatoria en el Nuevo Proceso Penal*, señala que es:

Facultad que la tiene cualquier ciudadano, lo que se conoce como la acción popular en el artículo 326.1 del Código Procesal Penal con la condición que el ejercicio de esta acción sea público, esto es, con intervención de la Fiscalía”, sin embargo que “tratándose de acciones privadas, el titular es el querellante o agraviado en los delitos establecidos en el Código Penal como delitos contra el honor o la intimidad”; en efecto nuestro Código Procesal Penal en el Título II: La denuncia y los actos iniciales de la investigación, capítulo I: La denuncia, artículo 326° prevé la facultad y obligación de denunciar, cuyo inciso 1), nos indica que cualquier persona tiene tal facultad de denunciar hechos delictuosos ante la respectiva autoridad, siempre que el ejercicio de la acción penal sea público, sin embargo en su inciso 2) también señala que hay quienes están en la obligación de denunciar, como por ejemplo los profesionales de la salud por los delitos que conozcan en el desempeño de su actividad, así como los educadores por los delitos que se hayan cometido en el centro educativo; así como los funcionarios en el ejercicio de sus atribuciones o por razón de su cargo, tomen conocimiento de la realización de algún hecho delictivo (pág. 101).

Ahora bien, en cuanto al contenido de la denuncia, el Dr. Morales Saldaña (2012), ha

indicado que en nuestro nuevo Código Procesal Penal “el contenido de toda denuncia penal para lograr una finalidad inmediata deberá reunir como mínimo tres presupuestos esenciales” y ellos son: “ a) la identidad del denunciante, b) narración de los hechos y la individualización del presunto autor o partícipe”. (pág. 30)

A continuación se desarrollan cada uno de los presupuestos indicados por el citado autor, desde la perspectiva del mismo:

- a) **Identidad del denunciante**, para el autor que se cita, “éste presupuesto tiene como finalidad que la persona que pone en conocimiento la posible comisión de un delito tendrá que identificarse con sus nombres y apellidos completos”, que solamente “se deberá usar algún seudónimo o clave secreta, en los casos especiales cuando se ponga en grave peligro la vida o la integridad física del denunciante, deberá consignarse también el sexo, su edad y su domicilio real y procesal” (pág. 31); en ese sentido pues la denuncia debe tener la identidad del denunciante y ante el temor a represalias por parte de estos, se puede recurrir al uso de algún seudónimo o clave secreta para identificarlos.
- b) **Narración de los hechos**, la denuncia debe contener una narración detallada de los hechos imputados, de preferencia serán presentados de manera ordenada señalando la intervención del denunciado, los medios que utilizó, los daños ocasionados, que los hechos sean reales, verídicos; es decir que en la denuncia deben constar de manera detallada los hechos materia de denuncia, a fin de llevar un orden en cuanto al relato de éstos, procurando que los hechos que se denuncien se ajusten a la verdad.
- c) **Individualización del presunto autor o partícipe**; finalmente, el autor en estudio nos indica que resulta de vital importancia en una denuncia individualizar al supuesto autor o partícipe del mismo (pág. 31).

El cumplimiento de los tres requisitos según el citado autor, hace viable que se pueda iniciar una “investigación fiscal o policial en forma preliminar pero ambas deberán ser

orientadas o conducidas por el representante del Ministerio Público” (Morales Saldaña, 2012, pág. 30). Es decir que, el Fiscal en su condición de titular de la acción penal, es quien asume la dirección de la investigación desde sus inicios y como director de la investigación, éste propone la estrategia de investigación, para lo cual se sirve de la Policía Nacional.

#### **4.1.13. Actos iniciales de la investigación.**

Nuestro actual Código Procesal Penal en su artículo 329° dispone las formas de iniciar la investigación, así, establece:

1. El Fiscal inicia los actos de investigación cuando tenga conocimiento de la sospecha de la comisión de un hecho que reviste los caracteres de delito. Promueve la investigación de oficio o a petición de los denunciantes.
2. La inicia de oficio cuando llega a su conocimiento la comisión de un delito de persecución pública.

En ese sentido, el Fiscal que tenga conocimiento de la sospecha de la comisión de un hecho que reviste los caracteres de delito, promoverá la investigación, sea esta de oficio o a petición de parte. En ese sentido, el fiscal deberá iniciar la investigación en forma rápida, dinámica, a fin de recabar los primeros elementos probatorios, su aseguramiento, la práctica de las pericias necesarias, cuidándose la escena del crimen, proteger y custodiar a los testigos y más que todo a las víctimas del delito.

#### **4.1.14. Las diligencias preliminares.**

Nuestro Código Procesal Penal en su artículo 330° dispone que:

- “El Fiscal puede, bajo su dirección, requerir la intervención de la Policía o realizar por sí mismo diligencias preliminares de investigación para determinar si debe formalizar la Investigación Preparatoria.
2. Las Diligencias Preliminares tienen por finalidad inmediata realizar los actos urgentes o inaplazables destinados a determinar si han tenido lugar los hechos objeto de conocimiento y su delictuosidad, así como asegurar los elementos materiales de su comisión, individualizar a las personas involucradas en su comisión, incluyendo a los agraviados, y, dentro de los límites de la Ley, asegurarlas debidamente.

3. El Fiscal al tener conocimiento de un delito de ejercicio público de la acción penal, podrá constituirse inmediatamente en el lugar de los hechos con el personal y medios especializados necesarios y efectuar un examen con la finalidad de establecer la realidad de los hechos y, en su caso, impedir que el delito produzca consecuencias ulteriores y que se altere la escena del delito”.

Ahora bien, el citado artículo dispone que las diligencias preliminares constituyen los primeros actos de investigación que realiza el fiscal, a fin de poner a buen recaudo todos los elementos que tengan relación ya sea directa o indirecta con el hecho delictuoso. Estas diligencias preliminares servirán al fiscal para que tome la decisión de formular acusación o no, dependiendo de la naturaleza del caso que se le presente.

En ese sentido, el objeto de las diligencias preliminares en la norma procesal penal es justamente que el representante del Ministerio Público se agencie de los elementos necesarios e idóneos que de cierto modo le permitan calificar adecuadamente la imputación, siendo que éstos le servirán para formalizar la investigación preparatoria o en todo caso, archivar la denuncia; es decir que, cuando el hecho constituya delito, sea justiciable penalmente, y de no tener relevancia jurídica, archivarlo.

En ese sentido, las diligencias preliminares constituyen el primer momento de la investigación, cuya finalidad es la realización de los actos urgentes para determinar la veracidad de los hechos imputados y su carácter delictuoso, asegurar los elementos materiales que se utilizaron en la perpetración del hecho investigado, así como la individualización tanto de los autores, partícipes o cómplices y también los agraviados; diligencias que deberán realizarse en un plazo de sesenta días naturales, los mismos que serán computados desde el día en que el Fiscal mediante una resolución motivada, dispone la realización de las diligencias preliminares, pudiendo ampliarse cuando el caso revista especial complejidad. El propósito de las diligencias preliminares entonces es efectuar los actos urgentes e inaplazables, los cuales deberán realizarse conforme a cada caso concreto, y que sean útiles, para determinar si efectivamente ocurrieron o no los hechos materia de investigación, así como su carácter delictuoso.

#### **4.1.14.1. Disposición de archivo.**

De conformidad con el artículo 334° inciso 1) del Código Procesal Penal se establece que:

Si el fiscal al calificar la denuncia o después de haber realizado o dispuesto realizar las diligencias preliminares, considera que el hecho denunciado no constituye delito, no es justiciable penalmente o se presentan causas de extinción previstas en la ley, declarará que no procede formalizar y continuar con la investigación preparatoria, así como ordenará el archivo de lo actuado. Esta disposición se notificará al denunciante y denunciado.

Como se advierte del citado texto legal, el fiscal está facultado para no continuar con aquellos casos que no reúnen los requisitos mínimos para ser sometidos a una persecución penal, según Peña Cabrera (2016), sea por “cuestiones de atipicidad objetiva (riesgo permitido), atipicidad subjetiva (ausencia de dolo y/o culpa, error de tipo invencible), concurrencia de causas de justificación (legítima defensa, estado de necesidad justificante, ejercicio legítimo de un derecho, etc.)”, así como por la “presencia de causas supresoras legales de punibilidad (excusa absolutoria) o la negación de una condición objetiva de punibilidad”, añadiendo aquellas “condiciones que se contemplan en el artículo 78 del CP, que poseen la virtualidad de dar por extinguida la acción penal (prescripción de la acción penal, muerte del imputado, amnistía, cosa juzgada, derecho de gracia)” o que, “habiéndose denunciado la presunta comisión de un delito, no existen mínimas evidencias que ello habría ocurrido” (Peña Cabrera Freyre A. R., 2016, pág. 144). En tal sentido, son estas las condiciones que podrían traer como consecuencia la emisión de una disposición de archivo por parte del fiscal a cargo de una investigación.

#### **4.1.14.2. El plazo para la investigación preliminar.**

Para el Dr. Cristian Salas Beteta (2010), en su libro: *Investigación Preparatoria y etapa intermedia-Problemas de aplicación del Código de Procesal Penal de 2004*, ha señalado:

“Una vez que el Fiscal toma conocimiento de la comisión de un hecho que reviste características delictivas, inicia los actos de investigación; requiriendo la intervención policial o realizando por sí mismo las diligencias preliminares con la finalidad de cumplir inmediatamente con



los actos urgentes o inaplazables destinados a determinar si los hechos ocurrieron y su delictuosidad, así como asegurar los elementos materiales de su comisión, individualizar a los involucrados y asegurarlos debidamente. El fiscal puede constituirse inmediatamente en el lugar de los hechos con el personal y los medios especializados para examinar la escena de los hechos e impedir su alteración.

Las diligencias preliminares consisten en un conjunto de los actos realizados por el fiscal o por la policía, por encargo de aquel o por urgencia y necesidad. Como es obvio, forman parte de la investigación preparatoria y las actuaciones que se realicen en esta fase no podrán ser repetidas en la investigación preparatoria formalizada.

Estas diligencias preliminares tienen por finalidad realizar actos urgentes o inaplazables, asegurar los elementos materiales de la comisión del delito, individualizar a las personas involucradas en la comisión del hecho punible y a los agraviados, todo ello para que el Fiscal tome una decisión respecto a una eventual formalización de la investigación preparatoria. (págs. 16-17).

Por su parte el Dr. Arsenio Oré Guardia (2005), en su libro: *El Ministerio Fiscal: Director de la investigación en el Nuevo Código Procesal Penal del Perú*, al respecto ha señalado:

La finalidad de estas diligencias es determinar si el fiscal debe o no formalizar investigación preparatoria. (...) Concluido el plazo (...), el fiscal optará por alguna de las siguientes alternativas:

- i. Si considera que los hechos no constituyen delito, no son justiciables penalmente, o existen causas de extinción, declarará que no hay mérito para formalizar investigación preparatoria y ordena el archivamiento. En este caso el denunciante puede acudir al fiscal superior.
- ii. Si el hecho fuese delictuoso y la acción penal no ha prescrito, pero falta la identificación del autor o partícipe, ordenará la intervención de la policía.
- iii. Si hay indicios reveladores de la existencia de un delito, que la acción no ha prescrito, que se ha individualizado al actor, y que- si fuera el caso- se ha satisfecho el requisito de procedibilidad, dispondrá la formalización de la investigación preparatoria.
- iv. Si considerase que existen suficientes elementos que acreditan la comisión del delito y la participación del imputado, podrá formular directamente la acusación. (pág. 9)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 334°, inciso 2 del Código Procesal Penal, el plazo de las diligencias preliminares, es de sesenta días, salvo que se produzca la detención de una persona, puesto que aquí los plazos se subordinan a los plazos

máximos de detención de una persona. Sin embargo se precisa que, el fiscal podrá fijar un plazo distinto según las características, complejidad y circunstancias de los hechos objeto de investigación. En este plazo, se entiende que el fiscal lleve a cabo todas las diligencias preliminares y el plazo extraordinario, puede ser dispuesto por el Fiscal según la complejidad y circunstancias de los hechos objeto de investigación en cada caso concreto.

En ese sentido, el plazo de las diligencias preliminares es de 60 días conforme lo dispuesto en el artículo 334° inciso 2) del Código Procesal Penal, el que se inicia desde que el fiscal competente toma conocimiento de la denuncia y dispone la realización de las diligencias conforme a lo dispuesto en el artículo 329° del mismo cuerpo legal y que en todo caso, por la complejidad de los hechos denunciados, sus características y la pluralidad de agentes se podría ampliar hasta 120 días y por casos especiales, el plazo de investigación preliminar es similar al plazo de la investigación preparatoria que es de ocho meses, caso contrario está claro que el afectado podría recurrir al Juez de investigación Preparatoria previo requerimiento al señor Fiscal Provincial para el término de su investigación, en un plazo no mayor de cinco días vía control de plazo.

De conformidad con los lineamientos establecidos en la Casación Nro. 144- 2012- Ancash y 134-2012-Ancash, el plazo máximo de las diligencias preliminares no es mayor al plazo de la investigación preparatoria (fj. “sexto” de la Cas. 144-2012), esto es ocho meses (según las normas del CPP 2004 vigentes al momento de la emisión de la casación). Sin embargo, con la entrada en vigencia de la Ley 30077 publicada el 20 de agosto del 2013, se estableció treinta y seis (36) meses como plazo para la investigación preparatoria en procesos penales seguidos contra organizaciones criminales. En tal sentido, el plazo límite que debe verificarse en investigaciones seguidas contra organizaciones criminales serían de treinta y seis meses, y no de ocho meses como se había señalado en antes de la Ley 30077, según la legislación vigente.

#### **4.1.14.3. El control de plazos de las diligencias preliminares.**

Nuestro Código Procesal Penal en su artículo 329° establece que las diligencias preliminares se encuentran bajo la dirección del Fiscal, etapa que se encuentra sujeta a control, conforme lo previsto en el artículo 334°.2), esto es cuando: a) el plazo máximo de las diligencias preliminares ha vencido, y b) se advierta una excesiva duración de las diligencias preliminares, en este último caso el afectado debe solicitar al fiscal le dé término y de no ser aceptada la solicitud corresponde acudir al juez de investigación preparatoria.

Como se ha señalado precedentemente, es el fiscal quien tiene la facultad de fijar el plazo de investigación según las características de complejidad y circunstancias del caso, la que deberá delimitarse dentro del plazo máximo, caso contrario el afectado puede acudir al juez de investigación preparatoria.

#### **4.1.14.4. Identificación del presunto autor o partícipe.**

Según el artículo 334° inciso 3) del Código Procesal Penal: “En caso de que el hecho fuese delictuoso y la acción penal no hubiere prescrito, pero faltare la identificación del autor o partícipe, ordenará la intervención de la policía para tal fin”. En ese sentido, se indica que cuando exista suficientes indicios de criminalidad, y encontrándose vigentes los plazos de persecución penal pero sin identificación del supuesto autor o partícipe del hecho delictivo, es imprescindible que el fiscal ordene al personal policial competente recabe los datos necesarios a fin de identificarlo debidamente, a efectos de que el representante del Ministerio Público pueda formalizar investigación preparatoria, ello de conformidad al principio de identidad personal.

#### **4.1.14.5. Reserva de la investigación.**

El artículo 334° inciso 4) del Código Procesal Penal dispone: “Cuando aparezca que el denunciante ha omitido una condición de procedibilidad que de él depende, dispondrá la reserva provisional de la investigación, notificando al denunciante”.

De lo anterior, se puede inferir que el representante del Ministerio Público dispondrá la reserva provisional de la investigación cuando advierta el incumplimiento de una condición objetiva de perseguibilidad, para cuyo efecto deberá notificar previamente al denunciante, a fin de no atentar contra su derecho de defensa. Ello implica entonces que, una vez cumplido con el requisito cuya omisión advirtió el fiscal, éste puede reabrir la investigación, y de ser el caso, formalizará investigación.

#### **4.1.14.6. Decisiones del fiscal superior.**

El artículo 334° inciso 5) del Código Procesal Penal, establece que “El denunciante o el agraviado que no estuviese conforme con la disposición de archivar las actuaciones o de reservar provisionalmente la investigación, requerirá al fiscal, en el plazo de cinco días, eleve las actuaciones al fiscal superior”. En ese sentido, se infiere que el denunciante tiene expedito su derecho para recurrir ante el fiscal superior, vía elevación de actuados, dentro del quinto día de notificada la disposición de archivo del fiscal provincial o cuando éste dispone la reserva provisional de la investigación, a fin de que el superior emita pronunciamiento al respecto también dentro del quinto día, pudiendo ordenar éste se formalice la investigación o confirmar el archivo de las actuaciones, así como declarar nula una disposición y ordenar al fiscal provincial la realización de determinadas diligencias.

## **CAPÍTULO V: EL ABUSO DE LA AUTONOMÍA DEL MINISTERIO PÚBLICO Y EL DEBIDO PROCESO**

### **5.1. ABUSO DEL DERECHO.**

En torno a esta sub teoría, primero desarrollaremos sus antecedentes históricos para poder llegar a una definición al respecto.

#### **5.1.1. Antecedentes.**

Siguiendo la proyección de nuestra investigación, ubicamos la categoría jurídica del abuso del derecho como un punto importante para su desarrollo, por ello buscaremos reconocer su origen, por lo que citamos al jurista peruano Gustavo Ordoqui Castillo (2014), quien habla del origen de la sub teoría en mención en su libro: *Abuso de Derecho en Civil, Comercial, Procesal, Laboral y Administrativo*:

La teoría del abuso del derecho comienza por la elaboración jurisprudencial en Francia. A partir de 1804, la jurisprudencia que representa el llamado derecho vivo, es el que por primera vez tiene que encarar la resultancia del ejercicio abusivo del derecho. Son famosas las sentencias de Colmar y Lyon, correspondientes a los tribunales de aquellas ciudades. Con la Sentencia de 2 de Mayo de 1855 se dio el germen de lo que sería la figura del abuso del derecho al limitar el derecho de propiedad, eje sobre el cual giraba fundamentalmente la codificación del Siglo XIX (pág. 93).

Desde la visión que nos otorga el autor, podemos verificar que esta teoría se origina en función de la protección de ciertos derechos ante el ejercicio abusivo del derecho o al incumplimiento de éste y según Rengifo García (2004), “la figura del abuso del derecho surgió en la jurisprudencia francesa para corregir dos rasgos jurídicos co-culturales del Código de Napoleón, el formalísimo legal y el absolutismo de los derechos, y de manera particular el de propiedad” (pág. 45). En tal sentido, el abuso del derecho fue una reacción natural ante el extremismo individualista que originaba resultados inaceptables en relación con el valor de justicia material.

Así pues, la teoría del abuso del derecho se construye sobre la base de ejercicios anormales, exóticos o dolosos del propietario, conforme se aprecia del repertorio

jurisprudencial, cuyo caso típico es el francés del siglo XIX, en el cual se puso límites al derecho de propiedad cuando se ejercitaba con la única intención de perjudicar a otro.

Por su parte, el Código Alemán consagró el abuso del derecho en una norma de carácter restrictivo, fundada en el elemento subjetivo (dolo), como se aprecia en el parágrafo 226 BGB: “Prohibición del abuso. El ejercicio de un derecho es ilícito si solo puede tener por finalidad causar daño a otro”.

Así pues, se puede decir que la institución del abuso del derecho se origina por las necesidades de la vida práctica y por la idea de solidaridad del ordenamiento jurídico, y más que todo, está la noción fundamental que los derechos subjetivos nunca son ilimitados, ni pueden ocasionar daños gratuitos a terceros, bajo pena de convertirse en actos ilícitos. Siendo ésta la razón que justifica la inclusión en nuestro planteamiento con la intención de corroborarlo con la acción del Ministerio Público en el ejercicio de determinadas acciones al amparo de su autonomía.

### **5.1.2. Definición.**

El Abuso del Derecho ha sido definido por el Jurista Gustavo Ordoqui Castillo (2014) como:

Cuando se ejerce un derecho sin respetar la finalística que justificó su existencia y se buscan otros fines diferentes y, por tanto, no reconocidos por el orden jurídico, entramos en la figura de lo ilícito y abusivo. El abuso del derecho se presenta como un apartamiento frontal no encubierto de los fines. En el abuso del derecho el derecho existe si no, no podría ser abusado (pág. 111).

El abuso del derecho es entendido como el ejercicio de un derecho contrario a las exigencias del orden jurídico; en tal sentido, será abusivo cuando tenga por finalidad causar daños a terceros el cual debe ser indemnizado, siendo dicho acto considerado como un acto ilícito que viola las normas legales. Es decir, implica pues que el titular de un derecho actúa formalmente dentro de las prerrogativas establecidas por la ley, empero el resultado es de manifiesta injusticia choca frontalmente con un valor reconocido por el ordenamiento jurídico, como lo mencionamos anteriormente, es el

caso típico del propietario que mandó construir una falsa chimenea sin utilidad alguna para sí, pero con el fin de perjudicar la vista de su vecino. Según Atienza y Ruiz (2006), “las acciones abusivas son acciones *prima facie* permitidas pero que finalmente resultan, considerando todas las cosas, prohibidas” (págs. 58-59). Es decir, el abuso del derecho reside en la disfuncionalidad de los comportamientos que si bien permitidos por las normas jurídicas, empero no se corresponden en el sistema en el que aquellas se integran, esto es que la consecuencia es que la conducta, formalmente permitida por la regla, empero se convierte en prohibida por aplicación del principio. Con el abuso del derecho se declaran ilícitas ciertas conductas, a pesar de la falta de tipificación en las reglas, pero que se deducen de la vigencia de los principios. Por tanto, la teoría del abuso de derecho sirve para impedir el reconocimiento de situaciones inicuas que se reputan extrañas al contenido mismo de la prerrogativa, pero que ante esta indeterminación de linderos pudieran ser considerados en apariencia como lícitos.

En consecuencia, el abuso del derecho presupone una conducta amparada en una regla que la cubre, pero que se encuentra en contradicción con un principio.

## **5.2. El abuso del derecho como principio constitucional.**

La Constitución Política peruana es tal vez la única que admite el abuso del derecho en una norma con ese rango normativo, estableciendo en su artículo 103° parte in fine: “La Constitución no ampara el abuso del derecho”, de lo cual se desprende, según palabras preliminares de Gunter Gonzáles Barrón al libro de Ordoqui Castilla (2014), dos consecuencias directas: “i) aplicación del abuso en el ejercicio de todos los derechos constitucionales; ii) aplicación del abuso en el ejercicio de todos los derechos, sin limitarse al ámbito civil”. (pág. 34).

El Tribunal Constitucional se ha pronunciado en pocas oportunidades sobre el abuso del derecho, y en realidad, las más de las veces, lo hace para recordar que la interposición de demandas temerarias y sin ningún tipo de fundamento es un típico caso de abuso procesal. Por ejemplo en la STC 00473-2007-PHC/TC, de 16/2/2007, se resolvió el caso de un habeas corpus planteado para dejar sin efecto resoluciones en materia civil, lo que

es manifiestamente improcedente, por lo que se: “ ha configurado la vulneración del artículo 103° de la Constitución, que proscribe el abuso del derecho. El abuso de los procesos constitucionales no solo constituye grave daño al orden objetivo constitucional sino también a la tutela de los derechos fundamentales de los demás ciudadanos. Esto es así por cuanto al hacer un uso abusivo de los procesos constitucionales se restringe la posibilidad de que este colegiado pueda resolver la demanda de tutela de quienes legítimamente concurren a este tipo de procesos a fin de que se amparen los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución”. La misma doctrina sobre abuso procesal, con demandas temerarias, se aprecia en la STC 7624-2005-PHC/TC, f.j. 19, STC 2118-2005-PA/TC, f.j. 3 y STC 01045-2008-PHC/TC, f.j. 6.

Nuevamente el Tribunal considera abusiva la conducta de una parte por su actuación al interior de un proceso (doble pago pretendido por el acreedor), como ocurre en la STC 000037-2012-PA/TC, f.j. 68: “ la cláusula constitucional que proscribe el abuso del derecho, aplicada al ámbito de los derechos fundamentales, supone la prohibición de desnaturalizar las finalidades u objetivos que sustentan la existencia de cada atributo, facultad o libertad reconocida sobre las personas (...). Los derechos, pues, no pueden utilizarse de una forma ilegítima o abusiva, como ocurre en el caso, en que la empresa Telefónica S.A.A pretenda obtener un doble beneficio por una misma causa, lo que a todas luces resulta inconstitucional”; no obstante en puridad, tal situación no representa “ abuso”, puesto que la conducta de cobrar doble es ilícita conforme a una regla de derecho, pues el acreedor solo tiene derecho a exigir prestación, y no más de eso (art.1220 CC).

### **5.3. El Principio de interdicción de la arbitrariedad.**

Al respecto, el Tribunal Constitucional en su Sentencia, expedida en el Expediente N° 2725-2008-PHC/TC Lima Caso: Roberto Boris Chauca Temoche y otros, ha precisado que:

6. Lo expuesto precedentemente tiene su fundamento, por otro lado, en el Principio de interdicción de la arbitrariedad, el cual es un principio y una garantía frente a la facultad discrecional que la Constitución ha reconocido al Ministerio Público. De ahí que se haya señalado en



sentencia anterior (Cf. Exp. N.º 06167-2005-PHC/TC. FJ. 30. Caso: Fernando Cantuarias Salaverry) que “el grado de discrecionalidad atribuido al fiscal para que realice la investigación sobre la base de la cual determinará si existen elementos suficientes que justifiquen su denuncia ante el juez penal, se encuentra sometida a principios constitucionales que proscriben: a) actividades caprichosas, vagas e infundadas desde una perspectiva jurídica; b) decisiones despóticas, tiránicas y carentes de toda fuente de legitimidad; y c) lo que es contrario a los principios de razonabilidad y proporcionalidad jurídica” (Roberto Boris Chauca Temoche y otros, 2008)

Como podemos advertir, si bien nuestra Constitución Política le ha asignado al Ministerio Público una serie de funciones, como la facultad de ejercitar la acción penal ya sea de oficio o a pedido de parte, en tanto que el Ministerio Público es un órgano constitucional constituido; ésta no puede ser ejercitada irrazonablemente con desconocimiento de los principios y valores constitucionales, tampoco al margen del respecto a los derechos fundamentales, que se erigen como auténticos límites al ejercicio del poder estatal (como también al de los particulares) como característica de un estado constitucional democrático, lo señalado precedentemente tiene su fundamento, en la interdicción de la arbitrariedad, la cual es un principio y garantía frente a la facultad discrecional que la ley ha reconocido al Ministerio Público. Por lo que el grado de discrecionalidad atribuido al fiscal para que realice la investigación sobre la base de lo cual determinará si existen elementos suficientes que justifiquen su denuncia ante el juez penal, se encuentra sometida a principios constitucionales que proscriben: a) actividades caprichosas, vagas e infundadas desde una perspectiva jurídica; b) decisiones despóticas, tiranas y carentes de toda fuente de legitimidad; c) lo que es contrario a los principios de razonabilidad y proporcionalidad jurídica.

#### **5.4. El control constitucional de los actos del Ministerio Público.**

Al respecto, el Tribunal Constitucional en su Sentencia, expedida en el Expediente N.º 2725-2008-PHC/TC Lima Caso: Roberto Boris Chauca Temoche y otros, ha precisado que:

3. La Constitución ha asignado al Ministerio Público una serie de funciones constitucionales, entre las cuales destaca la facultad de ejercitar la acción penal ya sea de oficio o a pedido de parte, tal como dispone el artículo 159º, inciso 5, de la Constitución. Si bien es una

facultad discrecional reconocida por el poder constituyente al Ministerio Público, es obvio que esta facultad, en tanto que el Ministerio Público es un órgano constitucional constituido y por ende sometido a la Constitución, no puede ser ejercida, irrazonablemente, con desconocimiento de los principios y valores constitucionales, ni tampoco al margen del respeto de los derechos fundamentales.

4. En realidad, ésta es una exigencia que se deriva de la naturaleza misma de nuestro Estado constitucional y democrático, si se considera que dos elementos caracterizadores de este tipo de Estado son la supremacía jurídica de la Constitución y la tutela de los derechos fundamentales. El primer elemento permite que la Constitución, establezca el marco jurídico dentro del cual se realiza el ejercicio de los poderes públicos y privados. Por su parte, la tutela de los derechos fundamentales, hace que éstos se erijan como auténticos límites al ejercicio del poder estatal, pero también de los particulares. En tal sentido, se puede señalar que el Estado constitucional se caracteriza, precisamente, por limitar y controlar el ejercicio arbitrario del poder del Estado y de los particulares.

5. En esta misma línea de limitación y control del poder público y privado, el artículo 200°, inciso 1, de la Constitución establece que el proceso constitucional de hábeas corpus “(...) procede ante el hecho u omisión de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos constitucionales conexos”. De acuerdo con ello, la Constitución no ha excluido la posibilidad de realizar un razonable control constitucional de los actos del Ministerio Público, pues ha previsto la procedencia del hábeas corpus contra cualquier autoridad, funcionario o persona que amenaza o vulnera el derecho a la libertad personal o los derechos conexos. (Roberto Boris Chauca Temoche y otros, 2008)

Como sabemos el Ministerio Público, tiene el ejercicio exclusivo de la acción penal pública, de oficio o a petición de parte; es decir que ante una denuncia o el conocimiento de un hecho que reviste caracteres de delito, podrá abrir investigación a fin de recabar los medios probatorios en torno al mismo, para lo cual necesitará del apoyo de los efectivos de la policía nacional, o formalizar denuncia ante el Poder Judicial, en su condición de titular de la acción penal.

Sin embargo, dado que la actuación del Ministerio Público sí está sometida al control constitucional, en el desempeño de sus funciones, los fiscales deben respetar el derecho fundamental al debido proceso, toda vez que este derecho no sólo es de observancia en

sede jurisdiccional, sino que se despliega sus efectos en todos los ámbitos donde se dilucida la afectación de derechos fundamentales, no siendo ajena al Ministerio Público, puesto cuando éste investiga, actúa como autoridad.

Al respecto, el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado sobre el control constitucional de los actos del Ministerio Público en la Sentencia contenida en el Exp. N.º 6204-2006-PHC/TC, del 9 de agosto de 2006, Caso Chávez Sibina., al establecer que la facultad discrecional reconocida por el Poder Constituyente, no lo excluye de este control por tratarse de un poder constituido, y por ende, su facultad no puede ser ejercida irrazonablemente, fuera del marco constitucional y del respeto a los derechos humanos. Asimismo, el Tribunal Constitucional en la Exp. N.º 6167-2005- PHC/TC, sentencias del 28 de febrero 2006, Caso Canturias Salaverry; y la N.º 6204- 2006-PHC/TC, citada precedentemente. Se ha pronunciado en relación al debido proceso, que despliega su eficacia jurídica en el ámbito de la etapa prejurisdiccional de los procesos penales, esto es durante la investigación preliminar.

En ese sentido, si bien es verdad nuestra Constitución Política del año 1993 en su artículo 200º no hace alusión alguna dentro de las garantías constitucionales a que las disposiciones de los fiscales puedan ser objeto de control constitucional, mediante acción de amparo o hábeas corpus, sin embargo las actuaciones que este realiza en la etapa prejurisdiccional debe ser con claro respeto al debido proceso, toda vez que están sometidos al control constitucional

## **CAPÍTULO VI: ANÁLISIS Y RESULTADOS**

En esta parte de la investigación corresponde plasmar los resultados que se han obtenido del análisis de los aspectos que han estructurado el trabajo de campo, dada la constitución de la investigación una de tipo descriptiva, procedimos a analizar cómo se garantiza el debido proceso a través del control constitucional frente al abuso de la autonomía del Ministerio Público; siendo que la población se delimitó en el Distrito Fiscal de Lambayeque en donde se recogieron las posturas de hombres de derecho en el campo del derecho procesal penal y derecho constitucional, así como de los propios fiscales que integran las 3 Fiscalías Provinciales Penales Corporativas de esta ciudad, toda vez que, lo que se busca identificar es si se comete o no abuso por parte del Ministerio Público en el ejercicio de sus atribuciones y deberes y, de qué forma se podría garantizar la observancia del debido proceso, primordialmente nuestro trabajo abarcará la etapa preliminar de la investigación.

Siendo así, se logró estimar que la muestra a trabajar está conformada por sesenta (70) individuos, sobre los cuales se aplicó la encuesta que figura anexa a la presente investigación, a fin de conocer cuánto conocen del tema objeto de investigación.

Además de lo indicado, se ha creído importante realizar el análisis sobre los datos estadísticos obtenidos del Ministerio Público respecto de los casos ingresados, archivados así como la totalidad de la carga fiscal en los despachos de las 3 Fiscalías Provinciales Penales Corporativas de Chiclayo durante los años 2016 y 2017. Al mismo tiempo, a efectos de determinar si podrían existir otros factores que conlleven a que los fiscales hagan un uso inadecuado de su autonomía, se solicitó información respecto a la totalidad de los recursos humanos asignados a cada una de las 3 fiscalías mencionadas y de los bienes de uso asignados a las mismas.

De igual modo, se tomó como opción la verificación de la posición jurisprudencial y el análisis de una carpeta fiscal respecto a este tema, por lo que plasmamos en un cuadro analítico las posturas adoptadas en los diferentes fallos tanto del Tribunal Constitucional y la Corte Suprema de la República, cuanto de las disposiciones fiscales expedidas en la carpeta fiscal Nro. 140-2016 por la Fiscalía Provincial Mixta de Yonán-Tembladera

y la 2ª Fiscalía Superior Penal de Cajamarca y una disposición expedida por la 2º Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, no sin antes dejar constancia que, dichas disposiciones contenidas en la citada carpeta fiscal se han conseguido realizando una búsqueda personal; y con el fin de reforzar la evidencia de la existencia del problema investigado se hizo el análisis de la indicada carpeta fiscal del Distrito Fiscal de Cajamarca, la misma que precisamente me motivó investigar el tema en estudio, haciendo notar una de las dificultades que impiden el desarrollo de la investigación en general, es el acceso a las carpetas fiscales en este Distrito Fiscal por tratarse de información reservada, conforme se advierte de la copia del Oficio Circular Nro. 018-2017-MP-FN que anexo a este trabajo.

## **6.1. Análisis de los resultados.**

Tal cual lo detallado anteriormente, procederemos a plasmar los resultados, rubro por rubro de la siguiente manera:

### **6.1.1. Resultados del análisis estadístico.**

Con el fin de establecer un criterio exacto del tema investigado, se ha tomado la información de la estadística de casos de las 3 Fiscalías Provinciales Penales Corporativas de Chiclayo, conforme así aparece del **ANEXO Nro. 01**, en el que se pueden observar los siguientes datos:

Para empezar debo hacer presente que, la primera vez que se solicitó información estadística a la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Lambayeque, se recibió información con datos estadísticos totalmente distintos a los obtenidos recientemente, motivo por el cual por discriminación de datos, se ha optado por utilizar la última información que se ha recibido, de la cual se determinan los siguientes resultados:

**CUADRO Nro. 01:**

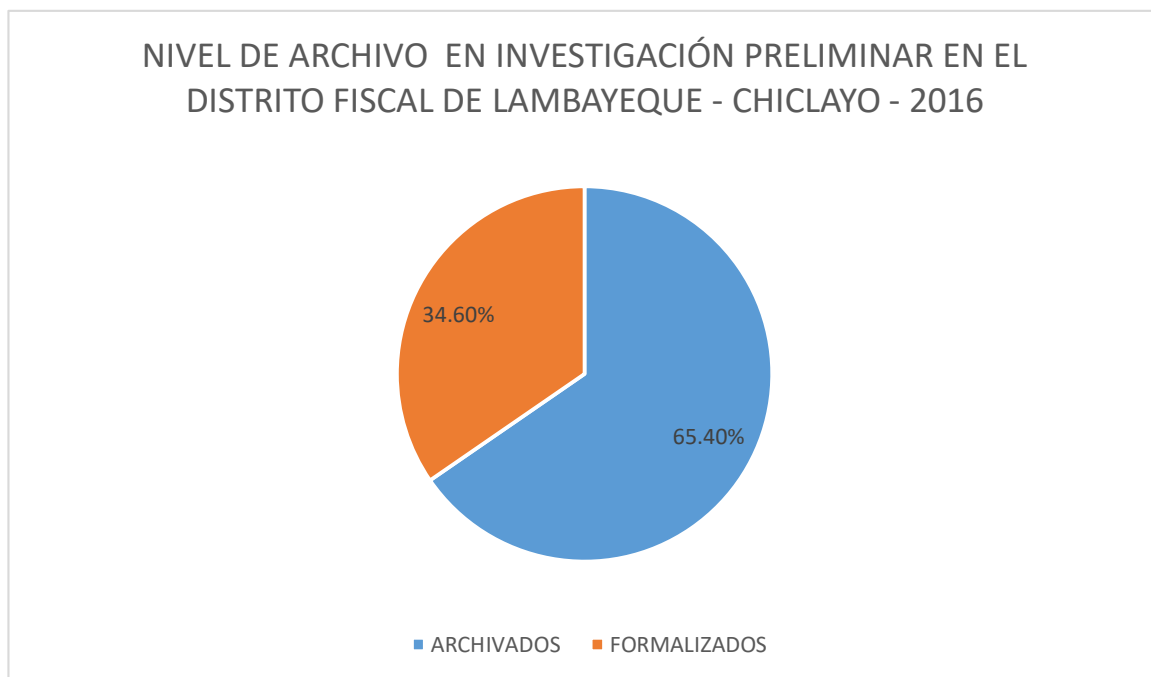
<b>ESTADÍSTICA DEL MINISTERIO PÚBLICO: AÑO 2016</b>			
Nro. de Fiscalía	1FPPC- CHI	2FPPC- CH	3FPPC- CHI
Archivados (calificación e investigación preliminar)	15, 741	18,732	16, 271
Carga Fiscal	23,885	27, 978	25, 256
Formalizados	4,973	6,619	5,745

De la información proporcionada por el Ministerio Público de esta ciudad, la cual se anexa al presente trabajo de investigación, es de advertir que de los casos archivados en el año 2016, tanto en calificación como luego de haberse dispuesto la realización de investigación preliminar, en cada una de las 3 Fiscalías Provinciales Penales Corporativas de Chiclayo tenemos que, 15, 741 corresponden a la 1FPPC-CHI; 18, 732 a la 2FPPC-CHI y 16, 271 han sido objeto de archivo por la 3FPPC-CH. Asimismo, en cuanto a la carga fiscal que ha asumido cada una de las 3 Fiscalías Provinciales Penales Corporativas de Chiclayo durante el año 2016 observamos que, 23, 885 corresponde a la 1FPPC-CH, mientras que 27, 978 a la 2FPPC y 25, 256 corresponde a la 3FPPC. Respecto a los casos formalizados durante dicho periodo, 4, 973 pertenecen a la 1FPPC-CH; 6,619 a la 2FPPC y 5, 745 a la 3FPPC-CH.

De este primer cuadro comparativo, podemos concluir que en principio existe un alto rango de diferencia respecto de cada una de las 3 Fiscalías Provinciales Penales Corporativas de Chiclayo en cada uno de los ítems descritos. Asimismo, podemos inferir que existe un alto índice de archivo de las carpetas por las citadas Fiscalías, haciendo una sumatoria total resulta que, de los 50, 094 casos investigados en el 2016 (lo cual incluye casos archivados en investigación preliminar y formalizados, conforme está detallado en el **ANEXO Nro. 01**), solo 17, 337 han sido formalizados.

Habiendo obtenido aquellos datos como resultado, se considera importante plasmarlos en un sistema de gráficos con la finalidad de apreciar porcentualmente el resultado.

**GRÁFICO Nro. 01:**



Del gráfico anterior, advertimos que el total de casos archivados asciende a un 65.40%, mientras que los casos formalizados, solo representan el 34.60% del total de casos investigados durante el año 2016 en este Distrito Fiscal.

Ahora bien, habiendo realizado el estudio sobre lo acontecido con el desarrollo de la actividad procesal en el Distrito Fiscal de Lambayeque durante el año 2016, corresponderá analizar el año 2017, para luego establecer las comparaciones respectivas.

**CUADRO Nro. 02:**

<b>ESTADÍSTICA DEL MINISTERIO PÚBLICO: AÑO 2017</b>			
Nro. de Fiscalía	1FPPC- CHI	2FPPC- CH	3FPPC- CHI
Archivados (calificación e investigación preliminar)	19, 554	20, 299	18, 900
Carga	29, 137	30, 595	28, 860
Formalizados	1,431	1,471	1, 296

Del presente cuadro correspondiente a la actividad fiscal de las 3 Fiscalías Provinciales Penales Corporativas de Chiclayo durante el año 2017, es de advertir que, de los casos archivados en este periodo, tanto en calificación como luego de haberse dispuesto la realización de investigación preliminar, en cada una de las 3 citadas fiscalías tenemos que, 19, 554 corresponden a la 1FPPC-CHI; 20, 299 a la 2FPPC-CHI y 18,900 han sido objeto de archivo por la 3FPPC-CH. Asimismo, en cuanto a la carga fiscal que ha asumido cada una de las 3 Fiscalías Provinciales Penales Corporativas de Chiclayo durante el año 2017 observamos que, 29, 137 corresponde a la 1FPPC-CH, mientras que 30,595 a la 2FPPC y 28, 860 corresponde a la 3FPPC. Respecto de los casos formalizados durante dicho periodo, 1,431 pertenecen a la 1FPPC-CH; 1,471 a la 2FPPC y 1, 296 a la 3FPPC-CH.

De este segundo cuadro comparativo podemos concluir que, al igual que el cuadro del año 2016, existe un alto rango de diferencia respecto de las 3 Fiscalías Provinciales Penales Corporativas de Chiclayo en cada uno de los ítems descritos. Asimismo, podemos deducir que existe un excesivo uso de archivo de las carpetas por las citadas fiscalías, haciendo una sumatoria total resulta que, de los 38, 683 casos investigados en el 2017 (lo cual incluye casos archivados en investigación preliminar y formalizados, conforme está detallado en el **ANEXO Nro. 01**), solamente 4,198 han sido formalizados.



**GRÁFICO Nro. 02:**



Del gráfico anterior, advertimos que el total de casos archivados asciende a un 89.15%, mientras que los casos formalizados, solo representan el 10.85% del total de casos investigados durante el año 2017 en este distrito fiscal, lo que significa que, respecto del año 2016, existe un mayor número de carpetas archivadas, sin embargo solo hay un reducido número de carpetas que han pasado a la siguiente etapa en comparación con dicho periodo.

Así, de la información proporcionada por el Ministerio Público, podemos observar que se verifican cifras que permitirán establecer un criterio de la práctica que desempeña esta entidad respecto de las denuncias que tienen a su cargo, que posteriormente en su mayoría son archivados, por lo que en función a estos datos generales podemos establecer el criterio siguiente:

Teniendo en cuenta que el Ministerio Público es el ente investigador y persecutor del delito, advertimos que en cuanto a los casos archivados existe un rango de diferencia muy alto respecto a la carga que se reciben en las 3 Fiscalías Provinciales Penales Corporativas de la ciudad de Chiclayo, lo que puede interpretarse que se debe al nivel

de efectividad para la investigación del delito, según ese razonamiento podemos plasmar la idea en el siguiente cuadro.

**CUADRO Nro. 03:**

<b>AÑO</b>	<b>CASOS ARCHIVADOS</b>	<b>CASOS INVESTIGADOS</b>
<b>2016</b>	<b>50, 744</b>	<b>50, 094</b>
<b>2017</b>	<b>58, 753</b>	<b>38, 683</b>

Tal como se ha mencionado en los dos cuadros anteriores correspondientes a los años 2016 y 2017, advertimos que en el año 2016, en las 3 Fiscalías Provinciales Penales Corporativas de Chiclayo han sido 50, 744 las carpetas archivadas (en calificación e investigación preliminar), mientras que en el año 2017 hay un aumento de 58, 753 casos archivados. Finalmente, en cuanto a los casos investigados (archivados en la etapa de investigación preliminar y formalizados), en el año 2016 se han investigado 50, 094 casos, mientras que en el año 2017 se han investigado 38, 683 casos.

Luego de haber recogido los datos que nos permiten verificar la existencia de un problema jurídico social, se consideró elaborar un cuadro que permita establecer el detalle que corresponde a la etapa en que se ejecuta el archivo de la carpeta fiscal.

**CUADRO Nro. 04:**

<b>CASOS ARCHIVADOS</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Calificación</b>	<b>17, 987</b>	<b>24, 268</b>
<b>Investigación Preliminar</b>	<b>32, 757</b>	<b>34, 485</b>
<b>Total</b>	<b>50, 744</b>	<b>58, 753</b>

Del cuadro anterior, se advierte que de los casos archivados por las 3 Fiscalías Provinciales Penales Corporativas de Chiclayo durante el periodo 2016, en la etapa de calificación, 17, 987 carpetas han sido archivadas, debiendo precisar que dicha

sumatoria resulta del detalle que obra en el **ANEXO Nro. 01** que se adjunta al presente trabajo donde se aprecia que, 5, 072 carpetas corresponden a la 1FPPC-CH; 6, 153 carpetas han sido archivadas por la 2 FPPC-CH y, 6, 762 por la 3FPPC-CH. En cuanto a las carpetas archivadas en la etapa de investigación preliminar, es de advertir que en el referido año, 32, 757 carpetas han sido archivadas por las 3 citadas fiscalías, siendo que el detalle también se ubica en el **ANEXO Nro. 01** del presente trabajo, donde se observa que 12, 833 carpetas han sido archivadas en dicha etapa por la 1FPPC-CH; 12, 280 por la 2FPPC-CH, mientras que 9,372 han sido archivadas por la 3FPPC-CH.

Por otro lado, en cuanto al periodo 2017 es de advertir que en la etapa de calificación, 24, 268 carpetas han sido archivadas, debiendo precisar que dicha sumatoria resulta del detalle que obra en el **ANEXO Nro. 01** que se adjunta al presente trabajo, donde se aprecia que 6, 721 carpetas corresponden a la 1FPPC-CH; 8,019 carpetas han sido archivadas por la 2 FPPC-CH y, 9, 528 por la 3FPPC-CH. En cuanto a las carpetas archivadas en la etapa de investigación preliminar, es de advertir que en el referido año, 34, 485 carpetas han sido archivadas por las 3 citadas fiscalías, siendo que el detalle también está en el **ANEXO Nro. 01** que aparece adjunto al presente trabajo, donde se observa que 10, 669 carpetas han sido archivadas en dicha etapa por la 1FPPC-CH; 12, 579 por la 2FPPC-CH, mientras que 9,509 han sido archivadas por la 3FPPC-CH.

Sobre el referido cuadro podemos establecer que, el número de archivo de carpetas fiscales en ambas etapas va de aumento, siendo que en el año 2016 en total se archivaron, 50, 744, mientras que en el año 2017, se archivaron en ambas etapas un total de 58, 753; esto es, 8, 009 carpetas fiscales más que el año anterior.

Habiendo desarrollado en el cuadro anterior el índice de archivo que existe por parte del Ministerio Público en las 3 Fiscalías Provinciales Penales de Chiclayo, tanto en la etapa de calificación como de la de investigación preliminar, resulta pertinente referirnos a la carga procesal que han asumido dichas fiscalías en los años 2016 y 2017, a fin de determinar si de ello depende el nivel de eficiencia por parte de los fiscales cuando desempeñan la investigación de un delito, así:

**CUADRO Nro. 05:**

<b>TOTAL DE CARGA PROCESAL A NIVEL DE LAS 3 FISCALÍAS PROVINCIALES PENALES CORPORATIVAS DE CHICLAYO DURANTE LOS AÑOS 2016 Y 2017</b>		
<b>AÑO</b>	<b>CARGA PROCESAL</b>	<b>CARP. ARCHIVADAS</b>
2016	77, 119	50, 744
2017	88, 592	58, 753
TOTAL	165, 711	109, 497

Del cuadro anterior, en cuanto al total de la carga recibida por las 3 fiscalías, en el año 2016 se tiene un total de 77, 119 casos, mientras que en el año 2017 han sido 88, 592 los casos y realizado una suma de ambos se obtiene un total de 165, 711 carpetas fiscales a cargo de dichas fiscalías, siendo que como ya se detalló en el cuadro Nro. 01, durante el año 2016, observamos que de las 77, 119 carpetas fiscales, 23, 885 han sido asignadas a la 1FPPC-CH, mientras que 27, 978 a la 2FPPC y 25, 256 corresponde a la 3FPPC; además, durante el año 2017, advertimos que de las 88, 592 carpetas fiscales, 29, 137 corresponde a la 1FPPC-CH, mientras que 30,595 a la 2FPPC y 28, 860 corresponde a la 3FPPC.

En ese sentido, podemos concluir que el nivel de la carga procesal es bastante elevada con una diferencia de 11, 473 carpetas fiscales que han aumentado en el año 2017 respecto del año 2016. Es más, se advierte que no existe una igualdad en cuanto a la repartición de carpetas por las fiscalía, toda vez que durante el año 2016, a la 3FPPC-CHI se le asignó 1, 371 carpetas más que a la 1FPPC-CH, mientras que a la 2FPPC-CH se le asignó 2, 272 más que la 3FPPC-CH y 4,093 carpetas fiscales más que la 1FPPC-CH. En el año 2017, igualmente se puede verificar una desigualdad en cuanto a la

repartición de carpetas, si bien no muy alta, pero diferencia en fin, pues la 1FPPC-CH tiene a su cargo 277 carpetas más que la 3FPPC-CH y la 2FPPC-CH tiene a su cargo 1,458 carpetas más que la 1FPPC-CH y 1, 735 carpetas más que la 3FPPC-CH. Si bien se advierte que en cierto modo hay una compensación de la carga procesal entre la 1FPPC-CH y la 3FPPC-CH, no ocurre lo mismo con la 2FPPC-CH, pues a ésta, en los dos periodos se ha asignado la mayor carga procesal.

Si comparamos el indicador de la carga procesal con el indicador de archivo, tanto en la etapa de calificación como de la investigación preliminar, advertimos que, 77, 119 carpetas fiscales es el total de carga procesal en el año 2016, sin embargo, un total de 50, 744 carpetas han sido objeto de archivo en las etapas señaladas, esto es en un mayor número las carpetas se han archivado. Del mismo modo, si comparamos el nivel de la carga procesal y las cifras de archivo durante el año 2017, observamos que, 88, 592 es el total de la carga procesal, sin embargo, un total de 58, 753 carpetas han sido objeto de archivo.

Si bien es cierto, no se tiene conocimiento de la cantidad de carpetas que se iniciaron en el año 2016 y tampoco durante el año 2017, sin embargo las cifras nos revelan que a mayor carga procesal, existe un mayor número de archivos, puesto que en ambos años más de la mitad de las carpetas de la carga procesal total han sido archivadas, por lo que corresponderá cuestionarnos cuál es el factor que determina ello.

A manera de un resumen, se ha podido realizar el siguiente cuadro que consolida la información bajo el criterio de los tipos de archivo que se generan en el Ministerio Público y que es de la siguiente manera:

**CUADRO Nro. 06**

<b>RESUMEN DEL ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA CARGA DE ARCHIVOS EN LAS FISCALÍAS PROVINCIALES PENALES CORPORATIVAS DE CHICLAYO AÑOS 2016-2017</b>		
<b>Tipo de Archivo</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Porcentaje</b>
Casos archivados en calificación 2016- 2017	<b>42, 255</b>	<b>32%</b>
Casos archivados en etapa preliminar 2016- 2017	<b>67, 242</b>	<b>52%</b>
Casos formalizados 2016- 2017	<b>21, 535</b>	<b>16%</b>
Carga procesal total del 2016-2017	<b>13, 1032</b>	<b>100%</b>

Se puede leer de este cuadro la representación porcentual de los tipos de archivo en relación de la carga procesal en el Ministerio Público de la ciudad de Chiclayo, de lo cual se aprecia un alto índice de archivamiento a nivel preliminar alcanzando niveles de hasta más de la mitad de toda la carga, lo cual corrobora la posición de que se requiere control de tal actividad a fin de disminuir la posibilidad de actos arbitrarios como la única justificación de archivar investigaciones ya calificadas como delitos. Datos que serán utilizados al momento de la discusión que permita la contrastación de la hipótesis.

### **6.1.2. Resultados de recursos humanos y bienes de uso.**

Por otro lado, también se ha recibido información relacionada con el personal asignado a cada una de las Fiscalías Provinciales Penales Corporativas de Chiclayo, conforme figura en el **ANEXO Nro. 02**, advirtiéndose que entre el Fiscal Provincial Coordinador, Fiscales Provinciales, Fiscales Adjuntos Provinciales, Asistentes en Función Fiscal, Asistentes Administrativos, Abogados y Técnicos en Abogacía, en la 1° trabajan un total de 30 personas; en la 2°, son 31 y en la 3°, un total de 35, lo cual al parecer de la investigadora, (según la percepción de los operadores jurídicos internos) los recursos humanos asignados son insuficientes dada la cantidad de la carga que posee cada una de las fiscalías citadas, lo cual también podría significar un factor adicional para que el Ministerio Público haga una investigación deficiente, lo que también puede conllevar a que los fiscales hagan un uso inadecuado de su autonomía procesal. Además, la investigadora para llegar a determinar cuál sería el factor interviniente para que la fiscalía haga abuso de su autonomía, procedí también a solicitar información respecto de los bienes de uso de cada una de las 3 Fiscalías Provinciales Penales Corporativas de Chiclayo, encontrando que existen muchos bienes en estado “regular”, pocos en estado “bueno” y en muy reducido números en estado “muy malo” y “nuevos”.

Ante esta situación, se debe tener en cuenta también los datos estadísticos que nos detallan la circunstancia de los pedidos de exclusión fiscal, así en el distrito fiscal de Lambayeque, durante el año 2017 se presentaron 37 exclusiones fiscales de las cuales fueron atendidas 36, de igual modo se puede apreciar en la información obtenida de la página web del Ministerio Público, que existieron en el rubro de quejas 1,759 ingresos de los que fueron atendidos 1,711, lo cual demuestra que la incidencia de estos requerimientos tienen su base en la disconformidad de la población respecto a la labor desempeñada. **Ver ANEXO Nro. 03.**

### **6.1.3. Resultados de la opinión de la comunidad jurídica.**

En esta sección del análisis, dirigiremos la atención a la opinión recogida de la comunidad jurídica de Chiclayo, la misma que resultó de la aplicación del cuestionario de encuesta que figura como **ANEXO Nro. 04** de esta investigación.

## I. ABUSO DE LA AUTONOMÍA DEL MINISTERIO PÚBLICO.

### GRÁFICO Nro. 01:



A través de la presente encuesta lo que se pretende es medir el conocimiento de la comunidad jurídica de nuestra región, a fin de medir su percepción sobre la institución del Ministerio Público como ente autónomo en el ejercicio de sus atribuciones. Como vemos de la pregunta anterior, se grafican las respuestas brindadas en torno a la misma, advirtiéndose que el 93.3% han opinado que, en efecto, el Ministerio Público sí hace un uso inadecuado de su autonomía, por ende lo que refleja es un gran porcentaje de insatisfacción en los encuestados, lo cual evidencia un mal funcionamiento del sistema de justicia penal en esta entidad. De igual manera, se observa que un reducido número de los encuestados, para ser exactos solo el 6.7% de los encuestados, aprueban el trabajo de la fiscalía.



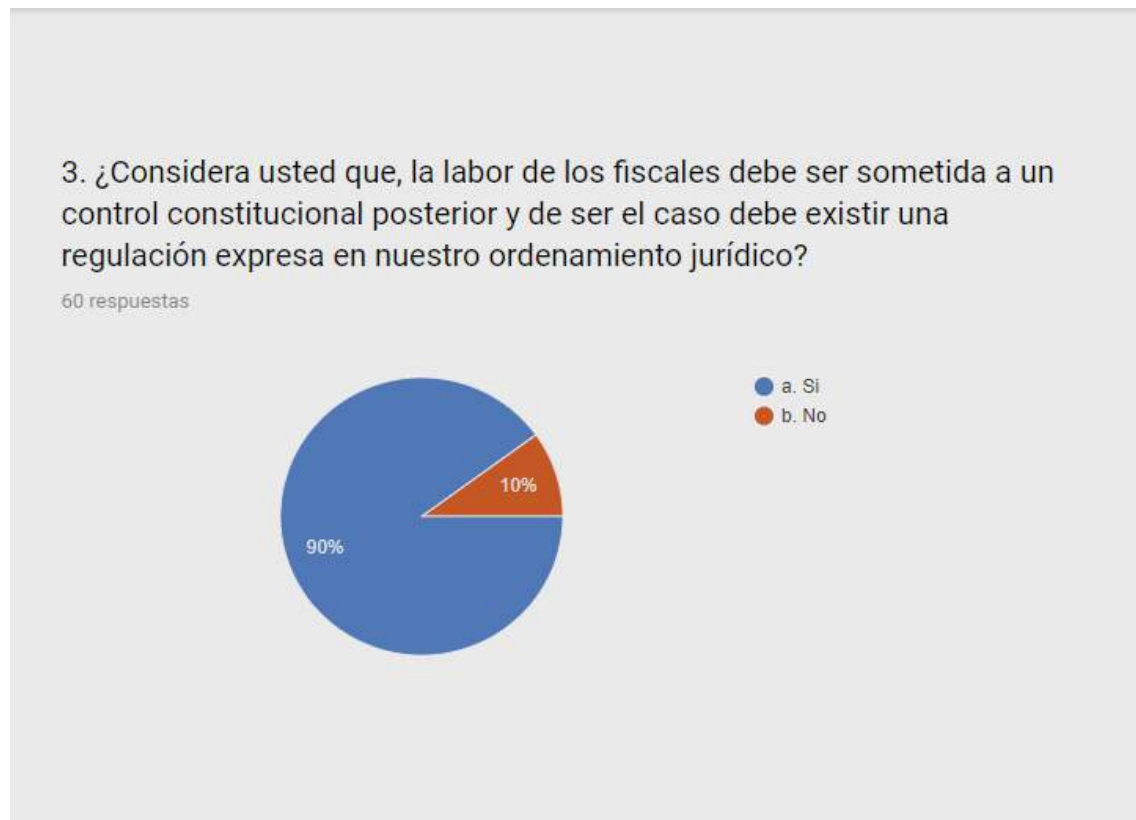
## **GRÁFICO Nro. 02:**



De la citada pregunta lo que buscamos es saber si existe una justificación que pueda conllevar a acercarnos a una respuesta en torno al trabajo que desempeña este ente en su condición de autónomo, para lo cual hemos optado por presentar 4 alternativas. Así, del cuadro anterior se puede ver que el 55% de los encuestados han respondido que la extralimitación de la autonomía procesal por parte del Ministerio Público sería la principal razón para que su labor sea ineficiente, se podría entender que la sensación percibida por parte de los encuestados, está basada en el excesivo uso del archivo de las denuncias que se les presenta, mientras que el 25% han opinado que el deficiente desempeño de su labor se debe a la falta de presupuesto, el 16.7% han opinado que esto se debe a la incapacidad del personal que labora para esta entidad y solo un 3.3% han respondido que no tienen conocimiento alguno al respecto. De lo que podemos concluir que existe un porcentaje abrumador que atribuye el abuso de la autonomía de la fiscalía,

conllevando a que su trabajo no sea bien visto por parte de la sociedad.

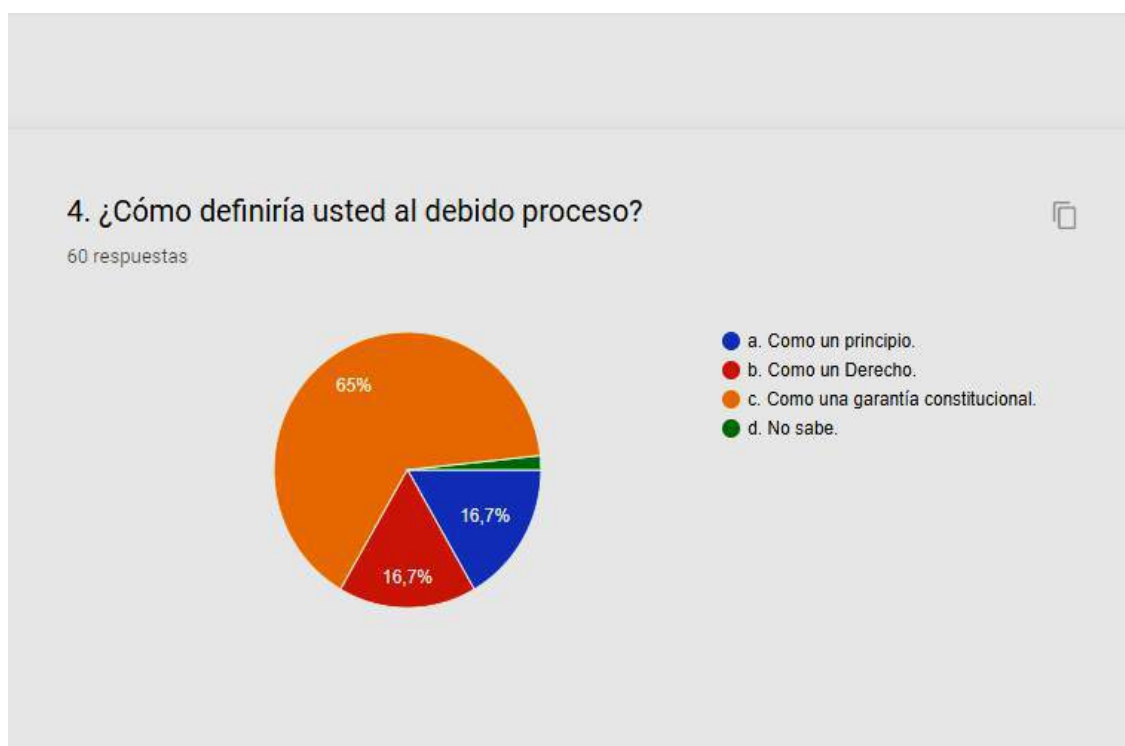
**GRÁFICO Nro. 03:**



En cuanto a esta pregunta formulada a los encuestados, lo que se busca es saber si nuestra comunidad jurídica cree conveniente que el desempeño de los fiscales debe ser objeto de control constitucional y si es necesario se regule expresamente dicho control, toda vez que no existe una norma donde se establezca expresamente que sus disposiciones puedan ser sometidas a dicho mecanismo procesal. A lo que la comunidad jurídica ha respondido en un 90% que sí es pertinente el control constitucional de los actos expedidos por los fiscales, así como que debe existir una regulación expresa al respecto, mientras que solo el 10% creen que no es necesario. En tal sentido, lo que se evidencia es que según la opinión de los encuestados urge un control más riguroso a la actividad que realiza este ente autónomo.

## II. LA GARANTÍA DEL DEBIDO PROCESO A TRAVÉS DEL CONTROL CONSTITUCIONAL.

### GRÁFICO Nro. 04:



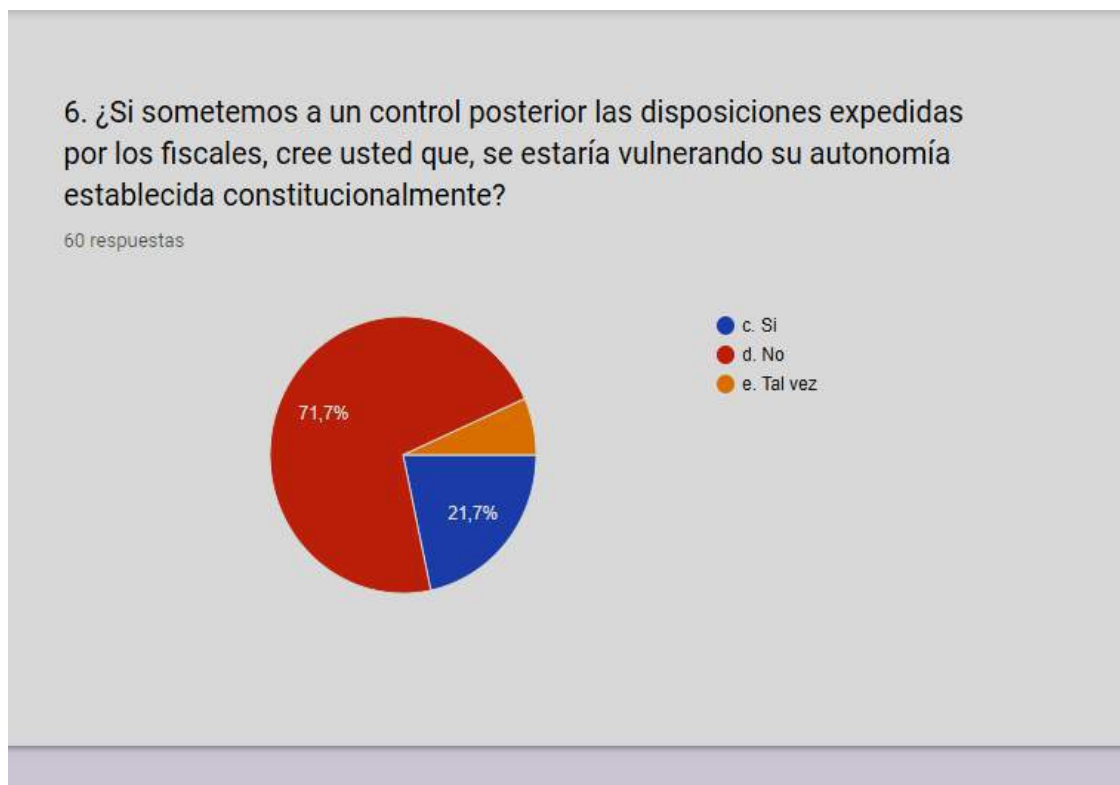
En torno a la 4ta pregunta, sobre uno de los principales ejes de nuestro trabajo de investigación como lo es el debido proceso, dado que ha recibido diferentes calificaciones, nuestra comunidad jurídica ha sido enfática en responder que definitivamente el debido proceso es una garantía constitucional, porcentaje que asciende al 65% de los encuestados. El 16.7% opinan que el debido proceso es un derecho y también un principio. Del mismo modo, advertimos que el 1.7% opinan que no conocen de esta importante institución procesal; entonces en el Distrito Fiscal de Lambayeque se maneja adecuadamente el concepto de debido proceso como garantía constitucional.

### **GRÁFICO Nro. 05:**



Sobre la pregunta realizada a nuestros encuestados, de cómo es que podríamos garantizar de forma adecuada el respeto del debido proceso en las actuaciones de los fiscales en el ejercicio de sus atribuciones y deberes como investigadores y persecutores de delitos, éstos han opinado que definitivamente la mejor forma para lograr ello sería a través del control constitucional de dichas actuaciones, siendo que los encuestados que respondieron en ese sentido son el 80% de los encuestados, por el contrario el 18.3% de la población jurídica han opinado que el control de los actos del Ministerio Público sólo se lograría a través del control interno que realiza el propio Ministerio Público y el 1.7% cree que esto se lograría mediante la interposición de recursos impugnativos. Se aprecia entonces que los encuestados en su mayoría consideran que el control de las actuaciones del Ministerio Público, de modo eficiente, solo se lograría a través del control constitucional.

**GRÁFICO Nro. 06:**

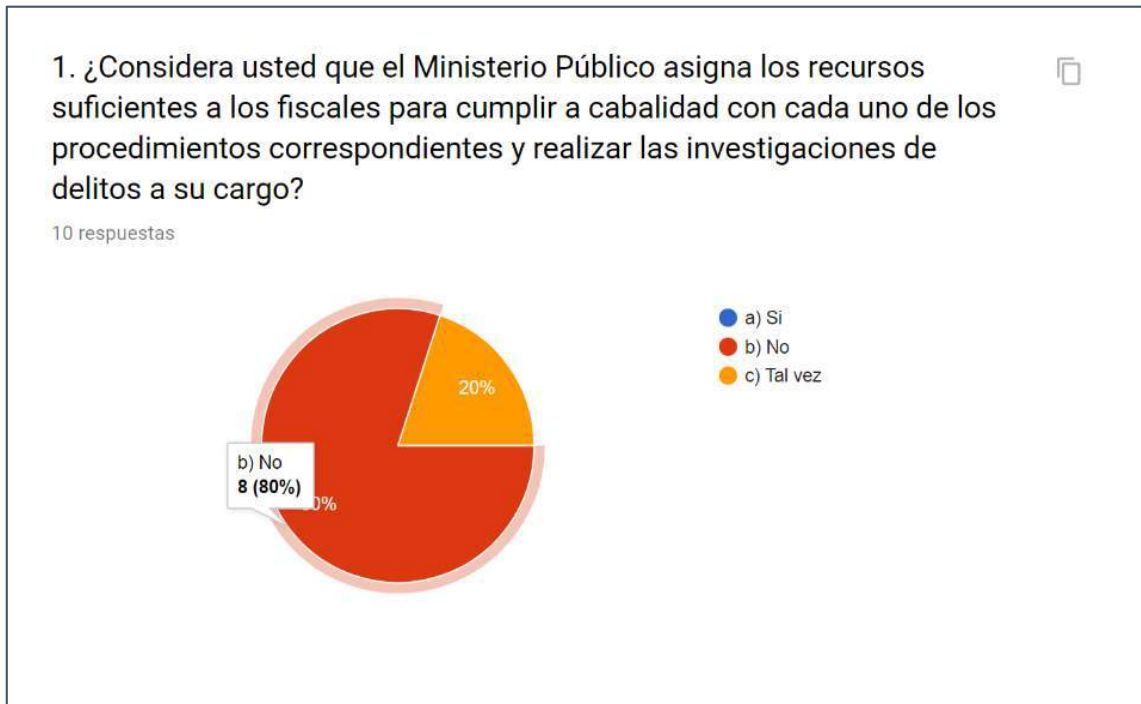


Finalmente, con la 6ta pregunta lo que se busca es llegar a determinar si es que al pretender un control constitucional posterior de los actos del Ministerio Público estaríamos atentado contra la autonomía constitucional que goza esta importante institución, habiéndose obtenido como respuesta mayoritaria que, de ningún modo se estaría vulnerando su autonomía, toda vez que si bien goza de ella, estando sometido a nuestra Constitución Política, sus actuaciones están supeditadas al control constitucional, ya que a través de sus actuaciones podrían atacar contra derechos fundamentales de las partes. Por otro lado, el 21.7% de los encuestados sí creen que con el control posterior de las actuaciones de la fiscalía se está atentando contra su autonomía, mientras que el 6.7% no dan una respuesta exacta. En ese sentido, de la opinión de nuestros operadores jurídicos, no creen que exista una vulneración a la autonomía de la fiscalía al ejercer un control constitucional de sus actos.

#### **6.1.4. Resultado de la opinión de los fiscales**

Ahora bien, a fin de no obtener un trabajo parcializado que solo se base en la opinión de la comunidad jurídica, resulta importante recoger la opinión de los fiscales, más aun si son ellos los principales elementos de nuestra investigación. Debiendo hacer presente que se prepararon 30 encuestas en total, cuyo contenido figura en el **ANEXO Nro. 05** de esta investigación y que fueron aplicadas tanto a fiscales provinciales, así como a los fiscales adjuntos de las 3 Fiscalías Provinciales Penales Corporativas de Chiclayo; sin embargo, muchos fiscales se negaron a ser encuestados y otros no devolvieron las encuestas. De las 30 encuestas, solo han sido devueltas 14, de las cuales únicamente 10 han sido respondidas, mientras que las restantes han sido devueltas sin repuesta. No obstante ello, a fin de llegar a un resultado certero, se trabajará solamente las 10 encuestas que cuentan con respuestas.

### **GRÁFICO Nro. 01:**

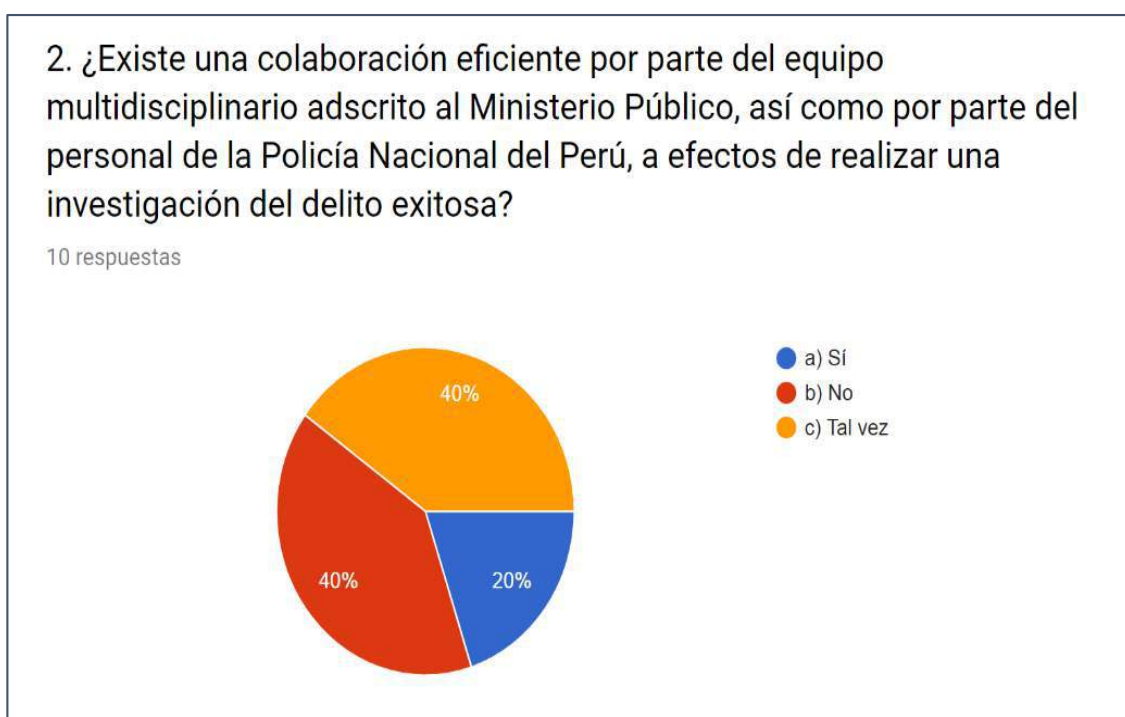


El gráfico Nro. 01 tiene como finalidad determinar, de acuerdo a la opinión de los fiscales encuestados, si los recursos que se les asigna para cumplir con los procedimientos en las investigaciones de los delitos que tienen a su cargo, son suficientes. Como vemos de los fiscales encuestados, en un 80% han respondido que dichos recursos no son suficientes, mientras que un 20% no han dado una respuesta exacta y han opinado que tal vez se les asigne recursos suficientes.

En ese sentido, se puede concluir que el gráfico muestra que la falta de recursos suficientes conlleva a que no se sigan correctamente los procedimientos en la actividad de la investigación de un delito por parte de los fiscales.

La percepción de los fiscales es que el Estado descuida este sector dotando de un presupuesto mínimo y que según su apreciación repercute en la labor que ejercen.

**GRÁFICO Nro. 02:**



En cuanto a la interrogante si la colaboración por parte del equipo multidisciplinario, esto es el personal de la División Médico legal, así como del personal policial para con el Ministerio Público en el desarrollo de una investigación es eficiente, los encuestados en un 40% han opinado de modo negativo, en tanto que otro 40% no tienen claro si es eficiente o no, dando una respuesta incierta, mientras que solo el 20% de los encuestados han opinado que sí hay una colaboración eficiente por parte de ambos.

En consecuencia, del cuadro anterior se puede concluir que existe un no muy acertado grado de eficiencia, lo cual conlleva a que no siempre se obtengan investigaciones exitosas por parte de los fiscales.

Existe una opinión dividida entre lo eficiente o ineficiente, pues de los resultados se ha de interpretar que sólo el 20 % lo consideran eficiente, bajo el entendido caso que la



duda se acopla a la percepción negativa, en función a ese criterio se puede indicar que los fiscales requieren de un apoyo más efectivo para el ejercicio de su labor.

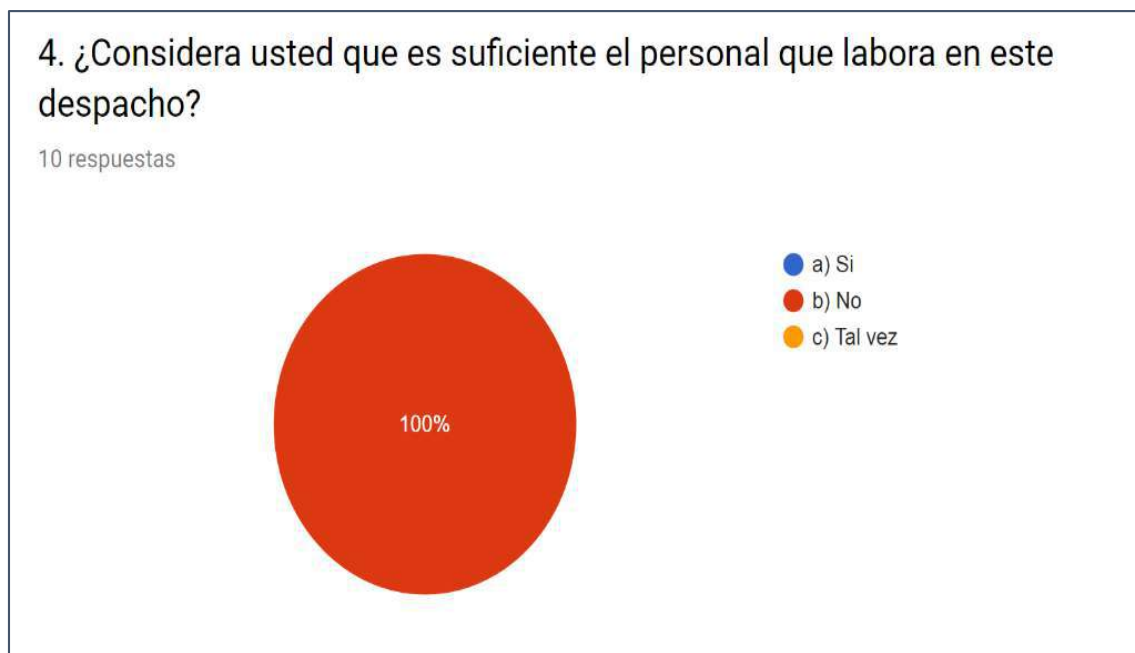
**GRÁFICO Nro. 03:**



Esta pregunta planteada tiene como fin, establecer a través de la presente investigación, si el tema de la carga fiscal que se les asigna a los fiscales resulta una justificación cuando de investigar la comisión de un delito se trata, pues como vemos del gráfico precedente, en un 60% de los encuestados, éstos han opinado que la carga fiscal que se les asigna sí perjudica el cabal cumplimiento de la realización de las diligencias en la determinación de la existencia o no de un delito; el 30% no dan una respuesta exacta, en tanto que el 10% han opinado que no.

Para concluir, podemos determinar entonces que la excusa de la carga fiscal no es una **respuesta** unánime, si bien es cierto en su mayoría, los fiscales encuestados han opinado que sí perjudica su labor, sin embargo también los encuestados, en cuanto al tema de la carga fiscal, han sido rotundos en responder que ello no es una justificación válida.

**GRÁFICO Nro. 04:**



Sobre el tema de la cantidad de personal que labora en cada uno de los despachos, como vemos del gráfico anterior, existe una respuesta unánime de los encuestados, pues el 100% han opinado que es necesario la contratación de mayor personal.

Concluyendo, podemos decir de acuerdo al referido gráfico, urge la contratación de más personal, pues según los fiscales, el personal que actualmente labora no es suficiente, dada según ellos (ver pregunta anterior) la carga fiscal.

**GRÁFICO Nro. 05:**



De la pregunta Nro. 05 y según el gráfico anterior, en cuanto a cómo consideran, los fiscales encuestados, el material logístico que se les asigna para plantear una adecuada estrategia de investigación. El 40% de los encuestados han sido enfáticos en responder que es insuficiente, en tanto que el 60% de los encuestados han señalado que es regular. No respondiendo nadie que resulte suficiente.

Así, podemos concluir que este gráfico demuestra que existen muchas deficiencias en temas de logística, lo que no permite tener éxito en una investigación, toda vez que por falta de material logístico no se plantea una adecuada estrategia de investigación, más aún si las diligencias preliminares obedecen a actos urgentes e inaplazables por parte del fiscal.

**GRÁFICO Nro. 06:**



Ahora entrando ya a nuestra investigación en sí, se planteó la pregunta Nro. 06, similar a las que se aplicó en la encuesta anterior. Según el gráfico estadístico, los fiscales en un 100% han opinado que la razón principal para que su labor sea deficiente, es precisamente la carga fiscal que asumen.

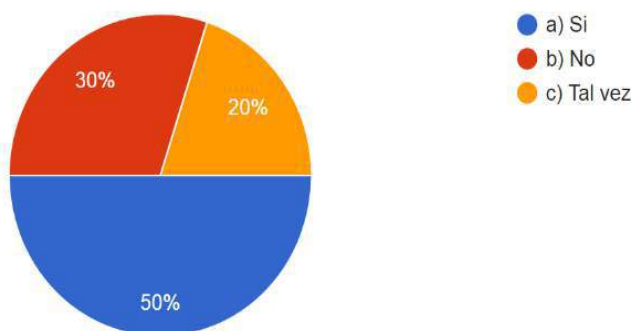
Se puede concluir entonces que, de acuerdo a su opinión, el tema de la carga fiscal es uno de los principales problemas que hacen que la labor de los fiscales ante la sociedad se torne deficiente, dado que según ellos, no se dan abasto con la excesiva carga que se les asigna, lo cual impide el desarrollo de una exitosa investigación del delito.

Así, dado que en la pregunta 3, los fiscales han opinado que la carga fiscal perjudica el cumplimiento de las diligencias en la investigación de un delito, lo que según ellos de acuerdo a la presente pregunta, desencadena a que su labor se torne deficiente ante la sociedad, sin embargo ello solo sería una justificación para la labor deficiente que vienen ejerciendo en razón a la carga fiscal que asumen.

**GRÁFICO Nro. 07:**

7. ¿Considera que una investigación ineficaz e inoportuna, ocasionaría vulneración de la garantía del debido proceso y con ello se cometa abuso por parte de los fiscales ya sea respecto de los imputados y aún más de los agraviados?

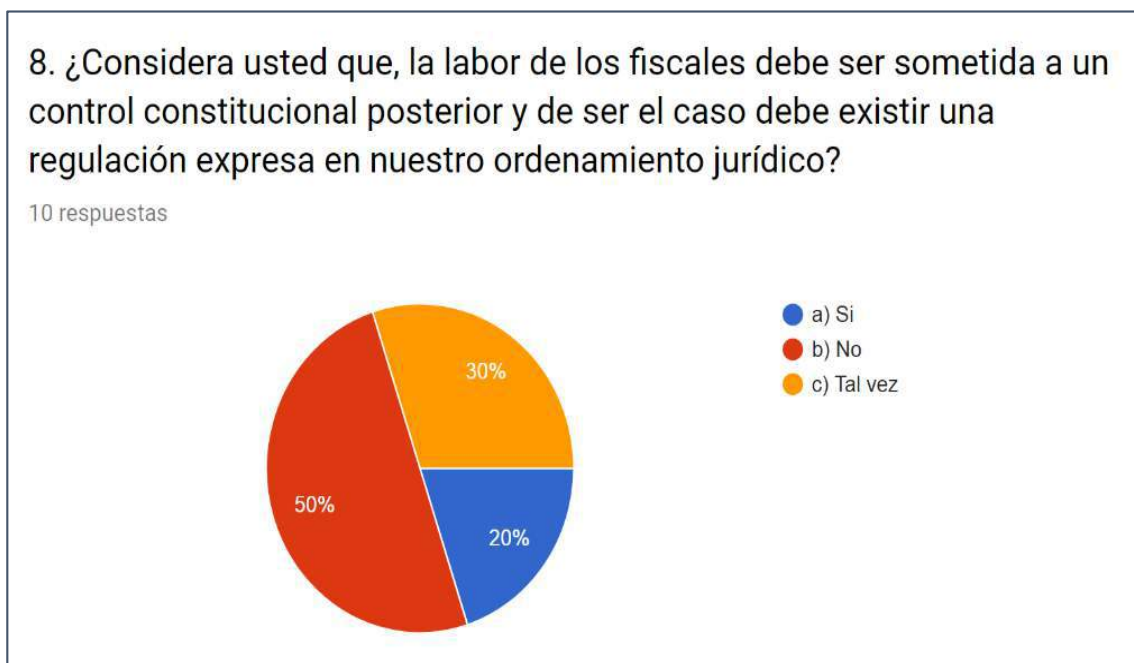
10 respuestas



En cuanto a la pregunta Nro. 07, el gráfico anterior nos muestra que del total de los fiscales encuestados, un 50% han opinado que sí se vulneraría el debido proceso con una investigación ineficaz e inoportuna, lo cual conllevaría a que exista un grado de abuso por parte de los fiscales, tanto para el imputado como para la parte agraviada. Un 30% de los encuestados, sin embargo consideran que no existe vulneración del debido proceso, en tanto que un 20% no dan una respuesta concreta.

Se concluye entonces que, son los propios fiscales quiénes reconocen que con una investigación ineficaz e inoportuna se estaría conculcando el debido proceso en una investigación y que esto sí genera un abuso por parte de ellos.

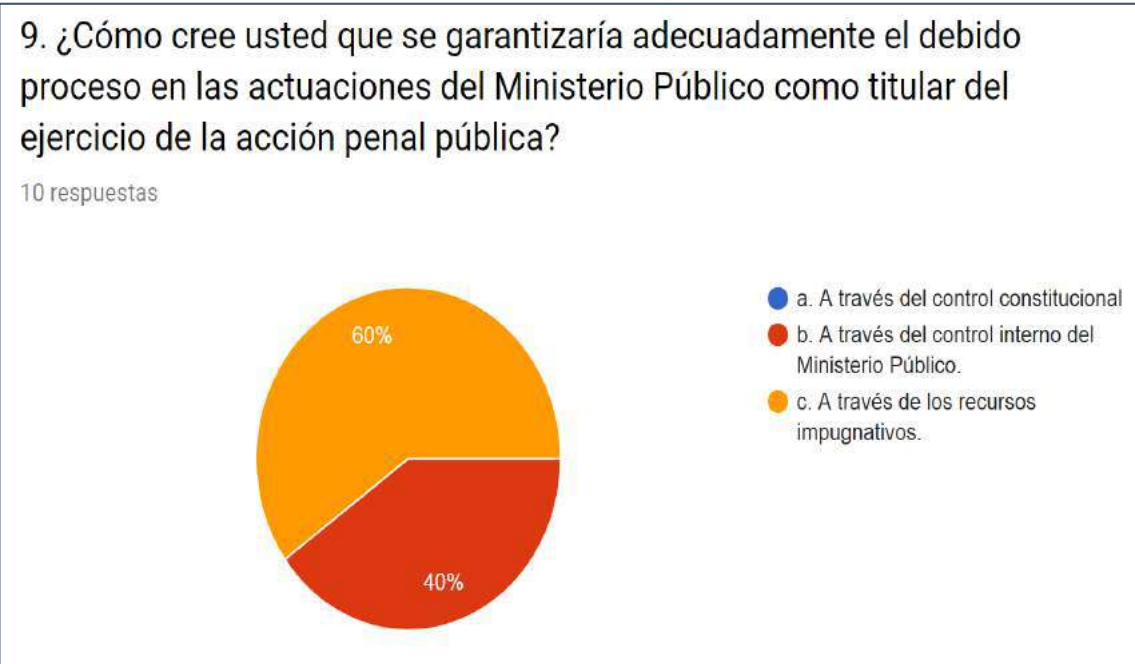
**GRÁFICO Nro. 08:**



En cuanto a la pregunta Nro. 8, similar a la de la encuesta aplicada a la comunidad jurídica; esto es, si la labor de los fiscales debe ser sometida a un control constitucional posterior y si es pertinente que exista una regulación expresa sobre el particular, el 50% han opinado que no, en tanto que el 30% no dan una respuesta exacta y solo el 20% han opinado afirmativamente.

De lo que se concluye que los fiscales se rehúsan a que los actos que expiden en el ejercicio de sus funciones sean objeto de control constitucional alguno y menos que haya una regulación legal expresa.

**GRÁFICO N° 09:**



Sobre el control constitucional, eje temático de nuestra investigación, se les planteó la interrogante, cuál sería la mejor forma de ejercer un control de su labor para garantizar un debido proceso, a lo que los fiscales en un 60% han opinado que, ello se puede hacer en base a los recursos impugnativos que se interpongan contra las disposiciones que expidan, en tanto que un 40% señalan que el control se debe realizar a través de las Oficinas Desconcentradas de Control Interno del propio Ministerio Público, mas nadie de los encuestados, eligió la opción del control constitucional.

En tal sentido, este resultado demuestra y confirma el gráfico Nro. 9 de esta encuesta, donde todos los fiscales encuestados no aceptan de modo alguno que exista un control constitucional de las disposiciones que expiden.

#### **GRÁFICO Nro. 10**



Para finalizar la encuesta, se creyó conveniente plantear la pregunta de si sometemos a control constitucional las disposiciones que expidan los fiscales, se atentaría contra su autonomía constitucional, a lo que los encuestados han respondido en un 40% que sí, en tanto que un 40% más han respondido que no y solo un 20% que tal vez.

Las respuestas obtenidas de la indicada interrogante, muestran que existe un cierto número de fiscales que consideran que el control constitucional de sus disposiciones expedidas sí atenta contra su autonomía constitucional, lo cual denota una posición marcada de parte de los encuestados dado que mantienen su posición negativa frente al control, la investigación se encargará de conseguir el contraste de esta opinión con el concepto de autonomía.

#### **6.1.5. Jurisprudenciales.**

A continuación, desarrollaremos el análisis de la jurisprudencia encontrada sobre el tema investigado, para lo cual se ha tenido en consideración fallos del Tribunal



Constitucional y de la Corte Suprema de la República, cuyos fundamentos serán recogidos en un cuadro comparativo, debiendo precisar que las sentencias a mencionar obran como **ANEXO Nro. 06**

**CUADRO Nro. 07:**

<b>ANÁLISIS DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LA CORTE SUPREMA DE LA REPÚBLICA</b>		
<b>Sentencia</b>	<b>Fundamento relacionados con los actos del Ministerio Público</b>	<b>Aporte al planteamiento</b>
<b>EXPEDIENTE N° 2725-2008-PHC/TC LIMA CASO: ROBERTO BORIS CHAUCA TEMOCHE Y OTROS</b>	3. La Constitución ha asignado al Ministerio Público una serie de funciones constitucionales, entre las cuales destaca la facultad de ejercitar la acción penal ya sea de oficio o a pedido de parte, tal como dispone el artículo 159°, inciso 5, de la Constitución. Si bien es una facultad discrecional reconocida por el poder constituyente al Ministerio Público, es obvio que esta facultad, en tanto que el Ministerio Público es un órgano constitucional constituido y por ende sometido a la Constitución, no puede ser ejercida, irrazonablemente, con desconocimiento de los principios y valores constitucionales, ni tampoco al margen del respeto de los derechos fundamentales.	Positivo. Concordante con la autonomía del Ministerio Público y el control constitucional de sus actos.
<b>EXP. N.° 04437-2012-PA/TC LIMA CASO: CARLOS LUIGI</b>	Sobre el derecho a la motivación de las decisiones fiscales, derecho que como se ha establecido es uno de los integrantes del debido proceso, el TC ha expresado: 4. Que, el artículo 159° de la Constitución	Positivo. Concordante con el control constitucional, la garantía del

<p><b>FRANCO</b> <b>MAZZETTI</b> <b>VALDIVIA</b></p>	<p>prescribe, entre otras cosas, que corresponde al Ministerio Público conducir desde su inicio la investigación del delito, así como ejercitar la acción penal de oficio o a petición de parte. Esta exigencia constitucional, como es evidente, ha de ser realizada con la debida diligencia y responsabilidad, a fin de que las conductas ilícitas no queden impunes y se satisfaga y concretice el principio del interés general de la investigación y persecución del delito u otro bien constitucional análogo. En este sentido, este Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha señalado que el proceso de amparo es la vía idónea para analizar si las actuaciones o decisiones de los fiscales observan o no los derechos fundamentales o, si en su caso, superan o no el nivel de proporcionalidad y razonabilidad que toda decisión debe suponer, siempre que tengan la condición de firme. Ahora bien, una decisión fiscal (disposición, resolución fiscal u otra análoga) adquiere carácter firme cuando se han agotado todos los medios impugnatorios legalmente previstos y siempre que estos tengan la posibilidad real de revertir los efectos de la decisión que se impugna.</p> <p>5. En cuanto al derecho a la debida motivación de las decisiones fiscales, el Tribunal Constitucional tiene también establecido que la motivación debida de las decisiones de las</p>	<p>debido proceso y el abuso de su autonomía.</p>
--	--	---

	<p>entidades públicas-sean o no de carácter jurisdiccional- comporta que el órgano decisor y, en su caso, los fiscales, al resolver las causas, describan o expresen las razones o justificaciones objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión. Ello implica también que exista congruencia entre lo pedido y lo resuelto y, que por sí misma, exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun cuando esta decisión sea breve o concisa. Esas razones, por lo demás, deben provenir no solo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino, y sobre todo, de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite de la investigación o del proceso del que se deriva la resolución cuestionada.</p> <p>6. Con base en ello, el Tribunal Constitucional tiene precisado que el derecho a la debida motivación de las decisiones fiscales también se ve vulnerado cuando la motivación es solo aparente, en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas de hecho o de derecho que sustentan la decisión fiscal, o porque se intenta dar solo un cumplimiento formal a la exigencia de la motivación. Así, toda decisión que carezca de una motivación adecuada, suficiente y congruente constituirá una decisión fiscal arbitraria y, en consecuencia, será inconstitucional.</p> <p>7. Sin embargo, no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una decisión</p>	
--	--	--

	<p>fiscal constituye automáticamente una violación al derecho a la motivación de las decisiones fiscales. Ello solamente se da solo en aquellos casos en que dicha facultad se ejerce de manera arbitraria: es decir, solo en aquellos casos en los que la decisión fiscal es más bien fruto del decisionismo que de la aplicación razonable del Derecho y de los hechos en su conjunto.</p>	
<p><b>SENTENCIA DE LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA P.A NRO. 1237-2013 LIMA CASO: FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS DEL INCENDIO EN LA DISCOTECA “UTOPIA”</b></p>	<p><b>I. PROCEDENCIA DE AMPARO CONTRA DISPOSICIONES, O REQUERIMIENTOS FISCALES.-</b></p> <p>Respecto al control, vía acción de amparo contra las disposiciones que expidan los miembros del Ministerio Público, también el TC se ha pronunciado en su sentencia 6204-2006-PHC/TC, de fecha 9 de agosto de 2006, estableciendo que, las decisiones que toman los fiscales en el ejercicio de sus funciones, son objeto de control constitucional. En el fundamento 07 de la misma, fijó como criterio, que si bien es una facultad discrecional del Ministerio Público ejercer la acción penal, ésta no puede ser ejercida irrazonablemente con desconocimiento de los principios y valores Constitucionales, ni tampoco al margen del respeto de los derechos fundamentales, pues su facultad está sometida a la Constitución. En el fundamento 11 de esta sentencia: subrayó que “la posibilidad que el Tribunal Constitucional realice el control constitucional de los actos</p>	<p>Positivo.</p> <p>Concordante con el control constitucional, la autonomía del Ministerio Público y la garantía del debido proceso.</p>

	del Ministerio Público, tiene de otro lado su sustento en el derecho fundamental al debido proceso”. Por ello, el derecho al debido proceso despliega también su eficacia jurídica en el ámbito de la etapa pre jurisdiccional de los procesos penales; es decir en aquella fase del proceso penal en la cual al Ministerio Público, le corresponde concretizar el mandato previsto en el artículo 159° de la Constitución”	
<b>EXP. N.º 00913-2012-PA/TC MADRE DE DIOS CASO: DANIEL SARKA QUISPE</b>	<p>3. Que, el Tribunal Constitucional tiene dicho que el proceso de amparo contra resoluciones judiciales “(...) está circunscrito a cuestionar decisiones judiciales que vulneren en forma directa derechos fundamentales, toda vez que a juicio de este Tribunal la irregularidad de una resolución judicial con relevancia constitucional se produce cada vez que ésta se expida con violación de cualquier derecho fundamental y no sólo en relación con los supuestos contemplados en el artículo 4 del C.P. Const”. (Cfr. STC N° 3179-2004-AA, fundamento 14); criterio que, <i>mutatis mutandis</i>, resulta aplicable a las decisiones y pronunciamientos expedidos por los representantes del Ministerio Público.</p> <p>4. Que asimismo en reiterada jurisprudencia este Colegiado ha manifestado que pretensiones destinadas a la evaluación de la calificación del delito, la subsunción de los hechos al tipo penal u otorgar mayor o menor valor probatorio a las pruebas que presenten</p>	<p>Positivo.</p> <p>Concordante con el control constitucional, autonomía del Ministerio Público y la garantía del debido proceso.</p>

	<p>los sujetos procesales con el objeto de aportar al esclarecimiento del ilícito investigado, son asuntos específicos cuya dilucidación corresponde únicamente a la justicia penal y al Ministerio Público, y por tanto, resultan materias ajenas a la tutela de los derechos fundamentales, cuyo análisis escapa de la competencia de la jurisdicción constitucional, ya que <i>no</i> está entre sus facultades el evaluar la validez o invalidez de las disposiciones fiscales, salvo que éstas y sus efectos contravengan los principios que informan la función encomendada o que los pronunciamientos carezcan de razonabilidad y proporcionalidad, afectando con ello de modo manifiesto y grave cualquier derecho fundamental .</p> <p>5. Que por otro lado este Tribunal tiene afirmado que el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales como componente esencial del derecho al debido proceso, es el derecho de obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes en cualquier clase de proceso (...).</p>	
<b>EXP. N.º 01138-2012-PA/TC</b> <b>AMAZONAS</b> <b>CASO: OLGA DEL CARMEN</b>	<p>4. Que, el Tribunal Constitucional tiene dicho que el proceso de amparo contra resoluciones judiciales “(...) está circunscrito a cuestionar decisiones judiciales que vulneren en forma directa derechos fundamentales, toda vez que a</p>	<p>Positivo.</p> <p>Concordante con el control constitucional, la garantía del</p>

<b>BOBADILLA TERÁN</b>	<p>juicio de este Tribunal la irregularidad de una resolución judicial con relevancia constitucional se produce cada vez que ésta se expida con violación de cualquier derecho fundamental y no sólo en relación con los supuestos contemplados en el artículo 4 del C.P. Const”. (Cfr. STC N° 3179-2004-AA, fundamento 14); criterio que, <i>mutatis mutandis</i>, resulta aplicable a las decisiones y pronunciamientos expedidos por los representantes del Ministerio Público.</p> <p>6. Que también se ha puntualizado que el debido proceso en su variable de respeto a la motivación de resoluciones salvaguarda al justiciable frente a la arbitrariedad judicial, toda vez que: “garantiza que las resoluciones judiciales no se encuentran justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso (Cfr. STC N° 3943-2006-PA/TC, fundamento 4). El referido criterio también es aplicable a los pronunciamientos del Ministerio Público.</p>	<p>debido proceso y abuso del Ministerio Público.</p>
<b>EXPEDIENTE N° 06167-2005- PHC/TC LIMA CASO: FERNANDO CANTUARIAS SALAVERRY</b>	<p><b><u>PRINCIPIO DE INTERDICCIÓN DE LA ARBITRARIEDAD</u></b></p> <p>30. Desde la consolidación del Estado de derecho surge el principio de interdicción de la arbitrariedad, el mismo que tiene un doble significado, tal como ha sido dicho en anterior</p>	<p>Positivo. Concordante con la autonomía del Ministerio Público y el abuso de ésta.</p>

	<p>sentencia: “a) En un sentido clásico y genérico, la arbitrariedad aparece como el reverso de la justicia y el derecho. b) En un sentido moderno y concreto, la arbitrariedad aparece como lo carente de fundamentación objetiva; como lo incongruente y contradictorio con la realidad que ha de servir de base a toda decisión. Es decir, como aquello desprendido o ajeno a toda razón de explicarlo. En consecuencia, lo arbitrario será todo aquello carente de vínculo natural con la realidad”. (Exp. N° 090-2004 AA/TC)</p> <p>Adecuando los fundamentos de la referida sentencia a la actividad fiscal, es posible afirmar que el grado de discrecionalidad atribuido al fiscal para que realice la investigación sobre la base de la cual determinará si existen elementos suficientes que justifiquen su denuncia ante el juez penal, se encuentra sometida a principios constitucionales que proscriben: a) actividades caprichosas, vagas e infundadas desde una perspectiva jurídica; b) decisiones despóticas, tiránicas y carentes de toda fuente de legitimidad; y c) lo que es contrario a los principios de razonabilidad y proporcionalidad jurídica.</p>	
<b>EXP. N° 0818-2013-PA/TC</b> <b>LAMBAYEQUE</b> <b>CASO: PEDRO</b>	5. Que se ha destacado en constante y reiterada jurisprudencia que el proceso de amparo contra resoluciones judiciales "está circunscrito a cuestionar decisiones judiciales	Positivo.  Concordante con el control constitucional.



<b>GABRIEL MATUTE ARAOZ</b>	<p>que vulneren de forma directa derechos fundamentales toda vez que a juicio de este Tribunal, la irregularidad de una resolución judicial con relevancia constitucional se produce cada vez que ésta se expida con violación de cualquier derecho fundamental y no sólo en relación con los supuestos contemplados en el artículo 4 del CP Consto (Cfr. STC. N.o 3179-2004-AA/TC, fundamento 14). Criterios que <i>mutatis mutandi</i> resultan aplicables a las decisiones emitidas por los Representantes del Ministerio Público.</p> <p>Asimismo, que "a menos que se trate de decisiones manifiestamente arbitrarias y sin ningún sustento fáctico o jurídico, o abiertamente irrazonables, las resoluciones .fiscales mediante las cuales los representantes del Ministerio Público, en ejercicio de sus atribuciones, disponen formular denuncia o abstenerse, como sucede en el caso de autos, cuando estas se encuentran razonablemente sustentadas en hechos y disposiciones legales que los respaldan, no pueden ser cuestionadas mediante el proceso de amparo. (Cfr. STC. N.O 4883-2006-AA/TC, fundamento 6).</p>	
<b>EXP. N.º 02748-2010-PHC/TC LIMA ALEXANDER MOSQUERA IZQUIERDO</b>	<p><b><u>EL CONTROL CONSTITUCIONAL DE LAS ACTUACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO</u></b></p> <p>3. El artículo 159º de la Constitución ha asignado al Ministerio Público una serie de funciones constitucionales, entre las que</p>	<p>Concordante con la autonomía del Ministerio Público, abuso de la autonomía y el control</p>

	<p>destacan <i>la facultad de conducir o dirigir desde su inicio la investigación de delito, así como la de ejercitar la acción penal ya sea de oficio o a pedido de parte</i>. Si bien se trata de facultades discrecionales que, de modo expreso, el poder constituyente le ha reconocido al Ministerio Público, sin embargo, no pueden ser ejercidas, de manera irrazonable, con desconocimiento de los principios y valores constitucionales, ni tampoco al margen del respeto de los derechos fundamentales, antes bien, en tanto que el Ministerio Público es un órgano constitucional constituido y por ende sometido a la Constitución, tales facultades deben ser ejercidas en estricta observancia y pleno respeto de los mismos.</p> <p>4. En ese sentido, la posibilidad que la justicia constitucional realice un control de las actuaciones del Ministerio Público tiene su sustento, entre otros supuestos, en la garantía y el pleno respeto del derecho fundamental al debido proceso y sus diversas manifestaciones. Y es que, hoy por hoy, no existe duda que este derecho despliega también su eficacia jurídica en el ámbito de la etapa pre jurisdiccional de los procesos penales; es decir, ahí en la fase del proceso penal en la que al Ministerio Público le corresponde concretizar el mandato previsto en el artículo 159° de la Constitución. Claro está, que las garantías previstas en la</p>	<p>constitucional.</p>
--	---	------------------------

	referida disposición constitucional serán aplicables a la investigación fiscal siempre que sean compatibles con su naturaleza y fines de las actuaciones del Ministerio Público.	
<b>EXP. N.O 02492-2007-PHC/TC</b> <b>LIMA LUPE MARITZA ZEY ALLOS GONZALES</b>	<p><b><u>CONTROL CONSTITUCIONAL DE LOS ACTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO</u></b></p> <p>7. Al respecto el artículo 159°, inciso 5 de la Constitución encarga al Ministerio Público el ejercicio de la acción penal de oficio o a petición de parte. En ese sentido, corresponde a los fiscales hacer ejercicio de la titularidad de la acción penal pública y, una vez conocida la denuncia o noticia criminal, proceder a formalizarla ante el juez penal si lo estiman procedente, conforme a lo establecido por la Ley Orgánica del Ministerio Público, aprobada por Decreto Legislativo N° 52.</p> <p>8. En este sentido y en cumplimiento de las atribuciones que le han sido conferidas constitucional y legalmente, la labor del fiscal se extiende a lo largo de todo el proceso penal, pero también desde la etapa que antecede al inicio del proceso judicial, como así lo proclama el artículo 159°, inciso 4 de la Norma Fundamental, pues conduce desde su inicio la investigación del delito.</p> <p>9. Es en este marco constitucional, ante la existencia de suficientes elementos incriminatorios que hagan necesario una investigación judicial, el representante del Ministerio Público deberá formalizar la</p>	Concordante con el control constitucional y autonomía del Ministerio Público.

	<p>denuncia ante la judicatura penal competente, decisión fiscal que evidencia el desarrollo de una mínima actividad probatoria así como un razonable grado de convicción al que debe arribar el fiscal en el transcurso de esta investigación previa al proceso penal.</p> <p>10. En esta labor postulatoria el fiscal actúa como defensor de la legalidad y representante de la causa pública en el proceso penal, atribución que ejecuta en función de la justicia y teniendo como parámetros a la Constitución y a la ley.</p> <p>11.No obstante estas facultades constitucionales los actos del Ministerio Público no se legitiman desde la perspectiva constitucional, en sí mismos, sino a partir del respeto pleno del conjunto de valores, principios constitucionales y de los derechos fundamentales de la persona humana, de conformidad con el artículo 10 de la Constitución.</p>	
<p><b>EXP. N.º 4883-2006-PA/TC LA LIBERTAD CARLOS EDUARDO SÁNCHEZ MACHADO</b></p>	<p>3. Que este Colegiado no concuerda con el argumento aducido por las instancias judiciales para rechazar la demanda. Al respecto, es menester dejar establecido que el hecho de que el artículo 4.º del Código Procesal Constitucional y el artículo 200.2 de la Constitución no hagan referencia expresa a las resoluciones del Ministerio Público, no implica que estas no puedan ser cuestionadas vía los procesos constitucionales. Resulta</p>	<p>Concordante con el control constitucional de los actos del Ministerio Público.</p>

	<p>evidente que las resoluciones del Ministerio Público, en vista de que se trata del ejercicio del poder público del Estado, requieren de mecanismos adecuados de control, dado que pueden, eventualmente, afectar derechos fundamentales de las personas sometidas a investigación, tras la imputación de algún ilícito penal. Ante tales eventualidades, los procesos constitucionales, entre ellos el amparo, constituyen medios adecuados y efectivos de defensa que deben ser administrados por los jueces constitucionales apelando a una interpretación finalista que no restrinja su uso, y sobre todo que no generen zonas de intangibilidad a la labor de control que corresponde a la jurisdicción constitucional.</p> <p>4. Que, sentado lo anterior, este Colegiado también debe precisar que el trámite que debe seguir una demanda de amparo contra resoluciones judiciales es distinto al trámite contra las resoluciones emitidas por el Ministerio Público. Es evidente que la acción de amparo contra las resoluciones judiciales debe tramitarse de manera especial, de manera que sea compatible con la naturaleza jerárquica de la organización judicial, evitando que un Juez de primera instancia pueda, por ejemplo, anular un fallo emitido por la Corte Suprema. Como vemos, ese problema no se presenta cuando se trata de una resolución del</p>	
--	--	--

	Ministerio Público, por lo que, de conformidad con el artículo 51. 0 del Código Procesal Constitucional el Juez competente para conocer una demanda de amparo contra dichas resoluciones, es el Juez natural del amparo genérico.	
<b>EXP. N°. 01321-2010-PA/TC</b> <b>ANCASH</b> <b>CASO:</b> <b>FLORENCIO JESÚS NAVARRO SÁNCHEZ</b>	<p style="text-align: center;"><b><u>SOBRE EL CONTROL CONSTITUCIONAL DE LOS ACTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO</u></b></p> <p>2. Al respecto, sobre la posibilidad constitucional de controlar los actos expedidos por el Ministerio Público, este Colegiado en la STC N° 02492-2007-PHC/TC ha establecido que el artículo 159°, inciso 5 de la Constitución encarga al Ministerio Público el ejercicio de la acción penal de oficio o a petición de parte. En ese sentido, corresponde a los fiscales hacer ejercicio de la titularidad de la acción penal pública y, una vez conocida la denuncia o noticia criminal, proceder a formalizarla ante el juez penal si lo estiman procedente, conforme a lo establecido por la Ley Orgánica del Ministerio Público, aprobada por Decreto Legislativo N° 52. (fundamento 7)</p> <p>3. Es en este marco constitucional, ante la existencia de suficientes elementos incriminatorios que hagan necesario una investigación judicial, que el representante del Ministerio Público deberá formalizar la denuncia ante la judicatura penal competente, decisión fiscal que evidencia el desarrollo de</p>	Concordante con el control constitucional y autonomía del Ministerio Público.

	<p>una mínima actividad probatoria así como un razonable grado de convicción al que debe arribar el fiscal en el transcurso de esta investigación previa al proceso penal (fundamento 9).</p> <p>4. No obstante estas facultades constitucionales de los actos del Ministerio Público no se legitiman desde la perspectiva constitucional, en sí mismos, sino a partir del respeto pleno del conjunto de valores, principios constitucionales y de los derechos fundamentales de la persona humana, de conformidad con el artículo 1° de la Constitución (fundamento 11); razón por la cual corresponde evaluar la Resolución Fiscal que desestima la denuncia penal formulada por el recurrente.</p>	
--	---	--

Habiendo revisado las sentencias que forman parte del análisis jurisprudencial, procederemos a indicar que los resultados positivos son superiores frente a los negativos para el planteamiento propuesto; siendo así, resulta importante mencionar que aporta positivamente al planteamiento del problema puesto que la justificación que fundamenta los fallos incorpora la necesidad del control sobre este organismo, para una mejor ilustración se hace a continuación un resumen del resultado obtenido:

**CUADRO Nro. 08:**

<b>RESUMEN DEL RESULTADO DE LA OPINIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y CORTE SUPREMA RESPECTO A LA ACTIVIDAD DEL MINISTERIO PÚBLICO.</b>	
<b>CRÍTICA DE LA ACTIVIDAD DEL MINISTERIO PÚBLICO.</b>	<b>CANTIDAD</b>
Sobre la Autonomía	7
Sobre el Control Constitucional	10
Sobre el Debido Proceso	4
Sobre el Abuso	4

Del resultado obtenido, se puede inferir que bajo la opinión del Tribunal Constitucional y Corte Suprema sobre la actividad del Ministerio Público, que se precisa de un control sobre ella, ya que terminan constituyendo una práctica inadecuada en la labor persecutora del delito, traduciéndose ello en la generación del abuso de derecho por parte de esta institución, por lo mismo que corresponde sugerir la necesidad de este control se ocupe de verificar los aspectos que el mismo Tribunal reseña como son la autonomía, el debido proceso y la posibilidad del abuso.

Por otro lado, si bien es verdad los fundamentos de la jurisprudencia analizada son positivos para el planteamiento de nuestro problema, no sucede lo mismo con los resultados que contienen las Sentencias que expide el Tribunal Constitucional, puesto que en su mayoría, son negativos a los intereses de las personas que demandan en su condición de afectados, toda vez que según se puede deducir, el Tribunal Constitucional ha precisado que hay asuntos, cuya titularidad exclusiva corresponde al Ministerio Público. En ese sentido, la impresión que causan dichos resultados es una cierta incongruencia entre la labor que ejercen los fiscales y la estructura del derecho procesal penal porque si por el desinterés de un fiscal se perdió un proceso, entonces de qué forma, se revierte una situación, si no se controlan de manera efectiva sus actos.



Sin el ánimo de justificar la labor del Tribunal Constitucional, se puede indicar que lo referido en sus decisiones finales, a pesar de no satisfacer las demandas de los ciudadanos, nos dejan clara la idea de la viabilidad de un control constitucional de la actividad pre jurisdiccional del Ministerio Público.

#### **6.1.6. Resultado del análisis jurisdiccional.**

A continuación se procederá con el análisis de algunas disposiciones fiscales, contenidas en la Carpeta Fiscal Nro. 140-2016, sobre Lesiones, de la Fiscalía Provincial Mixta de Yonán – Tembladera, Distrito Fiscal Cajamarca, pues considero deben ser analizadas, ya que motivaron a que pueda desarrollar este tema de investigación, haciendo presente que conforme a la copia del oficio que adjunto (**ANEXO Nro. 07**), no ha sido posible tener acceso a las carpetas fiscales en el Distrito Fiscal de Lambayeque, habiendo obtenido solo una disposición, como reitero, por búsqueda propia.

##### **6.1.6.1. Carpeta Nro. 140-2016.**

Fiscalía Provincial Mixta de Yonán Tembladera

Fiscal responsable: TITO GERARDO SIRLOPU GARCÉS

Delito: Lesiones Culposas

(**ANEXO Nro.08**)

##### **6.1.6.1.1. De los actuados en sede policial.**

Mediante Oficio Nro. 163-2016-REGPOL/CAJ-CSPNP-SM-CS-TEM/CPNP- EL SALITRE “D” de fecha 20.06.2016, el Comisario de la dependencia policial de El Salitre, remite los actuados policiales relacionados con el accidente de tránsito ocurrido el día 18.06.2016 (choque con daños personales y materiales entre un camión, moto lineal y ómnibus), como son:

- 1) El acta de intervención policial s/n (pnpch).
- 2) Acta de situación del vehículo de placa de rodaje Nro. D4L-903.
- 3) Acta de ocurrencia policial.
- 4) Acta de incautación de vehículo.
- 5) Acta de inspección técnico policial.

**6) Declaración de Luis Javier Vallejos.**

**6.1.6.1.2. De los actuados en sede de la fiscalía.**

**6.1.6.1.2.1. De la Disposición Nro. 01-2016-FPMYT.**

Con fecha 21 de Junio del año 2016, el Fiscal responsable de la referida Carpeta Fiscal expide dicha Disposición y en ella, DISPONE: *“ABRIR INVESTIGACIÓN PRELIMINAR por el plazo de SESENTA DÍAS contra LUIS JAVIER VALLEJOS por la presunta comisión del delito contra el Cuerpo y la Salud en la modalidad de Lesiones Culposas en agravio de JORGE LUIS DEZA BARDALES”*.

Disponiéndose en este plazo realizar actos de investigación y cuanto acto de investigación sea necesario para el mejor esclarecimiento de los hechos, que conforme se verificará más adelante, mientras el caso estuvo a su cargo, nunca se realizaron.

**6.1.6.1.2.2. De la Disposición Nro. 02-2016-FPMYT**

Luego de más de 4 meses sin realizar acto investigatorio alguno, con fecha 26 de Octubre del año 2016, el fiscal responsable del caso expide la citada disposición, declarando que: *“NO PROCEDE FORMALIZAR Y CONTINUAR CON LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA contra Luis Javier Vallejos, por la presunta comisión del delito de Lesiones Culposas en agravio de Jorge Luis Deza Bardales”*; y ordena: Archivar los actuados.

**6.1.6.1.2.2.1. Fundamentos que lo sustentan.**

- i. El agraviado por el hecho de realizar una actividad riesgosa, al conducir una cosa peligrosa (una motocicleta lineal) ha generado un riesgo.
- ii. El riesgo mencionado lo incrementó con acciones culposas de negligencia contraviniendo lo dispuesto en el Reglamento Nacional de Tránsito D.S Nro. 016-09-MTC-RNT: *“Artículo 135 VIAS DE DOS CARRILES.- En calzadas de dos carriles con tránsito en doble sentido, los vehículos deben circular por el carril de la derecha”*.
- iii. El agraviado, también incrementó el riesgo con acciones culposas de

imprudencia, al tratar de adelantar al ómnibus de la Empresa de Transportes DIAS conduciendo su motocicleta a una velocidad no razonable o prudente, bajo las condiciones de transitabilidad existentes en una vía, sin considerar los riesgos y peligros presentes y posibles, sin tener en cuenta la configuración de la vía con curvas, motivo por el cual no se percató de la presencia del camión, y al salir de la curva lo hizo invadiendo el carril contrario, produciendo así el choque con el vehículo del imputado. Como consecuencia del choque entre los dos vehículos mencionados, JORGE LUIS DEZA BARDALES resultó con lesiones graves.

- iv.** El agraviado ha aportado su negligencia e imprudencia exclusivamente en la causa del accidente. Su conducta culposa ha sido única y total, es un hecho propio, por tanto, resulta ser autorresponsable de sus propias lesiones.

**6.1.6.1.2.3. Del recurso de elevación de actuados y pedido de exclusión del fiscal.**

Con fecha 22 de Noviembre del año de 2016, ante la decisión de archivo, la parte agraviada interpone el mencionado recurso, por cuanto:

**El Fiscal no ha realizado actos de investigación dispuestos por él en la Disposición Nro. 01-2016-FPMYT, como:**

**1)** Solicitar la Historia Clínica del agraviado JORGE LUIS DEZA BARDALES, solicitando se realice el reconocimiento médico legal correspondiente, sino que ésta fue gestionada por propia gestión de la parte agraviada; **2)** No ha recibido la Declaración en sede del Ministerio Público del agraviado debido a su grave estado de salud, ni tampoco se ha preocupado por dejar constancia a nivel fiscalía sobre esta situación; **3)** No ha recibido las declaraciones de LUIS JAVIER VALLEJOS y de MARCO ANTONIO HERRERA FLORES en sede del Ministerio Público, ni siquiera se sabe por qué es que no han declarado, cuáles han sido las razones del fiscal para no considerar sus declaraciones y menos justificarlas en la Disposición de archivo, respecto de las cuales no se ha pronunciado; así como tampoco se han reprogramado en la investigación preliminar tales declaraciones, y otros actos que según dispuso el fiscal sean necesarios para el mejor esclarecimiento de los hechos.

**El Fiscal no ha realizado nuevos actos de investigación solicitados por la parte agraviada, como:**

**1)** Se realice una nueva Inspección Técnico Criminal con su conducción en su condición de titular de la acción penal y los demás sujetos procesales como: El conductor del camión de placa de rodaje Nro. D4L-903, Luis Javier Vallejos; los conductores del ómnibus de la **Empresa de Turismo “DÍAS”** que participó en el accidente de tránsito previa identificación, debiendo oficiarse al representante de dicha empresa, quien deberá aportar el Nro. de placa y el nombre del conductor que transitaba a esa hora con destino a Cajamarca; **2)** Se tenga en cuenta la Declaración del conductor del camión de placa de rodaje Nro. D4L-903, Luis Javier Vallejos, quien ha sostenido que el ómnibus de la **Empresa de Turismo “DÍAS”** es quien invadió el carril en el que se dirigía el camión, hecho súbito y repentino que fue el causante en forma **DETERMINANTE** para la materialización del accidente de tránsito; **3)** Se recabe el reconocimiento Médico Legal, el mismo que deberá practicarse al agraviado en el Hospital Regional de Lambayeque en vista de la Historia Clínica, debiendo oficiarse por la distancia al Instituto de Medicina Legal de Chiclayo para que por reciprocidad practique dicha diligencia; **4)** No se ha tomado la declaración del personal policial que participó en las diligencias a nivel de la policía; y otros actos de investigación que resulten fundamentales para determinar plena responsabilidad del conductor del ómnibus de la Empresa de Turismo “DIAS”; asimismo, no ha procedido a la ampliación de la investigación preliminar oportunamente cuando se le solicitó, sino que habiendo pasado 144 días exactamente recién ha procedido a archivar en caso sin realizar acto indagatorio alguno, como tampoco ha proveído ninguno de los escritos presentados ante su Despacho, sino que recién lo hace con el archivo, hecho que no tiene sentido, porque se supone que son actos nuevos de investigación que debieron proveerse y realizarse antes de archivar el caso.

Asimismo, se solicitó la exclusión del fiscal y la designación de una nueva fiscal al caso.

**6.1.6.1.2.4. De la Disposición Nro. 272-2016-MP-SFSP-C de la fiscalía superior penal.**

Con fecha 5 de Diciembre del año 2016, la Segunda Fiscalía Superior Penal de Cajamarca, expide la referida disposición, disponiendo:

**1°** Declarar fundado el recurso de elevación de actuados interpuesto por la parte agraviada.

**2°** Nula la Disposición Nro. 02-2016-FPMYT de fecha 26 de Octubre de 2016, mediante la cual se dispone no formalizar y continuar con la investigación.

**3°** Excluir al fiscal provincial; en consecuencia que, el fiscal llamado por ley, proceda a realizar los actos de investigación, se amplíe la investigación respecto al conductor del bus de la empresa de transportes DIAS aún no identificado, otorgándole, para tal fin, un PLAZO ADICIONAL EXTRAORDINARIO DE 60 DÍAS.

**4°** REMITIR copias certificadas de los actuados a la Oficina Desconcentrada de Control Interno de Cajamarca para su conocimiento y fines pertinentes.

**6.1.6.1.2.4.1. De los fundamentos que la sustentan.**

**1° Acta de intervención policial.-** Que, la descripción primigenia de los hechos efectuado por la autoridad policial y con participación del testigo presencial e imputado, evidencia la participación en los hechos (accidente de tránsito que produjo lesiones al agraviado) de un bus de la empresa de transportes Dias, cuyo conductor no ha sido identificado.

**2° Acta de inspección técnico policial.-** Las circunstancias detalladas en éste, advierten la existencia de una accidente de tránsito que ha producido lesiones al conductor de la motocicleta, en el cual entre otros vehículos, se da cuenta de la participación (en el accidente de tránsito) de un bus de la empresa de transportes Dias, por tanto, la presunta responsabilidad respecto a los hechos materia de investigación.

**3° De la declaración del imputado,** se advierte la participación de un ómnibus de la empresa de transportes Dias en el accidente de tránsito, por cuanto este habría invadido el carril contrario previo al impacto entre la motocicleta y el camión conducido por el

imputado; a la vez sostiene que la motocicleta “*por no chocar con la parte posterior del bus, invade mi carril*”; afirmación que sustenta la versión expuesta por la recurrente; hipótesis fáctica que no ha sido mínimamente descartada o acreditada durante la investigación preliminar, por cuanto no se actuó ninguna diligencia tendiente a aclarar estas y otras circunstancias periféricas que rodean al hecho materia de investigación; en consecuencia, cabe la posibilidad de que existan otros factores que hayan contribuido en la producción de los hechos (accidente de tránsito), cuya ilicitud se debe esclarecer cabalmente.

**4° Las conclusiones del Acta de inspección técnico policial** deben ser analizadas en forma conjunta con otros elementos de investigación que los doten de solidez, conforme al sistema de valoración de la sana crítica adoptada por nuestro sistema penal, otros elementos de investigación que en el presente caso no se acopiaron, debido a la falta de diligencia por parte del fiscal del caso.

**5° Cabe recordar que el fiscal**, como titular de la acción penal pública, cuenta con la facultad discrecional de disponer el archivo fiscal de una denuncia, ello en virtud de lo establecido por el inciso 1) del artículo 334° del Código Procesal Penal. En el presente caso, conforme a los hechos materia de investigación y el análisis de los actuados preliminares, dispone la actuación de diligencias preliminares, para lo cual por única vez otorga un plazo adicional extraordinario de 60 días, para que se complete la investigación.

#### **6.1.6.1.2.4.2. De la exclusión del fiscal.**

En la citada disposición superior se da cuenta de la falta de diligencia por parte del fiscal en la investigación, pues de la revisión de los actuados, se advierte que no se ha efectuado ninguna de las diligencias antes indicadas, diligencias que se entiende justificaban el plazo inicial de los 60 días, plazo que a la vez no ha sido ampliado, por ende a la fecha 26 de Octubre de 2016 (fecha de archivamiento), dicho plazo ha vencido por más de dos meses.

Las circunstancias antes descritas, evidencian que el Fiscal del caso- luego de haber transcurrido más de cuatro meses en el que estuvo a cargo de la investigación (dos de ellos inclusive con plazo vencido)- y sin realizar ninguna diligencia, decide archivar el caso; asimismo.- al margen de los indicios razonables que justifican la apertura de la investigación preliminar-, en el presente caso, no existe justificación razonable por parte del fiscal al haber decidido aperturar investigación preliminar y luego de cuatro meses- sin una diligencia realizada-, disponer el archivo del caso con la sola justificación de los actuados preliminares efectuados por la autoridad policial; además de los actuados se evidencian diversos escritos presentados por la recurrente, los mismos que tampoco han sido proveídos en su debida oportunidad. Los argumentos expuestos en la presente y el párrafo anterior, advierten, la falta de diligencia en el cumplimiento de sus funciones por parte del Fiscal Provincial en el presente caso; por cuanto, conforme a lo dispuesto por el numeral 1) del artículo 62° del Código Procesal Penal, corresponde excluir al referido fiscal en la presente investigación, a la vez, la remisión de copias certificadas de los actuados a la Oficina Desconcentrada de Control Interno de Cajamarca para su conocimiento y fines pertinentes. Por tanto, el fiscal llamado por ley, debe continuar con la presente investigación, quien deberá actuar las diligencias expuestas en la disposición, emitiendo la disposición correspondiente.

#### **6.1.6.1.2.5. De la Disposición Nro. 04-2017-MP-FPMYT.**

Mediante **DISPOSICIÓN Nro. 04-2017-MP-FPMYT**, de fecha 02 de Enero del año 2017, se dispone ampliar por el término de 60 días la investigación contra el que resulte responsable, por la presunta comisión del delito CONTRA LA VIDA, EL CUERPO Y LA SALUD, en la modalidad de LESIONES CULPOSAS, previsto en el artículo 124° del Código Penal, en agravio de **JORGE LUIS DEZA BARDALES**, disponiendo la realización de diligencias dispuestas por el fiscal superior.

**6.1.6.1.2.6. De la Disposición Nro. 05-2017-MP-FPMYT: Disposición de no haber lugar a formalizar y continuar con la investigación preparatoria**

Con fecha 10 de Abril del año 2017, la nueva fiscal a cargo de la investigación, DISPONE QUE: “*No procede formalizar y continuar con la investigación preparatoria (...)*”

**6.1.6.1.2.6.1. De los fundamentos que lo sustentan:**

La Fiscal señala que, en mérito a los hechos descritos y diligencias actuadas, para el mejor entendimiento de las razones que motivan la mencionada disposición, el análisis de los hechos se delimitará a lo siguiente:

**- Determinar si en la producción del resultado- Lesiones Graves en el cuerpo a don JORGE LUIS DEZA BARDALES- don LUIS JAVIER VALLEJOS, en su actuar como conductor, infraccionó el deber de cuidado mediante de acciones de negligencia, impericia o imprudencia:**

De los elementos de convicción, se tiene que si bien el día 18 de Junio de 2016, se produjo un suceso de tránsito- choque- del cual resultó con lesiones graves don Jorge Luis Deza Bardales, también es cierto que dicho resultado no es atribuible al actuar de don Luis Javier Vallejos, por cuanto éste en su tránsito por la carretera de penetración Ciudad de Dios- Cajamarca, a la altura del kilómetro 67+400, se desplazaba por su carril-lado derecho de la vía (de este a Oeste), siendo que el conductor del vehículo menor invadió el carril de don Luis Javier Vallejos, chocando el motociclista con el estribo lateral izquierdo del camión, provocando su caída, debiendo agregarse que el investigado contaba con la documentación idónea que lo habilitaba para conducir, así como no se encontraba en estado de ebriedad.

Para la configuración del delito de Lesiones Culposas, se requiere que la conducta del imputado origine las lesiones, debiendo existir un nexo de causalidad entre la conducta culposa y el resultado. En el presente caso, dicho nexo no está presente en la conducta de Luis Javier Vallejos respecto de las lesiones que presentó Jorge Luis Deza Bardales,



no resultando estas imputables objetivamente al investigado, por lo que corresponde archivar en este extremo.

**- Determinar si en la producción del resultado- Lesiones Graves en el cuerpo a don JORGE LUIS DEZA BARDALES- un tercero no identificado, en su actuar como conductor, infraccionó el deber de cuidado mediante de acciones de negligencia, impericia o imprudencia”.**

Se deduce que la participación del conductor del vehículo no identificado, no fue determinante y tampoco contributiva en la producción del resultado-lesiones-, en el accidente de tránsito ocurrido el día 18 de Junio de 2016.

De los elementos de convicción, se tiene que si bien el día 18 de Junio de 2016, se produjo un suceso de transito-choque- del cual resultó con lesiones graves don Jorge Luis Deza Bardales, también es cierto que dicho resultado no es atribuible al actuar del Tercero No identificado, por cuanto este antecedió al vehículo menor (por versión del imputado), y que si bien habría invadido el carril del conductor del camión, sin embargo luego ocupó su carril (en dicho actuar habría generado un riesgo para el conductor del camión), y que en todo caso, el que debió guardar la distancia necesaria (por la condiciones de la vía) para que el vehículo que lo precedía realice la maniobra que realizó, era precisamente don Jorge Luis Deza Bardales, acción que no realizó, pues al no conservar su distancia con el vehículo que lo precedía (ómnibus), se vio obligado a realizar acciones que de algún modo eviten que resulte lesionado (impacto contra el ómnibus), optando por abrirse al carril contrario, pero sin preveer también que por éste circulaba otro vehículo (camión) con el cual chocó en el estribo lateral izquierdo, provocando su caída y como consecuencia de ello las lesiones graves que presentó.

Debe indicarse que si bien no se ha logrado identificar al tercer vehículo y a su conductor, que se precisa se habría desplazado por la vía al momento de producirse el suceso de tránsito, sin embargo conforme a los hechos suscitados (y que se encuentran plasmados en los actuados), no resulta necesaria su identificación en vista a lo

analizado, al advertirse responsabilidad por negligencia o imprudencia en el conductor del vehículo menor.

**6.1.6.1.2.7. Del recurso de elevación de actuados.**

Con fecha 04 de Mayo de 2017, se interpone el recurso de elevación de actuados contra la Disposición de Archivo, por cuanto:

Si bien es cierto se considera que el señor Luis Javier Vallejos no es responsable de accidente de tránsito, no ocurre lo mismo con el Tercero No identificado, sino que éste según la recurrente estaba plenamente identificado, pues la versión dada por el Señor Luis Javier Vallejos ha sido cambiada por la propia Fiscal para hacerlo parecer como una posibilidad y no como un hecho concreto.

A ello, se agregan una serie de incongruencias en el criterio asumido por la Fiscal para determinar el archivo de la carpeta fiscal.

**6.1.6.1.2.8. De la Disposición Nro. 110-2017-MP-SFSP-C**

Con fecha 24 de Mayo de 2017, la Segunda Fiscalía Superior Penal de Cajamarca expide la citada disposición mediante la cual declara: INFUNDADO el recurso de elevación de actuados interpuesto por la recurrente. Confirmar la Disposición Nro. 05-2017-MP-FPMYT, de fecha 10 de Abril de 2017, mediante la cual dispone no formalizar y continuar con la investigación preparatoria.

**6.1.6.1.2.8.1. De los fundamentos que lo sustentan.**

- Contaminación de la escena de los hechos.- Se produjo la contaminación de la escena de los hechos y se ha viciado el manejo de ella (ruptura de la cadena de custodia).
- Cabe concluir que los hechos materia de investigación, se han producido por la actitud imprudente del lesionado, dado que éste en su intento de adelantar con su motocicleta (UT1) al ómnibus de la Empresa de Transportes Dias, invadió el carril contrario e impactó con el camión (UT1) conducido por el investigado Luis Javier Vallejos; accionar con el que se produjo el accidente de tránsito que le ha ocasionado las lesiones

sufridas por el lesionado y que han sido generadas por su imprudencia, advirtiéndose así, la autoresponsabilidad de los hechos materia de investigación (accidente de tránsito que produjo lesiones a Jorge Luis Deza Bardales).

#### **6.1.6.1.3. Del control constitucional en el Poder Judicial.**

##### **6.1.6.1.3.1. De la demanda de acción de amparo.**

Con fecha 08 de Agosto del año 2017, se interpone acción de amparo ante el Tercer Juzgado Civil de Chiclayo, por violación al derecho constitucional al debido proceso concretado en la disposición Fiscal Nro. 110-2017-MP-SFSP-C, expedida por el Fiscal Superior de la Segunda Fiscalía Superior Penal de Cajamarca, y la Disposición Nro. 05-2017-MP-FPMYT, expedida por la Fiscal de la Fiscalía Provincial Mixta de Yonán, a fin de que se anulen y se repongan las cosas al estado anterior en que se produjo la violación a los derechos constitucionales, puesto que la citadas resoluciones no tienen una adecuada motivación.

##### **6.1.6.1.3.2. De la resolución que declara su improcedencia.**

Mediante resolución Nro. 01, de fecha 21 de Agosto del año 2017, el tercer Juzgado Especializado Civil de Chiclayo, entre otros fundamentos, que son de interés para el tema investigado, declara la improcedencia de la demanda porque la pretensión y los hechos no guarda relación con el contenido del derechos constitucional que invoca, toda vez, que lo que pretende la actora es que este órgano constitucional anule dichas disposiciones con el objeto que el representante del Ministerio Público formalice investigación preparatoria, hecho que no corresponde, por cuanto la acción penal es exclusiva y excluyente del Ministerio Publico, hecho que no se puede lograr a través de la demanda de amparo, resolución que fue apelada y aún no existe pronunciamiento por la Sala Civil de este Distrito Judicial.

##### **6.1.6.1.4. Del control realizado por la Oficina Desconcentrada de Control Interno.**

- Con fecha 05 de Setiembre de 2016 se interpone queja contra el Fiscal Provincial a cargo de la investigación Preliminar de la Carpeta Fiscal Nro. 140-2016, sobre Lesiones

Culposas, la misma que fue acogida por la Oficina Desconcentrada de Control Interno de Cajamarca, quien mediante Resolución de Inicio de Investigación Preliminar Nro. 001-2016-MP-ODCI-CAJAMARCA, de fecha 06 de Setiembre de 2016, resuelve: Abrir investigación preliminar por el plazo de 30 días hábiles, contra el fiscal provincial, por la presunta comisión de infracción disciplinaria, prevista en el inciso d) del artículo 23° del Reglamento de Organización y Funciones de la Fiscalía Suprema de Control Interno del Ministerio Público.

- Mediante Resolución Nro. 078-2017-MP-ODCI-CAJAMARCA, de fecha 29 de Mayo de 2017, la Oficina Desconcentrada de Control Interno de Cajamarca, resolvió: Declarar fundada en tres extremos la queja de parte formulada contra el fiscal provincial; por haber incurrido en la infracción administrativa prevista en el literal d) del artículo 23° del Reglamento de Organización y Funciones de la Fiscalía Suprema de Control Interno; por lo que de acuerdo con el artículo 24°, literal a) del Reglamento de Organización y Funciones de la Fiscalía Suprema de Control Interno se le impone la sanción administrativa de AMONESTACIÓN.

Se señala en la citada Resolución que si bien el fiscal provincial cuestionado como integrante del Ministerio Público, tiene total discrecionalidad y autonomía de criterio en la tramitación de sus investigaciones, conforme a lo establecido en el artículo 5° de la Ley Orgánica del Ministerio Público; sin embargo, se aprecia que el cuestionado al ser el titular de la acción penal, tenía la obligación de asumir la conducción de la investigación desde su inicio, decidida y proactivamente en defensa de la sociedad, es decir respetando todas las garantías que le exige el sistema, debió buscar de manera profesional, objetiva e incesante la verdad de los hechos, puesto que tiene el deber de la carga de la prueba y para eso es investido como defensor de la legalidad, de la sociedad e intereses públicos.

Se indica también que el Fiscal cuestionado no observó los plazos establecidos por ley para la emisión de la Disposición correspondiente, de acuerdo al artículo 334° inciso 2) del CPP, dilación que no es razonable y no se encuentra justificada de modo alguno,

dado que sí considera pertinente actuar diligencias excepcionales fuera del plazo establecido (60 días), debió emitir la disposición de su propósito mediante la cual disponía ampliar el plazo de investigación preliminar.

Ha quedado corroborado que durante el tiempo que el cuestionado tuvo a cargo la investigación (120) días aproximadamente) no emitió pronunciamiento alguno respecto de lo solicitado por la parte agraviada.

Respecto al daño causado, se tiene que el accionar del fiscal cuestionado, no tan solo vulneró la normatividad interna como representante del Ministerio Público, sino que perjudicó la tramitación del caso Nro. 140-2016, proyectando además un mensaje negativo hacia la comunidad y hacia los demás integrantes del Ministerio Público.

- Mediante Resolución Nro. 1708-2017, de fecha 06 de Octubre de 2017, ante los recursos de apelación presentados por las partes, la Fiscalía Suprema de Control Interno, resolvió declarar: INFUNDADOS los recursos de apelación, en consecuencia se CONFIRMA en todos sus extremos la Resolución Nro. 078-2017-MP-ODCI-CAJAMARCA, de fecha 29 de Mayo de 2017.

### **COMENTARIO:**

Como vemos en la carpeta fiscal, materia de análisis, su tramitación estuvo plagada de arbitrariedades desde que la propia Policía realizó las investigaciones previas, y cuando ésta fue derivada a la fiscalía, el fiscal en una actitud por demás arbitraria nunca realizó ningún acto de investigación, pese a los reiterativos pedidos de la parte agraviada, al contrario, paralizó la carpeta fiscal durante más de 4 meses, tiempo más que suficiente para que por el paso del tiempo se perdieran pruebas, incluso sabiendo de la participación de un tercer vehículo en el accidente, nunca lo incluyó en las investigaciones.

La desidia del fiscal, dio pie a que la parte agraviada lo quejara ante la Oficina Desconcentrada de Control Interno del Ministerio Público, donde finalmente se le

amonestó, y al saber que se le había iniciado una investigación preliminar, por la presunta comisión de infracción disciplinaria, recién decidió pronunciarse, pero esta vez para archivar el caso con la sola actuación del personal policial, no obstante haber dispuesto la realización de diligencias, que como se podrá advertir no se realizaron; ante esta decisión completamente abusiva, la parte agraviada interpone el recurso de elevación de actuados y a la vez la exclusión del fiscal, siendo declarado fundado, a la vez se excluyó al fiscal, y se dispuso otorgar un plazo adicional extraordinario por 60 días para la realización de las diligencias ordenadas por el superior, e incluso se remitió copias certificadas a Control Interno.

No obstante haber obtenido un resultado positivo por parte del Fiscal Superior, a la fecha que la nueva fiscal toma la investigación, esto es aproximadamente 7 meses después del suceso materia de investigación, la inactividad del fiscal excluido tuvo consecuencias negativas en la investigación, toda vez que los medios probatorios para el esclarecimiento de los hechos simplemente ya no se pudieron recoger, pues se perdieron por el paso del tiempo, lo que una vez más originó el archivo de la investigación, siendo confirmada por el fiscal superior. Ante lo cual, la parte agraviada, en su afán de conseguir justicia, interpuso demanda de amparo en esta ciudad, sin embargo fue declarada improcedente, entre ellos el principal motivo para negar el acceso a la justicia y a que los actos de la fiscalía en este caso sean objeto de control constitucional fue que la acción penal es exclusiva y excluyente del Ministerio Público, que no se puede lograr que este formalice denuncia a través de la demanda de amparo, esta situación ha conllevado a que se interponga una apelación, cuyo resultado aun esta por dilucidarse.

Entonces, vemos que la falta de interés del titular de la acción penal como es el Ministerio Público, puede llegar a quebrar la investigación de un delito y con ello, quienes resultan muy beneficiados son los imputados, y si bien es cierto el propio Ministerio Público a través de sus Oficinas Desconcentradas de Control Interno puede ejercer un control, sin embargo muchas veces las sanciones disciplinarias o exclusiones de la investigación de un fiscal (pedido ante el Fiscal Superior) no pueden revertir los actos de investigación de urgente realización que no se hicieron; por ende las sanciones

que puedan recibir, al parecer de la investigadora, ya en nada favorecen al proceso porque ya se generó un perjuicio durante la tramitación de la investigación preliminar.

**6.1.6.2. Carpeta Nro. 4676-2018.**

02 Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo

Fiscal responsable: CARLOS GUSTAVO CÁCERES ALEJOS

Delito: O.A.F

**(ANEXO Nro. 09)**

**6.1.6.2.1. De la Disposición Nro. 01: Disposición de inicio de diligencias Preliminares.**

Con fecha 19 de Julio del año en curso, se emitió la citada disposición en la cual se dispone dar inicio a las diligencias preliminares en un plazo de 90 días, por el delito de Omisión a la Asistencia Familiar, disponiendo se realicen diligencias como:

- 1) Recibir la declaración de la denunciante, a fin de que presente al Despacho Fiscal copias certificadas de los cargos de notificación, con los que se haya puesto de conocimiento, al investigado, la Resolución Nro. 26.
- 2) Oficiar al 1er Juzgado de Paz Letrado de Familia- Chiclayo, a fin de que remita copias certificadas de los cargos de notificación, con los que se haya puesto de conocimiento al denunciado, la Resolución Nro. 26.
- 3) Demás actos de investigación, que en el transcurso de la misma, resulten pertinentes para el esclarecimiento de los hechos.

**COMENTARIO:**

La disposición en mención no hace más que corroborar que los fiscales hacen un inadecuado uso de su autonomía, en principio porque el plazo que se dispone para las diligencias preliminares resulta ser excesivo tratándose de un delito de omisión a la asistencia familiar, pues el plazo de las diligencias preliminares en un proceso común, de conformidad con el artículo 334° inciso 2) del Código Procesal Penal, es de 60 días y el fiscal solo puede fijar un plazo distinto según las características, complejidad y circunstancias de los hechos objetos de investigación, que un caso de omisión a la

asistencia familiar, de mínima entidad no lo merece, por el contrario, hoy por hoy, el artículo 446.4 del CPP, establece que los delitos OAF, deben ser conocidos en la vía del proceso inmediato. En ese sentido, se vulnera el plazo razonable y con ello el debido proceso, lo cual afecta gravemente a la parte agraviada, en este caso los menores de edad, quienes no pueden hacer efectivo su derecho alimentario.

Por otro lado, el Fiscal exige que la denunciante presente copias certificadas de los cargos de notificación al denunciado; al rendir su declaración la denunciante, tomó conocimiento que lo que el Fiscal exigía era el cargo de notificación realizado en el **domicilio real** del demandado de la resolución Nro. 26, mediante la cual el juzgado aprobó la liquidación de pensiones devengadas e interese legales y requería el cumplimiento de la suma adeudada, pese a que se encontraba debidamente notificado en domicilio procesal por éste señalado. Ésta exigencia resulta ser ilícita, puesto que no es permitida por nuestro Código Procesal Civil y la Ley Nro. 27337 que aprueba el Código de los Niños y Adolescentes, pues el denunciado había sido válidamente notificado en el domicilio procesal elegido para que el juez le haga llegar todas las resoluciones que éste expida, por ende es suficiente que se le haya notificado con las resoluciones en su domicilio procesal para surtir todos sus efectos en el demandado, puesto que ya fue conocido por éste; en ese sentido, la exigencia del fiscal desconoce la decisión judicial, atentando contra el debido proceso y peor aún, contra el interés superior del niño al no dar trámite a una denuncia de delito de omisión a la asistencia familiar basándose en la justificación de que es necesario tener a la vista la notificación en el domicilio real del demandado de la resolución de aprobación de las pensiones de alimentos no cancelados con el apercibimiento de ser denunciado por el delito de omisión a la asistencia familiar.



## **CAPÍTULO VII: CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS**

### **7.1. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS.**

Corresponde a esta sección la discusión de los resultados obtenidos con el fin de poder establecer si las variables pueden ser verificadas válidamente en función a ello, por lo mismo que ubicaremos cada una de ellas para cuestionarlas.

#### **VARIABLE INDEPENDIENTE:**

##### **Abuso de la autonomía del Ministerio Público.**

##### **7.1.1. Discusión del objetivo específico: Analizar si el abuso de la autonomía del Ministerio Público afecta el debido proceso.**

El Abuso del derecho ha sido definido por el Jurista Gustavo Ordoqui Castilla (2014) como: “(...) El abuso del derecho se presenta como un apartamiento frontal no encubierto de los fines. En el abuso del derecho el derecho existe si no, no podría ser abusado” (pág. 111). En ese sentido, el abuso del derecho es entendido como el ejercicio de un derecho, actividad que bajo determinadas circunstancias resulta contrarias a las exigencias del orden jurídico; en tal sentido, será abusivo cuando sus efectos sean distintos a la finalidad para la cual fueron creados, causando daños a terceros, los cuales deben ser indemnizados, siendo dicho acto considerado como un acto ilícito que viola las normas legales.

Tal concepto aplicado al Ministerio Público, implica pues que las atribuciones que le han sido encomendadas, no vienen siendo cumplidas como tal, sino que observa un uso inadecuado de su autonomía, tal cual se puede advertir del resultado de la encuesta aplicada a la comunidad jurídica en el Distrito Judicial de Lambayeque, quien opina sobre la autonomía del Ministerio Público indicando que el Ministerio Público usa inadecuadamente su autonomía lo que se refleja en el 93.3% de opiniones de insatisfacción en los encuestados, evidenciándose un mal funcionamiento del sistema de justicia penal; además, se puede ver que el 55% de los encuestados ha respondido que la extralimitación de la autonomía procesal por parte del Ministerio Público sería la

principal razón para que su labor sea ineficiente, resultados que a toda luz evidencian el ejercicio inadecuado de la autonomía que al Ministerio Público le corresponde, lo cual origina que las disposiciones que expidan no se encuentren enmarcadas dentro de los derechos fundamentales recogidos por el texto constitucional, sino que por el contrario son conculcados con un actuar arbitrario durante una investigación o simplemente por una omisión de sus funciones durante el curso de la investigación, esto es por inactividad.

Por otro lado, de la jurisprudencia materia de análisis para el presente trabajo de investigación, se ha podido verificar que hasta en 7 de ellas, el Tribunal Constitucional ha podido dar cuenta de las circunstancias en el que el Ministerio Público comete abuso de su autonomía.

Si bien es cierto vemos que los resultados de la Sentencias del Tribunal Constitucional son negativas, puesto que en su mayoría son declaradas improcedentes, es decir que al momento de resolver tanto los magistrados del Tribunal Constitucional como los propios jueces de los juzgados correspondientes, se niegan a conocer una causa de tal naturaleza interpuesta por los agraviados, quienes se consideran perjudicados por el archivo de su denuncia, en razón de que la acción penal es exclusiva y excluyente del Ministerio Público; sin embargo, el Tribunal Constitucional en el desarrollo de los fundamentos alude a la autonomía del Ministerio Público, precisando que no pueden ejercer sus funciones, irrazonablemente, con desconocimiento de los principios, tampoco al margen del respeto de los derechos fundamentales.

Asimismo, del análisis jurisdiccional de la carpeta fiscal que motivó la realización del presente trabajo, es de advertir de modo muy evidente el abuso de la autonomía del fiscal a cargo de dicha investigación, lo cual conllevó a que la misma se archivara y si bien es cierto, el Órgano Desconcentrado de Control Interno de Cajamarca amonestó al fiscal en mención y hasta por parte del fiscal superior, éste fue excluido, dichas medidas no resultan efectivas de modo alguno, puesto que lo más seguro es que tal situación nunca se revertirá.

Cabe precisar que, de acuerdo a nuestra investigación, existen otros factores que podrían contribuir de modo alguno a que por parte de los fiscales se cometa abuso de su autonomía, así:

Del resultado del análisis estadístico, esto es de la información proporcionada por la Presidencia de la Junta de Fiscales de Lambayeque sobre la estadística de casos de las 3 Fiscalías Provinciales Penales Corporativas de Chiclayo, se ha podido determinar que existe un alto índice de archivos de denuncias, ello en función a la elevada carga fiscal que asumen cada una de las 3 Fiscalías Provinciales Penales Corporativas de esta ciudad, siendo que esto va en aumento año tras año, pues al comparar el indicador de la carga fiscal con el indicador de archivo tanto en la etapa de calificación como de la investigación preliminar, advertimos que 77, 119 carpetas fiscales es el total de carga en el año 2016, sin embargo un total de 50, 744 carpetas han sido objeto de archivo en las etapas señaladas, esto es el número las carpetas que se archivan es bastante elevado, superando el 65% de la carga total. Del mismo modo, al comparar el nivel de la carga procesal y las cifras de archivo durante el año 2017, observamos que 88, 592 es el total de la carga, sin embargo un total de 58, 753 carpetas han sido objeto de archivo, en este caso el porcentaje corresponde a más del 66%, lo que nos muestra una mínima diferencia permitiendo inferir que la actividad fiscal orientada al archivo permanece.

Si bien es cierto, no se ha podido determinar la cantidad de carpetas se iniciaron el año 2016 y tampoco durante el año 2017, sin embargo las cifras nos revelan que a mayor carga procesal, existe un mayor número de archivos, puesto que en ambos años más de la mitad de las carpetas de la carga procesal total, han sido archivadas.

Aunado a ello, al revisar la información relacionada con el personal asignado a cada una de las Fiscalías Provinciales Penales Corporativas de Chiclayo, se advierte que al parecer de la investigadora, (según la percepción de los operadores jurídicos internos) los recursos humanos asignados son insuficientes dada la cantidad de la carga que posee cada una de las fiscalías citadas, lo cual también podría significar un factor adicional que repercute en la deficiente investigación realizada por el Ministerio Público, lo cual trae como consecuencia que los fiscales hagan uso inadecuado de su autonomía

procesal. En cuanto a los bienes de uso de cada una de las 3 Fiscalías Penales Corporativas de Chiclayo, se encontraron que existen muchos bienes en estado “regular”, pocos en estado “bueno” y en muy reducido número en estado “muy malo” y “nuevo”.

Y es que de acuerdo a la opinión recogida de la encuesta aplicada a los propios fiscales, estos corroboran la información estadística documental proporcionada por el Ministerio Público de esta ciudad, en atención a que la falta de recursos suficientes conlleva a que no se sigan correctamente los procedimientos en la actividad de la investigación de un delito por parte de los fiscales.

Entonces, la percepción de los fiscales es que el Estado descuida este sector dotando de un presupuesto mínimo y que según su apreciación repercute en la labor que desempeñan, ello se ve reflejado en un 80% de los encuestados, quienes han respondido que los recursos asignados no son suficientes; además, en cuanto a la interrogante si la colaboración por parte del equipo multidisciplinario, esto es el personal de la División Médico legal, así como del personal policial para con el Ministerio Público en desarrollo de una investigación es eficiente, los encuestados en un 40% han opinado de modo negativo, en tanto que otro 40% no tienen claro si es eficiente o no, dando una respuesta incierta, mientras que solo el 20% de los encuestados han opinado que sí hay una colaboración eficiente por parte de ambos. En consecuencia, se puede concluir que existe un no muy acertado grado de eficiencia, lo cual conlleva a que no siempre se obtengan investigaciones exitosas por parte de los fiscales, puesto que existe una opinión dividida entre lo eficiente o ineficiente, pues de los resultados se ha de interpretar que sólo el 20 % lo considera eficiente, bajo el entendido caso que la duda se acopla a la percepción negativa, en función a ese criterio, se puede indicar que los fiscales requieren de un apoyo más efectivo para el ejercicio de su labor.

En cuanto al aspecto de la carga fiscal, que al parecer resulta ser la traba más significativa que impide el correcto desarrollo de una investigación, un 60% de los fiscales encuestados, han opinado que la carga fiscal que se les asigna sí perjudica el

cabal cumplimiento de la realización de las diligencias en la determinación de la existencia o no de un delito; sobre el tema del personal asignado, existe una respuesta unánime de los encuestados, pues el 100% han opinado que es necesaria la contratación de mayor personal, razón por la cual, urge tal acción, pues según los propios fiscales el personal que actualmente labora no es suficiente, dado según ellos, la carga fiscal excesiva que se les asigna.

En cuanto al material logístico que se les asigna para plantear una adecuada estrategia de investigación, el 60% de los encuestados han señalado que es “regular”, esto demuestra que existen muchas deficiencias en temas de logística, lo que no permite tener éxito en una investigación, toda vez que por falta de material logístico no se plantea una adecuada estrategia de investigación, más aun si las diligencias preliminares obedecen a actos urgentes e inaplazables por parte del fiscal, conforme lo dispone el artículo 330° del Código Procesal Penal. Finalmente, los fiscales en un 100% han opinado que la razón principal para que su labor sea deficiente es precisamente la carga fiscal que asumen.; entonces, de acuerdo a su opinión, el tema de la carga fiscal es uno de los principales problemas que hacen que la labor de los fiscales ante la sociedad se torne deficiente, dado que según ellos, no se dan abasto con la excesiva carga que se les asigna, lo cual impide el desarrollo de una exitosa investigación de las denuncias que tienen a su cargo.

No obstante esto, si bien es cierto los fiscales han opinado que la carga fiscal perjudica el cumplimiento de las diligencias en la investigación de un delito, lo que según ellos, desencadena a que su labor se torne deficiente ante la sociedad, también lo es que ello solo sería una justificación para la labor deficiente que vienen ejerciendo en razón a la carga fiscal que asumen, puesto que esto más bien sería un factor contributivo adicional a la desidia por parte de éstos al asumir una investigación.

En función a ello se ha determinado que, el Ministerio Público hace uso inadecuado de su autonomía, lo cual se ve reflejado en el elevado porcentaje de desaprobación por parte de los ciudadanos, y que el factor determinante, no es la elevada carga fiscal como

se deduce en el análisis de los datos estadísticos y de las encuestas aplicadas a los fiscales, ya que ello solo es un factor contributivo, puesto que más bien se debe a la extralimitación de la autonomía por parte del Ministerio Público, urgiendo un control más riguroso de la actividad que realiza esta institución durante la investigación preliminar.

Según lo investigado, se puede indicar que la labor de los fiscales resulta muy cuestionable, dado a que no cumplen cabalmente su rol de investigadores y persecutores del delito, lo cual termina afectando el irrestricto respeto de derechos tan importantes dentro de un procedimiento como lo es el debido proceso, el cual abarca la motivación de resoluciones, el derecho al plazo razonable, entre otros, toda vez que los actos que se supone son de urgente realización, simplemente no se realizan, siendo que las dilaciones innecesarias, lo único que originan es la pérdida del material probatorio, hecho que como en el reportaje anexo se señala, termina beneficiando no a las víctimas sino a los criminales.

No está demás precisar que la autonomía procesal del Ministerio Público no debe representar un obstáculo dentro de un proceso constitucional, toda vez que el proceso penal se rige por principios rectores que lo organizan y estructuran como un proceso garantista y que no solo debe ser aplicable a los imputados sino también a los agraviados, quienes resultan ser los más perjudicados, por ende no se puede aceptar que la figura de la autonomía del Ministerio Público perjudique el orden establecido que garantizan a las partes la eficacia de un debido proceso legal, pues son los propios juzgados e incluso el propio Tribunal Constitucional, quienes se niegan a dar trámite a una causa cuando se trata de ejercer un control constitucional (*sobre todo de acciones de amparo contra las disposiciones de archivo*) de los actos del Ministerio Público, por el simple hecho que éste es un ente autónomo y que es el titular exclusivo de la acción penal, puesto que según ellos, lo único que pretenden los demandantes es lograr a como dé lugar la formalización de una denuncia y ello no se puede lograr a través de una acción de amparo.

En ese sentido, no existe justificación para la vulneración de derechos fundamentales

como la única manera de resolver un conflicto, entonces la autonomía procesal no debe extralimitarse. Por tanto, el Ministerio Público debe procurar la actuación diligente a fin de evitar alargar la investigación innecesariamente, puesto que la ineficiencia termina produciendo la necesidad de archivar por la imposibilidad de conseguir la carga de la prueba. Entendiéndose esto último como consecuencia de la ineficiente actuación y no como una característica derivada del caso mismo, más aún que la investigación de un delito en la etapa preliminar es la base fundamental de todo procedimiento penal.

### **VARIABLE DEPENDIENTE:**

#### **La garantía del debido proceso a través del control constitucional.**

##### **7.1.2. Discusión del objetivo específico: Desarrollar el debido proceso como garantía constitucional.**

El debido proceso ha sido desarrollado como una garantía constitucional y que a la vez engloba a otras garantías, las mismas que son de cumplimiento obligatorio durante el desarrollo de un proceso; es más, de acuerdo al desarrollo de nuestra investigación se ha podido verificar que su observancia también se da en el ámbito del Ministerio Público, según lo establecido por el Tribunal Constitucional. Y es que si bien es cierto los fiscales como representantes del Ministerio Público detentan oficialmente la persecución penal pública y en el ejercicio de sus funciones gozan de autonomía, puesto que asumen la conducción de la investigación desde su inicio, no por ello dejan de estar sometidos a control de sus propios actos.

Y ello ha sido deducido del resultado de la opinión de la comunidad jurídica encuestada, quienes en torno a la interrogante sobre uno de los principales ejes de nuestro trabajo de investigación como lo es el debido proceso, dado que ha recibido diferentes calificaciones, la misma ha sido enfática en responder que definitivamente el debido proceso es una garantía constitucional, porcentaje que asciende al 65% de los encuestados; entonces en el Distrito Judicial de Lambayeque se maneja adecuadamente el concepto de debido proceso como garantía constitucional, y que según nuestros encuestados, la mejor forma para lograr ello sería a través del control constitucional de

dichas actuaciones, siendo que los encuestados que respondieron en ese sentido representa el 80%. Se aprecia entonces que la comunidad jurídica en su mayoría considera que el control de los actos del Ministerio Público, de modo eficiente, solo se lograría a través del control constitucional.

Por otro lado, del análisis de la opinión de los propios fiscales, un 50% de los encuestados han opinado que sí se vulneraría el debido proceso con una investigación ineficaz e inoportuna, lo cual conllevaría a que exista un grado de abuso por parte de los fiscales, tanto para el imputado como para la parte agraviada, de lo que se concluye entonces que, son los propios fiscales quienes reconocen que con una investigación ineficaz e inoportuna se estaría conculcando el debido proceso en una investigación y que esto sí genera un abuso por parte de ellos.

Del análisis de los resultados de la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, se han obtenido como resultado que de una decena de sentencias, se ha encontrado en 4 de ellas que se refieren al respeto de la garantía del debido proceso en sede del Ministerio Público, en las cuales se ubican las recomendaciones por parte del intérprete de la Constitución, sugiriendo un manejo adecuado de la razonabilidad, respeto de las garantías constitucionales, y el alejamiento de la subjetividad de las decisiones que pudieran resultar en “caprichosas”, argumento que coincide con la formulación del problema de la presente investigación, puesto que resulta de suma importancia la implementación de un control que garantice las circunstancias descritas.

Finalmente, del resultado del análisis jurisdiccional de la carpeta analizada, es de advertirse que este derecho ha sido conculcado, al exceder el plazo establecido en la apertura de la investigación, así como por la inactividad del fiscal durante el tiempo dispuesto para ello y peor aún, excediendo el plazo sin justificación alguna. Y es que, esto se corrobora con los casos que se muestran en los medios de comunicación, de los cuales he creído conveniente considerar el caso de la extraña muerte de una docente en Huaraz, reportaje transmitido por el Programa Cuarto Poder de América Televisión, bajo el Título de: **“HUARAZ: MUERTE EN INCENDIO SERÍA CASO DE**



## **FEMINICIDIO ENCUBIERTO. VIDEO: AMÉRICA TV- CUARTO PODER”**

(<http://www.americaTV.com.pe/cuarto-poder/huaraz-muerte-incendio-seria-caso-feminicidio-encubierto-noticia-83642> ); en efecto, con fecha 18 de Marzo del año en

curso a través de dicho Programa periodístico se emitió el reportaje de la muerte de una trabajadora de la UGEL, Gloria Valverde Oliveros en el Distrito de Uchuyacu- Huaraz, ocurrido el 12-02-2018, donde se deja entrever la desidia por parte del Ministerio Público, pues hasta la fecha de la emisión de dicho reportaje, los fiscales mostraban mayor preocupación en quien sería el fiscal a cargo de dicha investigación, mientras que ésta se encontraba paralizada por más de un mes y las pruebas que habían se perdían justamente por esa inactividad, hecho que la propia fiscalía admite se debe a un tema de competencia, sin embargo el único que se beneficia es el presunto criminal y no la víctima.

### **7.1.3. Discusión del objetivo específico: Describir el control constitucional como facultad del Tribunal Constitucional para revisar las decisiones fiscales.**

Como se ha verificado el control constitucional constituye un mecanismo del Estado, cuya finalidad es hacer respetar el contenido de la norma constitucional y con ello, garantizar la vigencia plena de los derechos establecidos en ella, y es que su inobservancia, conllevaría a que un acto emitido con clara vulneración a estos, sea anulado y por ende, las cosas retornen al estado anterior en que se cometió la violación.

Así, se ha podido verificar que el Ministerio Público debe actuar en el ejercicio de sus atribuciones con claro respeto a los derechos fundamentales, no solo en lo que concierne a los derechos que le asiste a la parte imputada, sino más que todo de los agraviados, quienes son los más perjudicados, puesto que la inacción o simplemente la incorrecta investigación del delito por parte de los fiscales, conlleva a que no se logre el esclarecimiento de los hechos y en el peor de los casos, la no formalización de una denuncia, por ende el archivo de una investigación, lo que trae como consecuencia la limitación del acceso a la tutela jurisdiccional efectiva.

Ahora bien, de los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los operadores

jurídicos, se verifica que la comunidad jurídica encuestada ha sido tajante en responder que el control constitucional es el mecanismo más efectivo para garantizar el debido proceso en las actuaciones del Ministerio Público durante el curso de una investigación, ello se ve reflejado en el 80% de los encuestados, quienes consideran que el control de las actuaciones del Ministerio Público, de modo eficiente, solo se lograría a través del control constitucional. Asimismo, la comunidad jurídica encuestada ha precisado que el control posterior de los actos del Ministerio Público no afecta de modo alguno su autonomía constitucionalmente establecida, lo cual se refleja en que el 71.7% de los encuestados, quienes han respondido que de ningún modo se estaría vulnerando su autonomía, toda vez que si bien goza de ella, estando sometido a nuestra Constitución Política, sus actuaciones están supeditadas al control constitucional, ya que a través de sus actuaciones podrían atentar contra derechos fundamentales dentro del procedimiento penal. En ese sentido, la comunidad jurídica no cree que exista una vulneración a la autonomía de la fiscalía al ejercer un control constitucional de sus actos.

Asimismo, de la encuesta aplicada a los fiscales de Chiclayo, sobre si su labor debe ser sometida a un control constitucional posterior y si es pertinente que exista una regulación expresa sobre el particular, el 50% ha opinado que no. De lo que se concluye que los fiscales se rehúsan a que los actos que expiden en el ejercicio de sus funciones sean objeto de control constitucional alguno y menos que haya una regulación legal expresa al respecto; es decir, que los fiscales no aceptan que se realice un control constitucional posterior de sus actos y menos que dentro de nuestro ordenamiento jurídico haya una regulación expresa, sino que según ellos, ello se logra a través del propio control interno, lo que se ve reflejado en un 60% de los encuestados, quienes han opinado que ello se puede hacer en base a los recursos impugnativos que se interpongan contra las disposiciones que expidan, en tanto que un 40% señalan que el control se debe realizar a través del Órgano de Control Interno del propio Ministerio Público, mas nadie de los encuestados, escogió la opción de control constitucional, lo que demuestra que los fiscales encuestados no aceptan de modo alguno que exista un control constitucional de las disposiciones que expiden.

En cuanto a la interrogante de si sometemos las disposiciones que expidan los fiscales a un control posterior se vulneraría su autonomía procesal, los encuestados han respondido en un 40% que sí, en tanto que un 40% más ha respondido que no. Las respuestas obtenidas de la indicada interrogante muestra que existe un cierto número de fiscales que consideran que el control constitucional de sus disposiciones expedidas sí atenta contra su autonomía constitucional, lo cual denota una posición marcada de parte de los encuestados dado que mantienen su posición negativa frente al control.

En lo que concierne al análisis de los resultados de la jurisprudencia obtenida, se ha verificado hasta 10 sentencias, en donde se precisa de un control constitucional sobre los actos del Ministerio Público, ya que el ejercicio abusivo de tal facultad de ente autónomo termina constituyendo una práctica inadecuada en la labor persecutora del delito, traduciéndose ello en la generación del abuso de derecho por parte de esta institución, por lo mismo que corresponde sugerir la necesidad de crear este control a fin de que se ocupe de verificar los aspectos que el mismo tribunal reseña como son la autonomía, el debido proceso y la posibilidad del abuso.

En lo que corresponde al resultado del análisis jurisdiccional, el poder judicial se niega a conocer una demanda de acción de amparo de control constitucional contra los actos del Ministerio Público, siendo que la demanda fue declarada improcedente, entre ellos el principal motivo para negar el acceso a la justicia y a que los actos de la fiscalía en este caso sean objeto de control constitucional fue el hecho de que la acción penal es exclusiva y excluyente del Ministerio Público, que no se puede lograr que este formalice denuncia a través de la demanda de amparo, esta situación ha conllevado a que se interponga una apelación, cuyo resultado aun esta por dilucidarse.

Finalmente, se puede llegar a la afirmación de que el control constitucional que se sugiere incorporar como mecanismo de defensa de las garantías que supone el debido proceso, tiene su fundamento jurídico en la misma facultad de Autonomía procesal, específicamente en los límites que esta incorpora respecto de la actividad misma del Ministerio Público, los mismos que existen con el fin de evitar arbitrariedades en su

función.

Otro de los fundamentos que sirven para la propuesta es el hecho de que en el proceso penal existe una suerte de control constitucional respecto de la misma actividad del Ministerio Público que se ejerce mediante el control difuso aplicado por el juez del control de acusación, figura que fácilmente puede trasladarse a una etapa anterior a fin de garantizar el cumplimiento de la labor fiscal ajustada al debido proceso evitando el supuesto abuso de derecho.

Por último, teniendo como base los resultados que se han obtenido del análisis estadístico del nivel de archivos en la jurisdicción de la ciudad de Chiclayo correspondiente al Ministerio Público, se ha logrado determinar que el control propuesto a fin de evitar arbitrariedad por el uso de la autonomía del ente fiscal, se encuentra justificado por la excesiva desestimación de acciones calificadas como delitos generando archivo a nivel preliminar. Esto es al verificar que entre el año 2016 y 2017 existen 42,255 casos archivados en calificación, lo que representa el 32% de la carga procesal, así mismo se observan 67, 242 casos archivados en etapa preliminar alcanzando el 52% de la carga procesal, además de que se aprecian 21, 535 casos formalizados representando el 16% de la carga procesal total que entre esos años alcanza a 13, 1032 carpetas fiscales.

Según estos datos se puede deducir lo siguiente: Teniendo en cuenta que un archivo para que no sea arbitrario habrá de darse en función de la ausencia de elementos de convicción que impidan calificar la acción como delito, entonces, el hecho de que la cifra muestre que el 52% se archive a nivel preliminar significa que la calificación inicial no se realizó de una manera adecuada; luego este archivo sólo podrá darse por la inadecuada diligencia por parte del Ministerio Público, lo mismo que significa arbitrariedad en el archivo generando desprotección de la víctima y atentando contra el debido proceso.

Se justifica entonces la necesidad de establecer control constitucional **efectivo** sobre la actividad preliminar de las investigaciones, a fin de aplicar los límites constitucionales al poder que ostenta el Ministerio Público en razón de su autonomía procesal, puesto

que se ha verificado exceso de archivamientos en etapas en las cuales no asiste esta facultad, pues sólo se debería archivar ante la falta de calificación como delito o cuando se presente sobreseimiento.

## **7.2. RESULTADO DE VALIDACIÓN DE VARIABLES.**

### **Respecto a la Variable independiente:**

Según lo recopilado de la doctrina y de la valoración de la estadística del Ministerio Público, así como la opinión de la comunidad jurídica, de cuya confrontación sobre el objetivo específico que se desarrolla en base a esta variable, se puede decir que se ha encontrado el sentido del razonamiento que indica: “el abuso de la autonomía del Ministerio Público afecta el debido proceso” se puede colegir cuando el mismo Tribunal Constitucional en el desarrollo de los fundamentos esgrimidos cuando se trata de verificar la autonomía del Ministerio Público, precisa que no pueden ejercer sus funciones, irrazonablemente, con desconocimiento de los principios, tampoco al margen del respeto de los derechos fundamentales; pese a ello al comparar el nivel de la carga procesal y las cifras de archivo durante el año 2017, observamos que 88, 592 es el total de la carga, sin embargo un total de 58, 753 carpetas han sido objeto de archivo, en este caso el porcentaje corresponde a más del 66%, lo que nos muestra una mínima diferencia permitiendo inferir que la actividad fiscal orientada al archivo permanece; por lo mismo que la variable en estudio: “abuso de la autonomía del Ministerio Público”, se valida mediante la siguiente afirmación:

**Queda demostrado que el archivo arbitrario genera abuso de la autonomía del Ministerio Público afectando la garantía del debido proceso.**

### **Respecto a la Variable dependiente:**

Según lo recopilado de la doctrina y de la valoración de la estadística del Ministerio Público, así como la opinión de la comunidad jurídica, de cuya confrontación sobre el objetivo específico que se desarrolla en base a esta variable, se puede decir que: al desarrollar el debido proceso como garantía constitucional y el control constitucional como facultad del Tribunal Constitucional para revisar las decisiones fiscales, la variable en estudio: “La garantía del debido proceso a través del control constitucional”,

se validada mediante la siguiente afirmación:

**Se ha demostrado que se puede garantizar el cumplimiento del debido proceso a través del control constitucional sobre las actividades del Ministerio Público.**

### **7.3.Contrastación de hipótesis.**

Para alcanzar la contrastación de la hipótesis se procederá a elaborar una hipótesis conclusiva, construida por la unión de las afirmaciones resultantes de la validación de variables, resultado que será confrontado con la hipótesis inicial, operación que a continuación se desarrolla:

#### **Hipótesis conclusiva:**

**Habiéndose demostrado que el archivo arbitrario genera abuso de la autonomía del Ministerio Público afectando la garantía del debido proceso; entonces, su cumplimiento se puede garantizar a través del control constitucional efectivo sobre estas actividades.**

<b>CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS</b>	
<b>HIPÓTESIS INICIAL</b>	<b>HIPÓTESIS CONCLUSIVA</b>
Sí, a través del control constitucional se verifica que la autonomía del Ministerio Público se aplica inadecuadamente; entonces, se estará vulnerando la garantía del debido proceso penal.	Habiéndose demostrado que el archivo arbitrario genera abuso de la autonomía del Ministerio Público afectando la garantía del debido proceso; entonces, su cumplimiento se puede garantizar a través del control constitucional efectivo sobre estas actividades.

Del cuadro comparativo se puede apreciar que la hipótesis inicial ha sido contrastada positivamente, pues la hipótesis conclusiva confirma la suposición de la primera, dando por sentado que el Ministerio Público en el ejercicio de sus funciones como ente

investigador y persecutor del delito, mediante el excesivo archivamiento de expedientes viene haciendo un uso inadecuado de su autonomía constitucional, lo que se ve reflejado en el desarrollo de las investigaciones a su cargo, situación que genera abuso de derecho, por lo mismo que es prudente plantear la incorporación de un efectivo control constitucional sobre tales actos.

## CONCLUSIONES:

**PRIMERA:** Al haber desarrollado el debido proceso como una garantía constitucional y que a la vez engloba a otras garantías, las mismas que son de cumplimiento obligatorio durante el desarrollo de un proceso; se ha podido verificar que su observancia también se da en el ámbito del Ministerio Público, según lo establecido por el Tribunal Constitucional, puesto que si bien es cierto los fiscales como representantes del Ministerio Público detentan oficialmente la persecución penal pública y en el ejercicio de sus funciones gozan de autonomía, puesto que asumen la conducción de la investigación desde su inicio, no por ello dejan de estar sometidos a control de sus propios actos.

**SEGUNDA:** Se ha determinado que, el Tribunal Constitucional tiene la potestad jurisdiccional de establecer mediante su jurisprudencia criterios de razonabilidad y proporcionalidad que garanticen el respeto de los derechos fundamentales, como es el caso de la interpretación del principio del debido proceso, que para el caso estudiado se enfoca sobre el que asiste a las víctimas en el marco de la facultad de investigación y persecución del delito a cargo de los representantes del Ministerio Público; puesto que el Ministerio Público no puede actuar en el ejercicio de sus funciones, irrazonablemente, con desconocimiento de los principios y valores constitucionales, tampoco al margen del respeto de los derechos fundamentales, puesto que está sometido a la Constitución Política del Estado.

**TERCERA:** Se ha verificado que, el Ministerio Público hace uso inadecuado de su autonomía, dado a que no cumplen cabalmente su rol de investigadores y persecutores del delito, lo cual termina afectando el irrestricto respeto de derechos tan importantes dentro de un procedimiento como lo es el debido proceso, el cual abarca la motivación de resoluciones, el derecho al plazo razonable, entre otros, toda vez que los actos que se supone son de urgente realización, simplemente no se realizan, siendo que las dilaciones innecesarias, lo único que originan es la pérdida del material probatorio y termina beneficiando no a las víctimas sino a los criminales, pudiendo llegar a generar



impunidad.

**CUARTA:** Se ha podido llegar a la conclusión de que la excesiva actividad de archivamiento por parte del Ministerio Público constituye abuso de su autonomía procesal teniendo como consecuencia directa la vulneración al debido proceso como garantía constitucional, por lo mismo que se activa la facultad del Tribunal Constitucional de revisar este tipo de decisiones procurando la garantía de los principios que ampara el debido proceso penal.

## **RECOMENDACIONES:**

- ✓ Se recomienda que los fiscales como representantes del Ministerio Público, tengan en cuenta que el debido proceso ha sido desarrollado como una garantía constitucional y que a la vez engloba a otras garantías y al ser los únicos autorizados oficialmente de realizar la investigación y persecución penal pública, actúen diligentemente, a fin de no perjudicar las investigaciones y en el peor de los casos, negar el acceso a la tutela jurisdiccional efectiva a las víctimas, más aún que las diligencias preliminares son actos inmediatos, urgentes e inaplazables y constituyen la base fundamental de todo procedimiento penal y las investigaciones ineficientes lo único que generan es impunidad.
- ✓ Se sugiere, con el fin de incorporar eficacia a la recomendación anterior, capacitar a los fiscales, a fin de que los mismos formulen buenas estrategias de investigación, lo que permitirá recabar todos los medios probatorios suficientes, ello en coordinación con el personal policial, a fin de garantizar una efectiva investigación del delito, lo que permitirá la obtención de excelentes resultados y recuperar la imagen caída que tiene el Ministerio Público ante los ciudadanos.
- ✓ Se recomienda que al momento de crear las necesidades presupuestarias, dotar a esta institución de un mayor presupuesto para la contratación de personal fiscal especializado, así de material logístico en bien del desarrollo de una correcta investigación.
- ✓ Se hace la sugerencia de hacer una incorporación en la regla del Código Procesal Penal sobre calificación en el artículo 334° numeral 2), que deba indicar la forma en que se ha de efectivizar el control Constitucional sobre la actividad de investigación preliminar del Ministerio Público; tal acomodo deberá obedecer al siguiente formato:

## **Art. 334° Calificación. (ACTUAL)**

(...)

2. El plazo de las diligencias preliminares, conforme al artículo 3, es de 60 días, salvo que se produzca la detención de una persona. No obstante ello el Fiscal podrá fijar un plazo distinto según las características, complejidad y circunstancias de los hechos objeto de investigación. Quien se considere afectado por una excesiva duración de las diligencias preliminares, solicitará al Fiscal le de término y dicte la disposición que corresponda. Si el Fiscal no acepta la solicitud del afectado fija un plazo irrazonable, éste último podrá acudir al Juez de la investigación preparatoria en el plazo de 5 días instando su pronunciamiento. El Juez, resolverá previa audiencia, con la participación del Fiscal y del solicitante.

## **Art. 334° Calificación. (MODIFICADO)**

(...)

2. El plazo de las diligencias preliminares, conforme al artículo 3, es de 60 días, salvo que se produzca la detención de una persona. No obstante ello el Fiscal podrá fijar un plazo distinto según las características, complejidad y circunstancias de los hechos objeto de investigación. Quien se considere afectado por una excesiva duración de las diligencias preliminares, solicitará al Fiscal le dé término y dicte la disposición que corresponda. Si el Fiscal no acepta la solicitud del afectado o fija un plazo irrazonable, éste último podrá acudir al Juez de la investigación preparatoria en el plazo de 5 días instando su pronunciamiento. El Juez, **aplicando control difuso para garantizar el debido proceso e inmediatez de la etapa**, resolverá previa audiencia, con la participación del Fiscal y del solicitante.

## BIBLIOGRAFÍA

- Abad Yupanqui, S. B. (2004). *Derecho Procesal Constitucional: Antecedentes, Desarrollo y Desafíos en el Perú* (Primera Edición ed.). Lima, Perú: Gaceta Jurídica. Recuperado el 28 de Agosto de 2017
- Abad Yupanqui, S. B. (s.f.). Garantías Constitucionales y Derechos de las Mujeres: Defensoría del Pueblo, Hábeas Corpus y Amparo. Obtenido de [https://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/temas/t\\_20100304\\_01.pdf](https://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/temas/t_20100304_01.pdf)
- Academia De La Magistratura AMAG. (2006). *Aportes al Derecho Penal Peruano desde la Perspectiva Constitucional*.
- Acuña Chávez, A. (2014). *Funciones Y Competencias Del Tribunal Constitucional*. Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Angulo Arana, P. (2007). *La Función del Fiscal* (Primera Edición ed.). Lima, Perú: Jurista Editores EIRL.
- Arana Vásquez, L. M., & Flores Castillo, J. J. (2016). *Límites al Ejercicio del Control Constitucional y su impacto en el Desarrollo de la Jurisdicción Constitucional en el Perú*. Universidad Nacional de Trujillo. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, La Libertad. Trujillo: Universidad Nacional de Trujillo. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
- Arbulú Martínez, V. J. (2014). *La Investigación Preparatoria en el Nuevo Proceso Penal* (Primera edición ed.). Lima, Perú: Instituto Pacífico- Actualidad Penal.
- Atarama Lonzoy, A. N., & Quevedo Guevara, R. (2015). *Factores Legales y Funcionales Asociados al Debido Proceso en la Investigación Penal, en Liquidación, en el Distrito Judicial de Loreto*. Universidad Nacional de la Amazonía Peruana.Escuela de Post grado, Loreto. Iquitos: Universidad Nacional de la Amazonía Peruana.Escuela de Post grado.
- Ávila Herrera, J. (2004). *El Derecho al Debido Proceso Penal en un Estado de Derecho*. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos.Fundada en 1551. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Unidad de Post Grado.
- Bustamante Alarcón, R. (2000). Derechos Fundamentales y Proceso Justo, llamado también Debido Proceso. *Revista del equipo de Derecho Procesal del Taller de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú*, 67-81.
- Carrasco García, L. A. (2006). *Derecho Procesal Constitucional* (Primera Edición ed.). Lims, Perú: Juris Ediciones. Recuperado el 01 de Setiembre de 2017
- Carruitero Lecca, F., & Gutiérrez Canales, M. R. (2006). *Estudio Doctrinario y Jurisprudencial al Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, Ley Nro. 28237* (Primera Edición ed.). Lima, Perú: Librería Studio Distribuidora S.R.L. Recuperado el 23 de Setiembre de 2017
- Caso Coto Minero Merladet, S. A contra la Sala de lo Contencioso- Administrativo de la Audiencia Territorial de Valladolid, 9/1981 (Tribunal Constitucional de España 31 de Marzo de 1981). Obtenido de <http://hj.tribunalconstitucional.es/de/Resolucion/Show/9>
- Caso Henry Eduardo Castro Paniagua contra la Corte Superior de Justicia de Junín, Exp. 0426-2003- AA- TC (Tribunal Constitucional 24 de Marzo de 2003). Obtenido de <http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2003/00426-2003-AA.html>
- Caso José Luis Cáceres Velásquez, Exp. 6253- 2006-PHC/TC (Tribunal Constitucional 2006).
- Caso Luis Guillermo Bedoya de Vivanco, EXP. N° 2758-2004-HC/TC (Tribunal Constitucional 23 de Noviembre de 2004).
- Caso Thays Penélope Rodrigues, EXP. N° 04750-2007-PHC/TC (Tribunal Constitucional 9 de Enero de 2008).
- Castillo Cordova, L. (2005). *Los Derechos Constitucionales- Elementos para una teoría general* (Segunda ed.). Lima, Perú: Palestra Editores. Recuperado el 15 de 09 de 2017
- Chanamé Orbe, R. (2003). *Derecho Constitucional General* (324 ed.). Lima, Perú: Universidad Inca Garcilazo de la Vega. Recuperado el 26 de Agosto de 2017
- Chioyenda, G. (2003). *Curso de Derecho Procesal Civil*. Ciudad de México: Oxford University Press.
- Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH. (1987). *Opinión Consultiva OC - 9/87*. Washington: CIDH.

- CPI. (2015). *Estudio de Opinión Pública: Evaluación de la Gestión Presidencial y de las Instituciones Públicas*. Lima: CPI. Recuperado el 07 de julio de 2017, de [http://cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/23/opnac201507\\_01.pdf](http://cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/23/opnac201507_01.pdf)
- Escuela de Graduandos Águila y Calderón EGACAL. (2001). *El ABC del Derecho Constitucional y Procesal Constitucional* (Primera Edición ed.). Lima, Perú: San Marcos. Recuperado el 20 de Agosto de 2017
- Figuerola Gutarra, E. (2012). *Derecho Constitucional II* (Primera Edición ed., Vol. II). Lima, Perú: I San Marcos.
- FIX ZAMUDIO, H. (1982). " *La Protección Jurídica y Procesal de los Derechos Humanos ante las jurisdicciones nacionales*". México, México: Civitas.
- García Belaunde, D. (18 de 05 de 1989). Notas Sobre las Garantías. *Revista IIDH*, 10, 13-17. Obtenido de Notas Sobre las Garantías: <http://www.corteidh.or.cr/tablas/R06858-1.pdf>
- García Toma, V. (s.f.). La Jurisdicción Constitucional: El modelo peruano.
- Gutiérrez Camacho, W. (1995). La Razonabilidad de las Leyes y otros actos de poder. *Diálogo con la Jurisprudencia*, 1. Recuperado el 24 de Octubre de 2017
- Gutiérrez T., G. (2009). *Introducción al Derecho Procesal Constitucional* (Primera Edición ed.). Lima, Perú: Grijley E.I.R.L.
- Hakansson Nieto, C. (2001). *La forma de Gobierno de la Constitución Peruana* (Primera ed.). Piura, Perú: Universidad de Piura. Recuperado el 2017 de Setiembre de 23
- Hurtado Pozo, J. (1983). *El Ministerio Público* (Segunda Edición ed.). Lima, Perú: Eddili.
- Kelsen, H. (1969). *Teoría General del Estado*. Buenos Aires, Argentina: Editorial Eudeba.
- Landa Arroyo, C. (2009). La autonomía procesal del Tribunal Constitucional: La experiencia del Perú. *Anuario de derecho constitucional Latinoamericano*, 277-310.
- Landa Arroyo, C. (2012). *El Derecho al Debido Proceso en la Jurisprudencia. Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, Tribunal Constitucional del Perú, Corte Interamericana de Derechos Humanos* (Primera Edición ed., Vol. 1). Lima, Lima, Perú: Academia de la Magistratura.
- Manrique Zegarra, C. E. (Agosto de 2004). "El Control Constitucional, la Historia y la Política Judicial". Recuperado el 2017 de 06 de 19, de <https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/2916e60046d4750ca379a344013c2be7/Control+Constitucional%2C+la+Historia+y+la+Pol%C3%ADtica+Judicial+C+5.+2.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=2916e60046d4750ca379a344013c2be7>: <https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/2916e60046d4750ca379a344013c2be7/Control+Constitucional%2C+la+Historia+y+la+Pol%C3%ADtica+Judicial+C+5.+2.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=2916e60046d4750ca379a344013c2be7>
- MESÍA RAMÍREZ, C. (2013). *Exégesis del Código Procesal Constitucional* (Cuarta Edición ed.). Lima, Perú: Gaceta Jurídica. Recuperado el 20 de Agosto de 2017
- Morales Saldaña, J. E. (2012). *El Nuevo Código Procesal Penal: Rol del Ministerio Público y las atribuciones de la Policía Nacional* (Primera ed.). Chiclayo, Perú: Ediciones Omega.
- Mory Principe, F. (2011). *La investigación del Delito: El Policía, el Fiscal y el Juez; Derechos Fundamentales del Imputado* (Primera Edición ed.). Lima, Perú: Rodhas S.A.C.
- Navarro Vega, E. A. (2010). *La transgresión del derecho de presunción de inocencia por el Ministerio Público de trujillo*. Trujillo: Universidad Nacional de Trujillo Escuela de Postgrado Programa de Doctorado en Derecho y Ciencias Políticas.
- Nicke Nelson Dominguez Baylon vs Corte Superior de Justicia de Huanuco, EXP. N. 3421-2005-PHC/TC (Tribunal Constitucional 27 de 12 de 2004).
- Ordoqui Castilla, G. (2014). *Abuso de Derecho en Civil, Comercial, Procesal, Laboral y Administrativo* (Primera Edición ed.). Lima, Perú: Ediciones Legales E.I.R.L.
- Oré Guardia, A. (2005). *El Ministerio Fiscal: Director de la investigación en el nuevo Código Procesal Penal del Perú*. Ministerio de Justicia. Madrid, España: UNED.
- Ore Guardia, A. (2011). *Manual de Derecho Procesal Penal*. Lima, Perú: Reforma.
- Ore Guardia, A. (2016). *El Hábeas Corpus. Un enfoque casuístico*. Lima: Gaceta Jurídica.
- Ortecho Villena, V. J. (2004). *Procesos Constitucionales y su Jurisdicción* (9na. Edición ed.). Rodhas.
- Peña Cabrera Freyre, A. R. (2009). *El Nuevo Proceso Penal peruano 2* (Primera Edición ed.). Lima, Perú: Gaceta Jurídica.

- Peña Cabrera Freyre, A. R. (2016). *Manual de Derecho Procesal Penal* (Cuarta Edición- Febrero 2016 ed.). Lima, Perú: Instituto Pacífico.
- Rengifo García, E. (2004). *Del Abuso del Derecho al abuso de la posición dominante*. Bogotá, Colombia: Universidad Externado de Colombia. Recuperado el 6 de Diciembre de 2017
- Rivera Santiváñez, J. A. (2003). Supremacía Constitucional y Sistemas de control. En *Derecho Procesal Constitucional* (Primera Edición ed., pág. 559). Lima, Perú: Jurista Editores E.I.R.L. Recuperado el 28 de Agosto de 2017
- Roberto Boris Chauca Temoche y otros, EXP. N.º 2725-2008-PHC/TC (Tribunal Constitucional 22 de Setiembre de 2008).
- Rodríguez Patrón, P. (2003). *La Autonomía Procesal del Tribunal Constitucional*. Madrid: Civitas.
- Rubio Correa, M. (1999). *Estudio de la Constitución Política de 1993*. (Vol. V). Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Rubio Correa, M. (2008). *La Interpretación de la Constitución según el Tribunal Constitucional* (Segunda Edición ed.). Lima, Perú: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Recuperado el 01 de Setiembre de 2017
- Sáenz Dávalos, L. R. (2003). Procesos Constitucionales frente a Resoluciones arbitrarias. En *Derecho Procesal Constitucional* (Primera Edición ed., pág. 559). Lima, Perú: Jurista Editores E.I.R.L. Recuperado el 28 de Agosto de 2017
- Salas Beteta, C. (2010). *Investigación Preparatoria y Etapa Intermedia. Problemas de aplicación del Código Procesal Penal de 2004* (Primera Edición ed., Vol. I). Lima, Perú: Gaceta Jurídica.
- Saldaña Chinchayan, M. (s.f.). "El Ministerio Público". 13.
- Solozábal Echevarría, J. J. (2009). *Constitución y Ordenamiento Jurídico*. Madrid: CEF Ediciones. Recuperado el 25 de Agosto de 2017
- Tello Gonzales, N. R. (2016). *Nulidad de los actos procesales en los procesos civiles de conocimiento*. UNMSM. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
- Ticona Pósito, V. (2007). El Debido Proceso y las líneas cardinales para un modelo procesal en el Estado Constitucional de Derecho. *Revista Oficial del Poder Judicial*(1-2), 175. Recuperado el 26 de Agosto de 2017
- TORRES MANRIQUE, J. I. (2010). "Breves consideraciones acerca del Debido Proceso Civil. A propósito del exiguo desarrollo y reconocimiento del Debido Proceso, en sus diversas variantes de Debidos Procesos Específicos". *Revista de la Maestría en Derecho Procesal*, 4(1), 10. Recuperado el 04 de JULIO de 2017, de REVISTA DE LA MAESTRIA EN DERECHO PROCESAL - ESCUELA DE POST GRADO - PUCP: <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoprocesal/article/view/2404>
- Valle-Riestra, J., Carruitero Lecca, F., & Ángeles Gonzáles, F. (2007). *Código Procesal Constitucional-Comentado-concordado-anotado-jurisprudencia formularios-Tomo I*. (2º Reimpresión ed.). Lima: Ediciones Jurídicas.
- Velásquez Ramírez, R. (2013). *Derecho Procesal Constitucional* (Primera edición ed.). Lima, Perú: Ediciones Jurídicas. Recuperado el Agosto 25 de 2017
- Verheye Asalde, Y. (16 de Agosto de 2011). El Ministerio Público a la largo de la Historia Constitucional Peruana: Pasado, presente y propuestas para su futuro institucional. *Jurídica, Suplemento de Análisis Legal del Diario "El Peruano"*(368), 6.

## **ANEXOS**

## **ANEXO Nro. 01**



CARGO  
B.

"Año del Buen Servicio al ciudadano"

Sumilla: **SOLICITO INFORMACIÓN PARA  
CONTRASTAR TRABAJO DE INVESTIGACIÓN  
(TESIS)**

**Señora Doctora:**

**Mariana del Pilar Vásquez Zagaceta**

**PRESIDENTE DE LA JUNTA DE FISCALES SUPERIORES DE LAMBAYEQUE.**



**GISELLA MARGOTH ORTIZ DEZA**, identificada con DNI N° 46993419, con domicilio personal en la Mz "J" Lt "8"- Calle San Miguel del Pueblo Joven "Antonio Raymondi", del Distrito La Victoria, Provincia Chiclayo y Departamento Lambayeque, con celular N° 951499878 y/o teléfono fijo N° 074-214792, correo electrónico: gisse love 29@hotmail.com, Bachiller en Derecho por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, y **ex participante de Voluntariado Universitario del Sistema Fiscal del Ministerio Público**; a usted, respetuosamente digo:

Que, recurro a su Despacho, en principio para agradecerle la información solicitada mediante mi escrito de fecha 13 de Noviembre del presente año; sin embargo, no ha sido suficiente para contrastar la problemática planteada en mi tesis titulada: "EL ABUSO DE LA AUTONOMÍA DEL MINISTERIO PÚBLICO Y LA GARANTÍA DEL DEBIDO PROCESO A TRAVÉS DEL CONTROL CONSTITUCIONAL", aprobada mediante la Resolución Nro. 032-2017-UI-FDCP-UNPRG, de fecha 22 de Agosto del año en curso, por la Directora de la Unidad de Investigación de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional "Pedro Ruiz Gallo,

razón por la cual, pido a usted por favor, sírvase otorgarme **información detallada, adjuntando de ser el caso los reportes correspondientes durante el periodo 2016 hasta la fecha, únicamente en la 1º, 2º y 3º FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE CHICLAYO** de:

- 1) El total de casos archivados sin haberse dispuesto la realización de diligencias preliminares (denuncias archivadas de plano),
- 2) Los casos que habiéndose dispuesto la realización de diligencias preliminares, se archivaron, no formalizándose la investigación preparatoria,
- 3) El total de casos en lo que sí se formalizó la investigación preparatoria,
- 4) El reporte estadístico de carga fiscal por etapas actual, y
- 5) El reporte del personal asignado físicamente y el cargo personal por asignación de bienes de uso en las 3 fiscalías penales de Chiclayo.

Recalco a usted Sra. Presidenta que dicha información la requiero única y exclusivamente para fines académicos ya que deseo titularme de Abogada, como lo he señalado en mi solicitud anterior.

**ADJUNTO:**

- Copia de mi DNI.
- Copia de Oficio remitido por su Despacho.

**POR LO TANTO:**

Solicito a Ud., atender a mi solicitud.

*Chiclayo, 05 de Diciembre de 2017*







MINISTERIO PÚBLICO  
FISCALÍA DE LA NACIÓN

DISTRITO FISCAL DE LAMBAYEQUE  
PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE FISCALES  
SUPERIORES

Chiclayo, 10 de enero del 2018

**OFICIO N° 178-2018-MP-PJFS-LAMBAYEQUE**

SEÑORA:

**GISELLA MARGOTH ORTIZ DEZA**

**Dirección: Mz. J Lt 8 – Calle San Miguel del Pueblo Joven "Antonio Raymondi" – La Victoria**

**ASUNTO: Remito información solicitada**

Tengo el agrado de dirigirme a usted, expresándole mi cordial saludo, y a la vez, en atención a su solicitud presentada el 5 de diciembre del 2017, remitirle el **Oficio N° 219-2017-FSPC-GI-LAMBAYEQUE**, suscrito por la doctora Carmen Graciela Miranda Vidaurre, Fiscal Superior Coordinadora de las Fiscalías Provinciales Penales Corporativas y Mixtas de Lambayeque, y el **Oficio N° 016-2018-MP-GA-LAMBAYEQUE**, suscrito por el Gerente de la Unidad Ejecutora 004, Jorge Luis Granados Santamaría; documentos mediante los cuales se remite la información obtenida del SGF sobre carga fiscal y Cuadros de Personal asignados físicamente a las tres Fiscalías Provinciales Penales Corporativas de Chiclayo; para los fines pertinentes.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para testimoniarle los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

  
Mariángel del Pilar Vásquez Zagaceta  
Fiscal Superior  
Presidente de la Junta de Fiscales Superiores  
Distrito Fiscal de Lambayeque



MINISTERIO PÚBLICO  
FISCALÍA DE LA NACIÓN

FISCALÍA SUPERIOR COORDINADORA

<b>MINISTERIO PÚBLICO</b> Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores DISTRITO FISCAL DE LAMBAYEQUE SECRETARÍA	
14 DIC. 2017	
Reg. N° 10668	Hora: 15:18
Firma: 02	

*"Año del Buen Servicio al Ciudadano"*

Chiclayo, 14 de Diciembre de 2017

**OFICIO N° 219-2017- FSPC-GI-LAMBAYEQUE**

Señora Doctora

*Mariana Vásquez Zagaceta*

**PRESIDENTA DE LA JUNTA DE FISCALES SUPERIORES DEL DISTRITO FISCAL DE LAMBAYEQUE**

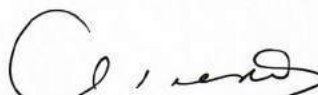
**Presente.-**

Referencia: OFICIO N° 6172-2017-MP-PJFS-LAMBAYEQUE

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de expresarle mi cordial saludo y en atención al documento de la referencia remitir adjunto al presente a fs. 01, el reporte obtenido del Sistema de Gestión Fiscal - SGF, respecto a la carga fiscal de las Fiscalías Provinciales Penales Corporativas de Chiclayo, conforme al requerimiento formulado por la ciudadana Gisella Margoth Ortiz Deza. Asimismo, es preciso señalar que no es competencia de este Despacho Superior, brindar información respecto a lo solicitado en el numeral 5.-Reporte de personal asignado físicamente y el cargo personal por asignación de bienes de uno en las tres Fiscalías Penales de Chiclayo.

Es propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

  
Carmen Chacabarro  
Coordinadora de Fiscalías Provinciales Penales Corporativas  
Distrito Fiscal de Lambayeque

CGMV/rmg

## ESTADÍSTICA DE CASOS DE LAS FISCALÍAS PROVINCIALES PENALES CORPORATIVAS DE CHICLAYO

FECHA DE CORTE: 13-DICIEMBRE-2017

ETAPA	2016			2017			TOTAL
	1FPPC_CHI	2FPPC_CHI	3FPPC_CHI	1FPPC_CHI	2FPPC_CHI	3FPPC_CHI	
CALIFICACION(CASOS ARCHIVADOS)	5,072	6,153	6,762	6,721	8,019	9,528	42,255
INVESTIGACION PRELIMINAR(CASOS ARCHIVADOS)	10,669	12,579	9,509	12,833	12,280	9,372	67,242
CASOS FORMALIZADOS	4,973	6,619	5,745	1,431	1,471	1,296	21,535

### CARGA FISCAL POR ETAPA

ETAPA	2016			2017			TOTAL
	1FPPC_CHI	2FPPC_CHI	3FPPC_CHI	1FPPC_CHI	2FPPC_CHI	3FPPC_CHI	
CALIFICACION	5,550	6,550	7,258	7,347	8,531	10,151	45,387
ETAPA DE JUZGAMIENTO	3,271	4,443	3,811	4,128	4,825	4,334	24,812
ETAPA INTERMEDIA	1,451	1,949	1,738	1,567	2,105	1,927	10,737
INVESTIGACION PRELIMINAR	13,362	14,809	12,253	15,877	14,834	12,233	83,368
INVESTIGACION PREPARATORIA	251	227	196	218	300	215	1,407
<b>TOTAL</b>	<b>23,885</b>	<b>27,978</b>	<b>25,256</b>	<b>29,137</b>	<b>30,595</b>	<b>28,860</b>	<b>165,711</b>



## **ANEXO Nro. 02**



Chiclayo, 08 ENE 2018

OFICIO N° 016 -2018-MP-GA-LAMBAYEQUE

Doctora:  
**MARIANA DEL PILAR VÁSQUEZ ZAGACETA**  
Presidenta de la Junta de Fiscales Superiores  
Distrito Fiscal de Lambayeque  
Ministerio Público  
Ciudad.-

MINISTERIO PÚBLICO Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores DISTRITO FISCAL DE LAMBAYEQUE SECRETARIA	
05 ENE. 2018	
Reg. N° 250	Hora: 16:09
Deza:	13.07

Asunto : Remito información requerida por la ciudadana Gisella Margoth Ortiz Deza

Referencia: Oficio N°6336-2017-MP-PJFS-LAMBAYEQUE de fecha 18-12-2017.

Tengo el honor de dirigirme a usted, para expresarle mi cordial saludo y a la vez comunicarle con relación al documento de la referencia, mediante el cual remite copia del escrito presentado por la ciudadana Gisella Margoth Ortiz Deza, solicitando información para contrastar trabajo de investigación, con la finalidad de atender el reporte del personal asignado físicamente y el cargo personal por asignación de bienes de uso en las tres (03) fiscalías penales de Chiclayo.

Al respecto, cabe precisar que mediante Informe N°285-2017-MP-GA-APH-LAMBAYEQUE de fecha 28 de diciembre de 2017, el Área de Potencial Humano remitió a Gerencia Administrativa los cuadros detallados del personal asignado físicamente correspondiente a las tres (03) Fiscalías Provinciales Penales Corporativas de Chiclayo, información solicitada por la señorita Gisella Margoth Ortiz Deza.

Asimismo, concerniente a la información sobre asignación de bienes de uso pertenecientes a las Fiscalías Provinciales Penales Corporativas de Chiclayo del Distrito Fiscal de Lambayeque, el Área de Control Patrimonial y Bienes Incautados, comunicó que dicha información había sido proporcionada directamente a la ciudadana Gisella Margoth Ortiz Deza.

En tal sentido, conforme lo expuesto esta Gerencia Administrativa eleva a su despacho la documentación emitida por el Área de Potencial Humano, para la atención correspondiente.

Se adjunta documentación obrante en seis (06) folios.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi consideración y personal aprecio.

Atentamente,



*Jorge Luis Granados Santamaría*  
Gerente de la Unidad Ejecutora 004  
Gerencia Administrativa de Lambayeque  
MINISTERIO PÚBLICO

**PERSONAL ASIGNADO A LA 1ª FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE CHICLAYO**

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO
1	FERNANDEZ SIRLOPU, JOSE LUIS	FISC.PROVINCIAL COORDINADOR
2	PINILLOS PADILLA, VICTOR MANUEL	FISC.PROVINCIAL
3	SAMILLAN VALLEJOS, GLORIA ISABEL	FISC.PROVINCIAL
4	GUERRERO SAAVEDRA, JOSE ALBERTO	FISC.PROVINCIAL
5	BUSTAMANTE BRAVO, EDIE JANET	FISC.PROVINCIAL
6	PORTALATINO SEGURA, RODOLFO DANIEL	FISC.PROVINCIAL
7	CHICLAYO TELLO, JORGE JOEL	FISC.ADJ.PROV.
8	BOCANEGRA RISCO, FIORELLA DEL ROCIO	FISC.ADJ.PROV.
9	ROJAS CHUPILLON, MARIA CIRA	FISC.ADJ.PROV.
10	VEGA REGALADO, RONAL NAYU	FISC.ADJ.PROV.
11	PADILLA ROJAS, ANA ISABEL	FISC.ADJ.PROV.
12	TERRONES TERRONES, JORGE MIGUEL	FISC.ADJ.PROV.
13	TORRES MALCA, YOGANI KARIN	FISC.ADJ.PROV.
14	SANCHEZ MUGUERZA, ANA LUISA	FISC.ADJ.PROV.
15	TAVARA REGALADO, PAOLA DEL PILAR	FISC.ADJ.PROV.
16	BAZAN MEZARINA PAOLA MARTÍN	FISC.ADJ.PROV.
17	GONZALES MECHAN, ALEX ARTURO	FISC.ADJ.PROV.
18	CHAMBERGO BURGOS, NELLY CONSUELO	FISC.ADJ.PROV.
19	TORRES SANCHEZ, KARINA	ASIST.FUNC.FIS.
20	RAMIREZ RUIZ, OMAR ARMIN	ASIST.FUNC.FIS.
21	TORRES SUAREZ, DANILO LANDER	ASIST.FUNC.FIS.
22	MONTENEGRO MORANTE, FERNANDO AUGUSTO	ASIST.FUNC.FIS.
23	PERALES ALVARADO CARLOS EDUARDO	ASIST.FUNC.FIS.
24	MONTOYA TORRES, JAIRO ALEXANDER	ASIST.FUNC.FIS.
25	SANCHEZ RODAS, MIGUEL ANGEL	ASIST. ADM.
26	SANTISTEBAN COICO, LUCIA	ASIST. ADM.
27	MORI OCAMPO, NILDA FRANCISCA	ASIST. ADM.
28	VASQUEZ ATOCHE, MILAGROS DEL CARMEN	ASIST.FUNC.FIS.
29	CUMPA FARROÑAY, ROBERTO CARLOS	ASIST.FUNC.FIS.
30	CALDERON ORIHUELA, DAVID ISAIAS	ASIST. ADM



**PERSONAL ASIGNADO A LA 2ª FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE CHICLAYO**

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO
1	BRAVO VIGO, TANIA	FISC.PROVINCIAL COORDINADOR
2	CACERES ALEJOS, CARLOS GUSTAVO	FISC.PROVINCIAL
3	LARREA WONG, MARIA ANTONIETA	FISC.PROVINCIAL
4	OSORES PADILLA, CARLOS ENRIQUE	FISC.PROVINCIAL
5	PADILLA TENORIO, KAREN RUTH	FISC.PROVINCIAL
6	ALVARADO CABRERA, SARA DEL SOCORRO	FISC.PROVINCIAL
7	GUERRERO SAAVEDRA, DAVID RICARDO	FISC.ADJ.PROV.
8	DE LA CRUZ RODRIGUEZ, JOSE DEL CARMEN	FISC.ADJ.PROV.
9	GALARCEP SOLIS, JANET OLENKA	FISC.ADJ.PROV.
10	HIDALGO RODRIGUEZ, DORA CAROLA	FISC.ADJ.PROV.
11	PEREZ VASQUEZ, SEGUNDO EDILBERTO	FISC.ADJ.PROV.
12	POZO TARRILLO, CYNTHIA LIZETH	FISC.ADJ.PROV.
13	TICONA PARI, CARLOS NAPOLEON	FISC.ADJ.PROV.
14	CONTRERAS TAPIA, LOURDES MARYL	FISC.ADJ.PROV.
15	CASAS CHUSHO, MIGUEL ANGEL	FISC.ADJ.PROV.
16	LOPEZ LOPEZ PEDRO LEONEL	FISC.ADJ.PROV.
17	TIRAVANTI MARTINEZ, ANA AMELIA	FISC.ADJ.PROV.
18	GOMEZ SANCHEZ, YANET INES	ASIST.FUNC.FIS.
19	LLAMO CERVERA, MANUEL AMERICO	ASIST.FUNC.FIS.
20	RAMIREZ SANDOVAL, ROSA ISIDORA	ASIST.FUNC.FIS.
21	FONG MAITA JEAN PAUL	ASIST.FUNC.FIS.
22	BUSTAMANTE SANCHEZ, JOSE AUBER	ASIST. ADM.
23	ROBLES PACHECO, JORGE ANTONIO	ABOGADO I
24	VILCHEZ CARMONA, YRIS FELICITA	TECN.ABOG.II
25	PIÑA VALLES, PEDRO ANTONIO	TECN.ADMIN. I
26	PALMA PALMA, SUSANA DE LA CRUZ	ASIST. ADM.
27	VELASQUEZ GUEVARA, EDWIN JOEL	ASIST.FUNC.FIS.
28	GARCIA CHAVEZ, ANDERSON	ASIST.FUNC.FIS.
29	MECHAN GONZALES, LUIS JESUS	ASIST.FUNC.FIS.
30	LACHUMA TUESTA, MAXIMILIANO	ASIST. ADM.
31	CARDENAS GONZALES, JOSE ROLANDO	ASIST. ADM.

**PERSONAL ASIGNADO A LA 3ª FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE CHICLAYO**

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO	OBSERVACIONES
1	QUIROZ GROSSO, JAVIER	FISC.PROVINCIAL COORDINADOR	
2	ZAPATA OROZCO, SERGIO LUCIO	FISC.PROVINCIAL	ASIGNADO A CARPETA FISCAL N° 2447-2014
3	PINTO ZAVALAGA, JUDITH VERONICA	FISC.PROVINCIAL	
4	BRAVO CHAVEZ, HAYDEE EDITH	FISC.PROVINCIAL	
5	CESPEDES GARCIA, JOSE EDUARDO	FISC.PROVINCIAL	
6	AURAZO COLCHADO, PAMELA VOLODIA	FISC.ADJ.PROV.	
7	ELIAS BRAVO, PAMELA YSABEL	FISC.PROVINCIAL	ASIGNADO A CARPETA FISCAL N° 2447-2014
8	EFFIO HUAMANCHUMO, CARLOS ANTONIO	FISC.ADJ.PROV.	
9	FANG RIVERA, LUPE ESTELA	FISC.ADJ.PROV.	
10	RAMIREZ CABANILLAS, MARIA LUISA	FISC.ADJ.PROV.	
11	REUPO MECHAN, DENIZA PAOLA	FISC.ADJ.PROV.	
12	LOPEZ PUPUCHE, HECTOR MANUEL	FISC.ADJ.PROV.	
13	AMBULAY GRADOS, SEBASTIANA EDITH	FISC.ADJ.PROV.	
14	ROSILLO ASTUDILLO, OSCAR MARTÍN	FISC.ADJ.PROV.	
15	DREXLER PEÑA, JUAN FRANCISCO MARTIN	FISC.ADJ.PROV.	
16	MEDINA LUCANO, MAXIMO	FISC.PROVINCIAL PROV.	
17	DEL PIELAGO SAMAME, CARLO MARIO	FISC.ADJ.PROV.	
18	PEREZ DIAZ, ELI	FISC.ADJ.PROV.	
19	ARISMENDIZ AMAYA, ELIU	FISC.ADJ.PROV.	ASIGNADO A CARPETA FISCAL N° 2447-2014
20	RUIZ CHAPOÑAN, LUISITA ONELIA	FISC.ADJ.PROV.	ASIGNADO A CARPETA FISCAL N° 2447-2014
21	RAMIREZ ORE, LISHA STEPHANY	ASIST.FUNC.FIS.	ASIGNADO A CARPETA FISCAL N° 2447-2014
22	ALBUJAR ALVAREZ, PEDRO RODOLFO	ASIST.FUNC.FIS.	
23	BAZAN CORREA, MARIA FELICITA	ASIST.FUNC.FIS.	
24	CRUZ CALVAY, CARLOS CESAR	ASIST.FUNC.FIS.	
25	SANCHEZ PERALTA, CRISTIAN DAVID	ASIST.FUNC.FIS.	
26	ANGULO PISFIL, MAGALLY SUCETTI	ASIST.FUNC.FIS.	
27	ZAPATA MORENO, LUISA KATHERINE	ASIST.FUNC.FIS.	
28	BALCAZAR LAGUNA, KEYLA MARIBEL	ASIST.FUNC.FIS.	ASIGNADO A CARPETA FISCAL N° 2447-2014
29	CHIMPEN CADENILLAS, ZULLY CRISS	ASIST.FUNC.FIS.	
30	ALVARADO MEZONES, LIDIA YSABEL	TECN.ABOG.II	
31	SANTOYO QUIROZ, GRACIELA	ASIST. ADM.	
32	PACO AMESTAR, JOSUNE GRACIELY	ASIST.FUNC.FIS.	
33	DURAND GUERRERO VICTOR GUIDO	ASIST.FUNC.FIS.	
34	RODAS ZAMBRANO, GLENNY PRISCILA	ASIST.FUNC.FIS.	
35	HERRERA ARCE, JOSEPH T JHONATAN	ASIST.FUNC.FIS.	





MINISTERIO PUBLICO  
FISCALIA DE LA NACION

### CARGO PERSONAL POR ASIGNACION DE BIENES EN USO

NOMBRE : VEGA REGALADO RONALD NAYU  
DNI : 42884603  
CARGO : FISC. ADJ. PROV.  
DEPENDENCIA : 01ª FISC. PROV. EN LO PENAL CORP. DE CHICLAYO

DISTR. JUD : LAMBAYEQUE  
LOCAL : LAMBAYEQUE-SEDE CENTRAL

NRO	CORRE-ETIQ	COD. PAT	DESCRIPCION DE BIEN	FEC. INV	MARCA	MODELO	SERIE	PLACA	ESTADO	COLOR	OBSERVACION
1	LAM-010440	0202916	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	14/11/2016	S/M	S/M	090108-1290028		Regular	NEGRO	UBICADO EN 2DO PISO.
2	LAM-010189	0319800	ARMARIO DE MADERA	14/11/2016	S/M	S/M	S/S		Bueno	MARRON	2 PUERTAS- UBICADO EN EL 2DO PISO.
3	LAM-010435	0385435	ARMARIO DE MADERA	14/11/2016	S/M	S/M	S/M		Bueno	MARRON	02 PUERTAS 05 DIVISIONES- UBICADO EN EL 2DO PISO.
4	LAM-010431	0112337	ESCRITORIO DE MADERA	14/11/2016	S/M	S/M			Regular	MARRON	3 GAVETAS- UBICADO EN EL 2DO PISO.
5	LAM-010437	0208229	ESCRITORIO DE MADERA	14/11/2016	S/M	S/M	S/S		Bueno	MARRON	UBICADO EN 2DO PISO
6	LAM-010434	0198354	MONITOR PLANO	14/11/2016	ADVANCE	S/M	M6788JA004530		Bueno	NEGRO	UBICADO EN 2DO PISO.
7	LAM-010436	0258229	SILLA FIJA DE MADERA	14/11/2016	S/M	S/M	S/S		Bueno	MARRON	TAPIZ NEGRO- UBICADO EN EL 2DO PISO.
8	LAM-010432	0051689	SILLA FIJA DE METAL	14/11/2016	S/M	S/M			Bueno	PLATEADO	UBICADO EN 2DO PISO
9	LAM-010433	0298995	SILLA FIJA DE OTRO MATERIAL	14/11/2016	POLINPLAST	S/M	S/S		Bueno	BLANCO	UBICADO EN 2DO PISO
10	LAM-006487	0191639	SILLON GIRATORIO DE METAL	15/11/2016	S/M	S/M	S/S		Muy Malo	HABANO	UBICADO EN EL SOTANO - ( CUARTO DE VIGILANCIA)
11	LAM-010438	0200688	TECLADO - KEYBOARD	14/11/2016	ADVANCE	S/M	G8420004975		Regular	NEGRO	TECLAS BORRADAS- UBICADO EN EL 2DO PISO.
12	LAM-010439	0196552	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	14/11/2016	ADVANCE	S/M	GD090183290106		Bueno	NEGRO	UBICADO EN 2DO PISO.

BIENES PATRIMONIALES: 12

SOBRANTES: 0

TOTAL BIENES: 12

NOTA: EL TRABAJADOR ES RESPONSABLE DE LA EXISTENCIA, PERMANENCIA, CONSERVACION Y BUEN USO DE CADA UNO DE LOS BIENES DESCRITOS, POR LO QUE SE RECOMIENDA TOMAR LA PROVIDENCIA DEL CASO, EN CASO DE ROBO O PERDIDA, EL REPOSABLE DEL BIEN, DEBERA DAR CUENTA AL JEFE INMEDIATO SUPERIOR Y PRESENTAR LA DENUNCIA POLICIAL CORRESPONDIENTE.

INVENTARIADO POR

1) NOMBRE, FIRMA Y DNI

2) NOMBRE, FIRMA Y DNI

DIGITADO POR

NOMBRE, FIRMA Y DNI

USUARIO

FIRMA, SELLO Y DNI

SUB COMISION DE INVENTARIO

FIRMA Y SELLO

OCPAIII

FIRMA Y SELLO

Usuarios: CHAVEZ BUSTAMANTE JORGE

(\*) Todos los bienes (Muebles, Maquinarias, Equipos y Vehiculos)

Fecha: 07/12/2016

Ronal Nayá Vega Regalado  
FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL (T)  
PRIMERA FISCALIA PROVINCIAL PENAL  
CORPORATIVA DE CHICLAYO  
DISTRITO JUDICIAL DE LAMBAYEQUE

## CARGO PERSONAL POR ASIGNACION DE BIENES EN USO

MINISTERIO PUBLICO  
FISCALIA DE LA NACION

NOMBRE : VASQUEZ ATOCHE MILAGROS DEL CARMEN  
DNI : 47477935  
CARGO : ASIST. FUNC. FISC.  
DEPENDENCIA : 01° FISC. PROV. EN LO PENAL CORP. DE CHICLAYO

DISTR. JUD : LAMBAYEQUE  
LOCAL : LAMBAYEQUE-SEDE CENTRAL

NRO	CORRE-ITQ	COD. PAT	DESCRIPCION DE BIEN	FEC. INV	MARCA	MODELO	SERIE	PLACA	ESTADO	COLOR	OBSERVACION
1	LAM-010545	0191633	SILLON GIRATORIO DE METAL	11/11/2016	S/M	S/M	S/S		Malo	HABANO	ubicado en 2do piso .
2	LAM-010551	0195290	ESCRITORIO DE MADERA	11/11/2016	S/M	S/M	S/S		Regular	MARRON	ubicado en 2do piso .
3	LAM-010548	0196353	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	11/11/2016	ADVANCE	S/M	GD090183680113		Regular	NEGRO	ubicado en 2do piso .
4	LAM-010546	0198582	MONITOR PLANO	11/11/2016	ADVANCE	S/M	M6789JA006134		Regular	NEGRO	ubicado en 2do piso .
5	LAM-010547	0200575	TECLADO - KEYBOARD	11/11/2016	ADVANCE	S/M	G8340034608		Regular	NEGRO	ubicado en 2do piso .
6	LAM-010549	0202883	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	11/11/2016	S/M	S/M	090108-1290535		Regular	NEGRO	ubicado en 2do piso .
7	LAM-010550	0206518	MODULO DE MADERA PARA MICROCOMPUTADORA	11/11/2016	S/M	S/M	S/S		Regular	MARRON	ubicado en 2do piso .
8	LAM-010552	0368866	SILLA FIJA DE MADERA	11/11/2016	S/M	S/M	S/S		Regular	NEGRO	UBICADO EN SU OFICINA 2DO PISO / PATAS EN MAL ESTADO

BIENES PATRIMONIALES: 8

SOBRANTES: 0

TOTAL BIENES: 8

NOTA: EL TRABAJADOR ES RESPONSABLE DE LA EXISTENCIA, PERMANENCIA, CONSERVACION Y BUEN USO DE CADA UNO DE LOS BIENES DESCRITOS, POR LO QUE SE RECOMIENDA TOMAR LA PROVIDENCIA DEL CASO. EN CASO DE ROBO O PERDIDA, EL RESPONSABLE DEL BIEN, DEBERA DAR CUENTA AL JEFE INMEDIATO SUPERIOR Y PRESENTAR LA DENUNCIA POLICIAL CORRESPONDIENTE.

INVENTARIADO POR

1) NOMBRE, FIRMA Y DNI

WILTON CESAR JARA RODRIGUEZ

2) NOMBRE, FIRMA Y DNI

INVENTARIADOR

DNI: 46702956 MANTE JORGE

(\*) Todos los bienes (Muebles, Maquinarias, Equipos y Vehículos)

DIGITADO POR

MIRIAM NARVAZ CRUZON AGUILAR

DIGITADORA

DNI. 42060560

USUARIO

FIRMA, SELLO Y DNI

47477935

Milagros Del Carmen Vasquez Atoche  
ASISTENTE EN FISCALIA FISCAL  
Primera Fiscalía Provincial Penal  
Corporativa de Chiclayo  
DISTRITO FISCAL DE LAMBAYEQUE

SUB COMISION DE INVENTARIO

FIRMA Y SELLO

OCPABI

FIRMA Y SELLO

## CARGO PERSONAL POR ASIGNACION DE BIENES EN USO

MINISTERIO PUBLICO  
FISCALIA DE LA NACION

NOMBRE : TORRES SUAREZ DANILO LANDER  
DNI : 43117253  
CARGO : ASIST. ADM.  
DEPENDENCIA : 01º FISC. PROV. EN LO PENAL CORP. DE CHICLAYO

DISTR. JUD : LAMBAYEQUE  
LOCAL : LAMBAYEQUE-SEDE CENTRAL

NRO	CORRE-ETIQ	COD. PAT	DESCRIPCION DE BIEN	FEC. INV	MARCA	MODELO	SERIE	PLACA	ESTADO	COLOR	OBSERVACION
1	LAM-010106	0178999	SILLA FIJA DE MADERA	14/11/2016	S/M	S/M	S/S		Regular	MARRON	UBICADO EN 2DO PISO
2	LAM-010107	0195224	ESCRITORIO DE MADERA	11/11/2016	S/M	S/M	S/S		Regular	MARRON	ubicado en 2do piso .
3	LAM-010105	0195287	ESCRITORIO DE MADERA	11/11/2016	S/M	S/M	S/S		Bueno	MARRON	ubicado en 2do piso .
4	LAM-010108	0196310	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	11/11/2016	ADVANCE	S/M	GD090183620084		Regular	NEGRO	ubicado en 2do piso .
5	LAM-010111	0198407	MONITOR PLANO	11/11/2016	ADVANCE	S/M	M6788JA004491		Regular	NEGRO	ubicado en 2do piso .
6	LAM-010110	0202712	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	11/11/2016	S/M	S/M	090103-1290521		Regular	NEGRO	ubicado en 2do piso .
7	LAM-010113	0230149	SILLA GIRATORIA DE METAL	11/11/2016	S/M	S/M			Bueno	NEGRO	ubicado en 2do piso .
8	LAM-010114	0289021	ARCHIVADOR DE MADERA	11/11/2016	S/M	S/M	S/S		Regular	MARRON	ubicado en 2do piso .

SOBRANTES: 0

BIENES PATRIMONIALES: 8

TOTAL BIENES: 8

NOTA: EL TRABAJADOR ES RESPONSABLE DE LA EXISTENCIA, PERMANENCIA, CONSERVACION Y BUEN USO DE CADA UNO DE LOS BIENES DESCRITOS, POR LO QUE SE RECOMIENDA TOMAR LA PROVIDENCIA DEL CASO. EN CASO DE ROBO O PERDIDA, EL REPOSABLE DEL BIEN, DEBERA DAR CUENTA AL JEFE INMEDIATO SUPERIOR Y PRESENTAR LA DENUNCIA POLICIAL CORRESPONDIENTE.

INVENTARIADO POR  
1) NOMBRE Y FIRMA  
WILINTON CESAR JARA RODRIGUEZ  
2) NOMBRE Y FIRMA  
DNI. 16782956

USUARIO: CITA VEZ, BUSTAMANTE JORGE  
(\*) Todos los bienes (Muebles, Maquinarias, Equipos y Vehículos)

DIGITADO POR  
NOMBRE, FIRMA Y DNI  
MIRIAM NARUMI CHUZON AGUILAR  
DIGITADORA  
DNI. 42060560

USUARIO  
FIRMA, SELLO Y DNI  
DANILO LANDER TORRES SUAREZ  
Asistente en Función Fiscal  
Primer Fiscal Provincial Penal  
Corporativa de Chiclayo  
Fecha: 14/11/2016  
Hora: 09:37 AM  
Distrito Judicial de Lambayeque

SUB COMISION DE INVENTARIO  
FIRMA Y SELLO

OCPABI  
FIRMA Y SELLO



# CARGO PERSONAL POR ASIGNACION DE BIENES EN USO

MINISTERIO PUBLICO  
FISCALIA DE LA NACION

NOMBRE : TORRES SANCHEZ KARINA  
DNI : 41147635  
CARGO : ASIST. FUNC. FISC.  
DEPENDENCIA : 01ª FISC. PROV. EN LO PENAL CORP. DE CHICLAYO

DISTR. JUD : LAMBAYEQUE  
LOCAL : LAMBAYEQUE-SEDE CENTRAL

NRO	CORRE-ETIQ	COD. PAT	DESCRIPCION DE BIEN	FEC. INV	MARCA	MODELO	SERIE	PLACA	ESTADO	COLOR	OBSERVACION
1	LAM-010568	0204067	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	14/11/2016	S/M	S/M	090108-1291081		Regular	NEGRO	UBICADO EN SU OFICINA 2DO PISO
2	LAM-010566	0195219	ESCRITORIO DE MADERA	10/11/2016	S/M	S/M	S/S		Regular	MARRON	ubicado en 2do piso .
3	LAM-010564	0198411	MONITOR PLANO	11/11/2016	ADVANCE	S/M	M6789JA006048		Bueno	NEGRO	UBICADO EN SU OFICINA 2DO PISO-entrada ala mano derecha .
4	LAM-010565	0200613	TECLADO - KEYBOARD	11/11/2016	ADVANCE	S/M	G8420004799		Malo	NEGRO	UBICADO EN SU OFICINA 2DO PISO / TECLAS BORROSAS.
5	LAM-010567	0196477	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	11/11/2016	ADVANCE	S/M	GD090183680147		Regular	NEGRO	UBICADO EN SU OFICINA 2DO PISO-entrada ala mano derecha.

BIENES PATRIMONIALES: 5

SOBRANTES: 0

TOTAL BIENES: 5

NOTA: EL TRABAJADOR ES RESPONSABLE DE LA EXISTENCIA, PERMANENCIA, CONSERVACION Y BUEN USO DE CADA UNO DE LOS BIENES DESCRITOS, POR LO QUE SE RECOMIENDA TOMAR LA PROVIDENCIA DEL CASO. EN CASO DE ROBO O PERDIDA, EL REPOSABLE DEL BIEN, DEBERA DAR CUENTA AL JEFE INMEDIATO SUPERIOR Y PRESENTAR LA DENUNCIA POLICIAL CORRESPONDIENTE.

INVENTARIADO POR

DIGITADO POR

USUARIO

SUB COMISION DE INVENTARIO

OCPAEI

1) NOMBRE, FIRMA Y DNI

NOMBRE, FIRMA Y DNI

FIRMA, SELLO Y DNI

FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO

2) NOMBRE, FIRMA Y DNI

Usuario: CHAVEZ BUSTAMANTE JORGE

(\*) Todos los bienes (Muebles, Maquinarias, Equipos y Vehiculos)

Abogada Karina Torres Sánchez  
Asistente en Función Fiscal  
Fecha: 07/12/2016  
Primera Fiscalía Provincial Penal  
Corporativa de Chiclayo



MINISTERIO PUBLICO  
FISCALIA DE LA NACION

### CARGO PERSONAL POR ASIGNACION DE BIENES EN USO

NOMBRE : ALVARADO CABRERA SARA DEL SOCORRO  
DNI : 40686999  
CARGO : ABOGADO  
DEPENDENCIA : 02º FISC. PROV. EN LO PENAL CORP. DE CHICLAYO

DISTR. JUD : LAMBAYEQUE  
LOCAL : LAMBAYEQUE-SEDE CENTRAL

NRO	CORRE-ETIQ	COD. PAT	DESCRIPCION DE BIEN	FEC. INV	MARCA	MODELO	SERIE	PLACA	ESTADO	COLOR	OBSERVACION
1	LAM-011952	0202727	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	17/11/2016	S/M	S/M	090103-1290258		Bueno	NEGRO	UBICADO EN SU DESPACHO EN EL 3ER PISO
2	LAM-011949	0181577	ARMARIO DE MADERA	17/11/2016	S/M	S/M			Bueno	MARRON	UBICADO EN SU DESPACHO EN EL 3ER PISO
3	LAM-011950	0319813	ARMARIO DE MADERA	17/11/2016	S/M	S/M	S/S		Bueno	MARRON	UBICADO EN SU DESPACHO EN EL 3ER PISO
4	LAM-011913	0192148	CREDENZA DE MADERA	17/11/2016	S/M	S/M			Regular	MARRON	UBICADO EN SU DESPACHO EN EL 3ER PISO
5	LAM-011915	0208270	ESCRITORIO DE MADERA	17/11/2016	S/M	S/M			Regular	MARRON	UBICADO EN SU DESPACHO 3ER PISO
6	LAM-011914	0151634	MODULO DE MADERA PARA MICROCOMPUTADORA	17/11/2016	S/M	S/M			Regular	MARRON	UBICADO EN SU DESPACHO 3ER PISO
7	LAM-011920	0198531	MONITOR PLANO	17/11/2016	ADVANCE	S/M	M6789JA007011		Regular	NEGRO	UBICADO EN SU DESPACHO EN EL 3ER PISO
8	LAM-011917	0368876	SILLA FIJA DE MADERA	17/11/2016	S/M	S/M	S/S		Malo	NEGRO	TAPIZ NEGRO UBICADO EN SU DESPACHO 3ER PISO
9	LAM-011918	0179190	SILLA FIJA DE MADERA	17/11/2016	S/M	S/M			Regular	MARRON	UBICADO EN SU DESPACHO EN EL 3ER PISO
10	LAM-011919	0087371	SILLA FIJA DE METAL	17/11/2016	S/M	S/M			Malo	MARRON	UBICADO EN SU DESPACHO EN EL 3ER PISO
11	LAM-011916	0192319	SILLON GIRATORIO DE METAL	17/11/2016	S/M	S/M			Muy Malo	HABANO	UBICADO EN SU DESPACHO EN EL 3ER PISO
12	LAM-011953	0184645	TELEFONO	17/11/2016	PANASONIC	KX-TS105LXW	8HBKE339917		Bueno	MARFIL	UBICADO EN SU DESPACHO 3ER PISO
13	LAM-011951	0196242	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	17/11/2016	ADVANCE	S/M	GD090183370144		Regular	NEGRO	UBICADO EN SU DESPACHO EN EL 3ER PISO

SOBRANTES: 0

BIENES PATRIMONIALES: 13

TOTAL BIENES: 13

NOTA: EL TRABAJADOR ES RESPONSABLE DE LA EXISTENCIA, PERMANENCIA, CONSERVACION Y BUEN USO DE CADA UNO DE LOS BIENES DESCRITOS, POR LO QUE SE RECOMIENDA TOMAR LA PROVIDENCIA DEL CASO, EN CASO DE ROBO O PERDIDA, EL REPOSABLE DEL BIEN, DEBERA DAR CUENTA AL JEFE INMEDIATO SUPERIOR Y PRESENTAR LA DENUNCIA POLICIAL CORRESPONDIENTE.

INVENTARIADO POR  
*Pranito Maturio*  
PRANITO MURISIO SORIS FALEN  
INVENTARIADOR  
DNI. 72540533  
2) NOMBRE, FIRMA Y DNI

Usuario: CHAVEZ BUSTAMANTE JORGE

DIGITADO POR  
*Miriam Narumi Chuzon Aguilar*  
NOMBRE, FIRMA Y DNI  
MIRIAM NARUMI CHUZON AGUILAR  
DIGITADORA  
DNI. 42060560

USUARIO  
40686999  
FIRMA, SELLO Y DNI  
*Sara Del Socorro Alvarado Cabrera*  
Sara Del Socorro Alvarado Cabrera  
Fiscal Provincial  
2da. Fiscalía Provincial Penal Corporativ  
Chiclayo

SUB COMISION DE INVENTARIO  
FIRMA Y SELLO

OCPABI  
FIRMA Y SELLO





MINISTERIO PUBLICO  
FISCALIA DE LA NACION

# CARGO PERSONAL POR ASIGNACION DE BIENES EN USO

NOMBRE : BANCES ZARATE SCARLETT  
DNI : 44414131  
CARGO : FISC. ADJ. PROV.  
DEPENDENCIA : 02° FISC. PROV. EN LO PENAL CORP. DE CHICLAYO

DISTR. JUD  
LOCAL

: LAMBAYEQUE  
: LAMBAYEQUE-SEDE CENTRAL

NRO	CORRE-ETIQ	COD. PAT	DESCRIPCION DE BIEN	FEC. INV	MARCA	MODELO	SERIE	PLACA	ESTADO	COLOR	OBSERVACION
1	LAM-011388	0164494	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	13/11/2016	CDP	B-UPR 1108I	LA685427		Regular	NEGRO	UBICADO EN SU OFICINA 3ER PISO
2	LAM-011394	0322711	ARCHIVADOR DE MADERA	13/11/2016	S/M	S/M	S/S		Regular	MARRON	UBICADO EN SU OFICINA 3ER PISO
3	LAM-011393	0181616	ARMARIO DE MADERA	13/11/2016	S/M	S/M			Regular	MARRON	UBICADO EN SU OFICINA 3ER PISO
4	LAM-011392	0208267	ESCRITORIO DE MADERA	13/11/2016	S/M	S/M			Regular	MARRON	UBICADO EN SU OFICINA 3ER PISO
5	LAM-011352	0206423	MODULO DE MADERA PARA MICROCOMPUTADORA	13/11/2016	S/M	S/M			Regular	MARRON	UBICADO EN SU OFICINA 3ER PISO
6	LAM-011390	0198515	MONITOR PLANO	12/11/2016	ADVANCE	TFT17W80PS	M6789JA007962		Regular	NEGRO	LCD TFT UBICADO EN SU OFICINA 3ER PISO
7	LAM-011391	0385164	SILLA GIRATORIA DE METAL	13/11/2016	S/M	S/M	S/M		Regular	MARRON	UBICADO EN SU OFICINA 3ER PISO
8	LAM-011351	0192358	SILLON GIRATORIO DE METAL	13/11/2016	S/M	S/M			Malo	HABANO	T/EJECUTIVO; UBICADO EN SU OFICINA 3ER PISO
9	LAM-011389	0362752	TECLADO - KEYBOARD	12/11/2016	ADVANCE	5137-AU	G1280003682		Malo	NEGRO	UBICADO EN SU OFICINA 3ER PISO
10	LAM-011387	0155005	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	12/11/2016	ADVANCE	VISSION 6620TIM	GD080171680493		Regular	NEGRO	UBICADO EN SU OFICINA 3ER PISO

SOBRANTES: 0

BIENES PATRIMONIALES: 10

TOTAL BIENES: 10

NOTA: EL TRABAJADOR ES RESPONSABLE DE LA EXISTENCIA, PERMANENCIA, CONSERVACION Y BUEN USO DE CADA UNO DE LOS BIENES DESCRITOS, POR LO QUE SE RECOMIENDA TOMAR LA PROVIDENCIA DEL CASO. EN CASO DE ROBO O PERDIDA, EL REPOSABLE DEL BIEN, DEBERA DAR CUENTA AL JEFE INMEDIATO SUPERIOR Y PRESENTAR LA DENUNCIA POLICIAL CORRESPONDIENTE.

INVENTARIADO POR  
*Brandon Mauricio Solis Falen*  
BRANDON MAURICIO SOLIS FALEN  
INVENTARIADOR  
DNI: 72540573  
2) NOMBRE, FIRMA Y DNI

DIGITADO POR  
*Miriam Narumi Chuzon Aguilar*  
NOMBRE, FIRMA Y DNI  
MIRIAM NARUMI CHUZON AGUILAR  
DIGITADORA  
DNI: 42060560

USUARIO  
*Scarlett Bances Zarate*  
FIRMA SELLO Y DNI  
Scarlett Bances Zarate  
Asistente en Funcion Fiscal  
Despacho de Coordinación  
Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa  
Chiclayo  
12-11-PM

SUB COMISION DE INVENTARIO  
FIRMA Y SELLO

OCPABI  
FIRMA Y SELLO

Usuario: CHAVEZ BUSTAMANTE JORGE

\*) Todos los bienes (Muebles, Maquinarias, Equipos y Vehículos)



CARGO PERSONAL POR ASIGNACION DE BIENES EN USO



MINISTERIO PUBLICO  
FISCALIA DE LA NACION

NOMBRE : BARBOZA ALARCON ERIKA LIZBETH  
DNI : 46404551  
CARGO : ASIST. FUNC. FISC.  
DEPENDENCIA : 02° FISC. PROV. EN LO PENAL CORP. DE CHICLAYO

DISTR. JUD  
LOCAL

: LAMBAYEQUE  
: LAMBAYEQUE-SEDE CENTRAL

NRO	CORRE-ETIQ	COE. PAT	DESCRIPCION DE BIEN	FEC. INV	MARCA	MODELO	SERIE	PLACA	ESTADO	COLOR	OBSERVACION
1	LAM-011182	0385349	ARMARIO DE MADERA	13/11/2016	S/M	S/M	S/M		Bueno	MARRON	02 puertas 05 divisiones UBICADO EN SU OFICINA 3ER PISO
2	LAM-011189	0149826	ESCRITORIO DE MADERA	13/11/2016	S/M	S/M	S/S		Regular	MARRON	UBICADO EN SU OFICINA 3ER PISO
3	LAM-011183	0182003	MODULO DE MADERA PARA MICROCOMPUTADORA	13/11/2016	S/M	S/M			Regular	MARRON	SIN PARTE PARA COLOCAR TECLADO UBICADO EN SU OFICINA 3ER PISO
4	LAM-011188	0157531	MONITOR A COLOR	13/11/2016	ADVANCE	F1770	U8C7BA020846		Regular	NEGRO	UBICADO EN SU OFICINA 3ER PISO
5	LAM-011193	0368896	SILLA FIJA DE MADERA	13/11/2016	S/M	S/M	S/S		Malo	NEGRO	TAPIZ AZUL UBICADO EN SU OFICINA 3ER PISO
6	LAM-011185	0192331	SILLON GIRATORIO DE METAL	13/11/2016	S/M	S/M			Muy Malo	HABANO	UBICADO EN SU OFICINA 3ER PISO
7	LAM-011187	0193241	TECLADO - KEYBOARD	13/11/2016	ADVANCE	5105U	G8330047275		Malo	NEGRO	UBICADO EN SU OFICINA 3ER PISO
8	LAM-011186	0192863	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	13/11/2016	ADVANCE	VISSION 3655 TPM	GD090183500107		Regular	NEGRO	UBICADO EN SU OFICINA 3ER PISO

SOBRANTES: 0

BIENES PATRIMONIALES: 8

TOTAL BIENES: 8

NOTA: EL TRABAJADOR ES RESPONSABLE DE LA EXISTENCIA, PERMANENCIA, CONSERVACION Y BUEN USO DE CADA UNO DE LOS BIENES DESCRITOS, POR LO QUE SE RECOMIENDA TOMAR LA PROVIDENCIA DEL CASO. EN CASO DE ROBO O PERDIDA, EL REponsable DEL BIEN, DEBERA DAR CUENTA AL JEFE INMEDIATO SUPERIOR Y PRESENTAR LA DENUNCIA POLICIAL CORRESPONDIENTE.

INVENTARIADO POR  
*Brandon Mauricio Solis Fale*  
BRANDON MAURICIO SOLIS FALE  
INVENTARIADOR  
DNI: 46404551

DIGITADO POR  
*Miriam Narumi Chuzon Aguilar*  
NOMBRE, FIRMA Y DNI  
MIRIAM NARUMI CHUZON AGUILAR  
DIGITADORA  
DNI: 42060560

USUARIO  
*Abg. Erika L. Barboza Alarcón*  
Firma y Sello  
Abg. Erika L. Barboza Alarcón  
Asistente en Función Fisco  
Quinto Despacho de Investigación  
Segunda Fiscalía Penal Corporativa  
CHICLAYO  
Fecha: 07/11/2016  
Hora: 04:44 PM  
DNI: 46404551

SUB COMISION DE INVENTARIO  
FIRMA Y SELLO

OCPABI  
FIRMA Y SELLO

Usuario: CHAVEZ BUSTAMANTE JORGE  
\*) Todos los bienes (Muebles, Maquinarias, Equipos y Vehículos)

CARGO PERSONAL POR ASIGNACION DE BIENES EN USO

MINISTERIO PUBLICO  
FISCALIA DE LA NACION

NOMBRE : BRAVO VIGO TANIA  
DNI : 16735884  
CARGO : FISC. PROV. TITULAR  
DEPENDENCIA : 02° FISC. PROV. EN LO PENAL CORP. DE CHICLAYO

DISTR. JUD : LAMBAYEQUE  
LOCAL : LAMBAYEQUE-SEDE CENTRAL

NRO	CORRE-ETIQ	COD. PAT	DESCRIPCION DE BIEN	FEC. INV	MARCA	MODELO	SERIE	PLACA	ESTADO	COLOR	OBSERVACION
1	LAM-012037	0202580	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	18/11/2016	CDP	S/M	090103-1290506		Malo	NEGRO	UBICADO AL FRENTE DEL ASIST. PIÑA EN EL 3ER PISO
2	LAM-012004	0176501	ARCHIVADOR DE MADERA	18/11/2016	S/M	S/M			Bueno	MARRON	UBICADO EN SU OFICINA 3ER PISO
3	LAM-012002	0181645	ARMARIO DE MADERA	18/11/2016	S/M	S/M			Bueno	MARRON	De 02 puertas UBICADO EN SU OFICINA 3ER PISO
4	LAM-012008	0385422	ARMARIO DE MADERA	18/11/2016	S/M	S/M	S/M		Bueno	MARRON	02 puertas 05 divisiones UBICADO EN SU OFICINA 3ER PISO
5	LAM-012017	0181651	ARMARIO DE MADERA	18/11/2016	S/M	S/M			Bueno	MARRON	DE 02 PUERTAS UBICADO EN SU OFICINA 3ER PISO
6	LAM-012024	0052310	BIBLIOTECA DE MADERA	18/11/2016	S/M	S/M			Malo	MARRON	UBICADO EN DESPACHO DE ASIST. MEGO VASQUEZ EN EL 3ER PISO
7	LAM-012023	0305841	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	18/11/2016	CASIO	EX-Z450	24005213F		Bueno	PLATA	UBICADO EN SU OFICINA - 3ER PISO
8	LAM-004229	0134334	CAMIONETA	24/11/2016	NISSAN	FRONTIER 4 X 2		PQG-386	Regular	BLANCO	USO COMUN
9	LAM-012013	0368446	CAPTURADOR DE IMAGEN - SCANNER	18/11/2016	EPSON	WORK FORCE GT-1500	K5JW073347		Regular	BLANCO	UBICADO EN SU OFICINA 3ER PISO
10	LAM-011989	0306148	CHALECO ANTIBALAS	18/11/2016	CADDIN	I03	38884		Bueno	AZUL	UBICADO EN SU OFICINA 3ER PISO
11	LAM-012021	0195593	CHALECO ANTIBALAS	18/11/2016	CADDIN	I03	29205		Bueno	AZUL	UBICADO EN SU OFICINA 3ER PISO
12	LAM-012130	0185631	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	18/11/2016	MSI	VR630	5Esk0812000067		Regular	NEGRO	UBICADO EN EL 3ER PISO
13	LAM-012003	0188434	CREDENZA DE MADERA	18/11/2016	S/M	S/M			Regular	MARRON	UBICADO EN SU OFICINA 3ER PISO
14	LAM-012039	0192143	CREDENZA DE MADERA	18/11/2016	S/M	S/M			Regular	MARRON	UBICADO EN EL 3ER PISO
15	LAM-012026	0335456	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER Y/O FAX	18/11/2016	KYOCERA	TASKALFA 55001	1102LH4US0NHS2700122		Bueno	NEGRO	UBICADO EN FRENTE DE ASIST. GOMEZ YANET EN EL 3R PISO
16	LAM-012020	0208319	ESCRITORIO DE MADERA	18/11/2016	S/M	S/M			Regular	MARRON	UBICADO EN SU OFICINA 3ER PISO
17	LAM-012031	0149860	ESCRITORIO DE MADERA	18/11/2016	S/M	S/M			Regular	MARRON	UBICADO AL FRENTE DEL ASIST. PIÑA EN EL 3ER PISO
18	LAM-012040	0119529	ESCRITORIO DE MADERA	18/11/2016	S/M	S/M			Regular	MARRON	UBICADO EN DESPACHO DE ABOGADOS CERCA DEL DESPACHO DE ROBLES PACHECO 3ER PISO
19	LAM-012009	0325085	ESTANTE DE MADERA	18/11/2016	S/M	S/M	S/S		Regular	MARRON	UBICADO EN SU OFICINA 3ER PISO
20	LAM-012028	0168919	FACSIMIL	18/11/2016	BROTHER	MFC-3360C	U61735F8F840767		Bueno	PLATEADO	UBICADO AL COSTADO DE ASIST. SUSANA EN EL 3ER PISO
21	LAM-011190	0186654	FOTOCOPIADORA EN GENERAL	13/11/2016	KYOCERA	KM-2035	PME8500980		Bueno	BLANCO	USO COMUN UBICADO EN EL TERCER PISO AL LADO DE LA





MINISTERIO PÚBLICO  
FISCALÍA DE LA NACIÓN

### CARGO PERSONAL POR ASIGNACION DE BIENES EN USO

NOMBRE : ALBUJAR ALVAREZ PEDRO RODOLFO  
DNI : 42739000  
CARGO : ASIST. FUNC. FISC.  
DEPENDENCIA : 03° FISC. PROV. PENAL CORP. DE CHICLAYO

DISTR. JUD : LAMBAYEQUE  
LOCAL : LAMBAYEQUE-SEDE CENTRAL

NRO	CORRE-ETIQ	COD. PAT	DESCRIPCION DE BIEN	FEC. INV	MARCA	MODELO	SERIE	PLACA	ESTADO	COLOR	OBSERVACION
1	LAM-009048	0164510	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	10/11/2016	CDP	B-UPR 11081	LA683169		Regular	NEGRO	uBICADO en el 4to piSO
2	LAM-011006	0288996	ARCHIVADOR DE MADERA	16/11/2016	S/M	S/M			Regular	MARRON	4 GAVETAS UBICADO EN EL 4TO PISO
3	LAM-009057	0181597	ARMARIO DE MADERA	10/11/2016	S/M	S/M			Bueno	MARRON	De 02 puertas uBICADO en el 4to piSO
4	LAM-009053	0182576	ESCRITORIO DE MADERA	10/11/2016	S/M	S/M			Regular	MARRON	De 3 gavetas uBICADO en el 4to piSO
5	LAM-009047	0094860	MODULO DE MADERA PARA MICROCOMPUTADORA	10/11/2016	S/M	S/M			Regular	MARRON	uBICADO en el 4to piSO
6	LAM-009051	0157491	MONITOR A COLOR	10/11/2016	ADVANCE	FT720G	U8C7BA020355		Regular	NEGRO	uBICADO en el 4to piSO
7	LAM-009055	0385679	SILLA FIJA DE MADERA	10/11/2016	S/M	S/M	S/M		Bueno	MARRON	Tapiz azul UBICADO en el 4to piSO
8	LAM-009050	0362783	TECLADO - KEYBOARD	10/11/2016	ADVANCE	5137-AU	G2170018973		Regular	NEGRO	uBICADO en el 4to piSO
9	LAM-009049	0155135	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	10/11/2016	ADVANCE	VISSION 6620TIM	GD080171680006		Regular	NEGRO	uBICADO en el 4to piSO

BIENES PATRIMONIALES: 9

SOBRANTES: 0

TOTAL BIENES: 9

NOTA: EL TRABAJADOR ES RESPONSABLE DE LA EXISTENCIA, PERMANENCIA, CONSERVACION Y BUEN USO DE CADA UNO DE LOS BIENES DESCRITOS, POR LO QUE SE RECOMIENDA TOMAR LA PROVIDENCIA DEL CASO. EN CASO DE ROBO O PERDIDA, EL REPOSABLE DEL BIEN, DEBERA DAR CUENTA AL JEFE INMEDIATO SUPERIOR Y PRESENTAR LA DENUNCIA POLICIAL CORRESPONDIENTE.

#### INVENTARIADO POR

1) NOMBRE, FIRMA Y DNI
2) NOMBRE, FIRMA Y DNI

#### DIGITADO POR

NOMBRE, FIRMA Y DNI
---------------------

#### USUARIO

FIRMA, SELLO Y DNI
--------------------

#### SUB COMISION DE INVENTARIO

FIRMA Y SELLO
---------------

#### OCPABI

FIRMA Y SELLO
---------------

Usuario: CHAVEZ BUSTAMANTE JORGE  
(\*) Todos los bienes (Muebles, Maquinarias, Equipos y Vehículos)

Fecha: 07/12/2016  
Hora: 09:45 PM

## CARGO PERSONAL POR ASIGNACION DE BIENES EN USO

MINISTERIO PUBLICO  
FISCALIA DE LA NACION

NOMBRE : ALVARADO MEZONES LIDIA ISABEL  
DNI : 16541718  
CARGO : TECN. ABOG. II  
DEPENDENCIA : 03° FISC. PROV. PENAL CORP. DE CHICLAYO

DISTR. JUD  
LOCAL

: LAMBAYEQUE  
: LAMBAYEQUE-SEDE CENTRAL

NRO	CORRE-ETIQ	COD. PAT	DESCRIPCION DE BIEN	FEC. INV	MARCA	MODELO	SERIE	PLACA	ESTADO	COLOR	OBSERVACION
1	LAM-011236	0121402	ESCRITORIO DE MADERA	12/11/2016	S/M	S/M			Regular	MARRON	UBICADO EN EL CUARTO PISO, A LADO DE LA OFICINA DEL FISCAL COORDINADOR
2	LAM-011019	0126382	SILLA GIRATORIA DE METAL	12/11/2016	S/M	S/M			Malo	HABANO	UBICADO EN EL CUARTO PISO A LADO DE LA OFICINA DEL FISCAL COORDINADOR
3	LAM-011020	0182557	ESCRITORIO DE MADERA	12/11/2016	S/M	S/M			Regular	MARRON	UBICADO EN EL CUARTO PISO A LADO DE LA OFICINA DEL FISCAL COORDINADOR
4	LAM-011016	0195295	ESCRITORIO DE MADERA	12/11/2016	S/M	S/M	S/S		Malo	MARRON	UBICADO EN EL CUARTO PISO A LADO DE LA OFICINA DEL FISCAL COORDINADOR
5	LAM-011024	0198536	MONITOR PLANO	12/11/2016	ADVANCE	S/M	M6789JA008326		Regular	NEGRO	UBICADO EN EL CUARTO PISO A LADO DE LA OFICINA DEL FISCAL COORDINADOR
6	LAM-011021	0202539	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	12/11/2016	S/M	S/M	090103-1291054		Regular	NEGRO	UBICADO EN EL CUARTO PISO A LADO DE LA OFICINA DEL FISCAL COORDINADOR
7	LAM-011018	0237472	TELEFONO	12/11/2016	PANASONIC	KX-TS600LX	9CBKB048616		Bueno	BLANCO	UBICADO EN EL CUARTO PISO A LADO DE LA OFICINA DEL FISCAL COORDINADOR
8	LAM-011015	0289168	ARCHIVADOR DE MADERA	12/11/2016	S/M	S/M			Bueno	MARRON	UBICADO EN EL CUARTO PISO A LADO DE LA OFICINA DEL FISCAL COORDINADOR
9	LAM-011017	0291364	VENTILADOR ELECTRICO PARA MESA O DE PIE	12/11/2016	MOULINEX	AMBIANCE FS 18			Bueno	NEGRO	UBICADO EN EL CUARTO PISO A LADO DE LA OFICINA DEL FISCAL COORDINADOR
10	LAM-011023	0362778	TECLADO - KEYBOARD	12/11/2016	ADVANCE	5137-AU	G2170015706		Regular	NEGRO	UBICADO EN EL CUARTO PISO A LADO DE LA OFICINA DEL FISCAL COORDINADOR

SOBRANTES: 0

BIENES PATRIMONIALES: 10

TOTAL BIENES: 10

NOTA: EL TRABAJADOR ES RESPONSABLE DE LA EXISTENCIA, PERMANENCIA, CONSERVACION Y BUEN USO DE CADA UNO DE LOS BIENES DESCRITOS, POR LO QUE SE RECOMIENDA TOMAR LA PROVIDENCIA DEL CASO. EN CASO DE ROBO O PERDIDA, EL REPOSABLE DEL BIEN, DEBERA DAR CUENTA AL JEFE INMEDIATO SUPERIOR Y PRESENTAR LA DENUNCIA POLICIAL CORRESPONDIENTE.

INVENTARIADO POR

MARDIA ROSA CUMPA MUÑOZ  
INVENTARIADO POR  
2) NOMBRE, FIRMA Y DNI  
DNI. 46944911

DIGITADO POR

ROXANA REGALADO VASQUEZ  
DIGITADORA  
DNI. 46819424

USUARIO

LIDIA ISABEL ALVARADO MEZONES  
FIRMA, SELLO Y DNI  
DNI. 16541718

SUB COMISION DE INVENTARIO

FIRMA Y SELLO

OCPABI

FIRMA Y SELLO



CARGO PERSONAL POR ASIGNACION DE BIENES EN USO



MINISTERIO PUBLICO  
FISCALIA DE LA NACION

NOMBRE : ANGULO PISFIL MAGALLY SUCETTI  
DNI : 41603523  
CARGO : ASIST. FUNC. FISC.  
DEPENDENCIA : 03° FISC. PROV. PENAL CORP. DE CHICLAYO

DISTR. JUD  
LOCAL

: LAMBAYEQUE  
: LAMBAYEQUE-SEDE CENTRAL

NRO	CORRE-ETIQ	COD. PAT	DESCRIPCION DE BIEN	FEC. INV	MARCA	MODELO	SERIE	PLACA	ESTADO	COLOR	OBSERVACION
1	LAM-010046	0112789	SILLA FIJA DE MADERA	12/11/2016	S/M	S/M			Regular	MARRON	UBICADO EN EL CUARTO PISO.
2	LAM-010049	0151623	MODULO DE MADERA PARA MICROCOMPUTADORA	11/11/2016	S/M	S/M			Malo	MARRON	UBICADO EN EL CUARTO PISO
3	LAM-010048	0155038	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	11/11/2016	ADVANCE	VISSION 6620TIM	GD080171220213		Regular	NEGRO	UBICADO EN EL CUARTO PISO
4	LAM-010043	0157506	MONITOR A COLOR	11/11/2016	ADVANCE	FT720G	U8C7BA020423		Regular	NEGRO	UBICADO EN EL CUARTO PISO
5	LAM-010047	0164557	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	11/11/2016	CDP	B-UPR 1108I	LA684913		Regular	NEGRO	UBICADO EN EL CUARTO PISO
6	LAM-010052	0195293	ESCRITORIO DE MADERA	11/11/2016	S/M	S/M			Regular	MARRON	UBICADO EN EL CUARTO PISO
7	LAM-010045	0195395	ESCRITORIO DE MADERA	11/11/2016	S/M	S/M	S/S		Regular	MARRON	UBICADO EN EL CUARTO PISO
8	LAM-010044	0362776	TECLADO - KEYBOARD	11/11/2016	ADVANCE	5137-AU	G2170018905		Regular	NEGRO	UBICADO EN EL CUARTO PISO
										BIENES PATRIMONIALES: 8	

SOBRANTES: 0

TOTAL BIENES: 8

NOTA: EL TRABAJADOR ES RESPONSABLE DE LA EXISTENCIA, PERMANENCIA, CONSERVACION Y BUEN USO DE CADA UNO DE LOS BIENES DESCRITOS, POR LO QUE SE RECOMIENDA TOMAR LA PROVIDENCIA DEL CASO. EN CASO DE ROBO O PERDIDA, EL REPOSABLE DEL BIEN, DEBERA DAR CUENTA AL JEFE INMEDIATO SUPERIOR Y PRESENTAR LA DENUNCIA POLICIAL CORRESPONDIENTE.

INVENTARIADO POR  
NOMBRE FIRMA Y DNI  
MARDI EDELMAR CUMPA MUÑOZ  
INVENTARIADOR  
2) DNI: 41603523

DIGITADO POR  
NOMBRE FIRMA Y DNI  
ROXANA REGALADO VASQUEZ  
DIGITADORA  
DNI: 46819424

USUARIO  
FIRMA SELLO Y DNI  
Magally Sucetti Angulo Pisfil  
Asistente en Función Fiscal  
Tercera Fiscalía Provincial Penal  
Corporativa de Chiclayo  
Fecha: 15/11/2016  
Hora: 10:21 AM

SUB COMISION DE INVENTARIO  
FIRMA Y SELLO

OCPABI  
FIRMA Y SELLO

Usuario: CHAVEZ BUSTAMANTE JORGE

(\*) Todos los bienes (Muebles, Maquinarias, Equipos y Vehículos)



MINISTERIO PUBLICO  
FISCALIA DE LA NACION

CARGO PERSONAL POR ASIGNACION DE BIENES EN USO

NOMBRE : AURAZO COLCHADO PAMELA VOLODIA  
DNI : 16700304  
CARGO : FISC. ADJ. PROV.  
DEPENDENCIA : 03° FISC. PROV. PENAL CORP. DE CHICLAYO

DISTR. JUD  
LOCAL

: LAMBAYEQUE  
: LAMBAYEQUE-SEDE CENTRAL

NRO	CORRE-ETIQ	COD. PAT	DESCRIPCION DE BIEN	FEC. INV	MARCA	MODELO	SERIE	PLACA	ESTADO	COLOR	OBSERVACION
1	LAM-010654	0052477	ARMARIO DE METAL	11/11/2016	S/M	S/M			Regular	CELESTE	UBICADO EN EL CUARTO PISO A LADO DE LA OFICINA DEL FISCAL COORDINADOR
2	LAM-010050	0053001	SILLA FIJA DE METAL	14/11/2016	S/M	S/M	S/S		Regular	MARRON	UBICADO EN EL 4TO PISO
3	LAM-010658	0126296	ESCRITORIO DE MADERA	11/11/2016	S/M	S/M			Regular	MARRON	UBICADO EN EL CUARTO PISO A LADO DE LA OFICINA DEL FISCAL COORDINADOR
4	LAM-011221	0178858	SILLA FIJA DE MADERA	12/11/2016	S/M	S/M			Regular	MARRON	UBICADO EN EL CUARTO PISO EN SU OFICINA
5	LAM-010661	0188972	MODULO DE MADERA PARA MICROCOMPUTADORA	11/11/2016	S/M	S/M			Regular	MARRON	UBICADO EN EL CUARTO PISO A LADO DE LA OFICINA DEL FISCAL COORDINADOR
6	LAM-010657	0191653	SILLON GIRATORIO DE METAL	11/11/2016	S/M	S/M	S/S		Regular	HABANO	UBICADO EN EL CUARTO PISO A LADO DE LA OFICINA DEL FISCAL COORDINADOR
7	LAM-010663	0192857	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	11/11/2016	ADVANCE	S/M	GD090183500066		Regular	NEGRO	UBICADO EN EL CUARTO PISO A LADO DE LA OFICINA DEL FISCAL COORDINADOR
8	LAM-010664	0193211	MONITOR PLANO	11/11/2016	ADVANCE	S/M	M6788JA004733		Bueno	NEGRO	UBICADO EN EL CUARTO PISO A LADO DE LA OFICINA DEL FISCAL COORDINADOR
9	LAM-010659	0237380	TELEFONO	11/11/2016	PANASONIC	KX-TS600LX	9JAKB053768		Bueno	BLANCO	UBICADO EN EL CUARTO PISO A LADO DE LA OFICINA DEL FISCAL COORDINADOR
10	LAM-010660	0262305	SILLA FIJA DE MADERA	11/11/2016	S/M	S/M			Bueno	MARRON	UBICADO EN EL CUARTO PISO A LADO DE LA OFICINA DEL FISCAL COORDINADOR
11	LAM-010655	0290429	VENTILADOR ELECTRICO PARA MESA O DE PIE	11/11/2016	MOULINEX	AMBIANCE FS 18			Regular	NEGRO	UBICADO EN EL CUARTO PISO A LADO DE LA OFICINA DEL FISCAL COORDINADOR
12	LAM-010656	0319751	ARMARIO DE MADERA	11/11/2016	S/M	S/M	S/S		Bueno	MARRON	UBICADO EN EL CUARTO PISO A LADO DE LA OFICINA DEL FISCAL COORDINADOR
13	LAM-010662	0380651	TECLADO - KEYBOARD	11/11/2016	ADVANCE	5137-AU	G2370002704		Regular	NEGRO	UBICADO EN EL CUARTO PISO A LADO DE LA OFICINA DEL FISCAL COORDINADOR

BIENES PATRIMONIALES: 13

SOBRANTES: 0

TOTAL BIENES: 13

NOTA: EL TRABAJADOR ES RESPONSABLE DE LA EXISTENCIA, PERMANENCIA, CONSERVACION Y BUEN USO DE CADA UNO DE LOS BIENES DESCRITOS, POR LO QUE SE RECOMIENDA TOMAR LA PROVIDENCIA DEL CASO. EN CASO DE ROBO O PERDIDA, EL REPOSABLE DEL BIEN, DEBERA DAR CUENTA AL JEFE INMEDIATO SUPERIOR Y PRESENTAR LA DENUNCIA POLICIAL CORRESPONDIENTE.

INVENTARIADO POR

MA 1) NOMBRE FIRMA Y DNI MUNOZ

2) NOMBRE FIRMA Y DNI

DNI: 6844911

Usuario: CHAVEZ BUSTAMANTE JORGE

(\*) Todos los bienes (Muebles, Maquinarias, Equipos y Vehículos)

DIGITADO POR

ROXANA REGALADO VASQUEZ

DIGITADO POR

DNI: 46819424

USUARIO

Pamela Aurora Colchado

FIRMA SELLO Y DNI

Fiscal Adjunta Provincial

Tercera Fiscalía Provincial Penal

Corporativa de Chiclayo

Fecha: 15/11/2016  
Hora: 09:03 AM

SUB COMISION DE INVENTARIO

FIRMA Y SELLO

OCPABI

FIRMA Y SELLO

## **ANEXO Nro. 03**





## CARGA PROCESAL EN MATERIA PENAL EN FISCALÍAS SUPERIORES, SEGÚN NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL (NCPP), SEGÚN DISTRITO FISCAL

Para el Nuevo Código Procesal Penal los mayores porcentajes de casos atendidos a nivel de Distrito Fiscal se tiene en Lima Sur y Huaura con el 100.00%, Sullana con 99.90% y Tacna con 99.48%, mientras que los menores porcentajes se encuentran en Callao con 73.79%, Ventanilla con 85.41%, Lima Norte con 93.06% y Cusco con 93.47% de atención.

### CUADRO N° 25:

#### NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL (NCPP)

#### CARGA PROCESAL EN MATERIA PENAL EN FISCALÍAS SUPERIORES PENALES Y MIXTAS POR TIPO DE CASO, SEGÚN DISTRITO FISCAL ENERO A SETIEMBRE 2017

DISTRITO FISCAL	APELAC. DE DENUNCIA		APELAC. DE EXPEDIENTE		CONSULTAS		EXCLUSION FISCAL		EXPEDIENTES		INCIDENTE-EXPEDIENTE		QUEJAS		TOTAL		% DE ATENCIÓN
	INGRESO	ATENDIDO	INGRESO	ATENDIDO	INGRESO	ATENDIDO	INGRESO	ATENDIDO	INGRESO	ATENDIDO	INGRESO	ATENDIDO	INGRESO	ATENDIDO	INGRESO	ATENDIDO	
AMAZONAS	368	368	9	9	104	104	23	23	179	169	3	3	165	164	851	840	98.71
ANCASH	690	643	49	49	239	239	26	26	168	137	16	15	1026	1008	2,214	2,117	95.62
APURÍMAC	232	225	2	2	80	80	6	6	227	202	47	42	407	387	1,001	944	94.31
AREQUIPA	1403	1402			195	195	45	43	77	73	12	12	2060	2007	3,792	3,732	98.42
AYACUCHO	398	389	370	367	182	182	15	15	317	294	35	32	809	803	2,126	2,082	97.93
CAJAMARCA	520	519	89	89	152	152	19	19	83	77	11	11	716	708	1,590	1,575	99.06
CALLAO (*)	57	56	77	70	13	13	1	1	312	256	4	4	406	242	870	642	73.79
CAÑETE	311	289	4	4	51	51	8	8	48	47	1	1	493	464	916	864	94.32
CUSCO	920	838	183	109	444	443	13	13	135	127	14	14	1477	1434	3,186	2,978	93.47
HUANCARELICA	178	176	40	40	45	45	1	1	35	34	3	3	186	184	488	483	98.98
HUÁNUCO	630	622	8	8	284	284	29	29	426	384	75	72	716	709	2,168	2,108	97.23
HUAURA	761	761			88	88	23	23	35	35	1	1	489	489	1,397	1,397	100.00
ICA	1184	1154	3	3	213	213	32	30	110	95	31	26	1372	1276	2,945	2,797	94.97
JUNÍN	453	450	829	827	155	155	29	29	444	412	12	12	1001	1000	2,923	2,885	98.70
LA LIBERTAD	2118	2112			152	152	58	47	68	68	3	3	984	785	3,383	3,167	93.62
LAMBAYEQUE	1025	1012	57	56	308	308	37	36	123	123	5	5	1759	1711	3,314	3,251	98.10
LIMA (**)	419	416	61	60	195	195	9	9	120	86	13	9	369	353	1,186	1,128	95.11
LIMA NORTE (*)	35	31			5	5			2	2	3	3	27	26	72	67	93.06
LIMA SUR (*)	60	60			1	1							13	13	74	74	100.00
LORETO	271	271	247	247	158	158	31	31	130	121	1	1	381	378	1,219	1,207	99.02
MADRE DE DIOS	359	356			31	31	4	4	101	93			186	181	681	665	97.65
MOQUEGUA	253	238			34	34	3	3	12	12			424	422	726	709	97.66
PASCO	161	161	5	5	75	75	4	4	43	36	5	5	191	190	484	476	98.35
PIURA	887	887	9	9	139	139	8	8	30	26	4	4	718	642	1,795	1,715	95.54
PUNO	842	811	18	18	281	281	36	36	163	139	31	24	680	652	2,051	1,961	95.61
SAN MARTÍN	199	195	3	3	65	65	26	23	128	106	3	3	321	314	745	709	95.17
SANTA	754	741	48	48	174	174	21	21	80	63	19	17	701	677	1,797	1,741	96.88
SULLANA	1253	1253			60	60	4	4	19	17	72	72	571	571	1,979	1,977	99.90
TACNA	539	539			164	164	6	6	12	10	14	12	601	598	1,336	1,329	99.48
TUMBES	298	297	1	1	69	69	8	8	8	2	5	3	218	218	607	598	98.52
UCAYALI	634	627	55	55	149	149	21	21	15	15	41	41	477	468	1,392	1,376	98.85
VENTANILLA	106	105	45	44	47	47			172	134	4	3	229	182	603	515	85.41
<b>TOTAL</b>	<b>18,318</b>	<b>18,004</b>	<b>2,212</b>	<b>2,123</b>	<b>4,352</b>	<b>4,351</b>	<b>546</b>	<b>527</b>	<b>3,822</b>	<b>3,395</b>	<b>488</b>	<b>453</b>	<b>20,173</b>	<b>19,256</b>	<b>49,911</b>	<b>48,109</b>	<b>96.39</b>

NOTA: Información obtenida de los servidores principales de Base de Datos de cada Distrito Fiscal de enero a setiembre 2017

(\*) Sólo Fiscalías Superiores Especializadas en Corrupción de Funcionarios con NCPP

(\*\*) Sólo Fiscalías Superiores Especializadas en Corrupción de Funcionarios, Crimen Organizado y En Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio con NCPP

FUENTE: Sistema de Gestión Fiscal - SGF

ELABORADO: Oficina de Racionalización y Estadística - ORACE

## **ANEXO Nro. 04**



**UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO**  
**FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS**



**TESIS**

**“El abuso de la autonomía del Ministerio Público y la garantía del debido proceso a  
través del control constitucional”**

**CUESTIONARIO DE ENCUESTA DIRIGIDA A JUECES, ESPECIALISTAS LEGALES Y ABOGADOS**

Es grato dirigirnos a vuestra persona, con la intención de saludarlo y a la vez requerir de su valioso tiempo para la absolución de los cuestionamientos que se le presentan a continuación, cuyos resultados se tomaran como un aporte importante para la investigación académica que realizamos.

**I. Abuso de la autonomía del Ministerio Público.**

1. ¿Considera Ud. que el Ministerio Público viene haciendo un uso inadecuado de su autonomía y por ende proyecta una mala imagen en la sociedad como ente investigador y persecutor del delito?:
  - a. Sí
  - b. No
  
2. ¿Cuál cree usted, es la razón o razones por las que la labor de los fiscales se torna ineficiente, lo cual acarrea a que exista un uso indiscriminado del archivo de las carpetas fiscales y consecuentemente el descontento de la sociedad?
  - a. Incapacidad del personal
  - b. Falta de presupuesto
  - c. Extralimitación de la autonomía procesal.
  - d. No sabe.

3. ¿Considera usted que, la labor de los fiscales debe ser sometida a un control constitucional posterior y de ser el caso debe existir una regulación expresa en nuestro ordenamiento jurídico?
  - a. Si
  - b. No

**II.** La garantía del debido proceso a través del control constitucional.

1. ¿Cómo definiría usted al debido proceso?
  - a. Como un principio.
  - b. Como un Derecho.
  - c. Como una garantía constitucional.
  - d. No sabe.
2. ¿Cómo cree usted que se garantizaría adecuadamente el debido proceso de las actuaciones del Ministerio Público?
  - a. A través del control constitucional
  - b. A través del control interno del Ministerio Público.
  - c. A través de los recursos impugnativos.
3. ¿Si sometemos a un control posterior las disposiciones expedidas por los fiscales, cree usted que, se estaría vulnerando su autonomía establecida constitucionalmente?
  - c. Si
  - d. No
  - e. Tal vez



## **ANEXO Nro. 05**



**TESIS:**

**"El abuso de la autonomía del Ministerio Público y la garantía del debido proceso a través del control constitucional"**

**CUESTIONARIO DE ENCUESTA DIRIGIDA A LOS FISCALES DEL DISTRITO FISCAL DE LAMBAYEQUE**

Es grato dirigirnos a vuestra persona, con la intención de saludarlo y a la vez requerir de su valioso tiempo para la absolución de los cuestionamientos que se le presentan a continuación, cuyos resultados se tomaran como un aporte importante para la investigación académica que realizamos.

1. ¿Considera usted que el Ministerio Público asigna los recursos suficientes a los fiscales para cumplir a cabalidad con cada uno de los procedimientos correspondientes y realizar las investigaciones de delitos a su cargo?
  - a) Si
  - b) No
  - ☒ c) Tal vez
2. ¿Existe una colaboración eficiente por parte del equipo multidisciplinario adscrito al Ministerio Público, así como por parte del personal de la Policía Nacional del Perú, a efectos de realizar una investigación del delito exitosa?
  - ☒ a) Sí
  - b) No
  - c) Tal vez
3. ¿Considera usted que la carga fiscal de las investigaciones a su cargo perjudica el cabal cumplimiento de la realización de las diligencias pertinentes para determinar la existencia o no de un delito?
  - a) Si
  - b) No
  - ☒ c) Tal vez
4. ¿Considera usted que es suficiente el personal que labora en este despacho?
  - a) Si
  - ☒ b) No

c) Tal vez

5. ¿Cómo considera usted el material logístico para plantear una adecuada estrategia de investigación?

a) Suficiente

b) Insuficiente

☒ c) Regular

6. ¿Cuál cree usted, es la razón o razones por las que la labor de los fiscales se tornaría ineficiente?.

a. Limitado número de personal

b. Falta de presupuesto

c. Extralimitación de la autonomía procesal.

☒ d. Excesiva carga procesal.

e. No sabe.

7. ¿Considera que una investigación ineficaz e inoportuna, ocasionaría vulneración de la garantía del debido proceso y con ello se cometa abuso por parte de los fiscales ya sea respecto de los imputados y aún más de los agraviados?

a) Si

b) No

☒ c) Tal vez

8. ¿Considera usted que, la labor de los fiscales debe ser sometida a un control constitucional posterior y de ser el caso debe existir una regulación expresa en nuestro ordenamiento jurídico?

a) Si

b) No

☒ c) Tal vez

9. ¿Cómo cree usted que se garantizaría adecuadamente el debido proceso en las actuaciones del Ministerio Público como titular del ejercicio de la acción penal pública?

a. A través del control constitucional

b. A través del control interno del Ministerio Público.

☒ c. A través de los recursos impugnativos.

10. ¿Si sometemos a un control posterior las disposiciones expedidas por los fiscales, cree usted que, se estaría vulnerando su autonomía establecida constitucionalmente?

a. Si

b. No

☒ c. Tal vez



**TESIS:**

**"El abuso de la autonomía del Ministerio Público y la garantía del debido proceso a través del control constitucional"**

**CUESTIONARIO DE ENCUESTA DIRIGIDA A LOS FISCALES DEL DISTRITO FISCAL DE LAMBAYEQUE**

Es grato dirigirnos a vuestra persona, con la intención de saludarlo y a la vez requerir de su valioso tiempo para la absolución de los cuestionamientos que se le presentan a continuación, cuyos resultados se tomaran como un aporte importante para la investigación académica que realizamos.

1. ¿Considera usted que el Ministerio Público asigna los recursos suficientes a los fiscales para cumplir a cabalidad con cada uno de los procedimientos correspondientes y realizar las investigaciones de delitos a su cargo?
  - a) Si
  - ☒ b) No
  - c) Tal vez
2. ¿Existe una colaboración eficiente por parte del equipo multidisciplinario adscrito al Ministerio Público, así como por parte del personal de la Policía Nacional del Perú, a efectos de realizar una investigación del delito exitosa?
  - ☒ a) Sí
  - b) No
  - c) Tal vez
3. ¿Considera usted que la carga fiscal de las investigaciones a su cargo perjudica el cabal cumplimiento de la realización de las diligencias pertinentes para determinar la existencia o no de un delito?
  - ☒ a) Si
  - b) No
  - c) Tal vez
4. ¿Considera usted que es suficiente el personal que labora en este despacho?
  - a) Si
  - ☒ b) No



c) Tal vez

5. ¿Cómo considera usted el material logístico para plantear una adecuada estrategia de investigación?

a) Suficiente

☒ b) Insuficiente

c) Regular

6. ¿Cuál cree usted, es la razón o razones por las que la labor de los fiscales se tornaría ineficiente?.

a. Limitado número de personal

b. Falta de presupuesto

c. Extralimitación de la autonomía procesal.

☒ d. Excesiva carga procesal.

e. No sabe.

7. ¿Considera que una investigación ineficaz e inoportuna, ocasionaría vulneración de la garantía del debido proceso y con ello se cometa abuso por parte de los fiscales ya sea respecto de los imputados y aún más de los agraviados?

☒ a) Si

b) No

c) Tal vez

8. ¿Considera usted que, la labor de los fiscales debe ser sometida a un control constitucional posterior y de ser el caso debe existir una regulación expresa en nuestro ordenamiento jurídico?

a) Si

☒ b) No

c) Tal vez

9. ¿Cómo cree usted que se garantizaría adecuadamente el debido proceso en las actuaciones del Ministerio Público como titular del ejercicio de la acción penal pública?

a. A través del control constitucional

☒ b. A través del control interno del Ministerio Público.

c. A través de los recursos impugnativos.

10. ¿Si sometemos a un control posterior las disposiciones expedidas por los fiscales, cree usted que, se estaría vulnerando su autonomía establecida constitucionalmente?

a. Si

☒ b. No

c. Tal vez



**TESIS:**

**"El abuso de la autonomía del Ministerio Público y la garantía del debido proceso a través del control constitucional"**

**CUESTIONARIO DE ENCUESTA DIRIGIDA A LOS FISCALES DEL DISTRITO FISCAL DE LAMBAYEQUE**

Es grato dirigirnos a vuestra persona, con la intención de saludarlo y a la vez requerir de su valioso tiempo para la absolución de los cuestionamientos que se le presentan a continuación, cuyos resultados se tomaran como un aporte importante para la investigación académica que realizamos.

1. ¿Considera usted que el Ministerio Público asigna los recursos suficientes a los fiscales para cumplir a cabalidad con cada uno de los procedimientos correspondientes y realizar las investigaciones de delitos a su cargo?  
a) Si  
☒ b) No  
c) Tal vez
2. ¿Existe una colaboración eficiente por parte del equipo multidisciplinario adscrito al Ministerio Público, así como por parte del personal de la Policía Nacional del Perú, a efectos de realizar una investigación del delito exitosa?  
a) Sí  
☒ b) No  
c) Tal vez
3. ¿Considera usted que la carga fiscal de las investigaciones a su cargo perjudica el cabal cumplimiento de la realización de las diligencias pertinentes para determinar la existencia o no de un delito?  
☒ a) Si  
b) No  
c) Tal vez
4. ¿Considera usted que es suficiente el personal que labora en este despacho?  
a) Si  
☒ b) No

c) Tal vez

5. ¿Cómo considera usted el material logístico para plantear una adecuada estrategia de investigación?

a) Suficiente

☒ b) Insuficiente

c) Regular

6. ¿Cuál cree usted, es la razón o razones por las que la labor de los fiscales se tornaría ineficiente?.

a. Limitado número de personal

b. Falta de presupuesto

c. Extralimitación de la autonomía procesal.

☒ d. Excesiva carga procesal.

e. No sabe.

7. ¿Considera que una investigación ineficaz e inoportuna, ocasionaría vulneración de la garantía del debido proceso y con ello se cometa abuso por parte de los fiscales ya sea respecto de los imputados y aún más de los agraviados?

a) Si

☒ b) No

c) Tal vez

8. ¿Considera usted que, la labor de los fiscales debe ser sometida a un control constitucional posterior y de ser el caso debe existir una regulación expresa en nuestro ordenamiento jurídico?

a) Si

☒ b) No

c) Tal vez

9. ¿Cómo cree usted que se garantizaría adecuadamente el debido proceso en las actuaciones del Ministerio Público como titular del ejercicio de la acción penal pública?

a. A través del control constitucional

b. A través del control interno del Ministerio Público.

☒ c. A través de los recursos impugnativos.

10. ¿Si sometemos a un control posterior las disposiciones expedidas por los fiscales, cree usted que, se estaría vulnerando su autonomía establecida constitucionalmente?

☒ a. Si

b. No

c. Tal vez





**TESIS:**

**"El abuso de la autonomía del Ministerio Público y la garantía del debido proceso a través del control constitucional"**

**CUESTIONARIO DE ENCUESTA DIRIGIDA A LOS FISCALES DEL DISTRITO FISCAL DE LAMBAYEQUE**

Es grato dirigirnos a vuestra persona, con la intención de saludarlo y a la vez requerir de su valioso tiempo para la absolución de los cuestionamientos que se le presentan a continuación, cuyos resultados se tomaran como un aporte importante para la investigación académica que realizamos.

1. ¿Considera usted que el Ministerio Público asigna los recursos suficientes a los fiscales para cumplir a cabalidad con cada uno de los procedimientos correspondientes y realizar las investigaciones de delitos a su cargo?
  - a) Si
  - ☒ b) No
  - c) Tal vez
2. ¿Existe una colaboración eficiente por parte del equipo multidisciplinario adscrito al Ministerio Público, así como por parte del personal de la Policía Nacional del Perú, a efectos de realizar una investigación del delito exitosa?
  - a) Sí
  - b) No
  - ☒ c) Tal vez
3. ¿Considera usted que la carga fiscal de las investigaciones a su cargo perjudica el cabal cumplimiento de la realización de las diligencias pertinentes para determinar la existencia o no de un delito?
  - ☒ a) Si
  - b) No
  - c) Tal vez
4. ¿Considera usted que es suficiente el personal que labora en este despacho?
  - a) Si
  - ☒ b) No

- c) Tal vez
5. ¿Cómo considera usted el material logístico para plantear una adecuada estrategia de investigación?
- a) Suficiente
- ☒ b) Insuficiente
- c) Regular
6. ¿Cuál cree usted, es la razón o razones por las que la labor de los fiscales se tornaría ineficiente?.
- a. Limitado número de personal
- b. Falta de presupuesto
- c. Extralimitación de la autonomía procesal.
- ☒ d. Excesiva carga procesal.
- e. No sabe.
7. ¿Considera que una investigación ineficaz e inoportuna, ocasionaría vulneración de la garantía del debido proceso y con ello se cometa abuso por parte de los fiscales ya sea respecto de los imputados y aún más de los agraviados?
- ☒ a) Si
- b) No
- c) Tal vez
8. ¿Considera usted que, la labor de los fiscales debe ser sometida a un control constitucional posterior y de ser el caso debe existir una regulación expresa en nuestro ordenamiento jurídico?
- a) Si
- ☒ b) No
- c) Tal vez
9. ¿Cómo cree usted que se garantizaría adecuadamente el debido proceso en las actuaciones del Ministerio Público como titular del ejercicio de la acción penal pública?
- a. A través del control constitucional
- b. A través del control interno del Ministerio Público.
- ☒ c. A través de los recursos impugnativos.
10. ¿Si sometemos a un control posterior las disposiciones expedidas por los fiscales, cree usted que, se estaría vulnerando su autonomía establecida constitucionalmente?
- a. Si
- ☒ b. No
- c. Tal vez





**TESIS:**

**"El abuso de la autonomía del Ministerio Público y la garantía del debido proceso a través del control constitucional"**

**CUESTIONARIO DE ENCUESTA DIRIGIDA A LOS FISCALES DEL DISTRITO FISCAL DE LAMBAYEQUE**

Es grato dirigirnos a vuestra persona, con la intención de saludarlo y a la vez requerir de su valioso tiempo para la absolución de los cuestionamientos que se le presentan a continuación, cuyos resultados se tomaran como un aporte importante para la investigación académica que realizamos.

1. ¿Considera usted que el Ministerio Público asigna los recursos suficientes a los fiscales para cumplir a cabalidad con cada uno de los procedimientos correspondientes y realizar las investigaciones de delitos a su cargo?
  - a) Si
  - ☒ b) No
  - c) Tal vez
2. ¿Existe una colaboración eficiente por parte del equipo multidisciplinario adscrito al Ministerio Público, así como por parte del personal de la Policía Nacional del Perú, a efectos de realizar una investigación del delito exitosa?
  - a) Sí
  - ☒ b) No
  - c) Tal vez
3. ¿Considera usted que la carga fiscal de las investigaciones a su cargo perjudica el cabal cumplimiento de la realización de las diligencias pertinentes para determinar la existencia o no de un delito?
  - ☒ a) Si
  - b) No
  - c) Tal vez
4. ¿Considera usted que es suficiente el personal que labora en este despacho?
  - a) Si
  - ☒ b) No

c) Tal vez

5. ¿Cómo considera usted el material logístico para plantear una adecuada estrategia de investigación?

a) Suficiente

☒ b) Insuficiente

c) Regular

6. ¿Cuál cree usted, es la razón o razones por las que la labor de los fiscales se tornaría ineficiente?.

a. Limitado número de personal

b. Falta de presupuesto

c. Extralimitación de la autonomía procesal.

☒ d. Excesiva carga procesal.

e. No sabe.

7. ¿Considera que una investigación ineficaz e inoportuna, ocasionaría vulneración de la garantía del debido proceso y con ello se cometa abuso por parte de los fiscales ya sea respecto de los imputados y aún más de los agraviados?

a) Si

☒ b) No

c) Tal vez

8. ¿Considera usted que, la labor de los fiscales debe ser sometida a un control constitucional posterior y de ser el caso debe existir una regulación expresa en nuestro ordenamiento jurídico?

a) Si

☒ b) No

c) Tal vez

9. ¿Cómo cree usted que se garantizaría adecuadamente el debido proceso en las actuaciones del Ministerio Público como titular del ejercicio de la acción penal pública?

a. A través del control constitucional

b. A través del control interno del Ministerio Público.

☒ c. A través de los recursos impugnativos.

10. ¿Si sometemos a un control posterior las disposiciones expedidas por los fiscales, cree usted que, se estaría vulnerando su autonomía establecida constitucionalmente?

☒ a) Si

b. No

c. Tal vez



**TESIS:**

**"El abuso de la autonomía del Ministerio Público y la garantía del debido proceso a través del control constitucional"**

**CUESTIONARIO DE ENCUESTA DIRIGIDA A LOS FISCALES DEL DISTRITO FISCAL DE LAMBAYEQUE**

Es grato dirigirnos a vuestra persona, con la intención de saludarlo y a la vez requerir de su valioso tiempo para la absolución de los cuestionamientos que se le presentan a continuación, cuyos resultados se tomaran como un aporte importante para la investigación académica que realizamos.

1. ¿Considera usted que el Ministerio Público asigna los recursos suficientes a los fiscales para cumplir a cabalidad con cada uno de los procedimientos correspondientes y realizar las investigaciones de delitos a su cargo?
  - a) Si
  - ☒ b) No
  - c) Tal vez
2. ¿Existe una colaboración eficiente por parte del equipo multidisciplinario adscrito al Ministerio Público, así como por parte del personal de la Policía Nacional del Perú, a efectos de realizar una investigación del delito exitosa?
  - a) Sí
  - b) No
  - ☒ c) Tal vez
3. ¿Considera usted que la carga fiscal de las investigaciones a su cargo perjudica el cabal cumplimiento de la realización de las diligencias pertinentes para determinar la existencia o no de un delito?
  - a) Si
  - ☒ b) No
  - c) Tal vez
4. ¿Considera usted que es suficiente el personal que labora en este despacho?
  - a) Si
  - ☒ b) No



c) Tal vez

5. ¿Cómo considera usted el material logístico para plantear una adecuada estrategia de investigación?

a) Suficiente

☒ b) Insuficiente

c) Regular

6. ¿Cuál cree usted, es la razón o razones por las que la labor de los fiscales se tornaría ineficiente?.

a. Limitado número de personal

b. Falta de presupuesto

c. Extralimitación de la autonomía procesal.

☒ d. Excesiva carga procesal.

e. No sabe.

7. ¿Considera que una investigación ineficaz e inoportuna, ocasionaría vulneración de la garantía del debido proceso y con ello se cometa abuso por parte de los fiscales ya sea respecto de los imputados y aún más de los agraviados?

☒ a) Si

b) No

c) Tal vez

8. ¿Considera usted que, la labor de los fiscales debe ser sometida a un control constitucional posterior y de ser el caso debe existir una regulación expresa en nuestro ordenamiento jurídico?

☒ a) Si

b) No

c) Tal vez

9. ¿Cómo cree usted que se garantizaría adecuadamente el debido proceso en las actuaciones del Ministerio Público como titular del ejercicio de la acción penal pública?

a. A través del control constitucional

b. A través del control interno del Ministerio Público.

☒ c. A través de los recursos impugnativos.

10. ¿Si sometemos a un control posterior las disposiciones expedidas por los fiscales, cree usted que, se estaría vulnerando su autonomía establecida constitucionalmente?

a. Si

☒ b. No

c. Tal vez



**TESIS:**

**"El abuso de la autonomía del Ministerio Público y la garantía del debido proceso a través del control constitucional"**

**CUESTIONARIO DE ENCUESTA DIRIGIDA A LOS FISCALES DEL DISTRITO FISCAL DE LAMBAYEQUE**

Es grato dirigirnos a vuestra persona, con la intención de saludarlo y a la vez requerir de su valioso tiempo para la absolución de los cuestionamientos que se le presentan a continuación, cuyos resultados se tomaran como un aporte importante para la investigación académica que realizamos.

1. ¿Considera usted que el Ministerio Público asigna los recursos suficientes a los fiscales para cumplir a cabalidad con cada uno de los procedimientos correspondientes y realizar las investigaciones de delitos a su cargo?
  - a) Si
  - b) No
  - c) Tal vez
2. ¿Existe una colaboración eficiente por parte del equipo multidisciplinario adscrito al Ministerio Público, así como por parte del personal de la Policía Nacional del Perú, a efectos de realizar una investigación del delito exitosa?
  - a) Sí
  - b) No
  - c) Tal vez
3. ¿Considera usted que la carga fiscal de las investigaciones a su cargo perjudica el cabal cumplimiento de la realización de las diligencias pertinentes para determinar la existencia o no de un delito?
  - a) Si
  - b) No
  - c) Tal vez
4. ¿Considera usted que es suficiente el personal que labora en este despacho?
  - a) Si
  - b) No

- c) Tal vez
5. ¿Cómo considera usted el material logístico para plantear una adecuada estrategia de investigación?
- a) Suficiente
- b) Insuficiente
- c) Regular
6. ¿Cuál cree usted, es la razón o razones por las que la labor de los fiscales se tornaría ineficiente?.
- a. Limitado número de personal
- b. Falta de presupuesto
- c. Extralimitación de la autonomía procesal.
- d. Excesiva carga procesal.
- e. No sabe.
7. ¿Considera que una investigación ineficaz e inoportuna, ocasionaría vulneración de la garantía del debido proceso y con ello se cometa abuso por parte de los fiscales ya sea respecto de los imputados y aún más de los agraviados?
- a) Si
- b) No
- c) Tal vez
8. ¿Considera usted que, la labor de los fiscales debe ser sometida a un control constitucional posterior y de ser el caso debe existir una regulación expresa en nuestro ordenamiento jurídico?
- a) Si
- b) No
- c) Tal vez
9. ¿Cómo cree usted que se garantizaría adecuadamente el debido proceso en las actuaciones del Ministerio Público como titular del ejercicio de la acción penal pública?
- a. A través del control constitucional
- b. A través del control interno del Ministerio Público.
- c. A través de los recursos impugnativos.
10. ¿Si sometemos a un control posterior las disposiciones expedidas por los fiscales, cree usted que, se estaría vulnerando su autonomía establecida constitucionalmente?
- a. Si
- b. No
- c. Tal vez





**TESIS:**

**"El abuso de la autonomía del Ministerio Público y la garantía del debido proceso a través del control constitucional"**

**CUESTIONARIO DE ENCUESTA DIRIGIDA A LOS FISCALES DEL DISTRITO FISCAL DE LAMBAYEQUE**

Es grato dirigirnos a vuestra persona, con la intención de saludarlo y a la vez requerir de su valioso tiempo para la absolución de los cuestionamientos que se le presentan a continuación, cuyos resultados se tomaran como un aporte importante para la investigación académica que realizamos.

1. ¿Considera usted que el Ministerio Público asigna los recursos suficientes a los fiscales para cumplir a cabalidad con cada uno de los procedimientos correspondientes y realizar las investigaciones de delitos a su cargo?
  - a) Si
  - b) No
  - ☒ c) Tal vez
2. ¿Existe una colaboración eficiente por parte del equipo multidisciplinario adscrito al Ministerio Público, así como por parte del personal de la Policía Nacional del Perú, a efectos de realizar una investigación del delito exitosa?
  - a) Sí
  - b) No
  - ☒ c) Tal vez
3. ¿Considera usted que la carga fiscal de las investigaciones a su cargo perjudica el cabal cumplimiento de la realización de las diligencias pertinentes para determinar la existencia o no de un delito?
  - a) Si
  - b) No
  - ☒ c) Tal vez
4. ¿Considera usted que es suficiente el personal que labora en este despacho?
  - a) Si
  - ☒ b) No

- c) Tal vez
5. ¿Cómo considera usted el material logístico para plantear una adecuada estrategia de investigación?
- a) Suficiente
  - b) Insuficiente
  - ☒ c) Regular
6. ¿Cuál cree usted, es la razón o razones por las que la labor de los fiscales se tornaría ineficiente?.
- a. Limitado número de personal
  - b. Falta de presupuesto
  - c. Extralimitación de la autonomía procesal.
  - ☒ d. Excesiva carga procesal.
  - e. No sabe.
7. ¿Considera que una investigación ineficaz e inoportuna, ocasionaría vulneración de la garantía del debido proceso y con ello se cometa abuso por parte de los fiscales ya sea respecto de los imputados y aún más de los agraviados?
- ☒ a) Si
  - b) No
  - c) Tal vez
8. ¿Considera usted que, la labor de los fiscales debe ser sometida a un control constitucional posterior y de ser el caso debe existir una regulación expresa en nuestro ordenamiento jurídico?
- ☒ a) Si
  - b) No
  - c) Tal vez
9. ¿Cómo cree usted que se garantizaría adecuadamente el debido proceso en las actuaciones del Ministerio Público como titular del ejercicio de la acción penal pública?
- a. A través del control constitucional
  - ☒ b. A través del control interno del Ministerio Público.
  - c. A través de los recursos impugnativos.
10. ¿Si sometemos a un control posterior las disposiciones expedidas por los fiscales, cree usted que, se estaría vulnerando su autonomía establecida constitucionalmente?
- a. Si
  - b. No
  - ☒ c. Tal vez



**TESIS:**

**"El abuso de la autonomía del Ministerio Público y la garantía del debido proceso a través del control constitucional"**

**CUESTIONARIO DE ENCUESTA DIRIGIDA A LOS FISCALES DEL DISTRITO FISCAL DE LAMBAYEQUE**

Es grato dirigirnos a vuestra persona, con la intención de saludarlo y a la vez requerir de su valioso tiempo para la absolución de los cuestionamientos que se le presentan a continuación, cuyos resultados se tomaran como un aporte importante para la investigación académica que realizamos.

1. ¿Considera usted que el Ministerio Público asigna los recursos suficientes a los fiscales para cumplir a cabalidad con cada uno de los procedimientos correspondientes y realizar las investigaciones de delitos a su cargo?
  - a) Si
  - ☒ b) No
  - c) Tal vez
2. ¿Existe una colaboración eficiente por parte del equipo multidisciplinario adscrito al Ministerio Público, así como por parte del personal de la Policía Nacional del Perú, a efectos de realizar una investigación del delito exitosa?
  - a) Sí
  - ☒ b) No
  - c) Tal vez
3. ¿Considera usted que la carga fiscal de las investigaciones a su cargo perjudica el cabal cumplimiento de la realización de las diligencias pertinentes para determinar la existencia o no de un delito?
  - a) Si
  - b) No
  - ☒ c) Tal vez
4. ¿Considera usted que es suficiente el personal que labora en este despacho?
  - a) Si
  - ☒ b) No



c) Tal vez

5. ¿Cómo considera usted el material logístico para plantear una adecuada estrategia de investigación?

a) Suficiente

b) Insuficiente

☒ Regular

6. ¿Cuál cree usted, es la razón o razones por las que la labor de los fiscales se tornaría ineficiente?.

a. Limitado número de personal

b. Falta de presupuesto

c. Extralimitación de la autonomía procesal.

☒ Excesiva carga procesal.

e. No sabe.

7. ¿Considera que una investigación ineficaz e inoportuna, ocasionaría vulneración de la garantía del debido proceso y con ello se cometa abuso por parte de los fiscales ya sea respecto de los imputados y aún más de los agraviados?

a) Si

b) No

☒ Tal vez

8. ¿Considera usted que, la labor de los fiscales debe ser sometida a un control constitucional posterior y de ser el caso debe existir una regulación expresa en nuestro ordenamiento jurídico?

a) Si

b) No

☒ Tal vez

9. ¿Cómo cree usted que se garantizaría adecuadamente el debido proceso en las actuaciones del Ministerio Público como titular del ejercicio de la acción penal pública?

a. A través del control constitucional

☒ A través del control interno del Ministerio Público.

c. A través de los recursos impugnativos.

10. ¿Si sometemos a un control posterior las disposiciones expedidas por los fiscales, cree usted que, se estaría vulnerando su autonomía establecida constitucionalmente?

a. Si

☒ No

c. Tal vez



UNIVERSIDAD NACIONAL "PEDRO RUIZ GALLO"  
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS  
ESCUELA DE DERECHO



TESIS:

**"El abuso de la autonomía del Ministerio Público y la garantía del debido proceso a través del control constitucional"**

**CUESTIONARIO DE ENCUESTA DIRIGIDA A LOS FISCALES DEL DISTRITO FISCAL DE LAMBAYEQUE**

Es grato dirigirnos a vuestra persona, con la intención de saludarlo y a la vez requerir de su valioso tiempo para la absolución de los cuestionamientos que se le presentan a continuación, cuyos resultados se tomaran como un aporte importante para la investigación académica que realizamos.

1. ¿Considera usted que el Ministerio Público asigna los recursos suficientes a los fiscales para cumplir a cabalidad con cada uno de los procedimientos correspondientes y realizar las investigaciones de delitos a su cargo?
  - a) Si
  - ☒ b) No
  - c) Tal vez
2. ¿Existe una colaboración eficiente por parte del equipo multidisciplinario adscrito al Ministerio Público, así como por parte del personal de la Policía Nacional del Perú, a efectos de realizar una investigación del delito exitosa?
  - a) Sí
  - ☒ b) No
  - c) Tal vez
3. ¿Considera usted que la carga fiscal de las investigaciones a su cargo perjudica el cabal cumplimiento de la realización de las diligencias pertinentes para determinar la existencia o no de un delito?
  - ☒ a) Si
  - b) No
  - c) Tal vez
4. ¿Considera usted que es suficiente el personal que labora en este despacho?
  - a) Si
  - ☒ b) No



c) Tal vez

5. ¿Cómo considera usted el material logístico para plantear una adecuada estrategia de investigación?

a) Suficiente

☒ b) Insuficiente

c) Regular

6. ¿Cuál cree usted, es la razón o razones por las que la labor de los fiscales se tornaría ineficiente?.

a. Limitado número de personal

b. Falta de presupuesto

c. Extralimitación de la autonomía procesal.

☒ d. Excesiva carga procesal.

e. No sabe.

7. ¿Considera que una investigación ineficaz e inoportuna, ocasionaría vulneración de la garantía del debido proceso y con ello se cometa abuso por parte de los fiscales ya sea respecto de los imputados y aún más de los agraviados?

a) Si

☒ b) No

c) Tal vez

8. ¿Considera usted que, la labor de los fiscales debe ser sometida a un control constitucional posterior y de ser el caso debe existir una regulación expresa en nuestro ordenamiento jurídico?

a) Si

☒ b) No

c) Tal vez

9. ¿Cómo cree usted que se garantizaría adecuadamente el debido proceso en las actuaciones del Ministerio Público como titular del ejercicio de la acción penal pública?

a. A través del control constitucional

b. A través del control interno del Ministerio Público. /

c. A través de los recursos impugnativos.

10. ¿Si sometemos a un control posterior las disposiciones expedidas por los fiscales, cree usted que, se estaría vulnerando su autonomía establecida constitucionalmente?

☒ a. Si

b. No

c. Tal vez

## **ANEXO Nro. 06**



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	
OTDA	
FOJAS	063

EXP. N.º 2725-2008-PHC/TC  
LIMA  
ROBERTO BORIS CHAUCA TEMOCHE  
Y OTROS

## SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 22 días del mes de setiembre de 2008, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia

### ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Roberto Boris Chauca Temoche contra la resolución de la Primera Sala Penal para Procesados con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 277, su fecha 14 de abril de 2008, que declara infundada la demanda de autos.

### ANTECEDENTES

Con fecha 4 de febrero de 2008, el recurrente interpone demanda de hábeas corpus por derecho propio y a favor de doña Rosa María de Guadalupe Zamudio Mayor, doña Miriam Ivone González Grillo, don Herbert Helmund Fiedler Villalonga, doña Eliana Antonieta Pastor Paredes, don Miguel Rojas Martínez, y don Artemio Rodríguez Rodríguez, contra la Fiscal de la Sexta Fiscalía Provincial Penal Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, doña Isabel Cristina Huamán García, el Fiscal Superior de la Cuarta Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, don Pedro Miguel Ángulo Arana y contra don Daniel López Gutiérrez, representante de la Compañía Minera Casapalca S.A.

Sostiene el recurrente que él y los favorecidos son trabajadores de la empresa Sociedad Minera Corona S.A., y han sido denunciados arbitrariamente por la Compañía Minera Casapalca S.A., dando inicio a una irregular investigación preliminar fiscal por la presunta comisión de los delitos asociación ilícita para delinquir, corrupción de funcionarios, fraude procesal y lavados de activos, hechos que anteriormente ya habían sido investigados por la Décimo Tercera Fiscalía Provincial Penal de Lima, que emitió una resolución de no haber lugar a formalizar denuncia penal, decisión fiscal que fue confirmada por la Quinta Fiscalía Penal Superior. Alega el demandante que, esta situación vulnera sus derechos constitucionales a obtener una resolución fundada en derecho, a la prohibición de una persecución penal múltiple (*Ne bis in idem*), a la libertad individual.





TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	
OTDA	
FOJAS	064

Solicita el actor que, se declare la nulidad de la resolución del 28 de setiembre de 2007, dictada por el Fiscal Superior demandado, por la que accedió al pedido de la minera Casapalca para que el caso sea conocido por la fiscalía anticorrupción, y así también, se deje sin efecto la resolución de fecha 21 de noviembre de 2007, dictado por la Fiscal Provincial Penal demandada, que dio inicio a la irregular investigación preliminar y todo acto derivada de ésta.

Realizada la investigación sumaria, el Fiscal Superior emplazado rinde su declaración explicativa sosteniendo que no es verdad que emitió resolución favoreciendo a la minera Casapalca, a fin que la denuncia contra los demandantes fuera vista por el sistema anticorrupción, sino que decidió ello a fin de evitar la indefensión de los denunciantes. Asimismo, la Fiscal Penal demandada declaró que abrió investigación policial contra los demandantes en cumplimiento de la resolución fiscal superior que le ordena abrir investigación, y de su Ley Orgánica. El demandante, por su parte, ratificó los términos de su demanda. De otro lado, el demandado representante de la compañía minera Casapalca sostuvo en su declaración que las personas que son materia de la segunda investigación fiscal, son distintas a las que fueron objeto de la denuncia que fue archivada por el Ministerio Público.

El Trigésimo Juzgado Especializado en lo Penal de Lima, con fecha 7 de marzo de 2008, declara fundada la demanda estimando que al tomar conocimiento el órgano emplazado que ya se había archivado una denuncia por los mismos hechos debió inmediatamente desestimarse la denuncia posterior.

La recurrida revocó la apelada y declaró infundada la demanda por estimar que no existe doble persecución penal contra los demandantes, por cuanto éstos y las personas que fueron objeto de la denuncia archivada por el Ministerio Público, no son las mismas.

## FUNDAMENTOS

### Precisión del petitorio de la demanda

1. El accionante pretende que el Tribunal Constitucional ordene la nulidad de la resolución fiscal que dispone el inicio de una investigación preliminar contra él y los beneficiarios, por la presunta comisión del delito de asociación ilícita para delinquir y otros, así como la nulidad de todos los actos que se deriven de esta decisión fiscal, porque la misma se fundamenta en hechos que anteriormente fueron investigados por el Ministerio Público, que no halló mérito para formular denuncia penal, y, consecuentemente, dispuso su archivamiento definitivo. Tal situación configuraría un atentado al principio



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	
OTDA	
FOJAS	065

3

constitucional *Ne bis in idem* y una amenaza al derecho a la libertad personal de los afectados.

### El control constitucional de los actos del Ministerio Público

2. Considerando que el petitorio constitucional del recurrente está orientado a cuestionar el procedimiento de investigación preliminar ordenado por la fiscalía emplazada, se procederá a analizar de manera liminar, algunos aspectos relacionados con la actividad fiscal previa al inicio del proceso judicial penal.
3. La Constitución ha asignado al Ministerio Público una serie de funciones constitucionales, entre las cuales destaca la facultad de ejercitar la acción penal ya sea de oficio o a pedido de parte, tal como dispone el artículo 159.º, inciso 5, de la Constitución. Si bien es una facultad discrecional reconocida por el poder constituyente al Ministerio Público, **es obvio que esta facultad, en tanto que el Ministerio Público es un órgano constitucional constituido y por ende sometido a la Constitución, no puede ser ejercida, irrazonablemente, con desconocimiento de los principios y valores constitucionales, ni tampoco al margen del respeto de los derechos fundamentales.**
4. En realidad, ésta es una exigencia que se deriva de la naturaleza misma de nuestro Estado constitucional y democrático, si se considera que dos elementos caracterizadores de este tipo de Estado son la supremacía jurídica de la Constitución y la tutela de los derechos fundamentales. El primer elemento permite que la Constitución, establezca el marco jurídico dentro del cual se realiza el ejercicio de los poderes públicos y privados. Por su parte, la tutela de los derechos fundamentales, hace que éstos se erijan como auténticos límites al ejercicio del poder estatal, pero también de los particulares. En tal sentido, se puede señalar que el Estado constitucional se caracteriza, precisamente, por limitar y controlar el ejercicio arbitrario del poder del Estado y de los particulares.
5. En esta misma línea de limitación y control del poder público y privado, el artículo 200.º, inciso 1, de la Constitución establece que el proceso constitucional de hábeas corpus "(...) *procede ante el hecho u omisión de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos constitucionales conexos*". De acuerdo con ello, **la Constitución no ha excluido la posibilidad de realizar un razonable control constitucional de los actos del Ministerio Público**, pues ha previsto la procedencia del hábeas corpus contra cualquier autoridad, funcionario o persona que amenaza o vulnera el derecho a la libertad personal o los derechos conexos.





### Principio de interdicción de la arbitrariedad

6. Lo expuesto precedentemente tiene su fundamento, por otro lado, en el *Principio de interdicción de la arbitrariedad*, el cual es un principio y una garantía frente a la facultad discrecional que la Constitución ha reconocido al Ministerio Público. De ahí que se haya señalado en sentencia anterior (Cf. Exp. N.º 06167-2005-PHC/TC. FJ. 30. Caso: Fernando Cantuarias Salaverri) que *"el grado de discrecionalidad atribuido al fiscal para que realice la investigación sobre la base de la cual determinará si existen elementos suficientes que justifiquen su denuncia ante el juez penal, se encuentra sometida a principios constitucionales que proscriben: a) actividades caprichosas, vagas e infundadas desde una perspectiva jurídica; b) decisiones despóticas, tiránicas y carentes de toda fuente de legitimidad; y c) lo que es contrario a los principios de razonabilidad y proporcionalidad jurídica"*.

### Debido proceso y tutela jurisdiccional

- 7/ Asimismo, la posibilidad de que el Tribunal Constitucional realice el control constitucional de los actos del Ministerio Público tiene, de otro lado, su sustento en el derecho fundamental al debido proceso. Por ello, **el derecho al debido proceso despliega también su eficacia jurídica en el ámbito de la etapa prejurisdiccional de los procesos penales; es decir, en aquella fase del proceso penal en la cual al Ministerio Público le corresponde concretizar el mandato previsto en el artículo 159.º de la Constitución**. Claro está, las garantías previstas en el artículo 4º del Código Procesal Constitucional (debido proceso y tutela jurisdiccional), que no son sino la concretización de los principios y derechos previstos en el artículo 139.º de la Constitución, serán aplicables a la investigación fiscal previa al proceso penal siempre que sean compatibles con su naturaleza y fines, los mismos que deben ser interpretados de conformidad con el artículo 1.º de la Constitución, según el cual *"la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado"*.

### Principio de legalidad en la función constitucional

8. El fiscal actúa como defensor de la legalidad y representante de la causa pública en el proceso penal. En efecto, **el respeto de este principio implica que el Ministerio Público ejerce la acción penal por todo hecho que revista los caracteres de un delito, sin perder de vista que su labor se ejecuta en función de la justicia y teniendo como parámetros a la Constitución y a la ley**.



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	
OTDA	
FOJAS	067

5

### Hábeas corpus preventivo y procedimiento de investigación fiscal

9. Respecto al habeas corpus preventivo, este podrá ser utilizado en los casos en que, no habiéndose concretado la privación de la libertad, existe empero la amenaza cierta e inminente de que ello ocurra, con vulneración de la Constitución o la ley de la materia (Cf. Exp. N° 2633-2003-HC/TC. FJ. 6.d. Caso: Eleobina Mabel Aponte Chuquihuanca).
10. En el caso de autos, el demandante promueve esta modalidad de hábeas corpus porque considera que los magistrados emplazados "*al ordenar que se inicie y se prosiga con una investigación policial sobre hechos anteriormente investigados y archivados por el Ministerio Público, amenazan el constitucional derecho a la libertad individual de los favorecidos*" (Cf. Demanda, f. 14).
11. Sobre este punto, cabe precisar que si bien la actividad del fiscal está limitada por las atribuciones que le han sido conferidas directamente a la autoridad judicial, esto es, la imposición de medidas coercitivas, restrictivas de la libertad o derechos conexos; sin embargo, **la investigación que el Ministerio Público realice puede concluir en la formalización de una denuncia ante el Poder Judicial, la que podría servir de importante indicativo para el juez al momento de decidir sobre la apertura de instrucción penal, el cual podría ser inducido a error sobre la base de una denuncia abiertamente arbitraria, orientada a conseguir que el presunto autor del hecho delictivo sea procesado y aún encarcelado**, lo que representa, evidentemente, una amenaza cierta e inminente del derecho a la libertad individual o algún derecho conexo.

### Análisis del caso concreto

12. Dentro de este marco de consideraciones, este Tribunal aprecia que la controversia, en el presente caso, gira, fundamentalmente, en torno a la legitimidad misma de la investigación preliminar fiscal incoada contra los beneficiarios por resolución de fecha 21 de noviembre de 2007, no obstante, que la supuesta delictuosidad de los hechos que son materia de esta investigación, fueron alegados en una anterior denuncia, que fue archivada, en doble instancia, por el Ministerio Público.
13. *Prima facie*, si bien el proceso de hábeas corpus no tiene por objeto proteger en abstracto el derecho al debido proceso, en el presente caso, habida cuenta de que las vulneraciones aducidas no sólo implican la observancia del derecho al debido proceso, sino que la acusada ilegitimidad de la investigación preliminar fiscal habría colocado a





TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	
OTDA	
FOJAS	068

6

los favorecidos en una situación de desmedro de sus derechos constitucionales alegados, con incidencia sobre la libertad individual de los beneficiarios, argumento por el cual este Tribunal Constitucional tiene competencia, *ratione materiae*, para evaluar la legitimidad constitucional de los actos considerados lesivos.

14. Debe precisarse que, el Tribunal Constitucional en casos precedentes al de autos y mediante el proceso constitucional de hábeas corpus, sobre la vulneración al principio *Ne bis in idem*, ha configurado los contornos de esta garantía fundamental, estableciendo básicamente:
- a) La dimensión material y procesal del *Ne bis in idem*. La primera, según, el cual «nadie puede ser castigado dos veces por un mismo hecho», expresa la imposibilidad de que recaigan dos sanciones sobre el mismo sujeto por una misma infracción, puesto que tal proceder constituiría un exceso del poder sancionador. En su vertiente procesal, tal principio significa que «nadie pueda ser juzgado dos veces por los mismos hechos», es decir, que un mismo hecho no pueda ser objeto de dos procesos distintos o, si se quiere, que se inicien dos procesos con el mismo objeto contrario a las garantías propias del Estado de Derecho (Cf. Exp. N° 2050-2002-HC/TC. FJ. 19. Caso: Carlos Israel Ramos Colque).
  - b) Que el principio de *Ne bis in idem*, opera respecto a resoluciones que han adquirido la calidad de cosa juzgada. Se yergue como garantía de todo justiciable, a que las resoluciones que hayan puesto fin al proceso judicial no puedan ser recurridas mediante medios impugnatorios, ya sea porque estos han sido agotados o porque ha transcurrido el plazo para impugnarlas; y, a que el contenido de las resoluciones que hayan adquirido tal condición, no pueda ser dejado sin efecto ni modificado, sea por actos de otros poderes públicos, de terceros o, incluso, de los mismos órganos jurisdiccionales que resolvieron el caso en el que se dictó (Cf. Exp. N° 4587-2004-HC/TC. FJ 38. Caso: Santiago Martín Rivas).
  - c) El principio *Ne bis in idem* no se circunscribe a las sentencias definitivas, sino que comprende a todos los autos que ponen fin al proceso penal -al referirse, por ejemplo, a las resoluciones que importen el sobreseimiento definitivo de una causa- (Cf. Exp. N° 8123-2005-HC/TC. FJ. 19. Caso: Nelson Jacob Gurman)
  - d) Verificar la existencia de una vulneración al principio de *Ne bis in idem*, supone constatar la conjunción de tres identidades distintas: identidad de la persona perseguida (*eadem persona*), identidad del objeto de persecución (*eadem res*) e identidad de la causa de persecución (*eadem causa petendi*).





TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	
OTDA	
FOJAS	069

7

15. Establecido lo anterior, una cuestión que merece consideración en el presente caso, es si las investigaciones preliminares fiscales que arriban a una resolución conclusiva de archivo, puede generar la aplicación de la garantía. Al respecto, si bien el Tribunal Constitucional ha señalado en precedente sentencia (Cf. Exp. N° 6081-2005-PHC/TC. FJ. 7. Caso: Alonso Leonardo Esquivel Cornejo), que *“una resolución emitida por el Ministerio Público en la que se establece no hay mérito para formalizar denuncia no constituye cosa juzgada, por lo que la presente sentencia no impide que la demandante pueda ser posteriormente investigado y, de ser el caso, denunciado penalmente por los mismos hechos”*. No obstante, dicho criterio merece una excepcional inaplicación cuando los motivos de la declaración de *“no ha lugar a formular denuncia penal”* por parte del fiscal se refieren a que **el hecho no constituye delito**, es decir, carecen de ilicitud penal.
16. Este Tribunal afirma que la decisión fiscal de *“No ha lugar a formalizar denuncia penal”* en los términos precisados anteriormente, genera un estatus de inamovible. Esta afirmación tiene sustento en dos postulados constitucionales: **a)** La posición constitucional del Ministerio Público, lo encumbra como el único órgano persecutor autorizado a promover el ejercicio público de la acción penal, es decir, ostenta el monopolio acusatorio que le asigna el artículo 159° de la Constitución Política, en otras palabras, es el fiscal quien decide qué persona debe ser llevada ante los tribunales por la presunta comisión de un delito; **b)** Si bien las resoluciones de archivo del Ministerio Público no están revestidas de la calidad de la cosa juzgada, sin embargo, tienen la naturaleza de ***cosa decidida*** que las hace plausibles de seguridad jurídica. Este Tribunal ha señalado en precedente sentencia (Exp. N° 0413-2000-AA/TC. FJ. 3. Caso: Ingrid del Rosario Peña Alvarado), **que el principio de cosa decidida forma parte del derecho fundamental al debido proceso en sede administrativa, por lo que, frente a su transgresión o amenaza, necesariamente se impone el otorgamiento de la tutela constitucional correspondiente**. Es necesario acotar que, el fiscal no es una simple autoridad administrativa, pues su actividad se orienta a la legalidad y no a los intereses administrativos o de los administrados.
17. Se trata, entonces, de una decisión discrecional que implica una valoración de hechos e interpretación de disposiciones en mérito de la cual se decide si se está técnicamente en condiciones de ejercer la acción penal y cuál es el modo más adecuado de hacerlo, pero sin soslayar que los actos del Ministerio Público, no se legitiman, *“desde la perspectiva constitucional, en sí misma, sino a partir del respeto pleno del conjunto de valores, principios constitucionales y de los derechos fundamentales de la persona, de conformidad con el artículo 1° de la Constitución”* (Cf. Exp. N° 1762-2007-HC/TC. FJ. 11. Caso: Alejandro Toledo Manrique).





TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	
OTDA	
FOJAS	070

8

18. Lo mencionado anteriormente, resulta plenamente aplicable al presente caso, en que la Décimotercera Fiscalía Provincial Penal de Lima, mediante resolución de fecha 1° de octubre de 2007, archivó definitivamente la denuncia interpuesta por la Compañía Minera Casapalca contra don Salvador Gubbins Granger, don Daniel Carlos Villanueva Ortiz (Presidente Ejecutivo y Gerente General de la Sociedad Minera Corona, respectivamente), Andrés Edilberto Silva Chan, y los que resulten responsables, porque **los hechos que se les imputaban no constituían delito**, señalando lo siguiente: a) Con relación a la imputación referida al presunto *desvío de jurisdicción* atribuido a Minera Corona S.A., se señala ***"no existe en el contenido de la denuncia, elementos o indicios razonables de la comisión de algún ilícito, o que al momento de incoar una demanda se haya actuado fraudulentamente o presentado documentación falsificada"*** (f. 75), b) Respecto a la demanda interpuesta por el trabajador de la Sociedad Minera Corona, don Andrés Edilberto Silva Chan ante el Juzgado Mixto de San Juan de Miraflores, contra la Compañía Minera Casapalca, se aprecia que dicho acto **carece de "contenido ilícito o conducta delictuosa"** (fs. 76), de parte del denunciado, c) En cuanto al delito de corrupción de funcionarios ***"no puede ser materia de formalización de una denuncia penal, siendo que la imputación es de carácter subjetivo, sin ningún asidero de carácter indiciario"*** (fs. 76), d) Respecto al delito de fraude procesal ***"no [se precisa] indicio alguno tanto en la denuncia como en los actuados, respecto del medio fraudulento empleado por los denunciados para engañar a los funcionarios jurisdiccionales(...)no es procesal sostener que la presentación de una demanda por un trabajador de minera Corona, sea medio fraudulento para obtener una resolución contraria a ley, por cuanto cualquier trabajador como cualquier ciudadano tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva"***(fs. 77), e) En cuanto al delito de lavado de activos ***"la imputación de este delito está referido al hecho de que según el denunciante, el trabajador Andrés Edilberto Silva Chan, no tendría poder adquisitivo para contratar los servicios de un abogado y presentar la demanda de amparo ante el Juzgado Mixto de San Juan de Miraflores(...)lo que no es amparable en un Estado Social y Democrático de Derecho, en el que se postula la igualdad de las partes y el libre acceso a la tutela jurisdiccional efectiva"*** (fs. 77), f) Con relación al delito de asociación ilícita para delinquir, es un ***"hecho que no se aprecia en autos, ya que ni siquiera se imputa la existencia de una organización institucionalizada con fines criminales, que se requiere para la configuración de la asociación ilícita"*** (fs. 77).
19. Distinto sería el caso, si el motivo de archivamiento fiscal de una denuncia, se decidiese por déficit o falta de elementos de prueba, por cuanto la existencia de nuevos elementos probatorios, no conocidos con anterioridad por el Ministerio Público, permitiría al titular de la acción penal reabrir la investigación preliminar, siempre que los mismos revelen la necesidad de una investigación del hecho punible y el delito no haya prescrito.



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	
OTDA	
FOJAS	071

9

### Test de la triple identidad

20. Ahora bien, verificar la existencia o no de doble persecución penal, como la alegada por el demandante, pasa por examinar el caso desde la perspectiva del *test de triple identidad*:

- 2
- a) En cuanto al primer elemento de la *identidad de la persona perseguida penalmente (identidad subjetiva)* en varios procesos, si bien es una condición esencial para el efecto negativo del principio, es decir, para evitar una persecución nueva, cuando la anterior ya ha terminado o se inicia otra al mismo tiempo. **Este Tribunal considera que la necesidad de cumplimiento de este requisito resulta irrequisible si se desvirtúa mediante resolución firme (sea ésta judicial o fiscal) el carácter antijurídico del hecho perseguido.** Ello hace jurídicamente imposible el procesamiento a otras personas distintas al sujeto pasivo del proceso originario en tanto la cosa juzgada no sólo produce efecto frente a él sino —como en el presente caso— frente a terceros.

Este Tribunal ha señalado en los Fundamentos Jurídicos 15 a 17 de la presente sentencia, las razones porque a la resolución fiscal de “No ha lugar a formalizar denuncia penal” no se le puede negar el carácter de *cosa decidida* (cosa juzgada), sabiendo además, que es frecuente que el fiscal penal para archivar una denuncia realiza un juicio de tipicidad del hecho denunciado, que al resultar negativo impide que el imputado pueda ser posteriormente investigado y, de ser el caso, denunciado penalmente por los mismos hechos —más aún, si dicha decisión es confirmada por el órgano jerárquicamente superior—.

En el presente caso, si bien los magistrados emplazados y la Compañía Minera Casapalca, aducen que no opera la aplicación del *principio ne bis in idem* por ser distintas las personas perseguidas tanto en la denuncia primigenia que fuera archivada por la Décimotercera Fiscalía Provincial Penal de Lima (fs. 73), como en la ulterior denuncia a cargo de la Sexta Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (fs. 287), sin embargo, cabe precisar que existe una decisión de clausura definitiva plasmada en la resolución fiscal de fecha 1º de octubre de 2007 (13º FPPL), que estableció la no delictuosidad de unas conductas que compulsadas con los actos presuntamente ilícitos que investiga la Sexta Fiscalía Penal Especializada en Delitos de Corrupción, se puede afirmar se tratan de los mismos hechos, es decir, provienen de un mismo acontecimiento histórico.





- b) Este Tribunal considera que el elemento denominado *identidad del objeto de persecución (identidad objetiva)*, consiste en que la segunda persecución penal debe referirse "*al mismo hecho*" que el perseguido en el primer proceso (o actividad investigatoria fiscal), es decir, se debe tratar de la misma conducta material, sin que se tenga en cuenta para ello su calificación legal.

Este presupuesto de la triple identidad, también se cumple en el presente caso, pues del cotejo de la primigenia denuncia de parte (fs. 432), interpuesta por la Compañía Minera Casapalca contra Salvador Gubbins Granger y Daniel Carlos Villanueva Ortiz, y la posterior denuncia (fs. 323) interpuesta por esta misma minera contra Roberto Boris Chauca Temoche y otros, se hizo sobre la base de los mismos hechos, cuya delictuosidad fue oportunamente desvirtuada por la Décimotercera Fiscalía Penal de Lima. La identidad del *factum* en el presente caso, podemos resumirla de la siguiente manera: **Ambas denuncias interpuestas por la Sociedad Minera Casapalca se centran en que la única finalidad que los denunciados persiguieron en todo momento fue lograr que Sociedad Minera Corona se mantenga y persista en la posesión y administración ilícita de la concesión minera Yauricocha, obtenida a través de conductas del todo delictivas, desconociendo los supuestos derechos que le corresponden a la Compañía Minera Casapalca (Cf. Fs. 329 y 384).** En ambos casos, entonces, existió una identidad fáctica (incluso idénticas calificaciones jurídicas: cohecho activo, fraude procesal, lavado de activos, asociación para delinquir).

- c) Por último, la *identidad de la causa de persecución* es un presupuesto que resulta también verificado en el presente caso, por cuanto el fundamento de los ilícitos supuestamente realizados por los denunciados están referidos por igual a bienes jurídicos de la Administración Pública, la Administración de Justicia, la Tranquilidad Pública, como así se aprecia de los delitos (cohecho activo, fraude procesal, lavado de activos, asociación para delinquir) que fueron materia de las denuncias de parte, y de las resoluciones que al respecto se dictaron en sede fiscal.

21. Por lo anteriormente expuesto, la presente demanda debe ser estimada al haberse acreditado la vulneración del derecho constitucional de los beneficiarios de esta demanda, referido al principio constitucional *ne bis in idem*, poniendo en grave peligro su derecho a la libertad individual, resultando de aplicación el artículo 2° del Código Procesal Constitucional.

22. Este Tribunal considera que por las especiales circunstancias que han mediado en el presente proceso de habeas corpus, no resulta de aplicación el artículo 8° del Código Procesal Constitucional.



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	
OTDA	
FOJAS	073

11

EXP. N.º 2725-2008-PHC/TC  
LIMA  
ROBERTO BORIS CHAUCA TEMOCHE  
Y OTROS

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

### HA RESUELTO

1. Declarar **FUNDADA** la demanda de habeas corpus.
2. Declarar **NULA** la resolución dictada por la Sexta Fiscalía Penal Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, de fecha 21 de noviembre de 2007, mediante la cual se dispuso abrir investigación policial contra el promotor y beneficiarios de esta demanda, y, en consecuencia, cese todo acto investigatorio derivado de ésta.
3. Declarar **NULA** la resolución dictada por la Cuarta Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, de fecha 28 de setiembre de 2007, que resuelve declarar procedente el recurso interpuesto por la Empresa Minera Casapalca S.A., contra la resolución judicial de fecha 29 de agosto de 2007.

Publíquese y notifíquese.

SS.

MESÍA RAMÍREZ  
BEAUMONT CALLARGOS  
ETO CRUZ

Lo que certifico:

Dr. ERNESTO FIGUEROA BERNARDINI  
SECRETARIO RELATOR



EXP. N.º 04437-2012-PA/TC  
LIMA  
CARLOS LUIGI  
FRANCO MAZZETTI VALDIVIA

## SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 6 días del mes de agosto de 2014, el Pleno del Tribunal Constitucional, integrado por los señores magistrados Urviola Hani, Miranda Canales, Blume Fortini, Ramos Núñez, Sardón de Taboada, Ledesma Narváez y Espinosa-Saldaña Barrera, pronuncia la siguiente sentencia

### ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Carlos Luigi Franco Mazzetti Valdivia contra la resolución de fojas 258, de fecha 12 de julio de 2012, expedida por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente la demanda de autos.

### ANTECEDENTES

Con fecha 16 de noviembre de 2011, don Carlos Luigi Franco Mazzetti Valdivia interpone demanda de amparo contra el Procurador Público del Ministerio Público a fin de que se declare la  *nulidad*  de la resolución fiscal expedida por la Cuarta Fiscalía Superior Penal de Lima, de fecha 22 de agosto de 2011, la cual confirmó la resolución fiscal expedida por la Quincuagésima Fiscalía Provincial Penal de Lima, de fecha 25 de enero de 2011. Manifiesta que mediante este pronunciamiento se resolvió no ha lugar a formalizar acción penal contra don Jorge Carlos Matienzo Luján por los delitos de abuso de autoridad y declaración falsa en procedimiento administrativo, en agravio del ahora demandante. Alega la violación de los derechos a la debida motivación de las decisiones fiscales y de defensa.

Refiere que la resolución fiscal cuestionada, emitida por la fiscal superior doña Sonia Albina Chávez Gil, carece de una debida motivación toda vez que no ofrece una respuesta razonada con base en hechos objetivos y pruebas que de manera irrefutable demuestren los hechos producidos; además, señala que no existe respuesta a todas las pretensiones solicitadas en la investigación fiscal. A este efecto, el actor precisa que la fiscal superior, mediante la resolución cuestionada, no sólo se ha limitado a transcribir hechos ajenos a la realidad y a la verdad, sino también a meritar la documentación única y exclusivamente a favor del denunciado don Manuel Matienzo Luján.

Agrega asimismo que en ningún extremo de la resolución cuestionada existe pronunciamiento respecto de la ampliación de su denuncia por el delito de declaración falsa en procedimiento administrativo, lo que le impide ejercer adecuadamente su derecho de defensa. Por último, expresa que también existe una arbitraria valoración de los medios de prueba ofrecidos en la investigación preliminar, medios que acreditan de manera contundente y fehaciente la comisión de los delitos atribuidos al denunciado Matienzo Luján. Todo lo expuesto, en su opinión, vulnera los derechos invocados.

El Noveno Juzgado Constitucional de Lima, con fecha 5 de marzo de 2012, declaró improcedente  *in limine*  la demanda por considerar que la resolución fiscal cuestionada contiene en su estructura y contenido los elementos y circunstancias que la dan validez y eficacia; y que, por lo mismo, cuando éstas se encuentran razonablemente sustentadas en hechos y disposiciones legales que los respaldan, no pueden ser cuestionadas mediante el proceso de amparo.

La Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, con fecha 12 de julio de 2012, confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda por considerar que no se advierte del contenido de la demanda ni de la resolución cuestionada cuál es el agravio manifiesto producido al demandante respecto de los derechos que alega; y que, antes bien, se considera que la decisión del Ministerio Público se encuentra razonablemente motivada.

### FUNDAMENTOS



## Delimitación del petitorio

1. La demanda tiene por objeto que se declare la *nulidad* de la resolución fiscal expedida por la Cuarta Fiscalía Superior Penal de Lima, de fecha 22 de agosto de 2011, la cual confirmó la resolución fiscal expedida por la Quincuagésima Fiscalía Provincial Penal de Lima, de fecha 25 de enero de 2011, que a su vez resolvió no ha lugar a formalizar acción penal contra don Jorge Carlos Matienzo Luján por los delitos de abuso de autoridad y declaración falsa en procedimiento administrativo, en agravio del ahora demandante. Se señala que dicha resolución carece de una debida motivación, lo que impide conocer adecuadamente las razones o motivos en los que se sustenta. A este efecto, alega básicamente la violación del derecho constitucional a la debida motivación de las decisiones fiscales.
2. En el caso de autos, la demanda ha sido rechazada de plano en primera y en segunda instancia o grado por considerar que la resolución cuestionada se encuentra razonablemente motivada, y que, por lo mismo, no merece ser revisada a través del amparo. Al respecto, este Tribunal Constitucional no comparte la declaración de improcedencia *liminar* ordenada por las instancias precedentes toda vez que dicho examen sólo implica una constatación fáctica, y no un juicio de validez en el sentido de si el acto lesivo alegado se encuentra injustificado o no. En ese sentido, dado que el demandante alega que la cuestionada resolución fiscal habría sido expedida con ausencia de motivación, la misma que, según las instancias o grados precedentes se encuentra razonablemente motivada, se desprende que tal examen implica un juicio de validez, y no uno de constatación fáctica, por lo que es susceptible de revisión mediante el proceso constitucional de amparo.
3. En atención a ello, debería declararse fundado el recurso de agravio constitucional interpuesto y, revocando la resolución recurrida, ordenar que el juez de la causa proceda a admitir a trámite la demanda. Sin embargo, teniendo en consideración que el Procurador Público del Ministerio Público en representación de la Fiscal Superior doña Sonia Albina Chávez Gil se ha apersonado al proceso y ha solicitado el uso de la palabra tanto en sede judicial como en sede constitucional; que, además, existen suficientes elementos de juicio que permiten dilucidar la controversia constitucional, y por razones de economía y celeridad procesal, este Tribunal Constitucional emitirá pronunciamiento sobre el fondo del asunto.

## El derecho a la debida motivación de las decisiones fiscales

4. Que el artículo 159.º de la Constitución prescribe, entre otras cosas, que corresponde al Ministerio Público conducir desde su inicio la investigación del delito, así como ejercitar la acción penal de oficio o a petición de parte. Esta exigencia constitucional, como es evidente, ha de ser realizada con la debida diligencia y responsabilidad, a fin de que las conductas ilícitas no queden impunes y se satisfaga y concrete el principio del interés general en la investigación y persecución del delito u otro bien constitucional análogo. En este sentido, este Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha señalado que el proceso de amparo es la vía idónea para analizar si las actuaciones o decisiones de los fiscales observan o no los derechos fundamentales o, si en su caso, superan o no el nivel de proporcionalidad y razonabilidad que toda decisión debe suponer, siempre que tengan la condición de firme. Ahora bien, una decisión fiscal (disposición, resolución fiscal u otra análoga) adquiere carácter firme cuando se han agotado todos los medios impugnatorios legalmente previstos y siempre que estos tengan la posibilidad real de revertir los efectos de la decisión que se impugna.
5. En cuanto al derecho a la debida motivación de las decisiones fiscales, el Tribunal Constitucional tiene también establecido que la motivación debida de las decisiones de las entidades públicas –sean o no de carácter jurisdiccional– comporta que el órgano decisor y, en su caso, los fiscales, al resolver las causas, describan o expresen las razones o justificaciones objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión. Ello implica también que exista congruencia entre lo pedido y lo resuelto y, que por sí misma, exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun cuando esta decisión sea breve o concisa. Esas razones, por lo demás, deben provenir no solo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino, y sobre todo, de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite de la investigación o del proceso del que se deriva la resolución cuestionada.
6. Con base en ello, el Tribunal Constitucional tiene precisado que el derecho a la debida motivación de las decisiones fiscales también se ve vulnerado cuando la motivación es sólo aparente, en el sentido de que



no da cuenta de las razones mínimas de hecho o de derecho que sustentan la decisión fiscal, o porque se intenta dar sólo un cumplimiento formal a la exigencia de la motivación. Así, toda decisión que carezca de una motivación adecuada, suficiente y congruente constituirá una decisión fiscal arbitraria y, en consecuencia, será inconstitucional.

7. Sin embargo, no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una decisión fiscal constituye automáticamente una violación del derecho a la debida motivación de las decisiones fiscales. Ello solamente se da sólo en aquellos casos en los que dicha facultad se ejerce de manera arbitraria: es decir, sólo en aquellos casos en los que la decisión fiscal es más bien fruto del decisionismo que de la aplicación razonable del Derecho y de los hechos en su conjunto.

#### Análisis del caso materia de controversia constitucional

8. El análisis de si en una determinada decisión fiscal se ha violado o no el derecho a la debida motivación de las decisiones fiscales debe realizarse a partir de los propios fundamentos expuestos en la decisión cuestionada, de modo que las demás piezas procesales o medios probatorios de la investigación sólo pueden ser evaluados para contrastar las razones expuestas, pues estos *prima facie* no pueden ser objeto de una nueva evaluación o análisis. En el caso constitucional de autos, se debe determinar si la resolución fiscal expedida por la Cuarta Fiscalía Superior Penal de Lima, de fecha 22 de agosto de 2011, que confirmó la resolución fiscal expedida por la Quincuagésima Fiscalía Provincial Penal de Lima, de fecha 25 de enero de 2011, que a su vez resolvió no ha lugar a formalizar acción penal contra don Jorge Carlos Matienzo Luján por los delitos de abuso de autoridad y declaración falsa en procedimiento administrativo, en agravio del ahora demandante, don Carlos Luigi Franco Mazzetti Valdivia, ha sido dictada respetando o no el contenido constitucionalmente protegido del derecho a la debida motivación de las disposiciones fiscales.

9. A tales efectos, de la resolución fiscal cuestionada y de los demás actuados de la investigación fiscal que le sirven de sustento, en la parte relevante, se aprecia lo siguiente:

- Con fecha **9 de setiembre de 2010**, el agraviado don Carlos Luigi Franco Mazzetti Valdivia (ahora demandante) interpuso denuncia penal contra don Jorge Carlos Matienzo Luján (Secretario General del Consejo Nacional de la Magistratura) por el delito de abuso de autoridad. El ahora demandante atribuye a Matienzo el haber suscrito y remitido el Oficio N.º 692-2010-SG-CNM, de fecha 22 de abril de 2010, al Secretario General de la Presidencia del Consejo de Ministros. El contenido de este oficio supuestamente lo desacredita y perjudica al consignar hechos que, según refiere, son ajenos a la verdad y a la realidad, evidenciándose con dicho accionar un evidente abuso de conductas funcionales en su agravio en su condición de persona natural y servidor público del Estado (fojas 3 y 47).
- Con fecha **1 de diciembre de 2010**, don Carlos Luigi Franco Mazzetti Valdivia (ahora demandante) amplía la denuncia penal contra don Jorge Carlos Matienzo Luján por el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo, atribuyéndole el haberle remitido el Oficio N.º 1569-2010-SG/CNM, de fecha 30 de setiembre de 2010, faltando a la verdad, al haber consignado que el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) lo ha llamado por vía telefónica a su celular, para indicarle que la información que solicitó con fecha 21 de setiembre de 2010 se encontraba expedita para su entrega desde el 27 de setiembre, presentando para ello un reporte de llamadas que comprende desde el 6 hasta el 29 de setiembre de 2010, que acreditaría que no obra llamada alguna de parte del CNM (fojas 135 y 147).
- La Fiscal de la Cuarta Fiscalía Superior Penal, doña Sonia Albina Chávez Gil, mediante la resolución fiscal cuestionada, de fecha 22 de agosto de 2011 (fojas 124), declaró *infundada* la queja de derecho contra la resolución fiscal de fecha 25 de enero de 2011 y, en consecuencia, dio por confirmada la disposición que a su vez resolvió no ha lugar a formalizar acción penal contra don Jorge Carlos Matienzo Luján, por los delitos de abuso de autoridad y declaración falsa en procedimiento administrativo, con base en los siguientes argumentos:

“**Primero:** Que, además de los fundamentos, en lo pertinente, contenidos en la resolución impugnada, es menester señalar que, el quejoso puntualiza (...) en su denuncia que la imputación que formula contra Jorge Matienzo Lujan, Secretario General del Consejo Nacional de la Magistratura, consiste en



haberlo desacreditado consignando hechos ajenos a la verdad y a la realidad en el oficio número seiscientos noventidós guión dos mil diez (...). Segundo: Que, en dicho documento se lee que fue dispuesto por el Presidente del Consejo de la Magistratura, de manera que su autoría no corresponde al denunciado, Tercero: Que, por lo demás, en esa instrumental se comunica al destinatario que el quejoso viene presentando (...) quejas y denuncias contra trabajadores y funcionarios todo ello originado en el problema de índole personal (...), Cuarto: Que, dadas las circunstancias no se revela, que el comportamiento del secretario del consejo encuadre dentro del tipo penal de abuso de autoridad; Quinto: (...) al ampliarse la denuncia, el quejoso sostiene que (...) cuando el denunciado anotó en su oficio (...) que incluso se le llamó por teléfono avisándole que la respuesta estaba expedita desde el veintisiete del mismo mes, incurrió en falsedad, afirmación que esta desmentida por él mismo al dar su declaración (...) admitiendo que sí lo llamaron pero extemporáneamente, lo cual también se desvirtúa con el reporte”.

10. En el contexto hasta aquí descrito, se advierte, en primer lugar, que la resolución fiscal cuestionada sí expresa las razones o los motivos por los que la conducta del denunciado, dadas las circunstancias del caso (como es el haber sido dispuesto por el Presidente del CNM, entre otros), no se encuadra en el referido tipo penal de abuso de autoridad. En segundo término, la resolución fiscal cuestionada también expresa las razones o los motivos por los que la conducta del denunciado no se encuadra en el tipo penal de declaración falsa en procedimiento administrativo. Destaca allí básicamente el hecho de que el demandante ha admitido que sí lo llamaron, lo que se encuentra corroborado con el reporte de llamadas correspondiente (fojas 124).
11. Así las cosas, este Tribunal Constitucional no encuentra razones para discrepar de la línea argumentativa fijada por la fiscal superior, doña Sonia Albina Chávez Gil, en la resolución fiscal cuestionada, en la medida en que se trata de una decisión fiscal que da cuenta de las razones de hecho y de Derecho en las que se sustenta, a la luz de lo actuado en la investigación preliminar, y porque por sí misma, expresa una suficiente justificación de la decisión adoptada, advirtiéndose, por tanto, que no se ha producido la violación del derecho a la debida motivación de las decisiones fiscales, por lo que la demanda debe ser desestimada.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú,

### HA RESUELTO

Declarar **INFUNDADA** la demanda al no haberse producido la vulneración del derecho a la debida motivación de las decisiones fiscales.

Publíquese y notifíquese.

SS.

**URVIOLA HANI**  
**MIRANDA CANALES**  
**BLUME FORTINI**  
**RAMOS NÚÑEZ**  
**SARDÓN DE TABOADA**  
**LEDÉSMA NARVÁEZ**  
**ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA**



Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente  
Corte Suprema de Justicia de la República

SENTENCIA  
P.A. N° 1237 - 2013  
LIMA

Lima, dos de Julio

de dos mil trece.-

VISTOS; OÍDOS LOS INFORMES ORALES:

Es materia de pronunciamiento, vía recurso de apelación, la sentencia expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima (fojas 1820 - 1862) con fecha cinco de noviembre de dos mil doce que resolvió declarar improcedente la demanda interpuesta -por los familiares de las víctimas del incendio en la discoteca "Utopía"- contra los Jueces Superiores integrantes de la Cuarta Sala Penal de Reos en Cárcel de Lima, contra la Juez del Décimo Segundo Juzgado Penal de Lima, contra la Fiscal Superior de la Cuarta Fiscalía Superior Penal de Lima y la Fiscal de la Trigésima Cuarta Fiscalía Provincial Penal de Lima, y contra el Presidente de la Corte Suprema de Justicia don Francisco Távara Córdova, y contra la Fiscal de la Nación doña Gladys Echaiz Ramos, y

CONSIDERANDO:

I. DELIMITACIÓN DEL PETITORIO.-

A través de la presente acción constitucional de amparo, los demandantes peticionan se les tutele como derechos fundamentales: el derecho de acceso a la justicia y el derecho fundamental a la verdad. Solicitan se declare:

1. La anulación de la sentencia de la Cuarta Sala Penal de Reos en Cárcel del veintinueve de diciembre de dos mil seis suscrita por los jueces Ventura Cueva, Vigo Zevallos y Vargas González recalda en el proceso de Habeas Corpus N° 078-2006, que confirmó la sentencia apelada expedida por el Décimo Segundo Juzgado Penal de Lima e integrándola **DECLARARON** nula y sin ningún efecto la Denuncia Fiscal N° 410-03 acumulada a la N° 73-03 de fecha 27 de abril de 2004 expedida por la 39° Fiscalía Provincial de Lima; **ORDENARON** que el Juez Penal remita los autos a Fiscal Decano a fin de que designe la fiscalía penal correspondiente para que emita nueva denuncia fiscal o proceda conforme a sus atribuciones. También solicitan la anulación del auto de aclaración de la misma sentencia de fecha 19 de julio de 2007;
2. La nulidad de la sentencia de 1ra. Instancia, del 1 de diciembre de 2006, del 12 Juzgado Penal de Lima, a cargo de la juez María Margarita Sánchez Tuesta que, declaró **FUNDADO EL HABEAS CORPUS** a favor de Alan Michel Azizollahoff Gate, por las violaciones al derecho a un debido proceso legal, la motivación de las resoluciones judiciales y a la defensa en juicio en afectación a la libertad individual en consecuencia, **NULO** el auto de apertura de instrucción de fecha 17 de mayo de 2004, **DISPUSO** que el Juez Instructor emita un nuevo auto de apertura si fuere el caso;

Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente  
Corte Suprema de Justicia de la República

SENTENCIA  
P.A. N° 1237 - 2013  
LIMA

3. La anulación de la disposición de la fiscalía superior a cargo de Sonia Chávez Gil, por la cual se resolvió desestimar el recurso de queja interpuesto contra la disposición del Fiscal Provincial de no formular denuncia penal contra Alan Michel Azizollahoff Gate, Y Edgar Jesús Paz Ravines por delito de homicidio en agravio de Maritza del Pilar Alfaro Melchore y 28 víctimas más (queja de derecho 161-2008);
4. La anulación de la disposición del Fiscal Provincial del trece de mayo de dos mil ocho expedida por la Trigésima Cuarta Fiscalía Provincial Penal a cargo de Jacqueline del Pozo Castro quien se pronunció en el sentido de No ha lugar a formalizar denuncia penal contra Alan Michael Azizollahoff Gate y Edgar Jesús Paz Ravines por delito de homicidio culposo agravado por omisión impropia homicidio en agravio de Maritza del Pilar Alfaro Melchore y 28 víctimas más;
5. Postulan, que luego de ampararse sus pretensiones, la adopción alternativa de las medidas siguientes: 1) Se disponga la continuación del proceso penal N° 242-2004 en el estado en que se produjo su anulación arbitraria, -fase de alegación con acusación del Ministerio Público, solicitando la condena de Alan Michel Azizollahoff Gate y Edgar Jesús Paz Ravines a la pena de 6 años de privación de la libertad como autores de 29 homicidios culposos agravados por omisión impropia- y, 2) O la disposición al Ministerio Público que proceda a ejercitar acción penal formulando denuncia contra Alan Michel Azizollahoff Gate y Edgar Jesús Paz Ravines como autores de 29 homicidios culposos por omisión impropia.

II. REQUISITOS PROCESALES RESPECTO A LA PROCEDENCIA DE LA DEMANDA DE AMPARO.-

La Constitución Política del Perú en el artículo 200° numeral 2, prescribe que la acción de amparo procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad funcionario o persona, que vulnera o amenaza los demás derechos reconocidos por la Constitución. No procede contra resoluciones judiciales emanadas de procedimiento regular (inciso modificado por la Ley N° 26470, publicada el 12 de julio de 1995) y, el Código Procesal Constitucional en su artículo 4° señala que procede el Amparo respecto a resoluciones judiciales firmes dictadas con manifiesto agravio a la Tutela Judicial Efectiva que comprende el acceso a la justicia y al debido proceso. De lo antes expuesto, se concluye, que no toda las resoluciones judiciales pueden ser objeto de control -vía proceso constitucional-, sino sólo aquellas resoluciones judiciales firmes que han sido expedidas con violación a la Tutela Procesal Efectiva, por ende al debido proceso y violación del acceso a la justicia. El Tribunal Constitucional Peruano, ha precisado que procede acción de amparo contra disposiciones fiscales, procede amparo contra amparo, y procede amparo contra habeas corpus.



**SENTENCIA**  
**P.A. N° 1237 - 2013**  
**LIMA**

**II.1 RESPECTO AL PLAZO PARA INTERPONER LA DEMANDA DE ACCIÓN DE AMPARO.-**

Durante el Informe oral de la Vista de la Causa el abogado defensor de Alan Michel Azizollahoff Gate, alegó que la presente acción de amparo fue interpuesta cuando ya se había vencido el plazo para su interposición. Al respecto, se tiene que, sobre ésta propuesta, ya existe pronunciamiento firme en razón que la Sala Superior, declaró infundadas las excepciones de prescripción e incompetencia funcional promovidas por el abogado defensor de Alan Michel Azizollahoff Gate, según resolución de fecha 13 de Abril 2012 (obrante a fojas 1071) y, que al ser apelada, fue confirmada por ésta Sala Suprema Constitucional, según ejecutoria de fecha 11 de Diciembre de 2012, por ende, deviene en improcedente lo alegado por el abogado defensor.

**II.2. SOBRE EL APARTAMIENTO DE LA FISCAL DE LA NACION COMO CO-DEMANDADA EN LA PRESENTE ACCIÓN CONSTITUCIONAL.-**

La Sra. Fiscal de la Nación de entonces, Gladys Echaiz Ramos, fue demandada con la presente acción, y según resolución de la Sala Superior obrante a fs. 1071, su fecha 13 de abril de 2012, declaró fundada la excepción de falta de legitimidad para obrar pasiva promovida por el Ministerio Público, y al no haber sido impugnada esta resolución quedó firme, en consecuencia, el presente proceso constitucional debe entenderse sólo con los demás demandados más no con la Fiscal de la Nación.

**II.3. PROCEDENCIA DE AMPARO CONTRA HABEAS CORPUS.**

El Tribunal Constitucional Peruano máximo intérprete de la Constitución Política del Estado, según sentencia recaída en la causa 01761-2008-AA/TC Lima, -caso Junta Directiva de Notarios de Lima- su fecha 7 de abril de 2010, sobre acción de amparo, que cuestiona una sentencia de habeas corpus, estableció en el fundamento 28 de la sentencia que "la interposición del proceso de amparo, que discute o pone en tela de juicio lo resuelto en un habeas corpus, no puede significar la suspensión de la ejecución de lo decidido en éste. No puede admitirse, bajo ningún punto de vista, que un proceso constitucional sea interpuesto o sirva para dilatar la reposición en la satisfacción de un bien tan esencial como la libertad personal. Por ello, cuando el juez constitucional aprecie que la decisión tomada en el habeas corpus aún no ha sido cumplida y, en cambio, se está interponiendo un amparo contra ella, deberá declarar improcedente de modo liminar la demanda de amparo". En su fundamento 29, establece que "los criterios del amparo contra habeas corpus no pueden ser los mismos que el amparo contra amparo, y conviene exponer las razones que justifican tal reducción de criterios: En primer lugar un amparo contra habeas corpus debe

**SENTENCIA**  
**P.A. N° 1237 - 2013**  
**LIMA**

proceder sólo cuando se trate del cuestionamiento de sentencias estimatorias, pues las sentencias desestimatorias pueden ser controladas dentro del mismo proceso de habeas corpus, mediante el recurso de agravio constitucional, En segundo lugar, no se puede habilitar el proceso de amparo contra habeas corpus, para la defensa de los derechos de terceros que no han participado en el habeas corpus y cuyo resultado precisamente afecta en alguna medida sus intereses, pues en este caso debe quedar habilitada la vía jurisdiccional ordinaria para que allí se pueda verificar el respectivo grado de afectación... En cuarto lugar, que el amparo contra habeas corpus, sólo procederá por única oportunidad.

En su fundamento 30, El Tribunal Constitucional, estima que el amparo contra habeas corpus sólo procederá en los siguientes supuestos: a) su procedencia se condiciona a aquellas resoluciones estimatorias en que la vulneración de derechos fundamentales resulte manifiesta y plenamente acreditada, b) proceda en defensa de la doctrina vinculante y precedentes vinculantes establecidos por el Tribunal Constitucional, y c) no procede en contra de las decisiones emanadas del Tribunal Constitucional.

**III. PROCEDENCIA DE AMPARO CONTRA DISPOSICIONES, O REQUERIMIENTOS FISCALES.-**

Respecto al control, vía acción de amparo contra las disposiciones que expidan los miembros del Ministerio Público, también el TC se ha pronunciado en su sentencia 6204 -2006- PHC/TC, de fecha 9 de agosto de 2006, estableciendo que, las decisiones que toman los fiscales en el ejercicio de sus funciones, son objeto de control constitucional. En el fundamento 07 de la misma, fijó como criterio, que si bien es una facultad discrecional del Ministerio Público ejercer la acción penal, ésta no puede ser ejercida irrazonablemente con desconocimiento de los principios y valores Constitucionales, ni tampoco al margen del respeto de los derechos fundamentales, pues su facultad está sometida a la Constitución. En el fundamento 11 de esta sentencia: subrayó que "la posibilidad que el Tribunal Constitucional realice el control constitucional de los actos del Ministerio Público, tiene de otro lado su sustento en el derecho fundamental al debido proceso". Por ello, el derecho al debido proceso despliega también su eficacia jurídica en el ámbito de la etapa pre jurisdiccional de los procesos penales; es decir en aquella fase del proceso penal en la cual Ministerio Público, le corresponde concretizar el mandato previsto en el artículo 159° de la Constitución"

**IV. ANÁLISIS LÓGICO - JURÍDICO.-**

**IV.1. ITER PROCESAL PENAL PREVIO A LA ACCIÓN DE HABEAS CORPUS.**



**SENTENCIA**  
**P.A. N° 1237 - 2013**  
**LIMA**

Con fecha 27 de abril 2004, la Fiscal Provincial Penal de Lima Nancy Vargas Cuba de la 39° FPPL, formula denuncia penal contra Alan Michel Azizollahoff Gate y Edgar Jesús Paz Ravines por delito contra la Vida el Cuerpo y la Salud - en la modalidad de homicidio culposo agravado por omisión impropia en agravio de Maritza del Pilar Alfaro Melchore y 28 víctimas más (folio 29) y, en cuyo mérito el Juez del 21° Juzgado Penal de Lima expidió el auto apertorio de instrucción, su fecha **diecisiete de mayo de dos mil cuatro**, contra los referidos denunciados por el delito de homicidio culposo agravado por omisión impropia en agravio de Maritza del Pilar Alfaro Melchore y 28 víctimas más (folio 29) vía proceso sumario (folios 32).

Vencida la etapa de la instrucción o investigación judicial, la Fiscalía Provincial Penal, con fecha 27 de enero de 2006, a folios 61, opina: *"No haber mérito a formular acusación contra Alan Michel Azizollahoff Gate Y Edgar Jesús Paz Ravines por delito contra la Vida el Cuerpo y la Salud - en la modalidad de homicidio culposo agravado por omisión impropia en agravio de Maritza del Pilar Alfaro Melchore y 28 víctimas más"*.

Frente a esta Disposición de no formular acusación del Fiscal provincial, el Juez Penal, según resolución del doce de mayo de dos mil seis (folio 63), al no estar de acuerdo con la opinión fiscal, resuelve elevar en consulta los autos a la Fiscalía Superior, la misma que por dictamen de fecha siete de agosto de dos mil seis, (fs. 71) suscrito por la doctora Ana María Cubas Longa, desaprueba el dictamen del Fiscal Provincial en todo sus extremos y dispone que formule acusación; en cumplimiento de ello, el Fiscal provincial, el **tres de noviembre de 2006** emite acusación Fiscal contra ALAN MICHEL AZIZOLLAHOFF GATE Y EDGAR JESUS PAZ RABINEZ por los delitos materia del proceso y, solicita se le imponga seis años de pena privativa de libertad, según es de verse a folios 76. El 06 de noviembre de 2006 la Juez Penal de la causa, Olga Isabel Contreras Arbieto, expide el auto:

**"póngase los autos a disposición de las partes por el término de 10 días, plazo común para que los abogados defensores presenten los Informes escritos que correspondan" (folios 464 del expediente de habeas corpus).**

Procesalmente, lo antes señalado significa que el expediente, por tratarse de un procedimiento "sumario", estaba expedito ser resuelto luego de recibidos los alegatos

**SENTENCIA**  
**P.A. N° 1237 - 2013**  
**LIMA**

de las partes, debiendo expedir sentencia, o la resolución que corresponda en el término de 15 días (artículo 6° del Decreto Legislativo 124).

Cuando habían transcurrido 2 años 5 meses de iniciado judicialmente el proceso penal (17 mayo de 2004), y tres días después de emitida la acusación fiscal, (fs. 76), -según es de verse del sello de recepción del Juzgado a fs. 95-, **el 6 de Noviembre de 2006**, el abogado Alberto Quimper Herrera presenta la demanda de Acción de Habeas Corpus en el 12 juzgado Penal de Lima, a favor de su patrocinado Alan Michel Azizollahoff Gate solicitando la nulidad del auto apertorio de instrucción de fecha diecisiete de mayo de dos mil cuatro, por falta de motivación en el proceso penal seguido contra su patrocinado.

**IV.2. ANÁLISIS DEL PROCESO Y SENTENCIAS DE HABEAS CORPUS.**

El petitorio del Habeas Corpus según es de verse en su demanda (fojas 02), interpuesta por el abogado el abogado Alberto Quimper Herrera el 6 de noviembre de 2006 es: *"Se declare nula la resolución de fecha 17 de mayo de 2004 expedida por el 21° Juzgado Penal de Lima en el proceso penal N° 242-04, mediante la cual se abre instrucción al favorecido y como consecuencia de la nulidad ha de declararse se disponga se dicte un auto denegatorio de apertura de instrucción en defensa de la libertad, del debido proceso y los derechos humanos de Alan Michael Azizollahoff Gate. En resumen empleando el lenguaje del inciso 4 del artículo 34° del Código Procesal Constitucional: que cese el agravio producido, disponiendo las medidas necesarias para evitar que el acto vuelva a repetirse"*. (Sic.)

Es en el proceso de Habeas Corpus, que la Juez del 12 Juzgado Penal de Lima, María Margarita Sánchez Tuesta, con fecha 1 de diciembre del 2006, expide sentencia **declarando**: *"fundada la acción de garantía constitucional de Habeas Corpus, nulo el auto de apertura de instrucción de fecha diecisiete de mayo de 2004, dispone que se emita un nuevo acto de apertura de instrucción, si fuera el caso, teniendo en consideración los fundamentos que sustentan la presente demanda, debiendo remitirse los actuados al Juez llamado por ley"*.

Considera la Juez como sustento de su sentencia a fs. 551 (exp. Habeas corpus) y fs. 137 (exp. Amparo) que: *"la obligación de motivación del juez penal, no se colma únicamente con la puesta en conocimiento al sujeto pasivo de aquellos cargos que se le dirigen, sino que comporta la ineludible exigencia que la acusación ha de ser cierta, no implícita, sino precisa clara y expresa (...). DÉCIMO SÉTIMO: que de los*



SENTENCIA  
P.A. N° 1237 - 2013  
LIMA

recaudos que se han anexado a la presente demanda, se tiene que se le imputa al favorecido con este habeas corpus una responsabilidad penal por el solo hecho de ser director y propietario (accionista) de la empresa propietaria de la discoteca Utopia, tal imputación no está referida a ninguna atribución sobre el tipo de autoría (mediata o inmediata) o coautoría o grado de participación (instigador o cómplice primaria o secundario) en la producción de injusto penal (la muerte de varias víctimas), de tal manera que su conducta se ajusta a su naturaleza, es decir, que este sea directa y subjetiva, ya que la responsabilidad penal objetiva esta proscrita a tenor de lo dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar del Código Penal." DÉCIMO OCTAVO: que además de no existir el detalle de hechos que determine la responsabilidad penal subjetiva del inculcado". De lo antes transcrito se evidencia que la Juez para declarar fundado el habeas corpus se ha sustentado en presupuestos de responsabilidad penal y, alega requisitos de una acusación presupuesto que son válidos solamente cuando se ha concluido la etapa de la instrucción mas nunca cuando recién se postula una incriminación para dar inicio a un proceso penal.

Esta sentencia fue impugnada por el Procurador Público a cargo de los Asuntos del Poder Judicial y por los Jueces demandados Olga Isabel Contreras Arbieto y, Walter Sotomayor Abanzini, recurso que al ser concedido asumió competencia la 4ta. Sala Penal de Reos en Cárcel de Lima, la misma que expide sentencia con fecha de 29 de diciembre de 2006 (fs. 147), y resuelve "CONFIRMAR la sentencia apelada de fecha 01 de diciembre de 2006 que declaró fundada la demanda de Habeas Corpus interpuesta por Alberto Quimper Herrera a favor de Alan Michael Azizollahoff Gate por las violaciones al derecho a un proceso legal, a la motivación de resoluciones judiciales y a la defensa en juicio en afectación a la libertad individual", en consecuencia "nulo el auto de apertura de instrucción de fecha 17 de mayo de 2004 y, dispuso se dicte un nuevo acto de apertura de instrucción si fuera el caso, debiendo remitirse los actuados al juez llamado por ley, ASIMISMO INTEGRARON: la mencionada sentencia, Y DECLARARON NULO, Y SIN NINGÚN EFECTO LA DENUNCIA FISCAL 410-03 acumulada a la 73-03 de fecha 27 de Abril de 2004 expedida por la Trigésima Novena Fiscalía Provincial de Lima, ORDENARON que el Juez penal remita los autos al Fiscal Decano a fin de que designe la Fiscalía provincial penal correspondiente para que emita nueva denuncia fiscal o proceda conforme a sus atribuciones" (fojas 806 del expediente principal del habeas corpus y folios 142 del proceso de amparo).

SENTENCIA  
P.A. N° 1237 - 2013  
LIMA

Por tratarse de una sentencia estimatoria dictada en 2da. Instancia, no fue objeto de recurso impugnatorio y, la Sala mediante resolución del 23 de enero de 2007 declaró consentida la misma (fojas 825 del proceso de habeas corpus), y dispuso su publicación en el diario El Peruano según la cuarta disposición final de Código Procesal Constitucional, remitiéndose la causa al 12° Juzgado Penal, el mismo, que con fecha 26 de marzo de 2007 dispuso su archivo.

AUTO ACLARATORIO.

Cinco meses después de concluido el proceso de Habeas Corpus, el demandante, formula un pedido de aclaración ante la Sala respecto al alcance de la parte resolutive de la sentencia confirmatoria y, si la nulidad también alcanzaba al dictamen emitido por la 5° Fiscalía Superior de Lima que ordenó a la 39° Fiscalía Provincial denuncie al favorecido ante el 21° Juzgado Penal de Lima.

La Sala Penal, accediendo a esta solicitud "de aclaración" con fecha 19 de julio de 2007, expidió una resolución suscrita por dos magistrados (Ventura Cueva y Vigo Zevallos) quienes amparándose en el artículo 11 del Código Procesal Constitucional, mediante auto aclaratorio, "aclaran" la sentencia en el sentido siguiente: "TERCERO: que, como bien puede notarse en la sentencia constitucional de fecha 29 de diciembre de 2006, emitida por el Colegiado que conformamos (ver parte resolutive), se dispuso que la nueva Fiscalía Provincial que conociera los actuados, deberá formular denuncia" "o proceder conforme a sus atribuciones"; esto es que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 94° de la Ley Orgánica del Ministerio Público (Dec. Leg. 52) dicha Fiscalía también podía archivar o ampliar las investigaciones; con ello, quedaba tácitamente expresado que, el mandato de la fiscalía superior en aras de la independencia de criterios de de la nueva fiscalía provincial, quedaba sin efecto; CUARTO: Que, finalmente habiéndose ya "ordenado" en la indicada sentencia que la Fiscal Provincial correspondiente, "debía formular denuncia o proceder de conforme a sus atribuciones", mediante este auto aclaratorio (que es de menor jerarquía) no puede restringir los alcances de la misma; por estos fundamentos y aclarando la consulta solicitada, este Colegiado por mayoría DECLARA: ACLARADO el extremo solicitado". El Secretario de la Cuarta Sala Penal de Reos en Cárcel de Lima certifica que el voto contradictorio de la doctora Vargas Gonzáles es como sigue: "... MI VOTO ES PORQUE SE RESUELVA: DECLARAR ACLARADO el sentido de la nulidad dictada contra el auto apertorio de instrucción de fecha 17 de mayo de 2004 así como la denuncia fiscal 410-03 acumulada a la número 723-03, ESTABLECIENDO: que ésta no comprende la nulidad de los dictámenes expedidos en las quejas 51-04 y 59-04, expedidas por la Quinta Fiscalía Superior de Lima".



SENTENCIA  
P.A. N° 1237 – 2013  
LIMA

IV. 3 ANALISIS DE LA RESOLUCION DE ACLARACIÓN:

- a) Consideramos que tratándose de una aclaración de sentencia, la resolución a dictarse, sólo puede emitirse válidamente, si es con el criterio uniforme y unánime de los tres Jueces superiores que la emitieron, no siendo procesalmente válido, que dos Jueces del Colegiado, "aclaren" en un sentido y el "tercero" lo aclare en sentido contradictorio al de los 2 anteriores, pues si no hay uniformidad de los 3 jueces en la aclaración, simplemente la sentencia no es aclarada y queda tal y conforme los términos en que se expidió.
- b) El artículo 11° del Código Procesal Constitucional está referido a la integración procesal, establece: "Los Jueces superiores integrarán las decisiones cuando adviertan alguna omisión en la sentencia, siempre y cuando en ella aparezcan los fundamentos que permitan integrar tal omisión". El cuarto párrafo del artículo 172 del Código Procesal Civil establece que las resoluciones pueden integrarse hasta antes de su notificación y después de ella en el plazo para impugnar, procediendo la integración cuando se halla omitido pronunciamiento sobre algún punto principal o accesorio. El Código Procesal Civil en su Art. 406° prescribe: "El Juez no puede alterar las resoluciones después de notificadas. Sin embargo, antes que la resolución cause ejecutoria, de oficio o a pedido de parte, puede aclarar algún concepto oscuro o dudoso expresado en la parte decisoria de la resolución o que influya en ella. La aclaración no puede alterar el contenido sustancial de la decisión...", y el artículo 407, establece: "Antes que la resolución cause ejecutoria, el Juez puede de oficio o a petición de parte y sin trámite alguno corregir cualquier error material evidente que contenga. ... Mediante la corrección las partes también piden al Juez que complete la resolución respecto de puntos controvertidos pero no resueltos", que las resoluciones judiciales luego de ser declaradas consentidas, no pueden ser aclaradas, alteradas o modificadas bajo sanción de nulidad. Lo alegado por los integrantes de la Sala Penal, para aclarar su sentencia, invocando el artículo 11° del Código Procesal Constitucional, no tiene sustento jurídico, por cuanto no se dan los presupuestos para ello, por lo que habiendo transcurrido 5 meses de haber adquirido la calidad de "firme", esta sentencia no podía ser integrada, aclarada o corregida. Cuando un juez debe resolver una petición que no está regulada expresamente, en un código procesal de manera específica, debe recurrir a otros ordenamientos procesales para resolver "el caso" efectuando aplicación supletoria siempre y cuando no contradiga los fines del proceso. Para decidir la solicitud de aclaración formulada por una de las partes, debió tenerse en cuenta las normas antes mencionadas,

SENTENCIA  
P.A. N° 1237 – 2013  
LIMA

por lo que en el presente caso, al "aclarar" la sentencia cuando ya había sido declarada **consentida** por el mismo colegiado, - *habiéndose dispuesto su publicación en el diario El Peruano, (auto del 23 de enero de 2007 fojas 825 del proceso de habeas corpus), y ya se había remitido la causa al 12° Juzgado Penal*, al dictarse la resolución (de mayoría de 2 votos), estamos frente a una sentencia que había quedado firme, por lo que dicha resolución está viciada de nulidad absoluta, más aún si el Art. 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, señala que en las Cortes superiores, tres votos conformes hacen resolución tratándose de los que ponen fin a la instancia, como es el caso de la resolución aclaratoria. La decisión aclaratoria de la sentencia está también viciada de nulidad absoluta, por cuanto fue suscrita solo por dos Jueces Superiores.

IV. 4. SOBRE LA DEBIDA MOTIVACION O JUSTIFICACION DE UNA SENTENCIA.

- a) Ingresando al examen de las exigencias de motivación o justificación de las sentencias, sostenemos desde la óptica de la Teoría de la Argumentación Jurídica, que se entiende por "*justificación interna*" la aplicación de lógica jurídica deductiva, en la ley y los hechos para resolver un caso. De otro lado, la "*justificación externa*" referida a la motivación y argumentación judicial aporta a la solución especialmente, a los casos difíciles y complejos. Y tiene en cuenta además de la ley, la realidad social-política, los valores y los principios generales del derecho. Como ejemplo la doctrina a través del profesor Ronald Dworkin cita un caso ocurrido en EE.UU., *Riggs v. Palmer*, donde la Corte Suprema del Estado de Nueva York expidió la sentencia por la cual, decidió no conceder la herencia a una persona que asesinó a su abuelo para que éste no cambiara su testamento, la decisión se basó en el principio legal según el cual "uno no puede beneficiarse de su propio delito". Este principio, según Ronald Dworkin, forma parte del ordenamiento jurídico, aunque nunca ha sido promulgado.
- b) El Tribunal Constitucional Peruano en la sentencia recaída en el caso *Guliana Llamoca*, expediente N° 00728-2008 -PHC/TC del 13 de Octubre de 2008, ha establecido refiriéndose a la motivación externa, lo siguiente: *Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas*. El control de la motivación también puede autorizar la actuación del juez constitucional cuando las premisas de las que parte el Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica. Esto ocurre por lo general en los casos *difíciles*, como los *identifica Dworkin*, es decir, en aquellos casos donde suele presentarse problemas de pruebas o de interpretación de disposiciones normativas. La motivación se presenta en este caso como una garantía para validar las premisas de las que parte el Juez o Tribunal en sus decisiones. Si un Juez, al fundamentar su decisión:



SENTENCIA  
P.A. N° 1237 - 2013  
LIMA

1) ha establecido la existencia de un daño; 2) luego, ha llegado a la conclusión de que el daño ha sido causado por "X", pero no ha dado razones sobre la vinculación del hecho con la participación de "X" en tal supuesto, entonces estaremos ante una carencia de justificación de la premisa fáctica y, en consecuencia, la aparente corrección formal del razonamiento y de la decisión podrán ser enjuiciadas por el juez [constitucional] por una deficiencia en la justificación externa del razonamiento del juez. El control de la justificación externa del razonamiento resulta fundamental para apreciar la justicia y razonabilidad de la decisión judicial en el Estado democrático, porque obliga al juez a ser exhaustivo en la fundamentación de su decisión y a no dejarse persuadir por la simple lógica formal. En la misma sentencia el Tribunal Constitucional, se ha referido a la *motivación sustancialmente incongruente*. El derecho a la debida motivación de las resoluciones obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa). Desde luego, no cualquier nivel en que se produzca tal incumplimiento genera de inmediato la posibilidad de su control. El incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el dejar incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión del marco del debate judicial generando indefensión, constituye vulneración del derecho a la tutela judicial y también del derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia omisiva). Y es que, partiendo de una concepción democratizadora del proceso como la que se expresa en nuestro texto fundamental (artículo 139°, *incisos* 3 y 5), resulta un imperativo constitucional que los justiciables obtengan de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente de las pretensiones efectuadas; pues precisamente el principio de congruencia procesal exige que el juez, al momento de pronunciarse sobre una causa determinada, no omita, altere o se exceda en las peticiones ante él formuladas.

IV. 5. SITUACIONES EVIDENTES QUE ACREDITAN PLENAMENTE LA VULNERACION DE DERECHOS FUNDAMENTALES CON LA DEMANDA Y SENTENCIA DEL HABEAS CORPUS.

Conforme se precisó en el considerando IV.1, el estado del proceso penal seguido contra Alan Michael Azizollahoff Gate y Edgar Jesús Paz Ravines, tratándose de un procedimiento "sumario" era el poner a disposición de las partes por 10 días y vencido éste dictar sentencia o resolución que ponga fin al proceso (artículo 6° del D. Leg. 124). Esta situación, evidente, real y verificable fácilmente, no fue tomada en consideración

SENTENCIA  
P.A. N° 1237 - 2013  
LIMA

por los jueces de primera y segunda instancia del Habeas Corpus, al momento de dictar su sentencia y sólo se limitaron a analizar el texto y redacción del auto apertorio de instrucción y de la denuncia fiscal, para luego concluir que carecían de motivación debida, procediendo a declarar fundado el Habeas Corpus, sin un adecuado examen de razonabilidad en cuanto a la revisión del proceso penal, si ésta, es relevante para determinar la vulneración del derecho fundamental alegado (conexo a la libertad), de coherencia, esto es la vinculación directa del acto lesivo con la decisión judicial, y suficiencia, de determinar la intensidad del control constitucional necesario para la revisión del proceso judicial ordinario.

El Tribunal Constitucional, por primera vez desarrolló extensamente la figura de Amparo contra Habeas Corpus, a través de la sentencia N° 01761-2008-AA/TC, señalando que *la demanda de amparo contra habeas corpus procede cuando "la vulneración de derechos fundamentales resulte manifiesta y plenamente acreditada"* y, fijó reglas mínimas y requisitos de mayor exigencia que los establecidos, para casos de "amparo contra amparo", en razón que el habeas corpus tutela un derecho de mayor intensidad como es el derecho a la libertad personal.

Tales exigencias, establecidas como doctrina jurisprudencial por el Tribunal Constitucional, que deben ser aplicadas para el presente caso son: a) en ningún caso podría servir para dilatar lo resuelto en el Habeas Corpus: Para el caso materia de análisis, la decisión recaída en el habeas corpus ya se había ejecutado, pues se dispuso la nulidad del auto apertorio dictado y denuncia fiscal, contra Alan Michael Azizollahoff Gate y la Fiscalía Penal se encontraba dando cumplimiento a dicha sentencia de habeas corpus; b) procede cuando se trata de cuestionar una sentencia estimatoria de segundo grado: en el caso materia de pronunciamiento la decisión recaída en el habeas corpus fue estimatoria y de segundo grado, según sentencia de la Cuarta Sala Penal de Reos en Cárcel; c) no procede "amparo contra habeas corpus" para defender derechos de terceros que no han participado en él –contrario sensu, si procede cuando terceros han participado en él: en el presente caso los familiares de las víctimas participaron en el proceso de habeas corpus conforme es de verse en la resolución de fecha 07 de agosto de 2007 a folios 987 (del expediente de Habeas Corpus), cuando se le autorizó mediante resolución el uso de la palabra al abogado defensor de las víctimas del incendio de la discoteca Utopía; y por último, d) procede por única oportunidad: en el presente caso, es la primera oportunidad que los familiares de las víctimas recurren a esta acción de garantía constitucional de amparo.



SENTENCIA  
P.A. N° 1237 - 2013  
LIMA

Según el fundamento 30 de la sentencia arriba mencionada el TC fijó como reglas más reductibles y exigentes, para el "amparo contra habeas corpus", que sólo procederá en los siguientes supuestos: a) su procedencia se condiciona a aquellas resoluciones estimatorias en que la **vulneración de derecho fundamentales resulte manifiesta y plenamente acreditada**; en el caso materia de análisis está plenamente acreditada y resulta manifiesta que con ese habeas corpus hubo vulneración de derechos fundamentales, como: violación al debido proceso, plazo razonable (más de 2 años y 6 meses y en estado para dictar sentencia), motivación de resoluciones judiciales (falta de justificación externa en la sentencia e incongruencia en el auto aclaratorio), violación al derecho a la verdad y tutela judicial efectiva tanto para las 29 víctimas del incendio en la discoteca "Utopía", sus familiares, como para procesado y acusado Edgar Jesús Paz Ravines, toda vez que al declararse nulo el habeas corpus donde estaba comprendido conjuntamente con Alan Michael Azizollahoff Gate, se vio privado de que la justicia se pronuncie en sentencia, sobre su situación jurídica, respecto a su responsabilidad penal. b) procede en defensa de la doctrina vinculante y precedentes vinculantes establecidos por el Tribunal Constitucional, en el presente caso, también se ha vulnerado la doctrina jurisprudencial como la dictada para el caso Martín Rivas (Exp. N° 4587-2004-AA/TC) donde se establece que las acciones de garantía no pueden ser utilizadas para eludir la acción de la justicia, y generar impunidad. En el presente caso, pretendió ser utilizada en perjuicio de las 29 víctimas del incendio de la discoteca "Utopía. c) no procede en contra de las decisiones emanadas del Tribunal Constitucional, en presente caso, debe advertirse que en este caso la sentencia cuestionada fue dictada por Cuarta Sala Penal de Reos en Cárcel de Lima y no por el Tribunal Constitucional.

De lo actuado en la acción de amparo, materia de análisis, está probado que:

- 1.- El habeas Corpus fue interpuesto el 6 de Noviembre de 2006, es decir, después de 2 años y 6 meses de iniciado el proceso penal, habiendo concluido la etapa de instrucción o investigación judicial al haberse dictado acusación fiscal, estando pendiente los alegatos y lectura de sentencia.
- 2.- Los cargos a título de imputación penal habían sido puestos de conocimiento de Alan Michael Azizollahoff Gate y de su abogado defensor, habiendo cumplido el beneficiado con prestar su declaración instructiva el 05 de julio de 2004 (fojas 36 del expediente de amparo).
- 3.- Se había deducido a través de su abogado defensor, excepción de naturaleza de acción con fecha 13 de setiembre de 2004, alegando que el hecho por el cual se le estaba procesando penalmente no constituía delito sustentando la misma en su condición de accionista o miembro del directorio o administrador de la empresa donde

SENTENCIA  
P.A. N° 1237 - 2013  
LIMA

se produjeron los hechos. Esta excepción fue resuelta por el Juez Penal en primera instancia con fecha 06 de enero de 2005 (fojas 87) e impugnada por el beneficiario y confirmada por la Sala Superior con fecha 03 de noviembre de 2005 (fojas 91), habiendo adquirido la calidad de firme.

4.- Fue interpuesto habeas corpus contra el Juez de 21 Juzgado Penal de Lima contra la medida cautelar, por el impedimento de salida del país. Este habeas Corpus, fue resuelto según sentencia que obra a fojas 568 del expediente de habeas corpus el 23 de diciembre de 2004, declarándolo **fundado** en primera instancia y, al ser impugnado, la Cuarta Sala Penal de Reos en Cárcel, el 28 de enero de 2005, **la revocó y reformándola declararon infundada**, según folios 573 del expediente de habeas corpus. Y en última instancia el Tribunal Constitucional, el 04 de mayo de 2005, declaró improcedente la demanda, según es de verse a fojas 581 del expediente del habeas corpus.

5. En el proceso penal, durante la etapa de instrucción, el acusado ha ejercido con sus abogados, todos los medios de defensa que la ley le permiten, y en su momento el Juez Penal, al momento de dictarse sentencia tenía las posibilidades de condena, absolución o dictar otra resolución que ponga fin al proceso. Por último tenía el derecho a la instancia plural.

Estas 5 situaciones de facto antes mencionadas, cumplen con la exigencia establecida por el Tribunal Constitucional, que **de manera manifiesta y plenamente acreditada, la vulneración a los fines del proceso constitucional, siendo que el móvil de la interposición del Habeas Corpus**, obedecía a otro propósito y finalidad del acusado Alan Michael Azizollahoff Gate. No buscaba se tutelase su derecho a la libertad, sino por el contrario, su comportamiento evidenciaba una conducta, destinada a eludir la acción de la justicia penal generando violación a la tutela judicial efectiva para los 29 jóvenes, víctimas del incendio de la Discoteca "Utopía", la indefensión a los familiares de estas víctimas, quienes eran parte en el proceso penal y buscaban que la justicia penal peruana se pronuncie sobre estos hechos. Este caso constituye un ejemplo del mal uso de la acción de habeas corpus, que al ser instrumentalizada, desnaturalizó su esencia protectora de tutela a la libertad, se interfirió mediante este mecanismo la impartición de la justicia penal, así como la labor de los jueces penales, a todo nivel, se ven impedidos de ejercer la función jurisdiccional y que de no ser detectadas y corregidas oportunamente, generan desconfianza en la ciudadanía y mayor desprestigio del sistema judicial.



**SENTENCIA**  
**P.A. N° 1237 - 2013**  
**LIMA**

**IV. 6. CONCLUSION SOBRE LAS SENTENCIAS RECAIDAS EN EL HABEAS CORPUS:**

La Corte Suprema de la República en su condición de máxima instancia jurisdiccional del Poder Judicial, tiene el deber de velar por el cumplimiento de la interdicción de la arbitrariedad, previsto en el artículo 45 de la Constitución Política del Estado y en el presente caso donde se ha declarado la nulidad de todo lo actuado, en el proceso penal, hasta una nueva investigación fiscal, - vía habeas corpus- a todas luces se evidencia el mal uso de procesos legales que colisionan con la recta administración de justicia, al apartarse de criterios de razonabilidad y proporcionalidad. En tal sentido, corresponde estimar la presente demanda de amparo y reponer el Estado de las cosas hasta al momento en que se vulneraron estos derechos fundamentales, es decir que continúe el séquito procesal penal al momento de: *"Póngase los autos a disposición de las partes por el término de 10 días plazo común para que los abogados defensores presenten los informes escritos que correspondan"* ( Fs. 464 del exp. Habeas Corpus).

**V. ANALISIS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.**

Sostienen los demandantes, como expresión de la violación a sus derechos fundamentales, que la decisión del Ministerio Público, luego de dictada la sentencia de Habeas Corpus, a favor de Alan Michael Azizollahoff Gate y cumplidas las investigaciones: de no ejercitar acción penal contra los ciudadanos Alan Michael Azizollahoff Gate Y Edgar Jesús Paz Ravines a quienes, se les debió investigar penalmente por los funestos hechos ocurridos el 20 de julio de 2002 a raíz del incendio ocurrido en el interior de la Discoteca "Utopía" ubicada en el Centro Comercial Jockey Plaza sito en la avenida Javier Prado N° 4200, Monterrico, Distrito de Santiago de Surco, habiendo violado el deber de cuidado y, omitieron cumplir con el control de una fuente de peligro, lo que habría traído como consecuencia la muerte de 29 personas agraviadas.

Consecuentemente, la pretensión de los demandantes cuestiona que, el Ministerio Público no ha cumplido con ejercitar debidamente el mandato Constitucional que le asiste según lo dispuesto en el artículo 159° de la Constitución Política del Estado, en su tarea del ejercicio de la acción penal pública en defensa de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el derecho y, que a su vez, se encuentran positivizados en el Decreto legislativo 052 (Ley Orgánica del Ministerio Público), en su artículo 1° (Defensa de la Legalidad, los Derechos Ciudadanos y los Intereses Públicos, la representación de la Sociedad en Juicio y, la persecución del delito), así como el artículo 11° que lo configura como la institución autónoma como titular del ejercicio de la acción penal pública, la misma que debe ejercitar de oficio, a instancia de la parte agraviada, o por acción popular.

**SENTENCIA**  
**P.A. N° 1237 - 2013**  
**LIMA**

Como quiera que, con la presente acción los demandantes invocan vulneración a sus derechos constitucionales de tutela procesal efectiva, derecho que comprende el acceso a la justicia y el debido proceso, así como el derecho fundamental a la verdad, este Colegiado estima que como un derecho que comprende el debido proceso también lo constituye la debida motivación de las resoluciones judiciales por lo que encontrando razones sustanciales para evaluar la legitimidad o no del proceder del Ministerio Público a través de sus fiscales, ingresaremos a analizar, si se da o no, el presupuesto de una debida motivación.

Un año después de expedida la sentencia confirmatoria del Habeas Corpus, y en cumplimiento de la misma, el 13 de mayo de 2008, (fs. 170), el Ministerio Público a través de la Trigésima Cuarta Fiscalía Provincial Penal, resuelve: No ha lugar a formalizar denuncia penal contra ALAN MICHAEL AZIZOLLAHOFF GATY Y EDGAR JESUS PAZ RAVINES por delito de homicidio culposo agravado por omisión impropia. Esta Disposición Fiscal, fue cuestionada, vía queja, y la Fiscalía Superior Penal declaró infundada la queja de derecho interpuesta por los familiares de las víctimas.

**V.1. SOBRE LA JUSTIFICACION INTERNA Y LA JUSTIFICACION EXTERNA COMO ARGUMENTACIÓN JURIDICA EN LAS DISPOSICIONES FISCALES MATERIA DE PROCESO.**

Ingresando a analizar tanto la disposición del Fiscal Provincial y la Superior tenemos lo siguiente:

a) Respecto a la disposición del Fiscal Provincial, del análisis de las mismas, el Fiscal Provincial en sus considerandos del segundo al séptimo ha ingresado a realizar una descripción de la calidad que ostentaban como directores de la empresa Inversiones García North SAC, propietaria de la discoteca Utopía, para luego ingresar a analizar si por cumplir la función de administradores de la citada persona colectiva, tenían la condición de garantes de la vida de los asistentes al mencionado local de diversión y si, con conocimiento, habrían omitido cumplir el deber especial de cuidado de la vida de los asistentes de la denominada fiesta "ZOO" en la discoteca Utopía, permitiendo la realización de la misma cuando no se reunían las condiciones mínimas de seguridad contra incendio. Asimismo en el considerando octavo, el Fiscal concluye que *"no resulta suficiente para determinar que tanto ALAN MICHAEL AZIZOLLAHOFF GATY Y EDGAR JESUS PAZ RAVINES, en la práctica conducían la discoteca utopía o que legalmente estuvieran obligados a hacerlo"* y que en autos *"no obra ningún elemento de juicio objetivo que corrobore las imputaciones que han sido planteadas por la parte denunciante en el sentido de que éstos tuvieron el efectivo manejo administrativo de dicha discoteca, lo que a su vez los haría especialmente responsables para evitar el resultado perjudicial (el lamentable*



SENTENCIA  
P.A. N° 1237 - 2013  
LIMA

fallecimiento de las 29 víctimas). En ese escenario, entender que a los denunciados les alcanza responsabilidad penal por el solo hecho de haber sido directores de Inversiones de García North SAC, sería atribuirles una responsabilidad objetiva" "... la cual por disposición expresa del artículo VII del Título Preliminar del Código Penal está proscrita..." (fojas 167).

Teniendo en consideración los criterios antes expuestos sobre "justificación interna" y la "Justificación externa", así la motivación sustancialmente incongruente, se observa que el Fiscal Provincial Penal, no ha tenido en consideración como premisa previa el mandato legal contenido en el artículo 77° del Código de Procedimientos Penales que exige como juicio de imputación la presencia "de indicios suficientes o elementos de juicio reveladores de la existencia de un delito, que se ha individualizado a su presunto autor y su partícipe, que la acción penal no ha prescrito o no concurra otra causa de la extinción de la acción penal".

El sustento del Fiscal para no formalizar denuncia penal se ubica en un presupuesto inexistente procesalmente, pues se remite valorar elementos referentes a la responsabilidad penal de la persona sometida a investigación, y para no formalizar denuncia alega que "no se ha acreditado su responsabilidad penal" y que de hacerlo incurriría en responsabilidad objetiva, la misma que está proscrita por nuestro ordenamiento jurídico. El representante del Ministerio Público confunde los presupuestos procesales para formular denuncia con los exigidos para formular acusación. Para denunciar solamente se exige según el artículo 77 del Código de Procedimientos Penales, indicios suficientes que vinculen al denunciado con los hechos. No exige que esté acreditada la responsabilidad penal. Con el criterio empleado por la Fiscalía sólo denunciaría penalmente ante un Juez, cuando está acreditada la responsabilidad penal, la misma que se da cuando ya ha existido o agotado la etapa de la instrucción o investigación preliminar.

Ninguna teoría sobre proceso penal, aceptaría esta tesis, por contravenir el principio que toda investigación fiscal, debe realizarse bajo el control de un Juez. Esta situación se agrava en razón que el Ministerio Público, había emitido una Denuncia Fiscal, así como una acusación penal solicitando pena y reparación civil, e incluso se pronunció en dos instancias (como Fiscal Provincial y Fiscal Superior) por la improcedencia de la excepción de naturaleza de acción que presentó la defensa al considerar que el hecho denunciado no constituye delito.

Esta incongruencia de comportamiento a través de sus dictámenes contiene en su esencia causales de nulidad previstas expresamente en el artículo 50° inciso 6 del Código Procesal Civil norma de aplicación supletoria en este caso, cuando establece como deber de los jueces dentro del proceso: "fundamentar los autos y las sentencias bajo sanción de nulidad respetando el principio de jerarquía de las normas y el de congruencia".

SENTENCIA  
P.A. N° 1237 - 2013  
LIMA

b) La disposición de la Fiscalía Superior al pronunciarse en la Queja de Derecho Incurrir en la misma deficiencia de justificación externa de la argumentación contenida en su Dictamen, incurriendo también en la omisión de explicar y justificar respecto a la incongruencia de su proceder cuando anteriormente la Fiscalía Superior se había pronunciado ordenando se formule acusación y pronunciado como Fiscalía Superior por la improcedencia de la excepción de naturaleza de acción que, como se ha dicho por resolución judicial expedida por la Sala Superior Penal que confirmó la denegatoria de la excepción de naturaleza de acción ya había adquirido la calidad de firme.

En el presente caso nos encontramos frente a una falta de motivación externa, así como de sustancial incongruencia, pues los señores representantes del Ministerio Público demandados, al momento de sustentar su disposición fiscal, de no formular denuncia penal, no explican el porqué existiendo razones que anteriormente los llevaron a sostener una denuncia fiscal, y producto de la instrucción concluida, decide acusar solicitando pena, por estos mismos hechos y contra las mismas personas, optan por tomar una actitud procesal de no formular denuncia, sin explicar al momento de redactar y construir su argumentación en su disposición fiscal, el por qué ya no eran válidos sus argumentos persecutorios antes explicitados. Es por ello que deviene en amparable la pretensión constitucional de los recurrentes, pues por la forma como han procedido los Fiscales (provincial y superior) se ha violentado el debido proceso.

VI. RESPECTO A LA PARTICIPACION DEL SEÑOR EX PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA DR. FRANCISCO TAVARA CORDOVA.

Por las mismas razones, que no le alcanza participación a la señora Fiscal de la Nación y que fue separada en la presente causa, con resolución judicial que quedó consentida, al igual que el ex Presidente de la Corte Suprema Dr. Francisco Távara, también debe ser excluido del presente proceso, en razón que él, nunca participó en el dictado de las resoluciones judiciales materia de proceso de amparo.

VII. DECISIÓN FINAL:

Por estos fundamentos la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República en aplicación al artículo 55 del Código Procesal Constitucional: **RESUELVE:**



**SENTENCIA**  
**P.A. N° 1237 – 2013**  
**LIMA**

1. **REVOCAR** la sentencia apelada de fojas mil ochocientos veinte a fojas mil ochocientos sesenta y dos (fojas 1820 - 1862) de fecha cinco de noviembre de dos mil doce, que declaró **IMPROCEDENTE** la demanda de amparo; en los seguidos por doña Sandra Rocío Laura, María Burga Cisneros Caballero y otros, contra el Estado Peruano y otros; y **REFORMÁNDOLA** la declararon **FUNDADA**.
2. **DECLARARON NULA** la sentencia de la Cuarta Sala Penal de Reos en Cárcel del veintinueve de diciembre de dos mil seis (obrante a fojas ochocientos seis del Expediente de Habeas Corpus) suscrita por los Jueces Superiores Ventura Cueva, Vigo Zevallos y Vargas Gonzáles, recalda en el proceso de Habeas Corpus N° 078-2006, que confirmó la sentencia apelada expedida por el 12 Juzgado Penal de Lima; y **NULO** el auto aclaratorio de la sentencia de la Cuarta Sala Penal de Reos en Cárcel de fecha diecinueve de julio de dos mil siete.
3. **DECLARARON NULA** la sentencia de primera instancia del uno de diciembre de dos mil, del 12 Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima, a cargo de la Jueza María Margarita Sánchez Tuesta que declaró **FUNDADA** la demanda de Habeas Corpus a favor de ALAN MICHAEL AZIZOLLAHOFF GATE.
4. **DECLARARON NULA** la Disposición Fiscal Provincial su fecha trece de mayo de dos mil ocho expedida por la Trigésima Cuarta Fiscalía Provincial Penal de Lima, a cargo de doña Jacqueline del Pozo Castro "que resolvió no ejercitar acción penal contra ALAN MICHAEL AZIZOLLAHOFF GATZ Y EDGAR JESUS PAZ RAVINES por delito de homicidio culposo en agravio de Maritza del Pilar Alfaro Melchore y otras 28 víctimas más".
5. **DECLARARON NULA** la disposición fiscal de la Cuarta Fiscalía Superior Penal de Lima a cargo de doña SONIA ALBINA CHAVEZ GIL, de fecha 25 de Julio de 2008, por la cual se resolvió desestimar el recurso de queja interpuesto contra la disposición del Fiscal Provincial de no formular denuncia penal.
6. **ORDENARON** reponer el estado de las cosas hasta el momento en que se vulneraron estos derechos fundamentales, es decir que la Causa Penal N° 242-04 tramitada en el 21° Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima continúe con el séquito procesal, al estado de la resolución de fecha seis de noviembre de dos mil seis, contenida en el proceso penal (folios cuatrocientos setenta y seis del expediente de Habeas Corpus) expedida por la Juez de ese entonces, doctora Olga Isabel Contreras Arbieto.

**SENTENCIA**  
**P.A. N° 1237 – 2013**  
**LIMA**

7. **ORDENARON** que el 21 Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima, a cargo del expediente N° 242-04, *seguido contra Alan Michel Azizollahoff Gate y Edgar Jesús Paz Ravines por delito contra la Vida el Cuerpo y la Salud – en la modalidad de homicidio culposo agravado por omisión impropia en agravio de Maritza del Pilar Alfaro Melchore y veintiocho ( 28) víctimas más*, expida las resoluciones pertinentes, para garantizar la prosecución de la causa y de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la presente sentencia.
8. **MANDARON** se oficie remitiendo copia de la presente resolución a todos los órganos jurisdiccionales y fiscalías mencionadas en la parte resolutive de la presente sentencia, notificándose a todas las partes intervinientes en la presente causa.
- 9.- De conformidad con la Cuarta Disposición Final del Código Procesal Constitucional, **ORDENARON** la publicación de esta sentencia en el Diario Oficial "El Peruano", con arreglo a ley; Juez Supremo Ponente: Morales Parraguez.

**S.S.**

**SIVINA HURTADO**

**ACEVEDO MENA**

**VINATEA MEDINA**

**MORALES PARRAGUEZ**

**RUEDA FERNANDEZ**

Erh/



EXP. N.º 00913-2012-PA/TC  
MADRE DE DIOS  
DANIEL SARKA QUISPE

## RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 11 de mayo de 2012

### VISTO

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Daniel Sarka Quispe contra la resolución expedida por la Sala la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios, de fojas 94, su fecha 14 de diciembre de 2011, que declaró improcedente la demanda de autos; y,

### ATENDIENDO A

1. Que, con fecha 14 de marzo de 2011 el recurrente interpone demanda de amparo contra el Fiscal Superior Penal del Distrito Judicial de Madre de Dios, don Pedro Washington Luza Chullo, a fin de que se declare la nulidad de la Disposición N.º 07-2011-FSPA-MP-MDD, de fecha 25 de febrero de 2011, y que en consecuencia se ordene al Fiscal Provincial Penal de Tambopata que formalice y continúe la investigación preparatoria contra don Segundo Miguel López Aybar, presidente de la Asociación Pro Vivienda “Tierra Prometida” y otros, por delitos contra el patrimonio en su modalidad de usurpación agravada y daño agravado en su agravio, y violencia y resistencia a la autoridad en agravio de la Policía Nacional del Perú.

Sostiene que mediante la Disposición N.º 03-2009, emitida por el Fiscal Provincial de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa de Tambopata, se dispuso no formalizar ni continuar con la investigación preparatoria que se iniciara a consecuencia de la denuncia de parte que formulara contra don Segundo Miguel López Aybar y otros, actuación contra la que procedió a formular una queja de derecho, recurso que fue declarado improcedente por la Disposición N.º 04-2009, argumentándose su extemporaneidad en atención al plazo que dispone el artículo 12º de la Ley Orgánica del Ministerio Público, norma que fue tácitamente derogada por el artículo 334.5 del Nuevo Código Procesal Penal, que establece el plazo de 5 días para interponer el referido medio de impugnación. Agrega que por tal razón procedió a interponer una queja funcional en contra de dicho fiscal ante la Oficina de Control Interno del Ministerio Público, solicitud que fue acogida en todos sus términos, hecho que puso en conocimiento del Fiscal Superior competente, pero que, sin embargo, éste emitió la disposición cuestionada, afectando sus derechos de acceso a la justicia penal, al debido proceso y la tutela procesal efectiva.

2. Que el Primer Juzgado Mixto de Puerto Maldonado, con fecha 15 de agosto de 2011, declaró improcedente la demanda por estimar que el actor no cuestionó oportunamente la decisión materia de autos, habiendo adquirido la calidad de consentida, situación que no puede ser enervada por la sanción disciplinaria que le impuso la Oficina de Control Interno del Ministerio Público. A su turno, la Sala revisora confirmó la apelada por estimar que las investigaciones fiscales deficientes y las decisiones en ellas emitidas, no se encuentran referidas al contenido constitucionalmente protegido del derecho constitucional invocado, por lo que las partes tienen expedito el derecho para cuestionarlas al interior del proceso y por los mecanismos procesales correspondientes.
3. Que el Tribunal Constitucional tiene dicho que el proceso de amparo contra resoluciones judiciales “(...) está circunscrito a cuestionar decisiones judiciales que vulneren de forma directa derechos fundamentales, toda vez que a juicio de este Tribunal la irregularidad de una resolución judicial con relevancia constitucional se produce cada vez que ésta se expida con violación de cualquier derecho fundamental y no sólo en relación con los supuestos contemplados en el artículo 4 del C.P. Const”. (Cfr. STC N.º 3179-2004-AA, fundamento 14); criterio que, *mutatis mutandis*, resulta aplicable a las decisiones y pronunciamientos expedidos por los representantes del Ministerio Público.



4. Que asimismo en reiterada jurisprudencia este Colegiado ha manifestado que pretensiones destinadas a la evaluación de la calificación del delito, la subsunción de los hechos al tipo penal u otorgar mayor o menor valor probatorio a las pruebas que presenten los sujetos procesales con el objeto de aportar al esclarecimiento del ilícito investigado, son asuntos específicos cuya dilucidación corresponde únicamente a la justicia penal y al Ministerio Público, y, por tanto, resultan materias ajenas a la tutela de los derechos fundamentales, cuyo análisis escapa de la competencia de la jurisdicción constitucional, ya que *no* está entre sus facultades el evaluar la validez o invalidez de las disposiciones fiscales, salvo que éstas y sus efectos contravengan los principios que informan la función encomendada o que los pronunciamientos carezcan de razonabilidad y proporcionalidad, afectando con ello de modo manifiesto y grave cualquier derecho fundamental.
5. Que por otro lado este Tribunal tiene afirmado que el derecho a la motivación de resoluciones judiciales, como componente esencial del derecho al debido proceso, es el derecho de obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes en cualquier clase de procesos. La exigencia de que las decisiones judiciales sean motivadas en proporción a los términos del inciso 5) del artículo 139° de la Norma Fundamental, garantiza que los jueces, cualquiera que sea la instancia a la que pertenezcan, justifiquen sus decisiones, asegurando que la potestad de administrar justicia se ejerza con sujeción a la Constitución y a la ley, pero también con la finalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de defensa de los justiciables. La Constitución no garantiza una determinada extensión de la motivación, por lo que su contenido esencial se respeta siempre que exista fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto y, por sí misma, exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si ésta es breve o concisa, o se presenta el supuesto de motivación por remisión. (Cfr. STC N.° 1313-2005-PHC/TC, RTC N.° 9691-2005-PA/TC, entre otras). Criterio este último que también se aplica a los pronunciamientos del Ministerio Público.
6. Que teniendo en cuenta los argumentos planteados por el actor en su demanda y lo expuesto en los considerandos anteriores, este Colegiado advierte que en el presente caso existe un indebido rechazo *liminar* de la demanda, pues la pretensión propuesta sí cuenta con sustento constitucional directo en la medida de que forma parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones el obtener una resolución fundada en el derecho que corresponde aplicarse de manera pertinente al caso concreto, razón por la cual, al existir una presunta afectación del derecho invocado relacionado con la interpretación de las normas en el tiempo que correspondería aplicar en la evaluación del plazo para la interposición de la queja de derecho del actor, corresponde reponer la causa al estado en que el Juzgado de origen admita a trámite la demanda de autos y corra traslado de la misma al Fiscal Superior Penal del Distrito Judicial de Madre de Dios, don Pedro Washington Luza Chullo.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

## **RESUELVE**

**REVOCAR** la recurrida, debiéndose proceder a admitir a trámite la demanda y resolverla dentro de los plazos establecidos en el Código Procesal Constitucional.

Publíquese y notifíquese.

SS.

**BEAUMONT CALLIRGOS**  
**VERGARA GOTELLI**  
**ETO CRUZ**





TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



EXP. N.º 01138-2012-PA/TC  
AMAZONAS  
OLGA DEL CARMEN BOBADILLA  
TERÁN

## RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 19 de junio de 2012

### VISTO

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Olga del Carmen Bobadilla Terán contra la resolución expedida por la Sala Mixta y Penal de Apelaciones de Utcubamba de la Corte Superior de Justicia de Amazonas, de fojas 266, su fecha 19 de diciembre de 2011, que declaró infundada la demanda de autos; y,

### ATENDIENDO A

1. Que con fecha 4 de enero de 2011, la recurrente interpone demanda de amparo contra doña Henle Coronel Díaz, fiscal adjunta provincial de la Primera Fiscalía Provincial Penal de Utcubamba, y don José Alberto Loayza Ventura, fiscal superior de la Fiscalía Superior Mixta de Utcubamba, a fin de que se declare la nulidad de la Disposición Fiscal de Archivo, del 16 de agosto de 2010, y de la Disposición Fiscal N.º 123-2010-MP-FSM-Amazonas, del 27 de octubre de 2010, por considerar que se ha vulnerado sus derechos a la defensa, a la prueba y al debido proceso; solicita, en consecuencia, que se disponga declarar fundada la queja de derecho que interpuso contra la primera de las disposiciones cuestionadas, así como se disponga la realización de un debido y adecuado análisis de la conducta de doña Arlita Elisabeth Carrascal Carrasco por otros fiscales, respecto del tipo penal contenido en el artículo 365º del Código Penal. Adicionalmente solicita que se declare que los emplazados no han realizado una debida valoración del Certificado de Incapacidad N.º 153, emitido por el Hospital Buen Samaritano.

Sostiene la recurrente que el día 14 de enero de 2010, en circunstancias en que venía realizando sus labores cotidianas como Fiscal Provincial de la Primera Fiscalía Provincial de Utcubamba, doña Arlita Elisabeth Carrascal Carrasco ingresó a su despacho sin ser anunciada y solicitó su atención, ante lo cual la recurrente le pidió su identificación, para que luego de algunos minutos la referida ciudadana se exaltara y procediera a agraviarla verbalmente sin tener en consideración su estado de gravedad, razón por la cual se dispuso su detención y posterior denuncia por el delito de violencia contra la autoridad, investigación preliminar que ha sido archivada por las disposiciones cuestionadas, sin haberse valorado debidamente el contenido del Certificado de Incapacidad N.º 153, expedido por EsSalud, certificado



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



EXP. N.º 01138-2012-PA/TC  
AMAZONAS  
OLGA DEL CARMEN BOBADILLA  
TERÁN

que obra en la carpeta fiscal y mediante el cual se demostraría la amenaza a su salud de la que fue víctima y se acreditaría el delito cometido en su agravio.

2. Que doña Henle Coronel Díaz contesta la demanda manifestando que el ordenamiento procesal penal prevé el reexamen de los actuados siempre y cuando se aporten nuevos elementos de convicción, razón por la cual el proceso de amparo no resulta adecuado para lograr el propósito de la recurrente, pues el referido reexamen no constituye un derecho constitucional directo. Asimismo, refiere que el día de los hechos, la recurrente prestó su declaración ante el representante del Ministerio Público sin presentar algún impedimento o malestar, por lo que el certificado N.º 153 de EsSalud resulta cuestionable. Por su parte, el procurador público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio Público deduce la excepción de caducidad y contesta la demanda manifestando que la recurrente no ha demostrado que el proceso de amparo sea la vía idónea para restablecer el ejercicio del derecho presuntamente vulnerado y que la demanda está dirigida a exigir al juez constitucional asumir una competencia exclusiva del Ministerio Público.
3. Que el Juzgado Mixto de Utcubamba, con fecha 24 de mayo de 2011, desestimó la excepción propuesta y con fecha 8 de agosto de 2011, declaró infundada la demanda por estimar que los fiscales emplazados han ejercido sus funciones dentro del marco legal de sus competencias, por lo que no se han vulnerado los derechos fundamentales invocados. A su turno, la Sala revisora confirmó la apelada por similar fundamento.
4. Que el Tribunal Constitucional tiene dicho que el proceso de amparo contra resoluciones judiciales "(...) *está circunscrito a cuestionar decisiones judiciales que vulneren de forma directa derechos fundamentales, toda vez que a juicio de este Tribunal la irregularidad de una resolución judicial con relevancia constitucional se produce cada vez que ésta se expida con violación de cualquier derecho fundamental y no sólo en relación con los supuestos contemplados en el artículo 4 del C.P. Const.*" (Cfr. STC N.º 3179-2004-PA/TC, FJ 14); criterio que, *mutatis mutandis*, resulta aplicable a las decisiones y pronunciamientos expedidos por los representantes del Ministerio Público.
5. Que también se ha puntualizado que el debido proceso en su variable de respeto a la motivación de las resoluciones salvaguarda al justiciable frente a la arbitrariedad judicial, toda vez que "*garantiza que las resoluciones judiciales no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se deriven del caso*" (Cfr. STC N.º



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



EXP. N.º 01138-2012-PA/TC  
AMAZONAS  
OLGA DEL CARMEN BOBADILLA  
TERÁN

3943-2006-PA/TC, fundamento 4). El referido criterio también es aplicable a los pronunciamientos del Ministerio Público.

6. Que de los argumentos planteados por la recurrente y los medios de prueba adjuntados en autos, se advierte que en el presente caso la recurrente pretende que el juez constitucional se pronuncie sobre materias ajenas a la tutela de los derechos fundamentales, pues a su consideración, los hechos de los que fue víctima, si constituyen un acto delictivo subsumible en el tipo penal de *violencia contra la autoridad para obligarle a algo* recogido en el artículo 365º del Código Penal, por lo que no debió archivarse la denuncia presentada en contra de doña Arlita Elisabeth Carrascal Carrasco. Al respecto cabe precisar que tanto la subsunción del evento ilícito al supuesto de hecho previsto en la norma como el ejercicio de la acción penal son atributos del representante del Ministerio Público, así como el recabar la prueba al momento de formalizar la denuncia es un asunto específico que le compete al Ministerio Público; consecuentemente, tales atribuciones escapan del ámbito de la jurisdicción constitucional; y ello porque no es facultad de esta jurisdicción analizar la validez o invalidez de las resoluciones fiscales expedidas, ya que ello implica un juicio de reproche penal sustentado en actividades investigatorias y de valoración de las pruebas, asuntos que no son de competencia *ratione materiae* de los procesos constitucionales, a menos que pueda constatar una arbitrariedad manifiesta por parte de la autoridad emplazada que ponga en evidencia la violación de derechos de naturaleza constitucional, lo que no ha ocurrido en el presente caso, criterio que ya ha sido recogido por este Tribunal en pronunciamientos anteriores (Cfr. STC N.ºs 1249-2011-PA/TC, 3471-2011-PA/TC, 3578-2011-PA/TC, entre otras).

En tal sentido y a menos que se trate de decisiones manifiestamente arbitrarias y sin ningún sustento fáctico o jurídico, o abiertamente irrazonables, las resoluciones fiscales mediante las cuales los representantes del Ministerio Público, en ejercicio de sus atribuciones, disponen formular denuncia o abstenerse de hacerlo, como sucede en el caso de autos, cuando estas se encuentran razonablemente sustentadas en hechos y disposiciones legales que los respaldan, no pueden ser cuestionadas mediante el proceso de amparo.

7. Que en el contexto descrito, en el caso de autos los hechos y fundamentos que respaldan las decisiones de las dos instancias del Ministerio Público se encuentran razonablemente expuestos en las propias decisiones que se cuestionan, y de las mismas no puede desprenderse un agravio manifiesto a los derechos que invoca la recurrente, constituyendo por el contrario decisiones emitidas dentro del ámbito de las funciones que le corresponde al Ministerio Público conforme a la Constitución y



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



EXP. N.º 01138-2012-PA/TC  
AMAZONAS  
OLGA DEL CARMEN BOBADILLA  
TERÁN

su propia Ley Orgánica. En consecuencia, la demanda deviene en improcedente de conformidad con el artículo 5.1 del Código Procesal Constitucional.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

#### RESUELVE

Declarar **IMPROCEDENTE** la demanda.

Publíquese y notifíquese.

SS.

URVIOLA HANI  
VERGARA GOTELLI  
MESÍA RAMÍREZ

Lo que certifico:

VICTOR ANDRÉS ESCOBAR CARRERA  
SECRETARIO DEL TRIBUNAL



EXP. N.º 0818-2013-PA/TC  
LAMBAYEQUE  
PEDRO GABRIEL  
MATUTE ARÁOZ

## RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 5 de setiembre de 2013

### VISTO

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Pedro Gabriel Matute Aráoz contra la resolución expedida de fojas 191, su fecha 12 de diciembre de 2012, por la Sala de Derecho Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, que declaró improcedente, la demanda de autos; y,

### ATENDIENDO A

1. Que con fecha 18 de noviembre de 2011 el recurrente interpone demanda de amparo contra la titular de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, el titular de la Cuarta Fiscalía Superior Penal Transitoria de Lambayeque y el Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio Público, solicitando que se declare nulas las Disposiciones Fiscales N.ºs 02-2011 y 02-2011, de 2 de abril de 2011 y 2 de setiembre de 2011 respectivamente, que declaran no haber mérito a formalizar y continuar con la investigación preparatoria. Asimismo contra las Disposiciones Fiscales Superiores N.ºs 01-2011 y 01-2011, de 23 de mayo de 2011 y 24 de octubre de 2011, que desestimando su recurso de queja ordenan el archivo definitivo de las Carpetas Fiscales N.ºs 194-2011 y 1957-2011, respectivamente, y que en consecuencia reponiendo las cosas al estado anterior a la vulneración de sus derechos, se ordene que un representante del Ministerio Público formalice denuncia penal contra don Fernando Antonio de la Piedra Ortigas, por el delito de libramiento indebido cometido en su agravio y en el de la Inmobiliaria y Promotora Costa Azul E.I.R.L. Aduce la vulneración de sus derechos a la tutela jurisdiccional efectiva y al debido proceso, particularmente, de su derecho a la prueba.

Precisa que por derecho propio y en representación de la empresa mencionada formuló denuncia penal contra don Pedro Antonio de la Piedra Ortigas, por el delito de libramiento indebido cometido en su agravio (Carpetas Fiscales N.ºs 1957-2011 y 194-2011) y de la Inmobiliaria y Promotora Costa Azul E.I.R.L. (Carpetas Fiscales N.ºs 194-2011). Añade que ambas investigaciones preparatorias estuvieron a cargo de la Fiscalía Provincial Penal emplazada, la cual mediante las disposiciones fiscales de primer grado cuestionadas, ordenó el archivo definitivo de ambos casos. Manifiesta que al no encontrar arreglados a ley tales pronunciamientos interpuso recurso de queja, que sin embargo la Fiscalía Superior demandada no valoró los medios ofrecidos y sin exponer las razones que sustentan su decisión, aprobó la decisión apelada en todos sus extremos.

2. Que don Julio Enrique Morales Saldaña, fiscal de la Cuarta Fiscalía Superior Penal Transitoria de Lambayeque, contesta la demanda alegando que no existe afectación de derechos constitucionales y que la denuncia formulada por el demandante se archivó por cuanto los hechos denunciados no constituyen delitos, conforme se argumenta en la disposición fiscal que se cuestiona mediante el presente proceso de amparo y a cuyos fundamentos se remite.

A su turno el procurador público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio Público contesta la demanda aduciendo que no existe afectación de derechos y que el recurrente cuestiona una disposición que le es adversa.

3. Que con fecha 25 de junio de 2012 el Séptimo Juzgado Especializado Civil de Chiclayo declaró improcedente la demanda por estimar que de los autos no se advierte la afectación de los derechos constitucionales invocados, puesto que lo peticionado carece de relevancia constitucional, conforme lo establece el artículo 2º del Código Procesal Constitucional.



La Sala de Derecho Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque confirmó la resolución apelada por similares fundamentos, añadiendo que la alegada carencia de motivación de la disposición fiscal cuestionada no faculta al juzgador constitucional para modificar el carácter conceptual de la misma.

4. Que fluye de autos que el presente proceso constitucional tiene por objeto cuestionar la decisión fiscal (emitida en doble grado) de abstenerse del ejercicio de la acción penal pública disponiendo el archivamiento de las denuncias de parte formuladas por la demandante, correspondientes a las Carpetas Fiscales N.ºs 194-2011 y 1957-2011, respectivamente.
5. Que se ha destacado en constante y reiterada jurisprudencia que el proceso de amparo contra resoluciones judiciales *"está circunscrito a cuestionar decisiones judiciales que vulneren de forma directa derechos fundamentales toda vez que a juicio de este Tribunal, la irregularidad de una resolución judicial con relevancia constitucional se produce cada vez que esta se expida con violación de cualquier derecho fundamental y no solo en relación con los supuestos contemplados en el artículo 4 del CP Const. (Cfr. STC N.º 3179-2004-AA/TC, fundamento 14). Criterios que mutatis mutandi resultan aplicables a las decisiones emitidas por los representantes del Ministerio Público.*

Asimismo que *"a menos que se trate de decisiones manifiestamente arbitrarias y sin ningún sustento fáctico o jurídico, o abiertamente irrazonables, las resoluciones fiscales mediante las cuales los representantes del Ministerio Público, en ejercicio de sus atribuciones, disponen formular denuncia o abstenerse, como sucede en el caso de autos, cuando estas se encuentran razonablemente sustentadas en hechos y disposiciones legales que los respaldan, no pueden ser cuestionadas mediante el proceso de amparo". (Cfr. STC. N.º 4883-2006-AA/TC, fundamento 6).*

6. Que por ello el Tribunal es de la opinión de que la presente demanda debe ser desestimada, pues vía el proceso de amparo se pretende que el juez constitucional se pronuncie sobre materias ajenas a la tutela de derechos fundamentales. En efecto tanto la subsunción del evento ilícito en el supuesto de hecho previsto en la norma como el ejercicio de la acción penal son atributos del representante del Ministerio Público, así como recabar la prueba al momento de formalizar denuncia es un asunto específico que le compete a la fiscalía; consecuentemente tales atribuciones escapan del ámbito de la jurisdicción constitucional; y ello porque no es facultad de esta analizar la validez o invalidez de las resoluciones fiscales expedidas, ya que ello implica un juicio de reproche penal sustentado en actividades investigatorias y de valoración de las pruebas, asuntos que no son de competencia *ratione materiae* de los procesos constitucionales, a menos que pueda constatar una arbitrariedad manifiesta por parte de la autoridad emplazada que ponga en evidencia la violación de derechos de naturaleza constitucional, lo que sin embargo no ha ocurrido en el presente caso.
7. Que finalmente cabe resaltar que en el caso de autos las decisiones de las dos instancias del Ministerio Público se encuentran razonablemente expuestas en los pronunciamientos que se cuestionan y que de ellas no se desprende un agravio manifiesto a los derechos que invoca el recurrente, constituyendo por el contrario decisiones emitidas dentro del ámbito de las funciones que le corresponde al Ministerio Público conforme a la Constitución y su propia Ley Orgánica.

En consecuencia la demanda deviene en improcedente de conformidad con el artículo 5.1 del Código Procesal Constitucional.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

## RESUELVE

Declarar **IMPROCEDENTE** la demanda.

Publíquese y notifíquese.



EXP. N.º 02748-2010-PHC/TC  
LIMA  
ALEXANDER MOSQUERA  
IZQUIERDO

## SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 11 días del mes de agosto de 2010, el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los magistrados Mesía Ramírez, Presidente; Beaumont Callirgos, Vicepresidente; Vergara Gotelli, Calle Hayen, Eto Cruz, Álvarez Miranda y Urviola Hani, pronuncia la siguiente sentencia.

### ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Macjhoner Lezama Gutarra, a favor de don Alexander Mosquera Izquierdo, contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 95, su fecha 2 de junio de 2010, que confirmando la apelada, declaró infundada la demanda de autos.

### ANTECEDENTES

Con fecha 3 de mayo de 2010, don Alexander Mosquera Izquierdo interpone demanda de hábeas corpus contra el juez del Quincuagésimo Segundo Juzgado Penal de Lima, don Omar Abraham Ahomed Chávez, a fin que se ordene su inmediata libertad, por considerar que se ha vulnerado su derecho a la libertad individual más concretamente, el derecho a que la prisión preventiva no exceda el plazo legal.

Refiere el actor que a la fecha ha cumplido 18 meses de prisión preventiva en el proceso penal que se le sigue por la presunta comisión del delito de tráfico ilícito de drogas (Exp. N.º 51019-2008), habiendo cumplido el plazo legal que señala el artículo 137º, primer párrafo, del Código Procesal Penal de 1991; no obstante ello, señala que el juez emplazado no ha ordenado su inmediata libertad, lo cual, vulnera el derecho invocado.

El Trigésimo Juzgado Penal de Lima, con fecha 12 de mayo de 2010, declaró infundada la demanda, por considerar que no se ha vulnerado el derecho invocado, toda vez que tratándose de delitos de tráfico ilícito de drogas el plazo inicial se duplica de manera automática (36 meses), encontrándose dentro de dicho plazo.

La Segunda Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, con fecha 2 de junio de 2010, confirmó la apelada por similares fundamentos.

### FUNDAMENTOS

#### Delimitación del petitorio

1. El objeto de la demanda es que se disponga la inmediata excarcelación del actor, toda vez que, según refiere, viene cumpliendo mandato de prisión preventiva, por un plazo superior a los 18 meses, sin que exista sentencia condenatoria en primera instancia (plazo que para los procesos penales ordinarios establece el artículo 137º, primer párrafo, del Código Procesal Penal), lo cual, vulnera su derecho a la libertad personal, más concretamente, el derecho a que la prisión preventiva no exceda el plazo legal.

#### Cuestión previa

2. Previo a evaluar la pretensión que se postula en la demanda de autos, este Tribunal, consciente de la problemática del país y de la política de interés nacional de lucha contra el tráfico ilícito de drogas y la criminalidad organizada, considera pertinente, en el presente caso, efectuar algunas precisiones sobre el control constitucional de la duración de la investigación preliminar en este tipo de delitos a cargo del Ministerio Público.



## El control constitucional de las actuaciones del Ministerio Público

3. El artículo 159° de la Constitución ha asignado al Ministerio Público una serie de funciones constitucionales, entre las que destacan *la facultad de conducir o dirigir desde su inicio la investigación de delito, así como la de ejercitar la acción penal ya sea de oficio o a pedido de parte*. Si bien se trata de facultades discrecionales que, de modo expreso, el poder constituyente le ha reconocido al Ministerio Público, sin embargo, no pueden ser ejercidas, de manera irrazonable, con desconocimiento de los principios y valores constitucionales, ni tampoco al margen del respeto de los derechos fundamentales, antes bien, en tanto que el Ministerio Público es un órgano constitucional constituido y por ende sometido a la Constitución, tales facultades deben ser ejercidas en estricta observancia y pleno respeto de los mismos.
4. En ese sentido, la posibilidad que la justicia constitucional realice un control de las actuaciones del Ministerio Público tiene su sustento, entre otros supuestos, en la garantía y el pleno respeto del derecho fundamental al debido proceso y sus diversas manifestaciones. Y es que, hoy por hoy, no existe duda que este derecho despliega también su eficacia jurídica en el ámbito de la etapa prejurisdiccional de los procesos penales; es decir, ahí en la fase del proceso penal en la que al Ministerio Público le corresponde concretizar el mandato previsto en el artículo 159° de la Constitución. Claro está, que las garantías previstas en la referida disposición constitucional serán aplicables a la investigación fiscal siempre que sean compatibles con su naturaleza y fines de las actuaciones del Ministerio Público.

## El derecho constitucional al plazo razonable de la investigación preliminar

5. El derecho al plazo razonable de la investigación preliminar (policial o fiscal) en tanto manifestación del derecho al debido proceso alude a un lapso de tiempo suficiente para el esclarecimiento de los hechos objeto de investigación y la emisión de la decisión respectiva. Si bien es cierto que toda persona es susceptible de ser investigada, no lo es menos que para que ello ocurra, debe existir la concurrencia de una *causa probable* y la *búsqueda* de la comisión de un ilícito penal en un plazo que sea razonable. De ahí que resulte irrazonable el hecho que una persona esté sometida a un estado permanente de investigación policial o fiscal. Sobre el particular, este Tribunal en la sentencia del Exp. N° 5228-2006-PHC/TC, *Gleiser Katz*, ha precisado con carácter de **doctrina jurisprudencial** (artículo VI del Título Preliminar del CPConst) que para determinar la razonabilidad del plazo de la investigación preliminar, se debe acudir cuando menos a dos criterios: *Uno subjetivo* que está referido a la actuación del investigado y a la actuación del fiscal, y *otro objetivo* que está referido a la naturaleza de los hechos objeto de investigación.
6. Dentro del **criterio subjetivo**, en cuanto se refiere a la *actuación del investigado*, es de señalar que la actitud obstruccionista de este puede manifestarse en: **1)** la no concurrencia, injustificada, a las citaciones que le realice el fiscal a cargo de la investigación, **2)** el ocultamiento o negativa, injustificada, a entregar información que sea relevante para el desarrollo de la investigación, **3)** la recurrencia, de mala fe, a determinados procesos constitucionales u ordinarios con el fin de dilatar o paralizar la investigación prejurisdiccional, y **4)** en general, todas aquellas conductas que realice con el fin de desviar o evitar que los actos de investigación conduzcan a la formalización de la denuncia penal.
7. En cuanto a la *actividad del fiscal*, los criterios a considerar son la capacidad de dirección de la investigación y la diligencia con la que ejerce las facultades especiales que la Constitución le reconoce. Si bien se parte de la presunción de constitucionalidad y legalidad de los actos de investigación del Ministerio Público, ésta es una presunción *iuris tantum*, en la medida que ella puede ser desvirtuada. Ahora bien, para la determinación de si en una investigación prejurisdiccional hubo o no *diligencia* por parte del fiscal a cargo de la investigación deberá considerarse, la realización o no de aquellos actos que sean conducentes o idóneos para el esclarecimiento de los hechos y la formalización de la denuncia respectiva u otra decisión que corresponda.
8. Dentro del **criterio objetivo**, a juicio del Tribunal Constitucional, cabe comprender la naturaleza de los hechos objeto de investigación; es decir, la complejidad del objeto a investigar. Al respecto, es del caso señalar que la complejidad puede venir determinada no sólo por los hechos mismos objeto de esclarecimiento, sino también por el número de investigados más aún si se trata de organizaciones criminales nacionales y/o internacionales, la particular dificultad de realizar determinadas pericias o



exámenes especiales que se requieran, así como la complejidad de las actuaciones que se requieran para investigar los tipos de delitos que se imputan al investigado, como por ejemplo, los delitos de lesa humanidad, terrorismo, tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, etc. También debe considerarse el grado de colaboración de las demás entidades estatales cuando así lo requiera el Ministerio Público.

9. Sobre lo anterior, cabe precisar que, la razonabilidad del plazo de la investigación preliminar no puede ser advertida por el simple transcurso *cronológico* del tiempo, como si se tratase de una actividad mecánica, sino que más bien se trata de una actividad compleja que requiere del uso de un baremo de análisis especial que permita verificar las específicas circunstancias presentes en cada investigación (actuación del investigado, actuación del fiscal y la naturaleza de los hechos objeto de la investigación). Asimismo, este Tribunal considera que el plazo razonable de la investigación preliminar no tiene ni puede tener en abstracto un único plazo para todos los casos, traducido en un número fijo de días, semanas, meses o años, sino que tal razonabilidad, inevitablemente debe ser establecida según las circunstancias concretas de cada caso. En ese sentido, esta especial evaluación debe ser realizada en principio por el propio Fiscal a cargo de la investigación (de oficio o a pedido de parte), mediante una decisión debidamente motivada o, por el juez constitucional cuando conozca de procesos constitucionales en que se alegue la afectación de este derecho constitucional.
10. Por otro lado, si bien el Nuevo Código Procesal Penal de 2004 aún no está vigente en todo el país no cabe duda que este cuerpo legal contiene diversos dispositivos que contribuyen al perfeccionamiento del derecho procesal peruano que se erige como el programa procesal penal de la Constitución, y que por tanto, pueden servir de parámetro interpretativo para la solución de otros casos en que sean aplicables. En ese sentido, en aras de optimizar la tutela del derecho al plazo razonable de la investigación, este Tribunal considera que en las investigaciones preliminares que se **inicien** bajo la vigencia y aplicación de los alcances del Código de Procedimientos Penales y el Código Procesal Penal de 1991, el Fiscal conforme a dichas normas, debe fijar un plazo razonable de la investigación preliminar según las características, complejidad y circunstancias de los hechos objeto de la investigación, y de ser el caso, justificar las razones por las cuáles debería continuarse con la realización de la investigación.
11. No obstante ello, se advierte que el plazo de investigación preparatoria previsto en el artículo 342.2 del Nuevo Código Procesal Penal de 2004, no se condice con la realidad social, ni con la capacidad de actuación del Ministerio Público, pues es de conocimiento público que existen investigaciones preliminares o preparatorias sobre tráfico ilícito de drogas y/o lavado de activos que por la complejidad del asunto exceden los ocho meses, que pueden ser prorrogados por igual plazo.

Por esta razón, este Tribunal estima que el plazo previsto en el artículo referido debe ser modificado con la finalidad de que no queden impunes los delitos de tráfico ilícito de drogas y/o lavado de activos, pues vencido el plazo (8 o 16 meses) se puede ordenar la conclusión de la investigación preparatoria. De ahí que, se le exhorte al Congreso de la República a que modifique el plazo del artículo mencionado (investigación preparatoria en casos complejos) de acuerdo a la capacidad de actuación del Ministerio Público, sin que ello suponga la afectación del derecho al plazo razonable.

### **La tutela del derecho al plazo razonable de la investigación preliminar**

12. Llegado hasta aquí, este Tribunal considera que la tutela del derecho al plazo razonable de la investigación preliminar no supone la exclusión del demandante de la investigación, sino que actuando dentro del marco constitucional y democrático del proceso penal en su fase preliminar, lo que, corresponde es la reparación *in natura* por parte del Ministerio Público que consiste en emitir en el plazo más breve posible el pronunciamiento sobre el fondo del asunto que suponga la conclusión de la investigación prejurisdiccional, bajo responsabilidad. Ahora bien, como es obvio, dicho pronunciamiento atendiendo a las facultades constitucionales y legales del Ministerio Público puede materializarse sea en la formalización de la denuncia o, sea en el archivo definitivo de la investigación, etc.
13. No obstante lo anterior, este Tribunal precisa que el plazo para el pronunciamiento sobre el fondo del asunto, debe ser fijado por el juez constitucional, en cada caso concreto, teniendo en cuenta el estado actual de la investigación, la importancia de los bienes jurídicos tutelados, la incidencia en los valores e instituciones básicas de todo Estado Constitucional de Derecho y el cumplimiento de los deberes y



obligaciones constitucionales, así como procurando que dicho plazo no sea un imposible para unos casos y/o un exceso para otros.

14. De otro lado, surge la interrogante sobre la consecuencia jurídica aplicable en los casos en que ya se ha formalizado la denuncia penal. Sobre el particular, este Tribunal considera que al encontrarse ya judicializado los hechos materia de la persecución penal, corresponde al juez de la causa, efectuar el respectivo examen constitucional, a fin de verificar la violación o no del derecho al plazo razonable de la investigación preliminar. En este orden de cosas, la eventual determinación y/o verificación de la vulneración del derecho no supone como es obvio, el archivo o la conclusión de la investigación judicial, sino que el juez de la causa deberá poner en conocimiento de esta circunstancia a las instancias correspondientes para las responsabilidades a que hubiere lugar (Oficina de Control de la Magistratura, Consejo Nacional de la Magistratura, Procuraduría del Poder Judicial o del Ministerio Público, etc.).
15. Finalmente, cabe recordar que los delitos de tráfico ilícito de drogas y lavado de activos, constituyen ilícitos de carácter pluriofensivo, en la medida que ponen en estado de alarma y peligro a las bases sociales y amenazan la propia existencia del Estado. Es por ello, que la obligación constitucional del Estado peruano, prevista en el artículo 8° de la Constitución, de prevenir y *sancionar* este tipo de ilícitos “no debe agotarse en la mera descripción típica de las conductas delictivas en el Código Penal y en las leyes especiales, criminalizando el delito de tráfico ilícito de drogas [y sus derivaciones], con penas severas proporcionales a los bienes constitucionalmente protegidos que se afligen, sino que además para llegar a tal cometido debe procurarse el establecimiento de procedimientos de investigación eficientes, es decir, que objetivamente demuestren resultados cada vez más eficaces; lo contrario, significaría incurrir en una infracción constitucional por parte de las autoridades competentes para ello” (Exp. N.º 04750-2007-PHC/TC). En ese sentido, a fin de concretizar esta obligación constitucional de prevenir y sancionar eficazmente el tráfico ilícito de drogas y sus derivaciones, y estando a lo dispuesto por el artículo III del Título Preliminar del CPConst., este Tribunal considera que en los procesos constitucionales en que se haya dictado sentencia estimatoria de segundo grado relacionados con el delito de tráfico ilícito de drogas y/o lavado de activos, excepcionalmente, la Procuraduría del Estado correspondiente se encuentra habilitada –independientemente del plazo– para la interposición de un recurso de agravio constitucional especial, el mismo que deberá concedido por las instancias judiciales.
16. La presente postura jurisprudencial se sustenta no solamente en la obligación constitucional impuesta por el artículo 8° de la Constitución, sino también en las obligaciones internacionales asumidas por el Estado. En tal sentido, resulta importante destacar que en virtud de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, enmendada por el Protocolo de 1972, el Estado asumió la obligación de considerar como delito todas aquellas actividades vinculadas al cultivo, producción y distribución de estupefacientes para usos no admitidos por la Convención, enfatizando que a los infractores se les debe castigar con penas privativas de la libertad.

De manera similar, en virtud del Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971, el Estado se comprometió a realizar acciones preventivas y represivas contra el tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas contenidas en las listas anexas a dicho convenio. Asimismo, por imperio de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988, el Estado se obligó a tipificar como delitos la producción, distribución y comercialización de la adormidera o amapola, la hoja de coca, el cannabis y cualquier otro estupefaciente. Cabe resaltar que esta última convención también atribuye carácter delictivo a la organización, gestión o financiación de las actividades antes mencionadas, así como a la conversión o transferencia de bienes con el objeto de ocultar o encubrir su origen ilícito.

Por último, se encuentra la Convención Internacional para la represión del financiamiento del terrorismo, que reconoce como delito la acción de proveer o recolectar fondos con la intención de que se utilicen, o a sabiendas de que serán utilizados, para cometer en otro Estado un acto de terrorismo o cualquier otro acto destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves a un civil o a cualquier persona que no participe en las hostilidades en una situación de conflicto armado y que dispone la obligación de cada Estado parte de sancionar estos delitos con penas adecuadas en las que se tenga en cuenta su carácter grave.

Como puede apreciarse, el tráfico ilícito de drogas es un flagelo social que entraña un peligro para la vida digna y pacífica de la humanidad, pues no sólo afecta la salud física, psicológica y moral de las personas,



sino que también afecta a la sociedad y al Estado en su conjunto, ya que incrementa los niveles de violencia y delincuencia, implantando una cultura de miedo, inseguridad y zozobra; así como fomentando la corrupción, el debilitamiento de las instituciones y generando desaliento en la inversión privada. Por estas razones, este Tribunal estima que es adecuado y racional habilitar excepcionalmente el recurso de agravio constitucional contra sentencias estimatorias de segundo grado, pues no puede permitirse ni avalarse que los delitos de tráfico ilícito de drogas y/o lavado de activos queden impunes.

### **Análisis del caso materia de controversia constitucional**

17. Sobre el plazo de la prisión preventiva, el artículo 137°, primer párrafo, del Código Procesal Penal de 1991 establece que su duración para los procesos ordinarios es de 18 meses. A su vez, prescribe que “Tratándose de procedimientos por delitos de tráfico ilícito de drogas, terrorismo, espionaje y otros de naturaleza compleja seguidos contra más de diez imputados, en agravio de igual número de personas, o del Estado, el plazo límite de detención se duplicará”. Asimismo, este Tribunal en la sentencia del Exp. N.º 0330-2002-HC/TC, *Ben Okoli* y otro ha precisado que vencido el plazo límite de detención sin haberse dictado sentencia en primer grado, la dúplica procede automáticamente, es decir, se extiende hasta 36 meses.
18. En el *caso* de autos, a fojas 55 obra la resolución de fecha 30 de abril de 2010, que señala que dado que los inculcados vienen siendo procesados por la presunta comisión del delito de tráfico ilícito de drogas, el plazo máximo inicial de la prisión preventiva de 18 meses se duplica de manera automática por el plazo máximo de 36 meses, el mismo que a la fecha no ha vencido; por lo que este Tribunal entiende que la detención judicial que cumple el actor, a la fecha, no ha excedido plazo legal, pues, conforme al criterio jurisprudencial precisado por este Tribunal para este tipo de delitos, la dúplica procede de manera automática. En consecuencia, la demanda debe ser desestimada al no haberse acreditado la vulneración del derecho a que la prisión preventiva no exceda el plazo legal.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú,

### **HA RESUELTO**

1. Declarar **INFUNDADA** la demanda de hábeas corpus al no haberse producido la violación del derecho a la libertad personal, más concretamente, el derecho a que la prisión preventiva no exceda el plazo legal.
2. Establecer que los fundamentos 5 a 10 y 12 a 15 de la presente sentencia constituyen doctrina jurisprudencial, por lo que debe ser observada, respetada y aplicada de manera inmediata por todos los jueces de la República, conforme al artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional.
3. Disponer que de conformidad con lo establecido en los artículo 8° de la Constitución y III del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, en los procesos constitucionales relacionados con el delito de tráfico ilícito de drogas y/o lavado de activos en los que se haya dictado sentencia estimatoria de segundo grado, la Procuraduría del Estado correspondiente se encuentra excepcionalmente habilitada –independientemente del plazo– para la interposición del *recurso de agravio constitucional*, el mismo que debe ser concedido por las instancias judiciales.
4. Exhortar al Congreso de la República para que modifique el plazo de la investigación preparatoria previsto en el artículo 342.2 del Nuevo Código Procesal Penal de 2004, conforme se señala en el fundamento 11, *supra*.

Publíquese y notifíquese.

SS.

**MESÍA RAMÍREZ**  
**BEAUMONT CALLRGOS**  
**VERGARA GOTELLI**





TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.º 4883-2006-PA/TC  
LA LIBERTAD  
CARLOS EDUARDO SÁNCHEZ MACHADO

### RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 13 de abril de 2007

#### VISTO

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Carlos Eduardo Sánchez Machado contra la resolución de la Primera Sala Civil de la Corte de Justicia de La Libertad, de fojas 127, su fecha 9 de marzo de 2006, que, confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda de amparo de autos; y,

#### ATENDIENDO A

1. Que con fecha 9 de agosto de 2005 el recurrente interpone demanda de amparo contra doña Carla A. León Aguilar, fiscal de la Primera Fiscalía en lo Penal de Trujillo; y don Francisco Javier Arista Montoya, fiscal superior de la Primera Fiscalía del mismo distrito judicial, solicitando que se deje sin efecto las resoluciones de fecha 13 de abril, que resuelven "no haber mérito para ejercitar la acción penal" contra Betty Delgado Castro, respecto de los hechos denunciados por el recurrente; así como la resolución de fecha 10 de junio de 2005, emitida por la Primera Fiscalía Superior Penal, que declaró infundada la queja de derecho interpuesta y confirmó lo resuelto por la Fiscalía Penal. Según refiere, con tales actos, los órganos emplazados del Ministerio Público habrían violado sus derechos a la tutela jurisdiccional efectiva y al debido proceso, en la medida en que no han fundamentado adecuadamente el archivamiento de la denuncia presentada por el recurrente.
2. Que, mediante resolución de fecha 15 de agosto de 2005, el Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Trujillo declaró improcedente la demanda, tras considerar que la resolución cuestionada, al no tratarse de una resolución judicial, no se encontraría en los supuestos del artículo 4.º del Código Procesal Constitucional. La recurrida confirmó la apelada por similares fundamentos.
3. Que este Colegiado no concuerda con el argumento aducido por las instancias judiciales para rechazar la demanda. Al respecto, es menester dejar establecido que el hecho de que el artículo 4.º del Código Procesal Constitucional y el artículo 200.2 de la Constitución no hagan referencia expresa a las resoluciones del Ministerio Público, no implica que estas no puedan ser cuestionadas vía los procesos constitucionales. Resulta



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

evidente que las resoluciones del Ministerio Público, en vista de que se trata del ejercicio del poder público del Estado, requieren de mecanismos adecuados de control, dado que pueden, eventualmente, afectar derechos fundamentales de las personas sometidas a investigación, tras la imputación de algún ilícito penal. Ante tales eventualidades, los procesos constitucionales, entre ellos el amparo, constituyen medios adecuados y efectivos de defensa que deben ser administrados por los jueces constitucionales apelando a una interpretación finalista que no restrinja su uso, y sobre todo que no generen zonas de intangibilidad a la labor de control que corresponde a la jurisdicción constitucional.

4. Que, sentado lo anterior, este Colegiado también debe precisar que el trámite que debe seguir una demanda de amparo contra resoluciones judiciales es distinto al trámite contra las resoluciones emitidas por el Ministerio Público. Es evidente que la acción de amparo contra las resoluciones judiciales debe tramitarse de manera especial, de manera que sea compatible con la naturaleza jerárquica de la organización judicial, evitando que un Juez de primera instancia pueda, por ejemplo, anular un fallo emitido por la Corte Suprema. Como vemos, ese problema no se presenta cuando se trata de una resolución del Ministerio Público, por lo que, de conformidad con el artículo 51.º del Código Procesal Constitucional el Juez competente para conocer una demanda de amparo contra dichas resoluciones, es el Juez natural del amparo genérico.
5. Que, hechas estas precisiones, en el presente caso se advierte de la demanda que lo que cuestiona el recurrente es la decisión del fiscal de no formalizar la denuncia penal, aduciendo una falta de motivación en las resoluciones que deciden el archivo de la denuncia. Ello pone en evidencia que mediante el presente proceso se pretende interferir en el ámbito de las funciones y facultades que le confiere la Constitución (art. 159.º) al Ministerio Público como titular de la acción penal.
6. Que, de otro lado, a tenor del artículo 5.º de la Ley Orgánica del Ministerio Público: "Los Fiscales actúan independientemente en el ejercicio de sus atribuciones, las que desempeñarán según su propio criterio y en la forma que estimen más arreglada a los fines de su institución".

Por consiguiente, a menos que se trate de decisiones manifiestamente arbitrarias y sin ningún sustento fáctico o jurídico, o abiertamente irrazonables, las resoluciones fiscales mediante las cuales los representantes del Ministerio Público, en ejercicio de sus atribuciones, disponen formular denuncia o abstenerse, como sucede en el caso de autos, cuando estas se encuentran razonablemente sustentadas en hechos y disposiciones legales que los respaldan, no pueden ser cuestionadas mediante el proceso de amparo.



## TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

7. Que, en el caso de autos, los hechos y fundamentos que respaldan las decisiones de las dos instancias del Ministerio Público se encuentran razonablemente expuestos en las propias decisiones que se cuestionan y, de las mismas, no puede desprenderse un agravio manifiesto a los derechos que invoca el recurrente, constituyendo por el contrario decisiones emitidas dentro del ámbito de las funciones que le corresponde al Ministerio Público conforme a la Constitución y su propia Ley Orgánica. En consecuencia, la demanda deviene en improcedente de conformidad con el artículo 5.1 del Código Procesal Constitucional.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

**RESUELVE**

Declarar **IMPROCEDENTE** la demanda.

Publíquese y notifíquese.

SS.

LANDA ARROYO  
ALVA ORLANDINI  
BARDELLI LARTIRIGQYEN

Lo que certifico:

Dr. Daniel Figallo Rivadeneyra  
SECRETARIO RELATOR (e)



EXP. N.º 01321-2010-PA/TC  
ANCASH  
FLORENCIO JESÚS  
NAVARRO SÁNCHEZ

## SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 20 días del mes de agosto de 2010, el Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional, con la asistencia de los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos, Vergara Gotelli, Eto Cruz y Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia, con el voto singular del magistrado Vergara Gotelli, que se agrega

### ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Florencio Jesús Navarro Sánchez contra la resolución de fecha 2 de setiembre del 2009, a fojas 154 del cuaderno único, expedida por la Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Áncash, que declaró infundada la demanda de autos.

### ANTECEDENTES

Con fecha 6 de julio del 2007 el recurrente interpone demanda de amparo contra la Fiscal de la Nación, señora Adelaida Bolívar Arteaga, solicitando: i) se restituya el derecho a la obtención de una resolución fundada en derecho, a no ser discriminado y a la igualdad sustancial en el proceso; y ii) se declare fundada su denuncia penal interpuesta contra la Jueza a cargo del Primer Juzgado de Paz Letrado de Huaraz. Sostiene que interpuso demanda de alimentos contra su ex conviviente y otro solicitando pensión solidaria de alimentos ascendente a la suma S/. 500.00 nuevos soles en razón de su delicado estado de salud y la precariedad económica que atravesaba por la creciente competencia en el ejercicio de la abogacía, solicitando a su vez la exoneración en el pago de tasa judicial, demanda que fue rechazada por la Jueza a cargo del Primer Juzgado de Paz Letrado de Huaraz por considerar que el recurrente no había ofrecido tasa judicial por ofrecimiento de pruebas y cédulas de notificación suficientes. Ante ello denunció penalmente a la Jueza por el delito de prevaricato al exigirle la presentación de tasas judiciales y cédulas de notificación en su condición de demandante, denuncia que fue desestimada, por lo que tal decisión vulnera su derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales ya que el rechazo de su demanda por parte de la Jueza infringe lo establecido por el artículo 562º del Código Procesal Civil y el artículo 24º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, toda vez que el monto de su pensión solicitada no excedía las 20 Unidades de Referencia Procesal; en consecuencia aun por ser un demandante *hombre* no cabía que se le exija la presentación de tasas judiciales y cédulas de notificación, más aún si dichos dispositivos eran claros e imperativos, aduciendo por ello que se ha dictado resolución fiscal contrariando el texto expreso de la ley.

El Procurador Público del Ministerio Público contesta la demanda solicitando sea declarada improcedente o infundada, argumentando que de la resolución cuestionada se aprecia que se han dado suficientes razones de hecho y de derecho que explican porque no prosperó la denuncia interpuesta por el ahora accionante contra la señora Nancy Flor Penacho López en su calidad de jueza del Primer Juzgado de Paz Letrado de Huaraz por el presunto delito de prevaricato.

El Segundo Juzgado Mixto de Huaraz, con resolución de fecha 26 de enero del 2009, declara infundada la demanda por considerar que en la resolución fiscal cuestionada se hace un exhaustivo análisis y una sesuda fundamentación respecto a si la actuación de la Magistrada denunciada configura o no el delito de prevaricato, arribando a la conclusión que los hechos denunciados no reúnen las exigencias de tipicidad del ilícito denunciado, previsto y sancionado en el artículo 418º del Código Penal; agregando además que no existe desigualdad en la resolución fiscal adoptada.

La Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ancash, con resolución de fecha 2 de setiembre del 2009, confirma la apelada por considerar que el recurrente en el fondo persigue la revisión del proceso de alimentos en el cual se le ha denegado la exoneración de pago de tasas judiciales; sin embargo con la admisión o denegatoria de la denuncia por prevaricato no es posible la revisión de dicho proceso.



## FUNDAMENTOS

### *Delimitación del petitorio*

1. El objeto de la demanda es que se restituya los derechos del recurrente a la obtención de una resolución fundada en derecho, a no ser discriminado y a la igualdad sustancial en el proceso, y que se declare fundada la denuncia penal por el delito de prevaricato interpuesta contra la Jueza a cargo del Primer Juzgado de Paz Letrado de Huaraz, al haber realizado tanto la Fiscal demandada como la Jueza del Primer Juzgado de Paz Letrado de Huaraz una interpretación que se considera contraria al texto expreso de lo dispuesto en los artículo 562° del Código Procesal Civil y 24° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, lo cual dio lugar a que se rechazara su demanda de alimentos, así como su denuncia fiscal por el delito de prevaricato. Así expuestas las pretensiones este Colegiado considera necesario determinar, a la luz de los hechos expuestos en la demanda y de los recaudos que obran en ella, si se ha vulnerado los derechos al debido proceso y a la igualdad del recurrente al haberse realizado una interpretación de la ley que discrepa de manera abierta del tenor literal de ella, incurriéndose además en indebida motivación, o si por el contrario la interpretación realizada por la Fiscalía se ajusta al texto expreso de la Ley.

### *Sobre el control constitucional de los actos del Ministerio Público*

2. Al respecto, sobre la posibilidad constitucional de controlar los actos expedidos por el Ministerio Público, este Colegiado en la STC N° 02492-2007-PHC/TC ha establecido que el artículo 159°, inciso 5 de la Constitución encarga al Ministerio Público el ejercicio de la acción penal de oficio o a petición de parte. En ese sentido, corresponde a los fiscales hacer ejercicio de la titularidad de la acción penal pública y, una vez conocida la denuncia o noticia criminal, proceder a formalizarla ante el juez penal si lo estiman procedente, conforme a lo establecido por la Ley Orgánica del Ministerio Público, aprobada por Decreto Legislativo N° 52. (fundamento 7)
3. Es en este marco constitucional, ante la existencia de suficientes elementos incriminatorios que hagan necesario una investigación judicial, que el representante del Ministerio Público deberá formalizar la denuncia ante la judicatura penal competente, decisión fiscal que evidencia el desarrollo de una mínima actividad probatoria así como un razonable grado de convicción al que debe arribar el fiscal en el transcurso de esta investigación previa al proceso penal (fundamento 9).
4. No obstante estas facultades constitucionales de los actos del Ministerio Público no se legitiman desde la perspectiva constitucional, en sí mismos, sino a partir del respeto pleno del conjunto de valores, principios constitucionales y de los derechos fundamentales de la persona humana, de conformidad con el artículo 1° de la Constitución (fundamento 11); razón por la cual corresponde evaluar la Resolución Fiscal que desestima la denuncia penal formulada por el recurrente.

### *Sobre la validez constitucional de la Resolución Fiscal de fecha 20 de junio del 2007*

5. Este Colegiado también ha establecido que el derecho al debido proceso comprende una serie de derechos fundamentales de orden procesal, cada uno de los cuales cuenta con un contenido constitucionalmente protegido que le es propio. Uno de los derechos que conforman el derecho al debido proceso es el derecho a la debida motivación de las resoluciones fiscales. En efecto, este derecho se constituye en *una garantía del denunciante del ilícito penal frente a la arbitrariedad fiscal, que garantiza que las resoluciones fiscales no se encuentren justificadas en el mero capricho de los Magistrados Fiscales, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se deriven del caso*. Asimismo, este derecho obliga a los Magistrados Fiscales al resolver la pretensión de la parte denunciante de manera congruente con los términos en que vengán planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate fiscal. El incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el dejar incontestada la pretensión penal, o el desviar la decisión del marco del debate fiscal generando indefensión, constituye vulneración del derecho a la tutela procesal efectiva y también del derecho a la motivación de las resoluciones fiscales.



6. Sobre el particular, a fojas 2 del primer cuaderno obra la resolución fiscal cuestionada de fecha 20 de junio del 2007, que declara infundada la denuncia penal formulada por don Florencio Jesús Navarro Sánchez contra la doctora Nancy Flor Penacho López en su actuación como Juez del Primer Juzgado de Paz Letrado de Huaraz, de la cual se aprecia que se sustenta en que “ (...) *no puede tomarse como un acto prevaricador, sino que deviene en un acto de carácter eminentemente jurisdiccional, desarrollado por la investigada con la discrecionalidad que le asiste en mérito a su condición de magistrada; de manera que no ha transgredido los alcances del artículo 24° de la Ley Orgánica del Poder Judicial; por cuanto dicho precepto legal además de no ser imperativo, admite posibilidades de interpretación para casos como el presente; (...) estando a lo expuesto y a los hechos denunciados, que no reúnen las exigencias de tipicidad del ilícito denunciado, previsto y sancionado en el artículo 418° del Código Penal, la denuncia deviene en infundada*”.
7. Conviene preguntarse entonces ¿la pretensión penal del recurrente reflejada en la alegación de que lo resuelto por la Jueza infringe lo establecido por el artículo 562° del Código Procesal Civil y el artículo 24° de la Ley Orgánica del Poder Judicial ha sido o no debidamente contestada por la Fiscalía demanda? Este Colegiado considera que la pretensión penal del recurrente no ha sido debidamente contestada toda vez que, por un lado, la interpretación realizada por la Fiscalía sobre el artículo 24° de la Ley Orgánica del Poder Judicial resulta por decir lo menos arbitraria, en vista que del texto literal de ella no se advierte de modo alguno que sea una norma dispositiva o discrecional, sino que por el contrario se trata de una norma imperativa, en razón a que dicho dispositivo establece que: “*la administración de justicia común es gratuita, en todas sus especialidades instancias y manifestaciones, para las personas de escasos recursos económicos y se accede a ella en la forma prevista por la ley*”. De otro lado la Resolución Fiscal en su análisis omite pronunciarse sobre lo dispuesto en el artículo 562° del Código Procesal Civil, que establece que “*el demandante se encuentra exonerado del pago de tasas judiciales, siempre que el monto de la pensión alimenticia demandada no exceda de veinte (20) Unidades de Referencia Procesal*”. Como los artículos transcritos son los argumentos centrales de la pretensión punitiva del recurrente, y no han merecido una debida motivación, se evidencia que la resolución fiscal ha dejado incontestada la pretensión penal del recurrente, vulnerando su derecho al debido proceso (derecho a la debida motivación de las resoluciones fiscales). En consecuencia debe estimarse la demanda, a efectos que la Fiscalía emita nueva resolución sustentándose exclusivamente en razones objetivas que le plantea el caso concreto, y no en eventuales prejuicios sociales como es el hecho de que el recurrente haya demandado pensión de alimentos a su ex conviviente.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

#### HA RESUELTO

1. Declarar **FUNDADA** en parte la demanda de amparo; en consecuencia restituyendo el derecho a la debida motivación de las resoluciones fiscales, **NULA** la Resolución Fiscal de fecha 20 de junio del 2007.
2. **ORDENAR** que la Fiscalía de la Nación emita nueva resolución debidamente motivada de acuerdo a lo acotado en los fundamentos de la presente sentencia.

Publíquese y notifíquese.

SS.

**MESÍA RAMÍREZ**  
**BEAUMONT CALLIRGOS**  
**ETO CRUZ**  
**ÁLVAREZ MIRANDA**



EXP. N.º 01321-2010-PA/TC  
ANCASH  
FLORENCIO JESÚS  
NAVARRO SÁNCHEZ

### **VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI**

Emito el presente voto singular por las siguientes consideraciones:

1. El recurrente interpone demanda de amparo contra la Fiscal de la Nación, señora Adelaida Bolívar Arteaga, solicitando que: a) se restituya el derecho a la obtención de una resolución fundada en derecho, a no ser discriminado y a la igualdad sustancial en el proceso; y, b) se declare fundada su denuncia penal interpuesta contra la Jueza a cargo del Primer Juzgado de Paz Letrado de Huaraz.

Manifiesta haber interpuesto demanda de alimentos contra su ex conviviente y otro solicitando pensión solidaria de alimentos ascendente a la suma S/. 500.00 nuevos soles en razón de su delicado estado de salud y la precariedad económica que atravesaba, para lo cual solicitó la exoneración en el pago de la tasa judicial de conformidad con el artículo 562 del Código Procesal Civil y el artículo 24 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Sostiene que dichos actos vulneran sus derechos a la tutela jurisdiccional, al debido proceso, a no ser discriminado y a obtener una resolución fundada en derecho.

2. El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio Público contesta la demanda expresando que la resolución emitida por la Jueza denunciada no puede tomarse como un acto prevaricador, sino por el contrario, esta deviene de un acto de carácter eminentemente jurisdiccional. Por otro lado, señala que la Resolución de la Fiscalía de la Nación 669-2007-MP-FN, ha sido expedida con

suficientes razones de hecho y de derecho que explican porque no prosperó la denuncia interpuesta por el ahora demandante contra la Jueza del Primer Juzgado de Paz Letrado de Huaraz, señora Nancy Flor Penacho López, por el presunto delito de prevaricato.

3. El Segundo Juzgado Mixto de Huaraz con fecha 26 de enero de 2009, declaró infundada la demanda por considerar que en la resolución fiscal cuestionada se hace un exhaustivo análisis y una sesuda fundamentación respecto a si la actuación de la magistrada denunciada configura o no el delito de prevaricato, arribando a la conclusión que los hechos denunciados no reúnen las exigencias de tipicidad del ilícito denunciado previsto y sancionado en el artículo 418 del Código Penal, agregando además que no existe desigualdad en la resolución fiscal adoptada.

A su turno, la Sala Superior revisora confirmó la apelada por estimar que el actor en el fondo persigue la revisión del proceso de alimentos en el cual se le ha denegado la exoneración de pago de tasas judiciales, sin embargo, con la admisión o denegatoria de la denuncia por prevaricato no es posible la revisión de dicho proceso.

4. De lo expuesto, se aprecia que el demandante pretende que se declare la nulidad de la Resolución de la Fiscalía de la Nación 669-2007-MP-FN, de fecha 20 de junio de 2007, la cual desestimó su denuncia formulada por el ahora demandante contra la Jueza del Primer Juzgado de Paz Letrado de Huaraz, señora Nancy Flor Penacho López. Cabe indicar que la dicha resolución ha sido emitida en el trámite llevado a cabo por la Oficina Desconcentrada de Control Interno de Ancash.
5. Tenemos entonces que el actor interpone demanda de amparo cuestionando una resolución administrativa alegando para ello la supuesta vulneración de sus derechos a la tutela jurisdiccional, al debido proceso, a no ser discriminado y a obtener una resolución fundada en derecho. Lo que el demandante pretende en puridad es que este Tribunal rebasando sus facultades interfiera en un proceso regular de competencia ordinaria el cual ha sido desarrollado conforme a ley convirtiendo a este Colegiado en un *supra* poder revisor de todo proceso ordinario, no correspondiendo tramitar dicha pretensión en sede constitucional por lo que deberá desestimarse la demanda por improcedente desde que en un proceso constitucional, sin etapa probatoria y con abundante exposición de hechos y de derechos que se cuestionan, el actor debe recurrir al proceso contencioso-administrativo.
6. Al respecto, debe indicarse que si la demandante considera que dicha resolución contraviene sus derechos constitucionales, tiene expedita la vía contencioso administrativa para cuestionarla, siendo ésta una vía igualmente satisfactoria, conforme se señala en el inciso 2 del artículo 5 del Código Procesal Constitucional y no el proceso de amparo.

Por las razones antes expuestas mi voto es porque se declare **IMPROCEDENTE** la demanda.

Sr.

**VERGARA GOTELLI**

## **ANEXO Nro. 07**





*Ministerio Público*  
*Fiscalía de la Nación*

Lima, 26 DIC. 2017

**OFICIO CIRCULAR Nº 018-2017-MP-FN**



Señores

**Fiscales Superiores Coordinadores Nacionales**

**Presidentes de las Juntas de Fiscales Superiores de los Distritos Fiscales a nivel nacional**

**Jefe de la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones**

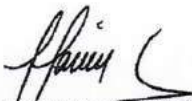
Presente.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, con la finalidad de exhortarles se sirvan adoptar la acciones necesarias para que la información o documentación contenida en las carpetas fiscales se traten de manera reservada conforme a lo establecido en los artículos 139 inciso 1 y 324 del Código Procesal Penal. La presente instrucción tiene como objetivo cautelar la reserva de la investigación fiscal

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

  
.....  
**Dr. Pablo Sánchez Velarde**  
FISCAL DE LA NACIÓN



## **ANEXO Nro. 08**





Ministerio Público  
Fiscalía Provincial Mixta  
de Yonán - Tembladera

**Carpeta Fiscal N° 1706195000-2016-140-0**

Fiscal Responsable: TITO GERARDO SIRLOPU GARCES

**DISPOSICIÓN N° 01 -2016-FPMYT**  
**Tembladera, veintiuno de junio de**  
**de dos mil dieciséis**

**DADO CUENTA:**

Con los actuados en la presente investigación, por la presunta comisión del delito de **LESIONES CULPOSAS** contra **LUIS JAVIER VALLEJOS** en agravio de **JORGE LUIS DEZA BARDALES**.

**CONSIDERANDO:**

**PRIMERO**

a.- Corresponde al Ministerio Público promover de oficio, o a petición de parte, la acción judicial en defensa de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el derecho; en tal sentido conduce desde su inicio la investigación del delito.<sup>1</sup>

b.- El Fiscal puede, bajo su dirección, requerir la intervención de la Policía o realizar por sí mismo diligencias preliminares de investigación para determinar si debe formalizar la Investigación Preparatoria.<sup>2</sup>

c.- Las Diligencias Preliminares tienen por finalidad inmediata realizar los actos urgentes o inaplazables destinados a determinar si han tenido lugar los hechos objeto de conocimiento y su delictuosidad, así como asegurar los elementos materiales de su comisión, individualizar a las personas involucradas en su comisión, incluyendo a los agraviados, y, dentro de los límites de la Ley, asegurarlas debidamente.<sup>3</sup>

d.- El artículo 334º inciso 2 del Código Procesal Penal prescribe que el plazo de la investigación preliminar es de sesenta días, no obstante, el Fiscal podrá fijar un plazo diferente atendiendo a las características, complejidad y circunstancias de los hechos objeto de investigación.

**SEGUNDO**

El artículo 124º del Código Penal establece que comete el delito Contra la el Cuerpo y la Salud, en la modalidad de Lesiones Culposas: "El que por

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, Artículo 159º numerales 1 y 4.

CÓDIGO PROCESAL PENAL (Decreto Legislativo N° 957) artículo 330 numeral 1.

CÓDIGO PROCESAL PENAL (Decreto Legislativo N° 957) artículo 330 numeral 2.

Tito Gerardo Sirlopu Garces  
Fiscal Provincial Mixta de Yonán - Tembladera  
Ministerio Público



*La pena será privativa de libertad no menor de uno ni mayor de dos años y de sesenta a ciento veinte días-multa, si la lesión es grave, de conformidad a los presupuestos establecidos en el artículo 121° (...). "*

3.- En el Acta de Intervención Policial s/n COMPRCAR- (PNPCH) se ha consignado que:“(…) En el kilómetro 67 + 400 altura del centro poblado menor Yatahual (altura del cruce Quinden) – Tembladera. Contumazá, a las 08:00h del 18 de junio de 2016, (...) personal policial de la COMPRCAR- CHILETE , (...) constataron un accidente de tránsito (choque con daños personales y materiales) entre el vehículo de placa de rodaje D4L 903 (M1) (...) , conducido por don LUIS JAVIER VALLEJOS, con DNI 40438950 (...), con licencia de conducir Q40438950, domiciliado en el jirón Hipólito Unanue Manzana 4 lote 4 Lurigancho – Lima , quien se dirigía desde Cajamarca hacia Lima, con una motocicleta lineal (M2), desconociéndose su placa de rodaje y características, al parecer por haber sido trasladada al por sus familiares, conducida por JORGE LUIS DEZA BARDALES, quien se dirigía desde Tembladera hasta Quindem Bajo. Siendo el caso que por versiones del conductor que a la altura del kilómetro 67+ 400 aproximadamente se percató que un bus de la empresa DIAS, cuya su placa de rodaje desconoce iba por el carril el contrario con dirección hacia Cajamarca, había invadido el carril ingresando a la curva y al percatarse de de la presencia de la M1, ocupó su carril, en circunstancias que la M2 venía atrás del bus intentó sobrepasar al bus, invadiendo el carril contrario, impactando con la M1 por la parte lateral izquierda, deteniéndose la M1 Para prestar el apoyo correspondiente y lo trasladó a la posta médica de Tembladera , siendo atendido por la doctora SOLANO ESTRAYER MARGARETH SUSAN , diagnosticándole politraumatismo , TEC Moderado - Severo con fracturas múltiples en partes inferiores , siendo derivado al hospital de Chiclayo .

*Producto del accidente de tránsito la MI cuenta con los siguientes daños materiales : Parachoques delantero parte lateral izquierda raspado, estribo lateral izquierdo roto, y demás a determinarse con el respectivo peritaje , motivo por el cual el conductor de la MI ( vehículo de placa de rodaje D4L903) señor LUIS JAVIER VALLEJOS es puesto a disposición de la Comisaría PNP El Salitre para las investigaciones correspondientes y adjuntando al presente - Una (01) Tarjeta de Identificación Vehicular N° 1003733353, un (01) SOAT 0521907564, uno (01) ICN Q40438950, un (01) certificado de habilitación vehicular N° 061600414, un (01), Certificado de TV N° TG-12-00046729, siendo las 11:12 h del mismo día se da por concluida la presente diligencia. (folios 2)*

## Individualización del imputado

Nombre de la imputado: LUIS JAVIER VALLEJOS (no aparece consignado  
apoyo materno)

b.- Identificado con DNI: 40438950



- c.- Edad: 44 años de edad
- d.- Natural del distrito Pueblo Libre, provincia y departamento de Lima
- e.- Fecha de nacimiento: 27 de diciembre de 1971
- f.- Hijo de: Padre no declaró y JULIA
- g.- Ocupación: Conductor
- h.- Estado civil: Soltero
- i.- Grado de instrucción: Secundaria completa
- j.- Estatura: 1, 58 m
- k.- Domicilio real: Jirón Hipólito Unanue Manzana 4 lote 4, distrito de Lurigancho, provincia y departamento de Lima.

### **3.2.- Cargo que se le atribuye al imputado**

Se le atribuye a don LUIS JAVIER VALLEJOS haber causado LESIONES CULPOSAS (teniendo en cuenta el diagnóstico consignado en el Oficio N° 192-16-REG-CAJ/DRSC/HCH, se refiere a Traumatismo Torácico Cerrado, la cual por ser una lesión grave requiere treinta o más días de asistencia o descanso, según prescripción facultativa), a don JORGE LUIS DEZA BARDALES en accidente de tránsito; lo cual debe ser investigado en sede Fiscal con la finalidad de determinar si existe o no la comisión del delito establecido en el artículo 124° del Código Penal (*"El que por culpa causa a otro un daño en el cuerpo o en la salud, será reprimido, por (...) La pena será privativa de libertad no menor de uno ni mayor de dos años y de sesenta a ciento veinte días-multa, si la lesión es grave, de conformidad a los presupuestos establecidos en el artículo 121° (...) "*), concordante con el artículo 121° del mismo Cuerpo de Leyes: (*"Artículo 121.- Lesiones graves.- (...) Se consideran lesiones graves: (...) 2.- Las que hacen impropio un órgano para su función, causan a una persona incapacidad para el trabajo, invalidez (...). 3.- Las que infieren cualquier otro daño a la integridad corporal, o a la salud física (...) de una persona que requiera treinta o más días de asistencia o descanso, según prescripción facultativa (...) "*).

### **3.3.- Identificación del Agravado**

- a.- Nombre del agraviado: JORGE LUIS DEZA BARDALES
- b.- Identificado con DNI: 27168692
- c.- Edad: 46 años de edad
- d.- Natural del distrito de Yonán, provincia de Contumazá Pablo; departamento de Cajamarca.
- e.- Fecha de nacimiento: 15 de junio de 1970
- f.- Hijo de Pedro y Orminda
- g.- Ocupación: Se desconoce
- h.- Estado civil: Soltero
- i.- Grado de instrucción: Secundaria completa
- j.- Estatura: 1, 68 m
- k.- Domicilio real: Avenida Pacasmayo s/n distrito El Prado, provincia de San Miguel, departamento de Cajamarca

### **3.4.- Elementos de Convicción**

- 1.- El Acta de Intervención Policial s/n (PNPCH) a que se ha consignado:

*En el kilómetro 67 + 400 altura del centro poblado menor Yatahual (altura del cruce*

*Artículo modificado por el Artículo Único del Decreto Legislativo N° 1237, publicado el 26 septiembre*

Gerardo Sirlopu Garcés  
 Fiscal Provincial  
 Criminalista  
 Ministerio Público  
 Cajamarca



Quinden) – Tembladera. Contumazá, a las 08:00h del 18 de junio de 2016, (...) personal policial de la COMPRCAR- CHILETE , (...) constataron un accidente de tránsito (choque con daños personales y materiales) entre el vehículo de placa de rodaje D4L 903 (M1) (...), conducido por don LUIS JAVIER VALLEJOS, con DNI 40438950 (...), con licencia de conducir Q40438950, domiciliado en el jirón Hipólito Unanue Manzana 4 lote 4 Luriganchito – Lima , quien se dirigía desde Cajamarca hacia Lima, con una motocicleta lineal (M2), desconociéndose su placa de rodaje y características, al parecer por haber sido trasladada al por sus familiares, conducida por JORGE LUIS DEZA BARDALES , quien se dirigía desde Tembladera hasta Quindem Bajo. Siendo el caso que por versiones del conductor que a la altura del kilómetro 67+ 400 aproximadamente se percató que un bus de la empresa DIAS , cuya su placa de rodaje desconoce iba por el carril el contrario con dirección hacia Cajamarca, había invadido el carril ingresando a la curva y al percatarse de la presencia de la M1, ocupó su carril, en circunstancias que la M2 venía atrás del bus intentó sobrepasar al bus, invadiendo el carril contrario, impactando con la M1 por la parte lateral izquierda, deteniéndose la M1 Para prestar el apoyo correspondiente y lo trasladó a la posta médica de Tembladera , siendo atendido por la doctora SOLANO ESTRAYER MARGARETH SUSAN , diagnosticándole politraumatismo , TEC Moderado - Severo con fracturas múltiples en partes inferiores , siendo derivado al hospital de Chiclayo .

Producto del accidente de tránsito la M1 cuenta con los siguientes daños materiales : Parachoques delantero parte lateral izquierda raspado, estribo lateral izquierdo roto, y demás a determinarse con el respectivo peritaje , motivo por el cual el conductor de la M1 ( vehículo de placa de rodaje D4L903) señor LUIS JAVIER VALLEJOS es puesto a disposición de la Comisaría PNP El Salitre para las investigaciones correspondientes y adjuntando al presente - Una (01) Tarjeta de Identificación Vehicular N° 1003733353, un (01) SOAT 0521907564, uno (01) ICN Q40438950, un (01) certificado de habilitación vehicular N° 061600414, un (019, Certificado de TV N° TG-12-00046729, siendo las 11:12 h del mismo día se da por concluida la presente diligencia. (folios 2)

2.-Acta de Situación del Vehículo de placa de rodaje D4L- 903 que se pone a Disposición, en el que no se ha consignado observación alguna. (folios 3)

3.- Acta de Ocurrencia Policial redactada por el S03PNP RICARDO HERNÁNDEZ OLIVA en la que se ha consignado: " (...) Siendo las 08:30h del 18 de junio de 2016 el suscrito por orden superior 8...)a mérito de una llamada telefónica por parte del centro de salud de Tembladera que había llegado una persona que había sufrido un accidente de tránsito, por lo que me constituí a dicho nosocomio a fin de verificar y constatar lo antes referido; en dicho lugar me entrevisté con la doctora de turno MARGARTEH SOLANO ESTRAYER, quien me indicó quien me indicó que se hizo presente en e centro de salud la persona de JORGE LUIS DEZA BARDALES (46) natural del caserío El Pardo , San Miguel, Cajamarca, conviviente, identificado con DNI N° 27168692, y domiciliado en caserío Quinden , el mismo que fue conducido por moradores del distrito , por haber sufrido un accidente de tránsito , la referida médico diagnosticó politraumatizado , TEC moderado – severo , fracturas múltiples en miembros inferiores; y dado a su estado de salud fue evacuado de emergencia al hospital de Las Mercedes de Chiclayo, y por versión de los moradores el indicado herido ha sufrido el evento cuando conducía su moto lineal y se había chocado con la Empresa de Transportes Turismo DIAS y un trailer, y que hasta el momento se desconoce la identificación de los conductores participantes del accidente de tránsito." (folios 4)

Acta de Incautación del vehículo Siendo las 11:40 del 18 de junio de 2016, el comisario de la comisaría PNP de El Salitre procedió a incautar el vehículo de placa de rodaje D4L -903 por haber sido protagonista de un accidente de tránsito - choque con lesiones personales, ocurrido a la altura del

Gerardo Sirlopú Garcés  
Fiscal Provincial  
Procuraduría  
Ministerio Público  
Cajamarca



kilómetro 67+400 aproximadamente de la carretera de penetración Ciudad de Dios - Cajamarca, jurisdicción de la comisaría PNP de El Salitre. (folios 5)

5.- Acta de Inspección Técnico Policial en la que se ha consignado:

"ACTA DE INSPECCION TECNICO POLICIAL

En el KM.67.400 de la carretera de penetración Ciudad de Dios - Cajamarca siendo las 14.00 horas del 18JUN2016, presentes ante el Instructor, personal policial de la Comisaría PNP El Salitre, la persona de Luis Javier VALLEJOS (45) natural de Lima, conductor, soltero, con educación secundaria completa, identificado con DNI.No.40438950, con domicilio en Jr. Hipólito Unanue MZ 4 Lote 4 Luriganchó; se procede a levantar la presente acta conforme se detalla:

1.- DATOS DE LA INTERVENCION

A. UNIDADES PARTICIPANTES

1.- Unidad de tránsito UT1 (D4L-903)

Conducido por Luis Javier VALLEJOS de 45 años de edad, natural de Lima, soltero, identificado con DNI.No.40438950, con domicilio en Jr. Hipólito Unanue MZ 4 LOTE 4 Luriganchó-Chosica., licencia de conducir Q40438950 A tres c.

2.- Unidad de Tránsito UT2 (Motocicleta lineal)

Conductor Jorge Luis DEZA BARDALES (46) natural del distrito El Prado-San Miguel, conviviente, identificado con DNI.No. 27168692, con domicilio en el Caserío de Quinden, licencia de conducir no presenta.

3.- Unidad de Tránsito UT3 (Bus empresa DIAS no identificado)

2. RECORD DEL CONDUTOR.-

Realizado la consulta Internet se pudo obtener la información de licencias de conducir por puntos en la que se da a conocer de las infracciones al reglamentos de tránsito.

3. SENTIDO DE CIRCULACION.

La UT1 (D4L-903) instantes previos al accidente el conductor se desplazaba por la carretera de penetración Ciudad de Dios -Cajamarca, altura del KM 67.500 - Caserío de Quinden en sentido de sur a norte y la UT2 (motocicleta) se desplazaba en sentido contrario de norte a sur y la UT3 (empresa turismo DIAS) se desplazaba en el mismo sentido de norte a sur por la carretera de penetración Ciudad de Dios - Cajamarca.

4. REFERENTE A LA VIA


El KM 67.400 de la carretera de penetración Ciudad de Dios-Cajamarca, altura del caserío de Quinden, es una vía pública de configuración sinuosa (curva) construida de asfalto en buen estado de conservación y uso, presenta una calzada de circulación vehicular con capacidad para dos carriles, en sentido de Sur a Norte y viceversa cuenta con señales horizontales, como las líneas de borde de pavimento, y líneas continuas separadoras de carril de color amarillo, por el este limita con el cerro por el oeste con guardavías y el río Jequetepeque.

5. REFERENTE A LAS EVIDENCIAS

Manchas de sangre de color pardo rojizas de aproximado 1 metro en línea recta.

- Se aprecian huellas de frenada por parte de la UT1 (D4L-903).

ACTORES INTERVINIENTES

  
Gerardo Siripolli Garcés  
Fiscal Provincial  
Ministerio Público Cajamarca



a) Factor Predominante

La actitud imprudente del conductor de la UT2 ( motocicleta ) al invadir ligeramente el carril contrario al tratar de adelantar a la UT3 (bus de la empresa DIAS) no identificada, sin tener en cuenta la configuración de la vía.

b) Factor contributivo.

La actitud imprudente del conductor de la Unidad UT2.

7. TOMAS FOTOGRAFICAS.

Se adjuntan al presente documento. (...)” (folios 6 - 13)

6.- Declaración de LUIS JAVIER VALLEJOS

Quien manifestó:

III.- INTERROGATORIO

1.- PREGUNTADO PARA QUE DIGA: ¿ Si esta conforme con el asesoramiento de su abogado defensor ? Dijo: Que. Si estoy conforme con el asesoramiento.

2.- PREGUNTADO PARA QUE DIGA: Indique a que actividades laborales se dedica donde, desde cuándo y cuánto percibe mensualmente? Dijo: Que en la actualidad me dedico como conductor de vehículos, desde dos años, percibiendo mensualmente la suma de S/1,600. Nuevos soles.

3.- PREGUNTA PARA QUE DIGA: Indique si ha participado en un accidente de tránsito el 18JUN2016, aproximadamente las 08:30 horas, en el kilómetro 67+400 de la carretera penetración a la costa, y si estuvo conduciendo el vehículo de placa de rodaje D4 L - 9 O 3 (C PC)? Dijo: Que, sí he participado en un accidente de tránsito, el día de la fecha, que se me pregunta, estando a bordo del vehículo de placa de rodaje D4L-903.

4.- PREGUNTADO PARA QUE DIGA: Narre la forma y circunstancias como se ha producido el accidente de tránsito (choque con subsecuentes daños personales materiales) el 18JUN2016 aproximadamente a las 08.30 horas, en el kilómetro 67+400 de la carretera penetración a la costa? Dijo: Que, me encontraba conduciendo mi vehículo con dirección a la ciudad de Lima, y al llegar a una semi curva en sentido contrario transitaba un ómnibus de la empresa DIAS, quien había invadido mi carril, obligándome a realizar una frenada para detener el vehículo que conducía y a la vez el conductor del bus circulaba en sentido contrario, ingresando nuevamente a su carril, y en esas circunstancias en forma intempestiva un motociclista que circulaba en el mismo sentido del bus, por no chocar por la parte posterior del bus, invade mi carril, ubicándose en la parte central de la vía, entre ambos vehículos, por lo que impacta con el estribo izquierdo de mi vehículo, y con la parte posterior lateral izquierda del bus, por lo que el bus avanza y este pierde el control de la moto, cayendo dentro del carril derecho, sufriendo lesiones en la pierna izquierda y la cabeza lado derecho.

5.- PREGUNTADO PARA QUE DIGA: A qué velocidad se desplazaba en el momento que se suscitó el accidente de tránsito, el estado de la vía, y si hubo algún obstáculo que haya impedido la visualidad? Dijo: Que me desplazaba a una velocidad de 40 KM/H, el estado de la vía era normal, ningún obstáculo que haya impedido la visualidad.

6.- PREGUNTADO PARA QUE DIGA: Especifique el punto exacto donde se produjo el impacto del choque de su vehículo, con la motocicleta, y el tercer vehículo no identificado (bus de la empresa transporte DIAS ? Dijo: Que el punto exacto del impacto del choque con la motocicleta fue en mi carril, impactando la motocicleta en el estribo izquierdo de mi vehículo, además debo declarar que mi vehículo se encontraba detenido, y el vehículo de la empresa DIAS seguía su marcha.



7.- PREGUNTADO PARA QUE DIGA: Si usted para conducir esta clase de vehículos ha recibido charlas, capacitación y otros como lo exige el Código Nacional de Transito (CNT), en actual vigencia Dijo: Que, si he recibido capacitación para poder conducir esta clase de vehículos.

8.- PREGUNTADO PARA QUE DIGA: Si durante el accidente de tránsito suscitado el 18JUN2016, aproximadamente las 08:30 horas, ha sufrido lesiones de consideración? Dijo: Que, no he sufrido lesiones.

9.- PREGUNTADO PARA QUE DIGA: Si anteriormente a participado en accidente de tránsito, choque, atropello, y otros? Dijo: Que, no he tenido ningún accidente.

10.- PREGUNTADO PARA QUE DIGA: Precise los daños materiales en su vehículo de placa de rodaje D4L-903, durante el accidente de tránsito (choque con subsecuente daños personales y materiales? Dijo: Que, los daños se han producido en el estribo lado izquierdo.

11.- PREGUNTADO PARA QUE DIGA: Si usted presto los primeros auxilios al conductor de la motocicleta? Dijo: Que, juntamente con otros moradores del lugar, entre ellos una persona que dijo ser su hermana, le subimos a una camioneta al conductor de la motocicleta, conduciéndole al hospital de Tembladera.

12.- PREGUNTADO PARA QUE DIGA: Si el conductor de la empresa turismo DIAS, prestó los primeros auxilios al conductor de la motocicleta? Dijo: Que, el conductor del bus de la empresa DIAS, no ha parado ni menos auxiliado a la persona herida, continuando su marcha.

13.- PREGUNTADO PARA QUE DIGA: Si tiene algo más que agregar, quitar o modificar a su presente declaración. Dijo: Que, si, quiero agregar, que ha sido el motociclista quien me chocó estando con mi vehículo detenido en mi carril, además no soy el responsable de este accidente, luego de haber sido leída y encontrándola conforme en todas sus partes me ratifico, firmando e imprimiendo mi índice derecho en presencia del Instructor que certifica el acto (...)." (folios 13 - 15)

7.- Historia Clínica N° 41-D-128 (ilegible). (folios 25)

8.- Certificado Médico Legal N° 00082-PF-H C practicado a JORGE LUIS DEZA BARDALES en el que se ha consignado: "(...) Visto la historia clínica del centro de salud de Tembladera de fecha 18 de de junio 16, firmado doctora MARGARETH S. SOLANO ESTRAYER con el N° de Colegio Médico 54138 donde consigna como diagnósticos:

1.- Plolitraumatizado

2.- Traumatismo en pierna

3.- Traumatismo Cerebral

Referencia a Hospital Las Mercedes

Se concluye :

Para emitir conclusiones finales en atenciones facultativas e incapacidad médico legal, se requiere evaluación por especialistas de referencia mayor capacidad resolutive (...)" (folios 29)

9.- Consulta del administrado LUIS JAVIER VALLEJOS respecto a su licencia de conducir y Listado de papeletas a partir del DSN° 016- 2009-MTC. (folios 17)

10.- Copia de Licencia de Conducir del imputado LUIS JAVIER VALLEJOS con lo que se acredita está autorizado para conducir vehículo de clase A categoría ES C. (folios 21)

Jesús Siflopué García  
Fiscal Provincial  
Procuraduría General  
Ministerio Público



11.- Tarjeta de identificación vehicular del camión de placa D4L - 903 Documento expedido por la SUNARP en el que se ha consignado los datos del vehículo.(folios 22)

12.- Consulta vehicular SUNARP Móvil con lo que se acredita que el propietario del vehículo D4L-903 es MARCO ANTONIO HERRERA FLORES.(folios 22 A)

13.- Certificado de seguro Obligatorio de accidentes de tránsito SOAT -2015 N°05- 21907564 ; póliza vigente desde 18 de enero de 2016 al 18 de enero de 2017, siendo la contratante doña EDELMIRA YAURI INGA DE PALACIOS.(folios 23)

Advirtiéndose del las diligencias preliminares realizados por la PNP, aparecen indicios reveladores de la existencia del delito de LESIONES CULPOSAS (artículo 124° del Código Penal), que la acción penal no ha prescrito, se ha podido identificar a LUIS JAVIER VALLEJOS como presunto autor, se colige que en el presente caso, se satisfacen los requisitos exigidos por el artículo 336° numeral 1, del Código Procesal Penal, debe abrirse investigación preliminar contra el imputado.

#### **POR ESTAS CONSIDERACIONES:**

El Despacho de la Fiscalía Provincial Mixta Yonán – Tembladera invocando los artículos 124° del código Penal; 330°, 334° numeral 2 y 336° numeral 1, del Código Procesal Penal, **DISPONE: ABRIR INVESTIGACIÓN PRELIMINAR** por el plazo de **SESENTA DÍAS** contra LUIS JAVIER VALLEJOS por la presunta comisión del delito Contra el Cuerpo y la Salud en la modalidad de Lesiones Culposas en agravio de JORGE LUIS DEZA BARDALES.

#### **Disponiéndose en este plazo realizar los siguientes actos de investigación:**

1.- Solicitar al Director del Hospital Regional Docente Las Mercedes de Chiclayo copia de la historia clínica de JORGE LUIS DEZA BARDALES con la finalidad de que sean remitida a la Unidad de Medicina Legal de Cajamarca, y se efectúe el reconocimiento médico legal post facto del antes citado.

2.- Recibir las declaración de JORGE LUIS DEZA BARDALES en la sede del Ministerio Público de Tembladera ubicado en el jirón Buenos Aires s/n cuadra 5, con la finalidad de que deponga sobre el hecho que se viene investigando, el 5 de julio de 2016 a las 14:30 h.

3.- Recibir las declaración de LUIS JAVIER VALLEJOS en la sede del Ministerio Público de Tembladera ubicado en el jirón Buenos Aires s/n cuadra 5, con la finalidad de que deponga sobre el hecho que se viene investigando, el 5 de julio de 2016 a las 15:30 h.

4.- Recibir las declaración de MARCO ANTONIO HERRERA FLORES en la sede del Ministerio Público de Tembladera ubicado en el jirón Buenos Aires s/n cuadra 5, con la finalidad de que deponga sobre el hecho que se viene investigando, el 5 de julio de 2016 a las 16:30 h.

Dr. Sirlopu Garcés  
Fiscalía Provincial Mixta Yonán - Tembladera  
Unidad de Medicina Legal de Cajamarca

5.- Realícese cuanto acto de investigación sea necesario para el mejor esclarecimiento de los hechos.

6.- Notifíquese a las partes conforme a Ley.

  
-----  
**Tito Gerardo Sirlopú Garcés**  
Fiscal Provincial  
Fiscalía Provincial Mixta de Yonán - Tembladera  
Ministerio Público Cajamarca



"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU"



Ministerio Público  
Fiscalía Provincial Mixta  
de Yonán - Tembladera

**Carpeta Fiscal N° 1706195000-2016-140-0**

Fiscal Responsable: TITO GERARDO SIRLOPU GARCES

**DISPOSICIÓN N° 02 -2016-FPMYT**  
**Tembladera, veintiséis de octubre de**  
**de dos mil dieciséis**

**DADO CUENTA:**

Con los actuados en la presente investigación, por la presunta comisión del delito de **LESIONES CULPOSAS** contra **LUIS JAVIER VALLEJOS** en agravio de **JORGE LUIS DEZA BARDALES**.

**CONSIDERANDO:**

**PRIMERO**

a.- Corresponde al Ministerio Público promover de oficio, o a petición de parte, la acción judicial en defensa de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el derecho; en tal sentido conduce desde su inicio la investigación del delito.<sup>1</sup>

b.- El Fiscal puede, bajo su dirección, requerir la intervención de la Policía o realizar por sí mismo diligencias preliminares de investigación para determinar si debe formalizar la Investigación Preparatoria.<sup>2</sup>

c.- Las Diligencias Preliminares tienen por finalidad inmediata realizar los actos urgentes o inaplazables destinados a determinar si han tenido lugar los hechos objeto de conocimiento y su delictuosidad, así como asegurar los elementos materiales de su comisión, individualizar a las personas involucradas en su comisión, incluyendo a los agraviados, y, dentro de los límites de la Ley, asegurarlas debidamente.<sup>3</sup>

d.- El artículo 334° inciso 2 del Código Procesal Penal prescribe que el plazo de la investigación preliminar es de sesenta días, no obstante, el Fiscal podrá fijar un plazo diferente atendiendo a las características, complejidad y circunstancias de los hechos objeto de investigación.

**SEGUNDO**

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, Artículo 159° numerales 1 y 4.

CÓDIGO PROCESAL PENAL (Decreto Legislativo N° 957) artículo 330 numeral 1.

CÓDIGO PROCESAL PENAL (Decreto Legislativo N° 957) artículo 330 numeral 2.

Tito Gerardo Sirlopu Garces  
Fiscal Provincial Mixta  
de Yonán - Tembladera  
Ministerio Público



1.- El artículo 124° del Código Penal establece que comete el delito Contra la Vida, el Cuerpo y la Salud, en la modalidad de Lesiones Culposas: "El que por culpa causa a otro un daño en el cuerpo o en la salud, será reprimido, por (...)

*La pena será privativa de libertad no menor de uno ni mayor de dos años y de sesenta a ciento veinte días-multa, si la lesión es grave, de conformidad a los presupuestos establecidos en el artículo 121° (...).* "

2.- Mediante Oficio N° 163- 2016-REGPOL /CAJ-CSPNP-SM-CS-TEM/CPNP - EL SALITRE "D" de fecha 20 de junio de 2016 el Comisario de la dependencia policial de El Salitre remite los actuados policiales relacionados con el accidente de tránsito (choque con daños materiales y personales ) y daños materiales, ocurrido el 18 de junio de 2016, a la altura del kilómetro 67 + 400 de la carretera de penetración Ciudad de Dios - Cajamarca, caserío de Quinden , distrito El Prado - San Miguel - Cajamarca. (folios 1)

3.- En el Acta de Intervención Policial s/n COMPRCAR- (PNPCH) se ha consignado que: "(...) En el kilómetro 67 + 400 altura del centro poblado menor Yatahual (altura del cruce Quinden) - Tembladera. Contumazá, a las 08:00h del 18 de junio de 2016, (...) personal policial de la COMPRCAR- CHILETE , (...) constataron un accidente de tránsito (choque con daños personales y materiales) entre el vehículo de placa de rodaje D4L 903 (M1) (...), conducido por don LUIS JAVIER VALLEJOS, con DNI 40438950 (...), con licencia de conducir Q40438950, domiciliado en el jirón Hipólito Unanue Manzana 4 lote 4 Lurigancho - Lima , quien se dirigía desde Cajamarca hacia Lima, con una motocicleta lineal (M2), desconociéndose su placa de rodaje y características, al parecer por haber sido trasladada por sus familiares, conducida por JORGE LUIS DEZA BARDALES , quien se dirigía desde Tembladera hasta Quindem Bajo. Siendo el caso que por versiones del conductor que a la altura del kilómetro 67+ 400 aproximadamente se percató que un bus de la empresa DIAS , cuya su placa de rodaje desconoce iba por el carril el contrario con dirección hacia Cajamarca, había invadido el carril ingresando a la curva y al percatarse de la presencia de la M1, ocupó su carril, en circunstancias que la M2 venía atrás del bus intentó sobrepasar al bus, invadiendo el carril contrario, impactando con la M1 por la parte lateral izquierda, deteniéndose la M1 Para prestar el apoyo correspondiente y lo trasladó a la posta médica de Tembladera , siendo atendido por la doctora SOLANO ESTRAYER MARGARETH SUSAN , diagnosticándole politraumatismo , TEC Moderado - Severo con fracturas múltiples en partes inferiores , siendo derivado al hospital de Chiclayo .

Producto del accidente de tránsito la M1 cuenta con los siguientes daños materiales : Parachoques delantero parte lateral izquierda raspado, estribo lateral izquierdo roto, y demás a determinarse con el respectivo peritaje , motivo por el cual el conductor de la M1 ( vehículo de placa de rodaje D4L903) señor LUIS JAVIER VALLEJOS es puesto a disposición de la Comisaría PNP El Salitre para las investigaciones correspondientes y adjuntando al presente - Una (01) Tarjeta de Identificación Vehicular N° 1003733353, un (01) SOAT 0521907564, uno (01) ICN Q40438950, un (01) certificado de habilitación vehicular N° 061600414, un (01), Certificado de TV N° TG-12-00046729, siendo las 11:12 h del mismo día se da por concluida la presente diligencia. (folios 2)

### **TERCERO**

#### **Individualización del imputado**



**3.1.- Identificación**

- a.- Nombre de la imputado: LUIS JAVIER VALLEJOS (no aparece consignado apellido materno)
- b.- Identificado con DNI: 40438950
- c.- Edad: 44 años de edad
- d.- Natural del distrito Pueblo Libre, provincia y departamento de Lima
- e.- Fecha de nacimiento: 27 de diciembre de 1971
- f.- Hijo de: Padre no declaró y JULIA
- g.- Ocupación: Conductor
- h.- Estado civil: Soltero
- i.- Grado de instrucción: Secundaria completa
- j.- Estatura: 1, 58 m
- k.- Domicilio real: Jirón Hipólito Unanue Manzana 4 lote 4, distrito de Lurigancho, provincia y departamento de Lima.

**3.2.- Cargo que se le atribuye al imputado**

Se le atribuye a don LUIS JAVIER VALLEJOS haber causado LESIONES CULPOSAS (teniendo en cuenta el diagnóstico consignado en el Oficio N° 192-16-REG-CAJ/DRSC/HCH, se refiere a Traumatismo Torácico Cerrado, la cual por ser una lesión grave requiere treinta o más días de asistencia o descanso, según prescripción facultativa), a don JORGE LUIS DEZA BARDALES en accidente de tránsito; lo cual debe ser investigado en sede Fiscal con la finalidad de determinar si existe o no la comisión del delito establecido en el artículo 124° del Código Penal (*"El que por culpa causa a otro un daño en el cuerpo o en la salud, será reprimido, por (...) La pena será privativa de libertad no menor de uno ni mayor de dos años y de sesenta a ciento veinte días-multa, si la lesión es grave, de conformidad a los presupuestos establecidos en el artículo 121° (...) "*), concordante con el artículo 121° del mismo Cuerpo de Leyes: (*"Artículo 121.- Lesiones graves.- (...) Se consideran lesiones graves: (...) 2.- Las que hacen impropio un órgano para su función, causan a una persona incapacidad para el trabajo, invalidez (...). 3.- Las que infieren cualquier otro daño a la integridad corporal, o a la salud física (...) de una persona que requiera treinta o más días de asistencia o descanso, según prescripción facultativa (...)."*)

**3.3.- Identificación del Agravado**

- a.- Nombre del agraviado: JORGE LUIS DEZA BARDALES
- b.- Identificado con DNI: 27168692
- c.- Edad: 46 años de edad
- d.- Natural del distrito de Yonán, provincia de Contumazá Pablo; departamento de Cajamarca.
- e.- Fecha de nacimiento: 15 de junio de 1970
- f.- Hijo de Pedro y Orminda
- g.- Ocupación: Se desconoce
- h.- Estado civil: Soltero
- i.- Grado de instrucción: Secundaria completa
- j.- Estatura: 1, 68 m
- k.- Domicilio real: Avenida Pacasmayo s/n distrito El Prado, provincia de San

Artículo modificado por el Artículo Único del Decreto Legislativo N° 1237, publicado el 26 septiembre 2015.



~~1.- El Acta de Intervención Policial s/n (PNPCH)~~

En la que se ha consignado:

“(…) En el kilómetro 67 + 400 altura del centro poblado menor Yatahual (altura del cruce Quinden) – Tembladera. Contumazá, a las 08:00h del 18 de junio de 2016, (...) personal policial de la COMPRCAR- CHILETE, (...) constataron un accidente de tránsito (choque con daños personales y materiales) entre el vehículo de placa de rodaje D4L 903 (M1) (...), conducido por don LUIS JAVIER VALLEJOS, con DNI 40438950 (...), con licencia de conducir Q40438950, domiciliado en el jirón Hipólito Unanue Manzana 4 lote 4 Luriganchito – Lima, quien se dirigía desde Cajamarca hacia Lima, **contra una motocicleta lineal (M2), desconociéndose su placa de rodaje y características, al parecer por haber sido trasladada al por sus familiares, conducida por JORGE LUIS DEZA BARDALES**, quien se dirigía desde Tembladera hasta Quinden Bajo. Siendo el caso que por versiones del conductor que a la altura del kilómetro 67+ 400 aproximadamente se percató que un bus de la empresa DIAS, cuya su placa de rodaje desconoce iba por el carril el contrario con dirección hacia Cajamarca, había invadido el carril ingresando a la curva y al percatarse de la presencia de la M1, ocupó su carril, en circunstancias que la M2 venía atrás del bus intentó sobrepasar al bus, invadiendo el carril contrario, impactando con la M1 por la parte lateral izquierda, deteniéndose la M1 para prestar el apoyo correspondiente y lo trasladó a la posta médica de Tembladera, siendo atendido por la doctora SOLANO ESTRAYER MARGARETH SUSAN, diagnosticándole politraumatismo, TEC Moderado - Severo con fracturas múltiples en partes inferiores, siendo derivado al hospital de Chiclayo.

Producto del accidente de tránsito la M1 cuenta con los siguientes daños materiales : Parachoques delantero parte lateral izquierda raspado, estribo lateral izquierdo roto, y demás a determinarse con el respectivo peritaje , motivo por el cual el conductor de la M1 ( vehículo de placa de rodaje D4L903) señor LUIS JAVIER VALLEJOS es puesto a disposición de la Comisaría PNP El Salitre para las investigaciones correspondientes y adjuntando al presente - Una (01) Tarjeta de Identificación Vehicular N° 1003733353, un (01) SOAT 0521907564, uno (01) ICN Q40438950, un (01) certificado de habilitación vehicular N° 061600414, un (01), Certificado de TV N° TG-12-00046729, siendo las 11:12 h del mismo día se da por concluida la presente diligencia. (folios 2)

2.-Acta de Situación del Vehículo de placa de rodaje D4L- 903 que se pone a Disposición, en el que no se ha consignado observación alguna. (folios 3)

3.- Acta de Ocurrencia Policial redactada por el S03PNP RICARDO HERNÁNDEZ OLIVA en la que se ha consignado:” (...) Siendo las 08:30h del 18 de junio de 2016 el suscrito por orden superior (...) a mérito de una llamada telefónica por parte del centro de salud de Tembladera que había llegado una persona que había sufrido un accidente de tránsito, por lo que me constituí a dicho nosocomio a fin de verificar y constatar lo antes referido; en dicho lugar me entrevisté con la doctora de turno MARGARTEH SOLANO ESTRAYER, quien me indicó me indicó que se hizo presente en e centro de salud la persona de JORGE LUIS DEZA BARDALES (46) natural del caserío El Pardo , San Miguel, Cajamarca, conviviente, identificado con DNI N° 27168692, y domiciliado en caserío Quinden , el mismo que fue conducido por moradores del distrito, por haber sufrido un accidente de tránsito , la referida médico diagnosticó politraumatizado , TEC moderado – severo , fracturas múltiples en miembros inferiores; y dado a su estado de salud fue evacuado de emergencia al hospital de Las Mercedes de Chiclayo, y por versión de los moradores el indicado herido ha sufrido el evento cuando conducía su moto lineal

**Thergerardo Sinopú Garcés**  
Fiscal Provincial



5.- Acta de Inspección Técnico Policial en la que se ha consignado:

En el KM.67.400 de la carretera de penetración Ciudad de Dios - Cajamarca siendo las 14.00 horas del 18JUN2016, presentes ante el Instructor, personal policial de la Comisaria PNP El Salitre, la persona de Luis Javier VALLEJOS (45) natural de Lima, conductor, soltero, con educación secundaria completa, identificado con DNI.No.40438950, con domicilio en Jr. Hipólito Unanue MZ 4 Lote 4 Luriganchu; se procede a levantar la presente acta conforme se detalla:

Conducido por Luis Javier VALLEJOS de 45 años de edad, natural de Lima, soltero, identificado con DNI.No.40438950, con domicilio en Jr. Hipolito Unanue MZ 4 LOTE 4 Lurigancha-Chosica., licencia de conducir Q40438950 A tres c.

Conductor Jorge Luis DEZA BARDALES (46) natural del distrito El Prado-San Miguel, conviviente, identificado con DNI.No. 27168692, con domicilio en el Caserío de Quinden, licencia de conducir no presenta.

*Realizado la consulta Internet se pudo obtener la información de licencias de conducir por puntos en la que se da a conocer de las infracciones al reglamentos de tránsito.*

*La UT1 (D4L-903) instantes previos al accidente el conductor se desplazaba por la carretera de penetración Ciudad de Dios -Cajamarca, altura del KM 67.500 – Caserío de Quinden en sentido de Sur a Norte y la UT2 (motocicleta) se desplazaba en sentido contrario de Norte a Sur y la UT3 (empresa turismo DIAS) se desplazaba en el mismo sentido de Norte a Sur por la carretera de penetración Ciudad de Dios - Cajamarca.*

El KM 67.400 de la carretera de penetración Ciudad de Dios-Cajamarca, altura del caserío de Quinden, es una vía pública de configuración sinuosa (curva) construida de asfalto en buen estado de conservación y uso, presenta una calzada de circulación vehicular con capacidad para dos



carriles, en sentido de Sur a Norte y viceversa cuenta con señales horizontales, como las líneas de borde de pavimento, y líneas continuas separadoras de carril de color amarillo, por el Este limita con el cerro, por el Oeste con guardavías y el río Jequetepeque.

##### 5. REFERENTE A LAS EVIDENCIAS

- Manchas de sangre de color pardo rojizas de aproximado 1 metro en línea recta.
- Se aprecian huellas de frenada por parte de la UT1 (D4L-903).

##### 6.- FACTORES INTERVINIENTES

###### a) Factor Predominante

La actitud imprudente del conductor de la UT2 ( motocicleta ) al invadir ligeramente el carril contrario al tratar de adelantar a la UT3 (bus de la empresa DIAS) no identificada, sin tener en cuenta la configuración de la vía.

###### b) Factor contributivo.

La actitud imprudente del conductor de la Unidad UT2.

##### 7. TOMAS FOTOGRAFICAS.

Se adjuntan al presente documento. (...)”(folios 6 - 13)

##### 6.- Declaración de LUIS JAVIER VALLEJOS

Quien manifestó:

##### III.- INTERROGATORIO

1.- PREGUNTADO PARA QUE DIGA: ¿ Si está conforme con el asesoramiento de su abogado defensor ? Dijo: Que. Sí estoy conforme con el asesoramiento.

2.- PREGUNTADO PARA QUE DIGA: Indique a que actividades laborales se dedica donde, desde cuándo y cuánto percibe mensualmente? Dijo: Que en la actualidad me dedico como conductor de vehículos, desde dos años, percibiendo mensualmente la suma de S/1 ,600. Nuevos soles.

3.- PREGUNTA PARA QUE DIGA: Indique si ha participado en un accidente de tránsito el 18JUN2016, aproximadamente las 08:30 horas, en el kilómetro 67+400 de la carretera penetración a la costa, y si estuvo conduciendo el vehículo de placa de rodaje D4 L - 9 O 3 (C PC)? Dijo: Que, sí he participado en un accidente de tránsito, el día de la fecha, que se me pregunta, estando a bordo del vehículo de placa de rodaje D4L-903.

4.- PREGUNTADO PARA QUE DIGA: Narre la forma y circunstancias como se ha producido el accidente de tránsito (choque con subsecuentes daños personales materiales) el 18JUN2016 aproximadamente a las 08.30 horas, en el kilómetro 67+400 de la carretera penetración a la costa? Dijo: Que, me encontraba conduciendo mi vehículo con dirección a la ciudad de Lima, y al llegar a una semi curva en sentido contrario transitaba un ómnibus de la empresa DIAS, quien había invadido mi carril , obligándome a realizar una frenada para detener el vehículo que conducía y a la vez el conductor del bus circulaba en sentido contrario, ingresando nuevamente a su carril, y en esas circunstancias en forma intempestiva un motociclista que circulaba en el mismo sentido del bus, por no chocar por la parte posterior del bus, invade mi carril, ubicándose en la parte central de la vía, entre ambos vehículos, por lo que impacta con el estribo izquierdo de mi vehículo, y con la parte posterior lateral izquierda del bus , por lo que el bus avanza y este pierde el control de la moto, cayendo dentro del carril derecho, sufriendo lesiones en la pierna izquierda y la cabeza lado derecho.



5.- PREGUNTADO PARA QUE DIGA: A qué velocidad se desplazaba en el momento que se suscitó el accidente de tránsito, el estado de la vía, y si hubo algún obstáculo que haya impedido la visualidad? Dijo: Que me desplazaba a una velocidad de 40 KM/H, el estado de la vía era normal, ningún obstáculo que haya impedido la visualidad.

6.- PREGUNTADO PARA QUE DIGA: Especifique el punto exacto donde se produjo el impacto del choque de su vehículo, con la motocicleta, y el tercer vehículo no identificado (bus de la empresa transporte DIAS ? Dijo: Que el punto exacto del impacto del choque con la motocicleta fue en mi carril, impactando la motocicleta en el estribo izquierdo de mi vehículo, además debo indicar que mi vehículo se encontraba detenido, y el vehículo de la empresa DIAS seguía su marcha.

7.- PREGUNTADO PARA QUE DIGA: Si usted para conducir esta clase de vehículos ha recibido charlas, capacitación y otros como lo exige el Código Nacional de Transito (CNT), en actual vigencia Dijo: Que, si he recibido capacitación para poder conducir esta clase de vehículos.

8.- PREGUNTADO PARA QUE DIGA: Si durante el accidente de tránsito suscitado el 18JUN2016, aproximadamente las 08:30 horas, ha sufrido lesiones de consideración ? Dijo: Que, no he sufrido lesiones.

9.- PREGUNTADO PARA QUE DIGA: Si anteriormente a participado en accidente de tránsito, choque, atropello, y otros? Dijo: Que, no he tenido ningún accidente.

10.- PREGUNTADO PARA QUE DIGA: Precise los daños materiales en su vehículo de placa de rodaje D4L-903, durante el accidente de tránsito (choque con subsecuente daños personales y materiales? Dijo: Que, los daños se han producido en el estribo lado izquierdo.

11.- PREGUNTADO PARA QUE DIGA: Si usted presto los primeros auxilios al conductor de la motocicleta? Dijo: Que, juntamente con otros moradores del lugar, entre ellos una persona que dijo ser su hermana, le subimos a una camioneta al conductor de la motocicleta, conduciéndole al hospital de Tembladera.

12.- PREGUNTADO PARA QUE DIGA: Si el conductor de la empresa turismo DIAS, prestó los primeros auxilios al conductor de la motocicleta? Dijo: Que, el conductor del bus de la empresa DIAS, no ha parado ni menos auxiliado a la persona herida, continuando su marcha.

13.- PREGUNTADO PARA QUE DIGA: Si tiene algo más que agregar, quitar o modificar a su presente declaración. Dijo: Que, si, quiero agregar, que ha sido el motociclista quien me chocó estando con mi vehículo detenido en mi carril, además no soy el responsable de este accidente, luego de haber sido leída y encontrándola conforme en todas sus partes me ratifico, firmando e imprimiendo mi índice derecho en presencia del Instructor que certifica el acto (...). "(folios 13 - 15)

7.- Historia Clínica N° 41-D-128 (ilegible). (folios 25)

8.- Certificado Médico Legal N° 00082-PF-H C practicado a JORGE LUIS DEZA BARDALES en el que se ha consignado: "(...) Visto la historia clínica del centro de salud de Tembladera de fecha 18 de de junio 16, firmado doctora MARGARETH S. SOLANO ESTRAYER con el N° de Colegio Médico 54138 donde consigna como diagnósticos:

- Plolitraumatizado
- Traumatismo en pierna
- Traumatismo Cerebral



*Referencia a Hospital Las Mercedes*

*Se concluye :*

*Para emitir conclusiones finales en atenciones facultativas e incapacidad médico legal , se requiere evaluación por especialistas de referencia mayor capacidad resolutive (...)” (folios 29)*

9.- Consulta del administrado LUIS JAVIER VALLEJOS respecto a su licencia de conducir y Listado de papeletas a partir del DSN° 016- 2009-MTC.(folios 17)

10.- Copia de Licencia de Conducir del imputado LUIS JAVIER VALLEJOS con lo que se acredita está autorizado para conducir vehículo de clase A categoría Tres c. (folios 21)

11.- Tarjeta de identificación vehicular del camión de placa D4L - 903 Documento expedido por la SUNARP en el que se ha consignado los datos del vehículo.(folios 22)

12.- Consulta vehicular SUNARP Móvil con lo que se acredita que el propietario del vehículo D4L-903 es MARCO ANTONIO HERRERA FLORES.(folios 22 A)

13.- Certificado de seguro Obligatorio de accidentes de tránsito SOAT -2015 N°05- 21907564 ; póliza vigente desde 18 de enero de 2016 al 18 de enero de 2017, siendo la contratante doña EDELMIRA YAURI INGA DE PALACIOS.(folios 23)

Advirtiéndose del las diligencias preliminares realizados por la PNP, aparecen indicios reveladores de la existencia del delito de LESIONES CULPOSAS (artículo 124° del Código Penal), que la acción penal no ha prescrito, se ha podido identificar a LUIS JAVIER VALLEJOS como presunto autor, se colige que en el presente caso, se satisfacen los requisitos exigidos por el artículo 336° numeral 1, del Código Procesal Penal, debe abrirse investigación preliminar contra el imputado.

Mediante Disposición N° 1 El Fiscal abrió investigación Preliminar por la presunta comisión del delito de lesiones culposas contra LUIS JAVIER VALLEJOS en agravio de JORGE LUIS DEZA BARDALES y ordenó se realicen diligencias para el mejor esclarecimiento de los hechos.

14.- Obra en los actuados el certificado Médico legal N° 000082 .PF-HC del médico legista doctor MARVIN ALFREDO CARRANZA MÁRQUEZ, en el que se ha consignado la siguiente conclusión respecto el examen post facto basado en la historia clínica de don JORGE LUIS DEZA BARDALES: Para emitir conclusiones finales en atenciones facultativas e incapacidad médico legal se requiere evaluación por especialistas en hospital de referencia (mayor capacidad resolutive) (folios 29)

15.- Obra en los actuados el escrito de don MANUEL NATIVIDAD DEZA



BARDALES (autorizado por Letrado), quien manifiesta ser hermano y representante del agraviado quien solicita se realicen nuevos actos de investigación entre ellos una Inspección técnico criminal entre los participantes del accidente y el conductor del ómnibus de la empresa de transportes Dias - *Directamente Asegurado*- (previa identificación), que se identifique a los conductores del ómnibus de placa N°A8S- 962 que aparece en un video que adjunta, (grabado a las 16:28:16 h del 22 de junio; se disponga la ubicación de la motocicleta de exclusiva propiedad del agraviado , tal como adjunta la tarjeta de propiedad; la declaración del imputado; se recabe la historia clínica del agraviado quien se encuentra internado en el Hospital Regional de Lambayeque; y que la pericia post facto la practique el médico legista de Chiclayo.

Argumenta el peticionante que :

- a.- Su hermano JORGE LUIS DEZA BARDALES el 18 de junio de 2016 a las 07 horas retornaba del caserío Yatahual al centro poblado menor de Quinden Bajo ( provincia de San Miguel), y que el accidente ocurrió a la altura del kilómetro 68 de la carretera de penetración Ciudad de Dios - Cajamarca.
- b.- Por versiones de testigos, su hermano iba por el carril derecho tras el ómnibus de la empresa Dias cuya placa se desconoce, que no intentó sobrepasarlo, que conocía muy bien la carretera y sabía que la curva era peligrosa; que nunca ha realizado maniobras en líneas rectas y nie en curvas peligrosas , que es ilógico creer que el agraviado intentó sobrepasar al ómnibus, ni invadido el carril contrario, porque de ser así el choque hubiera sido de frente y no con estribo del camión .
- c.- Al llegar a la curva del kilómetro 68 aproximadamente el ómnibus de la empresa de transportes DIAS , invadió el carril contrario y al advertir la presencia del camión de placa de rodaje D4L - 903, el ómnibus redujo intempestivamente la velocidad retornando a su carril correcto , originando con esto que el agraviado tenga que frenar y arrastrar la llanta posterior de la motocicleta hacia la izquierda quedando en la línea del centro que divide ambos carriles (entre el ómnibus y el camión ) chocando con el estribo del camión antes mencionado que venía en el otro carril , originando de esta forma el accidente de tránsito.
- d.- La irresponsable maniobra del ómnibus de la empresa de transportes DIAS es el factor que determinó el accidente, porque su hermano venía a velocidad constante y ante la disminución desmesurada de la velocidad por parte del ómnibus para retornar a su carril , el agraviado no pudo voltear hacia la mano derecha para evitar el choque, porque allí está el cerro , tampoco pudo percatarse de la presencia del camión, porque el ómnibus se lo impidió la visibilidad del agraviado , quedándole como única opción, frenar y arrastrar la llanta posterior de la motocicleta , hacia la izquierda .
- e.- El impacto originó que el agraviado salga arrojado a cinco metros ocasionándole heridas muy graves.
- f.- Su hermano quedó tendido en la pista expuesto al peligro de ser atropellado. Segundos después apareció un morador de Quinden Bajo , quien detuvo y ordenó al ahora imputado para que auxilie al agraviado . Luego llegó un vendedor de pescado, quien trató de auxiliar al agraviado y avisó a la hermana del agraviado, la misma que llegó al lugar del accidente, tres o cuatro minutos después, . Luego llegaron el hijo mayor del agraviado y ronderos de la zona, y lo subieron a la tolva de una camioneta rioja y lo al centro de salud de Tembladera, y después al Hospital de Las Mercedes de Chiclayo, luego a la clínica Metropolitana y luego al hospital tegional de Lambayeque, donde permanece en estado de coma.

Tito Gerardo Sifopu Garcés

Fiscal Provincial

Fiscalía Provincial Mixta de Yonán - Tembladera  
Ministerio Público Cajamarca



g.- En el Acta de Constatación expedida por el presidente de la ronda campesina de Quindén - Terlen , ronderas y ronderos , se ha señalado que el agraviado iba detrás del ómnibus , epro emn la curva , el ómnibus se abre a la otra línea sin percatarse que un camión bajaba ocupando su carril , por lo que el ómnibus tuvo que disminuir intempestivamente su velocidad para meterse nuevamente a su carril , provocando que el agraviado vaya a chocar contra el estribo de la puerta del conductor del trailer; y que la constancia de fecha 20 de junio de 2016 expedida por el tenente gobernador de Quinden Bajo , donde se menciona que el conductor del camión en ningún momento tuvo la intención de auxiliar al accidentado.

h.- Él ha denunciado el accidente en la comisaría PNP de Tembladera, y que los efectivos no se la recibieron , porque era jurisdicción de la comisaría PNP de El Salitre, donde tampoco le recibieron su denuncia porque le dijeron que existía un atestado policial.

i.- Que la Inspección Técnico Policial se realizó antes de recibir la manifestación del imputado, por ello no se ha precisado la actitud imprudente del conductor del ómnibus de la empresa se transportes DIAS, quien fue quien originó el accidente, lo que ha sido corroborado con el Acta de Constatación de expedida por el Presidente de la Ronda Campesina de Quinden - Terlen.

j.- Los hechos han sido confirmados por el conductor en su declaración policial.

k.- Que la responsabilidad penal es del conductor del conductor de la empresa de transportes DIAS y no del conductor de la motocicleta, por ello debe incluirse a dicha empresa en las investigaciones, sin eximir de responsabilidad al conductor del camión, quien tiene 3 infracciones muy graves.

l.- Para corroborar las maniobras que realizan los conductores de la empresa de transportes DIAS adjunta copia del un video en el que se aprecia que el 22 de junio a las 16 horas, 28 minutos y 16 segundos, en la misma curva del accidente el ómnibus de placa de rodaje A8S - 962 se abre a su izquierda , invadiendo el carril contrario, acreditándose con esta grabación que es costumbre de los conductores de esta empresa cometer este tipo de imprudencias. Solicitando que se ofice a la manionada empresa que informe los nombres de los que conducían el ómnibus que aparece en el video que adjunta.

m.- Que ninguno de los propietarios de los vehículos se han responsabilizado de los gastos para la curación del agraviado.

n.- Que las lesiones del agraviado son muy graves.

ñ.- Adjunta a su escrito:

ñ.1.- Acta de Constatación en la que se ha consignado: "(...) a las site y cinco de la mañana del 18 de junio de 2016, se tomó conocimiento po los vecinos del lugar que JORGE LUIS DEZA BARDALES sufrió un accidente conduciendo una moto de su propiedad , chocando aparatosamente con un trailer en el kilómetro 68; que acudieron todos los ronderos al auxilio del accidentado. Que el agraviado conducía la motocicleta de placa de rodaje N° 27677-9M de marca Waxin, del caserío Yatahual hacia Quinden bajo, quien iba detrás del ómnibus de transporte de la empresa DIAS , pero en la curva se abre a la otra línea sin percatarse que un camión de placa D4L- 903 bajaba en su línea , por lo que el ómnibus tuvo que frenar intempestivamente para meterse en su carril provocando que el conductor de la moto vaya a chocar con la grada de la puerta del conductor del trailer, ocasionándole lesiones. Los ronderos y ronderas auxiliaron al herido y lo llevaron al centro de salud más cercano , se intervino al conductor del trailer, más no se pudo hacer lo mismo con el conductor del ómnibus. Firmado y sellado por JUAN QUIROZ MORI presidente de la ronda (...)" (folios 59)

ñ.2.- Constancia en la que se ha consignado: "(...) Que por versión de ronderos y ronderas del lugar en el instante del accidente todos les brindaron auxilio al agraviado , sin embargo el conductor del camión no ha realizado ningún acto de intención de auxiliar al accidentado Fecha 20 de junio de 2016.



*Firmado por el teniente gobernador de Quinden Bajo FERNANDO ALAYO QUISPE. (...) (folios 60)*

ñ.3.- Licencia de conducir del agraviado expedida por la municipalidad provincial de San Miguel el 22 de julio de 2014 para ser revalidada e 22 de julio de 2019 expedida el 22 de julio de 2014. (folios 61)

ñ.4.- Tarjeta de identificación Vehicular de la motocicleta de placa de rodaje 2677- 9M Licencia de conducir del agraviado expedida por la municipalidad provincial de San Miguel el 22 de julio de 2014 para ser revalidada e 22 de julio de 2019 expedida el 22 de julio de 2014. (folios 62)

ñ.5.- Consulta Vehicular de la motocicleta 2677 -9M cuyo propietario es JORGE LUIS DEZA BARDALES, inscrita en la SUNARP - Chiclayo. (folios 63)

ñ.6.- Consulta del Administrado VALLEJOS LUIS JAVIER en el que se ha consignando qu éste conductor tiene tres faltas muy graves de tránsito (folios 64)

ñ.7.- Consulta Vehicular del vehículo D4L903 cuyo propietario es MARCO ANTONIO HERRERA (folios 65)

ñ.8.- Record de Infracciones de Tránsito del vehículo D4L903; todas leves. (folios 66)

ñ.9.- Consulta vehicular del ómnibus A8S982, cuyo propietario es Turismo DIAS SA (folios 67)

ñ.10.- CD rom EN FORMATO DVD en el que se consignado los videos 1.- Video denominado "Evidencias DIAS" e el que el ómnibus de placa de rodaje A8S-962 invade el acríl cotrario a horas 04 pm con 28 segundos 16 segundos en el mismo lugar del accidente.; 2.- Copia de video denominado "Evidencias de Accidente" donde se advierte n las huellas dejadas por los vehículos el día del accidente.; 3.- Copia del video denominado "Prendas de vestir del agraviado." (folios 68)

ñ.11.- Página Intitulada "Fotografías del Accidente". La de la parte superior aparece una imagen de una mancha de color rojo, con el nombre "*Mancha de sangre dejada por el agraviado a raíz del accidente (aprox 1 metro)*". La de la parte inferior con el nombre "*Las sandalias del agraviado manchadas de sangre*" (folios 69)

ñ.12.- Página intitulada "Fotografía de la curva donde ocurrió el accidente provocado por el conductor del ómnibus de turismo Dias". De la imagen se aprecia un sector de una pista asfaltada (folios 71)

ñ.13.- Página intitulada "Manchas de sangre en la casaca del agraviado JORGE LUIS DEZA BARDALES" De la imagen se aprecia al parecer un trozo de tela con tres manchas rojas. (folios 71)

ñ.14.- Página intitulada "Manchas de sangre en la casaca del agraviado JORGE LUIS DEZA BARDALES" De la imagen se aprecia al parecer una manga de casaca con manchas rojas. (folios 72)

ñ.15.- Página intitulada "Manchas de sangre en la casaca del agraviado JORGE LUIS DEZA BARDALES" De la imagen se aprecia una figura amorfa en blanco y negro. . (folios 73)

ñ.16.- Documento de la Clínica Metropolitana en el que El médico radiólogo WILLIAM SALAZAR LOCONI ha consignado : Áreas de contusión hemorrágica temporo parietal del lado izquierdo con foco hemorrágico frontal del mismo lado.  
Considerar material hemático sub aracnoideo.  
Extensa fractura de hueso temporal derecho con afectación de sus tres porciones según



descripción.

Hematoma Subgaleal temporo parietal izquierdo. (folios 74)

ñ.17.- Documento del Hospital regional de Lambayeque con el que se pretende acreditar que el agraviado ha recibido transfusión de sangre. (folios 75)

ñ.18.- Página intitulada Fotografías que demuestran el estado de salud el agraviado , JORGE LUIS DEZA BARDALES en el área de traumashock del Hospital Regional de Lambayeque. En ellas se aprecia al presunto agraviado intubado. (folios 76)

ñ.19.- Página intitulada "El agraviado JORGE LLUIS DEZA BARDALES en el área de traumashock del Hospital Regional de Lambayeque , en estado de coma. En ella se aprecia al presunto agraviado intubado. (folios 77)

ñ.20.- CD rom intitulado Copia del estado de salud del agraviado JORGE LUIS DEZA BARDALES. (folios 78)

ñ.20.- Página intitulada comprobantes de pago y recetas de los gastos que se realizan a diario en la salud del agraviado . (folios 79 - 135).

16.- Obra en los actuados el Certificado de Dosaje Etílico N° 000959 con el que se acredita que el imputado LUIS JAVIER VALLEJOS cuando estaba conduciendo su vehículo tenía Cero gramos Cero centigramos de alcohol en la sangre.

17.- Obra en los actuados el escrito de doña MARÍA ISABEL DEZA BARDALES autorizado por Letrada, en representación del agraviado JORGE LUIS DEZA BARDALES solicitando la reprogramación de la declaración de éste último , debido a su precario estado de salud que le impide cumplir deponer sobre los hechos que se investigan. (folios 139 - 144).

18.- Obra en los actuados el Acta de Intervención Policial, en la que se ha consignado qu efectivos policiales de la Comisaría PNP del Norte se constituyeron al Hospital Regional de Lambayeque donde constataron el ingreso del agraviado al área de emergencia de ese nosocomio, y que su hermana MARÍA ISABEL DEZA BARRANTES les dio información respecto a los hechos investigados. En el rubro Ampliación 1 de la Denuncia se ha consignado : "Se agrega que el agraviado conducía la motocicleta marca Wanxin de color azul de placa 2677-9M y carecía de SOAT" (folios 145).

19.- Obra en los actuados el Informe Médico N° 168 de la doctora KARINA L. GARCIA VÁSQUEZ quien ha consignado que el paciente presenta Traumatismo Craneoencefálico Grave y otras lesiones (folios 148- 149).

20.- Obra en los actuados tres fotografías intituladas fotos del estado de salud del agraviado JORGE LUIS DEZA BARDALES, de cuyas imágenes se aprecia que el agraviado se encuentra intubado. (folios 151- 152)

21.- Obra e los actuados el escrito de doña MARÍA ISABEL DEZA BARDALES en representación del agraviado JORGE LUIS DEZA BARDALES, designa nuevos



abogados , y reitera su pedido para que se sirva solicitar a la empresa TURISMO DIAS el número de la placa del ómnibus que partió de Lima con destino a Cajamarca el día 17 de junio a las 17 horas , el nombre de los conductores del vehículo, para que rindan su manifestación en la investigación; se programen las declaraciones del SOT2 PNP EDGARDO MONTENEGRO VILLA, SO PNP LUIS UGAZ COTRINA y SO PNP JOSÉ MARÍA ROLANDO LÓPEZ , quienes intervinieron en el levantamiento del Acta del accidente; solicita participación en las declaraciones del los efectivos PNP ; adjunta fotografía del vehículo D4L -903 y de restos de sangre del agraviado en el lugar del accidente; y adjunta copia de boletas de pago de los medicamentos, objetos y recetas médicas prescritas por los médicos del Hospital Regional de Lambayeque. (folios 156- 290)

22.- Obra e los actuados el escrito de doña MARÍA ISABEL DEZA BARDALES en representación del agraviado JORGE LUIS DEZA BARDALES solicitando la ampliación de la investigación preliminar por un tiempo mayor, toda vez que quedan muchos actos procesales pendientes de actuar y el agraviado todavía permanece hospitalizado. (folios 291)

23.- Obra en los actuados el escrito de doña MARÍA ISABEL DEZA BARDALES en representación del agraviado JORGE LUIS DEZA BARDALES solicitando que el Fiscal a cargo de la investigación se pronuncie respecto a los hechos. (folios 292)

24.- Obra e los actuados el escrito de doña MARÍA ISABEL DEZA BARDALES en representación del agraviado JORGE LUIS DEZA BARDALES presentando el Acta de Hospitalización N° 045 - 2016 -HRL en el que se informa el estado actual del paciente y sobre los tratamientos que aún le falta recibir . (folios 294 - 297)

### **TERCERO**

#### **Valor probatorio de los elementos de convicción obrantes en los actuados**

1.- El Acta de Intervención Policial s/n COMPRCAR- (PNPCH) es idóneo , conducente y útil para el esclarecimiento de los hechos, puesto que en este documento han quedado consignados los datos e incidencias del accidente.

2.- Acta de Situación del Vehículo de placa de rodaje D4L- 903 que se pone a Disposición, este documento es idóneo , conducente y útil para el esclarecimiento de los hechos, porque nos permite conocer las condiciones externas e internas del camión y cómo quedó después del accidente.

3.- Acta de Ocurrencia Policial redactada por el S03PNP RICARDO HERNÁNDEZ OLIVA. Este documento es idóneo , conducente y útil para el esclarecimiento de los hechos, porque nos permite conocer las condiciones de salud en que se encontraba el agraviado, instantes después de ocurrido el accidente, y que por la gravedad de sus lesiones, tuvo que ser referido a un nosocomio de la ciudad de Chiclayo, con mayor resolución.

Tito Cesarco Olguín Garces  
 Fiscal Provincial  
 Fiscalía Provincial de Yauca - Tembladera  
 Ministerio Público - Cajamarca



4.- Acta de Incautación del vehículo.

Este documento es idóneo, conducente y útil para acreditar que el vehículo de placa de rodaje D4L -903 ha participado en el accidente de tránsito - choque con lesiones personales, que se investiga; y para identificar al presuntamente responsable del accidente.

5.- Acta de Inspección Técnico Policial.

Este elemento de convicción es idóneo, conducente, útil y de capital importancia para determinar cómo ocurrió el accidente, quien ha sido el factor determinante, y el factor contribuyente en su causación, y como consecuencia de ello a quién se le debe atribuir responsabilidad penal.

6.- Declaración de LUIS JAVIER VALLEJOS

Este elemento de convicción es idóneo, conducente y útil para conocer del protagonista del accidente directamente lo que ocurrió; y luego, su versión debe ser contrastada con otros medios de convicción e indicios, como la Inspección Técnico Policial, testimonios, pericias, huellas materiales, etcétera para establecer de manera categórica cómo ocurrieron los hechos y a quien atribuirle responsabilidad penal.

7.- Historia Clínica N° 41-D-128

Este documento es idóneo, conducente y útil para determinar la magnitud de las lesiones del agraviado, así como la gravedad de los menoscabos o daños en su salud.

8.- Certificado Médico Legal N° 00082-PF-H C practicado a JORGE LUIS DEZA BARDALES

Este documento es idóneo, conducente y útil para determinar la gravedad de las lesiones sufridas por el agraviado, puesto que el médico ha consignado que para emitir conclusiones finales en atenciones facultativas e incapacidad médico legal, se requiere evaluación por especialistas de referencia mayor capacidad resolutive.

9.- Consulta del administrado LUIS JAVIER VALLEJOS respecto a su licencia de conducir y Listado de papeletas a partir del DSN° 016- 2009-MTC.

Este documento es idóneo, conducente y útil para conocer cual es la conducta del imputado como chofer, y su potencialidad en la comisión de delitos de esta naturaleza, y poder inferir la probabilidad de su accionar en el accidente que se investiga.

10.- Copia de Licencia de Conducir del imputado LUIS JAVIER VALLEJOS.

Este documento es idóneo, conducente y útil para determinar si el imputado está apto y autorizado para conducir vehículo de clase A categoría Tres c.

11.- Tarjeta de identificación vehicular del camión de placa D4L - 903



Documento expedido por la SUNARP en el que se ha consignado los datos del vehículo. (folios 22)

Este documento es idóneo, conducente y útil para conocer si el vehículo que conduce el imputado está debidamente identificado, registrado, cuáles son sus características.

12.- Consulta vehicular SUNARP Móvil con lo que se acredita que el propietario del vehículo D4L-903 es MARCO ANTONIO HERRERA FLORES. (folios 22 A)

Este documento es idóneo, conducente y útil, para determinar si el vehículo participante del accidente se encuentra en posesión lícita del conductor imputado, y conocer al potencial responsable solidario del pago de una presunta reparación civil.

13.- Certificado de seguro Obligatorio de accidentes de tránsito SOAT -2015 N°05- 21907564 ; póliza vigente desde 18 de enero de 2016 al 18 de enero de 2017, siendo la contratante doña EDELMIRA YAURI INGA DE PALACIOS.

Este documento es útil, conducente y útil para saber quien va asumir la responsabilidad de indemnizar al potencial agraviado de un accidente de tránsito.

Advirtiéndose del las diligencias preliminares realizadas por la PNP, aparecen indicios reveladores de la existencia del delito de LESIONES CULPOSAS (artículo 124° del Código Penal), que la acción penal no ha prescrito, se ha podido identificar a LUIS JAVIER VALLEJOS como presunto autor, se colige que en el presente caso, se satisfacen los requisitos exigidos por el artículo 336° numeral 1, del Código Procesal Penal, debe abrirse investigación preliminar contra el imputado.

Mediante Disposición N° 1 El Fiscal abrió investigación Preliminar por la presunta comisión del delito de lesiones culposas contra LUIS JAVIER VALLEJOS en agravio de JORGE LUIS DEZA BARDALES y ordenó se realicen diligencias para el mejor esclarecimiento de los hechos.

14.- Obra en los actuados el certificado Médico legal N° 000082- PF-HC del médico legista doctor MARVIN ALFREDO CARRANZA MÁRQUEZ.

Este documento es idóneo, conducente y útil para determinar la gravedad de las lesiones sufridas por el agraviado, puesto que el médico ha consignado que para emitir conclusiones finales en atenciones facultativas e incapacidad médico legal, se requiere evaluación por especialistas de referencia mayor capacidad resolutive.

15.- Don MANUEL NATIVIDAD DEZA BARDALES hermano y representante del agraviado ha presentado los siguientes elementos de convicción:

ñ.1.- Acta de Constatación en la que se ha consignado: "(...) a las siete y cinco

Tito Gerardo Siriopti Garcés  
Fiscal Provincial  
Escuela Provincial de la Provincia de Yauca - Tumbuladara  
Ministerio Público de la Capital



de la mañana del 18 de junio de 2016, se tomó conocimiento por los vecinos del lugar que JORGE LUIS DEZA BARDALES sufrió un accidente conduciendo una moto de su propiedad, chocando aparatosamente con un trailer en el kilómetro 68; que acudieron todos los ronderos al auxilio del accidentado. Que el agraviado conducía la motocicleta de placa de rodaje N° 27677-9M de marca Waxin, del caserío Yatahual hacia Quinden bajo, quien iba detrás del ómnibus de transporte de la empresa DIAS, pero en la curva se abre a la otra línea sin percatarse que un camión de placa D4L- 903 bajaba en su línea, por lo que el ómnibus tuvo que frenar intempestivamente para meterse en su carril provocando que el conductor de la moto vaya a chocar con la grada de la puerta del conductor del trailer, ocasionándole lesiones. Los ronderos y ronderas auxiliaron al herido y lo llevaron al centro de salud más cercano, se intervino al conductor del trailer, más no se pudo hacer lo mismo con el conductor del ómnibus. Firmado y sellado por JUAN QUIROZ MORI presidente de la ronda (...)” (folios 59)

Lo consignado en esta Acta no ha estado bajo la percepción de los sentidos de don JUAN QUIROZ MORI presidente de la ronda. Del texto se infiere que no ha estado presente en el lugar, al momento de ocurridos los hechos. El tema del testimonio carece de objetividad, no puede resistir el análisis de preguntas básicas, para concluir que tiene presunción de veracidad:

- 1.- ¿Quién tomó la hora de la ocurrencia del accidente?
- 2.- ¿Quiénes son los vecinos del lugar?
- 3.- ¿Quién o quiénes sabían que la motocicleta que conducía JORGE LUIS DEZA BARDALES era de su propiedad?
- 4.- ¿Quiénes son las personas que sabían que JORGE LUIS DEZA BARDALES venía de Yatahual hacia Quinden?
- 5.- ¿Quién se percató que la motocicleta que conducía tenía placa de rodaje 27 677-9M?
- 6.- ¿Quién se llevó la motocicleta y no la entregó a los efectivos policiales para que sea sometida al examen de daños y a la Inspección Técnico Policial?
- 7.- ¿Quiénes son las personas que observaron el accionar de los choferes de los vehículos?
- 8.- ¿Quiénes son los ronderos y ronderas son los que auxiliaron al herido?

Lo consignado en esta Acta no está corroborado por persona alguna con capacidad jurídica para testificar un hecho real.

Ninguno de estos hechos pueden estar probado o susceptible de serlo, pata que por relación de causalidad nos lleve al conocimiento de la verdad de lo ocurrido.

ñ.2.- Constancia en la que se ha consignado: “(...) Que por versión de ronderos y ronderas del lugar en el instante del accidente todos les brindaron auxilio al agraviado, sin embargo el conductor del camión no ha realizado ningún acto de intención de auxiliar al accidentado Fecha 20 de junio de 2016. Firmado por el teniente gobernador de Quinden Bajo FERNANDO ALAYO QUISPE. (...)” (folios 60)

Lo consignado en esta Constancia no ha estado bajo la percepción de los



sentidos de don FERNANDO ALAYO QUISPE teniente gobernado de Quinden. Del texto se infiere que no ha estado presente en el lugar, al momento de ocurridos los hechos. El tema del testimonio carece de objetividad, no puede resistir el análisis de preguntas básicas, para concluir que tiene presunción de veracidad:

1.- ¿Quiénes son los ronderos y ronderas que le brindaron auxilio al agraviado?

2.- ¿Cómo pudieron saber las intenciones del conductor del camión?

3.- ¿Quién se llevó la motocicleta y no la entregó a los efectivos policiales para que sea sometida al examen de daños y a la Inspección Técnico Policial?

ñ.3.- Licencia de conducir del agraviado expedida por la municipalidad provincial de San Miguel el 22 de julio de 2014 para ser revalidada e 22 de julio de 2019 expedida el 22 de julio de 2014. (folios 61)

Este documento permite inferir que el agraviado estaba conduciendo la motocicleta sin portar la licencia de conducir, y que ha infraccionado el artículo 91 del Reglamento Nacional de Tránsito D.S. N° 016-09-MTC-RNT que exige: *Documentación requerida. El conductor debe portar y exhibir cuando el efectivo de la Policía Nacional del Perú asignado al control del tránsito lo solicite, lo siguiente: (...) b) Licencia de Conducir vigente, correspondiente al tipo de vehículo que conduce.* De lo expuesto se advierte la conducta negligente de don JORGE LUIS DEZA BARDALES porque no ha acreditado aptitud ni autorización otorgadas por la autoridad competente para conducir motocicleta, a nivel nacional.

ñ.4.- Tarjeta de identificación Vehicular de la motocicleta de placa de rodaje 2677- 9M Licencia de conducir del agraviado expedida por la municipalidad provincial de San Miguel el 22 de julio de 2014 para ser revalidada e 22 de julio de 2019 expedida el 22 de julio de 2014. (folios 62)

Este documento permite inferir que don JORGE LUIS DEZA BARDALES es propietario de la motocicleta en mención, más no sirve para acreditar que él estaba conduciendo este vehículo al momento del accidente, porque en el Acta de Intervención Policial s/n COMPRCAR- (PNPCH) ha quedado consignado que el accidente ocurrió por el choque de un camión " (...) con una motocicleta lineal (M2), desconociéndose su placa de rodaje y características, al parecer por haber sido trasladada por sus familiares, conducida por JORGE LUIS DEZA BARDALES (...)"

ñ.5.- Consulta Vehicular de la motocicleta 2677 -9M cuyo propietario es JORGE LUIS DEZA BARDALES, inscrita en la SUNARP - Chiclayo. (folios 63)

Este documento permite inferir que don JORGE LUIS DEZA BARDALES es propietario de la motocicleta en mención, más no sirve para acreditar que él estaba conduciendo este vehículo al momento del accidente,



porque en el Acta de Intervención Policial s/n COMPRCAR- (PNPCH) ha quedado consignado que el accidente ocurrió por el choque de un camión " (...) con una motocicleta lineal (M2), desconociéndose su placa de rodaje y características, al parecer por haber sido trasladada por sus familiares, conducida por JORGE LUIS DEZA BARDALES (...)"

ñ.6.- Consulta del Administrado VALLEJOS LUIS JAVIER en el que se ha consignado que éste conductor tiene tres faltas muy graves de tránsito (folios 64)

Este documento nos permite recordar que el derecho penal es de acto y no de autor. En el presente caso, en la Inspección técnico Policial, no se ha señalado el accionar del conductor del camión, sino la conducta imprudente del conductor de la motocicleta, el ahora agraviado.

ñ.7.- Consulta Vehicular del vehículo D4L903 cuyo propietario es MARCO ANTONIO HERRERA (folios 65)

Este documento no es pertinente, conducente ni útil para el esclarecimiento de los hechos.

ñ.8.- Record de Infracciones de Tránsito del vehículo D4L903; todas leves. (folios 66)

Este documento es inidóneo para atribuirle alguna responsabilidad penal al conductor de este vehículo, puesto que la Inspección Técnico Polical, ha indicado la conducta imprudente del conductor de la motocicleta.

ñ.9.- Consulta vehicular del ómnibus A8S982, cuyo propietario es Turismo DIAS SA (folios 67)

Este documento es no es idóneo para atribuirle alguna responsabilidad penal al conductor de este vehículo, puesto que la Inspección Técnico Polical, ha indicado la conducta imprudente del conductor de la motocicleta.

ñ.10.- CD rom EN FORMATO DVD en el que se consignado los videos 1.- Video denominado "Evidencias DIAS" e el que el ómnibus de placa de rodaje A8S-962 invade el carril contrario a horas 04 pm con 28 segundos 16 segundos en el mismo lugar del accidente.; 2.- Copia de video denominado "Evidencias de Accidente" donde se advierten las huellas dejadas por los vehículos el día del accidente.; 3.- Copia del video denominado "Prendas de vestir del agraviado." (folios 68)

El video N°1 ve para acreditar lo que allí se encuentra registrado, más no es idóneo para probar lo que en realidad motivó el accidente y cómo ocurrió. Tampoco es conducente ni útil para esclarecer la presente investigación.



Los videos N° 2 y N° 3 más no son idóneos para probar lo que en realidad motivó el accidente, y como ocurrió. Tampoco son conducentes ni útiles para esclarecer la presente investigación.

ñ.11.- Página Intitulada "Fotografías del Accidente". La de la parte superior aparece una imagen de una mancha de color rojo, con el nombre "*Mancha de sangre dejada por el agraviado a raíz del accidente (aprox 1 metro)*". La de la parte inferior con el nombre "*Las sandalias del agraviado manchadas de sangre*" (folios 69)

Estas fotografías no son idóneas para probar lo que en realidad motivó el accidente, y como ocurrió. Tampoco son conducentes ni útiles para esclarecer la presente investigación.

ñ.12.- Página intitulada "Fotografía de la curva donde ocurrió el accidente provocado por el conductor del ómnibus de Turismo Dias". De la imagen se aprecia un sector de una pista asfaltada (folios 71)

Estas fotografías no son idóneas para probar lo que en realidad motivó el accidente, y como ocurrió. Tampoco son conducentes ni útiles para esclarecer la presente investigación.

ñ.13.- Página intitulada "Manchas de sangre en la casaca del agraviado JORGE LUIS DEZA BARDALES". De la imagen se aprecia al parecer un trozo de tela con tres manchas rojas. (folios 71)

Estas fotografías no son idóneas para probar lo que en realidad motivó el accidente, y como ocurrió. Tampoco son conducentes ni útiles para esclarecer la presente investigación.

ñ.14.- Página intitulada "Manchas de sangre en la casaca del agraviado JORGE LUIS DEZA BARDALES". De la imagen se aprecia al parecer una manga de casaca con manchas rojas. (folios 72)

Estas fotografías no son idóneas para probar lo que en realidad motivó el accidente, y como ocurrió. Tampoco son conducentes ni útiles para esclarecer la presente investigación.

ñ.15.- Página intitulada "Manchas de sangre en la casaca del agraviado JORGE LUIS DEZA BARDALES". De la imagen se aprecia una figura amorfa en blanco y negro. . (folios 73)

Estas fotografías no son idóneas para probar lo que en realidad motivó el accidente, y como ocurrió. Tampoco son conducentes ni útiles para



esclarecer la presente investigación.

ñ.16.- Documento de la Clínica Metropolitana en el que El médico radiólogo WILLIAM SALAZAR LOCONI ha consignado : Áreas de contusión hemorrágica temporo parietal del lado izquierdo con foco hemorrágico frontal del mismo lado.

Considerar material hemático sub aracnoideo.

Extensa fractura de hueso temporal derecho con afectación de sus tres porciones según descripción.

Hematoma Subgaleal temporo parietal izquierdo. (folios 74)

Este documento es idóneo, conducente y útil para determinar la gravedad de las lesiones sufridas por el agraviado.

ñ.17.- Documento del Hospital Regional de Lambayeque con el que se pretende acreditar que el agraviado ha recibido transfusión de sangre. (folios 75)

Este documento es idóneo, conducente y útil para determinar que el agraviado estuvo como paciente en un hospital de alta resolución.

ñ.18.- Página intitulada Fotografías que demuestran el estado de salud el agraviado , JORGE LUIS DEZA BARDALES en el área de traumashock del Hospital Regional de Lambayeque. En ellas se aprecia al presunto agraviado intubado. (folios 76)

Este documento es idóneo, conducente y útil para determinar la gravedad de las lesiones sufridas por el agraviado.

ñ.19.- Página intitulada "El agraviado JORGE LLUIS DEZA BARDALES en el área de traumashock del Hospital Regional de Lambayeque , en estado de coma. En ella se aprecia al presunto agraviado intubado. (folios 77)

Este documento es idóneo, conducente y útil para determinar la gravedad de las lesiones sufridas por el agraviado.

ñ.20.- CD rom intitulado Copia del estado de salud del agraviado JORGE LUIS DEZA BARDALES. (folios 78)

Este documento es idóneo, conducente y útil para determinar la gravedad de las lesiones sufridas por el agraviado.

ñ.20.- Página intitulada comprobantes de pago y recetas de los gastos que se realizan a diario en la salud del agraviado . (folios 79 - 135).



Este documento es idóneo, conducente y útil para determinar el gasto erogado en la curación del agraviado.

16.- El Certificado de Dosaje Etílico N° 000959 este documento es idóneo, conducente y útil porque permite conocer que el imputado estaba sobrio cuando conducía su vehículo, puesto tenía Cero gramos Cero centigramos de alcohol en la sangre.

17.- El escrito de doña MARÍA ISABEL DEZA BARDALES solicitando la reprogramación de la declaración del agraviado, Este documento es idóneo, conducente y útil para determinar la gravedad de las lesiones sufridas como consecuencia del accidente.

18.- El Acta de Intervención Policial.

Este documento es idóneo, conducente y útil para tener el conocimiento que el agraviado el agraviado conducía la motocicleta marca Wanxin de color azul de placa 2677-9M y carecía del Seguro Obligatorio para Accidentes de Tránsito.

19.- Informe Médico N° 168 de la doctora KARINA L. GARCIA VÁSQUEZ quien ha consignado que el paciente presenta Traumatismo Craneoencefálico Grave y otras lesiones. Este documento es idóneo, conducente y útil para acreditar la gravedad de las lesiones del agraviado.

20.- Tres fotografías intituladas fotos del estado de salud del agraviado JORGE LUIS DEZA BARDALES, de cuyas imágenes se aprecia que el agraviado se encuentra intubado.

Estas fotografías son elementos de convicción idóneas, conducentes y útiles para acreditar la gravedad de las lesiones del agraviado.

21.- Obra e los actuados el escrito de doña MARÍA ISABEL DEZA BARDALES en representación del agraviado JORGE LUIS DEZA BARDALES, designa nuevos abogados , y reitera su pedido para que se sirva solicitar a la empresa TURISMO DIAS el número de la placa del ómnibus que partió de Lima con destino a Cajamarca el día 17 de junio a las 17 horas , el nombre de los conductores del vehículo, para que rindan su manifestación en la investigación; se programen las declaraciones del SOT2 PNP EDGARDO MONTENEGRO VILLA, SO PNP LUIS UGAZ COTRINA y SO PNP JOSÉ MARÍA ROLANDO LÓPEZ , quienes intervinieron en el levantamiento del Acta del accidente; solicita participación en las declaraciones del los efectivos PNP ; adjunta fotografía del vehículo D4L -903 y de restos de sangre del agraviado en el lugar del accidente; y adjunta copia de boletas de pago de los medicamentos, objetos y recetas médicas prescritas por los médicos del Hospital Regional de Lambayeque.

La petición solicitar a la empresa TURISMO DIAS el número de la placa del



ómnibus que partió de Lima con destino a Cajamarca el día 17 de junio a las 17 horas, el nombre de los conductores del vehículo, para que rindan su manifestación en la investigación; resulta ser impertinente, ni, conducente, ni útil para el esclarecimiento de los hechos que se investigan, puesto que ya existe la Inspección Técnico Policial, que ha determinado de manera categórica que ha sido la imprudencia del agraviado y la falta de respeto a las normas de tránsito la causante del accidente de tránsito.

La petición de solicitar se les tome declaraciones a los efectivos policiales SOT2 PNP EDGARDO MONTENEGRO VILLA, SO PNP LUIS UGAZ COTRINA y SO PNP JOSÉ MARÍA ROLANDO LÓPEZ, resultan ser impertinentes, inidóneas, no conducentes, ni útiles para el esclarecimiento de los hechos, puesto que ellos no estuvieron al momento de ocurrido el accidente; por tanto no pudieron percibir por los sentidos lo ocurrido.

La fotografía del vehículo D4L -903 es idónea, conducente y útil para identificar al camión interviniente en el accidente de tránsito.

La fotografía de los restos de sangre en el lugar del accidente, no es idónea, ni conducente ni útil para el esclarecimiento de los hechos, ni para determinar la gravedad de las lesiones el agraviado, porque no existe la posibilidad de acreditar que la sangre le pertenezca al agraviado, ni que la toma haya sido registrada en el lugar y momentos después del accidente.

Las copia de boletas de pago de los medicamentos, objetos y recetas médicas prescritas por los médicos del Hospital Regional de Lambayeque, son idóneas, conducentes y útiles para acreditar una probable indemnización.

22.- Obra e los actuados el escrito de doña MARÍA ISABEL DEZA BARDALES en representación del agraviado JORGE LUIS DEZA BARDALES solicitando la ampliación de la investigación preliminar por un tiempo mayor, toda vez que quedan muchos actos procesales pendientes de actuar y el agraviado todavía permanece hospitalizado.

La petición de la solicitante, resulta impertinente, porque en los actuados obran elementos de convicción suficientes como los detallados precedentemente, que permiten al Fiscal pronunciarse en el sentido que la responsabilidad absoluta del accidente le corresponde al agraviado.

23.- Obra en los actuados el escrito de doña MARÍA ISABEL DEZA BARDALES en representación del agraviado JORGE LUIS DEZA BARDALES solicitando que el Fiscal a cargo de la investigación se pronuncie respecto a los hechos.

Lo solicitado por la peticionante resulta pertinente, por ello el Fiscal esta expidiendo la presente Disposición.

24.- Obra e los actuados el escrito de doña MARÍA ISABEL DEZA BARDALES en representación del agraviado JORGE LUIS DEZA BARDALES presentando el



Acta de Hospitalización N° 045 - 2016 -HRL en el que se informa el estado actual del paciente y sobre los tratamientos que aún le falta recibir.

Este documento es idóneo, conducente y útil para determinar la gravedad de las lesiones del imputado.

#### **CUARTO**

##### **Conceptos básicos del delito culposo**

###### **a.- Cuándo se produce el delito culposo**

El delito culposo se da cuando el agente violando el deber de cuidado produce un resultado.

###### **b.- Definición de conducta culposa**

Tal como se describe en la doctrina "(...) la conducta imprudente o culposa es la acción peligrosa emprendida sin ánimo de lesionar el bien jurídico, pero que por falta de aplicación del cuidado o diligencia debida causa su efectiva lesión. No nos encontramos aquí con la actitud rebelde del sujeto frente a la norma que protege los bienes jurídicos y que prohíbe matar, lesionar o dañar a otro; no es ahí donde se encuentra el desvalor de acción de estos delitos, sino en el incumplimiento por parte de aquél de la exhortación al actuar cuidadoso, que es principio general del ordenamiento encargado de prohibir la innecesaria puesta en peligro de los bienes jurídicos ajenos; desvalor que por lo demás, es menor que el de las conductas dolosas."<sup>5</sup>

De lo precedentemente expuesto se infiere que, lo cardinal no es determinar la mera relación causal y el resultado, sino quien al momento de ocurrido el evento, actuaba con la diligencia debida, y quién no.

###### **c.- Requerimientos del comportamiento culposo**

El comportamiento culposo requiere de negligencia, impericia y/o imprudencia.

###### **c.1.- La Negligencia**

*"La negligencia es la omisión, el descuido voluntario y consciente en la tarea cotidiana que se despliega o bien en el ejercicio de la profesión a través de la realización de un acto contrario a lo que el deber que esa persona realiza exige y supone."*<sup>6</sup>

"Una conducta negligente, por lo general, implica un riesgo para uno mismo o para terceros y se produce por la omisión del cálculo de las consecuencias previsibles y posibles de la propia acción, y son punibles de una sanción en materia penal."

En el presente caso, tanto LUIS JAVIER VALLEJOS (imputado), cuanto JORGE LUIS DEZA BARDALES (agraviado) al momento del accidente, tenían aptitud para conducir sus respectivos vehículos.

<sup>5</sup> - BERDUGO DE LA TORRE, Ignacio y otros; "Lecciones de Derecho Penal, Parte General"; Barcelona; Praxis; 1996, p. 169  
[www.definicionabc.com/salud/negligencia.php](http://www.definicionabc.com/salud/negligencia.php) - México



El segundo (JORGE LUIS DEZA BARDALES), tiene la licencia de conducir Documento N° L - 27168692 expedida por la municipalidad provincial de San Miguel expedida el 22 de julio de 2014 para ser revalidada el 22 de julio de 2019. (folios 61), sin embargo en el Acta de Inspección Técnico Policial se ha consignado “(...) *Licencia de conducir no presenta (...)* ” (folios 6)

*El Reglamento Nacional de Tránsito D.S. N° 016-09-MTC-RNT, - exige que :*

**Artículo 91.- Documentación requerida. El conductor debe portar y exhibir cuando el efectivo de la Policía Nacional del Perú asignado al control del tránsito lo solicite, lo siguiente: (...) b) Licencia de Conducir vigente, correspondiente al tipo de vehículo que conduce. "**

**En el presente caso, se advierte la conducta negligente de don JORGE LUIS DEZA BARDALES porque no ha acreditado aptitud ni autorización otorgadas por la autoridad competente para conducir motocicleta, a nivel nacional.**

El vehículo de placa de rodaje D4L-903 que conducía LUIS JAVIER VALLEJOS al momento del accidente estaba asegurado con la póliza N° 05-21907564 de la empresa aseguradora La Positiva, la misma que estaba vigente desde el 18 de enero de 2016 hasta el 18 de enero de 2017. (folios 23)

El vehículo menor, la motocicleta que conducía JORGE LUIS DEZA BARDALÉS al momento del accidente no estaba asegurado con la póliza alguna sobre el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT 2016, conforme se puede apreciar en el rubro Ampliación 1 de la Denuncia se ha consignado : “Se agrega que el agraviado conducía la motocicleta marca Wanxin de color azul de placa 2677-9M y carecía de SOAT” (folios 145). De lo expuesto, se infiere que se encontraría incurso dentro de los alcances de los Artículos del Reglamento Nacional de Tránsito:

**Artículo 91.- Documentación requerida.** El conductor debe portar y exhibir cuando el Efectivo de



la Policía Nacional del Perú asignado al control del tránsito lo solicite, lo siguiente: (...) e) Certificado vigente del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) o del Certificado Contra Accidentes de Tránsito (CAT), cuando corresponda del vehículo que conduce".

De lo expuesto se infiere que los vehículos motorizados (en el presente caso automóvil y motocicleta, respectivamente) son cosas peligrosas, y el conducirlos es una actividad riesgosa jurídicamente aceptada, y que el conductor asume ex ante (antes del suceso) la responsabilidad por el riesgo creado, los daños causados a las personas y a los bienes con motivo de la circulación vehicular (el legislador ha considerado que riesgo y responsabilidad por un hecho dañoso son conceptos intrínsecos).

Por estas razones, el legislador:

a.- Ha normado que se exija a los propietarios y/o conductores de estas cosas, tarjeta de propiedad, licencia de conducir, dosaje etílico para quienes se sospecha están conduciendo vehículos motorizados después de haber ingerido bebidas alcohólicas o consumido drogas, Certificado de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT, etcétera;y

b.- Ha dispuesto un catálogo de conductas calificándolas como delitos o infracciones de tránsito, con sus respectivas punibilidades, para quienes incurran en la comisión de estos ilícitos.

Por ello, a ambos (LUIS JAVIER VALLEJOS y JORGE LUIS DEZA BARDALES) se les exigía precaución, atención, cuidado en la conducción de sus vehículos, y la previsión del accidente.

**Sin embargo, en el presente caso, se advierte conducta negligente por parte de JORGE LUIS DEZA BARDALES (quien conducía la motocicleta), porque su vehículo no tenía Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito.**

### c.2.- La Imprudencia

"(...) La imprudencia es la forma activa; es el obrar, el actuar sin la cautela debida. Va revestida de precipitación, insensatez o falta de consideración, (...)"<sup>7</sup>

Revisando el Inspección Técnico Policial, se advierte en el rubro 6. Factores Intervinientes "(...) 6.- FACTORES INTERVINIENTES

#### a) Factor Predominante

La actitud imprudente del conductor de la UT2 (motocicleta) al invadir ligeramente el carril contrario al tratar de adelantar a la UT3 (bus de la empresa DIAS) no identificada, sin tener en cuenta la configuración de la vía.

#### b) Factor contributivo.

La actitud imprudente del conductor de la Unidad UT2.

BRAMONT ARIAS TORRES, Luis Alberto y GARCÍA CANTIZANO, María del Carmen; "Manual de Derecho Penal Parte Especial; editorial San Marcos, Lima, 2001; p 70.

Fiscal Provincial  
Tito Gerardo Cárdenas Garces  
Fiscalía Provincial  
Barranca de Yauca - Tarma  
Fiscalía Provincial  
Barranca de Yauca - Tarma



**Se ha llegado a determinar la actitud imprudente al momento de la conducción y el desconocimiento de las normas del manejo por parte de JORGE LUIS DEZA BARDALES conductor de la motocicleta.**

Considerando las evidencias físicas manchas de sangre de color pardo rojizas de aproximado un metro en línea recta encontradas en el lugar, y las huellas de frenada por parte de placa de rodaje D4L-903, se demuestra que dicho conductor tuvo la percepción real de la presencia del trailer, cuando en su afán de pasar al ómnibus, y al tratar de realizar una maniobra evasiva sin tener en cuenta la configuración de la vía (curva) invadió ligeramente el carril contrario, siendo inminente el impacto, resultando con lesiones personales de gravedad. por lo que fue auxiliado y trasladado al centro de salud de Tembladera para su atención respectiva, y posteriormente, por la gravedad de las lesiones fue evacuado al Hospital de las Mercedes de Chiclayo, luego a la Clínica Metropolitana, y después al Hospital Regional de Lambayeque. Asimismo el trailer no resultó con daños materiales conforme se detalla en el Acta de Situación del Vehículo que se pone a Disposición. (folios 3).

**c.3.- Respecto de la Inobservancia de Reglas Técnicas de Tránsito**

Del Acta de Inspección Técnico Policial se infiere que en el presente caso se han verificado las siguientes:

**Infracciones Administrativas de JORGE LUIS DEZA BARDALES**

Art. 296 D.S. N° 016-09-MTC-RNT.- TIPIFICACION y CALIFICACION DE INFRACCIONES DEL CONDUCTOR: Las infracciones de tránsito del conductor, son las que figuran en el Cuadro de Tipificación, Sanciones y Medidas Preventivas, aplicables a las infracciones de Tránsito Terrestre - I Conductores que, como Anexo 1, forma parte del presente reglamento.

El conductor de la motocicleta se encontraría incurso dentro de los alcances de los Artículos del Reglamento Nacional de Tránsito:

Art. 90 inc. b D.S.N° 016- 09-MTC-RNT.-REGLAS GENERALES PARA CONDUCIR.- circular con cuidado y prevención (...)"

JORGE LUIS DEZA BARDALES ha infraccionado la regla de tránsito de conducir un vehículo de la categoría L (motocicleta), sin tener puesto el casco de seguridad o anteojos protectores, en caso de no tener parabrisas.

JORGE LUIS DEZA BARDALES ha infraccionado esta regla de prevención, la cual es una infracción grave (tiene el Código G59).

Art. 91 inc. b, c y e.- D.S. Nro.016-09-MTC-RNT.- DOCUMENTACION REQUERIDA.- El conductor durante la conducción del vehículo debe portar y exhibir cuando la autoridad competente, lo siguiente:

- Licencia de conducir vigente, correspondiente al tipo de vehículo que conduce.

JORGE LUIS DEZA BARDALES ha infraccionado la regla de tránsito de conducir un vehículo automotor sin tener licencia de conducir o permiso



provisional, la cual es una infracción muy grave (tiene el código M3)

c.- *Tarjeta de identificación vehicular correspondiente al tipo de vehículo que conduce.*

JORGE LUIS DEZA BARDALES ha infraccionado la regla de tránsito de no

presentar la Tarjeta de Identificación Vehicular, la Licencia de Conducir o el Documento Nacional de Identidad o documento de identidad, según corresponda, la cual es una infracción muy grave (tiene el código G58)

d.- *Certificado vigente del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y el Certificado contra Accidentes de Tránsito (CAT), cuando corresponda del vehículo que conduce.*

Art. 285.- D.S. N° 016 - 09 - MTC - RNT.- *POLIZA DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO: Para que un vehículo automotor o vehículo combinado circule por una vía, debe contratarse una Póliza de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, según los términos y montos en el Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por Accidentes de Tránsito. Et conductor debe portar el certificado vigente correspondiente.*

JORGE LUIS DEZA BARDALES ha infraccionado la regla de tránsito Conducir un vehículo sin contar con la póliza del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, ó Certificado de Accidentes de Tránsito, cuando corresponda, o éstos no se encuentre vigente, la cual es una infracción muy grave (tiene el código M28)

e.- Art.135° D.S. N° 016 - 09 - MTC-RNT.- *VIAS DE DOS CARRILES.- En las calzadas de dos carriles con tránsito en doble sentido, los vehículos deben circular por el carril de la derecha.*

JORGE LUIS DEZA BARDALES ha infraccionado la regla de tránsito establecida en el artículo 135 que ordena que en calzadas de dos carriles con tránsito en doble sentido, los vehículos deben circular por el carril de la derecha.

d.- Característica del delito culposos

En el delito culposos el autor no desea causar el resultado obtenido.

e.- La participación en los delitos culposos

En los delitos culposos no hay participación. Cualquier contribución causal culposa para el resultado representa autoría.

f.- El riesgo

En el presente caso automóvil y motocicleta son bienes peligrosos, y el conducirlos es una actividad riesgosa jurídicamente aceptada, Por ello el Estado Peruano mediante las leyes de tránsito, permiten la circulación de vehículos, pero bajo ciertas reglas, generando lo que se denomina el riesgo permitido.

Así, el Decreto Supremo N° 016 - 09 - MTC Reglamento Nacional de Tránsito



contiene las normas establecidas que regulan el tránsito automotor. Algunas de ellas son relevantes para merituar reproche penal, cuando el agente no respeta estas normas, y no se conduce dentro del riesgo permitido, infringiendo el deber de cuidado.

#### f.- El resultado

En el caso bajo examen el resultado que exige el artículo 124° del Código Penal es que cause a otro un daño en el cuerpo o en la salud, pero si éste menoscabo es grave de conformidad a los presupuestos establecidos en el artículo 121° del Cuerpo de Leyes acotado; es decir:

- 1.- Si las lesiones ponen en peligro inminente la vida de la víctima.
- 2.- Las que mutilan un miembro u órgano principal del cuerpo o lo hacen impropio para su función, causan a una persona incapacidad para el trabajo, invalidez o anomalía psíquica permanente o la desfiguran de manera grave y permanente.
- 3.- Las que infieren cualquier otro daño a la integridad corporal, o a la salud física o mental de una persona que requiera treinta o más días de asistencia o descanso, según prescripción facultativa.

4.- En el presente caso, con el Acta de Inspección Técnico Policial ha quedado acreditado que motocicleta que conducía JORGE LUIS DEZA BARDALES no tenía Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito; mientras que el vehículo de placa de rodaje D4L-903 que conducía LUIS JAVIER VALLEJOS al momento del accidente estaba asegurado con la póliza N° 05-21907564 de la empresa aseguradora La Positiva, la misma que estaba vigente desde el 18 de enero de 2016 hasta el 18 de enero de 2017.

4.- Entonces, está acreditado que se ha producido un accidente en el que están involucrados un trailer con SOAT y una motocicleta sin SOAT.

5.- Al respecto, la Defensoría del Asegurado La Resolución N° 132/08<sup>8</sup> interpretando el artículo 17° del Reglamento SOAT ha manifestado:

*" (...) Décimo Noveno: Que, cabe mencionar a manera de referencia, lo indicado en la Sumilla de la Resolución 1013-2008/TDC-INDECOPI, emitida por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual y notificada con Cédula de fecha 05 de junio de 2008, la que señala: "se confirma la Resolución 362-2007/INDECOPI-AQP del 3 de setiembre de 2007 que declaró infundada la denuncia interpuesta por la señora Lucía Flores Vela contra ... Ello dado que la aseguradora de un vehículo automotor interviniente en un accidente de tránsito que cuenta con SOAT no tiene la obligación de otorgar cobertura respecto de los ocupantes del otro vehículo interviniente que no cuenta con SOAT"; (...)"*

5.- El resultado es una consecuencia de la infracción al deber de cuidado

8.- [www.defaseg.com.pe/resoluciones/2008/2008R132.doc](http://www.defaseg.com.pe/resoluciones/2008/2008R132.doc)



1.- En el presente caso, conducir vehículos motorizados (automóvil y motocicleta) , ya es una actividad riesgosa, por esta razón este riesgo está parametrado por el Reglamento Nacional de Tránsito.

2.- Entonces, habrá responsabilidad penal si la acción (por negligencia, imprudencia o impericia del agente) aumenta el riesgo que permite el Reglamento Nacional de Tránsito y como consecuencia infraccionar el deber cuidado que exige el Reglamento Nacional de Tránsito, causa el resultado daño grave en el cuerpo o en la salud.

3.- En los delitos culposos no hay participación. Cualquier contribución causal culposa para el resultado representa autoría.

4.- En el presente caso, JORGE LUIS DEZA BARDALES al conducir una motocicleta con negligencia, con imprudencia e infraccionando gravemente las normas aludidas del Reglamento Nacional de Tránsito, incrementando el riesgo permitido e infraccionando el deber de cuidado, siendo todo ello determinante en la causación del accidente que se viene investigando.

5.- Como consecuencia del accidente JORGE LUIS DEZA BARDALES resultó con lesiones graves. Entonces, se advierte que su aporte ha sido determinante para la causación del accidente y del resultado lesiones graves.

6.- Valorando los elementos de convicción enumerados permiten al representante del Ministerio Público colegir que el imputado LUIS JAVIER VALLEJOS :

a.- No ha sobrepasado los límites del deber de cuidado que exigen las normas de tránsito antes indicadas.

b.- Si bien es cierto LUIS JAVIER VALLEJOS , por el hecho de realizar una actividad riesgosa, por conducir una cosa peligrosa (el vehículo de placa de rodaje D4L-903), ha generado un riesgo, también lo es que no lo ha incrementado con ninguna acción, ni dolosa, ni culposa por negligencia, imprudencia o impericia, que haya sido determinante en la causación del accidente y del resultado Lesiones Graves de JORGE LUIS DEZA BARDALES.

Asimismo, valorando los elementos de convicción enumerados permiten al representante del Ministerio Público colegir que JORGE LUIS DEZA BARDALES:

a.- Por el hecho de realizar una actividad riesgosa, al conducir una cosa peligrosa (una motocicleta lineal ), ha generado un riesgo.



b.- El riesgo mencionado lo incrementó con acciones culposas de negligencia contraviniendo lo dispuesto en el Reglamento Nacional de Transito D.S. N° 016-09-MTC-RNT: Artículo 135 VIAS DE DOS CARRILES.- En las calzadas de dos carriles con tránsito en doble sentido, los vehículos deben circular por el carril de la derecha.

c.- Además de lo expuesto JORGE LUIS DEZA BARDALES, también incrementó el riesgo con acciones culposas de imprudencia, al tratar de adelantar al ómnibus de la empresa de transportes DIAS conduciendo su motocicleta a una velocidad no razonable o prudente, bajo las condiciones de transitabilidad existentes en una vía, sin considerar los riesgos y peligros presentes y posibles, sin tener en cuenta la configuración de la vía con curvas, motivo por el cual no se percató de la presencia del camión, y al salir de la curva lo hizo invadiendo el carril contrario, produciendo así el choque con el vehículo del imputado.

d.- Como consecuencia del choque entre los dos vehículos mencionados JORGE LUIS DEZA BARDALES resultó con lesiones graves.

e.- Atendiendo que en las lesiones graves se requiere que la conducta del inculpado origine menoscabos o daños en el cuerpo o la salud de la víctima, debiendo existir un nexo de causalidad entre la conducta culposa y las lesiones. En el presente caso, al no existir dicho nexo, no resulta imputable objetivamente a don LUIS JAVIER VALLEJOS, el resultado lesiones del ahora agraviado JORGE LUIS DEZA BARDALES; sino más bien, se aprecia que éste ha aportado su negligencia e imprudencia exclusivamente en la causa del accidente. Su conducta culposa ha sido única y total, es un hecho propio, por tanto, resulta ser autorresponsable de su propias lesiones.

f.- Carece de objeto pronunciarse sobre el tipo subjetivo porque ha quedado establecida la falta de concurrencia del elemento del tipo objetivo "ocasionar la muerte por culpa"

g.- Carece de objeto efectuar el juicio de antijuricidad y de culpabilidad personal.

Atendiendo que el hecho investigado en este extremo no constituye delito de homicidio Culposo, ni otro, por la evidente carencia de los elementos de



tipicidad objetiva del delito de Lesiones Culposas (artículo 124° del Código Penal): "acción de causar lesiones" y elemento normativo descriptivo del tipo "Culpa" por negligencia, imprudencia o impericia, de conformidad con el artículo 334 numeral 1 del Código Procesal Penal debe procederse a archivar lo actuado.

Atendiendo que constituye un derecho fundamental de toda persona, la presunción de inocencia reconocida en el artículo segundo, inciso veinticuatro, parágrafo "e" de la Constitución Política del Estado, la misma que sólo puede ser desvirtuada en base a una actividad probatoria que con las debidas garantías procesales produzcan certeza en el juzgador sobre la responsabilidad del justiciable, lo que no ha ocurrido en el presente caso.

**POR ESTAS CONSIDERACIONES:**

El Fiscal Provincial de la Fiscalía Mixta de Yonán - Tembladera, a cargo de la presente investigación, invocando el artículo 159° numerales 1 y 4 de la Carta Política; los artículo 124° del Código Penal; los artículos 330° numeral 1, 334° numeral 1 el caso debe ser archivado porque los hechos no puede ser calificados como delitos; 335° numeral 2 del Código Procesal Penal que establece que una disposición de archivo puede ser desarchivada si se aportan nuevos elementos de convicción de presunción de la comisión del delito denunciado: **DECLARA, que no procede formalizar y continuar con la Investigación Preparatoria** contra **LUIS JAVIER VALLEJOS**, por la presunta comisión del delito de **LESIONES CULPOSAS** en agravio de **JORGE LUIS DEZA BARDALES**; y **ORDENA:**

1.- Archivar los actuados en el modo y forma de ley; poniéndose en conocimiento del denunciante que la presente podrá ser desarchivada si concurrieran nuevos elementos de convicción que pudieran establecer la presunción de comisión de este delito.

2.- Notificar a las partes esta disposición conforme a Ley.

  
Tito Gerardo Sirlopú Garces  
Fiscal Provincial  
Fiscalía Provincial Mixta de Yonán - Tembladera  
Ministerio Público Cajamarca



**DISPOSICIÓN N° 272-2016-MP-SFSP-C**

**Carpeta Fiscal N°** : 1705046102-2016-112-0 (Caso N° 140-2016)  
**Procedencia** : Fiscalía Provincial Mixta de Yonan-Tembladera  
**Imputado (s)** : Luis Javier Vallejos  
**Agraviado** : Jorge Luis Deza Bardales  
**Delito** : Lesiones culposas.

Cajamarca, cinco de diciembre  
del año dos mil dieciséis.

**I. ASUNTO.**

Recurso de Queja, interpuesto por María Isabel Deza Bardales, contra la Disposición N° 02-2016-FPMYT, de fecha 26 de octubre del año 2016, expedida por el Fiscal Provincial Tito Gerardo Sirlopú Garcés, de la Fiscalía Provincial Mixta de Yonan-Tembladera, mediante la cual dispone no formalizar y continuar con la Investigación Preparatoria contra Luis Javier Vallejos, por la presunta comisión del delito Contra la Vida, el Cuerpo y la Salud, en sus modalidad de Lesiones Culposas, en agravio de Jorge Luis Deza Bardales.

**II. ANTECEDENTES.**

1. Con fecha 20 de junio del 2016, el SO SUP.-PNP, Reynaldo A. Vigo Cabanillas, comisario del Salitre, mediante el Oficio N ° 163-2016-REGPOL-CAJ-TEM/CPNP-EL SALITRE "D", remite los actuados preliminares que dieron origen a la presente investigación a la Fiscalía Provincial Mixta de Yonan-Tembladera.
2. Con fecha 21 de junio del 2016, el Fiscal Provincial Tito Gerardo Sirlopú Garcés, de la Fiscalía Provincial Mixta de Yonan-Tembladera, emite la Disposición Fiscal N° 01-2016-FMYT, que obra de folios 333 a 341, en la cual dispone aperturar las diligencias preliminares por el plazo de 60 días, contra Luis Javier Vallejos, por la presunta





comisión del delito Contra la Vida, el Cuerpo y la Salud, en sus modalidad de Lesiones culposas, en agravio de Jorge Luis Deza Bardales.

3. Con fecha 26 de octubre del año dos 2016, el fiscal de la fiscalía antes indicada, emite la Disposición N° 02-2016-FMIYT, obrante de folios 298 a 328, mediante la cual dispone que no procede formalizar y continuar con la Investigación Preparatoria contra Luis Javier Vallejos, por la presunta comisión del delito Contra la Vida, el Cuerpo y la Salud, en sus modalidad de Lesiones culposas, en agravio de Jorge Luis Deza Bardales, disposición que ha sido recurrida y que es materia de pronunciamiento por esta Instancia Superior.

### III. HECHOS IMPUTADOS.

Se atribuye al investigado Luis Javier Vallejos, haber causado lesiones culposas (teniendo en cuenta el diagnóstico consignado en el Oficio N° 192-16-REG-CAJ/DRSC/HCH, que refiere a Traumatismo Torácico Cerrado, la cual por ser una lesión grave requiere treinta o más días de asistencia o descanso, según prescripción facultativa), a Jorge Luis Deza Bardales, en accidente de tránsito que *-conforme al Acta de Intervención Policial-*, se produjo el 18 de junio del año 2016, cuando se dirigía de Cajamarca a Lima, con su vehículo camión de placa de rodaje D4L903 (M1), colisionó con una moto lineal que era conducido por el agraviado Jorge Luis Deza Bardales, quien se dirigía de Tembladera a Quindén Bajo, generándose lesiones al último; tal hecho se suscitó a la altura del kilómetro 67 + 400 (una curva) de la carretera Ciudad de Dios – Cajamarca - Ciudad de Dios, exactamente en el caserío de Quinden, distrito El Prado - San Miguel - Cajamarca; hechos que son materia de investigación con la finalidad de determinar si existe o no la comisión del delito establecido en el artículo 124° del Código Penal (*"El que por culpa causa a otro un daño en el cuerpo o en la salud, será reprimido por (...). La pena será privativa de libertad no menor de uno ni mayor de dos años y de sesenta a ciento veinte días-multa, si la lesión es grave, de conformidad a los presupuestos establecidos en el artículo 121°(...)"*), concordante con el artículo 121° del mismo cuerpo de Leyes: (*"Artículo 121.- Lesiones graves.-"(...) Se consideran lesiones graves: (...) 2.- Las que*

<sup>1</sup> Artículo modificado por el Artículo único del Decreto Legislativo N° 1237, publicado el 26 septiembre 2015).





*hacen impropio un órgano para su función, causan a una persona incapacidad para el trabajo, invalidez (...): 3.- Las que infieren cualquier otro daño a la integridad corporal o la salud física (...) de una persona que requiera treinta o más días de asistencia o descanso, según prescripción facultativa (...)."*

#### IV. CALIFICACIÓN JURÍDICA.

Los hechos imputados han merecido, en sede fiscal, de acuerdo a la la Disposición Fiscal N° 01-2016-FMYT, que obra de folios 333 a 341, la calificación correspondiente al delito Contra la Vida, el Cuerpo y la Salud, en sus modalidad de Lesiones Culposas.

#### V. PETITORIO.

El recurrente busca que el Superior Jerárquico revoque la Disposición impugnada, y disponga formalizar la Investigación Preparatoria, por la presunta comisión del delito Contra la Vida, el Cuerpo y la Salud, en sus modalidad de Lesiones Culposas, en agravio de Jorge Luis Deza Bardales.

#### VI. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE ELEVACIÓN DE ACTUADOS.

El recurrente fundamenta su recurso en lo siguiente:

El Fiscal sin realizar algún acto de investigación solicitado, ha archivado el caso, basándose primordialmente en el *Acta de inspección Técnico Policial*, donde se ha señalado en su subtítulo N° 06 (Factores predominantes): "*(...) a) factor predominante y b) factor contributivo, la actitud imprudente del conductor de la motocicleta al invadir ligeramente el carril contrario al tratar de adelantar al bus de la Empresa DIAS, sin tener en cuenta la configuración de la vía (...)*" ; sin embargo tal Acta, se realizó antes de realizarse la declaración del imputado Luis Javier Vallejos, conductor del camión de placa de rodaje N° D4L-903, lo cual conllevó a los inspectores Técnico Policiales una versión distorsionada o incompleta de los hechos, pues no se hizo referencia al accionar imprudente del ómnibus de la Empresa DIAS, que habría invadido un carril (del camión) y la repentina disminución de velocidad para retornar a su carril y evitar colisionar con el Camión. Además dicha Acta, no constituye prueba plena, sino relativa,





máxime si no existe coherencia entre la fundamentación del examen técnico y las conclusiones emitidas, aceptando lo probable como verdadero.

El hecho de haber estado involucrado un vehículo de la empresa DIAS en el accidente, el fiscal debió realizar diligencias tendientes a la identificación de su conductor, ya que éste vehículo originó el accidente de tránsito, por cuanto invadió el carril contrario (por donde venía el camión) y al percatarse la presencia del camión, disminuyó intempestivamente su velocidad y retornó nuevamente a su carril, obligando al hoy agraviado que iba conduciendo la moto lineal y que iba atrás del vehículo de DIAS, frene y arrastre la llanta posterior a la izquierda, quedando entre los dos carriles (entre el camión y el bus), no advirtiendo que el camión de placa de rodaje N° D4L-903 aparece en ese instante, por cuanto el bus impidió la visibilidad al accidentado, chocando con el estribo del camión.



El Fiscal ha archivado el caso sin haberse pronunciado ni analizado la declaración del imputado Luis Javier Vallejos de folios 13 a 15, testigo presencial directo del accidente de tránsito y quien ha señalado: *"al llegar a una semicurva, en sentido contrario transitaba un ómnibus de la Empresa "DIAS", quien había invadido mi carril, obligándome a realizar una frenada para detener el vehículo que conducía y a la vez el conductor del bus circulaba en sentido contrario, ingresando nuevamente a su carril, y en esas circunstancias en forma intempestiva una motocicleta que circulaba en el mismo sentido del bus, por no chocar por la parte posterior del bus, invade mi carril, ubicándose en la parte central de la vía, entre ambos vehículos"*; versión que también ha sido manifestado por el imputado mediante Acta de Intervención S/N, de fecha 18 de junio obrante a folio 2, donde señala: *"siendo el caso que a la altura del Km 67+400 aproximadamente, se percató de un bus de la Empresa Transportes DIAS (...) por el carril contrario con dirección hacia Cajamarca, había invadido mi carril ingresando a la curva y al percatarse de la presencia de la M1 ocupó su carril"*; manifestaciones que desdicen la afirmación del Fiscal en el sentido de que ha sido "imprudente" y que por su propio riesgo ha sido víctima del accidente en mención.

*"Consideramos que el "famoso ITP", que le sirve el Fiscal para archivar el caso, no cumple con los requerimientos mínimos para ser considerado medio probatorio idóneo, toda vez que ha sido realizado sin la presencia de los protagonistas del accidente de tránsito"*.

*"(...) se puede advertir de la revisión minuciosa de la carpeta auxiliar, no obran ninguno de los actos de investigación dispuestos por el mismo Fiscal, no existe la Historia Clínica del agraviado expedida por el*



*hospital, no existe declaración del agraviado, por cuanto este se encontraba grave de salud, lo cual se justificó oportunamente con el Informe Médico N° 168-2016-HRL (...) no siendo reprogramada y menos se dejó constancia del grave estado de salud del agraviado (...) no obra declaración del imputado y del dueño del camión en sede fiscal, por cuanto como puede advertirse de la carpeta auxiliar ambos están mal notificados, pues no se le ha ubicado; por lo que, el Fiscal (...) debió notificarlos por edictos, lo cual no ha ocurrido, siendo esto un actuación que atenta el debido proceso, pese haberse solicitado reiteradamente (...)"*

El Fiscal, señala que lo consignado en el Acta de Constatación expedido por el Presidente de Ronda Campesina de Quindén-Terlén no está corroborada por persona alguna con capacidad jurídica para justificar un hecho real, ante lo cual vale indicar que tal Acta no hace más que corroborar lo manifestado por el imputado, y era trabajo del Fiscal ir al lugar del accidente investigar cuestionando a los lugareños, no es posible que haya dado 60 días, y hayan transcurrido 144 días, y no haya realizado alguna diligencia; ocurriendo lo mismo con la Constancia emitida por el Gobernador del Centro Poblado Quindén bajo.

El Fiscal señala que el agraviado ha incurrido en negligencia por cuanto no habría acreditado aptitud ni autorización otorgadas por autoridad competente para conducir motocicleta a nivel nacional, aspecto que reiteradamente se le ha indicado que si tiene licencia de conducir y está inserta en el expediente (folios 61), el cual sí se portaba el día de los hechos, siendo que cuando llegó la policía ya no se encontraba el agraviado (había sido trasladado de emergencia), y era lógico que ya no lo encuentren pues los documentos estaban en sus prendas. En cuanto a la ubicación exacta de la moto, en el acta se presume que habría sido trasladado al parecer por la familia, más no especifica que sea ella quien tenga en su poder, por lo tanto si sospechaba que la familia tenía la moto era que lo requiera formalmente.

También si se ha adjuntado un vídeo, donde aparece un ómnibus de la empresa turismo "DIAS", es porque en él se advierte el accionar de los conductores de dicha empresa en se mismo lugar es abrirse a la izquierda invadiendo carril contrario, conducta que se ha vuelto costumbre.

*"(...) el Fiscal se niega a tomar las declaraciones a los efectivos policiales SOT2 PNP EDGARDO MONTENEGRO, SO PNP LUIS UGAZ COTRINA y SO PNP JOSÉ MARÍA ROLANDO LÓPEZ,*



*considerando impertinente nuestra solicitud, puesto que ellos no estuvieron al momento de ocurrido el accidente y no pudieron percibir por los sentidos lo ocurrido; sin embargo si considera en cuenta el Informe Policial para sostener su falaz argumento de archivamiento”.*

*“(…) en cuanto al SOAT, si bien es cierto el agraviado no presenta SOAT; sin embargo, no es causa justificante para determinar responsabilidad penal, por cuanto el extremo del SOAT es en trámite meramente administrativo, lo cual tal caso no es competencia del Fiscal y menos para sindicarlo al agraviado como principal responsable (….) no puede señalar que el agraviado no portaba casco de seguridad ni anteojos protectores, por cuanto de la actuación policial en ningún momento dan cuenta de esto, más aún si tenemos en cuenta que la policía no encontró al agraviado ni a su moto (….)”*

*“El Fiscal señala que el agraviado es quien ha infraccionado la regla de tránsito establecida en el artículo 135° del DS. N° 016-09-MTC-RNT-VIAS D DOS CARRILES con tránsito en doble sentido, los vehículos deben circular por el carril de la derecha (….) podemos ver de la declaración del imputado, mi hermano agraviado iba por su carril derecho sino que ante la maniobra temeraria por parte del conductor del ómnibus de la Empresa de Transportes “DIAS” hizo que tenga que frenar y arrastrar la llanta posterior de la motocicleta hacia la izquierda, quedando en la línea del centro que divide los carriles”*

*“(…) al Fiscal le corresponde agotar las diligencias de investigación; por lo tanto es el Fiscal quien debió agotar todas las investigaciones, a fin de llegar a determinar la plena responsabilidad del conductor de la Empresa Turismo “DIAS”, por ser quien infraccionó el deber de cuidado al invadir el carril contrario por donde se trasladaba el camión de placa N° D4L-903”*

## **VII. FUNDAMENTOS DE LA DISPOSICIÓN OBJETO DEL RECURSO DE ELEVACIÓN.**

El Fiscal de la investigación para emitir la recurrida ha argumentado que:

El comportamiento culposo requiere de negligencia, impericia y/o imprudencia. En el presente caso se advierte ha existido conducta negligente e imprudente por parte del agraviado Jorge Luis Deza Bardales, por diversos aspectos tales como: **i)** no ha acreditado aptitud ni autorización otorgadas por la autoridad competente para conducir motocicleta a nivel nacional (Licencia de conducir vigente), así *“(…) JORGE LUIS DEZA BARDALES, tiene licencia de conducir Documento N° L- 27168692, expedida por a municipalidad San Miguel, expedida el 22 de julio del 2014 para ser revalidada el 22 de julio del 2019 (folios 61), sin embargo en el Acta de Inspección técnico Policial se ha consignado ‘(…) Licencia de conducir no presenta (….)’ (folios 6)”*, **ii)** conducía su



vehículo sin Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, **iii)** actuó imprudentemente al momento de la conducción y desconocía las normas de manejo de un conductor de motocicleta, así: (...) *Revisando la Inspección Técnico Policial, se advierte en el rubro 6. Factores intervinientes '(...) 6.-FACTORES INTERVINIENTES: a) Factor predominante: La actitud impudente del conductor de la UT2 (motocicleta) al invadir ligeramente el carril contrario al tratar de adelantar a la UT3 (bus de la empresa DIAS) no identificada, sin tener en cuenta la configuración de la vía. Factor contributivo: La actitud imprudente del conductor de la unidad UT2'* **iv)** ha infraccionado las reglas de tránsito al conducir un vehículo (motocicleta) sin tener puesto el casco de seguridad o anteojos protectores, en caso de no tener parabrisas y sin tener licencia de conducir o permiso provisional. Los aspectos detallados han incrementado el riesgo permitido y que fueron los factores determinantes en la producción del accidente, factores que han sido determinantes para la producción del accidente y del resultado de las lesiones graves que ha sufrido

La conducta de Luis Javier Vallejos, si bien es cierto que por el hecho de realizar una actividad riesgosa, por conducir una cosa peligrosa (el vehículo de laca de rodaje D4L-90-camión), ha generado un riesgo, pero no lo ha incrementado con ninguna acción, ni dolosa ni culposa por negligencia, imprudencia o impericia, que haya sido determinante la producción del accidente y del resultado de lesiones graves de Jorge Luis Deza Bardales.

Valorando los elementos de convicción que obran en la Carpeta Fiscal permite concluir que el agraviado, por el hecho de realizar una actividad riesgosa, al conducir una cosa peligrosa (moto lineal), ha generado un riesgo, riesgo que se incrementó con acciones culposas de negligencia contraviniendo el Reglamento Nacional de Tránsito D.S. N° 016-09-MTC-RNT: "(...) Artículo 135 VÍAS DE DOS CARRILES.-En las calzadas de dos carriles con tránsito en doble sentido, los vehículos deben circular por el carril de la derecha". Agrega que dicho riesgo se incrementó con acciones culposas de imprudencia "(...) al tratar de adelantar al ómnibus de la empresa de transportes DIAS conduciendo su motocicleta a una velocidad no razonable o prudente, bajo las condiciones de transitabilidad existentes en una vía, sin considerar los riesgos y peligros presentes y posibles, sin tener en cuenta la configuración de la vía con curvas, motivo por el cual no se percató de la presencia del camión, y al salir de la curva lo hizo invadiendo el carril contrario, produciendo así el choque con el vehículo del imputado".



"Como consecuencia del choque entre los dos vehículos mencionados JORGE LUIS DEZA BARDALES resultó con lesiones graves. / (...) en las lesiones graves se requiere que la conducta del inculcado origine menoscabos o daños en el cuerpo o la salud de la víctima, debiendo existir un nexo de causalidad entre la conducta culposa y las lesiones. En el presente caso, al no existir dicho nexo, no resulta imputable objetivamente a don LUIS JAVIER VALLEJOS, el resultado lesiones del ahora agraviado JORGE LUIS DEZA BARADLES, sino mas bien, se aprecia que éste ha aportado su negligencia e imprudencia exclusivamente en la causa del accidente. Su conducta culposo ha sido única y total, es un hecho propio, por tanto, resulta ser autorresponsable de sus propias lesiones".

## VIII. ANÁLISIS DE LA CONTROVERSIA.

### Identificación del problema a resolver.

1. Conforme al análisis de los actuados, el recurrente señala que existe una investigación deficiente en presente caso, indicando otra versión respecto a la forma y circunstancias del hecho, por cuanto según sus argumentos, los hechos no solo vinculan al investigado Luis Javier Vallejos (conductor del camión de placa de rodaje D4L-903), sino a la vez, a otro conductor no identificado que conducía un ómnibus de la Empresa de Transportes Días que habría participado del accidente, que tendría responsabilidad en los hechos materia de investigación y que no ha sido investigado. Por tanto, en el presente caso, corresponde analizar si las diligencias preliminares han cumplido la finalidad, y si las mismas han permitido identificar la forma y circunstancias del hechos (accidente de tránsito que produjo lesiones al agraviado), el carácter delictual de los mismos (lesiones culposas), y si corresponde *-conforme al resultado de los mismos-*, determinar la responsabilidad del denunciado Luis Javier Vallejos u otros por identificar.

### La naturaleza, objeto y finalidad de las diligencias preliminares. Idea de lo urgente o inaplazable.

2. El nuevo código procesal penal regula en su artículo 330 la naturaleza, objeto y finalidad de las diligencias preliminares, señalando que sirven para "determinar si (el fiscal) debe formalizar la investigación preparatoria" (inciso 1) y tienen "*por finalidad inmediata realizar los actos urgentes o inaplazables destinados a determinar si han tenido lugar los hechos objeto de conocimiento y su delictuosidad, así como asegurar los elementos materiales de su comisión, individualizar a las personas*





*involucradas en su comisión, incluyendo a los agraviados, y, dentro de los límites de la ley, asegurarlas debidamente” (inciso 2). Inclusive, el fiscal “podrá constituirse inmediatamente en el lugar de los hechos con el personal y medios especializados necesarios y efectuar un examen con la finalidad de establecer la realidad de los hechos y, en su caso, impedir que el delito produzca consecuencias ulteriores y que se altere la escena del delito” (inciso 3).*

3. Las diligencias preliminares de investigación son las indagaciones realizadas con el objeto de obtener los elementos suficientes para el ejercicio de la acción penal a través de la formalización de la investigación preparatoria.<sup>2</sup> La nota característica que informa esta fase previa es la noción de lo urgente o lo inaplazable.<sup>3</sup> Es una situación o lapso temporal en el cual se acumularán elementos mínimos de juicio para determinar la existencia del ilícito penal que sólo se realizarán si aparece la necesidad razonable de las mismas, porque el nuevo modelo se preocupa porque no se pierda el tiempo inútilmente.<sup>4</sup> El fiscal realiza actos de averiguación inmediata y en algunos casos inaplazables que dan inicio al procedimiento de construcción de la verdad procesal cuyo fin es la recolección de información suficiente para dar inicio a la investigación preparatoria.<sup>5</sup> Lo que el fiscal debe indagar es la presencia de indicios básicos sobre la existencia de un hecho delictivo y la identificación de sus presuntos responsables. No puede aspirar a realizar todos los actos de investigación. El fiscal está obligado a realizar solo las diligencias de averiguación más urgentes o inaplazables entendiéndolos, primero, como las acciones apremiantes o de pronta ejecución, en segundo lugar, como aquello que no se puede postergar o suspender, lo hace ahora o nunca.

4. Concretamente, estas diligencias urgentes o inaplazables están destinadas a:<sup>6</sup> a)

<sup>2</sup> GALVEZ VILLEGAS, Tomás Aladino, William RABANAL PALACIOS y Hamilton CASTRO TRIGOSO. El código procesal penal, Jurista Editores, Lima, 2008, página 665.

<sup>3</sup> MAVILA LEON, Rosa. El nuevo sistema procesal penal, Jurista Editores, Lima, 2005, página 120.

<sup>4</sup> ANGULO ARANA, Pedro Miguel. “Las diligencias preliminares”, en: Estructura del proceso penal común I: investigación preparatoria y etapa intermedia, materiales del Curso de formación especializada en el nuevo modelo procesal penal dictado por la Academia de la Magistratura, Lima, 2008, páginas 91, 92.

<sup>5</sup> CACERES J., Roberto E. y Ronald D. IPARRAGUIRRE N. Código Procesal Penal comentado, Jurista Editores, Lima, 2005, página 378.





Determinar si han tenido lugar los hechos objeto de conocimiento y su delictuosidad; b) Asegurar los elementos materiales de su comisión; c) Individualizar a las personas involucradas en su comisión, incluyendo a los agraviados; d) Asegurar debidamente a los imputados y agraviados; d) Estudiar la escena del delito. *Por lo que claramente se puede diferenciar los objetivos de las sub etapas de la investigación preparatoria (diligencias preliminares e investigación preparatoria).<sup>7</sup> ANGULO ARANA<sup>8</sup> formula diez diferencias entre diligencias preliminares e investigación preparatoria, señala, primero, que las diligencias preliminares tienen como finalidad básica y fundamental constatar mediante la percepción de los sentidos si han tenido lugar o no los hechos materia de conocimiento, así como su delictuosidad, mientras que la investigación preparatoria tiene como finalidad reunir elementos de convicción (actos de investigación) en relación a una conducta determinada. En segundo término, en las diligencias preliminares se indaga los hechos materia de conocimiento e individualizar al presunto autor, mientras que la investigación preparatoria se orienta a la responsabilidad e identificación del presunto autor. Finalmente, a nivel de las diligencias preliminares el accionar debe ser rápido y elemental, por ello es que no ofrece espacio para el descargo; la investigación preparatoria, por el contrario, se estructura para indagar los elementos de descargo, en lo cual se advierte espacio para la contradicción, en favor de la defensa.<sup>9</sup>*

#### **Análisis del caso en concreto.**

5. En el presente caso, a folio dos aparece el **Acta de Intervención Policial** s/n COMPRCAR-(PNPCH), elemento de investigación donde se describe la forma y circunstancias del accidente de tránsito del siguiente modo: *"a horas 08:08 del día 18 de junio de*

<sup>6</sup> GACETA JURIDICA. Guía práctica 1, Instrucción e investigación preparatoria. Lo nuevo del código procesal penal de 2004 sobre la etapa de la investigación del delito, Gaceta Penal & Procesal Penal, Lima, 2009, página 75.

<sup>7</sup> VILLAVICENCIO RIOS, Frezia Sissi y Víctor Raúl REYES ALVARADO. El nuevo código procesal penal en la jurisprudencia, Gaceta Jurídica, Lima, 2008, página 194.

<sup>8</sup> ANGULO ARANA, Pedro Miguel. "Las diligencias preliminares", Op. Cit., página 108.

<sup>9</sup> ANGULO ARANA, Pedro. La investigación del delito en el nuevo código procesal penal, GACETA JURIDICA, Lima, 2006, páginas 126-129.



2016, por información de usuarios de la vía (...) nos constituimos al lugar (...) por versiones conductor Sr. VALLEJOS Luis Javier conductor de la M1 (camión), éste se dirigía hacia Lima por su carril, siendo el caso que a la altura del kilómetro 67-400 aprox., se percató que un bus de la empresa DIAS de la cual se desconoce su placa de rodaje por el carril contrario con dirección hacia Cajamarca había invadido carril ingresando a la curva y al percatarse de la presencia de la M1 ocupó su carril en circunstancias que la M2 venía atrás del bus M2 (motocicleta) intentó sobrepasarlo al bus invadiendo carril contrario impactando contra el M1 por la parte lateral"; ésta descripción primigenia de los hechos efectuado por la autoridad policial y con participación del testigo presencial e imputado Luis Javier Vallejos, evidencia la participación en los hechos (accidente de tránsito que produjo lesiones al agraviado) de un bus de la empresa de transportes Días cuyo conductor no ha sido identificado.

6. Asimismo, el **Acta de Inspección Técnico Policial** que obra a folios 6 y 7, entre otras unidades, se identifica a la UT3 (bus de la empresa de transportes Días) como unidad participante en el hecho (accidente de tránsito). Las circunstancias detalladas en éste y el anterior párrafo, advierten la existencia de un accidente de tránsito que ha producido lesiones al conductor de la motocicleta Jorge Luis Deza Bardales, en el cual, entre otros vehículos, se da cuenta de la participación (en el accidente de tránsito) de un bus de la empresa de transportes Días, *-el mismo que no ha sido identificado, así como tampoco su conductor e incluido en la presente investigación-*, por tanto, la presunta responsabilidad respecto a los hechos materia de investigación.

7. Del mismo modo, a folios 13 a 15 obra la **declaración del imputado Luis Javier Vallejos**, (testigo presencial de los hechos) quien refiere que *"en sentido contrario transitaba un ómnibus de la empresa Días, quien había invadido mi carril, obligándome una frenada para detener mi vehículo (...) el conductor del bus (...) ingresando nuevamente a su carril y en esas circunstancias en forma intempestiva que circulaba en el mismo sentido del bus, por no chocar con la parte posterior del bus, invade mi carril, ubicándose en la parte central de la vía"*, relato que también advierte la participación de un ómnibus de la Empresa de Transportes Días en el accidente de tránsito, por cuanto éste habría invadido el carril contrario previo al impacto entre la motocicleta y el camión conducido por Luis Javier Vallejos; a la vez sostiene que la motocicleta *"por no chocar con la parte posterior de bus, invade mi carril"*; afirmación que sustenta la versión expuesta





por la recurrente María Isabel Deza Bardales, quien señala<sup>10</sup> que el ómnibus de la Empresa de Transportes Días -que iba delante de la motocicleta que conducía el agraviado Jorge Luis Deza Bardales-, *“ha invadido el carril contrario, y al percatarse que en sentido contrario venía el camión UT2, disminuyó intempestivamente su velocidad y retornó nuevamente a su carril obligando que el agraviado frene y arrastre la llanta posterior a la izquierda, quedando la motocicleta en el centro de los dos carriles, produciendo el impacto con el camión”*; hipótesis fáctica que no ha sido mínimamente descartada o acreditada durante la investigación preliminar, por cuanto no se actuó ninguna diligencia tendiente a aclarar ésta y otras circunstancias periféricas que rodean al hecho materia de investigación; en consecuencia, cabe la posibilidad de que existan otros factores que hayan contribuido en la producción de los hechos (accidente de tránsito), cuya ilicitud se debe esclarecer cabalmente.

8. Si bien, el **Acta de Inspección Técnico Policial** que obra a folios 6 y 7, con referencia a los factores intervinientes aparece: *“a) Factor predominante: La actitud imprudente del conductor de la UT2 (motocicleta) al invadir ligeramente el carril contrario al tratar de adelantar a la UT3 (bus de la empresa días) no identificada, sin tener en cuenta la configuración de la vía”. b) Factor contributivo: La actitud imprudente del conductor de la Unidad UT2”*, sin embargo, éstas conclusiones deben ser analizadas de forma conjunta con otros elementos de investigación que los doten de solidez, conforme al sistema de valoración de la sana crítica adoptada por nuestro sistema penal, otros elementos de investigación que en el presente caso no se acopiaron, debido a la falta de diligencia por parte del Fiscal del caso, conforme se explicará más adelante.

9. Cabe recordar que el Fiscal, como titular de la acción penal pública, cuenta con la facultad discrecional de disponer el archivo fiscal de una denuncia, ello en virtud de lo establecido por el inciso uno del artículo trescientos treinta y cuatro del Código Procesal Penal, el cual señala: *“(…) si el Fiscal al calificar la denuncia o después de haber realizado o dispuesto realizar diligencias preliminares, considera que el hecho denunciado no constituye delito, no es justiciable penalmente, o se presentan causas de extinción previstas en la Ley, declarará que no procede formalizar y continuar con la Investigación Preparatoria, así como ordenará el archivo de lo actuado (…)*”, conforme se puede apreciar el proceso penal se inicia con la noticia criminal y esta llega a

<sup>10</sup> Versión que también ha sido expuesto por el imputado Luis Javier Vallejos en su declaración efectuada en sede policial y que obra folios 13 a 15.



conocimiento del Ministerio Público, teniendo el fiscal dos opciones: a) archivar de plano la denuncia, al considerar que no tiene contenido penal o no reviste caracteres de delito; ésta es la primera oportunidad de archivo que le concede el legislador en el Código Procesal Penal, o: b) disponer la realización de una investigación preliminar, luego de la cual puede nuevamente y por última vez disponer el archivo (sin control jurisdiccional) por las mismas causales señaladas en el punto a). En este último supuesto se entiende que deberá disponerse el archivo después de haber dispuesto y realizado actos de investigación necesarios para corroborar los hechos denunciados, su delictuosidad, identificar al autor, entre otros; indagando tanto los elementos que determinen o acrediten su responsabilidad, así como los que determinen su inocencia. En el presente caso, conforme a los hechos materia de investigación y el análisis de los actuados preliminares efectuados por la autoridad policial, se debe disponer la actuación de las siguientes diligencias preliminares:

1. Recabar la declaración del agraviado Jorge Luis Deza Bardales, quien de manera detallada explique la forma y circunstancias en que han ocurrido los hechos.
2. Recabar la declaración de los efectivos policiales SO1 PNP Luis Ugaz Cotrina y SOT2 PNP Edgardo Montenegro Villa, para que expliquen la forma y circunstancias en que se ha redactado el Acta de Intervención Policial s/n de fecha 18 de junio de 2016 obrante a folios 2 y expliquen principalmente el sustento de los hechos narrados en el referido documento.
3. Solicitar al Administrador y/o Gerente de la Empresa de Transportes Días, la remisión de información de sus vehículos que hayan partido con destino a Cajamarca el día 17 de junio del 2016 y el día 18 de junio de 2016, de este último hasta las 08:00 de la mañana; los conductores de tales vehículos según turnos; la información de los pasajeros que iban en tales vehículos; horas de salida y llegada de tales vehículos de Lima a Cajamarca; si los vehículos cuentan con GPS, y si corresponde, el registro de la información de incidencias referido a los vehículos, de los días antes indicados y de todos sus vehículos, con los apremios de ley.
4. Solicitar a la Empresa Consesionaria respectiva encargada de realizar los cobros de



peajes de la carretera en que ocurrieron los hechos, a fin de que informe acerca de los vehículos de la Empresa de Transportes Días que hayan pagado, por ende circulado los días 17 y 18 de junio de 2016 hasta las 08:00 de la mañana hacia Cajamarca, y si cuentan con cámaras de seguridad, remita el registro de los mismos de los días antes indicados.

5. Se efectúe una pericia técnica que permita identificar la existencia o no de maniobras recurrentes (invasión de carril contrario por parte de conductores de buses de la Empresa de Transportes Días en el lugar de los hechos materia de investigación), y si corresponde, el análisis respecto a las posibilidades de que dichas maniobras puedan producir accidentes de tránsito de similar naturaleza a la que se investiga en el presente caso.

6. Recabar información de los ingresos de emergencia a clínicas, centros de salud, hospital que obran en los actuados y se determine el grado de lesiones que se ha producido al agraviado a consecuencia del accidente, y agotar los medios, con la finalidad de determinar si colocado el casco hubiese sido de igual magnitud las lesiones, o cuánto hubiese sido la magnitud, sin perjuicio de remitir las actuaciones médicas acopiadas a la División Médico Legal competente para la determinación de la entidad de las lesiones.

10. Entonces, tal como se advierte del estudio de los actuados, y teniendo en cuenta que por Disposición N° 01 de fecha 21 de junio de 2016, se concedió un plazo de sesenta días, conforme al inciso 2 del artículo 334°, plazo se encuentra vencido, por tanto, por única vez, debe otorgarse un **PLAZO ADICIONAL EXTRAORDINARIO DE 60 DÍAS**, para que se complete la presente investigación, y se lleven adelante las diligencias antes indicadas, cumpliendo de esta forma los fines de la investigación, de acuerdo al inciso 2 del artículo 330° del Código Procesal penal, esto es, *"Las diligencias preliminares tienen por finalidad inmediata realizar los actos urgentes o inaplazables destinados a determinar si han tenido lugar los hechos objeto de su conocimiento y su delictuosidad, así como asegurar los elementos materiales de su comisión, individualizar a las personas involucradas en su comisión, incluyendo a los agraviados, y dentro de los límites de la ley, asegurarlas debidamente"*. La información que falta obtener, permitirá estar en mejor condición





para poder establecer con certeza la configuración o no del delito investigado y la vinculación de los imputados con la producción de los hechos, debiendo a la vez, ampliarse la investigación respecto al conductor del ómnibus de la empresa de transportes Días una vez identificado, citándole para los descargos a que hubiere lugar y a propiciar también la ampliación, si fuera el caso, del peritaje de accidente de tránsito.

**Falta de diligencia por parte del fiscal del caso en la presente investigación.**

11. El Fiscal Provincial Tito Gerardo Sirlopú Garcés, en fecha 21 de junio de 2016, mediante Disposición N° 01-2016 ha dispuesto abrir investigación preliminar por el plazo de 60 días, para que se realice diversos actos de investigación tales como: "solicitar al Hospital Regional Docente Las Mercedes de Chiclayo copia de la Historia Clínica de Jorge Luis Deza Bardales, recibir las declaraciones de Jorge Luis Deza Baradles, Luis Javier Vallejos y Marco Antonio Herrera Flores; sin embargo, de la revisión de los actuados, se advierte que no se ha efectuado ninguna de las diligencias antes indicadas, diligencias que "se entiende" justificaban el plazo inicial de los 60 días, plazo que a la vez, no ha sido ampliado, por ende a la fecha 26 de octubre de 2016 (fecha de archivamiento), dicho plazo ha vencido por más de dos meses.

12. Las circunstancias antes descritas, evidencian que el Fiscal del caso *-luego de haber transcurrido más de cuatro meses en el que estuvo a cargo de la presente investigación (dos de ellos inclusive con plazo vencido)-*, y sin realizar ninguna diligencia, decide archivar el caso; asimismo *-al margen de los indicios razonables que justifican la apertura de la investigación preliminar-*, en el presente caso, no existe justificación razonable por parte del fiscal al haber decidido aperturar investigación preliminar y luego de cuatro meses *-sin una sola diligencia realizada-*, disponer el archivo del caso con la sola justificación de los actuados preliminares efectuados por la autoridad policial; a más, de los actuados se evidencian diversos escritos presentados por la recurrente María Isabel Deza Bardales en fechas: 5 de julio, 12 de agosto, 13 de agosto, 08 de septiembre y 30 de septiembre, todos en el año 2016 respectivamente; que obran a folios 139 a 142, 156 a 157, 292, 293 y 294, los mismos que tampoco han sido proveídos en su debida oportunidad. Los argumentos expuestos en la presente y el párrafo anterior, advierten, la falta de diligencia en el





cumplimiento de sus funciones por parte del Fiscal Provincial Tito Gerardo Sirlopú Garcés en el presente caso; por tanto, conforme a lo dispuesto por el numeral 1 del artículo 62° del Código Procesal Penal, corresponde excluir al referido fiscal de la presente investigación, a la vez, la remisión de copias certificadas de los actuados a la Oficina Desconcentrada de Control Interno de Cajamarca para su conocimiento y fines pertinentes. Por tanto, el fiscal llamado por ley, debe continuar con la presente investigación, quien deberá actuar las diligencias expuestas en la presente disposición, emitiendo la disposición correspondiente.

#### DECISIÓN.

Por estas consideraciones, la Segunda Fiscalía Superior Penal de Cajamarca, de conformidad con las facultades otorgadas por la Ley Orgánica del Ministerio Público - Decreto Legislativo N° 052 y el artículo 334° inciso 5 y 6 del Código Procesal Penal - Decreto Legislativo N° 957-, **DISPONE:**

**PRIMERO.-** Declarar **FUNDADO** el recurso de elevación de actuados interpuesto por María Isabel Deza Bardales, obrante a folios 407 a 430.

**SEGUNDO.-** Declarar **NULA** la Disposición N° 02-2016-FPMYT, de fecha 26 de octubre del año 2016, expedida por el Fiscal Provincial Tito Gerardo Sirlopú Garcés, de la Fiscalía Provincial Mixta de Yonan-Tembladera, mediante la cual dispone no formalizar y continuar con la Investigación Preparatoria contra Luis Javier Vallejos, por la presunta comisión del delito Contra la Vida, el Cuerpo y la Salud, en sus modalidad de Lesiones Culposas, en agravio de Jorge Luis Deza Bardales.

**TERCERO.- EXCLUIR** al Fiscal Provincial Tito Gerardo Sirlopú Garcés de la presente investigación, conforme a los argumentos expuesto en el fundamento once y doce de la presente Disposición Superior; **EN CONSECUENCIA**, el Fiscal llamado por ley, proceda a realizar los actos de investigación descritos en la parte considerativa de la presente Disposición, a la vez amplíe la investigación respecto al conductor del bus de la empresa de transportes Dias aún no identificado, otorgándole para tal fin, un **PLAZO ADICIONAL**



**EXTRAORDINARIO DE 60 DÍAS.**

**CUARTO.- REMITIR** copias certificadas de los actuados a la Oficina Desconcentrada de Control Interno de Cajamarca para su conocimiento y fines pertinentes, conforme a los argumentos expuestos en el fundamento once y doce de la presente Disposición Superior.

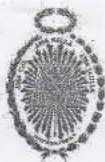
**NOTIFÍQUESE** la presente Disposición conforme a ley; y **DEVUÉLVASE** los actuados a la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de origen, para su conocimiento y fines pertinentes.

JLMCE/hca.



JOSE LUIS MIGUEL CASTILLO ESPEJO  
Fiscal Superior de la Segunda Fiscalía  
Superior Penal de Cajamarca  
Distrito Fiscal de Cajamarca





**CARPETA FISCAL N° 140-2016.**

**DISPOSICIÓN FISCAL N° 03 - 2016**

Tembladera, veintitres de Noviembre  
De Dos Mil Dieciséis.-

**DADO CUENTA:**

Con la Carpeta Fiscal Principal y Auxiliar respectiva, correspondientes a la investigación seguida contra **LUIS JAVIER VALLEJOS**, por el presunto delito de lesiones cuposas en agravio de **JORGE LUIS DEZA BARDALES**; y,

**ATENDIENDO:**

**PRIMERO:** Que, con fecha 22 de noviembre de 2016, doña **MARÍA IZABEL DEZA BARDALES** en representación de su hermano **JORGE LUIS DEZA BARDALES** (agraviado), en merito al artículo 334° inciso 5 del Código Procesal Penal, solicita se eleven los actuados al superior Jerárquico, al no estar conforme con la Disposición N° 02-2016-FPMYT, de fecha 26 de octubre de 2016 que dispone **NO PROCEDE FORMALIZAR Y CONTINUAR CON LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA** contra de **LUIS JAVIER VALLEJOS**.

**SEGUNDO:** Que, el artículo 334° inciso 5 del Código Procesal Penal estipula que el denunciante que no estuviese conforme con la Disposición de archivar las actuaciones o de reserva provisionalmente la investigación, requerirá al Fiscal, en el plazo de cinco días, eleve las actuaciones al Fiscal Superior.

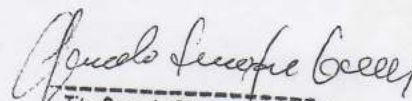
**TERCERO:** Por lo que se tiene según el cargo de notificación (a fs. 25 de la Carpeta Auxiliar) cursada al **JORGE DEZA BARDALES**, que se notificó con la Disposición N° 02 - 2016, el 15 de noviembre de 2016; por tanto, el requerimiento ha sido presentado dentro del plazo legal, debiendo conceder la solicitud de elevar los actuados al Superior Jerárquico.

**CUARTO:** Además, el escrito presentado cumple con los requisitos previstos en el Código Procesal Penal y se ha cumplido con fundamentar el mismo, lo que se tiene en cuenta y conforme al artículo 334° numeral 5 del Código Procesal Penal, este Despacho Fiscal, **DISPONE:**

**1.- CONCEDER EL RECURSO DE QUEJA DE DERECHO** interpuesto por doña **MARÍA IZABEL DEZA BARDALES** en representación de su hermano **JORGE LUIS DEZA BARDALES** (agraviado), contra la disposición N° 02-2016.

**2.- ELEVAR** los actuados a la Fiscalía Superior Penal de Turno del Distrito Fiscal de Cajamarca.

**3.- NOTIFICÁNDOSE** a las partes conforme a ley.

  
Tito Gerardo Sinyopú Garcés 1  
Fiscal Provincial  
Fiscalía Provincial Mixta de Yonán - Tembladera  
Ministerio Público Cajamarca



CARPETA FISCAL : N° 140-2016

DELITO : LESIONES CULPOSAS  
IMPUTADO : LUIS JAVIER VALLEJOS Y EL QUE RESULTE  
RESPONSABLE  
AGRAVIADO : JORGE LUIS DEZA BARDALES  
FISCAL RESP. : YESICA MILAGROS GÓMEZ MALCA<sup>1</sup>

DISPOSICIÓN DE NO HA LUGAR A FORMALIZAR Y CONTINUAR  
CON LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA

DISPOSICIÓN N° 05-2017-MP-FPMYT.

Tembladera, diez de abril  
de dos mil diecisiete.-

VISTOS: Los actuados de la investigación seguida contra **LUIS JAVIER VALLEJOS Y EL QUE RESULTE RESPONSABLE**, por la presunta comisión del delito Contra la Vida, el Cuerpo y la Salud en la modalidad de **LESIONES CULPOSAS** en agravio de **JORGE LUIS DEZA BARDALES**; el cual se da cuenta al retorno del periodo vacacional de la suscrita y al vencimiento del plazo adicional Extraordinario de 60 días otorgados por el Superior en grado; y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO: EL MINISTERIO PÚBLICO Y LA INVESTIGACIÓN.-

1.- Corresponde al Ministerio Públicos:

- a.- Promover de oficio, o a petición de parte, la acción judicial en defensa de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el derecho; y
- b.- Conducir desde su inicio la investigación del delito, realizando diligencias preliminares de investigación -por sí mismo o por intermedio de la policía- y determinar si debe formalizar la Investigación Preparatoria (artículo 330° numeral 1 del Código Procesal Penal).

2.- Conforme a nuestro ordenamiento legal toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, y en forma directa o través de un

<sup>1</sup> Interviene la auxiliar por Disposición Superior N° 272-2016-MP-S/SP-C, de fecha 05-12-16, obrante a folios 964 a 980.

representante legal o apoderado puede recurrir al órgano jurisdiccional pidiendo la solución de un conflicto de interés subjetivo o una incertidumbre jurídica, así como denunciar la comisión de un delito ante la autoridad competente, cuando se ha vulnerado o puesto en peligro un bien jurídico protegido, correspondiendo en este caso al Ministerio Público como titular de la acción penal pública promover la misma, siempre que existan elementos de convicción idóneos y suficientes que acrediten objetivamente que el hecho denunciado constituye delito, es decir, que la conducta denunciada es contraria al ordenamiento legal en su conjunto; que es típica, es decir, que reúna los presupuestos objetivos y subjetivos del tipo penal que se denuncia; que los hechos denunciados se encuentren acreditados con suficiente elementos de prueba, que emerja la responsabilidad penal de su presunto autor o autores; y, que la acción penal se encuentre vigente.

3.- Las diligencias preliminares tienen por finalidad inmediata realizar los actos urgentes o inaplazables destinados a determinar si han tenido lugar los hechos objeto de conocimiento y su delictuosidad, así como asegurar los elementos materiales de su comisión, individualizar a las personas involucradas en su comisión, incluyendo a los agraviados, y, dentro de los límites de la Ley, asegurarlas debidamente (artículo 330° numeral 2 del Código Procesal Penal).

4.- Así, si el Fiscal después de haber realizado diligencias preliminares, considera que el hecho denunciado no constituye delito, declarará que no procede formalizar y continuar con la Investigación Preparatoria, así como ordenará el archivo de lo actuado, conforme lo establece el artículo 334° numeral 1 del Código Procesal Penal.

SEGUNDO: HECHOS PUESTOS EN CONOCIMIENTO DEL DESPACHO:

1.- Mediante Acta de Intervención Policial s/n - COMPRCAR-CHILETE, se advierte que:

- Personal policial de la Comisaría de Protección de Carreteras de Chilte, tomó conocimiento y constató un suceso de tránsito (choque con daños personales) en el kilómetro 67 + 400 de la carretera de penetración Ciudad de Dios - Cajamarca (altura del cruce Quinden y del centro poblado menor Yatahual - Tembladera - Contumazá), entre el vehículo de placa de rodaje D4L - 903, conducido por don **LUIS JAVIER VALLEJOS** (quien se dirigía desde Cajamarca hacia Lima) y una motocicleta lineal (se desconoce su placa de rodaje al haberse retirado de la zona del suceso) conducida por **JORGE LUIS DEZA BARDALES** (quien se dirigía desde Tembladera hasta Quinden Bajo), resultando con lesiones éstre último.



- Se agregó al acta que, en la entrevista efectuada por personal policial al conductor Vallejos, éste refirió que en su trayecto, a la altura del kilómetro 67+400 aproximadamente, se percató que un bus de la empresa de Transportes DÍAS, (cuya placa de rodaje desconoce e iba con dirección a Cajamarca por el carril contrario), habría invadido el carril, ingresando a la curva y al percatarse de la presencia del camión, ocupó su carril, a la vez que el motociclista que venía detrás del bus intentó sobrepasar a éste, invadiendo el carril contrario, impactando con el camión por la parte lateral izquierda, deteniéndose el conductor del camión para prestar el apoyo correspondiente al lesionado, siendo trasladado por sus familiares al Centro de Salud de Tembladera, diagnosticándosele politraumatismo, TEC Moderado - Severo, con fracturas múltiples en partes inferiores, y derivado a un Hospital de Chiclayo.

2.- Teniendo en cuenta los hechos antes descritos, se dio inicio a la investigación por la presunta comisión del delito de **LESIONES CULPOSAS** (artículo 124º del Código Penal) en agravio de **JORGE LUIS DEZA BARDALES**, realizándose los actos de investigación pertinentes.

3.- Debe agregarse que mediante Disposición Superior obrante a folios 964 a 980, el Fiscal Superior de la Segunda Fiscalía Superior Penal de Cajamarca, dispuso, entre otros, la realización de diligencias preliminares adicionales a las realizadas, otorgando a la suscrita (Fiscal Adjunta llamada por Ley) un plazo adicional y extraordinario de 60 días, los cuales a la fecha se han cumplido, correspondiendo emitir la disposición pertinente conforme al estado del proceso al haberse recabado los elementos de convicción pertinentes.

#### **TERCERO: DILIGENCIAS REALIZADAS DURANTE LA INVESTIGACIÓN:**

Durante la investigación preliminar se han obtenido los siguientes elementos de convicción:

01.- El Acta de Intervención Policial S/N-COMPRCAR-CHILETE, de fecha 18 de junio de 2016, mediante la cual se da cuenta que, personal policial de la COMPRCAR-CHILETE, en dicha fecha constataron que a la altura del kilómetro 67+400 de la carretera de penetración Ciudad de Dios - Cajamarca, se produjo un accidente de tránsito (choque con daños personales y materiales) entre el vehículo de placa de rodaje D4L 903 (UT1), conducido por don LUIS JAVIER VALLEJOS, con una motocicleta lineal (UT2), desconociéndose su placa de rodaje y características (no fue encontrada en la zona del suceso), conducida por JORGE LUIS DEZA

BARDALES; se agregó en dicha acta que, en entrevista con el conductor del camión, éste indicó que se percató que un bus de la empresa DÍAS, cuya placa de rodaje desconoce iba por el carril contrario con dirección hacia Cajamarca, y que habría invadido el carril del camión, ingresando a la curva, y al percatarse de su presencia ocupó su carril, en circunstancias que el agraviado (UT2) que venía detrás del bus intentó sobrepasarlo, luego invadió el carril contrario (del camión), impactando por la parte lateral izquierda, resultando lesionado el motociclista, deteniéndose la UT1 para prestar el apoyo correspondiente, siendo trasladado por sus familiares hasta el Centro de Salud de Tembladera, y posteriormente derivado a un Hospital de Chiclayo; (folios 02).

02.- Acta de Situación del Vehículo de Placa de Rodaje D4L- 903, de fecha 18 de junio de 2016, por medio de la cual se da cuenta en qué situación quedó el vehículo - camión, posterior al accidente de tránsito; (folios 03).

03.- Acta de Ocurrencia Policial, de fecha 18 de junio de 2016, donde personal policial de la Comisaría PNP de Tembladera, da cuenta que se constituyó al Centro de Salud del distrito, y se entrevistaron con la médica Margaret Solano Estraver, quien manifestó que el lesionado JORGE LUIS DEZA BARDALES, fue diagnosticado como politraumatizado, TEC moderado - severo, fracturas múltiples en miembros inferiores, y derivado al Hospital Las Mercedes de Chiclayo; (folios 04).

04.- Acta de Inspección Técnico Policial, de fecha 18 de junio de 2016, efectuada por personal de la Comisaría PNP de El Salitre, el mismo que concluye como: "a) Factor Predominante la actitud imprudente del conductor de la UT2 (motocicleta) al invadir ligeramente el carril contrario al tratar de adelantar a la UT3 (bus de la empresa Días no identificada, sin tener en cuenta la configuración de la vía; b) Factor contributivo la actitud imprudente del conductor de la Unidad UT2". (folios 06 a 07).

05.- Declaración en sede policial de LUIS JAVIER VALLEJOS, de fecha 19 de junio de 2016, quien narró que el suceso de tránsito se produjo en circunstancias que conducía el vehículo de placa de rodaje D4L-903, con dirección a la ciudad de Lima, y que "(...) al llegar a una semi curva, en sentido contrario transaba un ómnibus de la empresa días, quien había invadido mi carril, obligándome a realizar una frenada para detener el vehículo que conducía y a la vez el conductor del bus circulaba en sentido contrario, ingresando nuevamente a su carril, y en esas circunstancias en forma intempestiva un motociclista que circulaba en el mismo sentido del bus, por no chocar por la parte posterior del bus, invade mi carril, ubicándose en la parte central de la vía, entre ambos vehículos, por lo que impacta con el estribo izquierdo de mi vehículo, y con la parte posterior lateral izquierda del bus, por lo que el



bus avanza y este pierde el control de la moto, cayendo dentro del carril derecho, sufriendo lesiones (...); agregó que el impacto con el motociclista fue en su carril; que el vehículo de la empresa Dias siguió su marcha; agregó, que fue el motociclista quien lo chocó estando con su vehículo detenido en su carril; además indicó no considerase responsable del accidente de tránsito; (folios 13-15).

06.- Copia de Licencia de Conducir del imputado LUIS JAVIER VALLEJOS, con el cual acredita que está autorizado para conducir vehículos de clase A, categoría Tres c; (folios 21).

07.- Tarjeta de Identificación vehicular del camión de placa D4L - 903, documento expedido por la SUNARP, en el que se ha consignado los datos del vehículo; (folios 22).

08.- Consulta vehicular SUNARP Móvil del vehículo de placa de rodaje D4L-903, mediante la cual se da cuenta que quien figura como titular de dicha unidad móvil es MARCO ANTONIO HERRERA FLORES. (folios 22 A).

09.- Certificado de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito - SOAT -2015 N°05- 21907564; póliza vigente desde 18 de enero de 2016 al 18 de enero de 2017, siendo la contratante doña EDELMIRA YAUARI INGA DE PALACIOS; (folios 23).

10.- Copia de Historia Clínica N° 41-D-128, correspondiente al lesionado JORGE LUIS DEZA BARDALES, remitida por el Centro de Salud de Tembladera; (folios 25).

11.- Certificado Médico Legal N° 00082-PF-HC, de fecha 22 de junio de 2016, practicado a JORGE LUIS DEZA BARDALES, en el cual no se emitió conclusiones respecto de las lesiones, indicándose que, "(...) Para emitir conclusiones finales en atenciones facultativas e incapacidad médico legal se requiere evaluación por especialistas en Hospital de referencia (mayor capacidad resolutive) (...)"; (folios 29).

12.- Ficha Reniec de LUIS JAVIER VALLEJOS, con el cual se acredita que el imputado se encuentra plenamente identificado; (folios 31).

13.- Copia Certificada de documento denominada "Acta de Constatación", emitida por JUAN QUIROZ MORI, en su condición de Presidente de la Ronda Campesina Quinden - Terlen, en el cual se deja constancia de la hora en que tomó conocimiento del suceso de tránsito y de la forma en que se habría producido; (folios 59).

14.- Copia Certificada de documento denominado "Constancia", emitida por FERNANDO ALAYO QUISPE, en su condición de Teniente Gobernador de del Centro Poblado Quinden Bajo, en el cual indica que tomó conocimiento del suceso de tránsito por moradores; (folios 60).

15.- Copia de Licencia de Conducir del lesionado JORGE LUIS DEZA BARDALES, con el cual acredita que está autorizado para conducir vehículos menores; (folios 61).

16.- Certificado de Dosaje Etílico N° 000959, de fecha 18 de junio de 2016, con el que se acredita que el imputado LUIS JAVIER VALLEJOS conducía su vehículo sin presentar alcohol en la sangre; (folios 138).

17.- Copia del Acta de Intervención Policial, de fecha 18 de junio de 2016, en la que se ha consignado que efectivos policiales de la Comisaría PNP del Norte - Chiclayo, se constituyeron al Hospital Regional de Lambayeque y constataron el ingreso del lesionado al área de emergencia del mencionado nosocomio; (folios 145).

18.- Informe Médico N° 168-2016-HRL, del 02 de julio de 2016, en el cual la neurocirujana KARINA L. GARCÍA VÁSQUEZ, precisa que plantea para el lesionado Jorge Luis Deza Bardales, Traumatismo craneoencefálico grave y otras lesiones; (folios 148 a 149).

19.- Constancia de Hospitalización N° 045-2016-HRL, de fecha 16 de setiembre de 2016, mediante la cual se da cuenta de la hospitalización de JORGE LUIS DEZA BARDALES, así como de los diagnósticos médicos que presenta; (295-297).

20.- Copia Certificada de documento denominada "Acta de Conocimiento", redactada por el Juez de Paz de Única Nominación de Quinden Bajo, a solicitud de MANUEL NATIVIDAD DEZA BARDALES, en el cual éste pone en conocimiento lo que se informó por vecinos respecto del suceso de tránsito y de la forma en que se habría producido; (folios 453 a 454).

21.- Oficio N° 0001-2007, de fecha 12 de Enero de 2017, remitido por la Concesionaria Vial Sierra Norte S.A., por medio del cual remiten el reporte del pase vehicular en las fechas 17 a 18 de junio de 2017; (folios 986-996).

22.- Declaración en sede fiscal del efectivo policial EDGARDO MONTENEGRO VILLA, de fecha 19 de Enero de 2017, quien manifestó que no intervino en la redacción del Acta de Intervención S/N-COMPRCAR-



CHILETE, que obra a folios dos de la carpeta fiscal, sino que la misma fue redactada por el efectivo policial Luis Ugaz Cotrina quien labora en Carreteras de Chilete (Comprcar-Chilete), puesto que ha sido dicha unidad quien efectuó la intervención inicial, y luego ha puesto a disposición de la Comisaría de El Salitre al intervenido Luis Javier Vallejos, al vehículo, así como lo actuados correspondientes; precisó que su firma aparece en dicho documento en señal de conformidad de recepción de lo actuado, por tanto no puede precisar la forma cómo se desarrolló la intervención; (folios 998-1000).

23.- Acta de Entrevista Fiscal al lesionado JORGE LUIS DEZA BARDALES, de fecha 27 de Enero de 2017, llevada a cabo en la ciudad de Chiclayo, en el inmueble de los familiares del mencionado; se dejó constancia que se le encontró en silla de ruedas, así como de que al realizar entrevista de sus datos personales con la finalidad que luego brinde información respecto de los hechos que se investigan, éste refirió no recordar, y al requerir mayor información sus respuestas no eran coherentes y hablaba con dificultad; (folios 1008).

24.- Informe Médico N° 08-2017-HRL, expedido por el Hospital Regional de Lambayeque, mediante el cual se da cuenta de los tratamientos y exámenes a los que ha sido sometido el lesionado JORGE LUIS DEZA BARDALES y los diagnósticos médicos; (folios 1009-1010).

25.- Declaración Testimonial de LUIS MIGUEL UGAZ COTRINA, de fecha 27 de Enero de 2017, manifestó ser efectivo policial y prestó servicio en la Comisaría de Protección de Carreteras de Chilete; respecto del Acta de Intervención Policial S/N-COMPRCAR-CHILETE, de fecha 18 de junio de 2016, indicó ser la persona que redactó y firmó dicho documento; respecto de la forma de intervención manifestó que en aquella fecha se encontraba de servicio a la altura del kilómetro 75 de la carretera de penetración a Cajamarca, en compañía del efectivo policial JOSEMARÍA ROLANDO VEGA LÓPEZ, y siendo aproximadamente las 07:40 a 07:45 horas, fueron avisados por un usuario de la vía, que a la altura del cruce de Quinden se había producido un accidente de tránsito por lo que se constituyeron hasta dicho lugar, constatando que a la altura del Km. 67+400 se produjo un accidente, encontrando un grupo de personas, dentro de ellas una señora que dijo ser familiar del lesionado, que no se quiso identificar, mencionando que su familiar manejaba una moto lineal y había resultado lesionado, y fue trasladado hasta la posta de Tembladera, y la moto lo había recogido un familiar; agregó que en el lugar encontró al conductor del camión LUIS JAVIER VALLEJOS, así como al mencionado vehículo del placa de rodaje D4L-903, éste informó cómo se produjo el accidente, así como en la zona

encontraron restos de micas, la moto no se encontraba en la zona y que no hubo casco u otros objetos en la vía; además indicó que llegaron al lugar de los hechos a las 08:05 horas; (folios 1011-1014).

26.- Declaración Testimonial de JOSEMARÍA ROLANDO VEGA LÓPEZ, de fecha 27 de Enero de 2017, manifestó ser efectivo policial, y que prestó servicio en la Comisaría de Protección de Carreteras de Chilete; indicó que participó en la diligencia de intervención policial, con motivo del accidente producido el día 18 de Junio de 2016, a la altura del Km. 67+400 de la carretera Penetración a Cajamarca, precisando que el Acta de Intervención Policial S/N de la misma fecha, ha sido redactada por el efectivo policial Luis Miguel Ugaz Cotrina; agregó que siendo las 07:40 a 07:45h aproximadamente, fueron avisados que en el lugar antes indicado, se había producido un accidente de tránsito, constituyéndose hasta dicho lugar, donde encontraron a un grupo de personas, dentro de ellas una señora que dijo ser familiar de la persona accidentada identificándolo con el nombre de Jorge Luis Deza Bardales, quien según el dicho de la indicada señora, manejaba una moto lineal, resultando lesionado y fue trasladado a la posta médica de Tembladera, así como se informaron que la moto la había recogido un familiar; agregó que advirtió la presencia del denunciado Luis Javier Vallejos, quien era el conductor de la unidad móvil de placa de rodaje D4L-903, e informó que la moto lineal venía detrás del carro de la Empresa Días, e impactó en su camión; (folios 1016-1018).

27.- Declaración ampliatoria del investigado LUIS JAVIER VALLEJOS, de fecha 30 de Enero del 2017, a nivel fiscal; mediante la cual el denunciado se ratifica en todos los extremos de su declaración rendida a nivel policial; (folios 1048-1051).

28.- Acta de Diligencia de Inspección Técnico Pericial, llevada a cabo en el lugar de los hechos por personal PNP de Tránsito de Cajamarca, con presencia del imputado, lugar que a la fecha de la diligencia está demarcado como kilómetro 67+650; (folios 1052).

29.- Se recibió escrito presentado por el Presidente del Directorio de la Empresa de Transportes Días S.A., de fecha 31 de Enero de 2017, mediante el cual informó, entre otros que: El día 18-06-16, estuvieron como conductores del vehículo de placa de rodaje C4W-959, Roberto Alberto Castope Briones y copiloto Jorge Luis Yacarini Linares (adjunta manifiesto de pasajeros), y que el último turno le correspondió conducir al señor Castope, y ha sido este conductor quien manejó por Tembladera, pasando por el peaje a las 6:14h, que del peaje hasta Tembladera hay un promedio de 40 a 45 minutos, por lo que pasó por éste distrito a las 07:00h aproximadamente;



agregó que sus conductores no han reportado alguna incidencia en dicho día a su llegada a Cajamarca; (folios 1053-1056)

30.- Reporte de Consulta Vehicular, de los vehículos de Placa de Rodaje N° B3Z-964, T7R-906, B2I-955, C4W-959 y CSL-958, vehículos que según reporte de la Concesionaria Vial Sierra Norte S.A., corresponderían a vehículos de la Empresa de Transportes Días, y que habrían hecho su tránsito por el Peaje Ciudad de Dios en horas de la mañana; (folios 1057 a 1061).

31.- Declaración testimonial en sede fiscal de JUAN QUIROZ MORI, de fecha 02 de Febrero de 2017; quien manifestó ser Presidente de la Ronda Campesina de Quinden - Terlen, que en dichas circunstancias redactó el documento denominado "Acta de Constatación" así como también reconoce su sello, firma y post firma de dicho documento, con relación a los hechos manifestó que no ha sido testigo del momento en que se produjo el accidente, sino que tomó conocimiento del mismo por los vecinos, quienes pasaron por su casa diciendo que el señor Deza Bardales, había sufrido un accidente; precisó que desde su casa hasta el lugar de donde ocurrió el accidente hay aproximadamente cuatro minutos de camino, y que él llegó hasta el lugar de los hechos a las 07:05 de la mañana y que dicha hora vio en su reloj, encontrando en la carretera al señor Deza Bardales tendido en la pista; así como a vecinos de la zona que comentaban la forma en que se produjo el accidente que es lo que él ha consignado en el acta, también manifestó que no escuchó si los vecinos que se encontraban en el lugar hablaban sido testigos del momento del accidente, tampoco le dijeron a qué hora se produjo el mismo; (folios 1068-1071).

32.- Declaración Testimonial en sede fiscal de FERNANDO ALAYO QUISPES, de fecha 02 de Febrero de 2017; quien refirió ser Teniente Gobernador de Quinden Bajo, y a su vez miembro de la Ronda Campesina de Quinden - Terlen; ser cuñado del lesionado; se enteró de los hechos, por una llamada que le hiciera don Manbert Cabanillas, quien le dijo que Jorge Deza Bardales sufrió un accidente; precisó que demoró aproximadamente 30 minutos en llegar al lugar de los hechos, pero que ya no encontró a su cuñado, pues su conviviente se lo llevó al Centro de Salud de Tembladera; que su conviviente le refirió que ella buscó movilidad para el traslado de su cuñado a Tembladera; que no tomó conocimiento de la hora en que se produjo el accidente, pero a su señora le dijeron que se produjo entre las 7:00 a 07:05 de la mañana; (folios 1073-1076).

33.- Certificado Médico Legal N° 000551-PF-HC (Reconocimiento Post Facto) de fecha 27 de Enero de 2017, correspondiente al lesionado JORGE

LUIS DEZA BARDALES, el mismo que concluye:

"1.- Lesiones producidas en accidente de tránsito.

2.- El casco constituye el principal elemento de protección cuando se viaja en moto; los motociclistas que usan el casco tienen hasta un 85% menos de lesiones graves que los que no usan casco.

Atención Facultativa: 30 días

Incapacidad Médico Legal: 160 días"; (folios 1082).

34.- Declaración Testimonial en sede fiscal de MARIA ISABEL DEZA BARDALES, de fecha 13 de Febrero de 2017; manifestó ser hermana del lesionado; que el día de los hechos, en horas de la mañana se encontraba en Quinden haciendo compras, y escuchó comentarios de que se había producido un accidente, y que luego una persona (no precisa su nombre) le avisó que su hermano sufrió el accidente, acudiendo a la pista, encontrando allí tendido, recibiendo ayuda de un vecino para trasladarlo en su carro al Centro de Salud de Tembladera; agregó que no hubo persona que le haya manifestado ser testigo del momento del accidente de tránsito, solo comentarios de que en el accidente habría participado un bus de la Empresa Díaz que pasó a las 7 de la mañana por el lugar, así como que escuchó que el accidente se produjo entre las 7:00 y 7:30h; agregó que su hermana Carmen Rosa Deza Bardales, tiene nombres de testigos de los hechos, y que lo indicará al rendir su declaración; (folios 1088-1090).

35.- Declaración Testimonial en sede fiscal de MANUEL NATIVIDAD DEZA BARDALES, de fecha 13 de Febrero de 2017; manifestó ser hermano del lesionado; indicó que acudió al Juez de Paz de Única Nominación de Quinden Bajo, para hacer de conocimiento el accidente sufrido por su hermano, y que narró lo que los vecinos le contaron, lo cual lo plasmó en un acta que luego firmó; agregó que no hay persona que le haya comentado ser testigo del momento del accidente de tránsito, sino solo comentarios, así como que se habría producido entre las 07:05 y 07:10h; (folios 1091-1093).

36.- Opinión Técnica N° 001-2017- IIMRLAC/REGPOL-CAJ/DIVPOS-DEPTRAM-UIAT, de fecha 05 de Febrero de 2017; mediante el cual el personal del Departamento Policial de Tránsito de Cajamarca, informa que analizados y revisados los actuados de la presente carpeta fiscal, no se encontraron suficientes elementos que ayuden a la elaboración de un Dictamen Pericial, emitiendo únicamente informe del estudio de la vía así como precisa las normas del reglamento nacional de tránsito que guardan relación con los hechos; (folios 1107 - 1112).

37.- Acta de Inspección Técnico Policial, de fecha 30 de Enero del 2017,



mediante la cual se da cuenta del desarrollo la diligencia de Inspección Técnico Policial, que diera origen a la Opinión Técnica detallada en el numeral anterior; (folios 1113-1114).

38.- Declaración Testimonial en sede fiscal de Carmen Rosa Deza Bardales, de fecha 21 de Febrero de 2017; refirió ser hermana del lesionado; indicó no ser testigo del momento en que se produjo el accidente de tránsito, sino que fue avisada por un señor que no identificó con sus datos, que un carro de la Empresa Días había atropellado a su hermano; señaló que cuando llegó al lugar de los hechos, no escuchó a alguna persona decir que haya sido testigo del momento del accidente, solo comentarios de estas personas; agregó que ocho días (aproximadamente) después de producido el accidente, su amiga Margarita Huangal Cruzado, le dijo que había averiguado el número de placa del carro de Días que habría participado en el accidente, indicándole que fue el carro de placa B3Z-964 y que el chofer se llama "Lucio", por lo que la declarante empezó a indagar en el internet, obteniendo como resultado que dicho vehículo estaba asignado al chofer de nombre "Lucio Amilcar Mendez Torres", luego entre el 10 y 14 de febrero de este año, la señora Margarita Huangal le volvió a indicar que había averiguado que el nombre del chofer del carro que habría producido el accidente era el señor Lucio Díaz, y que era de Tembladera, por lo que ante esta nueva información, volvió a indagar en el internet, obteniendo como resultado que su nombre es "Lucio Díaz Pablo" y que conducía el vehículo C5L-958 que es un carro de la empresa Días; agregó que el día que se produjo el accidente habían en el lugar al costado de la pista varios carros estacionados, dentro de los cuales la madre de la declarante pudo ver uno de la Empresa Días y que escuchó que el chofer manifestó que el carro que había participado en el accidente era uno de la empresa Días del turno de las siete de la mañana; (folios 1115-1118).

39.- Escrito presentado por el Gerente General de la Empresa de Transportes "Trandía SAC", ingresado el 21 de Febrero de 2017; mediante el cual informó que: a).- El vehículo de placa de rodaje N° B2I-955 es de su propiedad por haberlo adquirido mediante Acta de Transferencia de fecha 06 de Enero de 2017 por parte de la Empresa de Transportes "Turismo Diez Ases S.A."; b).- No puede precisar el nombre del conductor ni el manifiesto de pasajeros, toda vez que la unidad móvil al momento de los hechos no le pertenecía a dicha empresa; (folios 1120).

40.- Escrito presentado por el Gerente General de la Empresa de Transportes "Turismo Diez Ases S.A." ingresado el 22 de Febrero del 2017; mediante el cual informó que: a).- Respecto del vehículo de placa de rodaje B3Z-964 cuenta con la Hoja de Ruta N° 2016-000715 y salió de Lima a las

17:30h del día 17 de Junio de 2016 y llegó a Cajamarca a las 09:00h del 18 de junio de 2016, siendo los conductores asignados Mendez Torres Lucio Amilcar (De 17:30h a 22:30h y 2:30h a 6:30h) y Juan Pele Marcelo Contreras (De 22:30h a 2:30h y 06:30h a 09:00h); b).- Preciso que los choferes de la unidad de placa de rodaje B3Z-964 no registró contingencia en la fecha que se produjo el accidente de tránsito; (folios 1129 a 1130).

41.- Escrito presentado por el abogado de la Empresa de Transportes Días S.A., ingresado con fecha 22 de Febrero de 2017; mediante el cual se adjunta la Hoja de Manifiesto de Pasajeros del vehículo de placa de rodaje C5L-958, que partió de Lima hacia Cajamarca el 17 de junio de 2017, y que sus conductores fueron Manuel Caipo Bautista y Lucio Díaz Pablo; (folios 1140-1141).

42.- Acta Fiscal de fecha 23 de Febrero de 2017, donde se plasmó la diligencia de Verificación de tiempo aproximado de recorrido de un bus de transporte público en su desplazamiento desde la Unidad de Peaje Ciudad de Dios hasta el kilómetro 67+650 de la carretera de Penetración a Cajamarca (lugar donde se produjo el suceso de tránsito), la cual se llevó a cabo a las 05:49h hasta las 07:01h, haciendo el seguimiento a la unidad móvil de placa de rodaje T6X-967 de la Empresa de Transportes Días, sin incidencias en el camino y sin detenimiento de la unidad, el trayecto duró 01 hora con 12 minutos; (folios 1145).

43.- Acta de Entrevista de Fiscal a NORA MARGARITA HUANGAL CRUZADO, de fecha 23 de Febrero de 2017, efectuada en el domicilio laboral de ésta, respecto de los hechos materia de investigación, informando la entrevistada: a).- Que tomó conocimiento del accidente de tránsito por comentarios de la gente, pero que desconoce las circunstancias en que se produjo el mismo; b).- Indicó no haber brindado información a la señora Carmen Rosa Deza Bardales de que el vehículo que participó en el accidente era un vehículo de la empresa Días y sería conducido por un señor llamado Lucio; c).- Así como tampoco entre los días 14 y 17 de febrero del presente año le dijo a la señora Carmen Rosa Deza Bardales que el vehículo que participó en el accidente era un vehículo de la empresa Días y sería conducido por un señor Lucio Díaz, que no tiene conocimiento del porqué la señora Carmen Rosa tomó su nombre; y que tampoco pudo enterarse de ello porque su trabajo en el restaurante es en la cocina, así como no pudo averiguar al respecto tal y como se lo pidió la señora Carmen Rosa Deza Bardales; (folios 1146-1147).

44.- Declaración Testimonial en sede fiscal de ROBERTO ALBERTO CASTOPE BRIONES, de fecha 13 de Marzo de 2017; quien indicó ser



trabajador de la empresa de Transportes "Turismo Dias" desde hace 15 años y contar con 38 años de experiencia como conductor; precisó que el día 18 de Junio de 2016, se le asignó el vehículo de placa de rodaje C4W-959 haciendo la ruta de Lima a Cajamarca, saliendo de Lima a las 06 de la tarde y llegando a Cajamarca a las 11:00h aproximadamente; que salieron dos choferes, turnándose cada cuatro horas, habiendo hecho el cambio a la altura de las Huacas, tomando la posta hasta Cajamarca; agregó que dicho día efectuó el servicio sin novedad, y que no hubo ningún accidente; que el tiempo que emplean en el trayecto del Peaje Ciudad de Dios hasta el Cruce de Quinden es una hora aproximadamente; agregó que en la zona donde se produjo el accidente, el espacio del carril aunque sea curva, es suficiente para que el bus pase con normalidad; (folios 1180-1181).

45.- Declaración Testimonial en sede fiscal de LUCIO DIAZ PABLO, de fecha 13 de Marzo de 2017; indicó ser trabajador de la empresa de transporte "Turismo Dias" desde hace 5 años, y como conductor tiene una experiencia de 09 años; precisó que no recuerda qué unidad móvil le asignaron para manejar el día 18 de Junio de 2016, la ruta que tiene es de Lima a Cajamarca, y no recuerda qué bus manejo ese día; que a la fecha conduce el vehículo de placa de rodaje C5L-958; que no recuerda quien fue su copiloto ese día, pero que están consignados en el manifiesto de pasajeros; agregó que el día 18 de Junio de 2017 no se produjo ningún accidente en la carretera, y que él siempre maneja el tramo Pacasmayo a Cajamarca; que el tiempo que emplean en el trayecto del Peaje Ciudad de Dios hasta el Cruce de Quinden es una hora aproximadamente; así como que en su trayecto no tienen porqué invadir carril contrario; (folios 1183-1184).

46.- Oficio N° CLSPerú: 070-03-17, remitido por el Gerente General de CLS PERÚ SAC, adjuntado el informe de GPS del vehículo de Placa de Rodaje N° C4W-959, en su tránsito del día 18 de junio de 2017 desde las 04:40 hasta las 11:00h.; (folios 1240 a 1246).

#### CUARTO: EL DELITO DE LESIONES CULPOSAS.-

##### I.- Código Penal.-

##### Artículo 124°.-

*"El que por culpa causa a otro un daño en el cuerpo o en la salud, será reprimido, por acción privada, con pena privativa de libertad no mayor de un año y con sesenta a ciento veinte días-multa.*

*La pena será privativa de libertad no menor de uno ni mayor de dos años y de sesenta*

*a ciento veinte días-multa, si la lesión es grave, de conformidad a los presupuestos establecidos en el artículo 121.*

*La pena privativa de libertad será no menor de uno ni mayor de tres años si el delito resulta de la inobservancia de reglas de profesión, ocupación o industria y no menor de un año ni mayor de cuatro años cuando sean varias las víctimas del mismo hecho.*

*La pena privativa de la libertad será no menor de cuatro años ni mayor de seis años e inhabilitación, según corresponda, conforme al artículo 36 -incisos 4), 6) y 7)-, si la lesión se comete utilizando vehículo motorizado o arma de fuego, estando el agente bajo el efecto de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas, o con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor de 0.5 gramos-litro, en el caso de transporte particular, o mayor de 0.25 gramosilitro en el caso de transporte público de pasajeros, mercancías o carga en general, o cuando el delito resulte de la inobservancia de reglas técnicas de tránsito."*

##### 2.- Definición de Conducta Culposa.-

Tal como se describe en la doctrina "[...] la conducta imprudente o culposa es la acción peligrosa emprendida sin ánimo de lesionar el bien jurídico, pero que por falta de aplicación del cuidado o diligencia debida causa su efectiva lesión. No nos encontramos aquí con la actitud rebelde del sujeto frente a la norma que protege los bienes jurídicos y que prohíbe matar, lesionar o dañar a otro; no es ahí donde se encuentra el desvalor de acción de estos delitos, sino en el incumplimiento por parte de aquél de la exhortación al actuar cuidadoso, que es principio general del ordenamiento encargado de prohibir la innecesaria puesta en peligro de los bienes jurídicos ajenos; desvalor que por lo demás, es menor que el de las conductas dolosas."<sup>2</sup>

De lo precedentemente expuesto se infiere que, lo cardinal no es determinar la mera relación causal y el resultado, sino, quién al momento de ocurrido el evento actuaba con la diligencia debida, y quién no.

##### 3.- El Juicio de Tipicidad.-

En los delitos culposos el autor no desea causar el resultado obtenido, sin embargo la conducta lícita que realiza, como es la conducción de determinado vehículo automotor -bien peligroso-, es una actividad riesgosa jurídicamente aceptada, por ello el Estado mediante leyes de tránsito, permite la circulación de vehículos, pero bajo ciertas reglas, generando lo que se denomina el riesgo permitido.

Así, el Decreto Supremo N° 016 - 2009 - MTC, Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito, contiene las normas establecidas que

<sup>2</sup> BERDUGO DE LA TORRE, Ignacio y otros: "Lecciones de Derecho Penal, Parte General"; Barcelona: Praxi; 1996, pág. 169.



regulan el tránsito automotor. Algunas de ellas son relevantes para merituar el reproche penal en el actuar del agente cuando no respeta estas normas y no se conduce dentro del riesgo permitido, infringiendo el deber de cuidado.

El resultado como consecuencia de la infracción al deber de cuidado, es el daño en el cuerpo o en la salud; la responsabilidad penal del agente se determinará si con su accionar (por negligencia, imprudencia o impericia) aumentó el riesgo que permite el Reglamento Nacional de Tránsito y como consecuencia infracciona el deber de cuidado que exige éste Reglamento.

En relación a la Violación de un deber Objetivo de Cuidado y la producción de un resultado imputable objetivamente a su autor, debe indicarse que: "(...) en el tipo objetivo de los delitos culposos o imprudentes exige la presencia de dos elementos: a) La violación de un deber objetivo de cuidado, plasmado en normas jurídicas, normas de experiencia, normas del arte, ciencia o profesión, destinadas a orientar diligentemente el comportamiento del individuo; y b) La producción de un resultado típico imputable objetivamente al autor por haber creado o incrementado un riesgo jurídicamente relevante, que se ha materializado en el resultado lesivo del bien jurídico (...)." <sup>3</sup>

El comportamiento culposo, conforme a lo previsto en la norma penal, requiere de negligencia, impericia y/o imprudencia. Así, se ha definido a:

a.- **La Negligencia:** "Es la omisión, el descuido voluntario y consciente en la tarea cotidiana que se despliega, o bien en el ejercicio de la profesión a través de la realización de un acto contrario a lo que el deber que esa persona realiza, exige y supone." <sup>4</sup>

Una conducta negligente, por lo general, implica un riesgo para uno mismo o para terceros y se produce por la omisión del cálculo de las consecuencias previsibles y posibles de la propia acción, y son pasibles de una sanción en materia penal.

La conducción de vehículos motorizados es una actividad riesgosa jurídicamente aceptada, y que el conductor asume ex ante (antes del suceso) la responsabilidad por el riesgo creado, los daños causados a las personas y a los bienes con motivo de la circulación vehicular. Es por ello, que se ha normado que todo conductor, debe poseer determinada aptitud al estar al volante de un bien riesgoso, esto es, cuenta con licencia de conducir, no conducir vehículos motorizados después de haber ingerido

<sup>3</sup> SALINAS SICCHA, Ramiro; "Derecho Penal Parte Especial" Editorial Grijley; Lima, 2013; pág. 119

<sup>4</sup> [www.derechoabogado.com/salinas/negligencia.php](http://www.derechoabogado.com/salinas/negligencia.php)

bebidas alcohólicas o consumido drogas, contar con Certificado de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT, entre otros.

b.- **La Impericia:** "(...) Se imputará impericia –también conocida en la doctrina como culpa profesional–, al agente cuando sin estar debidamente preparado o capacitado para realizar determinada acción peligrosa, la realiza sin prever el resultado dañoso. En suma, la impericia es la falta o insuficiencia de aptitudes para el ejercicio de una profesión o arte que importa un desconocimiento de los procedimientos más elementales (...)." <sup>5</sup>

c.- **La Imprudencia:** "(...) Es la forma activa; es el obrar, el actuar sin la cautela debida. Va revestida de precipitación, insensatez o falta de consideración, (...)." <sup>6</sup>

4.- La doctrina considera que en los delitos imprudentes, existe: "(...) afectación al **deber de cuidado**; esto se constituye como el núcleo del tipo de lo injusto de estos delitos, porque es a través de ellos que se busca el cumplimiento del deber de cuidado exigido, para evitar los riesgos que ello podría implicar. Frente a esto, nos encontramos ante una infracción del deber de cuidado, que consiste en realizar una conducta sin el cuidado exigido y como consecuencia de aquello, se traspaşa los límites del riesgo permitido, creando un riesgo típicamente relevante para el bien jurídico que se busca proteger. El deber de cuidado, también llamado diligencia debida, consiste en la obligación de prestar el cuidado necesario para evitar la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos; existen diversas normas de carácter extrapenal (de índole legal o reglamentaria), específicamente como las normas de tránsito, las que están orientadas a que los individuos actúen excluyendo la creación de riesgos innecesarios o bien, para cuando resulta socialmente imprescindible actuar arriesgadamente, adoptando determinadas cautelas para evitar que la situación de riesgo se convierta en lesión. (...)" <sup>7</sup>

5.- En la Ejecutoria Suprema, contenida en el Recurso de Nulidad N° 2804-2012 -Lima, emitida por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, se precisa, "(...) Lo esencial del tipo de injusto del delito imprudente no es simple causación de un resultado, sino la forma en que se realiza la acción. El punto de referencia lo da "el deber objetivo de cuidado", que es un concepto objetivo normativo. Desde la perspectiva objetiva interesa cual es el cuidado requerido en la vida de relación social respecto a la realización de una conducta determinada; y desde el juicio normativo, es de resaltar las consecuencias de previsible producción y que la acción quede por debajo de la medida adecuada socialmente. Por otro lado el tipo subjetivo del delito imprudente atiende a la capacidad individual, al nivel de conocimiento, previsibilidad y experiencia en el sujeto. (...)" <sup>8</sup>

<sup>5</sup> SALINAS SICCHA, Ramiro; Derecho Penal - Parte Especial; Lima, Idemsa, Primera reimpresión 2005

<sup>6</sup> BRAMONT ARIAS TORRES, Luis Alberto y GARCIA CANTIZANO, María del Carmen; "Manual de Derecho Penal Parte Especial"; editorial San Marcos, Lima, 2003; p. 70.

<sup>7</sup> CANCIO MELIA, Manuel; Conducta de la víctima e imputación objetiva en Derecho Penal. Estudio sobre ámbitos de responsabilidad de víctima y autor en actividades arriesgadas. Biblioteca de Derecho Penal, J.M Bosch Editor, 1998, Barcelona, p. 343 y es citado por la profesora CLAUDIA LÓPEZ DÍAZ ACCIONES A PROPIO RIESGO. IIS-174. REVISTA CENIPEC. 25.2006. ENERO-DICIEMBRE. ISSN: 0798-9202. Pág. 12.

<sup>8</sup> Código Penal; Editora y Librería Jurídica Grijley 19ª Edición, Agosto 2016; Pág. 134.



6.- El Decreto Supremo N° 016 - 2009 - MTC, Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito, precisa:

Artículo 90.- Reglas generales para el conductor.

"Los conductores deben: [...] b) En la vía pública: Circular con cuidado y prevención."

Artículo 92.- Distancia obligatoria.

"El conductor está obligado a conservar la distancia suficiente entre el vehículo que conduce y el vehículo que lo precede, que le permita si se produce la detención de éste, una maniobra segura, teniendo en cuenta la velocidad y las condiciones de la vía. Asimismo, a dejar suficiente espacio respecto al vehículo que lo precede, para que el vehículo que lo adelante lo haga sin peligro."

Artículo 102.- Conductores de vehículos menores.

"Los conductores de vehículos menores automotores o no motorizados, tienen los derechos y obligaciones aplicables a los conductores de vehículos mayores, excepto aquellos que por su naturaleza no les son aplicables."

Artículo 133.- Obligación de respetar el carril.

"En las vías, los vehículos deben circular dentro de las líneas de carril, utilizadas para separar la circulación en la misma dirección, salvo cuando realicen maniobras para adelantar o cambiar de dirección."

Artículo 146.- Circulación de vehículos menores.

"Los vehículos menores, cuando circulen por una vía, deben hacerlo por el carril de la derecha, de manera ordenada y sin hacer maniobras que pongan en riesgo la vida de los ocupantes del vehículo y de la de terceros."

Artículo 161.- Reducción de la velocidad.

"El conductor de un vehículo debe reducir la velocidad de éste, cuando se aproxime o cruce intersecciones, túneles, calles congestionadas y puentes, cuando transite por cuevas, cuando se aproxime y tome una curva o cambie de dirección, cuando circule por una vía estrecha o sinuosa, cuando se encuentre con un vehículo que circula en sentido contrario o cuando existan peligros especiales con respecto a los peatones u otros vehículos o por razones del clima o condiciones especiales de la vía."

Artículo 171.- Prohibiciones para adelantar.

"El conductor de un vehículo que transite en una vía de doble sentido de circulación, de dos o más carriles por sentido, no debe adelantar a otro vehículo cuando:

1) La señalización lo prohíba;

(...)

6) Se aproxime a una curva.

8) La visibilidad no lo permita."

## ANÁLISIS DE LOS HECHOS PUESTOS EN CONOCIMIENTO:

### QUINTO:

**Hechos:** El día 18 de junio de 2016, aproximadamente a las 07:00h, a la altura del kilómetro 67 + 400 de la carretera de penetración Ciudad de Dios - Cajamarca (altura del cruce Quinden y del centro poblado menor Yatahual - Tembladera - Contumazá), se produjo un suceso de tránsito (choque) entre el vehículo de placa de rodaje D4L - 903, conducido por don LUIS JAVIER VALLEJOS y una motocicleta lineal (se desconoce su placa de rodaje) conducida por JORGE LUIS DEZA BARDALES, resultando con lesiones graves éste último, y en el cual también habría participado un vehículo no identificado de la Empresa de Transportes Días.

En mérito a los hechos descritos y diligencias actuadas, para un mejor entendimiento de las razones que motivan la presente disposición, el análisis de los hechos se delimitará a lo siguiente:

- Determinar si en la producción del resultado - Lesiones Graves en el cuerpo a don JORGE LUIS DEZA BARDALES - don LUIS JAVIER VALLEJOS, en su actuar como conductor, infraccionó o no el deber de cuidado mediante acciones de negligencia, impericia o imprudencia; y,

- Determinar si para la producción del resultado - Lesiones Graves en el cuerpo a don JORGE LUIS DEZA BARDALES - un tercero no identificado, en su actuar como conductor infraccionó o no el deber de cuidado mediante acciones de negligencia, impericia o imprudencia.

I.- De la conducta atribuida a don LUIS JAVIER VALLEJOS:

a.- De los elementos de convicción recabados, se tiene que:

- Del Acta de Intervención Policial S/N-COMPRCAR-CHILETE, se extrae que, quien invadió el carril del conductor del camión es el lesionado Deza Bardales, y en dicho carril, chocó su vehículo menor en el estribo lateral izquierdo del vehículo mayor, y como consecuencia cayó al pavimento y se lesionó; (folios 02).

- Del Acta de Inspección Técnico Policial, efectuada por personal de la Comisaría PNP de El Salitre, mediante el cual se determinó que: a) Factor Predominante la actitud imprudente del conductor de la UT2 (motocicleta) al invadir ligeramente el carril contrario al tratar de adelantar a la UT3 (bus de la empresa Días no identificada, sin tener en cuenta la configuración de la vía; b) Factor contributivo la actitud



- De la declaración en sede policial de LUIS JAVIER VALLEJOS, se tiene que el motociclista invadió su carril, intentando sobrepasar a un ómnibus (indicó de la empresa de transportes Días) y en dicha circunstancia chocó contra su vehículo - camión; (folios 13 a 15).

- De la copia de Licencia de Conducir del imputado LUIS JAVIER VALLEJOS, se acredita que estaba autorizado para conducir vehículos de clase A, categoría Tres c; (folios 21).

- Del Acta de Constatación emitida por JUAN QUIROZ MORI, en su condición de Presidente de la Ronda Campesina Quinden - Terlen, se advierte que se deja constancia de la hora en que tomó conocimiento del suceso de tránsito y de la forma en que se habría producido; (folios 59).

- Del Certificado de Dosaje Etílico N° 000959, de fecha 18 de junio de 2016, se acredita que el imputado LUIS JAVIER VALLEJOS conducía su vehículo sin presentar alcohol en la sangre; (folios 138).

- Del Acta redactada por el Juez de Paz de Única Nominación de Quinden Bajo, a solicitud de MANUEL NATIVIDAD DEZA BARDALES, en el cual éste narra la forma y circunstancias en que tomó conocimiento del suceso de tránsito, precisándose que "(...) en la mencionada curva el ómnibus invade el carril contrario y al percatarse de la presencia del camión de placa de rodaje N° D4L-903, de color blanco con azul, que venía en su carril (de norte a sur), el ómnibus disminuyó su velocidad, logrando meterse nuevamente a su carril, ocasionando con esto que el señor Jorge Luiz Deza Bardales, para no chocar con la parte trasera del ómnibus y con el cerro, gire a la izquierda, quedando en la línea del medio, no advirtiendo que el camión apareciera en ese instante, debido a que el ómnibus no le permitió observar por su gran tamaño, provocando que el conductor de la motocicleta choque contra la grada de la puerta del camión, (...)" (folios 453 a 454).

- De la declaración Testimonial de LUIS MIGUEL UGAZ COTRINA, quien informó del momento de su intervención y de lo manifestado por el imputado, en el sentido de que el conductor de la moto lineal invadió el carril del conductor del camión y a la vez impactó con este; (folios 1011 a 1014).

- De la declaración Testimonial de JOSEMARÍA ROLANDO VEGA LÓPEZ, quien informó del momento de su intervención y de lo

manifestado por el imputado, en el sentido de que el conductor de la moto lineal invadió el carril del conductor del camión y a la vez impactó con este; (folios 1016 a 1018).

- De la declaración ampliatoria en sede fiscal del investigado LUIS JAVIER VALLEJOS, donde ratifica su declaración en sede policial, así como precisa que el omnibus que no identificó se habría desplazado aproximadamente a 60 kilómetros por hora, así como que pudo ver que el vehículo menor rosó con la carrocería del ómnibus y luego impactó en el estribo del vehículo mayor (camión); (folios 1048 a 1051).

- De la Declaración testimonial en sede fiscal de JUAN QUIROZ MORI, Presidente de la Rinda Campesina de Quinden - Terlen, quien ratifica y precisa que a las 07:05h ya se había suscitado el accidente de tránsito; (folios 1068 a 1071).

- De la Declaración Testimonial en sede fiscal de MANUEL NATIVIDAD DEZA BARDALES, quien precisó que puso de conocimiento al Juez de Paz de Única Nominación de Quinden Bajo respecto del suceso de tránsito en el cual resultó lesionado su hermano, lo que tomó conocimiento del sus vecinos; (folios 1091 a 1093).

- De la Opinión Técnica N° 001-2017- IIMRLAC/REGPOL-CA)/DIVPOS-DEPTRAM-UIAT (de fecha 05 de Febrero de 2017), en el cual se precisa los artículos pertinentes del Reglamento Nacional de Tránsito, en relación a la distancia obligatoria entre uno y otro vehículo así como de las prohibiciones para adelantar; (folios 1107 a 1112).

De todos estos elementos de convicción, se tiene que si bien el día 18 de junio de 2016, se produjo un suceso de tránsito - choque- del cual resultó con lesiones graves don JORGE LUIS DEZA BARDALES, también es cierto que dicho resultado no es atribuible al actuar de don LUIS JAVIER VALLEJOS, por cuanto éste en su tránsito por la carretera de penetración Ciudad de Dios - Cajamarca, a la altura del kilómetro 67 + 400, se desplazaba por su carril - lado derecho de la vía (de Este a Oeste), siendo que el conductor del vehículo menor invadió el carril de don LUIS JAVIER VALLEJOS (en adelante se determinará si esta invasión de carril fue como consecuencia del actuar negligente, imprudente y/o imperito de don Jorge Luis Deza Bardales o del tercer vehículo no identificado), chocando el motociclista con el estribo lateral izquierdo del camión, provocando su caída y como consecuencia de ello se ocasionó las lesiones graves que presentó, debiendo agregarse que el investigado contaba con la documentación idónea que lo habilitaba para conducir, así como no se



encontraba en estado de ebriedad.

b.- De lo cual se concluye que don **LUIS JAVIER VALLEJOS**:

- No ha sobrepasado los límites del deber de cuidado que exigen las normas de tránsito.

- Si bien es cierto, que por el hecho de realizar una actividad riesgosa, esto es conducir un bien peligroso (vehículo de placa de rodaje D4L - 903), generó un riesgo, también lo es que no lo ha incrementado con alguna acción, dolosa o culposa -por negligencia, imprudencia o impericia-, que haya sido predominante o haya contribuido en la causación del accidente y del resultado, lesiones graves en don **JORGE LUIS DEZA BARDALES**.

- El conductor que resultó lesionado violó lo previsto en el Decreto Supremo N° 016 - 2009 - MTC - Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito: Artículos: 90° (No circuló con cuidado y prevención), 92° (No guardó distancia suficiente entre el vehículo que conducía y el vehículo que lo precedía), 146° (Al conducir un vehículo menor debió circular por el carril de la derecha de manera ordenada y sin hacer maniobras, e hizo lo contrario), 161° (No redujo su velocidad al aproximarse una curva, y se encontró con un vehículo que circulaba en sentido contrario) y 171° (Intentó adelantar a otro vehículo, pese a que la visibilidad no lo permitía).

- El riesgo mencionado en estas circunstancias lo incrementó el propio lesionado al invadir el carril del conductor del camión, sin adoptar sus medidas de seguridad, siendo su actuar negligente e imprudente (al violar las normas antes precisadas), respecto del desplazamiento adecuado que realizaba don **LUIS JAVIER VALLEJOS**.

c.- Así las cosas, para la configuración del delito de Lesiones Culposas, se requiere que la conducta del imputado origine las lesiones, debiendo existir un nexo de causalidad entre la conducta culposa y el resultado. En el presente caso, dicho nexo no está presente en la conducta de **LUIS JAVIER VALLEJOS** respecto de las lesiones que presentó **JORGE LUIS DEZA BARDALES**, no resultando estas imputable objetivamente al investigado **LUIS JAVIER VALLEJOS**, por lo que corresponde archivar en este extremo.

2.- De la conducta atribuida al **TERCER CONDUCTOR NO IDENTIFICADO**:

a.- Respecto de éste conductor no identificado se cuenta con el dicho del investigado **LUIS JAVIER VALLEJOS**, quien refirió que se trataría de un vehículo de la Empresa de Transportes Días, quien habría hecho su tránsito por dicha zona en dirección de Oeste a Este. Que el conductor de éste vehículo transitando en sentido contrario al suyo, habría invadido su carril, obligándolo a frenar para detener el vehículo que conducía, lo que a su vez obligó al conductor del ómnibus que ingrese a su carril, y que en dichas circunstancias, en forma intempestiva, un motociclista (el hoy lesionado) que circulaba en el mismo sentido del bus, por no chocar con la parte posterior del bus, invadió su carril (del camión), ubicándose en la parte central de la vía (entre ambos vehículos - camión y ómnibus-), rozando la moto con la carrocería de la parte posterior lateral izquierda del ómnibus y luego impactó en el estribo izquierdo de su vehículo (camión), perdiendo el control de su vehículo -moto-, y cayendo dentro del carril derecho, sufriendo lesiones.

b.- De lo antes descrito, se deduce que la participación del conductor del vehículo no identificado, no fue determinante y tampoco contributiva en la producción del resultado -lesiones-, en el accidente de tránsito ocurrido el día 18 de junio de 2016, y para sostener ello se cuenta con los siguientes elementos de convicción:

- El Acta de Intervención Policial S/N-COMPRCAR-CHILETE, del cual se extrae que, si bien el conductor del ómnibus (no identificado) habría invadido el carril del imputado **LUIS JAVIER VALLEJOS**, pero luego habría realizado una maniobra a la cual estuvo obligado, esto es regresar a su carril, no pudiendo advertir desde su ubicación (ello se deduce al tratarse de la entrada a una curva y al ser un vehículo menor) que detrás había una moto lineal que se desplazaba muy cerca (bajo su riesgo), y que luego invadió el carril del conductor del camión, acción temeraria que realizó sin advertir que al no guardar distancia prudencial del ómnibus podía chocar con la parte posterior del vehículo que lo antecedía, así como no advirtió que al invadir el carril contrario podría encontrarse con otro vehículo, tal y como efectivamente ocurrió, esto es, chocó su vehículo menor en el estribo lateral izquierdo del vehículo mayor (camión), y como consecuencia cayó al pavimento, produciéndose las lesiones que presenta; (folios 02).

- El Acta de Inspección Técnico Policial, efectuada por personal de la Comisaría PNP de El Salitre, se tiene que el: a) Factor Predominante la actitud imprudente del conductor de la UT2 (motocicleta) al invadir ligeramente el carril contrario al tratar de adelantar a la UT3 (bus de la empresa Días no identificada, sin tener en cuenta la configuración de la



vía; b) Factor contributivo la actitud imprudente del conductor de la Unidad UT2; (folios 06 a 07).

– De la declaración en sede policial de LUIS JAVIER VALLEJOS, que precisó que el motociclista invadió su carril, intentando sobrepasar a un ómnibus (indicó de la empresa de transportes Días) y en dicha circunstancia chocó contra su vehículo – camión así como rozó con la parte posterior lateral izquierda del ómnibus; (folios 13 a 15).

– Del Acta de Constatación emitida por JUAN QUIROZ MORI, en su condición de Presidente de la Ronda Campesina Quinden – Terlen, se advierte que se deja constancia de la hora en que tomó conocimiento del suceso de tránsito (07:05h) y de la forma en que se habría producido; (folios 59).

– Del Acta redactada por el Juez de Paz de Única Nominación de Quinden Bajo, a solicitud de MANUEL NATIVIDAD DEZA BARDALES, en el cual éste narra la forma y circunstancias en que tomó conocimiento del suceso de tránsito, precisándose que "(...) en la mencionada curva el ómnibus invade el carril contrario y al percatarse de la presencia del camión de placa de rodaje N° D4L-903, de color blanco con azul, que venía en su carril (de norte a sur), el ómnibus disminuyó su velocidad, logrando meterse nuevamente a su carril, ocasionando con esto que el señor Jorge Luis Deza Bardales, para no chocar con la parte trasera del ómnibus y con el cerro, gire a la izquierda, quedando en la línea del medio, no advirtiendo que el camión apareciera en ese instante, debido a que el ómnibus no le permitió observar por su gran tamaño, provocando que el conductor de la motocicleta choque contra la grada de la puerta del camión, (...)" (folios 453 a 454).

– De la declaración Testimonial de LUIS MIGUEL UGAZ COTRINA, quien informó del momento de su intervención y de lo manifestado por el imputado, en el sentido de que el conductor de la moto lineal invadió el carril del conductor del camión y a la vez impactó con este; (folios 1011 a 1014).

– De la declaración Testimonial de JOSEMARÍA ROLANDO VEGA LÓPEZ, quien informó del momento de su intervención y de lo manifestado por el imputado, en el sentido de que el conductor de la moto lineal invadió el carril del conductor del camión y a la vez impactó con este; (folios 1016 a 1018).

– De la declaración ampliatoria en sede fiscal del investigado LUIS

*[Firma]*  
Javier Vallejos  
Fiscal de la Ronda Campesina  
Quinden - Terlen

JAVIER VALLEJOS, donde ratifica su declaración en sede policial, así como precisa que el ómnibus que no identificó se habría desplazado aproximadamente a 60 kilómetros por hora, así como que pudo ver que el vehículo menor rozó con la carrocería del ómnibus y luego impactó en el estribo del vehículo mayor (camión); (folios 1048 a 1051).

– De la Declaración testimonial en sede fiscal de JUAN QUIROZ MORI, Presidente de la Ronda Campesina de Quinden – Terlen, quien ratifica y precisa que a las 07:05h ya se había suscitado el accidente de tránsito; (folios 1068 a 1071).

– De la Declaración Testimonial en sede fiscal de MANUEL NATIVIDAD DEZA BARDALES, quien precisó que puso de conocimiento al Juez de Paz de Única Nominación de Quinden Bajo respecto del suceso de tránsito en el cual resultó lesionado su hermano, y que tomó conocimiento de las circunstancias por comentarios de sus vecinos; (folios 1091 a 1093).

– De la Opinión Técnica N° 001-2017- IIMRLAC/REGPOL-CAJ/DIVPOS-DEPTRAM-LUIAT (de fecha 05 de Febrero de 2017), en el cual se precisa los artículos pertinentes del Reglamento Nacional de Tránsito, en relación a la distancia obligatoria entre uno y otro vehículo así como de las prohibiciones para adelantar; (folios 1107 a 1112).

De todos estos elementos de convicción, se tiene que si bien el día 18 de junio de 2016, se produjo un suceso de tránsito – choque- del cual resultó con lesiones graves don JORGE LUIS DEZA BARDALES, también es cierto que dicho resultado no sería atribuible al actuar del TERCERO NO IDENTIFICADO, por cuanto éste antecedió al vehículo menor (por versión del imputado), y que si bien habría invadido el carril del conductor del camión, sin embargo luego ocupó su carril (en dicho actuar habría generado un riesgo para el conductor del camión), y que en todo caso, el que debió guardar la distancia necesaria (por las condiciones de la vía) para que el vehículo que lo precedía realice la maniobra que realizó, era precisamente don JORGE LUIS DEZA BARDALES, acción que no realizó, pues al no conservar su distancia con el vehículo que lo precedía (ómnibus), se vio obligado a realizar acciones que de algún modo eviten que resulte lesionado (impacto contra el ómnibus), optando por abrirse al carril contrario, pero sin prever también que por éste circulaba otro vehículo (camión) con el cual chocó en el estribo lateral izquierdo, provocando su caída y como consecuencia de ello las lesiones graves que presentó.

c.- De lo cual se concluye que el TERCER CONDUCTOR NO

*[Firma]*  
Jorge Luis Deza Bardales  
Fiscal de la Ronda Campesina  
Quinden - Terlen



#### IDENTIFICADO:

- No sobrepasó los límites del deber de cuidado que exigen las normas de tránsito en relación al conductor del vehículo menor.

- Si bien es cierto, que por el hecho de realizar una actividad riesgosa, esto es conducir un bien peligroso (vehículo no identificado), generó un riesgo (potencial para el conductor del camión por las maniobras que realizó), también lo es que por la forma como se han registrado los hechos y que están plasmados en los actuados, no se advierte que lo haya incrementado con alguna acción, dolosa o culposa -por negligencia, imprudencia o impericia-, que haya sido predominante o contributiva en la causación del accidente y por ende del resultado, esto es las lesiones graves que presentó don JORGE LUIS DEZA BARDALES.

- El riesgo mencionado, en estas circunstancias, lo incrementó el propio lesionado al no guardar la distancia prudencial del vehículo que lo precedía (ómnibus) así como al invadir el carril del conductor del camión, sin adoptar sus medidas de seguridad, siendo su actuar negligente e imprudente, respecto del desplazamiento adecuado que realizaba don LUIS JAVIER VALLEJOS.

- El conductor que resultó lesionado violó lo previsto en el Decreto Supremo N° 016 - 2009 - MTC - Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito: Artículos: 90° (No circuló con cuidado y prevención), 92° (No guardó distancia suficiente entre el vehículo que conducía y el vehículo que lo precedía), 146° (Al conducir un vehículo menor debió circular por el carril de la derecha de manera ordenada y sin hacer maniobras, e hizo lo contrario), 161° (No redujo su velocidad al aproximarse una curva, y se encontró con un vehículo que circulaba en sentido contrario) y 171° (Intentó adelantar a otro vehículo, pese a que la visibilidad no lo permitía).

- Debe indicarse que si bien no se ha logrado identificar al tercer vehículo y a su conductor, que se precisa se habría desplazado por la vía al momento de producirse el suceso de tránsito, sin embargo conforme a los hechos suscitados (y que se encuentran plasmados en los actuados), no resulta necesaria su identificación en vista a lo analizado, al advertirse responsabilidad por negligencia o imprudencia en el conductor del vehículo menor.

- Por otro lado, no está demás precisar que siendo que el hecho se habría producido a las 07:00h aproximadamente o minutos antes

(porque a las 07:05h ya se había suscitado el accidente), por lógica y sentido común no podría ser el vehículo de Placa de Rodaje C5L-958 el que habría transitado a dicha hora por el lugar donde ocurrió el accidente (la parte agravada si lo considera), puesto que éste hizo su tránsito por el peaje de Ciudad de Dios a las 06:43:44h (folios 991), y teniendo en cuenta la diligencia realizada (folios 1145) el tránsito desde dicho peaje hasta el lugar del suceso de tránsito un vehículo ómnibus en su desplazamiento normal lo recorre en una 01 hora con 12 minutos aproximadamente.

d.- Así las cosas, para la configuración del delito de Lesiones Culposas, se requiere que la conducta del imputado origine las lesiones, debiendo existir un nexo de causalidad entre la conducta culposa y el resultado. En el presente caso, dicho nexo no está presente en la conducta de DEL CHOFE NO IDENTIFICADO respecto de las lesiones que presentó JORGE LUIS DEZA BARDALES, no resultando estas imputable objetivamente al CONDUCTOR (que a la fecha no se ha identificado plenamente), por lo que corresponde archivar también en este extremo.

**SEXO.-** En consecuencia, el resultado -lesiones graves en el motociclista- no se le puede atribuir a LUIS JAVIER VALLEJOS ni al TERCER CONDUCTOR NO IDENTIFICADO, debido a que las lesiones son resultado del propio actuar imprudente y negligente del conductor JORGE LUIS DEZA BARDALES, lo cual fue el factor predominante y contributivo en el suceso de tránsito (conforme se precisa en el Acta de Inspección Técnico Policial, obrante a folios 06 a 07); por lo que ante la carencia de los elementos de tipicidad objetiva del delito de Lesiones Culposas -artículo 124° del Código Penal-, "causar daño en el cuerpo o en la salud por culpa-negligencia, imprudencia o impericia-", de conformidad con el artículo 334° numeral 1 del Código Procesal Penal, debe procederse a archivar lo actuado.

**SÉTIMO:** Finalmente, se debe tener en cuenta que:

1.- El representante del Ministerio Público tiene que convertirse en un gestor y filtro de casos, y determinar desde el nivel inicial qué casos deben ser amparados por el Derecho Penal, qué hechos puede considerarse criminal y que amerite la intervención de la Justicia Penal en concreto, así como cuáles deben ser tramitados en otras vías. En ese sentido, si bien es cierto la persecución del delito corresponde al Ministerio Público, por ser el titular del ejercicio público de la acción penal, conforme prescribe el artículo IV inciso 1, del Título Preliminar del Código Procesal Penal concordante con el artículo 159° de la Constitución Política del Estado, también lo es, que el ejercicio de la acción penal, se encuentra condicionado al cumplimiento o

existencia previa de requisitos y elementos de convicción mínimos, que justifiquen el ejercicio de la acción penal.

2.- Por lo que, en el presente caso, al no cumplirse con los presupuestos establecidos por el artículo 336° inciso 1 del Código Procesal Penal para proceder a formalizar y continuar con la Investigación Preparatoria, y en concordancia con lo dispuesto por el artículo 334° numeral 1, resulta imperativo archivar la presente investigación.

**DECISIÓN:** Por lo expuesto, y de conformidad con lo establecido en el inciso 1 del artículo 334° del Código Procesal Penal, **SE DISPONE QUE:**


1. **NO PROCEDE FORMALIZAR Y CONTINUAR CON LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA** contra **LUIS JAVIER VALLEJOS Y EL QUE RESULTE RESPONSABLE**, por la presunta comisión del delito Contra La vida, el Cuerpo y la Salud en la modalidad de **LESIONES CULPOSAS** (previsto y sancionado en el artículo 124° del Código Penal), en agravio de **JORGE LUIS DEZA BARDALES**.

2.- **PROCÉDASE** al archivo de lo actuado, consentida o ejecutoriada que sea la presente.

3.- **HÁGASE SABER** a la parte que se considere agraviada que la presente Disposición puede ser recurrida ante el Fiscal Superior en el plazo de cinco días contados desde el día siguiente de su notificación, según lo prescrito en el artículo 334° numeral 5 del Código Procesal Penal.

4.- Al escrito presentado por la defensa de la parte agraviada: En cuanto solicita declarar complejo el proceso: Debe indicarse que conforme a lo previsto en el artículo 342° numeral 3 del Código Procesal Penal, en el presente caso no se han dado las condiciones procesales como para declarar complejo el proceso, máxime si ya se contaba con suficientes elementos de convicción, los mismos que han servido de base para emitir la presente disposición de no haber lugar a formalizar investigación preparatoria; en consecuencia: **ESTÉSE** a lo dispuesto en la presente disposición. En cuanto a la presunta comisión de delitos que ha denunciado: Estos ya son materia de una nueva investigación, la cual se viene ventilando en este despacho en la Carpeta Fiscal N° 059-2017, por lo que: **ESTÉSE** a lo dispuesto en la presente disposición.

5.- **NOTIFÍQUESE.**

  
Fiscal Delegado Criminal  
Fiscal Adjunto Provincial  
Fiscal Provincial de Tránsito  
Ministerio Público - Guayaquil



**DISPOSICIÓN N° 110-2017-MP-SFSP-C**

**Carpeta Fiscal N°** : 1705046102-2016-112-0  
**Procedencia** : Fiscalía Provincial Mixta de Yonan-Tembladera  
**Imputado (s)** : Luis Javier Vallejos  
**Agraviado** : Jorge Luis Deza Bardales  
**Delito** : Lesiones culposas.

Cajamarca, veinticuatro de mayo del año dos mil diecisiete.

**I. ASUNTO.**

Recurso de Queja, interpuesto por María Isabel Deza Bardales, contra la Disposición N° 05-2017-MP-FPMYT, de fecha 10 de abril de 2017, expedida por la Fiscal Yesica Milagros Gómez Malca, de la Fiscalía Provincial Mixta de Yonan-Tembladera, mediante la cual dispone no formalizar y continuar con la Investigación Preparatoria, contra Luis Javier Vallejos, por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en su modalidad de Lesiones culposas, en agravio de Jorge Luis Deza Bardales.

**II. ANTECEDENTES.**

1. Con fecha 20 de junio del 2016, el SO SUP.-PNP, Reynaldo A. Vigo Cabanillas, comisario del Salitre, mediante el Oficio N° 163-2016-REGPOL-CAJ-TEM/CPNP-EL SALITRE "D", remite los actuados preliminares que dieron origen a la presente investigación a la Fiscalía Provincial Mixta de Yonan-Tembladera.
2. Con fecha 21 de junio del 2016, el fiscal provincial Tito Gerardo Sirlopú Garcés, de la Fiscalía Provincial Mixta de Yonan-Tembladera, emite la Disposición Fiscal N° 01-2016-FMYT, que obra de folios 333 a 341, en la cual dispone aperturar las diligencias preliminares por el plazo de 60 días, contra Luis Javier Vallejos, por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en su modalidad de Lesiones culposas, en agravio de Jorge Luis Deza Bardales.
3. Con fecha 26 de octubre del año dos 2016, el fiscal de la investigación, emite la





Disposición N° 02-2016-FMIYT, obrante de folios 298 a 328, mediante la cual dispone el archivo de los actuados; disposición que ha sido recurrida mediante recurso de elevación de actuados obrante a folios 407 a 430; y luego, mediante Disposición N° 272-2016-MP-SFSP-C de fecha 05 de diciembre de 2016 obrante a folios 964 a 980, este Despacho Superior, declaro nulo la recurrida, excluyó al Fiscal Provincial de la investigación y ordenó que se amplíe la investigación por el plazo excepcional de 60 días.

4. En fecha 02 de enero de 2017, la nueva Fiscal de la investigación, mediante Disposición N° 04-2017-MP-FPMYT obrante a folios 983 a 985, amplió la investigación, conforme a lo ordenado por este Despacho Superior, y luego en fecha 10 de abril de 2017, mediante Disposición N° 05-2017-MP-FPMYT obrante a folios 1246 a 1274, dispone el archivamiento de los actuados, disposición que también es recurrida por María Isabel Deza Bardales, conforme al recurso de elevación de actuados presentado el 04 de mayo de 2017 obrante a folios 1276 a 1308, y que es materia de pronunciamiento por esta Instancia Superior.

### III. HECHOS IMPUTADOS.

Se atribuye al investigado Luis Javier Vallejos, haber causado lesiones culposas (teniendo en cuenta el diagnóstico consignado en el Oficio N° 192-16-REG-CAJ/DRSC/HCH, que refiere a Traumatismo Torácico Cerrado, la cual por ser una lesión grave requiere treinta o más días de asistencia o descanso, según prescripción facultativa), a Jorge Luis Deza Bardales, en accidente de tránsito que *-conforme al Acta de Intervención Policial-*, se produjo el 18 de junio del año 2016, cuando se dirigía de Cajamarca a Lima, con su vehículo camión de placa de rodaje D4L903 (M1), colisionó con una moto lineal que era conducido por el lesionado Jorge Luis Deza Bardales, quien se dirigía de Tembladera a Quindén Bajo, generándose lesiones al último; tal hecho se suscitó a la altura del kilómetro 67 + 400 (una curva) de la carretera Ciudad de Dios – Cajamarca - Ciudad de Dios, exactamente en el caserío de Quinden, distrito El Prado - San Miguel - Cajamarca; hechos que son materia de investigación con la finalidad de determinar si existe o no la comisión del delito establecido en el artículo 124° del Código Penal (*"El que por culpa causa a otro un*





daño en el cuerpo o en la salud, será reprimido por (...). La pena será privativa de libertad no menor de uno ni mayor de dos años y de sesenta a ciento veinte días-multa, si la lesión es grave, de conformidad a los presupuestos establecidos en el artículo 121<sup>o</sup>(...)", concordante con el artículo 121° del mismo cuerpo de Leyes: ("Artículo 121.- Lesiones graves.- "(...) Se consideran lesiones graves: (...) 2.- Las que hacen impropio un órgano para su función, causan a una persona incapacidad para el trabajo, invalidez (...): 3.- Las que infieren cualquier otro daño a la integridad corporal o la salud física (...) de una persona que requiera treinta o más días de asistencia o descanso, según prescripción facultativa (...)).")

#### IV. CALIFICACIÓN JURÍDICA.

Los hechos imputados han merecido, en sede fiscal, de acuerdo a la la Disposición Fiscal N° 01-2016-FMYT, que obra de folios 333 a 341, la calificación correspondiente al delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud, en sus modalidad de Lesiones Culposas.

#### V. PETITORIO.

El recurrente busca que el Superior Jerárquico revoque la Disposición impugnada, y disponga formalizar la Investigación Preparatoria, por la presunta comisión del delito Contra la Vida, el Cuerpo y la Salud, en sus modalidad de Lesiones Culposas, en agravio de Jorge Luis Deza Bardales.

#### VI. FUNDAMENTOS DE LA DISPOSICIÓN OBJETO DEL RECURSO DE ELEVACIÓN.

El Fiscal de la investigación, sostiene que:

1. El análisis de los hechos se delimita en "*Determinar si en la producción del resultado – Lesiones Graves en el cuerpo de JORGE LUIS DEZA BARDALES – don LUIS JAVIER VALLEJOS, en su actuar como conductor, infraccionó o no el deber de cuidado mediante acciones de negligencia, impericia o imprudencia; y Determinar si para la producción del resultado – Lesiones Graves en el cuerpo de don JORGE LUIS DEZA BARDALES – un tercero no identificado, en su actuar como conductor infraccionó o no el deber de cuidado mediante acciones de negligencia, impericia o imprudencia.*

<sup>1</sup> Artículo modificado por el Artículo único del Decreto Legislativo N° 1237, publicado el 26 septiembre 2015).



2. El suceso de tránsito en el que resultó con lesiones graves don Jorge Luis Deza Bardales, no es atribuible a Luis Javier Vallejos, por cuanto éste en su tránsito se desplazaba por su carril, siendo que el vehículo menor invadió el carril de Luis Javier Vallejos, chocando el motociclista en el estribo lateral izquierdo del camión, provocando su caída y como consecuencia de ello se ocasionó las lesiones graves que presentó. El investigado, contaba con la documentación idónea que lo habilitaba para conducir y no se encontraba en estado de ebriedad.
3. El investigado Luis Javier Vallejos, no sobrepaso los límites del deber de cuidado que exigen las normas de tránsito. Condujo un bien peligroso que generó un riesgo pero no lo ha incrementado con alguna acción dolosa o culposa –por negligencia, imprudencia o impericia-, que haya sido predominante o haya contribuido en la causación del accidente y del resultado, (lesiones graves en Jorge Luis Deza Bardales).
4. El conductor que resultó lesionado, violó las normas de tránsito (no circuló con cuidado y prevención, no guardó distancia suficiente entre el vehículo que conducía y el vehículo que lo precedía, debió circular por el carril de la derecha de manera ordenada y sin maniobras, e hizo lo contrario, no redujo su velocidad al aproximarse una curva y se encontró con un vehículo que circulaba en sentido contrario, intentó adelantar a otro vehículo, pese a que la visibilidad no lo permitía.
5. El riesgo mencionado en estas circunstancias lo incrementó el propio lesionado al invadir el carril del conductor del camión, sin adoptar sus medidas de seguridad, siendo su actuar negligente e imprudente al violar las normas tránsito, respecto del desplazamiento adecuado que realizaba Luis Javier Vallejos.
6. Para la configuración del delito de Lesiones culposas, se requiere que la conducta del imputado origine las lesiones, debiendo existir una nexa de causalidad, dicho nexa no está presente en la conducta del Luis Javier Vallejos respecto de las lesiones que presentó Jorge Luis Deza Bardales, no resultando estas imputable objetivamente al investigado Luis Javier Vallejos, por lo que corresponde archivar en este extremo.
7. De la conducta atribuida al tercer conductor no identificado. Se cuenta con la versión del investigado LUIS JAVIER VALLEJOS, que evidencia que la participación del conductor del vehículo no identificado, no fue determinante y tampoco contributiva en





la producción del resultado – lesiones-, en el accidente de tránsito ocurrido el día 18 de junio de 2016, por cuanto de todos los elementos de convicción, se tiene que *“si bien el día 18 de junio de 2016, se produjo un suceso de tránsito – choque- del cual resultó con lesiones graves don JORGE LUIS DEZA BARDALES, también es cierto que dicho resultado no sería atribuible al actuar del TERCERO NO IDENTIFICADO, por cuanto éste antecedia al vehículo menor (por versión del imputado), y que si bien habría invadido el carril del conductor del camión, sin embargo, sin embargo luego ocupó su carril (en dicho actuar habría generado un riesgo para el conductor del camión), y que en todo caso, el que debió guardar la distancia necesaria (por las condiciones de la vía) para que el vehículo que lo precedía realice la maniobra que realizó, era precisamente don JORGE LUIS DEZA BARDALES, acción que no realizó, pues al no conservar su distancia con el vehículo que lo precedía (ómnibus), se vio obligado a realizar acciones que de algún modo eviten que resulte lesionado (impacto contra el ómnibus), optando por abrirse al carril contrario, pero sin prever también que por éste circulaba otro vehículo (camión) con el cual chocó en el estibo lateral izquierdo, provocando su caída y como consecuencia de ello las lesiones graves que presentó”*; concluyendo que el tercer conductor no identificado no sobrepasó el deber del cuidado que exigen las normas de tránsito en relación al conductor del vehículo menor. Condujo un bien peligroso que generó un riesgo pero no lo ha incrementado con alguna acción dolosa o culposa –por negligencia, imprudencia o impericia-, que haya sido predominante o haya contribuido en la causación del accidente y del resultado, (lesiones graves en Jorge Luis Deza Bardales). El riesgo mencionado lo incrementó el propio lesionado al no guardar la distancia prudencial del vehículo que lo precedía (ómnibus) e invadir el carril del conductor del camión, sin adoptar sus medidas de seguridad, siendo su actuar negligente e imprudente, respecto del desplazamiento adecuado que realizaba Luis Javier Vallejos.

8. El conductor que resultó lesionado, violó las normas de tránsito (no circuló con cuidado y prevención, no guardó distancia suficiente entre el vehículo que conducía y el vehículo que lo precedía, debió circular por el carril de la derecha de manera ordenada y sin maniobras, e hizo lo contrario, no redujo su velocidad al aproximarse una curva y se encontró con un vehículo que circulaba en sentido contrario, intentó adelantar a otro vehículo, pese a que la visibilidad no lo permitía).
9. Si bien no se ha logrado identificar al tercer vehículo y a su conductor, que se precisa se habría desplazado por la vía al momento de producirse el suceso de tránsito, sin embargo, conforme a los hechos suscitados, no resulta necesaria su identificación en





vista a lo analizado, al advertirse responsabilidad por negligencia o imprudencia en el conductor del vehículo menor.

10. Siendo que el hechos se habría producido a las 07:00 h aproximadamente o minutos antes, por lógica y sentido común no podría ser el vehículo de Placa de Rodaje C5L-958 el que habría transitado a dicha hora por el lugar donde ocurrió el accidente -como lo considera la parte agraviada-, puesto que éste hizo su transito por el peaje de Ciudad de Dios a las 06:43:44h y teniendo en cuenta la diligencia realizada (recorrido de distancia entre peaje y el lugar del suceso de tránsito), el tránsito desde dicho peaje hasta el lugar del suceso de tránsito un vehículo ómnibus en su desplazamiento normal lo recorre en 01 hora con 12 minutos aproximadamente.

## VII. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE ELEVACIÓN DE ACTUADOS.

El recurrente fundamenta su recurso en lo siguiente:

1. Que, no se trata de un tercero no identificado sino, todo lo contrario, que el tercero está plenamente identificado y es el señor **LUCIO RONAL DÍAZ PABLO**, quien el día del accidente conducía el vehículo de placa de rodaje N° C5L-958, de propiedad de la empresa DIAS S.A., tal como consta del manifiesto de pasajeros de fecha 17 de junio de 2016, manifiesto no ha sido tomado en cuenta por la Fiscal.
2. Del texto original de la declaración a nivel policial de **LUIS JAVIER VALLEJOS**, se lee que el ómnibus de la empresa de transportes Días S.A. **HABÍA INVADIDO EL CARRIL POR DONDE TRANSITABA EL CAMIÓN**. Del cual, la Fiscal desprendió el verbo "haber", para hacerlo parecer como una posibilidad y no como un hecho concreto.
3. la Fiscal no solo justifica la maniobra imprudente y temeraria de don **LUCIO RONAL DÍAZ PABLO**, sino, también, retorcidamente atribuye a la víctima.
4. El testimonio escrito de la señora Gissella Margoth Ortiz Deza no ha sido considerado mínimamente por la Fiscal para el esclarecimiento de los hechos.



5. La participación del conductor - **LUCIO RONAL DÍAZ PABLO**- si fue determinante y contributiva en la producción del resultado -lesiones graves- en el accidente de tránsito ocurrido el 18 de junio de 2016.
6. El archivo –por segunda vez- se ha basado solamente en elementos que fueron tomados por el fiscal excluido quien también archivo el caso.
7. Tenemos la certeza que la hora no está determinada, pues, de las declaraciones testimoniales recibidas todos han dado horas distintas, incluso hay declaraciones que el accidente se habría suscitado a las 07:30 aproximadamente. Más aún, si el señor **ROBERTO ALBERTO CASTOPE BRIONES**, en su declaración, indica que el tiempo que se emplea desde el peaje de la ciudad de Dios a Quinden es de aproximadamente 1 hora, pues todo depende de la velocidad con la que ha transitado dicho bus, y ello solo se puede determinar con el informe del GPS sobre dicho vehículo, informe que no obra en la carpeta fiscal.
8. La Fiscal no cumplido plenamente con investigar sus propias disposiciones, como: La declaración de Lucio Amílcar Méndez torres; No se ha remitido el informe de GPS del vehículo de placa N° C5L-958; la declaración de JUAN PELE MARCELO CONTRERAS y de ERMOGENES OCAS ZELADA.
9. No se ha realizado diligencias peticionadas de parte, como: la declaración de Gissella Margoth Ortiz Deza.

## VIII. ANÁLISIS DE LA CONTROVERSIA.

### Identificación del problema a resolver.

1. Conforme al análisis de los actuados, y los argumentos expuestos por el recurrente y la naturaleza del delito, corresponde revisar los elementos de investigación conducentes a determinar la forma y circunstancias del hecho, esto es, *si el investigado Luis Javier Vallejos o un tercero -como conductor-, infraccionó o no el deber de cuidado por negligencia, impericia o imprudencia, para producir las lesiones graves sufridas por Jorge Luis Deza Bardales en el accidente de tránsito*, por tanto, la comisión o no del delito de lesiones culposas y la responsabilidad del denunciado Luis Javier Vallejos u otros.



### Imputación concreta.

2. Se imputa a Luis Javier Vallejos, el delito de Lesiones culposas, por cuanto el día 18 de junio del año 2016, cuando se dirigía de Cajamarca a Lima, con su vehículo (camión de placa de rodaje D4L903 (M1)) colisionó con una moto lineal que era conducido por el hoy lesionado Jorge Luis Deza Bardales, quien se dirigía de Tembladera a Quindén Bajo, generándose lesiones al último, tal hecho se suscitó a la altura del kilómetro 67 + 400 (una curva) de la carretera Ciudad de Dios – Cajamarca - Ciudad de Dios, exactamente en el caserío de Quinden, distrito El Prado-San Miguel-Cajamarca.

### Contaminación de la escena de los hechos.

3. De los actuados aparece la declaración de **Luis Miguel Ugaz Cotrina** (efectivo policial interviniente, ver folios 1011 1013) que señala *“que la moto lo había recogido un familiar (...) cuando llegamos ya no estuvo el mencionado en la vía, la moto tampoco la encontramos”*; **José María Rolando Vega López** (efectivo policial interviniente, ver folios 1016 a 1018) que señala *“presente en el lugar en mención, nos encontramos con un grupo de personas, y entre ellas una señora que dijo ser familiar del lesionado (...) y que la moto lo había recogido un familiar sin precisar qué familiar”*; y precisa *“el vehículo menor no se encontró en la vía y que por referencia de las personas que estaban en la zona lo había llevado unos familiares”*; **Fernando Alayo Quispe** (ver folios 1073 a 1076) señala *“que cuando yo he llegado a las 07:40h aproximadamente no había la moto, luego ya me dijeron que los vecinos lo habían llevado a la casa de mi suegra, y ésta me comentó que las personas que lo trajeron no las pudo identificar”*; **María Isabel Deza Bardales** (ver folios 1988 a 1090) señala que *“ese día del accidente yo sólo me interesé en mi hermano, ya posteriormente mi mamá me dice que unos vecinos que no han identificado llegaron a la casa y dejaron la moto”*; **Manuel Natividad Deza Bardales** (ver folios 1091 a 1093) declara que *“ese día del accidente yo sólo me interesé en saber cómo estaba mi hermano, ya posteriormente mi mamá nos ha contado que unos vecinos que no ha identificado llegaron a la casa y dejaron la moto”*; declaraciones que advierten el retiro de la motocicleta (unidad interviniente que conducía el lesionado Jorge Luis Deza Bardales), con el que no solo e produjo la contaminación de la escena de los hechos, sino que se ha viciado el manejo de ella (ruptura de la cadena de custodia). Tal es así que la **“Opinión Técnica N° 001-2017-IIMRLAC/REGPOL-CAJ/DIVPOS-DEPTRAN-UIAT”** de fecha 05 de febrero de 2017 expedido por el departamento de tránsito de la Policía Nacional del Perú – Cajamarca que



obra a folios 1207 a 1112, que concluye que *"no se encontraron suficientes elementos que ayuden a la elaboración de un Dictamen Pericial debido a lo extemporáneo de la comunicación y de que el personal PNP interviniente en primera instancia no consignó y fijó las evidencias encontradas en el lugar de los hechos, así como la ausencia de los peritajes de constatación de daños materiales y funcionamiento de las unidades participantes, motivo por los cuales no se puede realizar un Dictamen Pericial del presente accidente de tránsito"*; documento, que no solo desvirtúa la posibilidad de obtener una explicación técnica científica respecto a la forma y circunstancias del accidente de tránsito sino a la vez, concluye que no se puede realizar un Dictamen Pericial del presente accidente de tránsito, -por circunstancias entre otras- **la ausencia de los peritajes de constatación de daños materiales y funcionamiento de las unidades participantes**, entre ellas -la motocicleta que conducía el lesionado Jorge Luis Deza Bardales-, que como se ha explicado, ha sido retirado de la escena de los hechos por personas que no se pudo identificar, incluso antes que el personal policial llegue al lugar de los hechos. En ese contexto, cabe el análisis de los primeros actuados, tales como documentales, testimoniales entre otros, que adviertan una explicación razonablemente la forma y circunstancias de los hechos, y si corresponde, establecer la responsabilidad penal del investigado u otro tercero.

#### **Análisis de los elementos de investigación conducentes a la determinación de la forma y circunstancias del hecho.**

4. A folios 02 aparece el **Acta de Intervención Policial** s/n COMPRCAR-(PNPCH), elemento de investigación donde se describe la forma y circunstancias del accidente de tránsito del siguiente modo: *"a horas 08:08 del día 18 de junio de 2016, por información de usuarios de la vía (...) nos constituimos al lugar (...) por versiones conductor Sr. VALLEJOS Luis Javier conductor de la M1 (camión), éste se dirigía hacia Lima por su carril, siendo el caso que a la altura del kilómetro 67-400 aprox., se percató que un bus de la empresa DIAS de la cual se desconoce su placa de rodaje por el carril contrario con dirección hacia Cajamarca había invadido carril ingresando a la curva y al percatarse de la presencia de la M1 ocupó su carril en circunstancias que la M2 venía atrás del bus M2 (motocicleta) intentó sobrepasarlo al bus invadiendo carril contrario impactando contra el M1 por la parte lateral"*; ésta descripción primigenia de los hechos efectuado por la autoridad policial y con participación del testigo presencial e imputado Luis Javier Vallejos, evidencia que la M2 motocicleta conducida por el lesionado Jorge Luis Deza Bardales, intentó sobrepasar al bus invadiendo carril contrario impactando contra el M1 (camión conducido por el imputado



Luis Javier Vallejos).

5. Asimismo, el **Acta de Inspección Técnico Policial** que obra a folios 06 y 07, donde se identifica a las unidades participantes: **UT1** (D4L-903) conducido por Luis Javier Vallejos, **UT2** (motocicleta lineal) conducido por Jorge Luis Deza Bardales y **UT3** (Bus empresa Días - no identificado), advierte las siguientes evidencias en el lugar del accidente de tránsito: *"-Manchas de sangre de color pardo rojizas de aproximado 1 metro en línea recta. -Se aprecia huellas de frenada por parte de la UT1 (D4L-903)";* y con referencia a los factores intervinientes aparece: *"a) Factor predominante: La actitud imprudente del conductor de la UT2 (motocicleta) al invadir ligeramente el carril contrario al tratar de adelantar a la UT3 (bus de la empresa días) no identificada, sin tener en cuenta la configuración de la vía". b) Factor contributivo: La actitud imprudente del conductor de la Unidad UT2"*. En conclusión, éste documento advierte que el único vehículo que frenó en el lugar del accidente de tránsito, ha sido el camión UT1, conducido por Luis Javier Vallejos, por tanto, se evidencia que **el ómnibus UT3 de la empresa de transportes Días y la motocicleta UT1, no han frenado en el lugar del accidente de tránsito;** por tanto, el ómnibus de la empresa de transportes Días y la motocicleta conducida por el lesionado Jorge Luis Deza Bardales, -conforme a dicho documento-, no han frenado al momento del accidente de tránsito; circunstancia objetivamente acreditada con el referido documento y elaborada por la autoridad policial, que evidencia a nivel indiciario (por cuanto como ha quedado establecido, en el presente caso no existe la posibilidad de efectuar un Dictamen Pericial respecto al accidente de tránsito), que los conductores de ambas unidades, estaban en posibilidades de conducir sus vehículos a una velocidad regular una atrás de otra, por ende, la posibilidad de que la unidad que iba atrás *-en el presente caso la motocicleta-*, tenga la prudencia y diligencia necesaria para ubicarse a una distancia de la unidad que iba adelante *-en el presente caso, el ómnibus de la empresa de transportes Días-*, en consecuencia, quien iba atrás (en este caso la motocicleta), mantenga la distancia debida, conforme a las normas de tránsito<sup>2</sup>; sin embargo, en el presente caso, como ya se advirtió -conforme a la documentales analizadas-, la motocicleta intentó adelantar al ómnibus, evidenciando, la conducta negligente e imprudente del lesionado Jorge Luis Deza Bardales, quien iba conduciendo su motocicleta detrás del ómnibus de la empresa de

<sup>2</sup> El Decreto Supremo N° 016-2009-MTC, Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito, en su artículo 92° señala: *"El conductor está obligado a conservar la distancia suficiente entre el vehículo que conduce el vehículo que lo precede, que le permita si se produce la detención de éste, una maniobra segura, teniendo en cuenta la velocidad y las condiciones de la vía. Asimismo, a dejar suficiente espacio respecto al vehículo que lo precede, para que el vehículo que lo adelante lo haga sin peligro"*



transportes Días.

6. Ahora, en este extremo, cabe el cuestionamiento respecto a la conclusión de que “la motocicleta conducida por el lesionado Jorge Luis Deza Bardales, no han frenado al momento del accidente de tránsito”, en razón a la declaración del efectivo policial interviniente Luis Miguel Ugaz Cotrina, quien en fecha 27 de enero de 2017 obrante a folios 1011 a 1013 dijo “*observé huellas de frenada sólo de un vehículo menor al parecer (...)/ observé fricción de una llanta delgada en la vía; sin embargo, esta declaración respecto a este detalle específico (frenada de vehículo menor), constituye una apreciación personal o como lo indica el misma declarante su parecer, que no ha sido perennizada en la escena de los hechos (accidente de tránsito), conforme se advierte de las fotografías que obran a folios 8 al 12, documentales que a la vez constituyen el sustento del Acta de Inspección Técnico Policial antes explicada.*

7. A folios 04 aparece el **Acta de Ocurrencia Policial**, donde también se narra el suceso de los hechos y corrobora la versión expuesta en los documentos anteriormente indicados con ciertas imprecisiones, por cuanto se indica que “*el herido (agraviado) a sufrido el evento cuando conducía su moto lineal y se había chocado con la empresa de transportes turismo DIAS y un tralier y que hasta el momento no se ha identificado a los conductores participantes del accidente de tránsito*”, sin embargo, éstas imprecisiones se justifican en diversos factores como: 1) el relato de los hechos que contiene dicho documento, ha sido obtenida como lo indica el mismo documento “por versión de moradores” que no están identificados, 2) el documento ha sido redactado en el Centro de Salud de Tembladera, lugar distinto donde se produjo el accidente de tránsito; y a consecuencia de estos factores, es que incluso en dicho documento se señala que “*no se ha identificado a ninguno de los conductores*” cuando desde un inicio ya se tenía identificado a Luis Javier Vallejos, conductor del camión D4L-903 (UT1).

8. Asimismo, a folios 13 a 15 obra la declaración del imputado **Luis Javier Vallejos**, (único testigo presencial de los hechos, como incluso lo señala la recurrente en su fundamento segundo de su recurso de elevación de actuados) quien el 19 de junio de 2016 declaró que “*en sentido contrario transitaba un ómnibus de la empresa Días, quien había invadido mi carril, obligándome una frenada para detener mi vehículo (...) el conductor del bus (...) ingresando nuevamente a su carril y en esas circunstancias en forma intempestiva un motociclista que circulaba en el mismo sentido del bus, por no chocar con la parte posterior del bus, invade mi carril, ubicándose en la*



parte central de la vía”, relato donde el imputado advierte que él ha frenado y no evidencia que el bus y la motocicleta hayan frenado al momento de haberse suscitado el accidente de tránsito. Cabe el cuestionamiento respecto a ésta declaración, en razón a que éste testigo posteriormente el 30 de enero de 2017 (ver folios 1048 a 1051), cuando se le pregunta ¿porque indicó a la policía de carreteras que el conductor de la moto “habría intentado sobrepasar al bus de la empresa Días?, declaró *“que no les dije en ese sentido, lo que dije es que pude ver en un momento determinado que el conductor de la moto lineal quedo conduciendo y tambaleando en medio de mi camión y del bus de la empresa Días”*; sin embargo ésta modificación de su versión inicial -por las máximas de la experiencia- se justifican por el tiempo transcurrido por más de siete meses, entre la primera declaración -19 de junio de 2016- con la segunda declaración -30 de enero de 2017-, tiempo que no solo generó el extremo de la modificación inicial ya advertida, sino incluso el olvido de circunstancias básicas como la hora del accidente de tránsito y otras circunstancias, así se evidencia de su declaración del 19 de junio de 2016, donde declaró que *“mi vehículo se encontraba detenido, y el vehículo de la empresa Días seguía su marcha”*, mientras que en su declaración del 30 de enero de 2017, cuando se le pregunta si el bus detuvo su marcha luego de producirse el suceso de tránsito, declara *“se habrá detenido por el lapso de un minuto aproximadamente, pude ver que abrió su puerta y luego prosiguió su marcha”*, a más, en su declaración del 30 de enero de 2017 declaró *“no recuerdo la hora, no podría precisar, pero ha sido en horas de la mañana”*. Estas circunstancias justifican la falta de uniformidad de la declaración inicial del investigado Luis Javier Vallejos, por tanto, no desvirtúan el contenido de sus declaraciones iniciales, máxime cuando dicha versión inicial de los hechos guardan conexión y coherencia con el contenido de las ocurrencias policiales ya expuestas.

9. Asimismo, a folios 1011 a 1013 aparece la declaración de **Luis Miguel Ugaz Cotrina** (efectivo policial interviniente que suscribe el acta antes aludido), quien en fecha 27 de enero de 2017, declaró que él redactó el acta y la firma que aparece en la misma le pertenece, refiriendo que LUIS JAVIER VALLEJOS, le informó que se había suscitado un accidente de tránsito indicando que *“la motocicleta venía detrás del bus y que intentó sobrepasarlo invadió su carril (en referencia al camión) y a la vez impactó con éste (camión) por la parte lateral izquierda (...) lo que el conductor del camión nos informó es que el motociclista impactó contra su camión*



en su parte lateral izquierda, *más no con el bus de la empresa Días que no identificó*"; declaración donde el efectivo policial interviniente reitera su versión inicial, esto es, que la motocicleta que venía detrás del bus, intentó sobrepasarlo invadiendo el carril del camión que se dirigía en sentido contrario.

10. Ahora, respecto a la forma y circunstancias de los hechos<sup>3</sup>, la recurrente María Isabel Deza Bardales, señala una versión distinta de los hechos, señalando en su recurso de elevación de actuados, que el ómnibus interviniente en los hechos *"invadió el carril en el que se dirigía el camión, hecho súbito y repentino que fue causante en forma determinante para la materialización del accidente de tránsito (...)/ si el ómnibus invade el carril por donde venía el camión es porque hubo un obstáculo que no le permitió su normal trayecto, este obstáculo fue la moto, a la cual adelanta por el lado izquierdo invadiendo el carril contrario y, al percatarse de la presencia del camión, de manera exabrupta gira hacia su derecha, obligando al motociclista a que, para evitar chocar en el cerro y no colisionar con el ómnibus, frenando, gire ligeramente a la izquierda e inmediatamente a la derecha para ubicarse entre ambos vehículos"*. Sin embargo, la recurrente no es testigo presencial de los hechos (como se explicará adelante), y los testigos Lucio Ronal Diaz Pablo, Alberto Castope Briones y Gisella Margoth Ortiz Deza -testigos en los que sustenta dicha versión-, tampoco son testigos presenciales de los hechos; y de los actuados, tampoco se evidencia algún elemento de convicción que acredite dicha versión.

11. Respecto a las declaraciones testimoniales. De los actuados iniciales aparecen documentos donde se narra las circunstancias del hecho, sin embargo en ellas no se precisa la fuente de información, así a folios 59 aparece copia del documento denominado Acta de Constatación suscrito por Juan Quiroz Mori, cuya original obra a folios 450, donde se indica que *"se tomó conocimiento por los vecinos del lugar que el señor Jorge Luis Deza Bardales habría sufrido un accidente"*; a folios 60 obra la copia del documento denominado "Constancia" cuya original aparece a folios 452, suscrito por Fernando Alayo Quispe, quien en su calidad de teniente gobernador de C.P. Quiden Bajo, señala que *"por versión de compañeros, rondero y ronderas, del lugar en el instante del accidente"*; y a folios 453 a 454 obra el documento denominado "Acta de Reconocimiento" suscrito por Julio C. Lingan y Lingan, Juez de Paz

<sup>3</sup> Referido a establecer *"si el investigado Luis Javier Vallejos o un tercero -como conductor-, infraccionó o no el deber de cuidado por negligencia, impericia o imprudencia, para producir las lesiones graves sufridas por Jorge Luis Deza Bardales en el accidente de tránsito"*.



de Única Nominación C.P. Quiden Bajo, donde se indica que *"el señor Manuel Natividad indica que los hechos que pone de conocimiento son los siguientes: -Que por versiones de los testigos vecinos del lugar que presenciaron los hechos , le indicaron (...9 a las siete de la mañana aproximadamente ocurrió un accidente de tránsito"*.

12. En ese contexto, se ha recabado la declaración de las personas que han suscrito dichos documentos para que puedan precisar el contenido de los documentos antes citados, recabándose la declaración de **Juan Quiroz Mori**, quien en su declaración del 02 de febrero de 2017 obrante a folios 1068 a 1071 señala *"yo no he sido testigo del momento en que se produjo el accidente de tránsito (...), tomé conocimiento por vecinos que no puedo precisar sus datos (..), ya en la carretera, vecinos de dichas zonas que estaban allí, que no puedo precisar sus nombres, porque no recuerdo quienes son exactamente (...), comentaban la forma en que se produjo el accidente que es lo que he consignado en mi acta (...)* no escuche decir si habían testigos del momento del accidente, ni en la pista cuando pasaron por mi casa, tampoco me dijeron a que hora se produjo el accidente"; **Fernando Alayo Quispe**, en su declaración del 02 de febrero de 2017 a folios 1073 a 1076 señala *"yo no he sido testigo del momento en que se produjo el accidente de tránsito (...)* a mi señora le han dicho que entre las 07:00 a 07:05 de la mañana se produjo el accidente, pero no se quien". Asimismo. obra de los actuados las testimoniales de **María Isabel Deza Bardales**, quien en su declaración del 13 de febrero de 2017 obrante a folios 1988 a 1090 señala que *"no hay persona que me haya comentado ser testigo del momento del accidente de tránsito, solo comentarios de los que luego harían llegado al lugar donde se produjo el accidente y que dicen que sería un ómnibus de pasajeros de la empresa Días, y ademas hay comentarios de los pobladores, que (...) el carro de la Días de las 7 de la mañana quien habría participado en el accidente de tránsito de mi hermano y habiendo escuchado a los pobladores que el accidente de mi hermano fue entre las 7:00 y 7:30 horas, debo agregar que estos pobladores no puedo precisar sus nombres, no los se, solo que son pobladores de la zona donde se produjo el accidente (...)/ mi hermana Carmen Rosa Deza Bardales tiene nombres de testigos de los hechos y que lo dirá en el momento de rendir su declaración"*; la declaración de **Manuel Natividad Deza Bardales**, quien en su declaración del 13 de febrero de 2017 obrante a folios 1091 a 1093 declara que *"no hay persona que me haya comentado ser testigo del momento del accidente de tránsito, sólo comentarios de los que luego habrían llegado al lugar donde se produjo el accidente y me dijeron que el accidente se habría producido entre las 07:05 y 07:10 aproximadamente"*; la declaración de **Carmen Rosa Deza Bardales**, quien en su declaración del 21 de febrero de 2017 obrante a folios 1115 a 1118 declara que *"yo no he sido testigo del momento en que se produjo el suceso de tránsito donde resultó lesionado mi hermano (...)* ninguna persona comentó ser testigo del momento del accidente





*de tránsito, solo comentarios de las personas que luego habrían llegado al lugar donde se produjo el accidente (...) la gente también comentaba que el carro que lo había cerrado en la carretera a mi hermano era un ómnibus de pasajeros de la Días (...)/ luego de que mi hermano estuvo en el hospital (...) me llama Margarita Huangal Cruzado y me dice que había averiguado el numero de placa del carro que había participado en el suceso de tránsito de mi hermano (...), y ya averiguando en internet, me he enterado que el chófer es LUCIO DÍAS PABLO que conducía el vehículo C5L-958 que es un carro de la empresa Días", y del Acta de Entrevista Fiscal del 23 de febrero de 2017 obrante a folios 114, **Nora Margarita Huangal Cruzado**, a la pregunta "la señora Carmen Rosa Deza Bardales ha informado el despacho fiscal que usted le manifestó que el vehículo que había participado en el suceso de tránsito en el que resultó lesionado Jorge Luis Deza Bardales es un vehículo de la empresa Días, conducido por el chófer de nombre Lucio, de ser así como tomo conocimiento", responde que "dicha información no lo he dado".*

13. De lo expuesto con respecto a las declaraciones testimoniales antes explicadas, cabe concluir que en el presente caso y conforme a la investigación efectuada hasta la fecha, no se evidencia la existencia de testigos directos que hayan presenciado los hechos, en consecuencia, las versiones expuestas por los testigos actuados en la presente investigación **[-respecto a determinar la forma y circunstancias del hecho, esto es, si el investigado Luis Javier Vallejos o un tercero -como conductor-, infraccionó o no el deber de cuidado por negligencia, impericia o imprudencia, para producir las lesiones graves sufridas por Jorge Luis Deza Bardales en el accidente de tránsito, por tanto, la comisión o no del delito de lesiones culposas y la responsabilidad del denunciado Luis Javier Vallejos u otros-],** resultan irrelevantes y carecen de utilidad.

14. Conforme a todos los argumentos desarrollados en los párrafos anteriores, cabe concluir que los hechos materia de investigación (accidente de tránsito que produjo lesiones a Jorge Luis Deza Bardales), se han producido por la actitud imprudente del lesionado, dado que éste en su intento de adelantar con su motocicleta (UT1) al ómnibus de la empresa de transportes Días, invadió el carril contrario e impactó con el camión (UT1) conducido por el investigado Luis Javier Vallejos; accionar con el que se produjo el accidente de tránsito que le ha ocasionado las lesiones; por tanto, cabe concluir que las lesiones sufridas por el lesionado han sido generadas por su imprudencia, advirtiéndose así, la autoresponsabilidad de los hechos materia de investigación (accidente de tránsito





que produjo lesiones a Jorge Luis Deza Bardales); en consecuencia, no se evidencia elementos objetivos que adviertan la responsabilidad del investigado Luis Javier Vallejos, menos aún, del conductor no identificado del ómnibus de la empresa de transportes Días y en ese contexto, resulta irrelevante determinar el ómnibus y el chófer, sea de la empresa Días u otro.

**Respecto a los argumentos expuestos por el recurrente en su recurso de queja.**

15. El recurrente principalmente argumenta que: **a)** el tercero está plenamente identificado y se llama Lucio Ronal Díaz Pablo y su participación ha sido determinante en la producción de las lesiones; que la fiscal justifica la maniobra imprudente y temeraria de Lucio Ronal Días Pablo y atribuye a la víctima. Al respecto: de los actuados no aparece evidencia objetiva que corrobore dicha afirmación y por el contrario, se evidencia que el factor determinante del accidente de tránsito *-conforme a los elementos de investigación antes analizados en la presente disposición superior-*, los hechos se han producido por la actitud imprudente del lesionado Jorge Luis Deza Bardales; **b)** no se consideró el testimonio escrito de Gisella Margoth Ortiz Deza; no se recabó la declaración de Lucio Amílcar Méndez Torres, Juan Pelé Marcelo Contreras, Ermógenes Ocas Zelada, Gissella Margoth Ortiz Deza; no se recabó el Informe de GPS del vehículo de placa N° C5L-958; que la hora del accidente no está determinada y ello solo se puede determinar con el informe del GPS, informe que no obra en la carpeta fiscal. Al respecto: Las testimoniales de las personas citadas resultan irrelevantes, por cuanto como se ha explicado en la presente disposición superior, respecto a la forma y circunstancias del hecho<sup>4</sup>, no existen testigos presenciales. Y respecto al informe de GPS y la hora del accidente, conforme a la investigación realizada hasta la fecha, resulta intrascendente determinar la hora de tránsito de los vehículos intervinientes en el accidente de tránsito, al haberse establecido que los hechos se han producido por la actitud imprudente del lesionado Jorge Luis Deza Bardales.

<sup>4</sup> Referido a establecer "si el investigado Luis Javier Vallejos o un tercero -como conductor-, infraccionó o no el deber de cuidado por negligencia, impericia o imprudencia, para producir las lesiones graves sufridas por Jorge Luis Deza Bardales en el accidente de tránsito".

## DECISIÓN.


Por estas consideraciones, la Segunda Fiscalía Superior Penal de Cajamarca, de conformidad con las facultades otorgadas por la Ley Orgánica del Ministerio Público - Decreto Legislativo N° 052 y el artículo 334° inciso 5 y 6 del Código Procesal Penal - Decreto Legislativo N° 957-, **DISPONE:**

**PRIMERO.-** Declarar **INFUNDADA** el recurso de elevación de actuados interpuesto por María Isabel Deza Bardales, obrante a folios 1278 a 1308.

**SEGUNDO.- CONFIRMAR** la Disposición N° 05-2017-MP-FPMYT, de fecha 10 de abril de 2017, mediante la cual dispone no formalizar y continuar con la Investigación preparatoria contra Luis Javier Vallejos y el que resulte responsable, por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en sus modalidad de Lesiones Culposas, (previsto y sancionado en el artículo 124° del Código Penal), en agravio de Jorge Luis Deza Bardales.

**NOTIFÍQUESE** la presente Disposición conforme a ley; y **DEVUÉLVASE** los actuados a la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de origen, para su conocimiento y fines pertinentes.

JLMCE/hca.



JOSE LUIS MIGUEL CASTILLO ESPEJO  
Fiscal Superior de la Segunda Fiscalía  
Superior Penal de Cajamarca  
Distrito Fiscal de Cajamarca



**EXPEDIENTE** : 01529-2017-0-1706-JR-CI-03  
**MATERIA** : Acción de Amparo  
**JUEZ** : Esgar Purihuamán Díaz  
**ESPECIALISTA** : Arlita Calderón Silva  
**REPRESENTANTE**: Deza Bardales, María Isabel  
**DEMANDADO** : Fiscalía Superior Penal De Cajamarca Ncpp  
Procurador Publico De Asuntos Judiciales Del  
Ministerio Publico Del Distrito Fiscal De Cajamarca  
Fiscal Adjunta De La Fiscalía Provincial Mixta De  
Tembladera NCPP Contumaza  
**DEMANDANTE** : Jorge Luis Deza Bardales

**RESOLUCIÓN NÚMERO: UNO**

Chiclayo, veintiuno de agosto  
de dos mil diecisiete.-

**VISTO**; el escrito de demanda constitucional de amparo y anexos presentados por María Isabel Deza Bardales en representación de su hermano Jorge Luis Deza Bardales contra José Luis Miguel Castillo Espejo Fiscal Superior de la Segunda Fiscalía Superior penal de Cajamarca y Yesica Milagros Gómez Malca Fiscal Adjunta de la Fiscalía Provincial Mixta de Tembladera, solicitando la nulidad de la Disposición Fiscal N° 110-2017-MP-SFSP-C, notificado el 21 de junio del presente año y la Disposición N° 05-2017-MP-FPMYT, notificado el 26 de abril de 2017; por cuanto a entender de la recurrente vulnerarían su derecho constitucional al debido proceso y faltan motivación; y **CONSIDERANDO: PRIMERO**: El artículo 4 del Código Procesal Constitucional, señala que el amparo procede respecto de resoluciones judiciales firmes dictadas con manifiesto agravio a la tutela procesal efectiva, que comprende el acceso a la justicia y el debido proceso. Es improcedente cuando el agraviado dejó consentir la resolución que dice afectarlo... Se entiende por tutela procesal efectiva aquella situación jurídica de una persona en la que se respetan, de modo enunciativo, sus derechos de libre acceso al órgano jurisdiccional, a probar, de defensa, al contradictorio e igualdad sustancial en el proceso, a no ser desviado de la jurisdicción predeterminada ni sometido a procedimientos distintos de los previstos por la ley, a la obtención de una resolución fundada en derecho, a acceder a los medios impugnatorios regulados, a la imposibilidad de revivir procesos fenecidos, a la actuación adecuada y temporalmente oportuna de las resoluciones judiciales y a la observancia del principio de legalidad procesal penal". **SEGUNDO**: Asimismo, el artículo 44 del mismo código procesal establece, establece que el plazo para interponer una demanda de proceso de amparo contra resoluciones judiciales firmes es de treinta días hábiles después de la notificación de la resolución que ordena se cumpla lo decidido. **TERCERO**: Al respecto, en la STC Exp. N° 00252-2009-PA/TC el Tribunal Constitucional estableció como doctrina jurisprudencial vinculante, reconocida en el artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, dos maneras de interpretar el artículo 44 antes citado con respecto al inicio del plazo prescriptorio para incoar una demanda de amparo contra resoluciones judiciales, el primero de ellos

MOISES ALFONSO DIAZ BERECHÉ  
DNI. 41095288  
NOTIFICADOR  
29 AGO. 2017  
CENTRAL DE NOTIFICACIONES  
LAMBAYEQUE

29/08/17  
MAX HENRY GUIMAREZ ALVAREZ DE VILLAR  
Técnico Judicial  
Tercer Juzgado Especializado Civil  
PODER JUDICIAL - CSJLA



señala que el plazo deberá contabilizarse desde el día siguiente de la fecha de notificación de la resolución firme que se considera lesiva y concluirá inevitablemente treinta días hábiles después de la notificación de la resolución que ordena que se cumpla con lo decidido; y el segundo que "[E]l demandante tiene la facultad de interponer la demanda de amparo desde que conoce de resolución firme emitida en un proceso judicial que considera agravante de sus derechos constitucionales hasta treinta días después de notificada la resolución que ordena se cumpla lo decidido".

**CUARTO:** En el presente caso lo que pretende la actora es que se deje sin efecto disposiciones fiscales, equivalentes a resoluciones judiciales, toda vez, que a través de dichos documentos expresan su función sea de carácter no jurisdiccional o jurisdiccional, entonces, estando a que la Disposición Fiscal N°110-2017-MP-SFSP-C, fue notificado el 21 de junio del presente año, conforme lo indica la recurrente a la fecha de presentación de la demanda -ocho de agosto de 2017- se encuentra fuera del plazo legal para interponerla, toda vez, que la indicada disposición es una que concluye el proceso de queja, en donde se ordena "declarar infundada el recurso de elevación de actuados interpuesto por María Isabel Deza Bardales (....). **SEGUNDO.** confirmar la Disposición N° 05-2017-MP-FPMYT, de fecha 10 de abril de 2017, mediante la cual dispone no formalizar y continuar con la investigación preparatoria contra Luis Javier Vallejos y (...)" **QUINTO:** Además, su pretensión y los hechos no guarda relación con el contenido del derechos constitucional que invoca, toda vez, que lo que pretende la actora es que este órgano constitucional anule dichas disposiciones con el objeto que el representante del Ministerio Público formalice investigación preparatoria, hecho que no corresponde, por cuanto la acción penal es exclusiva y excluyente del Ministerio Público, hecho que no se puede lograr a través de la demanda de amparo; **SEXTO:** Asimismo, se advierte que los hechos, como la dirección de la recurrente y los demandados es el departamento de Cajamarca, que de conformidad con el segundo párrafo del artículo 51 del Código Procesal Constitucional, no existe prorrogación de la competencia, siendo este juzgado incompetente por razón de territorio para conocer el presente proceso. Máxime si revisando la ficha RENIEC del agraviado, tiene su domicilio ubicado en el departamento de Cajamarca. Por lo que de conformidad con el artículo 44, 5 inciso 1 del Código Procesal Constitucional **SE RESUELVE:** DECLARAR **IMPROCEDENTE** la demanda de amparo, interpuesta por **MARÍA ISABEL DEZA BARDALES** en representación de su hermano Jorge Luis Deza Bardales contra **JOSÉ LUIS MIGUEL CASTILLO ESPEJO FISCAL SUPERIOR DE LA SEGUNDA FISCALÍA SUPERIOR PENAL DE CAJAMARCA Y YESICA MILAGROS GÓMEZ MALCA FISCAL ADJUNTA DE LA FISCALÍA PROVINCIAL MIXTA DE TEMBLADERA**. En consecuencia consentida o ejecutoriada que sea la presente resolución **ARCHIVASE** el expediente por secretaría, con devolución de anexos. **Téngase por señalada la casilla electrónica número 2473 correspondiente al demandante. NOTIFÍQUESE.-**

  
MAX HENRY GUIMAREY ÁLVAREZ DE VILLAR  
Técnico Judicial  
Tercer Juzgado Especializado Civil  
PODER JUDICIAL - CSJLA



**CASO N° 241-2016-MP-ODCI-CAJAMARCA**

Recurrente: María Isabel Deza Bardales  
Cuestionado: Tito Gerardo Sirlopu Garces,  
Fiscal Provincial de la Fiscalía Provincial Mixta  
de Yonán - Tembladera.

**Materia: Inconducta Funcional**

**RESOLUCIÓN QUE DECLARA FUNDADA LA QUEJA FUNCIONAL EN TRES  
EXTREMOS DE LA QUEJA E INFUNDADA LA QUEJA EN UN EXTREMO**

**RESOLUCIÓN N° 038-2017-MP-ODCI-CAJAMARCA**

Cajamarca, veintinueve de mayo  
de dos mil diecisiete.-

**I. ASUNTO:**

El presente procedimiento disciplinario iniciado contra Tito Gerardo Sirlopu Garces, Fiscal Provincial de la Fiscalía Provincial Mixta de Yonán - Tembladera, por la presunta infracción disciplinaria prevista en el literal d) y m) del artículo 23° del Reglamento de Organización y Funciones de la Fiscalía Suprema de Control Interno; siendo su estadio emitir la respectiva resolución declarando fundada o infundada la queja, de conformidad con lo establecido en el artículo 40° del Reglamento de Organización y Funciones de la Fiscalía Suprema de Control Interno (ROF de la FSCI); y,

**II. ANTECEDENTES:**

**- HECHOS MATERIA DE IMPUTACIÓN**

Tito Gerardo Sirlopu Garces, Fiscal Provincial de la Fiscalía Provincial Mixta de Yonán - Tembladera, estuvo a cargo de la tramitación de la Investigación N° 140-2016, seguida contra Luis Javier Vallejos, por la presunta comisión del delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud en su modalidad de Lesiones Culposas, en agravio de Jorge Luis Deza Bardales.

Dicho magistrado dispuso mediante Disposición N° 01-2016-FPMYT de fecha 21/06/2016, la apertura de Investigación Preliminar, por el plazo de sesenta días (Fs. 112 a 120); sin embargo, durante la tramitación de la investigación preliminar, no habría proveído los escritos presentados por la parte agraviada; así como tampoco, habría realizado las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos. Finalmente, mediante Disposición N° 02-2016-FPMYT de fecha 26/10/2016 (125 días después), dispone que no Procede Formalizar ni Continuar con la Investigación Preparatoria contra Luis Javier Vallejos, por la Presunta comisión del delito de Lesiones Culposas en agravio de Jorge Luis Deza Bardales.

Asimismo, conforme a lo señalado por la recurrente María Isabel Deza Bardales en su escrito de queja, el Fiscal Provincial quejado, habría tenido un trato descortés con los familiares de Jorge Luis Deza Bardales, cuando estos han acudido a su Despacho.





### - CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LOS HECHOS

El Fiscal Provincial, habría incurrido en las inconductas funcionales contempladas en el artículo 23° inc. d) y m) del Reglamento de Organización y Funciones de la Fiscalía Suprema de Control Interno que señalan como inconducta funcional pasible de sanción disciplinaria:

**Inc. d):** "Incumplir las disposiciones legales, normas complementarias y de carácter interno emitidas por la Fiscalía de la Nación o la Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público y por sus superiores jerárquicos"; cuyas normas incumplidas serían lo establecido en:

- **Artículo IV del Código Procesal Penal:** 1. El Ministerio Público es titular del ejercicio público de la acción penal en los delitos y tiene el deber de la carga de la prueba. Asume la conducción de la investigación desde su inicio, decidida y proactivamente en defensa de la sociedad<sup>1</sup>. 2. El Ministerio Público está obligado a actuar con objetividad, indagando los hechos constitutivos de delito, los que determinen y acrediten la responsabilidad o inocencia del imputado. Con esta finalidad conduce y controla jurídicamente los actos de investigación que realiza la Policía Nacional; el **Artículo 159°** de la Constitución Política del Perú que establece: *corresponde al Ministerio Público ejercitar la acción penal pública, de oficio o a petición de parte... (...), y los artículos 60° y 61° del Código Procesal Penal<sup>2</sup>, pues el cuestionado como titular de la acción penal, no habría realizado las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos, tales como: citar a declarar a los efectivos policiales que intervinieron luego de producido el accidente; no reprogramar la declaración de Luis Javier Vallejos y Marco Antonio Herrera Flores; no recibir la declaración del agraviado, así como no haber dejado constancia en la investigación de su estado de salud. De igual modo, no haber incorporado en la investigación N°140-2016 al conductor del omnibus de la Empresa "Turismo Días".*
- Asimismo, no habría observado lo establecido en el inciso 2 del artículo 334° del Código Procesal Penal, que señala: "(...) 2. El plazo de las diligencias preliminares, conforme al artículo 3, es de sesenta días, salvo que se produzca la detención de una persona. No obstante ello, el fiscal podrá fijar un plazo distinto según las características, complejidad y circunstancias de los hechos objeto de investigación (...)", dado que el Fiscal cuestionado no obstante haber fijado mediante Disposición N° 01-2016-2016-FPMYT de fecha 21/06/2016, el plazo de sesenta días para la investigación preliminar, ha

<sup>1</sup> Artículo modificado por el Artículo 3 de la Ley N° 30076, publicada el 19 agosto 2013.

<sup>2</sup> Artículo 60° Funciones: 1. El Ministerio Público es el titular del ejercicio de la acción penal. Actúa de oficio, a instancia de la víctima, por acción popular o por noticia policial. 2. El Fiscal conduce desde su inicio la investigación del delito. Con tal propósito la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función.

Artículo 61° Atribuciones: 1. El Fiscal actúa en el proceso penal con independencia de criterio. Adecua sus actos a un criterio objetivo, rigiéndose únicamente por la Constitución y la Ley, sin perjuicio de las directivas o instrucciones de carácter general que emita la Fiscalía de la Nación. 2. Conduce la Investigación Preparatoria. Practicará u ordenará practicar los actos de investigación que correspondan, indagando no sólo las circunstancias que permitan comprobar la imputación, sino también las que sirvan para eximir o atenuar la responsabilidad del imputado. Solicitará al Juez las medidas que considere necesarias, cuando corresponda hacerlo. 3. Interviene permanentemente en todo el desarrollo del proceso. Tiene legitimación para interponer los recursos y medios de impugnación que la Ley establece. 4. Está obligado a apartarse del conocimiento de una investigación o proceso cuando esté incurrido en las causales de inhibición establecidas en el artículo 53.





trámitado la investigación por más de ciento veinte días; sin que haya emitido Disposición que fundamente la ampliación.

- De igual modo, no habría cumplido ni observado los plazos legales para expedir resoluciones (entiéndase disposiciones o requerimientos fiscales), en el plazo razonable, conforme está establecido en el artículo 124<sup>o3</sup> del Código Procesal Civil, cuya aplicación es supletoria<sup>4</sup> por regulación expresa de la primera disposición complementaria y final del mismo cuerpo normativo, concordante con el Artículo 144<sup>o</sup>, inciso 2 del Código Procesal Penal que señala: "Los plazos que sólo tienen como fin regular la actividad de fiscales y jueces serán observados rigurosamente por ellos. Su inobservancia sólo acarrea responsabilidad disciplinaria". Teniendo en cuenta que no habría proveído las peticiones hechas mediante escritos de fechas 30/06/2016, 05/07/2016, 12/08/2016, 19/08/2016, 08/09/2016 y 30/09/2016.

*Inc m) "No guardar consideración y respeto a los usuarios del servicio";* en el caso concreto, el Fiscal Provincial cuestionado, habría tenido un trato descortés con los familiares de Jorge Luis Deza Bardales, cuando estos han acudido a su Despacho.

#### - TRÁMITE DE LA INVESTIGACIÓN

Este Despacho mediante Resolución N° 01-2016-MP-ODCI-CAJAMARCA (páginas 52 a 55), abrió Investigación Preliminar contra Tito Gerardo Sirlopú Garcés, Fiscal Provincial de la Fiscalía Provincial Mixta de Yonán - Tembladera, a fin de recibir su informe de descargo, y reunir mayores elementos de convicción que sustenten la apertura de un Procedimiento Disciplinario o en su defecto archivar lo actuado.

El 26/10/2016, se recepcionó el escrito presentado por la recurrente María Isabel Deza Bardales (páginas 62 a 73), mediante el cual solicita se fije como cargo por inconducta funcional el hecho que el Fiscal cuestionado adelantó opinión; escrito en mérito al cual se emitió Resolución N° 002-2016-MP-ODCI-CAJAMARCA (páginas 74 a 75).

El 04/11/2016, se recepcionó el Oficio N° 838-2016-FPMYT (página 78), mediante el cual Tito Gerardo Sirlopú Garcés, Fiscal Provincial de la Fiscalía Provincial Mixta de Yonán - Tembladera, remite copias certificadas de la Carpeta Fiscal N° 140-2016, así como de la carpeta auxiliar. Pese a encontrarse debidamente notificado, conforme al cargo de notificación que obra a página 60, el Fiscal cuestionado no cumplió con realizar su informe de descargo.

Al advertirse que objetivamente existían elementos suficientes para iniciar procedimiento disciplinario contra el cuestionado, mediante Resolución N° 003-2016-MP-ODCI-CAJAMARCA (páginas 481 a 484), se abrió Procedimiento Disciplinario de Oficio contra Tito Gerardo Sirlopú Garcés, Fiscal Provincial de la Fiscalía Provincial Mixta de Yonán -

3 Artículo 124° - Código Procesal Civil.- En primera Instancia, los decretos se expiden a los dos días de presentado el escrito que los motiva y los autos dentro de cinco días hábiles computados desde la fecha en que el proceso se encuentra expedito para ser resuelto, salvo disposición distinta de este Código. Las sentencias se expedirán dentro del plazo máximo previsto en cada vía procedimental contados desde la notificación de la resolución que declara al proceso expedito para ser resuelto (...).

4 Disposiciones Complementarias - Disposiciones Finales del Código Procesal Civil  
PRIMERA.- Las disposiciones de este Código se aplican supletoriamente a los demás ordenamientos procesales, siempre que sean compatibles con su naturaleza.



Tembladera, a efectos de recibir su informe de descargo, y reunir mayores elementos de convicción que sustenten determinar si amerita declarar fundada la queja o archivar la misma.

Conforme se advierte de autos, y pese a que el Fiscal Provincial cuestionado se encontró válidamente notificado el 05/01/2017, conforme al cargo de Cédula de Notificación obrante de página 495, el cuestionado no cumplió con presentar su informe de descargo; por lo que, mediante Resolución N° 004-2017-MP-ODCI-CAJAMARCA (página 497), se resolvió declarar rebelde al cuestionado Tito Gerardo Sirlopú Garcés.

Mediante Proveído S/N (página 502), se dispuso extraer el reporte de quejas y denuncias del cuestionado, y pasen los actuados a Despacho a efectos de emitir la resolución correspondiente; estando por tanto, la presente investigación expedita para pronunciamiento final.

### III. COMPETENCIA DEL ÓRGANO DE CONTROL:

La Fiscalía Suprema de Control Interno del Ministerio Público, conforme lo establecido en el artículo 1° del Reglamento de Organización y Funciones de la Fiscalía Suprema de Control Interno (ROF de la FSCI), es el encargado del control disciplinario y de la evaluación permanente de la función y servicio Fiscal, para mantener los niveles de eficacia, transparencia y probidad en el accionar del Ministerio Público. Su ámbito de competencia comprende a todos los Fiscales de la República, en todos sus niveles, con excepción de los Fiscales Supremos. Por ello, conforme al artículo 3° del ROF de la FSCI, para el desarrollo de sus funciones, se compone de dos órganos: Oficina Central de Control Interno, y Oficinas Desconcentradas de Control Interno.

En ese sentido, es deber ineludible de la Oficina Desconcentrada de Control Interno de Cajamarca, velar y controlar que los Fiscales cumplan sus funciones, con corrección y eficiencia; dicha actividad administrativa, se realiza garantizándose el irrestricto respeto del debido procedimiento administrativo. Por ello, las acciones de control sobre la conducta funcional, la idoneidad y el desempeño de los Magistrados del Ministerio Público en sus respectivas jerarquías (Fiscales Adjuntos Superiores, Fiscales Provinciales y Fiscales Adjuntos Provinciales), se rige – entre otros – por el principio de objetividad, tal como se establece en el Reglamento de Organización y Funciones de la Fiscalía Suprema de Control Interno; en consecuencia, la responsabilidad administrativa tiene que estar debidamente acreditada en base a pruebas materiales, con la suficiente fuerza para enervar la presunción de inocencia que asiste a todo administrado.

### IV. FIJACIÓN DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS:

De acuerdo a los hechos imputados, se deberá dilucidar los siguientes puntos controvertidos:

- ✓ Determinar si el cuestionado, durante la tramitación del Caso N° 140-2016, no realizó las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos, asimismo no habría incorporado en la investigación al conductor del omnibus de la Empresa "Turismo Días".
- ✓ Determinar si el cuestionado, durante la tramitación del Caso N° 140-2016, no





observó los plazos establecidos para la emisión de las disposiciones correspondientes.

- ✓ Determinar si el cuestionado no proveyó las peticiones hechas mediante escritos de fechas 30/06/2016, 05/07/2016, 12/08/2016, 19/08/2016, 08/09/2016 y 30/09/2016.
- ✓ Determinar si el cuestionado tuvo un trato descortés con los familiares de Jorge Luis Deza Bardales, cuando estos han acudido a su Despacho.

## V. CONSIDERACIONES:

### A. AMBITO NORMATIVO DEL CASO

#### PRIMERO:

##### 1. LA POSICIÓN CONSTITUCIONAL DEL MINISTERIO PÚBLICO

Conforme a lo establecido en el artículo 159° de la Constitución Política del Perú, "corresponde al Ministerio Público ejercitar la acción penal pública de oficio o a petición de parte". Asimismo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 9° de la Ley Orgánica del Ministerio Público "El Ministerio Público interviene en ella (investigación) orientándola en cuanto a las pruebas que sea menester actuar y la supervigila para que se cumpla las disposiciones legales pertinentes para el ejercicio oportuno de la acción penal". En consecuencia, la constitución y la Ley Orgánica del Ministerio Público reconocen que la dirección de la investigación está a cargo de los miembros del Ministerio Público; con la consecuente obligación de "dar cumplimiento a las disposiciones legales pertinentes para el ejercicio oportuno de la acción penal. El Magistrado esta sometido únicamente al imperio de la ley y su accionar debe responder a ésta"

##### 2. LA ACTUACIÓN FISCAL EN RELACIÓN A SUS OBLIGACIONES

De acuerdo a lo preceptuado por los artículos 60° y 61° del Código Procesal Penal, el Ministerio Público es el titular del ejercicio de la acción penal; actúa de oficio, a instancia de la víctima, por acción popular o por noticia policial; es por ello que, el Fiscal conduce desde su inicio la investigación del delito. Por ello, el Fiscal actúa en el proceso penal con independencia de criterio. Adecua sus actos a un criterio objetivo, rigiéndose únicamente por la Constitución y la Ley, sin perjuicio de las directivas o instrucciones de carácter general que emita la Fiscalía de la Nación. Asimismo, conduce la Investigación Preparatoria, interviniendo permanentemente en todo el desarrollo del proceso.

#### SEGUNDO: LÍMITE NORMATIVO DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

Talavera Elguera<sup>5</sup>, sostiene que: "(...) Es deber primordial del Estado garantizar, de un lado, la plena vigencia de los derechos humanos y, de otro, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad; así reza el artículo 44° de la Constitución (...). (...) La Constitución se convierte así en el referente por antonomasia, no solo del legislador procesal penal sino de toda actuación de los encargados de la persecución penal, y de las personas que de una u otra manera se ven vinculadas

5 TALAVERA ELGUERA, PABLO. "LA PRUEBA - En el Nuevo Proceso Penal". Academia de la Magistratura - AMAG . 2009. Pág. 19-20.





a un caso penal. Esta afirmación implica un deber de protección de los derechos fundamentales durante todo el proceso penal; lo que no significa la omisión de tutelar otros bienes o valores jurídicos constitucionalmente valiosos, en la medida que tales derechos son relativos y no absolutos. Por ello el Tribunal Constitucional ha sostenido que el respeto de los derechos fundamentales de los procesados no es incompatible con el deber de los jueces de determinar, dentro de un proceso penal debido, la responsabilidad penal del imputado [STC 9081-2006-PHC/TC] (...).

## B. ANÁLISIS FÁCTICO JURÍDICO DEL CASO

**TERCERO: Respecto a determinar si el cuestionado durante la tramitación del Caso N° 140-2016, no realizó las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos, asimismo no habría incorporado en la investigación al conductor del omnibus de la Empresa "Turismo Dias".**- De la revisión de toda la Carpeta Fiscal N° 140-2016, la cual obra en copias certificadas, se verifica que a páginas 80 a 103, obra Oficio N° 163-2016-REGPOL/CAJ-CSPNP-TEM/CPNP-EL.SALITRE"D", suscrito por el Comisario de la Comisaría PNP El Salitre, mediante el cual se remite actuados policiales relacionados al accidente de tránsito suscitado el 18/06/2016, adjuntando los siguientes documentos: Acta de denuncia policial S/N-COMPRCAR-CHILETE, Acta de situación del vehículo, Acta de Ocurrencia Policial-Tembladera, Acta de Incautación del vehículo, Acta de Inspección Técnico Policial, tomas fotográficas, declaración de Luis Javier Vallejos, notificación de Luis Javier Vallejos, consulta de licencias de conducir, copia de Oficio N° 159-2016 - Constatación de Daños, copia de Oficio N° 159-2016-Dosaje Etílico, copia de DNI 40438950, LC. 404383950 A3, y copia de TIV SOAT La Positiva. Asimismo a página 104, obra copia de Oficio N° 124-2016-REG.CAJ-DRS-MRT, suscrito por el Jefe de la Microred de Cajamarca, mediante el cual se remite historia clínica de Jorge Luis Deza Bardales. Del mismo modo, a página 107 obra Oficio N° 101-2016-MP-DML I-CONTUMAZA, suscrito por el Jefe de la División Médico Legal de Contumazá, mediante el cual se remite Reconocimiento Médico Legal Post Facto de Jorge Luis Deza Bardales. A páginas 112 a 120, obra copia certificada de la Disposición N° 01-2016-FPMYT del 21/06/2016, mediante la cual se dispone abrir investigación preliminar por el plazo de sesenta días, disponiendo la realización de las siguientes diligencias: solicitar al Director del Hospital Docente Las Mercedes, copia de la Historia Clínica de Jorge Luis Deza Bardales, recibir la declaración de Jorge Luis Deza Bardales el 05/07/2016, recibir la declaración de Luis Javier Vallejos el 05/07/2017, recibir la declaración de Marco Antonio Herrera Flores el 05/07/2016, así como realizar actos de investigación necesarios. Sin embargo, se verifica que luego de emitida la disposición N° 01-2016-FPMYT, no se ha emitido proveído o disposición alguna de impulso, pese a los sendos escritos presentados por la parte agraviada, asimismo, durante el plazo transcurrido entre la emisión de la primera Disposición y la Disposición final (más de 120 días) que dispone no formalizar investigación preliminar, no se ha reprogramado la recepción de declaraciones dispuestas, ni se ha dispuesto otras diligencias tendientes al esclarecimiento de los hechos; y si bien el Fiscal Provincial cuestionado como integrante del Ministerio Público, tiene total discrecionalidad y autonomía de criterio en la tramitación de su investigaciones, conforme a lo establecido en el artículo 5° de la Ley Orgánica del Ministerio Público; sin embargo, se aprecia que el cuestionado al ser el titular de la acción penal, tenía la obligación de asumir la conducción de la investigación desde su inicio, decidida y proactivamente en defensa de la sociedad, es decir respetando todas las garantías que le exige el sistema debió buscar de manera profesional, objetiva e incesante la verdad de los hechos, puesto que tiene el deber de la carga de la prueba y para eso es investido como defensor de la legalidad, de la sociedad e intereses públicos.

*[Firma manuscrita]*  
Fiscal Provincial de Cajamarca  
Fiscalía de la Nación





En este orden de ideas conviene traer a colación lo desarrollado por el Supremo Órgano de Control, aplicable en lo pertinente, en el sentido de que una de las atribuciones principales de los magistrados del Ministerio Público es la dirección de la investigación, la cual se encuentra regulada por el artículo 9 del Decreto Legislativo N° 052, *que prescribe respecto del Representante del Ministerio Público que "(...) vigila e interviene en la investigación del delito desde la etapa policial. Con ese objeto las Fuerzas Policiales realizan la investigación. El Ministerio Público interviene en ella orientándola en cuanto a las pruebas que sean menester actuar y las supervigila para que se cumplan las disposiciones legales pertinentes para el ejercicio oportuno de la acción penal". La dirección de la investigación por parte del Fiscal es de tal relevancia que incluso viene reconocida por el artículo 159, numeral 4 de la Constitución de 1993<sup>6</sup>, el cual indica que le corresponde "conducir desde su inicio la investigación del delito. Con tal propósito, la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función".*

Conforme a lo expuesto, y teniendo en cuenta los documentos obrantes en autos, se ha acreditado que el cuestionado incumplió con sus obligaciones como representante del Ministerio Público, y por tanto, el cargo debe ser declarado fundado en este extremo.

**CUARTO: Respecto a determinar si el cuestionado durante la tramitación del Caso N° 140-2016, no observó los plazos establecidos para la emisión de las disposiciones correspondientes.**- Del estudio de los documentos obrantes en autos (copias certificadas de la toda la Carpeta Fiscal N° 140-2016), se verifica que en el Caso N° 140-2016, seguido contra Luis Javier Vallejos, por delito contra la Vida, el cuerpo y la salud, en agravio de Jorge Luis Deza Bardales, se emitió Disposición N° 01-2016-FPMYT del 21/06/2016, conforme obra copia certificada de la misma a páginas 112 a 120, en la cual se dispuso abrir investigación preliminar por el plazo de sesenta días, disponiéndose la realización de diligencias. Asimismo, se expidió la Disposición N° 02-2016-FPMYT del 26/10/2016, conforme obra copia certificada de la misma a páginas 393 a 408, en la cual se dispuso que no procede formalizar ni continuar con la investigación preparatoria contra Luis Javier Vallejos, por la presunta comisión del delito de Lesiones Culposas, en agravio de Jorge Luis Deza Bardales. Apresiasiéndose que dicha investigación se inició mediante Disposición de fecha 21/06/2016, concediéndose un plazo de sesenta días, por lo que, conforme a ello el plazo expiró el 19/08/2016; sin embargo el Fiscal cuestionado emitió Disposición de No Formalizar Ni Continuar con la Investigación Preparatoria el 26/10/2016, es decir sesenta y ocho días después, quedando acreditado que el cuestionado no observó los plazos establecidos por ley para la emisión de la Disposición correspondiente, de acuerdo al artículo 334° inciso 2 del Código Procesal Penal, dilación que no es razonable y no se encuentra justificada de modo alguno, dado que si consideraba pertinente actuar diligencias excepcionales fuera del plazo establecido (60 días), debió emitir la disposición de su propósito mediante la cual disponía ampliar el plazo de investigación preliminar. Lo que permite concluir que el cargo debe ser declarado fundado en este extremo.

**QUINTO: Respecto a determinar si el cuestionado no proveyó las peticiones hechas mediante escritos de fechas 30/06/2016, 05/07/2016, 12/08/2016, 19/08/2016, 08/09/2016 y 30/09/2016.**- A páginas 121 a 211, obra copia certificada de escrito de fecha 30/06/2016, asimismo a páginas 214 a 228 obra copia certificada de escrito de fecha 05/07/2016, de igual modo a páginas 229 a 362 obra copia certificada de escrito de fecha





12/08/2016, a páginas 363 obra escrito de fecha 19/08/2016, a página 364 obra copia certificada de escrito de fecha 08/09/2016 y a página 365 obra copia certificada de escrito de fecha 30/09/2016; verificándose de la revisión de las copias certificadas de toda la Carpeta Fiscal N° 140-2016, la cual obra en autos, que no obra proveído o disposición mediante los cuales se absuelva lo solicitado por la parte agraviada, evidenciándose que recién con la emisión de la Disposición N° 02-2016-FPMYT del 26/10/2016, el cuestionado da cuenta sobre lo solicitado en los escritos presentados el 30/06/2016, 05/07/2016, 12/08/2016, 19/08/2016, 08/09/2016 y 30/09/2016, es decir ha quedado corroborado que durante el tiempo que el cuestionado tuvo a cargo la investigación (120 días aproximadamente), no emitió pronunciamiento alguno. Lo que permite concluir que el cargo debe ser declarado fundado en este extremo.

**SEXTO: Respecto a determinar si el cuestionado tuvo un trato descortés con los familiares de Jorge Luis Deza Bardales, cuando estos han acudido a su Despacho.-**

Conforme a lo hechos narrados en el escrito de queja, así como de las documentales obrantes, no se ha podido verificar la comisión de esta inconducta funcional, dado que no existe en autos elementos objetivos que corroboren tales aseveraciones. Por lo que en ese sentido nos quedamos ante meros cargos subjetivos carentes de valor probatorio. Siendo esto así, al no haberse enervado el principio de presunción de inocencia que le asiste al cuestionado, se deberá declarar infundado en este extremo el cargo imputado.

No obstante lo expuesto, resulta necesario **recomendar** a Tito Gerardo Sirlopú Garcés, Fiscal Provincial de la Fiscalía Provincial Mixta de Yonán - Tembladera, que en lo sucesivo, su trato con los usuarios del servicio debe ser cordial y amable, acorde con el cargo que ostenta.

**SÉPTIMO: Respecto a la Graduación de la Sanción.-**

Toda inconducta funcional tiene que ver con aquella escala de comportamientos que sin constituir infracción constitucional, ni acción u omisión delictiva, implica sin embargo, un demérito funcional personal grave y por lo mismo una seria afectación al prestigio de la institución, ello conforme lo establecido en el Acuerdo Plenario N° 1-2007/ESV-22, publicado el 25 de marzo de 2008 (R.N N° 2090-2005, Lambayeque), que señala: *"El procedimiento administrativo sancionador busca garantizar el funcionamiento correcto de la administración pública, el procedimiento administrativo sancionador no se rige por el principio de lesividad, sino por criterios de afectación general, de suerte que la sanción administrativa no requiere la verificación de la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos y generalmente opera como respuesta ante conductas formales o de simple desobediencia a reglas de ordenación (...)"*

Ahora bien, determinada la responsabilidad funcional por parte del investigado, corresponde graduar la sanción a imponerse y esta debe realizarse dentro de un marco de objetividad que rige las actuaciones de este Órgano de Control, por lo que apreciada la documentación recabada, así como el reporte de quejas del cuestionado, obrante de páginas 107 a 114, se debe tener presente lo señalado en el artículo 230° numeral 3 de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General<sup>7</sup> referido a los principios de la potestad sancionadora administrativa, la **razonabilidad** y por ende que en la determinación

<sup>7</sup> Aplicable al presente Caso, de acuerdo a lo señalado en la Quinta Disposición Transitoria y Complementaria del Reglamento de Organización y Funciones de la Fiscalía Suprema de Control Interno.





de la sanción se debe considerar criterios como la existencia o no intencionalidad, el perjuicio causado, las circunstancias de la comisión de la infracción y la repetición en la comisión de la infracción.

Respecto al daño causado, se tiene que el accionar del Fiscal cuestionado no tan solo vulneró la normatividad interna como Representante del Ministerio Público, si no que perjudicó la tramitación del Caso N° 140-2016, proyectando además un mensaje negativo hacia la comunidad y hacia los demás integrantes del Ministerio Público.

Respecto a la repetición de la comisión de la infracción se puede decir que el magistrado cuestionado en el periodo comprendido desde el año 2013 al 2017, se ha encontrado inmerso en treinta y tres (33) investigaciones administrativas (ver reporte de páginas 503 a 514), habiéndose impuesto sanción en dos (02) investigaciones pero por hechos distintos al investigado, no apreciándose repetición en la comisión de la infracción; por lo que teniendo en cuenta el caso en concreto, corresponde imponer la medida disciplinaria de AMONESTACIÓN.

#### VI.- DECISIÓN FISCAL:

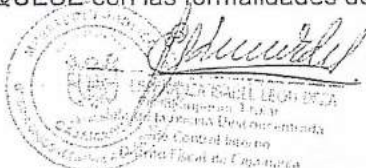
De conformidad con lo establecido en el artículo 159º, de la Constitución Política del Estado, en concordancia con los artículos 41º del Reglamento de Organización y Funciones de la Fiscalía Suprema de Control Interno del Ministerio Público (ROF de la FSCI); se **RESUELVE:**

**PRIMERO: DECLARAR FUNDADA EN TRES EXTREMOS LA QUEJA DE PARTE** formulada contra **TITO GERARDO SIRLOPU GARCES**, Fiscal Provincial de la Fiscalía Provincial Mixta de Yonán - Tembladera; por haber incurrido en la infracción administrativa prevista en el literal d) del artículo 23º del Reglamento de Organización y Funciones de la Fiscalía Suprema de Control Interno, conforme lo desarrollado en los considerandos tercero, cuarto y quinto de la presente resolución; por lo que de acuerdo con el artículo 24º, literal a) del Reglamento de Organización y Funciones de la Fiscalía Suprema de Control Interno se le impone la sanción administrativa de **AMONESTACIÓN**. Una vez consentida o decidida que sea la sanción impuesta, **DEBERÁ** ser anotada en el libro correspondiente, con conocimiento de la Fiscalía Suprema de Control Interno, Gerencia Central de Potencial Humano, Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores, Registro de Fiscales y Consejo Nacional de la Magistratura.

**SEGUNDO: DECLARAR INFUNDADA EN UN EXTREMO LA QUEJA DE PARTE** formulada contra **TITO GERARDO SIRLOPU GARCES**, Fiscal Provincial de la Fiscalía Provincial Mixta de Yonán - Tembladera; por haber incurrido en la infracción administrativa prevista en el literal d) del artículo 23º del Reglamento de Organización y Funciones de la Fiscalía Suprema de Control Interno, conforme lo desarrollado en el considerando sexto de la presente resolución, debiendo tener en cuenta la recomendación dada; consecuentemente se dispone el **ARCHIVO DEFINITIVO** en este extremo.

**TERCERO: NOTIFIQUESE** con las formalidades de ley.---

EILD/myhj





## Fiscalía Suprema de Control Interno

CASO : 241-2016  
COMISIÓN : A.PROC.DIS.  
ESTADO : APELACIÓN  
CUADERNO : PRINCIPAL  
PROCEDENCIA : ODCI-CAJAMARCA

Resolución N°: 1708-2017

Lima, 06 OCT. 2017

*SUMILLA: Se declaran infundados los recursos de apelación de los recurrentes, porque no cumplen con señalar cuáles son los errores de hecho o de derecho en los que incurre la resolución impugnada, además que los argumentos que plantean ambos recurrentes, no tienen fundamentos; en conclusión, la ODCI-Cajamarca, ha emitido una resolución acorde a la ley.*

### VISTOS:

En la fecha los recursos de apelación presentados por **María Isabel Deza Bardales**, del 28 de junio de 2016, obrante a folios 541/554, y por **Tito Gerardo Sirlopú Garcés**, Fiscal Provincial de la Fiscalía Provincial Mixta de Yonán - Tembladera, del 20 de julio de 2017, obrante a folios 643/663, contra la Resolución n° 78-2017-MP-ODCI-Cajamarca del 29 de mayo de 2017, obrante a folios 515/523, que resolvió declarar:

**Primero: FUNDADA** en tres extremos la queja de parte formulada en contra del fiscal antes aludido; por la irregularidad funcional prevista en el literal d) del artículo 23 del Reglamento de Organización y Funciones de la Fiscalía Suprema de Control Interno, imponiendo la sanción de **Amonestación.-**

**Segundo:** declarar **INFUNDADA** en un extremo la queja e parte formulado en contra del fiscal quejado, por haber supuestamente incurrido en el literal m) del artículo 23 del Reglamento, archivando los actuados en ese extremo; y,

### CONSIDERANDO:





## Fiscalía Suprema de Control Interno

### 1.- Supuesto fáctico atribuido como infracción.-

Sumilla: El fiscal no realizó las diligencias necesarias al esclarecimiento de los hechos, no proveyó los escritos de las partes, demoró el plazo para expedir disposiciones y trató descortésmente a los familiares del agraviado.

- La irregularidad funcional del quejado es atribuida, en la tramitación de la investigación n° 140-2016, seguida contra Luis Javier Vallejos, por delito de Lesiones culposas, en agravio de Jorge Luis Deza Bardales; habiendo emitido la Disposición n° 1-2016-FPMYT del 21 de junio de 2016, abriendo investigación preliminar, por el plazo de 60 días; sin embargo, en ese plazo no proveyó los escritos presentados por la parte agraviada y no realizó las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos. Finalmente mediante Disposición n° 2-2016-FPMYT, del 26 de octubre de 2016, (125 días después), dispuso que no procedía formalizar, ni continuar con la investigación preparatoria, contra Luis Javier Vallejos, por delito de Lesiones culposas, en agravio de Jorge Luis Deza Bardales, sin haber realizado las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos y haberse excedido en los plazos para emitir disposiciones y no proveyó los escritos presentados. Se le imputa también haber presentado un trato descortés con los familiares del agraviado Jorge Luis Deza Bardales.

### 2.- PRESUPUESTO FORMAL DE ADMISIBILIDAD.-

EL cumplimiento del plazo de las impugnaciones se evidencia de los siguientes documentos insertos en los actuados, habiéndose dado cumplimiento al artículo 42<sup>1</sup> del ROF.

FECHA DE RESOLUCIÓN IMPUGNADA	FECHA DE NOTIFICACIÓN	FECHA DE IMPUGNACIÓN
29/05/2017 a fs. 515/523	21/06/2017 a fs. 540 y 11/07/2017 a fs. 642	28/06/2017 a fs. 541/554 y 20/07/2017 a fs. 643/663

<sup>1</sup> Artículo 42 primer párrafo: "La resolución final emitida por las Oficinas Desconcentradas son apelables ante la Oficina Central, dentro de los cinco días hábiles de notificada más el término de la distancia".





## *Fiscalía Suprema de Control Interno*

**3.- La Resolución n° 78-2017-MP-ODCI-Cajamarca del 29 de mayo de 2017, obrante a folios 515/523, materia de apelación.**

- Señala la ODCI-Cajamarca, que la inconducta funcional del fiscal quejado se encuentra dentro de los alcances del literal d) del artículo 23 del Reglamento, concordante con artículo IV del Código Procesal Penal, numerales 1 y 2<sup>2</sup>, artículo 159<sup>3</sup> de la Constitución Política del Estado, y los artículos 60 y 61<sup>4</sup>, del Código Procesal Penal; y lo establecido en el inciso 2 del artículo 334<sup>5</sup> y 144<sup>6</sup> del mismo cuerpo legal. Atribuyéndosele que durante la investigación preliminar no realizó diligencias en la tramitación del Caso n° 140-2016, para el esclarecimiento de los hechos; así como, no incorporó a la investigación al conductor de la empresa Turismo Días, y no observó los plazos establecidos para la emisión de las disposiciones correspondientes. Emitió la disposición archivando el caso, después de más de ciento veinte días sin haber fundamentado la ampliación.

- Refiere la ODCI-Cajamarca, que de la revisión de la Carpeta fiscal n° 140-2016, cuestionada, se advierte que el fiscal quejado no le dio el impulso necesario a la que estaba obligado por ley, para realizar las diligencias tendientes al esclarecimiento de los hechos, tampoco emitió resolución indicando la ampliación de plazos, así



<sup>2</sup> Artículo IV, numerales 1. El Ministerio Público es titular del ejercicio público de la acción penal en los delitos y tiene el deber de la carga de la prueba. Asume la conducción de la investigación desde su inicio, decidida y proactivamente en defensa de la sociedad. 2. El Ministerio Público está obligado a actuar con objetividad, indagando los hechos constitutivos de delito, los que determinen y acrediten la responsabilidad o inocencia del imputado. Con esta finalidad conduce y controla jurídicamente los actos de investigación que realiza la Policía Nacional.

<sup>3</sup> Artículo 159. Corresponde al Ministerio Público: 5. Ejercitar la acción penal de oficio o a petición de parte.

<sup>4</sup> Artículo 60 del CPP, numeral 1. El Ministerio Público es el titular del ejercicio de la acción penal. Actúa de oficio, a instancia de la víctima, por acción popular o por noticia policial. 2. El Fiscal conduce desde su inicio la investigación del delito. Con tal propósito la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función. Artículo 61 del CPP, 1. El Fiscal actúa en el proceso penal con independencia de criterio. Adecua sus actos a un criterio objetivo, rigiéndose únicamente por la Constitución y la Ley, sin perjuicio de las directivas o instrucciones de carácter general que emita la Fiscalía de la Nación. 2. Conduce la Investigación Preparatoria. Practicará u ordenará practicar los actos de investigación que correspondan, indagando no sólo las circunstancias que permitan comprobar la imputación, sino también las que sirvan para eximir o atenuar la responsabilidad del imputado. Solicitará al Juez las medidas que considere necesarias, cuando corresponda hacerlo. 3. Interviene permanentemente en todo el desarrollo del proceso. Tiene legitimación para interponer los recursos y medios de impugnación que la Ley establece. 4. Está obligado a apartarse del conocimiento de una investigación o proceso cuando esté incurso en las causales de inhabilitación establecidas en el artículo 53°.

<sup>5</sup> Artículo 334, inciso 2. El plazo de las diligencias preliminares, conforme al artículo 3°, es de sesenta días, salvo que se produzca la detención de una persona. No obstante ello, el fiscal podrá fijar un plazo distinto según las características, complejidad y circunstancias de los hechos objeto de investigación. Quien se considere afectado por una excesiva duración de las diligencias preliminares, solicitará al fiscal le dé término y dicte la disposición que corresponda. Si el fiscal no acepta la solicitud del afectado o fija un plazo irrazonable, este último podrá acudir al juez de la investigación preparatoria en el plazo de cinco días instando su pronunciamiento. El juez resolverá previa audiencia, con la participación del fiscal y del solicitante.

<sup>6</sup> Artículo 144 inciso 2 del CPP, Los plazos que sólo tienen como fin regular la actividad de Fiscales y Jueces, serán observados rigurosamente por ellos. Su inobservancia sólo acarrea responsabilidad disciplinaria.



## *Fiscalía Suprema de Control Interno*

demoró más de 120 días para luego archivar los actuados, tampoco proveyó los escritos de las partes, lo que se encuentra probado en los actuados.

- En cuanto a la imputación de no haber guardado consideración y respeto a los usuarios habiendo realizado un trato descortés, señala la ODCI-San Martín, que conforme a los hechos narrados del escrito de queja, así como, de las documentales obrantes en los actuados, no se ha podido verificar la comisión de dicha inconducta funcional, por no existir en los actuados elementos objetivos que corroboren ese trato descortés que se le atribuye al quejado, quedando en la esfera de la subjetividad; y, no habiendo enervado el principio de la presunción de inocencia, se declara infundada la queja en ese extremo.

- Sobre la sanción a imponer señala la ODCI-Cajamarca, que conforme a lo establecido en el Acuerdo Plenario n° 2-2007, *"El procedimiento administrativo sancionador busca garantizar el funcionamiento correcto, de la administración pública, y el procedimiento sancionador nos e rige por el principio de lesividad, sino por criterios de afectación general de suerte que la sanción administrativa no requiere de la verificación de la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos y generalmente opera como respuesta ante conductas formales o de simple desobediencia a reglas de ordenación"*. De ese modo determinada la falta disciplinaria, corresponde graduar la sanción, dentro de un marco de objetividad que rigen las actuaciones de control interno, así según el reporte de quejas del investigado y teniendo en cuenta lo señalado por el principio de razonabilidad del inciso 3 del artículo 230 de la Ley 275444, impone la sanción de amonestación.

**4.- Del recurso de apelación presentado por la recurrente María Isabel Daza Bardales, del 28 de junio de 2017, obrante a folios 541/554.-**

- Señala la recurrente que según la calificación jurídica de los hechos el cargo imputado está previsto en el literal m) del artículo 23 del Reglamento; sin embargo, en el artículo segundo de la decisión final, se resuelve por el literal d), por lo que dicho extremo debe ser corregido.







## *Fiscalía Suprema de Control Interno*

- Agrega la recurrente que la infracción se encuentra fehacientemente probada con los hechos narrados por la recurrente en su queja funcional, del 5 de setiembre de 2016, y por la copia del audio y la transcripción del mismo; así como, el mismo fiscal aceptó haber tenido un trato descortés con los familiares del agraviado, señalando que era *"esclavo de sus palabras"*, por lo que solicita que se declare fundado dicho extremo. También el fiscal ha infringido los literales a) y k) del artículo 23 del Reglamento, solicitando que se le investigue por dichas infracciones y la sanción de amonestación impuesta no es proporcional a la magnitud del daño irreparable causado a la parte agraviada con el desprestigio a la institución a la que pertenece, pues el caso ha sido archivado definitivamente. Si bien apeló el archivo y el superior apartó del caso al quejado y dispuso que se realicen las investigaciones pertinentes, la falta de diligencia del cuestionado en el caso de la investigación al no haber realizado diligencias, merecía una sanción más gravosa.

### **5.- Del recurso de apelación presentado por el fiscal quejado Tito Gerardo Sirlopú Garcés, del 20 de julio de 2017, obrante a folios 643/663.-**

- Señala el recurrente que la resolución apelada no ha reconocido su derecho a la jurisdicción efectiva, artículo 139 inciso 3 de la Constitución, no se le reconoce el derecho al debido proceso, y no se motiva la resolución conforme a lo dispuesto por el artículo 139 inciso 5 de la Constitución. Que la independencia funcional está establecida en el artículo 5 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, habiendo acreditado que actuó con independencia funcional, no se ha meritado en su totalidad la carpeta fiscal, no se defiende al recurrente cuando es agraviado o amenazado, sino se le perjudica. Se ha contravenido la constitución y los derechos del recurrente, solicita la nulidad.

### **6.- Supuestos normativos.-**

- El Tribunal Constitucional ha señalado: *"(...) El derecho a la tutela judicial efectiva es un derecho de contenido complejo que persigue garantizar la eficacia de las*





## Fiscalía Suprema de Control Interno

situaciones jurídicas, posibilitando a las personas -entre otros- el libre e igualitario acceso a la jurisdicción para la tutela de sus derechos y, de esta forma, se debe eliminar toda barrera que limite, restrinja o impida, este acceso libre e igualitario a los órganos jurisdiccionales (...). (Fundamento 11<sup>7</sup>). De este modo, cuando los recurrentes han formulado sus respectivos recursos de apelación, se ha dado cumplimiento a la tutela judicial efectiva.

- El Tribunal Constitucional, ha señalado que: "(...) Sobre el derecho a la pluralidad de la instancia el Tribunal ha sostenido que éste tiene por objeto garantizar que todo justiciable tenga la oportunidad de que lo resuelto por un órgano jurisdiccional sea revisado por un órgano superior de la misma naturaleza, siempre que se haya hecho uso de los medios impugnativos pertinentes, formulados dentro del plazo legal (...)"<sup>8</sup>. Así, los recurrentes con la interposición de su apelación, también han accedido al ejercicio del derecho a la doble instancia.

- Conforme al artículo 42 del Reglamento de Organización y Funciones de la Fiscalía Suprema de Control Interno, la resolución final emitida por las Oficinas Desconcentradas son apelables ante la Oficina Central, dentro de los cinco días hábiles de notificada más el término de la distancia. De conformidad con la Resolución n° 15-2017-MP-ODCI-CPD-Cajamarca, del 24 de julio de 2017, obrante a folios 711/713, los recurrentes han cumplido en presentar sus recursos dentro del término legal.

- Asimismo, en aplicación supletoria del artículo 364 del Código Procesal Civil, al presente caso, se señala que: "(...) El recurso de apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional superior examine a solicitud de parte o de tercero legitimado la resolución que le produzca agravio con el propósito de que sea anulada o revocada total o parcialmente (...)" ; asimismo, el artículo 366 del mismo cuerpo legal sostiene que: "(...) La persona que interpone apelación debe fundamentarla, indicando el

<sup>7</sup> Sentencia n° 03072-2006-AA, caso Ludeña Luque, Derecho a la tutela judicial efectiva.

<sup>8</sup> Sentencia recaída en el Expediente n° 03261-2005-AA/TC.



## *Fiscalía Suprema de Control Interno*

*error de hecho o de derecho incurrido en la resolución precisando la naturaleza del agravio y sustentando la pretensión impugnativa (...)*".

Preceptos que serán tomados en cuenta en el desarrollo del caso, previo el estudio y análisis de los actuados.

### **7.- Análisis y fundamentos.-**

#### **1.- Sobre la apelación de la quejosa María Isabel Daza Bardales.-**

- Señala la recurrente **María Isabel Daza Bardales** que existe un error al considerar el literal d) y no el m) del artículo 23 del Reglamento para la conducta irregular del quejado; que la infracción se encuentra fehacientemente probada con su queja funcional, con la copia del audio y la transcripción del mismo; el fiscal ha infringido los literales a) y k) del artículo 23 del Reglamento, por ello debe investigarse en ese extremo; la sanción de amonestación no es proporcional a la magnitud del daño irreparable causado, mereciendo una sanción más gravosa.

- Señala la recurrente que existe un error al considerar el literal d) y no el literal m) del artículo 23 del Reglamento, para la conducta irregular del quejado; respecto a dicho punto, en efecto se advierte que en el artículo segundo de la decisión fiscal, se señala la conducta del quejado como prevista en el literal d) del artículo 23 del Reglamento; no obstante, se aprecia que se está ante un error material que puede ser subsanado, al no incidir en el fondo de la controversia, más aún, si en el mismo documento se señala en el punto de "*Calificación jurídica de los hechos*", que la otra infracción disciplinaria atribuida la quejado es la contenida en el literal m) del artículo 23 del Reglamento, referida a el trato descortés (ver fs. 516).

- Sobre el hecho que la infracción se encuentra fehacientemente probada con la copia del audio y la transcripción del mismo; no se aprecia tal circunstancia porque analizada la transcripción del audio con el cual la quejosa señala que se prueba la falta disciplinaria (obranse folios 45/50), no se aprecia trato descortés alguno por







## *Fiscalía Suprema de Control Interno*

parte del fiscal quejado. Con referencia a que debe el fiscal ser investigado por las infracciones disciplinarias contenidas en los literales a) y k) del artículo 23 del Reglamento, de los actuados no se advierten elementos indiciarios, para iniciar una investigación por esos extremos, toda vez que la delimitación de la conducta del quejado en el literal d) del artículo 23 del Reglamento, ha sido debidamente calificada en concordancia con artículo IV numerales 1 y 2, artículos 60, 61 334 y 144 del Código Procesal Penal, y artículo 159<sup>9</sup> de la Constitución Política del Estado; es decir, el incumplimiento por parte del quejado de disposiciones legales en las investigaciones preliminares del Caso n° 140-2016, en su función de investigación y esclarecimiento de los hechos.

- En relación a la sanción de amonestación, que considera la quejosa no es proporcional a la magnitud del daño irreparable causado; debe estarse a que la ODCI-Cajamarca, con la debida sustentación ha impuesto la sanción de amonestación, la que resulta acorde a la naturaleza de los hechos cometidos y a las características particulares del quejado, no encontrando mérito para revocar la sanción y aplicar una más gravosa.

### **2.- Sobre la apelación del fiscal quejado Tito Gerardo Sirlopú Garcés.-**

- El recurrente solamente señala que la resolución apelada vulnera el artículo 139 incisos 3 y 5 de la Constitución; no obstante, no realiza una descripción clara del modo cómo se ha vulnerado dichos derechos, limitándose a señalar que no se ha motivado en base a lo ocurrido, y que no se realizó ninguna actividad probatoria, y luego copia conceptos del debido proceso, sin referir cuáles serían los errores de hecho o de derecho, incurridos en la resolución apelada y en qué consideraciones se habría emitido una incorrecta valoración de los actuados.

- Señala también el quejado que ha actuado con independencia funcional que no se meritó en su totalidad la carpeta fiscal, y que se le estaría perjudicando; más son

<sup>9</sup> Artículo 159, Corresponde al Ministerio Público: 5. Ejercitar la acción penal de oficio o a petición de parte.





## *Fiscalía Suprema de Control Interno*

argumentos que no tienen ningún respaldo probatorio, porque la imputación del órgano de control al quejado es clara y precisa cuando le señala que ha incumplido sus funciones, consistentes en que durante la investigación preliminar no realizó diligencias en la tramitación del Caso n° 140-2016, no incorporó a la investigación al conductor de la empresa Turismo Días, no proveyó los escritos de las partes y no observó los plazos establecidos para la emisión de las disposiciones correspondientes, sin ampliar las investigaciones después de más de 120 días, archivo el caso. Por tanto, los argumentos que esgrime el recurrente no tiene la fuerza necesaria para desestimar la resolución impugnada, la misma.

### CONCLUSIÓN

- El fiscal quejado, no cumple con señalar cuáles serían los errores de hecho o de derecho incurridos por la ODCI-Cajamarca, al emitir su resolución, menos aún señala cuál es el agravio inferido; limitándose a señalar argumentos que no son idóneos para deslindar su responsabilidad administrativa, por la oficina de control interno, se encuentra conforme a derecho.

### DECISIÓN.

Por los fundamentos antes expuestos, esta Fiscalía Suprema de Control Interno resuelve declarar: **INFUNDADOS** los recursos de apelación presentados por **María Isabel Deza Bardales**, del 28 de junio de 2016, obrante a folios 541/554, y por **Tito Gerardo Sirlopú Garcés**, obrante a folios 643/663, en consecuencia se **CONFIRMA** en todos su extremos la Resolución n° 78-2017-MP-ODCI-Cajamarca del 29 de mayo de 2017, obrante a folios 515/523, que resolvió declarar:

**Primero: FUNDADA** en tres extremos la queja de parte formulada en contra del fiscal antes aludido; por la irregularidad funcional prevista en el literal d) del artículo 23 del Reglamento de Organización y funciones de la fiscalía Suprema de Control Interno, imponiendo la sanción de **Amonestación.-**



## *Fiscalía Suprema de Control Interno*

**Segundo:** declarar **INFUNDADA** en un extremo la queja e parte formulado en contra del fiscal quejado, por haber supuestamente incurrido en el literal m) del artículo 23 del Reglamento, archivando los actuados en ese extremo.-**regístrese.- comuníquese.-Archívese.-**

VRRM/jabc/ndse/CAPD.



Dr. Víctor Raúl Rodríguez Monteza  
Fiscal Supremo Titular  
Fiscalía Suprema de Control Interno

## **ANEXO Nro. 09**





MINISTERIO PÚBLICO  
Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa  
Cuarto Despacho de Investigación  
Chiclayo

**CARPETA FISCAL N° 4676-2018**

**DISPOSICIÓN DE INICIO DE DILIGENCIAS PRELIMINARES**

**DISPOSICIÓN N° UNO.-**

Chiclayo, diecinueve de julio del año dos mil dieciocho.-

**DADO CUENTA:** Con el Oficio N° 1602-2013-1er-JPLFCH/JLAO., remitido por la Juez del Primer Juzgado de Paz Letrado de Familia, adjuntando copias certificadas de las piezas procesales del EXP. N° 1602-2013, proceso seguido por MARIA FRAXILA CABRERA GUEVARA contra HUMBERTO FERNANDEZ CARRANZA sobre AUMENTO DE PENSION DE ALIMENTOS.

**CONSIDERANDO:**

1.- De las copias certificadas del Expediente N° 1602-2013, remitidas por el Primer Juzgado de Paz Letrado de Familia Chiclayo, se advierte que MARIA FRAXILA CABRERA GUEVARA, en representación de sus menores hijos LILIANA ROXANA FERNANDEZ CABRERA Y LUIS HUMBERTO FERNANDEZ CABRERA interpuso demanda de AUMENTO DE PENSION ALIMENTOS en contra de HUMBERTO FERNANDEZ CARRANZA; mediante Resolución N° 15, de fecha 26 de diciembre del 2014, en la cual se fijó el monto de S/. 300.00 (trescientos y 00/100 soles) como pensión de alimentos a favor de sus menores hijos correspondiéndole 150 nuevos soles a cada hijo, y mediante Resolución N° 16 del 23 de enero del 2015, se resolvió declarar CONSENTIDA LA RESOLUCION NUMERO QUINCE. Con fecha 26 de enero del 2016, se practicó la liquidación de pensiones alimenticias devengadas, por el periodo de ENERO del 2014 hasta Diciembre del 2015, resultando como monto adeudado la suma de S/. 3,366.79 (tres mil trescientos sesenta y seis con 79/100 soles), y con Resolución N° 24 de fecha 04 de julio del 2016, emitida por el referido Juzgado de Paz, se resolvió aprobar dicha liquidación, requiriéndose a HUMBERTO FERNANDEZ CARRANZA el pago de la misma, bajo apercibimiento de ser denunciado por el delito de Omisión a la Asistencia Familiar.



2.- El Ministerio Público ostenta las facultades para perseguir el delito, respecto de las cuales el Tribunal Constitucional ha precisado: *"El fiscal actúa como defensor de la legalidad y representante de la causa pública en el proceso penal. En efecto, el respeto de este principio implica que el Ministerio Público ejerce la acción penal por todo hecho que revista los caracteres de un delito, sin perder de vista que su labor se ejecuta en función de la justicia y tendiendo como parámetros la Constitución y la ley."*<sup>1</sup>.

3.- El artículo 330º, inciso 2) del Código Procesal Penal establece que las diligencias preliminares tienen por finalidad realizar los actos urgentes o inaplazables destinados a determinar si han tenido lugar los hechos y su delictuosidad, e individualizar a los involucrados, asegurando los elementos materiales de su comisión.

Por los fundamentos antes expuestos, de conformidad con lo prescrito por los artículos 329º y 330º del Código Procesal Penal y artículos 1º, 5º, 9º y 94º, numeral 2) de la Ley Orgánica del Ministerio Público.

**SE DISPONE:**

**DAR INICIO A LAS DILIGENCIAS PRELIMINARES** en un plazo de **NOVENTA DÍAS**, contra **HUMBERTO FERNANDEZ CARRANZA**, por el delito de **OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR** en agravio de sus menores hijos **LILIANA ROXANA FERNANDEZ CABRERA Y LUIS HUMBERTO FERNANDEZ CABRERA** debidamente representados por su madre **MARIA FRAXILA CABRERA GUEVARA**, investigación que se llevará a cabo en **SEDE FISCAL**, debiéndose realizar las siguientes diligencias:

1. **Se RECIBA DECLARACION** de la denunciante **MARIA FRAXILA CABRERA GUEVARA** a fin de que presente a este Despacho Fiscal copias certificadas de los cargos de notificación, con los que se haya puesto de conocimiento, al investigado **HUMBERTO FERNANDEZ CARRANZA**, la Resolución N° 26 de fecha 17 de Enero del 2018, la misma que se llevará a cabo en el despacho fiscal el **LUNES 13 DE AGOSTO DEL 2018 A LAS 10.00 HORAS**.

2. **OFICIAR** al Primer Juzgado de Paz Letrado de Familia – Chiclayo, a fin que remitan a este Despacho Fiscal las copias certificadas de los cargos de notificación, con los que se haya puesto de conocimiento, al **HUMBERTO FERNANDEZ CARRANZA**, la Resolución N° 26 de fecha 17 de Enero del 2018, en el Expediente N° 1602-2013, Secretario Flavio Ynope Quiñones, seguido por **MARIA FRAXILA CABRERA GUEVARA** contra **HUMBERTO FERNANDEZ CARRANZA** sobre Aumento de Alimentos.

3. Los demás actos de investigación, que en el transcurso de la misma, resulten pertinentes para el esclarecimiento de los hechos.

**Regístrese, Oficiese y Notifíquese.-**

<sup>1</sup> Exp. N° 2725-2008-PHC/TC del 22 de setiembre del 2008.

# **ANEXO Nro. 10**



Proyecto de Ley N°

.....  
 “PROYECTO DE LEY DE ADICIÓN  
 LEGISLATIVA AL ARTÍCULO 334°  
 NUMERAL 2) DEL CÓDIGO PROCESAL  
 PENAL, INCORPORANDO LA FORMA EN  
 QUE SE HA DE EFECTIVIZAR EL  
 CONTROL CONSTITUCIONAL SOBRE LA  
 ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN  
 PRELIMINAR DEL MINISTERIO  
 PÚBLICO”

La Bachiller en Derecho que suscribe: **GISSELLA MARGOTH ORTIZ DEZA**,  
 ejerciendo el derecho a iniciativa legislativa que le confiere el artículo 107° de la  
 Constitución Política del Perú, presenta el siguiente Proyecto de Ley:

**“PROYECTO DE LEY DE ADICIÓN LEGISLATIVA AL ARTÍCULO 334°  
 NUMERAL 2) DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL, INCORPORANDO LA  
 FORMA EN QUE SE HA DE EFECTIVIZAR EL CONTROL  
 CONSTITUCIONAL SOBRE LA ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN  
 PRELIMINAR DEL MINISTERIO PÚBLICO”**

**I. FÓRMULA LEGAL**

**Artículo 1°.- Objeto de Ley**

La presente Ley tiene por objeto incorporar en la regla del Código Procesal Penal sobre  
 la calificación en el artículo 334 numeral 2), la forma en que se ha de efectivizar el  
 control constitucional sobre la actividad de investigación preliminar del Ministerio  
 Público.

**Artículo 2°.- De la forma en que se ha de efectivizar el control constitucional sobre  
 la actividad de investigación preliminar del Ministerio Público.**

Declárese de interés nacional la forma en que se ha de efectivizar el control  
 constitucional sobre la actividad de investigación preliminar del Ministerio Público, a

fin de garantizar el debido proceso en esta etapa por parte de los fiscales y evitar el abuso de la autonomía que les ha sido reconocida constitucionalmente.

**Artículo 3°.- De la garantía del debido proceso en la investigación preliminar**

Si durante la investigación preliminar se comete arbitrariedades en lo que concierne al plazo, ante el pedido de parte, el Juez de la Investigación preparatoria, aplicando el control difuso, debe garantizar el debido proceso y la inmediatez de dicha etapa, a fin de brindar una protección adecuada a las víctimas; en ese sentido, el contenido del artículo 334° inciso 2) material del presente proyecto será: “(...) 2) El plazo de las diligencias preliminares, conforme al artículo 3, es de 60 días, salvo que se produzca la detención de una persona. No obstante ello el Fiscal podrá fijar un plazo distinto según las características, complejidad y circunstancias de los hechos objeto de investigación. Quien se considere afectado por una excesiva duración de las diligencias preliminares, solicitará al Fiscal le dé término y dicte la disposición que corresponda. Si el Fiscal no acepta la solicitud del afectado o fija un plazo irrazonable, éste último podrá acudir al Juez de la investigación preparatoria en el plazo de 5 días instando su pronunciamiento. El Juez, **aplicando control difuso para garantizar el debido proceso e inmediatez de la etapa**, resolverá previa audiencia, con la participación del Fiscal y del solicitante”.

**DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA**

**ÚNICA.-** Deróguense o déjense sin efecto las disposiciones que se opongan a la presente Ley.



## **II. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

### **2.1. ASPECTOS GENERALES**

Socialmente lo que se espera alcanzar con nuestra propuesta es una mejora del servicio que haga cambiar la imagen de la institución y el nivel de aceptación de la población.

Siendo así, en lo que respecta al aspecto doctrinario, la ubicación de la teoría que me permite hacer esta propuesta es la del respeto a la garantía del debido proceso, puesto que su observancia no solo es obligatoria a nivel jurisdiccional sino en todos los ámbitos, lo que significa que tal observancia no es ajena a la labor de investigación que desempeña el Ministerio Público durante la etapa preliminar.

Ya en el aspecto legislativo resulta importante, puesto que el resultado del análisis legislativo podrá permitirnos establecer la ruta de solución tanto de la concepción de la autonomía del Ministerio Público cuanto de la realidad de la aplicación del derecho al debido proceso en nuestro actual sistema procesal penal, específicamente durante la investigación preliminar.

### **2.2. MARCO JURÍDICO**

#### **CÓDIGO PROCESAL PENAL**

#### **Art. 334° Calificación. (ACTUAL)**

(...)

1. El plazo de las diligencias preliminares, conforme al artículo 3, es de 60 días, salvo que se produzca la detención de una persona. No obstante ello el Fiscal podrá fijar un plazo distinto según las características, complejidad y circunstancias de los hechos objeto de investigación. Quien se considere afectado por una excesiva duración de las diligencias preliminares, solicitará al Fiscal le de término y dicte la disposición que corresponda. Si el Fiscal no acepta



la solicitud del afectado fija un plazo irrazonable, éste último podrá acudir al Juez de la investigación preparatoria en el plazo de 5 días instando su pronunciamiento. El Juéz, resolverá previa audiencia, con la participación del Fiscal y del solicitante.

### **Art. 334° Calificación. (MODIFICADO)**

(...)

2. El plazo de las diligencias preliminares, conforme al artículo 3, es de 60 días, salvo que se produzca la detención de una persona. No obstante ello el Fiscal podrá fijar un plazo distinto según las características, complejidad y circunstancias de los hechos objeto de investigación. Quien se considere afectado por una excesiva duración de las diligencias preliminares, solicitará al Fiscal le dé término y dicte la disposición que corresponda. Si el Fiscal no acepta la solicitud del afectado o fija un plazo irrazonable, éste último podrá acudir al Juez de la investigación preparatoria en el plazo de 5 días instando su pronunciamiento. El Juez, **aplicando control difuso para garantizar el debido proceso e inmediatez de la etapa**, resolverá previa audiencia, con la participación del Fiscal y del solicitante.

### **2.3. PROBLEMÁTICA EXISTENTE**

El presente proyecto de ley se encuentra debidamente justificado en tres aspectos primordiales que a nuestro parecer hemos ubicado dentro de la realidad, siendo los siguientes:

La justificación a nivel social la ubicamos en la verificación del nivel de aceptación que tiene la labor de los operadores de justicia en nuestro país, la actividad del Poder Judicial y el Ministerio Público carece del nivel de efectividad que se supone han de tener para garantizar el cumplimiento del derecho en pos de la justicia.

Ello se ve reflejado en las encuestas realizadas a la población por parte del CPI en el año 2015 en las que se obtienen como resultado un margen de desaprobación de 86.2% de la población nacional (CPI, 2015), lo que deja muy mal parada a la institución; esto justifica una observación interna en el sistema que maneja el Poder Judicial y el Ministerio Público, siendo este último el que nos ocuparemos de analizar.

Si el problema lo que busca es plasmar una realidad en función a la eficacia del Ministerio Público, debemos revisar si el problema radica en aspectos que contemplan solamente la actividad procesal o tal vez se trata de un problema que se desencadena desde la concepción doctrinaria que define determinadas instituciones jurídicas que importan en el desarrollo de las actividades encaminadas a impartir justicia.

Con ello nace la justificación doctrinaria, puesto que las instituciones o categorías jurídicas que definen por ejemplo la autonomía del Ministerio Público o los alcances que definen el debido proceso penal durante la investigación preliminar, ha permitido determinar si su aplicación permite un efectivo alcance de la justicia en nuestro sistema penal.

El estudio de la situación legislativa que circunda a la aplicación de la justicia por parte del Ministerio Público en lo que se refiere a los límites que la ley impone a la categoría de autonomía que se le otorga; revisaremos también los parámetros que la ley establece para el estricto cumplimiento del derecho al debido proceso durante la investigación preliminar; es de esto que resulta la justificación legislativa de nuestra propuesta.

Teniendo en cuenta el debido proceso como una garantía constitucional y que a la vez engloba a otras garantías, las mismas que son de cumplimiento obligatorio durante el desarrollo de un proceso; su observancia también se da en el ámbito del Ministerio Público, según lo establecido por el Tribunal Constitucional, puesto que si bien es cierto los fiscales como representantes de esta institución detentan oficialmente la persecución penal pública y en el ejercicio de sus funciones gozan de autonomía, puesto que asumen



la conducción de la investigación desde su inicio, no por ello dejan de estar sometidos a control de sus propios actos.

Es necesario considerar que, el Tribunal Constitucional tiene la potestad jurisdiccional de establecer mediante su jurisprudencia criterios de razonabilidad y proporcionalidad que garanticen el respeto de los derechos fundamentales, como es el caso de la interpretación del principio del debido proceso, que para el caso estudiado se enfoca sobre el que asiste a las víctimas en el marco de la facultad de investigación y persecución del delito a cargo de los representantes del Ministerio Público; puesto que el Ministerio Público no puede actuar en el ejercicio de sus funciones, irrazonablemente, con desconocimiento de los principios y valores constitucionales, tampoco al margen del respecto de los derechos fundamentales, puesto que está sometido a la Constitución Política del Estado.

Observando la realidad, el Ministerio Público hace uso inadecuado de su autonomía, dado a que no cumplen cabalmente su rol de investigadores y persecutores del delito, lo cual termina afectando el irrestricto respeto de derechos tan importantes dentro de un procedimiento como lo es el debido proceso, el cual abarca la motivación de resoluciones, el derecho al plazo razonable, entre otros, toda vez que los actos que se supone son de urgente realización, simplemente no se realizan, siendo que las dilaciones innecesarias, lo único que originan es la pérdida del material probatorio y termina beneficiando no a las víctimas sino a los criminales, pudiendo llegar a generar impunidad.

Tal situación se advierte de la excesiva actividad de archivamiento por parte del Ministerio Público, lo que constituye abuso de su autonomía procesal teniendo como consecuencia directa la vulneración al debido proceso como garantía constitucional, por lo mismo que se activa la facultad del Tribunal Constitucional de revisar este tipo de decisiones procurando la garantía de los principios que ampara el debido proceso penal.



Es en base a ello que surge la necesidad de que el Estado promueva legislativamente los mecanismos que procuren que los fiscales como representantes del Ministerio Público, tengan en cuenta que el debido proceso ha sido desarrollado como una garantía constitucional y que a la vez engloba a otras garantías y al ser los únicos autorizados oficialmente de realizar la investigación y persecución penal pública, actúen diligentemente, a fin de no perjudicar las investigaciones y en el peor de los casos, negar el acceso a la tutela jurisdiccional efectiva a las víctimas, más aún que las diligencias preliminares son actos inmediatos, urgentes e inaplazables y constituyen la base fundamental de todo procedimiento penal y las investigaciones ineficientes lo único que generan es impunidad.

Por todo ello, se hace necesario proyectar esta propuesta de hacer una incorporación en la regla del Código Procesal Penal sobre calificación en el artículo 334° numeral 2), que deba indicar la forma en que se ha de efectivizar el control Constitucional sobre la actividad de investigación preliminar del Ministerio Público.

#### **2.4. PROPUESTA DEL PROYECTO DE LEY**

La propuesta de incorporación del artículo 334° numeral 2) del Código Procesal Penal busca garantizar el debido proceso y la inmediatez de la etapa preliminar a cargo de los fiscales.

### **III. EFECTOS DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL**

El efecto de la norma propuesta que se quiere conseguir es el control constitucional efectivo de los actos de Ministerio Público, ello a fin de garantizar también la garantía del debido proceso a nivel de la investigación preliminar.

#### **IV. CONCORDANCIA CON EL ACUERDO NACIONAL 2016-2021**

Existe concordancia con el citado acuerdo nacional, toda vez que coincide con las políticas criminales que se construyen en base a los objetivos trazados para garantizar la

seguridad ciudadana y justicia nacional, que se deberán ejecutar con respecto a la constitucionalización del proceso penal.

## **V. ANÁLISIS COSTO – BENEFICIO**

El proyecto de ley no ocasiona gastos al Estado, debido a que no generará un presupuesto adicional a ninguna entidad.